



ANDRE HORI:

EXCMA. SRA.:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2018ko ekainaren 26an egindako bilkuran, ***Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketa LEGE PROIEKTUA*** onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 26 de junio de 2018, ha procedido a la aprobación del ***PROYECTO DE LEY de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.***

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutako.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 29a.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2018.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

Consulta de Documento

Archivo del documento[Remisión parlamentaria pl.policia.pdf](#)**Descripción**

PROYECTO DE LEY de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco

Creador

Cristés Larramendi, Carmen

Cargo firmante

Erkoreka Gervasio Josu Iñaki

Fecha modificación

02/07/2018

**Firmado digitalmente por**

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO

Cerrar

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETA LEGE PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL
PAÍS VASCO**

HONEKIN BATERA AURKEZTEN DIREN AGIRIAK

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

I. BIDALKETA-IDAZKIA	OFICIO DE REMISIÓN
II. LEGE PROIEKTUAREN TESTUA	TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
III. TXOSTENA, 2016KO APIRILAREN 26AN ONARTUTAKO LEGE-PROIEKTUAREN TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO HARTZEAK DUEN BIDERAGARRITASUN JURIDIKOARI BURUZKOA	INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO EL 26 DE ABRIL DE 2016
IV. AZALPEN MEMORIAK	MEMORIAS EXPLICATIVAS
V. MEMORIA EKONOMIKOA	MEMORIA ECONÓMICA
VI. AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA	INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA
VII. FUNTZIO PUBLIKOAREN TXOSTENA	INFORME DE FUNCIÓN PÚBLICA
VIII. HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN.
IX. GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA	INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
X. EMAKUNDEAREN TXOSTENA	INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
XI. HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA	INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
XII. EUSKAL AUTONOMÍA ERKIDEGOKO UDALTZAINGOAK KOORDINATZEKO BATZORDEKO ZIURTAGIRIA	CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES.
XIII. ERTZAINZAREN KONTSEILUAREN ZIURTAGIRIA	CERTIFICADO DE ACUERDO DEL CONSEJO DE LA ERTZAINZA
XIV. ERTZAINZAREN NEGOZIAZIO MAHAIAREN ZIURTAGIRIA	CERTIFICADO MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA ERTZAINZA
XV. EKONOMIA- ETA ARAU-KONTROLAREN TXOSTENA	INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO
XVI. EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO IRIZPENA	DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
XVII. PROZEDURA HASTEKO AGINDUA	ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
XVIII. PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA	ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO

I

OFICIO DE REMISIÓN / BIDALKETA-OFIZIOA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN
BOSGARREN ALDAKETA LEGE
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



ANDRE HORI:

EXCMA. SRA.:

Honako hau jakinarazten dizut: Eusko Jaurlaritzak, 2018ko ekainaren 26an egindako bilkuran, ***Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketa LEGE PROIEKTUA*** onartu du.

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Gobierno Vasco, en Sesión celebrada el día 26 de junio de 2018, ha procedido a la aprobación del ***PROYECTO DE LEY de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.***

Hori ziurtatu egiten dut eta, Jaurlaritzak erabakitakoa betez, horren berri ematen dizut, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean exijitutako.

Lo que certifico y, en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno, traslado a V.E., de conformidad con lo exigido por la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko ekainaren 29a.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2018.

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

SECRETARIO DEL GOBIERNO
JAURLARITZAKO IDAZKARIA

**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA**

II

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY / LEGE PROIEKTUAREN TESTUA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN
BOSGARREN ALDAKETA LEGE
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



PROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACION DE LA LEY DE POLICIA DEL PAIS VASCO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, ha sido modificada en diversas ocasiones, y en especial con la Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi que desgajó de tal regulación los aspectos comunes al conjunto de la seguridad pública, tales como la regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, la coordinación de policías locales o los mecanismos de cooperación policial.

El modelo policial que propugnaba la Ley de Policía del País Vasco es una realidad asentada y reconocida socialmente, que esta reforma propone consolidar en su imbricación social de un modo abierto a su mejora permanente, que atienda a la proporcionalidad y adecuación de sus medios y actividad. Dicho modelo y la consideración estatutaria de la Ertzaintza como policía integral en nuestro ámbito territorial se han reafirmado con los recientes Acuerdos de la Junta de Seguridad de 14 de junio de 2017.

En esta quinta modificación de la ley se aborda un conjunto de reformas parciales que en conjunto tienden a reforzar los aspectos del modelo policial relacionados con la prestación de servicio a una ciudadanía a la que se debe rendir cuentas.

En tal sentido la reforma pretende afianzar la imbricación de los servicios policiales con una sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por hombres y mujeres iguales en derechos.

En una sociedad abierta y plural la Policía del País Vasco tiene como misión el compromiso activo en la defensa y protección de la defensa de los derechos y libertades, por ello la presente ley asume como parte del ordenamiento aplicable a la Policía del País Vasco la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía”

En una sociedad bilingüe como la nuestra el modelo policial ha de encaminarse a la prestación del servicio en los dos idiomas oficiales, facilitando que el euskera pueda ser tanto como lengua de servicio como lengua de trabajo y la policía vasca sea capaz de acercarse a los ciudadanos y ciudadanas en el idioma oficial de su elección. E igualmente deben adoptarse las medidas precisas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres de la igualdad de oportunidades, integrando en todo caso la perspectiva de género y los principios expresados en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Por último, la Policía del País Vasco, y especialmente la Ertzaintza como policía integral, debe afrontar el desafío de la globalización de los problemas de convivencia y la criminalidad y estar abierta a la posibilidad de participar en aquellos foros estatales o internacionales precisos para poder desarrollar con eficacia las labores y competencias que el ordenamiento le atribuye.



Atendiendo a las antedichas metas la presente reforma pretende asentar procedimientos ágiles para la cobertura óptima de las necesidades del servicio policial con la garantía de los derechos del funcionariado, e igualmente contemplar mecanismos adecuados para velar por la eficiencia y eficacia del servicio policial, que se exponen a continuación.

II

En lo que atañe al reforzamiento del modelo policial las medidas que aprueba esta ley son las siguientes:

a) Se recepciona en nuestro ordenamiento el contenido del Código Europeo de Ética de la Policía, que no sólo fija pautas de comportamiento al personal policial, sino igualmente a las autoridades policiales tanto en la interrelación con la ciudadanía, como en la propia organización interna de los servicios, estableciendo pautas que se enmarcan en el apartado relativo a la dación de cuentas.

b) Se refuerzan los mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial. Para ello se refuerza el sistema de estímulos positivos del buen hacer policial, incluyendo tanto los estímulos retributivos que suponen ciertos complementos de productividad, complementos de carrera profesional vinculados a la evaluación del desempeño, gratificaciones extraordinarias o el sistema de condecoraciones y distinciones; e igualmente se modifica el régimen disciplinario para establecer mecanismos internos eficaces, proporcionales, adecuados y justos, que vayan más allá de la investigación de casos particulares de indisciplina para analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral.

c) Se contempla la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo.

d) Se crea una **Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco**, como organismo híbrido de carácter permanente, con autonomía funcional respecto de la institución policial y compuesta por personas especializadas, incluyendo a expertos policiales. La finalidad de esta comisión es estudiar, a solicitud de los órganos competentes, *cualquier práctica en el seno de la Ertzaintza o policía local sobre la existan quejas e incidencia en la confianza ciudadana. Además estudia de oficio los incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona y propone medidas para la mejora del servicio.*

Si los hechos analizados son objeto de una investigación penal en curso, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente con el fin de no interferir en la investigación penal, ni en la reserva de sus actuaciones. En tal caso el personal investigado en las diligencias penales no tendrá la obligación de colaborar con la Comisión y si ésta precisara del acceso a documentación administrativa relacionada con el caso o la realización de inspecciones in situ la Comisión deberá obtener la

aprobación previa de la autoridad judicial actuante. En ningún caso es función de esta comisión individualizar la responsabilidad de autoridades o personal.

La regulación de esta comisión preserva la neutralidad e independencia de sus miembros, regulándose de forma tasada las causas que permiten su destitución, para evitar que sean apartados en el curso de una investigación de forma arbitraria. Se contempla el deber de colaboración con la comisión y la posibilidad de que en el curso de sus investigaciones puedan ser apoyados por funcionarios o funcionarias públicos en comisión de servicios o bien encomendar la investigación en los servicios de asuntos internos de la Ertzaintza bajo la supervisión directa de la propia Comisión. Además se contempla que la comisión deba rendir cuentas por su actividad directamente ante el Parlamento Vasco.

III

En lo que atañe a la selección e ingreso las novedades son las siguientes:

a) En materia de selección e ingreso se regulan los requisitos para ser admitido en las pruebas de ingreso en una norma con rango de ley formal que hasta la fecha aparecían regulados en un reglamento. Por otra parte, se acomoda la regulación de los órganos de selección a las características de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, así como al equilibrio entre hombres y mujeres previstos con carácter general para el funcionariado. Igualmente se prevé la vinculación de las bases de las convocatorias, y los supuestos en los que puede modificarse el número de vacantes convocadas o rectificaciones de errores sin abrir otro plazo de presentación de solicitudes.

b) La Academia Vasca de Policía y Emergencias se configura como órgano permanente de selección y se permite que, cuando se lo soliciten de forma voluntaria las entidades locales, pueda llevar a cabo los procedimientos de selección para el ingreso en los cuerpos de policía local, incluso de forma conjunta.

b) Se establecen medidas de acción positiva para favorecer la entrada de mujeres en los cuerpos policiales y corregir así su escasa presencia actual. Así, se regulan los planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y carrera profesional; corregir su infrarrepresentación e incrementar la eficacia policial.

Destacan, por novedosas, las medidas de acción positiva a favor de las mujeres en procedimientos selectivos por turno libre que implicarían la preferencia de la candidata mujer frente al hombre en determinadas circunstancias, de un modo compatible con los parámetros exigibles en la jurisprudencia comunitaria europea de previsión legal, proporcionalidad y razonabilidad.

En este caso la medida se prevé en una norma con rango de ley formal. Es razonable ya que limita su alcance al ingreso por turno libre y trata de no sólo de paliar una discriminación fáctica histórica, sino por las propias exigencias de una masa crítica de mujeres para la eficaz prestación del servicio policial. Resulta proporcionada porque la prioridad se aplica de un modo subsidiario y restringido, garantizando siempre una

cierta equivalencia de capacitación entre la candidata elegida al aplicar la prioridad y el candidato postergado. Y además se trata de una medida excepcional por su temporalidad, ya que dejará de aplicarse cuando la presencia femenina alcance el 33% en el cuerpo, escala y categoría correspondiente. Este tipo de medida no tiene como objetivo la paridad de sexos, sino alcanzar al menos una masa crítica de presencia femenina (un 33%).

IV

En materia de promoción interna, carrera profesional y provisión de puestos se contemplan importantes novedades.

a) Se favorece la carrera administrativa mediante promoción interna. Para ello se facilita que el personal ascienda en la organización minorando el número de años de servicio para ascender de categoría. Por otro lado se suprime el límite de tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna, limitación que cercenaba el derecho a la carrera administrativa incluso si el funcionario o funcionaria hubiera aprobado las pruebas si no hubiese obtenido plaza. Y por último se permite la promoción interna de quienes estén en situaciones administrativas asimilables al servicio activo a efectos del derecho de promoción profesional.

b) Se prevén otras medidas que guardan relación con la promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres con la posibilidad de presentarse en los procedimientos de promoción interna de quienes estén en excedencia por cuidado de hijos o familiares, excedencia por violencia de género y servicios especiales. Igualmente se contempla que, a efectos de calcular el tiempo de servicios efectivos preciso para la promoción interna, se tengan en cuenta los periodos transcurridos en las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna.”

c) En lo que se refiere a la provisión de puestos por concurso se diferencian aquellos aspectos meritorios por ley de otros que puedan ser considerados mérito en función de las características propias del puesto a proveer. Además se pormenorizan los contenidos que deben tener los procedimientos de concurso.

d) Desaparece la categoría de superintendente, de modo que se agiliza el acceso y cobertura de los puestos de mando de mayor responsabilidad en la Ertzaintza por medio de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos.

e) Se regula la carrera profesional horizontal como la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. El sistema de carrera profesional horizontal implica la instauración de un mecanismo de reconocimiento que permite acceder a los diversos grados de desarrollo profesional previstos en cada categoría a lo largo de los años que se establezcan y mediante la acreditación de competencias profesionales. El grado de desarrollo profesional determina la percepción del complemento de carrera profesional y, en su caso, habilita para el desempeño de determinados puestos. Como consecuencia de lo antedicho se modifica la estructura retributiva para incorporar entre las retribuciones complementarias el complemento de carrera profesional.

f) Se regula el régimen de las especialidades para tareas con conocimientos específicos. El acceso a las mismas se realiza mediante la realización de un curso de especialización, pudiendo exigirse titulaciones o conocimientos concretos. La especialidad supone un compromiso de permanencia y superación de pruebas de actualización para seguir en la especialidad, en su caso. En la regulación se contempla la posibilidad de convocatorias conjuntas entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y el Departamento competente en Seguridad en las que se vincule el acceso al curso de especialización y su aprobación al otorgamiento inmediato de comisiones de servicio voluntarias en vacantes existentes con especialidad.

V

En lo que atañe a las situaciones administrativas la principal novedad se refiere a las modulaciones del desempeño derivadas de la edad o la insuficiencia sobrevenida de las capacidades precisas para el desempeño ordinario del conjunto de tareas propias de la función policial en consonancia con el derecho a la protección de la salud del funcionariado.

Se regula el servicio activo modulado por la edad, consistente en la continuación del servicio activo realizando tareas apropiadas a su condición. Cada Administración, previa negociación colectiva, podrá fijar la edad en la que pueda solicitarse voluntariamente por la persona funcionaria su reconocimiento, así como las modulaciones del desempeño que pueda suponer su reconocimiento.

De este modo se da cobertura legal a la regulación preexistente conforme al Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza y se abre la posibilidad a que se extienda al caso de las policías locales siempre que se garantice la continuidad de la prestación del servicio policial, fijándose la edad por el ayuntamiento.

La nueva regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales se caracteriza por el desempeño de puestos o funciones adaptados a las capacidades reales del funcionario, a diferencia de la normativa precedente que partía del presupuesto de que en situación de segunda actividad una persona cobraba las retribuciones básicas a disposición de cuando le llamasen para ocupar un puesto o ejercer tareas policiales. En esta regulación el funcionario o funcionaria que pase a esta situación administrativa permanece trabajando ya sea en su puesto anterior si es susceptible de segunda actividad, ya en otro puesto susceptible de tal desempeño, y si la reubicación no fuera inmediata se adapta provisionalmente su puesto a sus necesidades.

En referencia a la situación de suspensión provisional de funciones se incorporan dos precisiones referentes a las consecuencias sobre la suspensión provisional de que exista posteriormente una sanción de suspensión firme o por el contrario se levante la suspensión provisional sin sanción.

VI



En el régimen de derechos individuales del funcionariado se contempla un nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco, atendiendo especialmente a la obligación de las administraciones de velar por las condiciones psicofísicas del personal y la vigilancia de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales.

Se obliga a contar con mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo.

En este sentido se da una regulación más amplia a los derechos complementarios en los casos de muerte o incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los cuerpos de la Policía del País Vasco al no vincularlo a la evaluación del comportamiento meritorio del agente policial.

Y se contempla por primera vez en la ley el régimen de concesión de condecoraciones y recompensas honoríficas, previendo la posibilidad del ascenso honorífico sin efectos económicos a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten a funcionarios o funcionarias fallecidos en acto de servicio o jubilados.

En cuanto a la representación y participación del personal de la Ertzaintza se clarifica la intervención del Consejo de la Ertzaintza en procedimientos disciplinarios y expedientes de rehabilitación, así como en la aplicación del régimen de condecoraciones.

VII

Las modificaciones previstas para el régimen disciplinario tratan de aproximar el régimen al general de los empleados públicos, moderar el régimen sancionador e incrementar las garantías de las personas expedientadas.

Se introducen nuevas faltas muy graves en materia de acoso sexual y sexista y acoso laboral reiterado, e infracciones al régimen de utilización de videocámaras policiales, así como se da nueva redacción a la falta relativa a la prevalencia de la condición policial y el notorio incumplimiento de las funciones de forma más acorde con la normativa general de los empleados públicos.

Se modera el elenco de sanciones a imponer, de modo que la sanción máxima de suspensión de funciones por falta leve pasa de 5 a 4 días; por falta grave de 2 años a 1 año y la suspensión de funciones por falta muy grave se sanciona en su grado mínimo con 1 año y un día.

Entre los criterios de graduación de la sanción se contempla el historial profesional como circunstancia atenuante, se delimita el concepto de reincidencia como agravante y en caso de faltas por delito se valora específicamente la cuantía o entidad de la pena

impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales.

Se refuerzan las garantías de las personas expedientadas en cuanto a sus derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, así como a conocer el estado de tramitación del procedimiento. En cuanto al derecho de defensa se garantiza la posibilidad de contar con el asesoramiento y la asistencia de un abogado o abogada en ejercicio, de un o una representante sindical o de un funcionario o funcionaria del cuerpo policial de su confianza, facilitando las autoridades al funcionario designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado o expedientada.

Se regula el régimen y plazo de caducidad del procedimiento y se reduce el plazo de prescripción de las faltas y sanciones muy graves de 6 a 3 años, aumentándose por el contrario el plazo de prescripción de las leves de 1 a 3 meses.

Se contempla la ejecutividad de las sanciones y los casos en que procede su suspensión y remisión condicional si existen motivos para ello. La ejecución o cumplimiento de las sanciones se realiza del modo que menos perjudique al sancionado, de modo que se prevé, por ejemplo, la posibilidad de la remisión condicional del cumplimiento de la sanción si opta como medida alternativa de cumplimiento de la sanción por el trabajo fuera de la jornada laboral estipulada sin remuneración o compensación alguna por un periodo igual al de la sanción impuesta.

VIII

En lo que atañe al título dedicado específicamente al funcionariado de la Ertzaintza y a su estructura profesional se producen los siguientes cambios:

a) Desaparece la categoría de superintendente, de modo que las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría pasan a singularizarse en concretos puestos de trabajo, lo cual facilita el acceso a los mismos, siempre que se cumplan las condiciones del puesto por los sistemas ordinarios de provisión.

b) Se da nueva redacción a la regulación referente a la estructura organizativa de la función de policía judicial en la Ertzaintza, dado que las remisiones a ciertas normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contenía la redacción vigente habían quedado obsoletas.

IX

En lo que se refiere a los cuerpos de policía local la reforma trata tanto de conjugar la consolidación de estructuras profesionales homologables como permitir que cada municipio encuentre soluciones organizativas apropiadas a sus necesidades y peculiaridades.



Así, se prevén medidas diversas que dan respuesta jurídica a prácticas existentes, como la posibilidad de que la policía local actúe fuera del término municipal para ejercer funciones de protección de autoridades locales, etc.

Es una evidencia que los municipios utilizan el nombramiento de funcionarios o funcionarias interinas para subvenir necesidades urgentes no cubiertas por la plantilla en servicio. Tal práctica ha venido avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo históricamente, pero plantea el problema de que los deberes y quehaceres del funcionario interino son correlativos a los del funcionario de carrera al que suple, sin que hasta ahora existieran mecanismos que facilitasen la formación requerible. Por ello se prevé que la Academia Vasca de Policía y Emergencias pueda formar bolsas de trabajo con personas que hayan superado cursos básicos organizados por ella, que servirán para abastecer la demanda de las corporaciones locales y permitir la formación de los funcionarios o funcionarias interinos.

Por otra parte, se contempla la estructura profesional de los cuerpos de policía local de un modo similar a la Ertzaintza, y en particular, las categorías correspondientes a la jefatura de tales cuerpos policiales atendiendo a la población o el número de personas integrantes del cuerpo. Atendiendo a ello, el proyecto de ley regula la integración del personal de la policía local en las nuevas escalas, y la adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de policía local.

Por último, se regula la figura del alguacil para los municipios que no cuenten con cuerpo de policía local y la del agente de movilidad para regular la circulación en el casco urbano.

Artículo Único.- Modificación de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El capítulo II del título I queda redactado como sigue:

“Capítulo II.- Mecanismos de control de la actividad policial.

Artículo 6.-

1. La Policía del País Vasco responde frente a la ciudadanía de la corrección y eficacia de sus actuaciones mediante los mecanismos previstos en la presente ley, además de los mecanismos de control jurisdiccional y de control parlamentario existentes para el conjunto de la actividad administrativa.

2. Las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de la Policía del País Vasco implementarán procedimientos efectivos e imparciales de tratamiento de quejas e investigación de los casos relevantes de supuestas malas prácticas, que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comunicación y la comprensión entre la ciudadanía y la policía.



3. En los centros policiales debe exhibirse información sobre los procedimientos de queja, especialmente en las zonas de detención, y se proporcionará información al respecto a todas las personas que han permanecido detenidas una vez puestas en libertad.

Artículo 7.-

1. La ciudadanía podrá presentar quejas sobre el funcionamiento de los servicios policiales en la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública – Ekinbide, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los mecanismos de queja que existan en las administraciones locales para sus servicios.

2. Las quejas recibidas en Ekinbide relativas a servicios de las policías locales del País Vasco serán remitidas a las autoridades locales para su tramitación. No obstante, los municipios podrán encomendar a Ekinbide el tratamiento de las quejas sobre el desempeño policial referido a sus cuerpos policiales,

Artículo 8.-

1. Podrán arbitrarse métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación, cuando los mismos puedan proporcionar una satisfacción de forma más eficaz y siempre que las partes estén de acuerdo con ellos.

2. Tales métodos alternativos informales no procederán en casos de quejas relativas a conductas que puedan ser merecedoras de reproche penal o disciplinario.

Artículo 9.-

1. Ekinbide realizará un seguimiento del conjunto de quejas presentadas para analizar la existencia de elementos recurrentes e investigar sus causas.

2. Se dará publicidad a los informes resolutivos de las quejas por Ekinbide respetando la confidencialidad de los datos personales o de otros que pudieran estar sujetos legalmente a confidencialidad o reserva.

3. Los resultados del sistema de tratamiento de quejas se incorporarán a la memoria anual que Ekinbide presente al Parlamento Vasco de conformidad con lo dispuesto en la Ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi.

Artículo 10.-



1. Se crea la **Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco** como órgano colegiado con autonomía funcional respecto de la institución policial y del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad, con el fin de reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial.

2. Son funciones de la **Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco**:

a) Estudiar, a solicitud del titular del Departamento competente en seguridad o de la autoridad municipal correspondiente, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o policía local respectivamente, sobre la que se hayan recibido quejas en las que exista seria preocupación sobre el impacto en la confianza de la ciudadanía.

b) Estudiar de oficio **con carácter preceptivo** aquellos incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona. La Ertzaintza o el cuerpo de policía local tendrán la obligación de comunicar tal circunstancia de inmediato a la Comisión.

c) A la vista de los estudios realizados en el ejercicio de las funciones precedentes, recomendar buenas prácticas; identificar patrones de conducta o prácticas recurrentes que no resulten acordes con el código deontológico policial, así como proponer medidas correctoras o preventivas.

3. Cuando la actuación policial a examen derive de la ejecución de órdenes o mandatos judiciales la Comisión se abstendrá de entrar en el análisis de éstos, sin perjuicio de examinar su ejecución en la medida en que exista un margen de decisión policial al respecto.

Artículo 11.-

1. La **Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco** estará compuesta por su presidente y otras cinco personas de reconocido prestigio, solvencia y experiencia en áreas tales como la seguridad pública, el derecho, la sociología, la psicología y la ética, nombradas por Decreto del Consejo de Gobierno.

La mitad de las personas integrantes de la Comisión se nombrará entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a escalas y categorías de la Policía del País Vasco integradas en el grupo de clasificación A con una antigüedad mínima de quince años en el cuerpo.

2. El nombramiento se efectuará por cinco años contados desde su publicación, pudiendo volver a ser nombrados por otro periodo de la misma duración.



3. Sólo cesarán en el cargo en caso de fallecimiento; expiración del mandato; renuncia formalizada por escrito; incumplimiento grave de los deberes de abstención y sigilo apreciada por la mayoría de la comisión; incapacitación declarada en sentencia firme o condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.

4. las personas integrantes de la Comisión no percibirán retribución alguna por sus trabajos, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio procedentes.

Artículo 12.-

1. La intervención de la Comisión se realizará a solicitud del titular del Departamento competente en seguridad o de la autoridad municipal correspondiente, sólo procediendo de oficio en los casos previstos expresamente en esta Ley.

2. Las actuaciones de la Comisión se realizarán por sus propios miembros, pudiendo recabar, en su caso, para concretas investigaciones el apoyo de funcionarios o funcionarias en comisión de servicios. Dichas personas en tales casos no deberán recibir órdenes de los mandos del destino de origen.

Igualmente la Comisión podrá encomendar la investigación a los servicios de asuntos internos de la Ertzaintza bajo la supervisión directa de la propia Comisión.

3. El Departamento competente en seguridad o, en su caso, la administración local competente, deberá facilitar el acceso de la Comisión a las instalaciones policiales y a todos los datos, documentos, bases de datos y archivos policiales precisos para sus actuaciones; y el personal policial está obligado a colaborar acudiendo a sus citaciones y proporcionando los datos e información que resulten precisos.

4. Si los hechos analizados por la Comisión son de una investigación penal en curso, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial competente con el fin de no interferir en la investigación penal, ni en la reserva de sus actuaciones.

En tal caso el personal investigado en las diligencias penales no tendrá la obligación de colaborar con la Comisión y si ésta precisara del acceso a documentación administrativa relacionada con el caso o la realización de inspecciones in situ la Comisión deberá obtener la aprobación previa de la autoridad judicial actuante.

5. Si en cualquier momento la Comisión aprecia la existencia de un posible ilícito penal o administrativo lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.

Artículo 13.-



Finalizado su estudio, la Comisión emitirá un informe resumiendo las circunstancias del caso; las actuaciones realizadas; la evaluación de la corrección de la actuación policial conforme a las normas, estándares, procedimientos y protocolos de actuación vigentes; el análisis de los problemas subyacentes, y formulará una recomendación, que puede incluir, en su caso, la propuesta de medidas correctoras, preventivas o de mejora para hacer frente a las carencias o para evitar que se repitan los problemas detectados.

Artículo 14.-

*1. Se dará publicidad y difusión a la existencia de la **Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco** sus funciones y funcionamiento y del trabajo realizado.*

2. La Comisión elaborará una memoria bienal de sus actividades que será remitida al Parlamento Vasco.”

Dos. La letra d) del artículo 17 queda redactada como sigue:

“d) Informar las propuestas de resolución de los expedientes disciplinarios cuando se proponga la sanción de separación de servicio y en todos aquellos que se instruyan contra quienes fueran representantes o delegados sindicales a la fecha de la comisión de los hechos imputados.

Igualmente ser oído en los expedientes de rehabilitación de funcionarios o funcionarias.

Tres. La letra i) del artículo 17 queda redactada como sigue:

“i) Ser informado periódicamente de la concesión de medallas al mérito policial al personal de la Ertzaintza y de los reconocimientos de ascenso honorífico previstos en el artículo 80.”

Cuatro. Se adiciona un nuevo párrafo 4º al artículo 27, con la siguiente redacción:

“4. Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del Departamento competente en materia de Seguridad. Dicha autorización se podrá otorgar con carácter genérico y permanente.”

Cinco. Se adiciona un nuevo párrafo 2º al artículo 28, con la siguiente redacción:

“2. Las autoridades y el personal de la Policía del País Vasco debe actuar siguiendo los principios de este código y a lo dispuesto en la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía y oponerse a cualquier vulneración de los mismos.”



Seis. Se suprime el párrafo 3º del artículo 30.

Siete. Se adiciona un artículo 30 bis con la siguiente redacción:

“Artículo 30 bis

1. En sus relaciones con la ciudadanía el personal de la Policía del País Vasco:

a) Observará un trato correcto y esmerado, actuando con empatía, y auxiliándoles en aquellas situaciones que requieran una actuación inmediata para evitar riesgo o desamparo.

b) Actuará conforme al principio de imparcialidad, interviniendo de forma equitativa y respetando por igual a todos los individuos o grupos, sus tradiciones, creencias o estilos de vida en tanto sean compatibles con las leyes y no supongan una alteración de la seguridad ciudadana.

c) Evitará toda discriminación por razón de raza, etnia, religión, creencias, sexo, orientación sexual, edad, ideología, discapacidad o cualquier otra de similar naturaleza.

d) Acreditará su condición profesional siempre que sea necesario y cuando lo demanden las personas con las que se relacionen en sus actuaciones. Se identificarán ante los ciudadanos previamente al inicio de cualquier actuación policial, asegurándose de que éstos han percibido su condición. A tal fin, cuando durante el servicio se haga uso de uniformidad reglamentaria, se portará en lugar visible de la misma el identificador personal correspondiente al o a la agente. De los identificadores personales utilizados existirá un registro que permita conocer la identidad de su portador o portadora.

e) Ofrecerán a las personas a las que afecten sus intervenciones información suficiente y comprensible sobre las mismas, prestando singular atención a las víctimas de delitos y a otras personas que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables.

2. La Policía del País Vasco en sus relaciones con la ciudadanía tendrá en cuenta los derechos lingüísticos reconocidos en Ley 10/1982, de 24 de noviembre, «Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera». Las Administraciones de las que dependan los cuerpos de la Policía del País Vasco procurarán la adecuada capacitación del personal a su servicio para prestar servicio en una sociedad bilingüe, adoptando las medidas necesarias para ello y promoviendo el uso del euskera en dichos cuerpos, sin perjuicio de atender al ciudadano o ciudadana en la lengua que él o ella elija.

3. Igualmente las Administraciones de las que dependan los cuerpos de la Policía del País Vasco procurarán la sensibilización y capacitación del personal en la gestión de la diversidad de la ciudadanía y la lucha contra los ilícitos motivados por el odio y la discriminación contra personas diferentes por el hecho de serlo.”



Ocho.- El artículo 40 queda redactado como sigue:

“Artículo 40.

1. La Academia Vasca de Policía y Emergencias promoverá la convalidación académica, por la administración competente, de los estudios que se cursen en centros de ella dependientes. Para ello la Academia procurará adecuar a las exigencias de la Administración Educativa la naturaleza y duración de dichos estudios y las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos, y se promoverá la colaboración institucional de la Administración educativa, universidad, Poder Judicial y otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente interesen a los fines docentes.

2. La Academia Vasca de Policía y Emergencias, en los cursos que imparta en su seno, podrá convalidar determinadas materias a quienes acrediten haberlas superado previamente, en la forma en que se determine reglamentariamente.”

Nueve. El artículo 43 queda redactado como sigue:

“Artículo 43

1. Los cuerpos de la Policía del País Vasco contarán con las especialidades precisas para realizar aquellas tareas en las que se requiera un determinado nivel de conocimientos específicos. Para acceder a las mismas será preciso haber superado el correspondiente curso de especialización y, en su caso, encontrarse en posesión de las titulaciones o conocimientos que en cada supuesto se determinen.

2. Al personal integrante de las distintas especialidades le podrá ser exigida la prestación de un compromiso de permanencia en las mismas, así como la superación periódica de pruebas selectivas de actualización.

3. Reglamentariamente se concretarán las especialidades, su definición, los requisitos y condiciones exigidas para el ingreso, mantenimiento y cese en las mismas, así como la compatibilidad entre ellas.”

Diez. La letra c) del párrafo segundo del artículo 47 queda redactada como sigue:

“c) Las pruebas, temario y, en su caso, relación de méritos, así como los criterios y normas de valoración.”

Once. Se adiciona un nuevo párrafo 5º al artículo 47, con la siguiente redacción:

“5. Las bases de la convocatoria vincularán a la Administración, a los tribunales que hubieran de juzgar el sistema selectivo y a los aspirantes que participen en el proceso selectivo.



Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Cuando se trate de modificaciones del número de vacantes convocadas o de rectificaciones de errores materiales o de hecho, no será preceptiva la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.”

Doce. Se adiciona un nuevo artículo 47 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 47 bis.

1. Las Administraciones de las que dependen los respectivos cuerpos de Policía del País Vasco garantizarán la aplicación de las previsiones contenidas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, en los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en dichos cuerpos, promoviendo la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el servicio público de seguridad.

2. Se elaborarán planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el ingreso y la carrera profesional.

Dichos planes establecerán, para el periodo de planificación de que se trate, el porcentaje de mujeres en la plantilla policial al que se pretenda llegar para corregir la infrarrepresentación de las mujeres, así como para incrementar la eficacia policial, y podrán adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho en tanto éstas subsistan.

Tales medidas habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido.

3. Los empates a puntuación en el orden de clasificación en los procedimientos de selección serán dirimidos conforme los criterios previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, en los casos previstos en la misma.

4. En los procedimientos selectivos de ingreso por turno libre en las categorías de agente y subcomisario o subcomisaria se determinará el número de plazas que deberían cubrirse con mujeres para cumplir con el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en el servicio público de seguridad conforme a lo previsto en el plan de promoción.

Dicho número de plazas será proporcional a los objetivos perseguidos, no pudiendo ser superior al 40% de las plazas convocadas, ni inferior al porcentaje que se establezca razonablemente atendiendo a los planes de promoción de las mujeres y a los datos estadísticos históricos sobre el porcentaje de mujeres que concurren y superan los procesos selectivos.



Como regla general, en tanto no se elaboren tales planes de promoción de las mujeres, el porcentaje mínimo no podrá ser inferior al 25% siempre que se convoquen más de 3 plazas.

5. En los procedimientos selectivos a que se refiere el apartado anterior la adjudicación de las vacantes convocadas se realizará siguiendo una única lista final de los aspirantes atendiendo al orden de puntuación obtenida y a los criterios de desempate legalmente existentes.

Cuando el objetivo del porcentaje a que se refiere el apartado anterior no se alcanzase atendiendo a lo dispuesto en el párrafo precedente, se dará preferencia a las candidatas mujeres sobre los candidatos hombres hasta cumplir el objetivo perseguido siempre que:

a) Exista una equivalencia de capacitación determinada por la superación de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición del sistema selectivo,

b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por aplicación de esta preferencia tenga un diferencial de puntuación en las fases de oposición y, en su caso, de concurso, dependiendo el sistema selectivo, superior al quince por ciento frente a los candidatos hombres que se vieran preteridos.

c) No concurran en el otro candidato motivos legalmente previstos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo.

6. La preferencia a que se refiere el apartado anterior sólo será de aplicación en tanto no exista en el cuerpo, escala y categoría a que se refiera la convocatoria del proceso selectivo una presencia igual o superior al 33% de funcionarias mujeres.”

Trece. El artículo 48 queda redactado como sigue:

“Artículo 48

1. La Academia Vasca de Policía y Emergencias actúa como órgano permanente de selección especializado en los procesos selectivos de la Ertzaintza y en aquellos de policías locales en que se le encomiende por las administraciones locales.

En cada tribunal u órgano de selección de las administraciones locales, sean órganos permanentes o no, habrá una persona designada por la Academia de Policía del País Vasco, que actuará a título individual.

2. El desarrollo y evaluación de las pruebas que integren el sistema selectivo corresponderá a los tribunales, que actuarán con plena autonomía funcional, serán responsables de la objetividad del procedimiento y garantizarán el cumplimiento de las bases de la convocatoria.



3. Los tribunales u órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de sus miembros, así como al principio de representación equilibrada de mujeres y hombres.

4. En virtud del principio de imparcialidad:

a) La pertenencia a los tribunales u órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

b) No podrán formar parte de los tribunales de selección el personal de elección o de designación política; el personal eventual; el personal funcionario interino o laboral temporal, ni las personas que se hayan dedicado en los últimos cinco años a preparar aspirantes para el ingreso al empleo público.

c) Las personas que formen parte de los tribunales u órganos de selección deberán abstenerse en aquellas circunstancias en que su imparcialidad pueda verse en entredicho por motivos personales, profesionales o de cualquier otro carácter, así como en las demás circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

5. En virtud del principio de especialidad, la totalidad de sus miembros con derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad de ellos, al menos, una correspondiente a la misma área de conocimientos.

6. En virtud del principio de representación equilibrada, salvo imposibilidad justificada, la composición de los órganos de selección ha de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de selección de más de cuatro miembros cada sexo esté representando al menos al 40%; en el resto cuando los dos sexos estén representados.

7. Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesoras y asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán a prestar su asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades. La actuación de dichas asesoras y asesores se encontrará igualmente sometida a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.”x

Catorce. El artículo 50 queda redactado como sigue:

“1. El Gobierno Vasco, a propuesta de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, determinará las reglas básicas para el ingreso en las escalas y categorías de los cuerpos de policía dependientes de la Administración local, ajustándose a criterios análogos a los establecidos para las de la Ertzaintza que sean equivalentes



2. Las entidades locales podrán encomendar a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, previa aceptación por ésta, la realización conjunta de las convocatorias de procedimiento de selección para el ingreso en los cuerpos de policía local; así como en su caso, para el ingreso como alguaciles y agentes de movilidad. esta encomienda conllevará la ejecución por la Academia Vasca de Policía y Emergencias de tales procedimientos de selección..”

Quince. Se adiciona un nuevo artículo 55 bis a la sección 3ª del capítulo V del título III, con la siguiente redacción:

“Artículo 55 bis.

1. Para ser admitido a las pruebas selectivas de ingreso por turno libre como funcionarios o funcionarias pertenecientes a los cuerpos de la Policía del País Vasco, se requerirá el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación reguladora del empleo público vasco, con las siguientes singularidades:

a) Tener 18 años de edad. Para el ingreso en la categoría de agente no haber cumplido la edad de 35 años, sin perjuicio de que para el ingreso en los cuerpos de policía local se pueda compensar el límite máximo de edad con servicios prestados en cuerpos de policía local.

b) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio de una Administración Pública, ni hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

c) Poseer la titulación exigible a la categoría a la que se va a ingresar.

d) No estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que se determinen reglamentariamente.

e) Tener la estatura mínima que se determine reglamentariamente, que será distinta para los hombres y las mujeres.

f) Prestar el compromiso mediante declaración del solicitante de portar armas y en su caso utilizarlas.

g) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase que se determine en cada convocatoria.

h) Otros requisitos específicos que guarden relación objetiva con las funciones y tareas a desempeñar previstos en la convocatoria.

2. Los requisitos mencionados habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, excepto el contenido en la letra g), que deberá poseerse en la fecha en que se determine en cada convocatoria.



3. Para tomar parte en los procesos selectivos de ingreso por promoción interna en las escalas y categorías de los cuerpos que integran la Policía del País Vasco, será necesario reunir los requisitos establecidos en el art. 59 de esta Ley.

Dieciséis. El párrafo 4º del artículo 56 queda redactado como sigue:

4. El ingreso en las categorías de comisario o comisaria e Intendente se efectuará por promoción interna mediante los sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición.”

Diecisiete. El párrafo 1º del artículo 59 queda redactada como sigue;

“1.-Para concurrir por el turno de promoción interna, y sin perjuicio de los requisitos generales establecidos para el ingreso en la correspondiente categoría, los funcionarios o funcionarias deberán reunir los siguientes:

a) Para el ingreso en la categoría de agente primero, hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales en la categoría de Agente, haber completado dos años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

b) Para el ingreso en las categorías de suboficial y oficial, hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales en la categoría inmediatamente inferior de la escala correspondiente, que será la de agente primero cuando se trate de proveer las vacantes de suboficial, haber completado tres años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

c) Para el ingreso en las categorías de comisario o comisaria y subcomisario o subcomisaria, hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales en la categoría inmediatamente inferior de la escala correspondiente, que será la de oficial cuando se trate de proveer vacante de subcomisario o subcomisaria, haber completado tres años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

d) Para el ingreso en la categoría de intendente, hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales en la categoría inmediatamente inferior de la escala correspondiente, haber completado cuatro años de servicios efectivos en la misma y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

e) Para el ingreso en la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza, hallarse en situación de servicio activo en alguna de las otras escalas del



cuerpo, haber completado dos años de servicios efectivos en el mismo y no haber sido sancionado por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.”

Dieciocho. El párrafo 3º del artículo 59 queda redactado como sigue:

“3. También podrá concurrir por el turno de promoción interna el personal funcionario en las situaciones de excedencia por cuidado de hijos o hijas o de familiares, y de excedencia por razón de la violencia de género.”

Diecinueve. El párrafo 4º del artículo 59 queda redactado como sigue:

“4. A los efectos de cómputo del tiempo de servicios efectivos en la categoría de procedencia, al período transcurrido en las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna se incrementará el correspondiente al de prácticas previo al ingreso en la misma, siempre que el proceso selectivo hubiera sido superado.”

Veinte. El párrafo 1º del artículo 61 queda redactado como sigue:

“1. La condición de funcionario se perderá por las causas previstas en la legislación general aplicable a los empleados de las administraciones públicas vascas.”

Veintiuno. El artículo 62 queda redactado como sigue:

“Artículo 62.-

La jubilación del personal funcionario de la Policía del País Vasco se produce en los términos previstos en la legislación reguladora del empleo público vasco, con las singularidades que pudiera contemplar la normativa de la seguridad social para Ertzaintza o policías locales.”

Veintidos. El párrafo 2º del artículo 65 queda redactado como sigue:

“2. El concurso constituye el sistema normal de provisión. En él se valorará la adecuación de las competencias de las personas candidatas al perfil funcional del puesto de trabajo.

Las convocatorias de provisión de puestos definirán los méritos que sean objeto de valoración, entre los que habrán de figurar la antigüedad, la posesión, en su caso, de un determinado grado de desarrollo profesional, la valoración del trabajo desarrollado y el nivel de conocimiento acreditado del euskera, cuando no constituya requisito.



Igualmente podrán figurar cuando así se determine en la convocatoria los cursos de formación y perfeccionamiento; las titulaciones y grados académicos; el conocimiento de idiomas o la actividad docente e investigadora y aquellos otros que puedan resultar adecuados en función de las características propias del puesto a proveer.

Asimismo, y en atención a la naturaleza de las funciones a realizar, las convocatorias podrán establecer la realización de aquellas pruebas que se estimen precisas para evaluar la adecuación de los aspirantes a las específicas características del puesto.”

Veintitrés. Se adiciona un nuevo artículo 65 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 65 bis

1. La cobertura de puestos de trabajo con requisito de especialidad se llevará a cabo mediante los procedimientos de provisión de puestos previstos entre quienes dispongan de la correspondiente especialidad.

Cuando las convocatorias de cursos de especialidad se realicen conjuntamente entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y la Administración competente, la participación en las mismas supondrá la asignación de quienes superasen dicha formación a las vacantes existentes con tal especialidad hasta su provisión definitiva.

2. Quienes hayan superado el curso de especialización correspondiente estarán obligados a presentarse al primer procedimiento de provisión de puestos que se produzca desde tal superación y a solicitar con carácter preferente todas aquellas vacantes que requieran dicha especialización. De no hacerlo así, podrán ser adscritos con carácter forzoso a cualquiera de tales vacantes.

3. Los puestos con requisito de especialidad podrán estar sujetos a un período especial de permanencia mínima y máxima en su desempeño determinado en la relación de puestos de trabajo.”

Veinticuatro. El artículo 66 queda redactado como sigue:

“Artículo 66

Cuando se trate de proveer puestos de trabajo de susceptible desempeño por personal en segunda actividad, gozarán de preferencia en su adjudicación los funcionarios o funcionarias declarados en dicha situación administrativa.”

Veinticinco. La letra d) del párrafo primero del artículo 67 queda redactada como sigue:



“d) En el caso de los procedimientos por concurso de méritos, baremo de méritos, pruebas específicas que se incluyan, puntuación mínima exigida para acceder al puesto y composición de la comisión de selección.”

Veintiséis. Se suprime el párrafo 5º del artículo 70.

Veintisiete. El párrafo 3º del artículo 71, en su primer apartado, queda redactado como sigue:

“3. Mientras permanezcan en el desempeño provisional de un puesto de trabajo, el personal funcionario percibirá las retribuciones complementarias asignadas al mismo y, en todo caso, el complemento de destino que corresponda a su categoría en el caso de la Ertzaintza o que tuvieran consolidado en el caso de la policía local.”

Veintiocho. Se adiciona un nuevo Capítulo II bis al título III, titulado “Promoción y carrera profesional”, con la siguiente redacción:

“CAPITULO II BIS .- CARRERA PROFESIONAL.

“Artículo 73 bis.

La carrera profesional del personal funcionario de la Policía del País Vasco se configura como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y consiste en la aplicación, aislada o simultánea, de la promoción interna a las categorías inmediatamente superiores o los sistema de de carrera profesional horizontal a que se refiere el artículo siguiente.

“Artículo 73 ter.

1. El Departamento competente en materia de seguridad y los municipios podrán implantar sistemas de carrera profesional horizontal consistentes en la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en esta ley y supletoriamente en la normativa aplicable a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. La efectividad de la implantación y desarrollo de las distintas modalidades de carrera profesional horizontal requerirá necesariamente del correspondiente desarrollo normativo por parte de cada una de las Administraciones Públicas

vascas, estando dicha efectividad de la carrera profesional sometida, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias de las respectivas Administraciones.

3. La carrera profesional horizontal se estructura a través de una secuencia ordenada de grados de desarrollo profesional que podrán ser reconocidos a cada persona funcionaria, previa evaluación favorable de los méritos de la persona interesada.

El grado de desarrollo profesional reconoce y sanciona el crecimiento profesional de la persona funcionaria y, en su caso, habilita para el desempeño de uno o varios puestos de trabajo en las Administraciones Públicas vascas.

Los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas vascas podrán determinar el grado o grados de desarrollo profesional exigidos para su desempeño.

4. Con carácter general, la carrera profesional del personal funcionario de carrera se iniciará en el grado o nivel de desarrollo profesional mínimo de la categoría a la que pertenezca.

El ascenso de grado de desarrollo profesional será siempre al grado inmediatamente superior de la categoría que se determine en cada Grupo o subgrupo de clasificación.

5. El reconocimiento de la carrera profesional es un sistema de acreditación de competencias profesionales que se articula mediante criterios objetivos que identifican, evalúan y valoran el desarrollo profesional efectivo de cada persona funcionaria.

La regulación de la carrera profesional por las distintas Administraciones Públicas vascas concretará los diversos grados de desarrollo profesional así como el número de años de ejercicio profesional necesarios para acceder a cada uno de ellos y el procedimiento necesario para lograr su acreditación.

5. Los grados de desarrollo profesional, una vez reconocidos, serán objeto de consolidación, si bien, las Administraciones Públicas vascas podrán prever en la regulación de sus respectivos modelos de carrera profesional, la posibilidad, con carácter excepcional, de pérdida del grado consolidado así como las consecuencias derivadas de dicha circunstancia.

6. No se podrán reconocer retribuciones a cuenta o anticipadas del complemento de carrera profesional al personal de la Ertzaintza ni al personal del cuerpo de policía dependiente de la Administración Local. El devengo del complemento de carrera profesional requiere, con carácter previo, la implantación del modelo de carrera profesional por parte de cada Administración pública y el reconocimiento expreso de un determinado grado de desarrollo profesional a la persona funcionaria de acuerdo con todos los requisitos establecidos en esta Ley”

Veintinueve. El párrafo 1º del artículo 74 queda redactado como sigue:



“1. La estructura y régimen retributivo del personal funcionario de los cuerpos que integran la Policía del País Vasco se regirá por lo dispuesto en la normativa prevista para el personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, con las especificidades establecidas en los párrafos siguientes aplicables al cuerpo de la Ertzaintza.”

Treinta. La letra a) del párrafo 1º del artículo 74 queda redactada como sigue:

“a) El complemento de destino en la Ertzaintza es la retribución complementaria correspondiente al nivel de la categoría a la que pertenezca el funcionario, clasificándose los puestos de trabajo de las escalas superior, ejecutiva, de inspección y básica de la Ertzaintza en 7 niveles conforme a la siguiente escala:

- Categoría de agente: nivel 1*
- Categoría de agente primero: nivel 2*
- Categoría de suboficial: nivel 3*
- Categoría de oficial: nivel 4*
- Categoría de subcomisario o subcomisaria: nivel 5*
- Categoría de comisario o subcomisaria: nivel 6*
- Categoría de Intendente: nivel 7.*

La cuantía del complemento de destino se fijará anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Los puestos de trabajo de la escala de facultativos y técnicos se clasificarán reglamentariamente en uno de los niveles establecidos para los puestos de trabajo de las Administraciones públicas vascas que se correspondan con el grupo de clasificación al que pertenezcan.”

Treinta y uno.- Se adiciona una nueva letra a) bis al párrafo 1º del artículo 74

“A bis) El complemento de carrera profesional en la Ertzaintza retribuirá la progresión profesional del personal funcionario a través de los diferentes grados de desarrollo profesional en los que se articula el sistema de carrera profesional. La cuantía concreta de las retribuciones correspondientes a cada grado de desarrollo profesional según el grupo o subgrupo de clasificación, serán definidas por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.”

x

Treinta y dos.- El párrafo 2º del artículo 78 queda redactado como sigue:

“2. No podrán compatibilizar sus actividades con el desempeño por sí o mediante sustitución de un segundo puesto de trabajo cargo o actividad en el sector público o privado

No obstante, podrán desempeñar un puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad pública o privada en los supuestos y con las condiciones y requisitos



previstos para el personal al servicio de las administraciones públicas en su normativa vigente, salvo que el ejercicio de ese segundo puesto de trabajo supongan un deterioro para la imagen y el prestigio del cuerpo policial o sea contrario a sus principios básicos de actuación.

La condición de servicio activo en la Ertzaintza es incompatible con la de reservista de las Fuerzas Armadas u otros compromisos personales de desempeño de funciones públicas adquiridos al margen del cuerpo policial para situaciones de crisis o emergencia.”

Treinta y tres. El capítulo V del título III queda redactado como sigue:

“CAPITULO V .- SALUD Y PROTECCIÓN.

Artículo 79.-

1. Las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de la Policía del País Vasco velarán por que el personal policial mantenga las condiciones psicofísicas necesarias para el desempeño de sus funciones. A tal fin se contará con un servicio sanitario, pudiéndose, al tal efecto, celebrar contratos o convenios de colaboración con profesionales médicos o entidades sanitarias públicas o privadas.

2. El personal de la Policía del País Vasco está sometido a vigilancia de la salud en la forma que se determine en el correspondiente plan de prevención de riesgos laborales y en el marco de actuación del servicio de prevención de riesgos laborales.

Artículo 79 bis.

1. El régimen de representación y participación del personal de la Policía del País Vasco en relación con la prevención de riesgos laborales atenderá a los principios y criterios contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. La representación y participación del personal se canalizará a través de los delegados de prevención, designados por las organizaciones sindicales con arreglo a la representatividad obtenida en las elecciones correspondientes.

3. Los delegados de prevención colaboran en la mejora de la acción preventiva, vigilan el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y promueven la cooperación del personal funcionario en la aplicación de la misma.

4. En el ejercicio de sus funciones están facultados para ejercer las actividades que a los delegados de prevención confiere la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sin perjuicio de las limitaciones

derivadas en relación con las actividades que deben quedar excluidas según prevé el artículo 3.2 del mismo texto legal.

5. Las administraciones deberán proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos.

6. Se constituirán órganos colegiados de participación con representación paritaria de la Administración y de los representantes del personal en materia de prevención de riesgos laborales.

Artículo 79. Ter-

1. El personal de la Policía del País Vasco está sujeto al régimen de protección social correspondiente al personal funcionario de la institución en la que se integren con las especificidades que contengan la normativa de seguridad social al respecto.

2. Las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de la Policía del País Vasco arbitrarán mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional con ocasión del servicio, siempre y cuando no hubiese mediado dolo o negligencia o impericia graves por el afectado. E igualmente concertarán seguros de accidentes para los casos de fallecimiento, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o lesiones permanentes, devenidos como consecuencia de las lesiones sufridas en el ejercicio de sus funciones.

3. En caso de fallecimiento con ocasión del servicio o cuando el fallecimiento derive de actos ilícitos cometidos contra el funcionario o funcionaria como consecuencia de su condición policial, el cónyuge o pareja superviviente, o en su defecto los herederos legales, tendrán derecho a la percepción, por una sola vez, de una cantidad equivalente a dos anualidades de las retribuciones íntegras que percibiera la persona fallecida en el puesto de trabajo que ocupaba a través de cualquier forma de provisión en el momento de su fallecimiento.

4. En caso de jubilación forzosa por incapacidad consecuencia del daño producido por actos ilícitos de terceros cometidos contra el funcionario o funcionaria con ocasión del servicio o como consecuencia de su condición policial, tendrá dicha persona derecho al percibo de una prestación económica periódica que, sumada a la pensión, ordinaria o extraordinaria, que le correspondiera, alcance, en su caso, el ochenta por ciento de las retribuciones fijas y periódicas del puesto de trabajo que ocupaba en el momento en que tuvo lugar el hecho determinante de este derecho.

Dicha prestación es incompatible con la percepción de rentas de trabajo, así como de otras pensiones o subsidios legalmente compatibles. La suma de la prestación económica y las pensiones y haberes pasivos que perciba no podrá



ser superior a la pensión máxima prevista en el régimen público de previsión social.

La prestación económica se actualizará en idéntico incremento anual al que resulte de aplicación a las mencionadas retribuciones fijas y periódicas, y se abonará mensualmente hasta la fecha en que hubiera debido ser declarada su jubilación forzosa por edad, salvo que acaeciera su fallecimiento con anterioridad.

Treinta y cuatro. Se añade un nuevo capítulo V bis al título III con la siguiente redacción:

“CAPITULO V BIS.- CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS.

Artículo 80.-

1. Reglamentariamente se determinará el régimen de concesión de medallas al mérito policial, felicitaciones y demás condecoraciones honoríficas para premiar al personal funcionario de la Policía del País Vasco que en el ejercicio de sus funciones acrediten cualidades notables de ejemplaridad, sacrificio, eficacia y dedicación en el servicio que redunden en beneficio de la sociedad.

2. Los tipos de medallas al mérito policial y los presupuestos y procedimiento para su concesión se regularán reglamentariamente. El procedimiento se inicia de oficio cuando lo estime oportuno el órgano competente a la vista de las informaciones existentes.

3. En los casos que se determinen reglamentariamente podrá aparejarse efectos económicos a la concesión de la medalla al mérito policial, siempre que no procediera el reconocimiento de las prestaciones económicas referidas en el artículo precedente.

3. Cuando existan circunstancias especiales que lo justifiquen podrá concederse discrecionalmente el ascenso honorífico a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten a funcionarios o funcionarias que hubieran fallecido o resultado jubilados por incapacidad a causa de una actuación heroica en el ejercicio de su condición policial. Dicho reconocimiento no tiene efectos económicos.”

Treinta y cinco. El artículo 81 queda redactado como sigue:

“Artículo 81.-

El personal de los cuerpos de la policía del País Vasco se hallará en alguna de las situaciones administrativas previstas en la legislación general del empleo público vasco con las particularidades que en éste capítulo se contienen o en la específica situación administrativa de segunda actividad.”



Treinta y seis. Se adiciona un nuevo párrafo 5º al artículo 84, con la siguiente redacción:

“5. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario o funcionaria deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción firme, la Administración deberá restituirle la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.”

Treinta y siete. Se adiciona un nuevo párrafo 6º al artículo 84, con la siguiente redacción:

“6. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será tenido en cuenta para el cumplimiento de la suspensión firme.”

Treinta y ocho. El artículo 85 queda redactado como sigue:

“Artículo 85.

1. El personal funcionario de los cuerpos de la Policía del País Vasco, con excepción de quienes pertenezcan a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza, en situación de servicio activo podrá solicitar pasar a desempeñar la modalidad de servicio activo modulado por la edad con el objetivo de prestar el servicio activo con las modificaciones de las condiciones de prestación del servicio pertinentes.

2. Cada Administración establecerá, previa negociación con la representación del personal, los requisitos y condiciones pertinentes para el reconocimiento del servicio activo modulado por la edad, incluyendo en tal regulación:

- a) La edad a partir de la cual cabe el reconocimiento del servicio activo modulado por la edad;*
- b) Las modificaciones oportunas en las condiciones de prestación del servicio.*
- c) La posibilidad, con carácter excepcional y motivado, de limitar los nuevos reconocimientos a un cupo anual cuando no fuera posible garantizar la continuidad de la prestación del servicio policial.*
- d) La posible existencia de unidades singulares en las que las modulaciones del servicio contempladas por razón de la edad sean incompatibles, por su naturaleza, con el desempeño del puesto, en cuyo caso el reglamento deberá contemplar la readscripción a otro puesto de trabajo vacante para el que cumpla los requisitos, en mismas condiciones de provisión en las que fue nombrado en el puesto anteriormente ocupado y con las garantías de elección y preferencia por la persona interesada que se establezcan.*

3. La autorización del servicio activo modulado por razón de la edad estará condicionada al compromiso de la petición de jubilación voluntaria anticipada cuando se alcance la edad requerida para aquella de conformidad con el



régimen de la seguridad social en su caso aplicable. El cumplimiento de tal compromiso podrá retrasarse si en el momento de cumplimiento de la edad de la jubilación anticipada no se cumple con los requisitos necesarios para percibir una pensión equivalente al cien por cien de su base reguladora.

Treinta y nueve. El artículo 86 queda redactado como sigue:

“Artículo 86

1. El personal funcionario de los cuerpos de la Policía del País Vasco que se encuentre en situación de servicio activo, con excepción de quienes pertenezcan a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza, podrá pasar a la situación administrativa de segunda actividad por disminución apreciable de las facultades psíquicas o físicas, cuando la misma determine una insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las funciones propias de su categoría, sin impedirles la eficaz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial.

A los efectos previstos en la presente ley se consideran tareas fundamentales de la profesión policial las relativas al mantenimiento y restauración del orden y la seguridad ciudadana, la prevención de hechos delictivos, su investigación, y la persecución de los culpables; tareas cuyo eficaz desempeño exige una elemental capacidad tanto para el uso y el manejo de armas de fuego y demás defensas reglamentarias, como para la conducción de vehículos en condiciones normales, así como una elemental capacidad motriz/motora.

2. El procedimiento para el pase a esta situación administrativa podrá iniciarse de oficio o a instancia de la persona interesada, sin necesidad de tener que solicitar previamente la declaración de invalidez permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

3. La valoración de las limitaciones funcionales corresponderá a un Tribunal Evaluador compuesto por tres facultativos, que se designarán por el Departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad u órgano competente de la respectiva entidad local, uno de ellos a propuesta de representación sindical. El Tribunal podrá recabar la participación de aquellos especialistas que estime precisos para el correcto ejercicio de su función, y disponer la práctica de cuantas pruebas, reconocimientos o exploraciones médicas considere necesarias a tal fin.

4. Los dictámenes emitidos por el Tribunal Evaluador vincularán al órgano competente para declarar la situación de segunda actividad, sin perjuicio de que éste, si apreciara la existencia de alguna irregularidad invalidante, pueda proceder a su revisión conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo. Si, como consecuencia de los reconocimientos efectuados, el Tribunal apreciara en el funcionario o funcionaria un estado de imposibilidad física o de disminución de sus facultades que le incapaciten con carácter permanente para el desempeño de sus funciones, lo hará constar en su dictamen a los efectos oportunos.



5. El personal funcionario que pase a la administrativa de segunda actividad cesará en el puesto de trabajo al que estén adscritos de no ser susceptible de desempeño por personal en situación de segunda actividad y serán asignados en adscripción provisional a puestos de trabajo en la unidad en la que se encontraren prestando servicios susceptibles de tal desempeño. En el supuesto de que en la unidad no hubiera puesto vacante, la adscripción será llevada a cabo en el centro de trabajo en que, existiendo un puesto vacante de los definidos en la relación de puestos del cuerpo policial, determine la Administración de entre los tres propuestos por la persona interesada.

Si no existiera disponibilidad de puesto de trabajo de tal naturaleza conforme a lo previsto en los párrafos precedentes, o los puestos vacantes existentes se encuentren ubicados fuera del entorno limítrofe al centro de trabajo en el que estuviese prestando servicios y no los propusiese voluntariamente el interesado, transitoriamente y en tanto no exista tal disponibilidad, la Administración competente adaptará funcionalmente el puesto que venía ocupando a las capacidades de la persona interesada, de conformidad con el dictamen del Tribunal Evaluador.

6. La solicitud voluntaria de pase a la situación administrativa de segunda actividad en el caso del personal de la Ertzaintza conlleva el compromiso a la petición de jubilación voluntaria anticipada cuando se alcance la edad requerida para aquella de conformidad con el régimen de la seguridad social, en su caso, aplicable. El cumplimiento de tal compromiso podrá retrasarse si en el momento de cumplimiento de la edad de la jubilación anticipada no cumple con los requisitos necesarios para percibir una pensión equivalente al cien por cien de su base reguladora.

7. El personal funcionario en situación administrativa de segunda actividad percibirá las retribuciones básicas de la categoría y aquellas de carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidas las que correspondan en concepto de trienios, que continuarán perfeccionándose en dicho situación. En cuanto a las retribuciones complementarias se percibirán las que correspondan al puesto o plaza que se desempeñe.

En aquellos supuestos en que el funcionario haya sido declarado en situación de incapacidad permanente por los órganos competentes de la Seguridad Social, sin que proceda su jubilación forzosa, las retribuciones complementarias que le correspondan se minorarán en la misma cuantía que importe la prestación de pago periódico que tenga reconocida en aquel concepto.

8. El personal en situación administrativa de segunda actividad tiene derecho a acogerse en iguales condiciones a las mismas modulaciones del desempeño previstas para el servicio activo por razón de la edad”

Cuarenta. El artículo 87 queda redactado como sigue:

“Artículo 87.



Si excepcionalmente una persona funcionaria en servicio activo modulado por la edad o en situación de segunda actividad permaneciese transitoriamente sin destino a disposición del cuerpo policial correspondiente, mientras dure tal circunstancia, percibirá las retribuciones básicas de la categoría y aquellas de carácter personal que tuvieran reconocidas, así como las retribuciones del último puesto desempeñado, con excepción del componente singular del complemento específico.”

Cuarenta y uno. Se suprime el artículo 88.

Cuarenta y dos. Se modifican las letras b), d), g), k y l) del párrafo 2º del artículo 92 quedan redactadas como sigue:

“b) Prevalerse de la condición de policía causando grave perjuicio a los ciudadanos, subordinados o a la Administración, así como la práctica de cualquier trato inhumano, degradante, discriminatorio o vejatorio a las personas con las que se relacionen en el ejercicio de sus funciones policiales, en especial con aquellas que se encuentren bajo su custodia. Se entenderá por trato discriminatorio aquél que se funde en alguna de las causas expresadas en el artículo 14 de la Constitución.

d) La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos que conozca por razón de su cargo, que perjudiquen gravemente el desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.

g) La manifiesta, reiterada y no justificada falta de rendimiento, así como el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

k) La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, perjudicando gravemente el servicio o cuando se deriven consecuencias graves para la seguridad ciudadana

l) Incurrir en falta grave cuando hubiera sido anteriormente sancionado, en virtud de resoluciones que hubieran alcanzado firmeza en vía administrativa, por otras dos faltas de igual o mayor gravedad que la cometida cuya anotación no cumpla los requisitos para ser cancelada.”

Cuarenta y tres. Se adicionan dos nuevas letras l bis) y l ter) al párrafo 2º del artículo 92, con la siguiente redacción:

“l bis) El acoso sexual y el acoso sexista, así como el acoso laboral, consistente este último en la realización reiterada, en el marco de una relación de servicio, de actos de acoso psicológico y hostilidad.



l ter) Las infracciones tipificadas como faltas muy graves en la legislación sobre utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.”

Cuarenta y cuatro. El artículo 93 queda redactado como sigue:

“Artículo 93

Por razón de las faltas a que se refiere este capítulo, podrán imponerse las siguientes sanciones:

1. Por las faltas muy graves:

- a) Separación del servicio.*
- b) Suspensión de funciones de un año y un día a cuatro años.*

2. Por faltas graves:

- a) Suspensión de funciones de cinco días a un año.*
- b) Traslado de destino, con pérdida o sin pérdida de destino.*

3. Por faltas leves:

- a) Apercibimiento.*
- b) Suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no causará efecto sobre el cómputo de la antigüedad.*

Los funcionarios o funcionarias sancionados con traslado forzoso no podrán obtener un nuevo destino por ningún procedimiento en el centro o unidad de la que fueron trasladados, en el período de uno a tres años determinado en la resolución sancionadora, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo siguiente.”

Cuarenta y cinco. El artículo 94 queda redactado como sigue:

“Artículo 94

Para la determinación de la mayor o menor gravedad de la falta y graduar la sanción a imponer se tendrán en cuenta, además de lo que objetivamente se haya cometido u omitido, y actuando bajo el principio de proporcionalidad, los siguientes elementos:

- a) Intencionalidad.*
- b) Grado de participación en la comisión u omisión.*
- c) Perturbación que pueda producir en el normal funcionamiento de la Administración y de los servicios policiales.*
- d) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que pueda implicar para los ciudadanos y los subordinados*
- e) El quebrantamiento de los principios de disciplina, jerarquía y colaboración.*
- f) El historial profesional, que, a estos efectos, sólo podrá valorarse como circunstancia atenuante.*



g) Reincidencia. Existe reincidencia cuando el funcionario, al cometer la falta, ya hubiera sido anteriormente sancionado en resolución firme por otra falta de mayor gravedad o por dos de gravedad igual o inferior y que no hayan sido canceladas. A los efectos de la reincidencia, no se computarán los antecedentes disciplinarios cancelados o que debieran serlo.

h) Deterioro de imagen de la Administración o de los servicios policiales que pudieran haber causado.

i) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana.

En el caso de faltas por delito se valorará específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales.”

Cuarenta y seis. Se adiciona un nuevo párrafo 2 bis al artículo 95 con la siguiente redacción:

“2 bis. Asisten al expedientado los derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. El Instructor garantizará en todo momento el derecho de defensa del expedientado y adoptará a tal fin las medidas necesarias.

El expedientado podrá contar, en todas las actuaciones a que dé lugar el procedimiento, con el asesoramiento y la asistencia de un abogado en ejercicio o de un representante sindical o un funcionario o funcionaria del cuerpo policial de su confianza que elija.

De optarse por esta segunda posibilidad, las autoridades facilitarán al funcionario designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado ante las autoridades disciplinarias o instructores de los expedientes, y su asesoramiento será siempre voluntario, sin que tal designación confiera derecho alguno al resarcimiento por los gastos que pudieran derivarse de la asistencia.”

Cuarenta y siete. Se adiciona un nuevo párrafo 2 ter al artículo 95 con la siguiente redacción:

“2 ter. El expedientado podrá conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento del modo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.”

Cuarenta y ocho. El párrafo 5º del artículo 95 queda redactado como sigue:

“5. Si no hubiere sido notificada la resolución en el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste en los términos y con las consecuencias previstas en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo. El transcurso del citado plazo quedará interrumpido, además de en los casos previstos en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la



Comunidad Autónoma del País Vasco, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables al interesado o en virtud de la existencia de actuaciones judiciales penales en relación con hechos objeto de aquél.”

Cuarenta y nueve. El párrafo 2º del artículo 97 queda redactado como sigue:

“2. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los tres meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiese cometido.”

Cincuenta. El párrafo 3º del artículo 97 queda redactado como sigue:

“3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los tres meses. El plazo para la prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel en que haya adquirido firmeza la resolución que las imponga”

Cincuenta y uno. Se adiciona nuevo artículo 97 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 97 bis.

1. Las sanciones disciplinarias serán ejecutivas cuando no quepan contra ellas ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva se podrá suspender cautelarmente si la persona interesada manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.

Dicha suspensión cautelar finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo, o cuando habiendo interpuesto recurso contencioso-administrativo no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada o el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

Cincuenta y dos. Se adiciona nuevo artículo 97 ter, con la siguiente redacción:

Artículo 97 ter.

1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se impongan y su naturaleza, su cumplimiento se hará en la



forma que menos perjudique a la persona sancionada, y comenzarán a cumplirse el mismo día en que adquiera ejecutividad la sanción, salvo que por causas justificadas se aplaze el cumplimiento en la propia resolución conforme a lo dispuesto en este artículo.

2. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución por hallarse el funcionario o funcionaria en situación administrativa que lo impida o haber sido jubilado forzosamente, la sanción sólo se hará efectiva en caso de que su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

3. Cuando concurren varias sanciones de suspensión de funciones, su cumplimiento se llevará a cabo siguiendo el orden cronológico de imposición, comenzando dentro de éste por las de mayor gravedad, hasta el límite de seis años. Si la suma de ellas excede de dicho límite, no se cumplirá el tiempo que lo sobrepase.

4. La ejecución económica de la sanción de suspensión de funciones se hará efectiva inmediatamente con cargo al sancionado.

5. El funcionario o funcionaria sancionado con suspensión de funciones igual o inferior a 15 días por falta leve o grave podrá optar como medida alternativa de cumplimiento de la sanción, y previa aceptación por la administración, por el trabajo fuera de la jornada laboral estipulada sin remuneración o compensación alguna por un periodo igual al de la sanción impuesta, respetando en todo caso las garantías de descanso entre jornadas.

6. La persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Seguridad y el órgano municipal competente podrán acordar, de oficio o a instancia del interesado, cuando mediara causa justa para ello, la suspensión de la ejecución de la sanción, por tiempo inferior al de la prescripción, o su inejecución total o parcial. El plazo de suspensión de la sanción será computable a efectos de cancelación. ”

Cincuenta y tres. El párrafo 3º del artículo 99 queda redactado como sigue:

“3. Tendrán la condición de electores y elegibles, referida a la fecha de inicio del proceso electoral, el personal funcionario de carrera que se encuentren en situación de servicio activo o segunda actividad, y el personal funcionario en prácticas que hubiera superado el curso de formación y se encuentre desarrollando el período de prácticas.

Cincuenta y cuatro. El artículo 105 queda redactado como sigue:

“Artículo 105.

1. La Ertzaintza se estructura jerárquicamente en escalas y, dentro de estas, en las siguientes categorías:

- a) Escala superior: con la categoría de intendente.
- b) Escala ejecutiva, con las categorías de comisario o comisaria y subcomisario o subcomisaria.
- c) Escala de inspección, con las categorías de oficial y suboficial.
- d) Escala básica, con las categorías de agente primero y agente.

2. Las escalas se clasifican en los siguientes grupos y subgrupos profesionales:

- a) La escala superior se clasifica en el grupo A, subgrupo A1.
- b) La escala ejecutiva se clasifica en el grupo A, subgrupo A2
- c) Las escalas de inspección y básica se clasifican ambas en el grupo C, subgrupo C1.

3. En la Ertzaintza existirá, asimismo, la escala de facultativos y técnicos, cuyas plazas corresponderán a los grupos de clasificación A1, A2 y C1 en función de la titulación exigida en cada caso.

Cincuenta y cinco. La sección III “Policía Judicial” del capítulo II del Título IV “De los funcionarios de la Ertzaintza” queda redactada como sigue:

“Sección Tercera.- Policía Judicial.

“Artículo 112.-

1. Compete a todos los funcionarios y funcionarias de la Ertzaintza el auxilio en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, como policía judicial, en el ámbito de sus competencias definidas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía y los acuerdos de delimitación de funciones suscritos por la Junta de Seguridad, sin menoscabo de las funciones de dirección de las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

2. En la estructura de la Ertzaintza se establecerán unidades de investigación criminal y policía Judicial que dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de todas las actuaciones que aquéllas les encomienden contempladas en la ley Orgánica del Poder Judicial. Los responsables de tales unidades policiales serán responsables de canalizar los requerimientos provenientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal, a los efectos de que el personal o medios de las referidas unidades intervengan en una investigación.

3. El Departamento del Gobierno Vasco competente en Seguridad, teniendo en cuenta el ritmo de actividades y las disponibilidades de plantilla, podrá adscribir con carácter permanente y estable servicios, secciones o grupos de las unidades de investigación criminal y policía judicial a determinados Juzgados o Tribunal.

Artículo 113



La formación específica de los funcionarios y funcionarias adscritos a las unidades y servicios de investigación criminal y policía judicial se realizará a través de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, incluyendo en su caso períodos de prácticas, en los que podrán participar miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal.

La posesión del diploma de especialización correspondiente será requisito necesario para ocupar puestos en las unidades de investigación criminal y policía judicial.

Artículo 114

1. Los funcionarios y funcionarias adscritos a las unidades de investigación criminal y policía judicial desempeñarán esa función con carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar también las misiones de prevención de la delincuencia y demás que se les encomienden, cuando las circunstancias lo requieran, de entre las correspondientes a la Ertzaintza.

2. Los funcionarios o funcionarias a quienes esté encomendada, por el juez o fiscal competente, una concreta investigación, en el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 112, no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, sino en los términos previstos en la ley orgánica del Poder Judicial.”

3. Los órganos judiciales de la jurisdicción penal y el Ministerio Fiscal tendrán, respecto de las unidades de investigación criminal y policía judicial que les sean adscritos con carácter permanente, las mismas facultades que les reconoce el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. Cuando se inicie un expediente disciplinario a funcionarios y funcionarias de las unidades de investigación criminal y policía judicial y los hechos objeto del mismo guarden relación directa con la investigación que tuvieran encomendada, se recabará informe del órgano judicial o Fiscal del que dependan, sin perjuicio de aquellos otros que consideren oportuno emitir.

5. Salvo lo dispuesto en esta Sección, el régimen de los funcionarios y funcionarias integrados en las unidades de investigación criminal y policía judicial será el previsto con carácter general para la Ertzaintza en la presente ley.

Artículo 115

Se fomentará por el Departamento competente en seguridad la participación de la Ertzaintza en las comisiones y foros regionales, estatales e internacionales relevantes relativos a la coordinación de actividades de investigación criminal y policía judicial.”

Cincuenta y seis. El artículo 117 queda redactado como sigue:

“Artículo 117

1. En los ayuntamientos que no dispongan de cuerpo de Policía local podrán crearse hasta un máximo de cinco plazas de alguaciles para el desempeño, entre otras que aparezcan en la monografía de sus puestos, de las siguientes funciones:

a) Vigilancia y custodia de los edificios e instalaciones municipales.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.

c) Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en el ámbito de las competencias locales en dichas materias.

d) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.

e) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

2. En el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo primero ostentan la condición de agentes de la autoridad y habrán de ajustarse a los principios básicos de actuación y código deontológico establecido en esta Ley.

3. Los alguaciles no podrán portar armas de fuego y actuarán de uniforme, que se distinguirá de la uniformidad propia de los cuerpos de policía.

4. El ámbito de actuación de los alguaciles será el del municipio al que pertenezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en cada caso para los supuestos de catástrofe o calamidad pública.

5. Las plazas de alguacil serán ocupadas por funcionarios o funcionarias de carrera pertenecientes al grupo de clasificación C-2 o equivalente, resultándoles de aplicación el estatuto aplicable al funcionariado de la Administración local, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.

6. Su selección seguirá criterios semejantes a los previstos para los integrantes de los cuerpos de policía local, adaptando las pruebas de conocimientos a la titulación correspondiente, y deberán superar previamente un curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias.”

Cincuenta y siete. El artículo 118 queda redactado como sigue:

“Artículo 118

1. Los Cuerpos de Policía Local se estructuran en jerárquicamente en escalas y, dentro de estas, en las siguientes categorías:

- a) Escala superior: con la categoría de intendente.*
- b) Escala ejecutiva, con las categorías de comisario o comisaria y subcomisario o subcomisaria.*
- c) Escala de inspección, con las categorías de oficial y suboficial.*
- d) Escala básica, con las categorías de agente primero y agente.*

2. Las escalas se clasifican en los siguientes grupos y subgrupos profesionales:

- a) La escala superior se clasifica en el grupo A, subgrupo A1.*
- b) La escala ejecutiva se clasifica en el grupo A, subgrupo A2*
- c) Las escalas de inspección y básica se clasifican ambas en el grupo C, subgrupo C1.*

3. La creación de escalas y categorías en los cuerpos de policial local debe atender a los criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías que se determinen reglamentariamente por el Gobierno Vasco, atendiendo a la población, características de la localidad y el número de efectivos, estando obligados a crear las categorías correspondientes en los siguientes casos:

a) La categoría de intendente en municipios con población superior a 150.000 habitantes, o cuyo cuerpo de policía esté integrado por un número igual o superior a 200 efectivos de plantilla.

b) La categoría de comisario o comisaria en aquellos municipios que rebasen los 50.000 habitantes o cuya policía local cuente con más de 100 efectivos de plantilla.

c) La categoría de subcomisario o subcomisaria en aquellos municipios que rebasen los 25.000 habitantes o cuya policía local cuente con más de 40 efectivos de plantilla.

d) La categoría de oficial en municipios que rebasen los 15.000 habitantes o cuya policía local cuente con más de 20 efectivos de plantilla.

e) La categoría de suboficial, en municipios de menos de 15.000 habitantes y cuya policía local cuente con 5 o más efectivos de plantilla.

6. Para el establecimiento de una categoría superior será necesaria la preexistencia de todas las categorías inmediatamente inferiores.”

Cincuenta y ocho. El artículo 119 queda redactado como sigue:

“Artículo 119



La determinación de la categoría correspondiente a los puestos de trabajo de jefatura de la policía local, cuando ésta sea unipersonal, corresponderá a la categoría que se encuentre jerárquicamente más arriba en la estructura aprobada para el cuerpo de policía local, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo anterior.”

Cincuenta y nueve. El artículo 120 queda redactado como sigue:

“Artículo 120

1. Cuando un Ayuntamiento tenga necesidad de cubrir puestos de trabajo de forma urgente y temporal en las diferentes categorías de los cuerpos de policía local podrá actuar según los mecanismos de cooperación intermunicipal previstos legalmente o nombrar interinos conforme a lo establecido en la legislación de función pública general, siempre que se garantice una formación básica del interino para el desempeño de su labor.

2. las entidades locales podrán solicitar del departamento competente en seguridad la asistencia de la ertzaintza en aquellas funciones de naturaleza estrictamente policial que correspondan a los cuerpos de policía local, así como en la ordenación y dirección de tráfico en las travesías urbanas, en los casos en que no dispongan de cuerpo de policía o, disponiendo de él, sus efectivos no alcancen a dar cobertura a la totalidad de los servicios de su competencia. En este último supuesto, la colaboración no podrá tener carácter permanente.”

3. La Academia Vasca de Policía y Emergencias podrá formar bolsas de trabajo para el nombramiento de funcionarios o funcionarias interinos en los cuerpos de policía local por quienes hayan superado un curso básico específico organizado por ella. Las condiciones de acceso al curso se determinarán por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.”

Sesenta. Se adiciona un nuevo Capítulo III al Título V con la denominación de “Capítulo III.- Agentes de movilidad”, con la siguiente redacción:.

“Capítulo III.- Agentes de movilidad

Artículo 121

1. En los municipios de gran población podrá asignarse, por el Pleno de la Corporación, a parte del personal funcionario perteneciente a la misma para el ejercicio exclusivo de las funciones de ordenación, señalización y regulación del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de tráfico y seguridad vial, con la denominación de agentes de movilidad, de manera que ello no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal.

2. En el ejercicio de sus funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad, subordinados al personal de los respectivos cuerpos de policía local, sin integrarse en los mismos; no podrán portar armas de fuego y su uniformidad habrá de diferenciarse claramente de la que sea propia de los cuerpos de policía local.”

3. Para el acceso a tales plazas se requerirá la titulación correspondiente al grupo de clasificación C-2 o equivalente, y deberán superar previamente un curso teórico-práctico en la Academia Vasca de Policía y Emergencias o en centros formativos municipales delegados por aquélla, rigiéndose en todo lo demás por la normativa común prevista para el personal funcionario local.”

Sesenta y uno. Se adiciona una nueva *Disposición Adicional Vigésimosegunda* con la siguiente redacción:

“Disposición Adicional Vigésimosegunda

Los funcionarios y funcionarias de la Policía del País Vasco que hayan perdido dicha condición por jubilación mantendrán la condición de miembro jubilado del cuerpo, con la categoría que ostentaran en el momento de la jubilación, podrán vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, disponer del correspondiente carne profesional y conservar la placa emblema convenientemente modificados conforme a lo que reglamentariamente se determine.”

Sesenta y dos. Se adiciona una nueva *Disposición Adicional Vigésimotercera* con la siguiente redacción:

“Disposición Adicional Vigésimotercera.

Los funcionarios y funcionarias de la Policía del País Vasco que se encuentren en situaciones distintas del servicio activo, así como quienes hayan perdido la condición funcional por jubilación, que deban acudir a juicio como testigos o peritos por razón de hechos o investigaciones relacionadas con el tiempo en que estuvieron en servicio activo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón del servicio previstas para el funcionariado en activo. A los efectos de facilitar su asistencia a juicio deberán comunicar a la Administración su domicilio actual.”

Sesenta y tres. Se adiciona una nueva *Disposición Adicional Vigésimocuarta* con la siguiente redacción:

“Disposición Adicional Vigésimotercera.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias podrá organizar actividades formativas específicas en investigación criminal y policía judicial para aquellas policías locales que hayan suscritos los convenios de colaboración en tal



sentido previstos en los art 44.3 y 4 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.”

Sesenta y cuatro. Se suprimen las disposiciones adicionales tercera, octava, duodécima en sus apartados primero y tercero, y decimosexta, así como las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima.

Sesenta y cinco. Las referencias al Boletín de la Ertzaintza contenidas en los artículos 42.2 y en el artículo 67.1 se sustituyen por la expresión “Boletín Oficial del País Vasco”.

Sesenta y seis. Todas las referencias en la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, a la “Academia de Policía del País Vasco” se sustituyen por la expresión “Academia Vasca de Policía y Emergencias” y las referencias a al “Departamento de Interior” o a órganos del mismo se sustituyen por la referencia al “Departamento del Gobierno Vasco competente en Seguridad” o a sus órganos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Procesos selectivos y de provisión en curso.

Los procesos selectivos y de provisión de puestos actualmente en curso continuarán rigiéndose con arreglo a la normativa por la que fueron convocados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Régimen de condecoraciones y acto de servicio.

En tanto no se desarrollen reglamentariamente las previsiones de los artículos 79 bis y 80 relativos a las prestaciones en caso de fallecimiento y jubilación forzosa con ocasión del servicio y del nuevo régimen de los reconocimientos honoríficos, resultarán aplicables, en lo que no se oponga a esta ley, las previsiones del Decreto 202/2012, de 16 de octubre, regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza y del Decreto 27/2010, de 26 de enero, sobre el régimen de condecoraciones y distinciones aplicable a los cuerpos de policía local del País Vasco.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Expedientes disciplinarios

Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la presente norma seguirán regulados por las disposiciones anteriores, salvo que las de ésta sean más favorables al expedientado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- Categoría de superintendente.



En el plazo de seis meses se modificará la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza para adaptar los puestos de la misma reservados a la extinta categoría de superintendente a lo dispuesto en la presente ley.

Hasta tanto no se produzca dicha modificación quienes a la entrada en vigor de esta ley vinieran ocupando puestos de la categoría de superintendente continuarán percibiendo las retribuciones que vinieran atribuidas a dicha categoría conforme a la normativa precedente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- Integración del personal de la escala básica.

El personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco que haya obtenido u obtenga el nombramiento de la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza y de los cuerpos de policía local en procedimientos de ingreso establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se integra a todos los efectos en las nuevas categorías y grupos de clasificación previstos en esta ley mediante la acreditación de la equivalencia establecida en la Orden EDU/3497/2011, de 13 de diciembre (BOE 26 de diciembre), por la que se establece la equivalencia de agente de la escala básica de la Ertzaintza y de los cuerpos de policía local de la Comunidad Autónoma del País Vasco al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.- Integración de personal funcionario de la policía local en la escala superior.

1. El personal funcionario de los cuerpos de policía local con la categoría de intendente queda automáticamente integrado en la escala superior. asimismo, el personal funcionario perteneciente a la categoría de comisario o comisaria y subcomisario o subcomisaria se integra automáticamente en la escala ejecutiva.

2. Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía local que hubieren obtenido plaza de nivel A con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, y que, en virtud de su disposición adicional tercera fueron integrados en categorías de nivel inferior a la de la plaza obtenida, quedaran integrados e integradas en la escala superior en base al criterio de prelación jerárquica de cada categoría afectada, si estuvieran en posesión de la titulación académica correspondiente a dicha escala”.

3. Tal integración no podrá suponer incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.- Adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de policía local.

1. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente ley los municipios del País Vasco que dispongan de Cuerpo de Policía deberán adaptar los puestos de jefatura de las mismas a los dictados de esta Ley.

2. El personal funcionario de los cuerpos de policía local que ocupe puestos de jefatura del cuerpo que deban adaptarse a los previsto en la presente Ley continuará en el desempeño de los mismos rigiéndose por las condiciones por las que fueron nombrados, y percibiendo las retribuciones efectivamente asignadas al puesto de trabajo ocupado.

Dicho personal quedará integrado en la categoría correspondiente al puesto recalificado, siempre que tenga su destino definitivo en el mismo durante los últimos cinco años antes de la entrada en vigor de la presente Ley; posea el título correspondiente a dicha categoría o los cursos de capacitación previstos en el artículo 59.2 de la Ley de Policía del País Vasco convocados o que se convoquen antes de la adaptación, y superase un curso teórico-práctico de acreditación profesional impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias en el que se tendrá en cuenta la experiencia profesional, los cursos de especialización y capacitación realizados y los conocimientos previamente exigidos.

Tal integración no podrá suponer incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.- Alguaciles.

1. Donde no exista cuerpo de policía local, los alguaciles, vigilantes, o personal con funciones semejantes, cualquiera que sea su denominación, pasarán a denominarse alguaciles.

2. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de esta ley esté desempeñando puestos configurados como de alguaciles según esta ley, podrá seguir desempeñándolos, disponiendo en el ejercicio de tales funciones la protección jurídica reservada a los mismos en esta ley. Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, de alguacil, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.- Integración de alguaciles en los cuerpos de policía local.



Los alguaciles que, al tiempo de crearse el cuerpo de policía local, se encontrasen prestando servicios en el Ayuntamiento de que se trate, se integrarán en el cuerpo de policía local mediante la superación de un concurso restringido con dispensa de los requisitos de edad y estatura y la superación del curso que se establezca por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Quienes no superasen el procedimiento para su integración en el nuevo cuerpo de policía local seguirán desempeñando las funciones que vinieran realizando en sus puestos a extinguir.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Habilitación para elaborar un Texto Refundido.

Al efecto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor a la Ley 4/1992, de 17 de julio, de la Policía del País Vasco, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta del Departamento competente en materia de seguridad, en un plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de la citada norma, renumerando los artículos, capítulos y disposiciones que fuera necesario, adecuando las remisiones internas de las leyes, armonizando el lenguaje a las exigencias del lenguaje no sexista, y regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.



LEGE-PROIEKTUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETA

ZIOEN AZALPENA.

I

Euskal Autonomia Erkidegoko Polisiari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea zenbait aldiz aldatu da, eta bereziki Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekeo ekainaren 28ko 15/2012 Legearen bidez, lege hartatik segurtasun publiko osoaren alde erkideak bereizi baitzituen, hala nola Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren erregulazioa, udaltzaingoen arteko koordinazioa edo polizia-lankidetzako mekanismoak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Polisiari buruzko Legeak defendatzen zuen polizia-eredua sozialki finkatuta eta onartuta dago. Eraberritze honek sendotu nahi du eredu horren gizarte-txertaketa, modu ireki batez, etengabeko hobekuntzak egiteko prest, eta poliziaren baliabideen eta jardueraren proportzionaltasuna eta egokitasuna aintzat hartuta. Segurtasun Batzordearen 2017ko ekainaren 14ko Akordioek berretsi dute eredu hori zein Ertzaintza, estatutuz, gure lurralde-eremuan polizia integraltzat hartua izatea.

Legearen bosgarren aldaketa honetan, zenbait eraberritze partzial egiten dira, herritarrei –zeinei kontuak eman behar baitzaizkie– zerbitzua ematearekin lotutako kontuak indartzeko joera dutenak, oro har.

Illo horretan, eraberritze honen bidez, sendotu nahi da zerbitzu polizialen txertaketa irekia, plurala, eta elebiduna den eta eskubideetan berdinak diren gizonezkoen eta emakumezkoen osatuta dagoen gizarte batean.

Gizarte ireki eta plural batean, Euskal Autonomia Erkidegoko Polisiaren misioa da eskubideen eta askatasunen defentsarekin eta horren babesarekin konpromiso aktiboa izatea. Horregatik lege honek bere egiten du, Euskal Autonomia Erkidegoko Polisiari aplikagarri zaion ordenamenduaren zati gisa, Europako Kontseiluaren Polisiaren Etikaren Kode Europarraren inguruko Gomendioa.

Gurea bezalako gizarte elebidun batean, eredu poliziala bi hizkuntza ofizialetan ematera zuzendu behar da, ahalbidetuz euskara zerbitzu-hizkuntza zein lan-hizkuntza izatea, bai eta euskal polizia herritarrek aukeratutako hizkuntza ofiziala egiteko gauza izatea ere. Era berean, behar diren neurriak hartu behar dira, emakumezkoen eta gizonezkoen aukera-berdintasuna benetan baliatzen dutela bermatzeko, betiere genero-ikuspuntua eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legean adierazitako printzipioak bere eginez (otsailaren 18ko 4/2005 Legea).

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziak –eta bereziki Ertzaintzak, polizia integrala den aldetik– aurre egin behar dio bizikidetzazko arazoek eta kriminalitatearen globalizazioak dakarten erronkari, eta prest egon behar du, halaber, behar beste foru estatal zein nazioartekoetan parte hartzeko, bere eginkizunak eta eskumenak eraginkortasunez garatu ahal izateko.

Orain arte azaldutako helmugei begira, eraberritze honen bidez, prozedura bizkorrak finkatu nahi dira zerbitzu polizialaren premiei ondo erantzuteko, funtzionarioen eskubideak bermatuz.

Halaber, zerbitzu polizialaren eraginkortasuna eta efikazia zaintzeko mekanismo egokiak jaso nahi dira, hain zuzen, ondoren azaltzen direnak.

II

Eredu poliziala indartzeari dagokionez, lege honek honako neurri hauek onartzen ditu:

a) Gure ordenamenduan Poliziaren Etikaren Kode Europarraren edukia jasotzen da, zeinak polizien jokabide-jarraibideak ez ezik, polizia-agintarienak ere finkatzen baititu, bai herritarrekiko harremanetan bai zerbitzuen barruko antolakundeari dagokionez, eta, horretarako, jarraibideak ezartzen ditu kontuak emateari buruzko atalean.

b) Zerbitzu poliziala ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak indartzen dira. Horretarako, poliziaren jardun onari lotutako pizgarri positiboaren sistema indartzen da, zenbait ordain-pizgarri sartuta, hala nola produktibitate-osagarri batzuk, jardunaren ebaluazioari lotutako karrera profesionaleko osagarriak, aparteko ordainsariak edo kondekorazioen eta sarien sistema. Era berean, diziplina-erregimena aldatzen da, barneko mekanismo eraginkor, proportzional, egoki eta justuak ezartzeko, betiere diziplina-ezaren kasu partikularretatik eta arrisku-faktoreetatik haratago joz, prestakuntzan edo prozeduran edo lan-giroan hobekuntzak egiteko orientazioa emateko helburuz.

c) Poliziaren eta herritarren arteko derrigorrezko interakzioa jasotzen da, kexak tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialarekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismorik gabe tratatuko dituztelako konfiantza izan dezaten.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea sortzen da, erakunde iraunkor hibrido gisa, autonomia funtzionala duena erakunde polizialarekiko, eta espezializatutako pertsonen osatuta, aditu polizialak barne. Batzordearen helburua da *Ertzaintzaren edo udaltzaingoaren baitako praktikak aztertzea, organo eskudunek eskatuta, baldin eta herritarrek haiei buruzko kexak badituzte edo eragina badute poliziarekiko duten konfiantzan. Gainera, poliziaren esku-hartze edo operatibo baten testuinguruan edo zaintza polizial bat bitartean pertsona bat hiltzen bada edo larriki lesionatuta suertatzen bada, ofizioz ikertuko ditu gorabehera horiek, eta zerbitzua hobetzeko neurriak proposatuko ditu.*

Ikertzen dituzten gertakizunak egiten ari den ikerketa penal baten xedea badira, agintari judizial eskudunari haren berri emango diote, ikerketa penalean esku ez hartzeko, ezta haren jardueren erreserban ere. Hala gertatuz gero, diligenza penalen ikergai diren agenteak ez dira Batzordeari laguntzera behartuta egongo, eta Batzordeak kasuarekin lotutako dokumentazio administratiboa eskuratu behar izanez gero edo ikuskapenak in situ egin behar izanez gero, aurretik kasuan diharduen agintari judizialaren onarpena lortu beharko du. Ez da batzorde horren eginkizuna izango, inola ere, agintarien edo langileen erantzukizuna banan-banan aztertzea.

Batzorde horren erregulazioak batzordekideen neutraltasuna eta independentzia babesten ditu, kideok kargugabetzeko kausak era tasatuan arautuz, ez daitezen zerbitzutik bereizi arbitrarioki, ikerketa bat gauzatzen ari denean. Batzordeari laguntzeko obligazioa jasotzen da, bi aukera emanez: funtzionario publikoek laguntzea, zerbitzu-eginkizunetan, batzordea ikerketak egiten ari denean; edo Ertzaintzaren Barne Arazoetarako Zerbitzuari eskatzea berak egin dezala ikerketa, eta Batzordeak zuzenean gainbegiratzea. Ezartzen da, gainera, batzordeak Eusko Legebiltzarrari bere jardueraren kontu eman beharko diola zuzenean.

III

Langileak hautatzeko eta haiek kidegoetan sartzeko sistemari dagokionez, hauek dira lege honen berrikuntzak:

a) Langileak hautatzeari eta haiek kidegoan sartzeari dagokionez, probetan onartua izateko baldintzak lege mailako arau baten bidez zehazten dira, eta ez orain arte bezala, erregelamendu bidez. Bestalde, hautaketa-organoetako arauak egokitzen dira, bi kontu hauek gogoan hartuta: organo horiek inpartzialak, profesionalak eta dena delako espezialitatekoak izatea, eta, funtzionario publikoen artean, orokorrean, gizon- eta emakume-kopuruari dagokionez oreka egotea. Era berean, deialdietako oinarrien arteko lotura egin dadila xedatzen da, eta orobat zehazten da zein kasutan izango den zilegi deialdi bateko lanpostu hutsen kopurua aldatzea edo akatsak zuzentzea, eskabideak aurkezteko beste eperik hasi gabe.

b) Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademia hautaketa-organo iraunkor gisa eratzen da, eta, gainera, aukera ematen da udaltzaingoan sartzeko hautaketa-prozedurak batera egiteko, toki-administrazioentzako entitateek beren borondatez hala eskatzen badiote.

c) Ekintza positiborako neurriak ezartzen dira emakumeak polizia-kidegoetan sartzeko eta polizia emakumeen kopurua handitzeko, gaur egun kopuru hori urria da-eta. Hala, bada, polizia-kidegoetako emakumeentzako lanbide-sustapeneko planak arautzen dira, kidegoetan sartzean eta lanbide-karreran berdintasuna bermaturik izan dezaten, dagokiena baino daukaten ordezkaritza urriago hori zuzentzeko, eta poliziaren eraginkortasuna handitzeko.

Nabarmentzekoak dira, berrikuntza dakarten aldetik, txanda libreko hautaketa-prozeduretarako emakumeen alde ezartzen diren ekintza positiboko neurriak, zenbait egoeratan emakumezko hautagaia gizonezkoaren gainetik hobestea ekarriko baitute, Europako Erkidegoetako jurisprudentziak lege-neurriei, proportzionaltasunari eta arrazoizkotasunari buruz ezartzen dituen eskakizunen kontra jo gabe.

Hala, bada, lege-mailako arau batean ezartzen da neurri hori. Arrazoizkoa da, mugatu egiten baitu txanda libreko sarbidea, eta diskriminazio egitatezko eta historiko bat arintzeko ez ezik, polizia-zerbitzua eraginkortasunez emateko emakumeen masa kritiko baten eskakizunari erantzuteko ere bada. Proportzionatua ere bada, lehentasuna modu subsidiarioan eta murriztuan aplikatzen delako, hautatutako emakumezko hautagaiaren eta bazter utzitako gizonezko

hautagaiaren arteko nolabaiteko gaitasun-baliokidetasuna ere bermatuz beti, lehentasuna aplikatzeko orduan. Eta, gainera, salbuespenezko neurria ere bada aldi baterako den aldetik, ez baita aplikatzen jarraituko, emakumeak dena delako kidego, eskala eta kategorian % 33 izatera iritsitakoan. Neurri horren xedea ez da sexuen arteko parekotasuna, baizik eta emakume-kopurua gutxienez masa kritiko jakin batera iristea (% 33).

IV

Barne-sustapen, karrera profesional eta lanpostuak betetzeari dagokienez, nobedade garrantzitsuak aurreikusten dira.

a) Karrera administratiboa bultzatzen da, barneko sustapenaren bidez. Horretarako, erraztu egiten da langileek erakundearen barruan gora egitea, goragoko kategorია batera igarotzeko zerbitzuan bete beharreko urte-kopurua gutxituz. Beste alde batetik, bertan behera uzten da barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga; muga horrek murriztu egiten baitzuen ibilbide administratiborako eskubidea, baita funtzionarioek probak gainditu bai, baina plazarik lortzen ez zuten kasuetan ere. Eta, azkenik, zerbitzu aktiboaren pareko administrazio-egoeretan dauden barneko sustapena ahalbidetzen da, sustapen profesionala izateko eskubidearen ondorioetarako.

b) Beste neurri batzuk ere ezartzen dira, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzearekin zerikusia dutenak, barne-sustapeneko prozeduretan aurkezteko aukera emanaz eszedentzia direnei, eszedentzia hartzeko arrazoia bada haurrak edo senitartekoak zaintzea, genero-bortizkeria edo zerbitzu bereziak. Era berean ezartzen da, ezen, barne-sustapenerako benetako zerbitzuetan emandako denbora kalkulatzeko aldera, *barne-sustapenean parte hartzea ahalbidetzen duten egoera administratiboetan emandako denboraldiak* kontuan hartuko direla.

c) *Lanpostuak lehiaketa bidez hornitzeari dagokionez, alderdi hauek bereizten dira: batetik, legearen arabera merezimendutzat jo daitezkeen alderdiak eta, bestetik, hornitu beharreko postuak berezko dituen ezaugarrien arabera merezimendutzat jo daitezkeenak. Gainera, lehiaketa-prozedurek eduki behar dituzten edukiak zehazten dira.*

d) Superintendente-kategoria kentzen da, eta, horrela, Ertzaintzaren erantzukizun goreneko postuak eskuratzea eta betetzea bizkortzen da, lanpostuak betetzeko prozedura arruntan bidez.

e) Karrera profesional horizontala arautzen da, lanpostua aldatu beharrik gabe garapen profesionalaren mailan aurrera egiteko aukera gisa ulertuta. Karrera profesional horizontaleko sistemak berarekin batera dakar aitortze-mekanismo bat ezartzea, kategorია bakoitzean aurreikusitako garapen profesionaleko maila desberdinetara urteetan zehar sartu ahal izateko, eta gaitasun profesionalak egiaztatzearen bitartez. Garapen profesionaleko mailaren arabera jasotzen da ala ez karrera profesionaleko osagarria, eta, hala badagokio, maila horrek lanpostu jakin batzuk betetzeko gaitzen du. Orain arte adierazitakoaren ondorioz, ordainketa-egitura aldatzen da, karrera profesionaleko osagarria ordainsari osagarrien artean sartzeko.

f) Espezialitateen erregimena arautzen da, ezagutza espezifikoak dituzten zereginetarako. Espezialitate horietan sartzeko, espezializatzeko ikastaro bat egin beharko da, eta titulazio edo ezagutza jakin batzuk eskatu ahal izango dira. Espezializatzeko jarraitzeko konpromisoa dakar berarekin batera, bai eta espezialitatean jarraitzeko gaurkotze-probak egitea ere, hala behar izanez gero. Halaber, lege honetan, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak eta segurtasun-arloan eskumena duen sailak deialdi bateratuak egiteko aukera jasotzen da; deialdiotan, espezializazio-ikastaro batean sartzea eta hura gainditzea lotuko da borondatezko zerbitzu eginkizunak berehala ematearekin, hutsik dauden lanpostu espezializatuetan.

V

Egoera administratiboei dagokienez, berrikuntzarik garrantzitsuenak dira poliziaren jardunari buruzko egokitzapenak, adinaren ondorioz egiten direnak, edo funtzio polizialaren berezko gaitasunak gerora galdu izatearen ondorioz, eta betiere funtzionarioen osasuna babesteko eskubidearekin bat etorrita.

Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa arautzen da, zeina honetan baitatza: zerbitzu aktiboan jarraitzean, agentearen egoerarako egokiak diren eginkizunak eginez. Administrazio bakoitzak, aurrez negoziazio kolektiboa eginda, ezarri ahalko du zer adin izan beharko duen funtzionarioak haren borondatez mota horretako zerbitzua aitortzeko eskatu ahal izateko, bai eta hura aitortzeak ekar litzakeen jardun polizialaren egokitzapenak ere.

Horrela, legezko estaldura ematen zaio lehendik zegoen arautzeari, Ertzaintzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen Hitzarmenaren arabera, eta udaltzaingoetan zabaltzeko aukera zabaltzen da, betiere zerbitzu poliziala ematen jarraituko dela bermatzen bada; udalak ezarriko du zerbitzu mota hori eskatzeko izan beharreko adina.

Lan polizial guztiak normaltasunez betetzeko gaitasun psikofisiko nahikorik ez dutelako bigarren jardueran aritzen diren polizien egoera administratiboari buruz ere arau berriak ezartzen dira; hala, bada, haien arabera, funtzionarioek beren benetako gaitasunetara egokitutako lanpostuak edo funtzioak bete beharko dituzte, aurreko araudietan ez bezala, hura premisa honetatik abiatzen baitzen: bigarren jardueran aritzen zirenek oinarritzko ordainsariak kobratzen zituzten, lanpostu bat betetzeko edo jarduera polizialak betetzeko deitzen zieten arte. Lege honetan, berriz, egoera administratibo horretara igarotzen diren funtzionarioek lan egiten jarraituko dute, hala aurreko lanpostuan —bigarren jardueran aritu ahal izanez gero—, nola bete dezaketen beste lanpostu batean; eta birkokapena berehala egin ezean, agentearen lanpostua bere premietara egokituko da aldi baterako.

Behin-behineko eginkizunen etenaldiari dagokionez, bi zehaztapen egiten dira egoera hauek ekartzen dituzten ondorioez: etenaldi hori irmo bilakatzen duen zehapen bat egonez gero edo, aitzitik, behin behineko etenaldia zehapenik gabe kenduz gero.

VI

Funtzionarioen banakako eskubideen erregimenari dagokionez, kapitulu berria sartzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoen babes sozialari buruzkoa, oinarritzkoa zein osagarria izan, eta bereziki kontuan hartuta administrazioek langileen baldintza psikofisikoak, laneko osasuna eta laneko arriskuen prebentzioa zaintzeko obligazioa dutela.

Lanean edo lanaren ondorioz sortutako gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologiak direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak izatera behartzen da.

Illo horretan, agenteen heriotza edo laneko ezintasunak direla-eta dauden eskubide osagarri horiei buruzko arau gehiago ezartzen dira, egoera horiek zerbitzu poliziala edo beren funtzioak betetzen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionario izatearen ondorioz gertatzen diren kasuetarako, ez baitaio lotzen agente polizialaren merituzko jokabidearen ebaluazioari.

Eta aurreneko aldiz jasotzen da kondekorazioak eta ohorezko sariak emateko erregimena, zerbitzu-ekintzan hildako funtzionarioak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ondorio ekonomikorik gabe eta ohore gisa igarotzeko aukera jasoz.

Ertzaintzako funtzionarioen ordezkaritza eta partaidetza dagokienez, argitu egiten da Ertzaintzaren Kontseiluak izan beharreko esku-hartzea diziiplina-prozeduretan eta birgaitze-espedienteetan, bai eta kondekorazio-erregimena aplikatzean ere.

VII

Diziiplina-erregimenerako ezartzen diren aldaketen helburuak dira polizien erregimena enplegatu publikoenera gerturatzea, zehapen-araubidea leuntzea eta espedientatutako pertsonen bermeak handitzea.

Sexu-jazarpenarekin eta laneko jazarpen errepikatuarekin zerikusia duten falta berriak sartzen dira, oso larriak, bai eta polizia-bideokameren erabilpenari eginiko arau-haustea ere; halaber, beste era batez idazten da polizia izatetik abantaila ateratzeari buruzko faltaz eta funtzioak nabarmen bete ez izanaz, enplegatu publikoen arau orokorrekin bat etorritik.

Arindu egiten da ezarri beharreko zehapen-multzoa, eta, hala, falta arinagatik ezartzen den eginkizun-etenaldirik luzeena 4 egunekoa da, 5 egunekoa izan beharrean; falta larriarengatik, urtebetekoa (lehen, 2 urtekoa zen); eta oso falta larriengatik eginkizun-etenaldia, berriz, gutxieneko graduan zehatzen da: urte bete eta egun bat.

Zehapena graduatzeko irizpideen artean, curriculum profesionala zirkunstantzia aringarritzat jotzen da, berriz egin izanaren kontzeptua larrigarria izatea mugatzen da, eta, delitua dela-eta

izandako falten kasuan, berariaz baloratzen da ezarritako zigorraren zenbatekoa edo entitatea epai irmoaren arabera, bai eta delituzko jokabidea eginkizun polizialekin duen harremana ere.

Espedientatutako pertsonen bermeak indartzen dira, deklarazioak ez egiteko dituzten eskubideei dagokionez, bai eta beren buruaren kontra ez egiteko, beren burua erruduntzat ez jotzeko eta errugabetasun-presuntzioa izateko, bai eta prozeduraren izapideen egoeraren berri izateko eskubideei dagokionez ere. Defentsa-eskubideari dagokionez, espedientatutako pertsonen beren konfiantzazko jarduneko abokatu baten, sindikatueta ordezkar baten edo kidego polizialeko funtzionario baten aholkularitza eta laguntza izateko aukera bermatzen zaie, eta ezartzen da, baita ere, agintariak erraztasunak emango dizkietela izendatutako funtzionarioei espedientatutako pertsonaren agerraldi pertsonaletan egon daitezten.

Orobat, prozeduraren erregimena eta iraungitze-epea arautzen dira, eta falta eta zehapen oso larrien preskripzio-epea gutxitzen da 6 urtetik 3ra; aitzitik, legeak preskribatzeko epea zabaldu egiten da, hilabete 1etik 3 hilabetera.

Zehapenen bete beharra jasotzen da, bai eta zehapena eten beharreko edo baldintzapean kentzeko kasuak ere, horrela jokatzeko motiboak daudenean. Zehatutako pertsonari albait kalterik txikiena eginda beteko dira zehapenak; horrela, bada, aurreikusten da zehapena baldintzapean kentzea, baldin eta zehatutako pertsonak zehapena betetzeko hautazko neurri gisa hartzen badu lanalditik kanpo lan egitea, soldatarik edo inolako konpentsaziorik gabe, jarritako zehapen-aldia bitartean.

VIII

Ertzaintzako funtzionarioei eta haien egitura profesionalari buruzko titulu espezifikoari dagokionez, aldaketa hauek sartzen dira:

a) Superintendente-kategoria desagertzen da; hala, eskala eta kategoria horretan sartutako plazen eginkizunak lanpostu jakin batzuetan bereizten dira, eta hark lanpostu horietara sartzen laguntzen du, betiere lanpostuaren baldintzak lanpostuak betetzeko ohiko sistemen bidez betetzen badira.

b) Berridatzi egiten da Ertzaintzak polizia judizial gisa duen eginkizunaren antolakunde-egiturari buruzko erregulazioa; izan ere, indarrean zegoen testuan Botere Judizialaren Lege Organikoaren arau jakin batzuetara jotzen zen, bidalketa horiek zaharkituta geratu baitziren.

IX

Udaltzaingoari dagokionez, eraberritze honek homologagarriak diren lanbide-egiturak sendotzen ditu, eta, aldi berean, udal bakoitzari uzten dio bere beharrian eta berezitasunei egokitutako antolakuntza-konponbideak aurkitzen.

Horrela, bada, dauden jardunbideei erantzun juridikoa emateko, askotariko neurriak aurreikusten dira, esaterako, udaltzaingoak udalerritik kanpo jarduteko aukera, tokiko agintariak babesteko funtzioak gauzatzeko, eta abar...

Begi-bistakoa da udalek bitarteko funtzionarioak izendatzen dituztela, lanean ari diren langileek betetzen ez dituzten premia larriei erantzuna emateko. Jardunbide hori Auzitegi Gorenak abalatu du, historikoki, bere jurisprudentziaren bidez, baina arazo bat planteatzen du: bitarteko funtzionarioen obligazioak eta eginbeharrak ordezkatzeko dituzten karrerako funtzionarioen obligazioen eta eginbeharren parekoak badira ere, orain arte ez zegoen mekanismorik behar zen prestakuntza emateko. Horregatik ezartzen da, hain zuzen, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak lan-poltsak osatu ahal izatea berak antolatutako oinarritzko ikastaroak gainditzen dituzten pertsonekin, haien bitartez toki-korporazioen eskariei erantzuteko eta bitarteko funtzionarioei prestakuntza emateko.

Beste alde batetik, udaltzaingoko lanbide-egitura Ertzaintzakoa bezalatsu jasotzen da. Berezi, udaltzaingoko buruei dagozkien kategoriak zehazten dira, biztanleriaren arabera edota kidegoa osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera. Hori kontuan hartuz, lege-proiektuak udaltzaingoko langileak eskala berrietan sartzeko arautzen du, bai eta udaltzaingoko kidegoetako buruzagitza-postuen egokitzapena ere.

Azkenik, aguazilaren figura arautzen da udaltzaingoa ez duten udalerrietarako; eta mugikortasun-agenteara, zirkulazioa arautzeko hirigunean.

Artikulu bakarra.- Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea aldatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legea aldatzen da, honela aldatu ere:

Lehen. I. tituluko II. kapitulua honela geratzen da:

“ II. kapitulua.- Poliziaren jarduna kontrolatzeko mekanismoak.

6. artikulua.-

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia erantzule da herritarren aurrean bere jardueren zuzentasunaz eta efikaziaz, lege honetan aurreikusitako mekanismoen bidez, bai eta administrazio-jarduerarako dauden kontrol jurisdikzionalaren zein kontrol parlamentarioaren bidez ere.

2. Kexak tratatzeko eta ustezko jardunbide txarrak ikertzeko prozedura eraginkorrak eta inpartzialak ezarriko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak mende dituzten administrazio publikoek; prozedura horiek erantzukizuna erraztuko dute, eta herritarren eta poliziaren arteko komunikazioan eta elkar ulertzean oinarrituko dira.

3. Polizia-etxeetan, kexa-prozedurari buruzko informazioa erakutsi behar da, batez ere atxilotuta guneetan, eta atxilotuta egon diren pertsona guztiei emango zaie hari buruzko informazioa, behin aske utzi ondoren.

7. artikulua.-

1. Herritarrek Ekinbiden aurkeztu ahalko dituzte zerbitzu polizialen funtzionamenduari buruzko kexak, alegia, Segurtasun publikoaren sistema hobetzeko herritarren ekimenen Bulegoan; nolana ere, tokiko administrazioetan beren zerbitzuei buruzko kexak aurkezteko mekanismoetara ere jo ahalko dute.

2. Ekinbiden Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoei buruz jasotako kexak tokiko agintariei bidaliko zaizkie, izapidetu ditzaten. Dena den, udalek Ekinbideri eskatu ahalko diote berak tratatu ditzan beren kidego polizialen jardunbideari buruzko kexak.

8. artikulua.-

1. Gatazkak konpontzeko metodo alternatiboak arbitratu ahalko dira, bitartekaritza, esaterako; betiere metodook gatazkak konpontzeko eraginkorragoak badira, eta aldeek onartuak.

2. Ez dira baliatuko metodo alternatibo informal horiek, zigor- edo diziiplina-arloko gaitzespena merezi ahal dituzten jokabideengatik aurkeztu badira kexak.

9. artikulua.-

1. Ekinbidek aurkeztutako kexen segimendua egingo du, errepikatzen diren elementuak dauden aztertzeko eta elementu horien kausak ikertzeko.

2. Publizitatea emango zaie Ekinbidek kexei buruz egindako ebazpen-txostenei, datu pertsonalen edo legez konfidentzialtasuna edo erreserba gorde behar duten bestelako datuen konfidentzialtasuna errespetatuz.

3. Kexak tratatzeko sistemaren emaitzak Ekinbidek Legebiltzarrean aurkezten duen urteko memorian sartuko dira, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeke Legean ezarritakoaren arabera.

10. artikulua.-

1. *Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea* sortzen da, *organo kolegiatu gisa, eta autonomia funtzionala duena erakunde polizialarekiko eta Eusko Jaurlaritzan segurtasun-gaietan eskumena duen sailarekiko. Haren eginkizuna da jardun polizialaren gaineko kontrolen legimititatea indartzea, bai eta kontrol horien neutraltasunean eta objektibotasunean herritarrek duten konfiantza indartzea ere.*

2. *Hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordearen eginkizunak:*

a) *Ertzaintzaren barruko zenbait jokabide edo jardunbide ikertzea, segurtasun-gaietan eskumena duen sailburuak edo udal-agintari eskudunak eskatuta, baldin eta kexak jaso badira haien inguruan eta kezka handia badago herritarrek polizian duten konfiantzan izandako inaktuarengatik.*

b) *Poliziaren esku-hartze edo operatibo baten testuinguruan edo zaintza polizial baten barruan norbait hiltzen bada edo larriki lesionatuta suertatzen bada, nahitaez, ofizioz ikertuko ditu gorabehera horiek. Ertzaintzak edo udaltzaingoak berehala jakinarazi beharko diote hori gertatu dela Batzordeari.*

c) *Aurreko eginkizunak gauzatzekoan egindako ikerketak ikusita, jardunbide onak gomendatu beharko ditu; poliziaren kode deontologikoarekin bat ez datozen jokabide-patroiak edo jardunbideak identifikatu, eta neurri zuzentzaileak edo prebentiboak proposatuko ditu.*

3. *Aztertzen ari den jardunbide poliziala agindu edo manatu judizialak betetzearen ondorio denean, Batzordeak ez ditu haiek aztertuko; nolana ere, aztertu ahalko du nola gauzatzen diren, horri dagokionez poliziak erabakitzeke marjina duen neurrian.*

11. artikulua.-

1. *Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea batzordeburuak eta Gobernu Kontseiluak dekretu bidez izendatutako beste bost lagunek osatuko dute, zeinek segurtasun publikoa, zuzenbidea, soziologia, psikologia eta etika bezalako arloetan aitortutako izena, kaudimena eta esperientzia izan beharko baitute.*

Kideen erdiak A sailkapen-taldeko Ertzaintzako eskaletan eta kategorietan izan diren edo dauden pertsonen artean aukeratuko dira. Gutxienez, hamabost urteko esperientzia izan beharko dute kidegoan.

2. Izendapena bost urtetarako izango da, berau argitaratzen den egunetik kontatzen hasita, eta berriz izendatu ahalko dira, iraupen bereko denboraldietarako.

3. Arrazoi hauek direla medio baino ez dute kargua utziko: hilez gero; agintaldia amaituz gero; karguari uko eginez gero, idazki formalizatu baten bidez; batzordeko gehiengoak ulertuz gero larriki hautsi direla abstentzio eta isiltasuneko betebeharrak; epai irmo baten bidez baliaezintasuna aitortuz gero edo epai irmo baten bidez doluzko delituarengatik zigorra egonez gero.

4. Batzordeko kideek ez dute inolako ordainsaririk jasoko beren lanen truke. Nolanahi ere, zerbitzu-arrazoiengatik kalte-ordainak kobratu ahal izango dituzte.

12. artikulua.-

1. Batzordeak esku hartuko du, segurtasun-eskumenak dituen sailak edo dagokion udal-agintariak eskatuta, eta ofizioz jokatu da soilik legeak berariaz aurreikusitako kasuetan.

2. Batzordeko kideek berek gauzatuko dituzte Batzordearen jardunbideak, eta, hala badagokio, ikerketa jakin batzuk egiteko, zerbitzu-eginkizunetan diharduten funtzionarioen laguntza eskatu ahalko dute. Kasu horietan, ez dute jaso beharko jatorri-destinoko agintariek emandako agindurik.

Era berean, Batzordeak eskatu ahalko die ikerketa egiteko Ertzaintzaren barne-kontuetarako zerbitzuei, eta batzordeak berak gainbegiratuko du ikerketa hori zuzenean.

3. Segurtasun-arloko eskumena duen sailak –edo, hala badagokio, tokiko agintari eskudunak– erraztu beharko dio Batzordeari instalazio polizialetan sartzea, bai eta ikerketa bideratu aurretik behar diren datu, dokumentu, datu-base eta artxibo polizial guztiak eskuratzea ere. Funtzionario polizial guztiak ikerketan laguntzera behartuta daude, zitzazioetara joanda eta behar diren datuak eta informazioa emanda.

4. Batzordeak ikertzen dituen gertakizunak abian den ikerketa penal batenak badira, agintaritza judizial eskudunari emango dio horren berri, ez ikerketa penalean ez eta jardunbideen erreserban ere ez interferitzeko.

Hala gertatuz gero, diligentzia penalen ikergai diren agenteak ez dira Batzordeari laguntzera behartuta egongo, eta Batzordeak kasuarekin lotutako dokumentazio administratiboa eskuratu behar izanez gero edo ikuskapenak in situ egin behar izanez gero, aurretik kasuan diharduen agintari judizialaren onarpena lortu beharko du.

5. Edozein unetan, Batzordeak antzematen badu ez-zilegi penala edo administratiboa egon daitekeela, haren berri emango die agintari eskudunei.

13. artikulua.-

Ikerketa amaituta, Batzordeak txosten bat emango du, non hau guztia jasoko baitu laburbilduta: kasuaren gorabeherak; egindako jarduerak; jarduera polizialaren zuzentasunaren ebaluazioa, indarrean dauden arauak, estandarrei, prozedurei eta protokoloari jarraituz; eta azpian dauden arazoak azterketa. Horrez gain, gomendio bat ere idatziko du, zeinean, hala badagokio, neurri zuzentzaileak, prebentiboak edo hobetzekoak proposatu ahalko baititu, hutsuneei aurre egiteko edo atzemandako arazoak errepikatzea saihesteko.

14. artikulua.-

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeari buruzko publikitatea eta zabalkundea egingo da, haren izatearen, funtzioen, funtzionamenduaren eta lanaren berri emanez.

2. Batzordeak bere jarduerari buruzko txosten bat egingo du, bi urterik behin, eta Eusko Legebiltzarrari bidaliko zaio."

Bi. Hau da 17. artikuluko d) letraren testu berria:

"d) Diziplina-espedienteen ebatzi-proposamenei buruzko txostenak egitea, zerbitzuetatik bereizteko zigorra proposatzen denean, eta egotzitako gertakariak izan zirenean sindikatuak ordezkatzen edo delegatuak zirenen kontra izapidetzen diren guztietan.

Era berean, funtzionarioak birgaitzeko espedientei dagokienez duen iritzia jasotzea.

Hiru. Hau da 17. artikuluko i) letraren testu berria:

"i) Aldizka jasotzea informazioa, Ertzaintzako langileei merezimendu polizialagatikoa dominak eman izanaz edo 80. artikuluan aurreikusitako ohorezko maila-igoeraz."

Lau. 4. paragrafoa erantsen zaio 27. artikuluari, eta honela geratzen da:

«4. Toki-korporazioetako agintariak babesteko funtzioak betetzen dituztenean, dagokien udalerritik kanpo jardun ahal izango dute, segurtasun-arloan eskumena duen Sailaren baimena izanez gero. Baimen hori orokorra eta iraunkorra izango da, hala emanez gero."

Bost. 2. paragrafoa erantsen zaio 28. artikuluari, eta honela geratzen da:

«2. Agintariek eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileek jokatu behar dute kode honen printzipioak eta Europako Kontseiluaren Poliziaren Etikaren Kode

Europarraren inguruko Gomendioan ezarritakoa betez eta printzipio horien edozein urraketaen kontra."

Sei. Kendu egiten da 30. artikulua 3. paragrafoa.

Zazpi. 30 bis artikulua erantsen zaio, eta honela geratzen da:

"30 bis artikulua.

1. Honela jokatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileek herritarrekiko harremanetan:

a) Tratu zuzena eta zaindua emango diete, enpatiaz jokatzuz, eta laguntza emango diete arriskua eta babesgabetasuna saihesteko berehala jarduteko eskatzen duten egoeretan.

b) Inpartzialtasunaren printzipioaren arabera jokatuko dute, ekitatiboki esku hartuz eta era berean errespetatuz norbanako edo talde guztiak, haien tradizioak, sinesmenak edo bizimoduak, betiere legeekin bateragarriak badira eta ez badute herritarren segurtasuna nahasten.

c) Edozein diskriminazio saihestuko dute, arraza, etnia, erlijioa, sinesmenak, sexua, orientabide sexuala, adina, ideologia, ezintasuna edo beste edozein arrazoi direla medio.

d) Hala behar izanez gero, eta beren jarduketekin zerikusia duten pertsonak hala eskatzen badiete, poliziak direla egiaztatu beharko dute. Herritarren aurrean identifikatuko dira, edozein jarduera polizial hasi aurretik, eta egiaztatuko dute herritarrek poliziak direla antzeman dutela. Horretarako, zerbitzua ematen ari diren bitartean, erregelamenduaren arabera uniforme jantzita badaramate, uniformearen leku ikusgarri batean, agente bakoitzari dagokion identifikazio pertsonala eramango dute. Erabilitako identifikatzaile pertsonalen erregistro bat egongo da, hura daraman pertsonaren identitatea ezagutu ahal izateko.

e) Beren esku-hartzeek ukitzen dituzten pertsonen esku-hartze horiei buruzko behar beste informazio emango diete; informazioak ulergarriak izan beharko du, eta bereziki zainduko dituzte delituen biktimak eta bereziki ahulak diren kolektiboko kideak.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziak aintzat hartuko ditu Euskararen Erabilpena arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean aitortutako hizkuntza-eskubideak, herritarrekin erlazionatzen direnean. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazioak ahaleginduko dira beren zerbitzura aritzen diren langileak behar bezala gaitzen gizarte elebidun batean zerbitzua emateko, eta, horretarako, behar diren neurriak hartuko dituzte eta kidego horietan

euskara erabilia izan dadila sustatuko dute. Nolanahi ere, herritarrak zein hizkuntza aukeratu, horrexetan artatuko dute.

3. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazioak ahaleginduko dira beren langileak sentikortzen eta gaitzen, herritarren aniztasuna kudeatzen, bai eta desberdinak diren pertsonen kontra, desberdinak izateagatik, herrak eta diskriminazioak eragindako arau-hausteen kontrako borrokan ere.

Zortzi. - Hau da 40. artikuluaen testu berria:

“40. artikulua.

1. Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak sustatuko du administrazio eskudunak baliozko ditzala beren mendeko zentroetan jasotzen diren ikasketak. Horretarako, Akademia ahaleginduko da hezkuntzako administrazioaren eskakizunetara egokitzen ikasketa horien izaera eta iraupena eta ikasketa bakoitza egiteko eskatzen diren titulazioak; gainera, hezkuntzako administrazioaren, Unibertsitatearen, Botere Judizialaren eta ikaskuntzarako bereziki lagungarri izan daitezkeen beste erakunde, zentro edo ikastetxeren lankidetzat lortzea ere sustatuko du.

2. Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak, bertan egiteko eskaintzen dituen ikastaroetan, ikasgai jakin batzuk baliozkotu ahal izango dizkie horiek lehenago gainditu izana egiaztatzen dutenei, erregelamenduz zehazten den eran.”

Bederatzi. Hau da 43. artikuluaen testu berria:

“43. artikulua

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoek behar diren espezialitateak izango dituzte, ezagutza espezifiko batzuen maila jakin bat izatea eskatzen duten lan jakin batzuk egiteko. Espezialitate horietan sartzeko, kasuan kasuko espezializatzeko-ikastaroa gainditu beharko da, eta, hala badagokio, kasu bakoitzean ezartzen diren titulazioak edo ezagutzak eduki beharko dira.

2. Espezialitate desberdinetako langileei espezialitate horietan jarraitzeko konpromisoa emateko eskatu ahalko zaie, bai eta aldizka gaurkotzeko hautaketa-probak gainditzeko ere.

3. Erregelamendu bidez zehaztuko dira espezialitateak, haien definizioa, haietan sartzeko, bertan jarraitzeko eta espezialitateak uzteko betekizunak eta baldintzak, bai eta haien arteko bateragarritasuna ere.”

Hamar. Hau da 47. artikulua 2. paragrafoa c) letraren testu berria:

“c) Probak, gai-sorta eta, hala badagokio, merezimenduen zerrenda, bai eta ebaluatzen irizpideak eta arauak ere.”

Hamaika. 5. paragrafoa erantsen zaio 47. artikuluari, eta honela geratzen da:

«5. Deialdiaren oinarriek lotu egingo dituzte Administrazioa, hautaketa-sistema epaitzeko eginkizuna duten epaimahaiak eta hautaketa-prozesuan parte hartzen duten izangaia.

Deialdiak edo haren oinarriak, behin argitaratu ondoren, administrazio prozedura erkidea arautzen duten arauetara hertsiki loturik baino ezin izango dira aldatu. Deialdian eskaintzen diren lanpostu hutsen kopurua aldatu nahi denean edo akats materialak edo egitezkoak zuzendu nahi direnean, ez da nahitaezkoa izango eskabideak aurkezteko beste epe bat hastera”.

Hamabi. Hamaika.47 bis artikulua erantsen da, eta honela geratzen da:

“47 bis artikulua.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazioek bermatuko dute Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako aurreikuspenak aplikatuko direla kidego horietako lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko hautaketa-prozesuetan, segurtasuneko zerbitzu publikoan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua sustatuz.

2. Polizia-kidegoetan emakumeen presentzia sustatzeko planak egingo dira, kidegoetan sartzeko orduan eta lanbide-karreran emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bermatzearren.

Plan horiek ezarriko dute, dagokion plangintza-aldirako, emakumearen ordezkariak eskasa zuzentzeko nahiz polizia-eraginkortasuna handitzeko plantillan lortu nahi den emakume-portzentajea, bai eta polizia-eraginkortasuna handitzeko neurriak ere; orobat, emakumeen aldeko berariazko neurriak ezarri ahal izango dituzte, egitateko desberdintasun nabariak zuzentzeko, oraindik ere baldin badaude.

Neurri horiek bidezkoak eta neurritzkoak izan beharko dute lortu nahi den helburuaren aldean.

3. Hautaketa-prozeduretako sailkapenean puntuazioan berdindutako gertatuz gero, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpideen arabera ebartzeko dira berdintzeak, lege horretan aurreikusitako kasuetan.

4. *Poliziako agentearen eta komisario-ondokoaren kategorietan txanda irekiaren arabera sartzeko hautaketa-prozeduretan, emakumeek zenbat plaza bete behar dituzten zehaztu behar da, segurtasunaren zerbitzu publikoan emakumeen eta gizonen presentzia orekatzeko xedea iriste aldera sustapen-planean aurreikusitakoari jarraituz.*

Plaza-kopuru hori, beraz, iritsi nahi den helburuaren arabera proportzioan eskainiko da, eta ezingo da izan deialdian eskainitakoen % 40 baino gehiago; halaber, ezingo da izan emakumeak sustatzeko planei eta hautaketa-prozeduretan parte hartzen duten eta prozedura gainditzten duten emakumeen estatistika-datu historikoei jarraituz arrazoiz ezarritako portzentajea baino txikiagoa.

Oro har, emakumeen aldeko sustapen-plan horiek ezartzen ez diren artean, gutxienerako portzentajea ezingo da izan % 25 baino txikiagoa, betiere hiru plaza baino gehiagorako deialdia egiten bada.

5. *Aurreko paragrafoan aipatzen diren hautaketa-prozeduretan, deialdian eskainitako lanpostu hutsak esleitzeko orduan, izangaien behin betiko zerrenda bakarrari jarraituko zaio, hain zuzen ere, zerrenda horretan ageri den puntuazio-hurrenkerari eta berdintzeak ebazteko lege ezarritako irizpideei jarraituz.*

Aurreko paragrafoan xedetzat aipatzen den portzentajea ez bada iristen goragoko paragrafoan xedatutakoari jarraituz, emakumezko hautagaiak lehenetsiko dira xedera iritsi artean, betiere:

a) Hautaketa-sistemako oposizio-aldiko probak eta ariketak gainditu izanak gaitasunean baliokidetasuna badakar.

b) Lehentasun hori aplikatuz hautatzen diren emakumezko hautagaien eta atzera geratzen diren gizonezkoen arteko puntuazioaren arteko aldea ez bada % 15 baino handiagoa, ez oposizio-aldian, ez eta, hala behar balitz, lehiaketa-aldian ere –betiere hautaketa-sistemaren arabera.

c) Beste hautagaiari ez badio eragiten neurri hori ez aplikatzeko legeko ezein salbuespenek, nahiz eta sexua dela-eta diskriminaziorik eragiten ez dutenen artekoak izan, hala nola enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetakoak izatea.

6. *Aurreko atalean aipatzen den lehentasun hori aplikatzeko, beharrezkoa izango da hautaketa-prozesuaren deialdian eskaintzen diren lanpostuei dagozkien kidego, eskala eta kategorietan emakumezko funtzionarioak % 33ra ez iritea.”*

Hamahiru. Hau da 48. artikulua testu berria:

“48. artikulua

1. Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak hautaketa-organo iraunkor espezializatu gisa jarduten du Ertzaintzaren hautaketa-prozesuetan, eta udaltzaingoen hautaketa-prozesuetan toki-administrazioek eskatzen diotenean.

Toki-administrazioetako epaimahai edo hautaketa-organo bakoitzean, organo iraunkorrak izan ala ez, Poliziaren eta Larrialdietako Euskal Akademiak izendatutako ordezkari bat egongo da, eta ordezkari horrek bere izenean jardungo du.

2. Epaimahaiek garatu eta ebaluatuko dituzte hautaketa-sistema osatzen duten probak, eta, zeregin horretan, autonomia funtzional osoz jardungo dute; prozeduraren objetibotasunaren erantzule izango dira, eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko dute.

3. Epaimahaiek edo hautaketa-organoek kide anitzekoak izan behar dute, eta inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-printzipioetara egokituta osatu behar dira, bai eta emakume eta gizonen ordezkaritza orekatura egokituta ere.

4. Inpartzialtasun-printzipioaren arabera:

a) Epaimahaikide edo hautaketa-organoetako kide norbere izenean izan beharko da, eta ez inor ordeztuz edo inoren izenean.

b) Hauek guztiak ezin izango dira hautaketa-epaimahaikide izan: hautaketa edo izendapen politikoko langileak, behin-behineko langileak, bitarteko funtzionarioak edo aldi baterako lan-kontratadun langileak, ezta azken bost urteotan enplegu publikoan sartu nahi zuten hautagaiak prestatzen ibili direnak ere.

c) Hautaketa-epaimahaikideek eta hautaketa-organoetako kideek ezin izango dute parte hartu arrazoi pertsonal edo profesionalengatik, edo bestelakoengatik, haien inpartzialtasuna zalantzan egon daitekeen kasuetan, ez eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitako gainerako egoeretan ere.

5. Espezialitate-printzipioaren arabera, boto-eskubidea duten kide guztiek lanpostua eskuratzeko behar den ikasketa-maila bereko edo goragoko titulazioa izan beharko dute, eta, erdiek, gutxienez, ezagutza-alor berekoa.

6. Gizonen eta emakumeen arteko ordezkaritza orekatuaren printzipioari jarraikiz, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza aproposa duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango da, hori ezinezkoa dela justifikatzen denean izan ezik. Lau kidetik gorako hautaketa-organoei dagokienez, honako hau jotzen da ordezkaritza

orekatutzat: sexuatariko bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza izatea; gainontzekoetan, sexu biak ordezkatuta egotea.

7. Epaimahaiak aholkulari-espezialisten lanaz baliatu ahal izango dira beren lanetan, hautaketa-sistemaren proba guztietarako edo batzuetarako. Aholkulari-espezialista horiek beren aholkularitza eta laguntza teknikoa ematera mugatuko dira beren espezialitateetan jardutean. Aholkulari horien jardunak ere objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioen arabera izan beharko du.

Hamalau. Hau da 50. artikulua-ren testu berria:

«1. Eusko Jaurlaritzak, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak proposatuta, toki-administrazioaren mendeko polizia-kidegoetako eskala eta kategorietan sartzeko oinarriko arauak ezarriko ditu, zeinok Ertzaintzan beste horien baliokide diren eskala eta kategorietarako ezarritako antzeko irizpideei egokituko zaizkie.

2. Toki-erakundeek eskatu ahalko diote Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari, hark aurretik onartzen badu, udaltzaingoa sartzeko hautaketa-prozedurak batera gauzatzeko, bai eta, hala badagokio, aguazilen edo mugikortasun-agenteen kidegoetan sartzeko ere. Eskaera hori eginez gero, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak berak egingo ditu hautaketa-prozedura horiek».

Hamabost. Artikulu berri bat gehitzen zaio III. tituluko V. kapituluaren 3. atalari, 55 bis artikulua; eta honela geratzen da:

“55 bis artikulua.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako kidegoetako funtzionarioak izateko txanda libreko hautaketa-probetan onartua izateko, euskal enplegu publikoa arautzen duten legeetan aurreikusitako betekizunak bete beharko dira, berezitasun hauekin:

a) 18 urte beteta izatea. Agente-kategorian sartzeko, 35 urte beteta ez izatea; nolanahi ere, udaltzaingoko kidegoetan sartzeko, gehieneko adinaren muga udaltzaingoko kidegoetan emandako zerbitzuekin konpentsatu ahal izango da.

b) Ez izatea dolozko delituagatik kondenatua, herri-administrazio baten zerbitzutik bereizia edo funtzio publikoak egiteko ezgaitua, hargatik eragotzi gabe birgaitua izateko aukera, arau penalen eta administratiboen arabera.

c) Sartu beharreko kategorian eskatu behar den titulazioa izatea.

- d) Erregelamenduz ezartzen diren medikuntzako bazterketen taulan ez egotea.
 - e) Erregelamenduz ezartzen den gutxieneko garaiera izatea; emakumeentzat eta gizonezkoentzat ezberdina izango da.
 - f) Aitormenaren bidez armak eramatearen konpromisoa ematea eta hala badagokio erabiltzea.
 - g) Deialdi bakoitzean zehazten den gidabaimen mota edukitzea.
 - h) Bestelako eginkizun espezifikoak, deialdian aurreikusitako bete beharreko eginkizunekin eta lanekin harreman objektiboa dutenak.
2. Aipatutako baldintzak, beraz, eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik bete beharko dira, g) letrakoa izan ezik, deialdi bakoitzean zehaztutako egunerako eduki beharko baita.
3. Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoetako eskala eta kategorietan barne-sustapenez sartzeko hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da lege honetako 59. artikuluan ezarritako eskakizunak betetzea.

Hamasei. Hau da 56. artikulua 4. paragrafoaren testu berria:

4. Komisario- eta intendente-kategorietan barne-sustapenaren bidez sartuko da, oposizio-, lehiaketa- edo oposizio eta lehiaketa-sistemen bidez.”

Hamazazpi. Hau da 59. artikulua 1. paragrafoaren testu berria:

“1.- Barne-sustapenean lehiatu ahal izateko, funtzionarioek baldintza hauek bete beharko dituzte, kategoria bakoitzean sartzeko ezarritako baldintzez gain:

- a) Agente lehenen kategorian sartzeko, agente-kategorian jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan izatea; kategoria horretan bi urtez egiazko zerbitzuetan jardun izana eta batzordeak zehapenik ezarri ez izana hutsegite larriagatik edo oso hutsegite larriagatik, edo zehapenik ezarri bada, zehapen hori baliogabetuta egotea.
- b) Ofizialorde eta ofizialen kategorietan sartzeko, dagokion eskalan beheragoko hurreneko kategorian jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan izatea, zeina agente lehenarena izango baita ofizialorde-plaza hutsak bete nahi direnean; kategoria horretan hiru urtez egiazko zerbitzuetan jardun izana eta batzordeak zehapenik ezarri ez izana hutsegite larriagatik edo oso hutsegite larriagatik, edo zehapenik ezarri izan bada, zehapen hori baliogabetuta egotea.

c) *Komisario eta komisariordeen kategorietan sartzeko, dagokion eskalan beheragoko hurreneko kategorian jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan izatea, zeina ofizialarena izango baita komisariorde-plaza hutsak bete nahi direnean; kategoria horretan hiru urtez egiazko zerbitzuetan jardun izana eta batzordeak zehapenik ezarri ez izana hutsegite larriagatik edo oso hutsegite larriagatik, edo zehapenik ezarri izan bada, zehapen hori baliogabetuta egotea.*

"d) *Intendenteen kategorian sartzeko, dagokion eskalan beheragoko hurreneko kategorian jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan izatea; kategoria horretan lanean lau urtez egiazko zerbitzuetan jardun izana eta batzordeak zehapenik ezarri ez izana hutsegite larriagatik edo oso hutsegite larriagatik, edo zehapenik ezarri izan baldin bada, zehapen hori baliogabetuta egotea.*

e) *Ertzaintzaren medikuen eta teknikarien kidegoan sartzeko, agente-kategorian jarduneko zerbitzuan izatea kidegoko bestelako eskalaren batean; kategoria horretan bi urtez egiazko zerbitzuetan jardun izana eta batzordeak zehapenik ezarri ez izana hutsegite larriagatik edo oso hutsegite larriagatik, edo zehapenik ezarri bada, zehapen hori baliogabetuta egotea.*

Hamazortzi. Hau da 59. artikulua 3. paragrafoaren testu berria:

«3. Seme-alabak edo senitartekoak zaintzeko eszedentzian edo genero-bortizkeriari dagokion eszedentzian diren funtzionarioek ere parte hartu ahal izango dute barne-sustapeneko txandan.»

Hemeretzi. Hau da 59. artikulua 4. paragrafoaren testu berria:

«4. Jatorri-kategorian benetako zerbitzuetan emandako denbora zenbatze aldera, barne-sustapenean sartzea ahalbidetzen duten administrazio-egoeretan emandako denboraldiari gehituko zaio kategorian sartu aurretik betetako praktikaldian emandako denbora, betiere baldin eta hautaketa-prozesua gainditu bada.»

Hogei. Hau da 61. artikulua 1. paragrafoaren testu berria:

«1. Funtzionario-izaera euskal administrazio publikoetako enplegatuei aplikatzen zaizkien lege orokorretan aurreikusitako arrazoiengatik galduko da.»

Hogeita bat. Hau da 62. artikulua 1. paragrafoaren testu berria:

“62. artikulua.-

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioen erretiroa euskal enplegu publikoa arautzen duten legeetan aurreikusitako eran egiten da, gizarte-segurantzaren arauak Ertzaintzarako edo udaltzaingoetarako aurreikus ditzaketen berezitasunarekin.”

Hogeita bi. Hau da 65. artikulua 2. paragrafoaren testu berria:

«2. Lehiaketa da lanpostua betetzeko ohiko sistema. Lehiaketan, hautagaien gaitasunak lanpostuaren eginkizunetara egokitzen diren baloratuko da.

Lanpostuak betetzeko deialdietan baloratu beharreko merezimenduak definituko dira, zeinen artean hauek egongo baitira: antzintasuna, garapen profesionalaren gradu jakin bat izatea —hala badagokio—, garatutako lanaren balorazioa eta euskararen ezagutza-maila egiaztatua, hura bete beharreko baldintza ez denean.

Era berean, deialdian hala ezartzen denean, hauek guztiak ere agertu ahalko dira: prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak; titulazioak eta gradu akademikoak; hizkuntzen ezagutza edo irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduera eta bete beharreko lanpostuak berezko dituen ezaugarrien arabera egokiak izan daitezkeen guztiak.

Orobat, eta egin beharreko eginkizunen izaera kontuan hartuta, hautagaiak lanpostuaren ezaugarri espezifikoetara egokitzen diren ebaluatze beharrezkotzat jotzen diren probak ezarri ahalko dira deialdietan.”

Hogeita hiru. 65 bis artikulua eranstean da, eta honela geratzen da:

“65 bis artikulua.

1. Lanpostuak hornitzeko ezarritako prozeduren bidez beteko dira espezialitatea eduki behar duten lanpostuak, dagokion espezialitatea dutenen artean.

Espezialitate-ikastaroen deialdiak Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak eta administrazio eskudunak batera egiten dituztenean, ikastarook gainditzen dituztenei esleitu zaizkie espezialitatean hutsik dauden lanpostuak, behin betiko esleitu arte.

2. Espezializazio hori behar duten eta hutsik dauden lanpostu guztietara aurkeztera eta lehenetsunez eskatzera behartuta egongo dira dagokion espezialitate-ikastaroa gainditu dutenak, gainditu dutenetik egiten den lehenengo deialdian. Hori egin ezean, derrigorrez atxiki ahalko zaie hutsik dagoen edozein lanposturi.

3. Espezializazioa behar duten lanpostuek gutxieneko eta gehieneko presentzia-denbora eduki ahalko dute lanpostu-zerrendan.”

Hogeita lau. Hau da 66. artikulua-ren testu berria:

“66. artikulua

Langileek bigarren jardura gisa bete ditzaketen lanpostuak bete nahi direnean, lehentasuna izango dute egoera administratibo hori aitortuta duten funtzionarioek.”

Hogeita bost. Hau da 67. artikulua-ren 1. paragrafoko d) letraren testu berria:

“d) Merezimendu-lehiaketaren bidezko prozeduren kasuan, merezimendu-baremoa, sartzen diren proba espezifikoak, postua eskuratzeko eskatzen den gutxieneko puntuazioa eta hautaketa-batzordearen osaera.”

Hogeita sei. Kendu egiten da 70. artikulua-ren 5. paragrafoa.

Hogeita zazpi. Hau da 71. artikulua-ren 3. paragrafoaren testu berria:

«3. Lanpostu batean behin-behingo jarduten duten bitartean, lanpostu horri esleitutako lanskari osagarriak jasoko dituzte funtzionarioek, eta, betiere, beren graduari dagokion destino-osagarria Ertzaintzaren kasuan, edo finkatuta dutena udaltzaingoaren kasuan.”

Hogeita zortzi. II bis kapitulu berria eranstean zaio III. tituluari, —"Sustapen eta karrera profesionala" izenburua duenari—, eta honela geratzen da:

“II BIS KAPITULUA .- KARRERA PROFESIONALA

“73 bis artikulua.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioen karrera profesionala da maila igotzeko eta aurrerapen profesionaleko espektatibetako aukeren multzo ordenatua, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera, eta honetan datza: modu isolatuan edo aldi berean, goiko hurrengo kategorien barne sustapena egiten edo hurrengo artikulua-k aipatzen duen karrera profesional horizontaleko sistemetan.

“73 ter artikulua.

1. Segurtasun-arloan eskumena duen sailak eta udalerriak ezarri ahalko dituzte karrera profesional horizontaleko sistemak, zeinak lanpostua aldatu beharrik gabe garapen profesionaleko gradua garatzean dautza, lege honetan aurreikusitakoaren arabera eta modu osagarri batez Euskal Autonomia Erkidegoko enplegatu publikoei aplikagarriak zaizkien arauen arabera.

2. Karrera profesional horizontalaren modalitate desberdinen ezarpena eta garapena eraginkorra izateko, beharrezkoa izango da, ezinbestez, euskal administrazio publiko bakoitzak dagokion arau-garapena egitea; eta karrera profesionalaren efektibitatea, edonola ere, dagokion administrazioen aurrekontu-ahalmenaren baitan egongo da.

3. Karrera profesional horizontala garapen profesionalen graduen sekuentzia ordenatu baten bidez egituratzen da, eta graduok karrerako funtzionario bakoitzari aitortu ahalko zaizkio, aldez aurretik interesatuaren merezimenduen aldeko ebaluazioa eginez gero. Garapen profesionalaren graduak funtzionarioaren hazkunde profesionala aitortzen eta berresten du, eta, hala behar duenean, euskal administrazio publikoetan lanpostu bat edo batzuk betetzeko gaitzen du.

Euskal administrazio publikoek zehaztu ahalko dute beren lanpostu guztiak betetzeko garapen profesionalaren zein gradu edo zeintzuk beharko diren.

4. Oro har, karrerako funtzionarioen karrera profesionala bere kategoriako gutxieneko garapen profesionaleko graduan edo mailan hasiko da.

Garapen profesionalaren graduetan gora egiterakoan, sailkapeneko multzo edo azpimultzo bakoitzean zehazten den eskalan juxtu gorago dagoen hurrengo gradura egingo da.

5. Karrera profesionalaren aitormena gaitasun profesionalak egiaztatzeko sistema bat da, funtzionario bakoitzak benetan izandako garapen profesionala identifikatu, baloratu eta ebaluatzeko irizpide objektiboen bidez egituratzen dena.

Euskal administrazio publikoek karrera profesionalaz egiten duten erregulazioak zehaztuko ditu garapen profesionaleko gradu desberdinak, bai eta bakoitzean sartzeko behar den urtealdi profesionala eta hura egiaztatzea lortzeko behar den prozedura.

6. Garapen profesionaleko graduak, behin aitortu ondoren, egonkortu egingo dira; dena den, euskal administrazio publikoek aurreikusi ahalko dute beren karrera profesionaleko ereduetan egonkortutako gradua galtzeko aukera, bai eta egoera horretatik ondorioztatzen diren ondorioak ere.”

7. Ezin izango da aitortu karrera profesionalaren osagarriaren konturako edo aurretiko ordainsaririk Ertzaintzako langileei, ezta toki-administrazioaren baitako polizia-kidegoko langileei ere. Karrera profesionalaren osagarria sortzeko behar da, aldez aurretik, administrazio publiko bakoitzak karrera profesionalaren eredua ezartzea eta berariaz aitortzea funtzionarioari garapen profesionalaren garapen-gradu jakin bat, lege honetan ezarritako betebeharrak guztiekin"

Hogeita bederatzia. Hau da 74. artikulua 1. paragrafoaren testu berria:

«1. Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoetako funtzionarioen egitura eta ordainsarien erregimena euskal administrazio publikoetako funtzionarioentzat aurreikusitako arauetan ezarritakoaren arabera izango da, hurrengo paragrafoetan ezartzen diren berezitasunekin, zeinak Ertzaintzaren kidegoari aplikatzekoak baitira.

Hogeita hamar. Hau da 74. artikulua 1. paragrafoa a) letraren testu berria:

a) Ertzaintzaren destino-osagarria funtzionarioaren kategoriaren mailari dagokiona da, eta lanpostuak eskala hauetan sailkatzen dira: gorena, betearazlea, ikuskaritzakoa eta oinarritzakoa, 7 mailatan, eskala honen arabera:

- Agente-kategoria: 1. maila.
- Agente lehenaren kategoria: 2. maila.
- Ofizialorde-kategoria: 3. maila.
- Ofizial-kategoria: 4. maila.
- Komisariorde-kategoria: 5. maila.
- Komisario-kategoria: 6. maila.
- Intendente-kategoria: 7. maila.

Osagarriaren zenbateko zehatza urtero zehaztuko da, Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan.

Medikuen eta teknikarien eskalako lanpostuak erregelamendu bidez klasifikatuko dira euskal administrazio publikoen lanpostuetarako ezarritako mailaren batean; mailok beren sailkapen-taldekoak izan beharko dute."

Hogeita hamaika: 74. artikulua 1. paragrafoa a) bis letra gehitzen zaio.

"A bis) Ertzaintzan, karrera profesionaleko osagarriaren bidez ordainduko da langile funtzionarioek lanean izandako aurrerabidea, karrera profesionalaren sistema egituratzeko ezarrita dauden graduen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Nagusien Legeak definituko du lanbide-garapeneko gradu bakoitzari dagozkion ordainsarien kopuru zehatza, sailkapeneko talde edo azpitaldearen arabera."

Hogeita hamabi: - Hau da 78. artikulua 2. paragrafo berria:

2. Ezin izango dute, beren jarduerekin batera, sektore publikoan edo pribatuan bigarren lanpostua, kargua edo jarduera bete, ez zuzenean ezta ordezeko baten bidez ere.

Dena den, lanpostu, kargu, lanbide edo jarduera publiko edo pribatu bat garatu ahalko dute, indarrean dauden bere arauetan aurreikusitako kasuetan eta baldintzetan eta betekizunekin, salbu eta bigarren lanpostu hori gauzatzeak kidego polizialaren irudia eta prestigioa hondatzea badakar, edo poliziak jarduteko dituen oinarritzko printzipioen kontrakoa bada.

Ertzaintzan zerbitzu aktiboan aritzea bateraezina da indar armatuen erreserbista izatearekin edo krisi edo larrialdi-egoeretan kidego polizialek at funtzio publikoak garatzeko beste konpromiso pertsonal batzuekin.”

Hogeita hamahiru. III. tituluko V. kapitulua honela geratzen da:

“V KAPITULUA.- OSASUNA ETA BABESA.

79. artikulua.-

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren mende dituzten administrazio publikoek zainduko dute poliziek beren eginkizunak gauzatzeko behar diren baldintza psikofisikoak izango dituztela. Horretarako, osasun-zerbitzu bat egongo da, eta, ondorio horietarako, lankidetzakontratuak edo hitzarmenak ezarri ahalko dira medikuekin edo erakunde sanitario publiko edo pribatuekin.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileen osasuna zaindu behar da, laneko arriskuak prebenitzeko planean ezartzen den moduan, eta laneko arriskuak prebenitzeko zerbitzuaren jarduera-eremuaren barruan.

79 bis artikulua.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileen ordezkariaren eta partaidetzaren araubideak, lan-arriskuen prebentzioari dagokienez, Lan Arriskuen Prebentzioaren azaroaren 8ko 31/1995 Legean jasotako printzipioak eta irizpideak beteko ditu.

2. Langileen ordezkari eta partaidetza prebentzio-ordezkarien bidez bideratuko da, zeinak sindikatuak izendatuko baitituzte dagozkion hauteskundeetan lortzen duten ordezkariak-mailaren arabera.

3. *Prebentzio-ordezkariek laguntzen dute prebentzio-ekintza hobetzen, laneko arriskuei buruzko arauak betetzen direla zaintzen dute eta funtzionarioek arau horiek aplikatzen laguntzea sustatzen dute.*

4. *Beren eginkizunak betetzean ahalmena dute Lan Arriskuen Prebentzioaren azaroaren 8ko 31/1995 Legeak prebentzio-ordezkariei ematen dizkien jarduerak gauzatzeko; nolanahi ere, mugak egon daitezke kanpo geratu behar diren jarduerari dagokienez, lege bereko 3.2. artikuluan ezartzen den bezala.*

5. *Administrazioek eman beharko dizkiete prebentzio-ordezkariei prebentzioari buruz behar diren baliabideak eta prestakuntza, haien funtzioak gauzatu ditzaten. Prestakuntzan emandako denbora lan-denboratzat joko da ondorio guztietarako.*

6. *Partaidetza-organo kolegiatuak ezarriko dira, zeinetan Administrazioak eta langileek ordezkari-kopuru berdina izango baitute.*

79.Ter) artikulua-

1. *Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileak bere baitan hartzen dituen erakundeko funtzionarioei dagokien babes sozialeko erregimena bete behar dute; langileok gizarte-segurantzari buruzko arauak horri dagokionez dituzten berezitasunekin.*

2. *Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileak bere baitan hartzen dituzten administrazio publikoek arbitratuko dituzte babes sozial osagarriko mekanismoak aldi baterako ezintasunak daudenean, ezintasun-egoera hori zerbitzua ematerakoan izandako lesioek edo patologiek sortzen badute, eta, betiere, langilearen aldetik ez bada dolorik edo arduragabekeria edo trebetasun larririk egon. Era berean, istripu-aseguruak hitzartuko dituzte, heriotza, ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo minusbaliotasun handia edo lesio iraunkorrak sortzen direnerako, bere funtzioak betetzerakoan sortutako lesioen ondorioz gertatu badira.*

3. *Zerbitzua ematerakoan hilez gero, edo heriotza funtzionarioaren kontra polizia izateagatik egindako ekintza bidegabeetatik ondorioztatzen bada, ezkontideak edo bikotekide superstitiek –edo, halakorik egon ezean, haren legezko ondorengoek– izango dute eskubidea hildako pertsonak hil zenean betetzen zuen lanpostuan jasotzen zituen ordainsari osoen bi urteko ordainsariak jasotzeko, dena batera, edozein zela ere lanpostua betetzeko forma.*

4. *Funtzionarioak nahitaezko erretiroa hartu behar izanez gero, hirugarren pertsonen haren aurka (zerbitzua ematen ari zela edo polizia izatearen ondorioz) egindako ekintza bidegabeen ondorioz, aldizkako prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea izango du; prestazio hori gehi egokitzen zaion pentsioa, ohikoa edo apartekoa, eskubide hori*

sortzen duen gertakaria gertatu zen unean betetzen zuen lanpostuaren ordainsari finkoen eta aldizkako ehuneko laurogeira helduko da.

Prestazio hori ezin da laneko errentekin batera jaso, ezta legez bateragarriak diren beste pentsioekin edo subsidioekin batera ere. Jasotzen dituen prestazio ekonomikoaren, pentsioen eta hartzeko pasiboen batura ezin izango da aurreikuspen sozialeko erregimen publikoan aurreikusitako gehienezko pentsioa baino handiagoa izan.

Prestazio ekonomikoak aipatutako ordainsari finko eta aldizkakoak aplikatuzetik ondorioztatzen den urteko gehikuntza izango du, eta hilero ordainduko da, adinagatik haren nahitaezko erretiroa aldarrikatu behar izan den egunera arte, salbu eta hori gertatu baino lehen hil egingo balitz.

Hogeita hamalau. V bis kapitulua eransten zaio III. tituluari, eta honela geratzen da:

"V BIS KAPITULUA- KONDEKORAZIOAK ETA AITORTZAK.

80. artikulua.-

1. Erregelamendu bidez ezarriko da merezimendu polizialari dominak, zorionak eta gainerako kondekoroak emateko erregimena, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioei saritzeko, baldin eta beren eginkizunak betetzean gizartearen mesedetan zenbait bertute nabarmen egiaztatzen badute, hain zuzen, eredugarritasunarenak, sakrifizioarenak, eraginkortasunarenak eta zerbitzuari emanak izatearenak.

2. Erregelamendu bidez arautuko dira merezimendu polizialari ematen zaizkion domina motak, bai eta aurrekontuak eta prozedura ere. Ofizioz hasten da prozedura, organo eskudunak egokitzen jotzen duenean, dauden informazioak kontuan hartuta.

3. Erregelamendu bidez ezartzen diren kasuetan, merezimendu polizialaren domina ematearekin batera ondorio ekonomikoak egon ahalko dira, baldin eta ez badagokio aurreko artikuluan aipatutako prestazio ekonomikoak aitortzea.

4. Diskrezionalki igo ahalko dira hurrengo kategoriara, ohore gisa, beren izaera poliziala betetzean izandako jarduera heroiko baten ondorioz hiltzen diren edo ezintasunagatik erretiratu behar diren funtzionarioak, hori egitea justifikatzen duen egoera berezia dagoenean. Aitormen horrek ez du ondorio ekonomikorik."

Hogeita hamabost. Hau da 81. artikuluaen testu berria:

"81. artikulua.-

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako langileak euskal enplegu publikoaren legedi orokorrean aurreikusitako egoera administratiboren batean egongo dira, kapitulu honetan jasotzen diren berezitasunekin, edo bigarren jarduerako egoera administratibo espezifikoan.”

Hogeita hamasei. 5. paragrafoa eranstean zaio 84. artikuluari, eta honela geratzen da:

«5. Baldin eta behin-behineko eginkizun-etenaldia behin betiko bihurtzen bada, funtzionarioak itzuli egin beharko du behin-behineko eginkizun-etenaldian jasotakoa.” Baldin eta behin-behineko eginkizun-etenaldia ez bada zehapen irmo bilakatzen, Administrazioak bueltatu beharko dio funtzionarioari benetan jaso dituen hartzekoen eta eskubide guztiak izan balitu jasoko zituzkeen hartzekoen arteko aldea.”

Hogeita hamazazpi. 6 paragrafoa eranstean zaio 84. artikuluari, eta honela geratzen da idatzita:

«6. Behin-behineko eginkizun-etenaldian emandako denbora kontuan hartuko da behin betiko eginkizun-etenaldiaren epea betetzeari begira.”

Hogeita hemezortzi. Hau da 85. artikulua:

“85. artikulua.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionarioek –Ertzaintzako Medikuen eta Teknikarien Eskalakoak direnak izan ezik–, zerbitzu aktiboko egoeran daudenean, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboaren modalitatera igarotzea eskatu ahalko dute, zerbitzua emateko baldintzetan egin beharreko aldaketak eginda, zerbitzu aktiboa emateko helburuz.

2. Administrazio bakoitzak ezarriko ditu, behin langileen ordezkariekin negoziatu ondoren, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa aitortua izateko bete beharreko betekizunak eta baldintzak. Araitze horretan, datu hauek guztiak sartuko dira:

- a) Zer adinetatik aurrera aitortu daitekeen adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa.*
- b) Zer aldaketa mota egin behar den zerbitzua emateko baldintzetan.*
- c) Urtean zerbitzu mota horren aitortpenen gehienezko kopuru bat ezartzeko aukera dagoen, salbuespenez eta arrazoiak azalduta, zerbitzu polizialaren prestazioa ematen jarraitzea bermatzea ezinezkoa denean.*
- d) Unitate singularrak dauden, non adina dela-eta zerbitzuarekiko egokitzapenak bateraezinak diren, zerbitzuaren izaera dela eta, lanpostuaren eginkizunak betetzearekin. Kasu horretan, erregelamenduak jaso beharko du hutsik dagoen eta beste lanpostu bati berriz atxiki beharra, hartan aritzeko bete beharreko baldintzak betetzen baditu, lehen betetzen zuen postua hornitzeko betebeharreko baldintza*

berdinetan eta interesdunak aukeratzeko eta lehentasuna ezartzeko ezartzen diren baldintzekin.

3. Adina dela-eta egokitutako zerbitzua aitortua izateko, agenteak borondatezko erretiro aurreratua eskatzeko konpromisoa hartu beharko du, horretarako behar den adina duenean betiere, kasuan kasuko aplikatu beharreko gizarte segurantzaren araubideak xedatutakoaren arabera. Konpromiso hori atzeratu ahalko da, baldin eta erretiro aurreratua hartzeko adina betetzen duenean, ez baditu betetzen oinarri arautzailean xedatutako pentsioa ehuneko ehunean jasotzeko baldintzak.

Hogeita hemeretzi. Hau da 86. artikuluaen testu berria:

“86. artikulua

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionarioak –Ertzaintzako Medikuen eta Teknikarien Eskalakoak direnak izan ezik–, zerbitzu aktiboan daudenean, bigarren jarduerako egoera administratibora igaro ahalko dira, baldin eta zereginak egiteko beharrezko ahalmen fisiko eta psikikoen gutxitze agerikoa badute; ageriko gutxitze horrek, polizia-lanbidearen oinarritzko egitekoak eraginkortasunez egitea galarazi gabe, bere kategoriako berezko zereginak osorik gauzatzeko ahalmenaren urritze iraunkorra ekarri beharko du berekin.

Lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, lanbide polizialaren funtsezko eginkizuntzat jotzen dira, zehazki, ordena eta herritarren segurtasuna eusteko eta lehengoratzekoari buruzkoak, delituzko gertakariak prebenitzekoak eta haiek ikertzekoak, eta errudunen jazarpena egitekoak. Lan horiek eraginkortasunez egiteko, oinarritzko gaitasuna behar da, bai su-armak eta gainerako erregelamendu-defentsak erabili eta maneiatzeko, baita egoera normaletan ibilgailuak gidatzeko ere; oinarritzko mugimendu-gaitasuna ere eduki behar da.

2. Administrazio-egoera horretara igarotzeko prozedura ofizioz edo interesdunaren eskariz hasiko da, aurrez Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari ezintasun iraunkorra aitortzeko eskatu beharrik gabe.

3. Hiru sendagilek osatutako Epaimahai Ebaluatzaile batek balioetsiko ditu urritasun funtzionalak; sendagileok Eusko Jaurlaritzan segurtasun-arloa eskumena duen sailak edo dagokion toki-erakundeko organo eskudunak izendatuko ditu, eta sindikatuek proposatuko dute haietariko bat. Epaimahaiak, bere egitekoa zuzen egiteko asmoz, beharrezkotzat jotzen dituen sendagile espezialisten partaidetza eskatu ahalko du, eta helburu horretarako beharrezkotzat jotzen dituen medikuntza-alorreko proba, ikuskapen edo azterketa guztiak egitea erabaki ere.

4. Epaimahai Ebaluatzaileak ematen dituen irizpenek organo eskudunarentzat behartze-indarra izango dute bigarren jarduerako egoera adierazterakoan, Administrazioaren

jardunbidea arautzen duten arauen arabera organo horrek berrazterketa egiteko aukeraren kaltetan gabe, baldin prozesua baliogabetu dezakeen araugabetasunen bat sumatuko balu. Baldin eta, egindako ikuskapenen ondorioz, Epaimahaiak susmatzen badu funtzionarioengan ezintasun fisikorik edo bere zereginetan jarduteko ezintasun iraunkorra dakarkion ahalmen-gutxitzerik, irizpenean jasoko du egoera horren berri, egoki diren ondorioetarako.

5. Bigarren jarduerako egoera administratibora igarotzen diren funtzionarioek utzi egingo dute atxikita dauden lanpostua, ez bada bigarren jarduerako egoeran dagoen langileek egiteko modukoa, eta aldi baterako atxikipenez esleituko zaizkie haiek egiteko moduko zerbitzuak ematen dauden unitateko lanpostuak. Baldin eta unitatean ez badago lanpostu hutsik, interesdunak proposatutako hiru lanposturen artetik Administrazioak ezartzen duen lantokira atxikiko da funtzionarioa, betiere lantoki horretan kidego polizialaren postu-zerrendan definitutako posturen bat hutsik egonez gero.

Aurreko paragrafoen aurreikusitakoaren arabera lanpostu hutsik ez badago, edo zerbitzuak ematen ari den lantokiaren inguruan ez badago lanpostu hutsik, eta interesdunak ez badu bere borondatez horrelakoren bat proposatzen, aldi batez eta aukera hori ez dagoen bitartean, administrazio eskudunak egokituko du funtzionalki betetzen ari zen lanpostua interesdunaren gaitasunetara, epaimahai ebaluatzaileak ematen duen irizpidearen arabera.

6. Bigarren jarduerako egoera administratibora igarotzeko borondatez eskatzeak dakar berarekin batera aurreratutako borondatezko erretiroa eskatzeko konpromisoa, kasuan kasuko aplikatu beharreko gizarte segurantzaren araubidearen arabera erretiro mota hori hartzeko eduki beharreko adina betetzean. Konpromiso hori atzeratu ahalko da, baldin eta erretiro aurreratua hartzeko adina betetzen duenean, oinarri arautzailean xedatutako pentsioa ehuneko ehunetan jasotzeko baldintzak betetzen ez baditu.

7. Bigarren jarduerako egoera administratiboan dauden funtzionarioek beren kategoriako oinarrizko lansariak jasoko dituzte, eta baita norbere ezaugarriengatik aitortuta dituztenak ere, horien artean, hirurtekoei dagozkienak, zeinak egoera horretan ere hobetzen segituko duten. Betetzen den lanpostuari edo plazari dagozkion ordainsari osagarriak jasoko dira.

Gizarte Segurantzako organo eskudunek ezintasun iraunkorreko egoeran daudela aitortu dieten langileen kasuan, nahitaezko erretiroa hartzera behartu gabe, dagozkien ordainsari osagarriak kontzeptu harengatik aitortuta duten prestazioaren zenbatekoan murriztuko dira."

8. Bigarren jarduerako egoera administratiboan dauden funtzionarioek eskubidea dute adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiborako aurreikusitako eginkizunen modulazio berbera hartzeko, baldintza berberetan".

Berrogei. Hau da 87. artikuluaen testu berria:

“87. artikulua.

Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboan edo bigarren jardueran aritzen diren funtzionarioek, baldin eta salbuespenez aldi baterako destinorik gabe eta dagokien polizia-kidegoaren esku badaude, egoera horrek irauten duen bitartean, kategoriari dagozkion oinarritzko lansariak eta aitortuta dituen ordainsari pertsonalak jasoko dituzte, bai eta betetako azken lanpostuaren lansariak ere, berariazko osagarria izan ezik.”

Berrogeita bat. Kendu egiten da 88. artikulua.

Berrogeita bi. 92. artikuluaen b), d) , g), k) eta l) letrak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

"b) Polizia izateaz abantaila ateratzea, herritarrei, mendekoei edo Administrazioari kalte larria eraginez, bai eta beren eginkizun polizialak gauzatzekoan haiekin erlazionatzen diren pertsonen, bereziki beren zaintzapean daudenei, edozein tratu ankerra, umiliagarria, diskriminatzailea edo iraingarria ematea ere. Tratu diskriminatzailezat joko da Konstituzioaren 14. artikuluan adierazitako arrazoiren batean oinarritzen dena.

d) Sekretu profesionala urratzea eta behar bezalako isiltasuna ez gordetzea bere kargua dela-eta ezagutzen dituen gaiei buruz, baldin eta gai horiek kalte larria eragiten badute lan polizialaren garapenean edo edozein pertsonarengan.

g) Nabarmenki, behin eta berriz eta justifikatu gabe errendimendu gutxi izatea, bai eta nabarmenki ez betetzea lanpostuari datxekion oinarritzko eginkizunak edo esleitutako eginkizunak.

k) Segurtasuneko Indar eta Kidegoetako gainerako kideekin lankidetzan ez aritzea, nabarmen, baldin eta jokabide horrek kalte larria eragiten badio zerbitzuari edo ondorio larriak ekartzen baditu herritarren segurtasunarentzat.

l) Falta larria egitea lehendik zehatuta izan denean, bide administratiboan irmoak izatera heldu diren ebazpenen arabera, egindako falta bezain larriak edo larriagoak diren beste bi faltengatik, baldin eta haren oharrak ez baditu baliogabetuta izateko betekizunak betetzen.”

Berrogeita hiru. Bi letra berri —1 bis) eta 1 ter)— eranstean zaizkio 92. artikularen 2. paragrafoari, eta honela geratzen da idatzita:

“1 bis) Sexu-jazarpena, jazarpen sexista eta laneko jazarpena. Azken hori honela ulertuko da: zerbitzu-harremanetan, behin eta berriz, jazarpen psikologikoa egitea eta etsaitasuna adieraztea.

1 ter) Segurtasun Indarrek eta Kidegoek leku publikoetan bideokamerak erabiltzeari buruz legeetan falta oso larritzat jotako arau-haustekak.”

Berrogeita lau. Hau da 93. artikularen testu berria:

“93. artikulua

Kapitulu honetan aipatzen diren hutsegiteengatik, honako zehapen hauek jarri ahal izango dira:

1. Hutsegite oso larriak direla-eta:

a) Zerbitzutik baztertzea.

b) Eginkizunak kentzea, gutxienez urte bat eta egun batez, eta lau urtez, gehienez.

2. Hutsegite larriak direla-eta:

a) Eginkizunak kentzea, bost egunez, gutxienez, eta urtebetez, gehienez.

d) Destino-aldaketa, destino galduta edo galdu gabe.

3. Hutsegite arinak direla-eta:

a) Ohartarazpena.

b) Eginkizunak kentzea, egun batez, gutxienez, eta lau egunez, gehienez, baina antzintasuna zenbatzeko orduan eraginik izan gabe.

Funtzionarioei ezarritako zehapena nahitaezko lekualdatzea denean, funtzionario horiek ezin izango dute destino berria lortu inolako prozeduraren bidez lekuz aldatuta izan ziren zentroan edo unitatean, urtebete eta hiru urte bitarteko aldian, zehapena ezartzen dien ebazpenean ezarritakoari jarraikiz, hurrengo artikuluan ezarritako irizpideen arabera.

Berrogeita bost. Hau da 94. artikularen testu berria:

“94. artikulua

Hutsegiteak larritasun handiagoa edo txikiagoa duen ezartzeko, eta ezarri beharreko zehapena graduatzeko, elementu hauek kontuan hartuko dira, objektiboki egin denaz edo egin ez denaz gain, eta proportzionaltasun-printzipioaren pean jokotuta:

a) Nahita egin den.

- b) Noraino parte hartu duen egitez edo ez egitez.
 - c) Zer nahaste zor dezakeen Administrazioaren eta polizia-zerbitzuen ohiko funtzionamenduan.
 - d) Herritarrentzat eta mendekoentzat ekar ditzakeen kalte-galerak edo begirune-falta.
 - e) Noraino eragiten dien diziplina-, hierarkia- eta lankidetzaren printzipioei.
 - f) Curriculum profesionala, zeina, ondorio horietarako, zirkunstantzia leungarri gisa baino ezin izango baita baloratu.
 - g) Berrerori den. Berrerortzea dago, baldin eta funtzionarioak falta egiten duenean dagoeneko zehapen bat jaso badu ebazpen irmo baten bidez beste falta larriago batengatik edo larritasun bereko edo gutxiagoko bi faltengatik, eta falta horiek ez badira baliogabetu. Berrerortzea dagoela ulertzeko, ez dira zenbatuko baliogabetu diren edo baliogabetu beharko liratekeen diziplina-aurrekariak.
 - h) Administrazioaren edo zerbitzu polizialen irudia hondatu den.
 - i) Oro har, herritarren segurtasunerako zer garrantzia duen.
- Delituzko faltan kasuan, espezifikoki baloratuko da epai irmoaren arabera ezarritako zigorraren zenbatekoa edo garrantzia, bai eta delituzko jokabideak eginkizun polizialekin duen erlazioa ere.*

Berrogeita sei. 2 bis paragrafoa eranstean zaio 95. artikuluari, eta honela geratzen da:

«2 bis. Espedientatutako pertsonak badu adierazpenak ez egiteko eskubidea, bere kontra ez egiteko eskubidea, bere burua erruduntzat ez jotzeko eskubidea eta errugabetzat joa izatekoa. Instruktoarako berraztertuko du uneoro espedientatutako pertsonak duen defentsarako eskubidea, eta horretarako behar diren neurriak hartuko ditu.

Espedientatutako pertsonak aukeratu ahalko du bere konfiantzazko jarduneko abokatu bat edo sindikatu-ordezkaririk bat edo kide polizialeko funtzionario bat, haren aholkularitza eta laguntza jasotzeko prozedurak dakartzen jardura guztietan.

Bigarren aukera hori hartuz gero, agintariak erraztuko diote izendutako funtzionarioari egotea espedientatutako pertsonak diziplina-agintarien edo espedienteen instrukzio-egilean aurrean egin beharreko agerraldi pertsonaletan, eta haren aholkularitza borondatezkoa izango da beti; izendapenak ez dio inolako eskubiderik emango laguntzatik ondorioztatu daitezkeen gastuetatik ordaindua izateko.»

Berrogeita zazpi. 2 ter paragrafoa eranstean zaio 95. artikuluari, eta honela geratzen da:

«2 ter. Espedientatuek uneoro jakin ahalko dute zer egoeratan dagoen prozeduraren izapidetzea, administrazio-prozedura erkidea arautzen duten legeetan aurreikusitakoaren arabera.»

Berrogeita zortzi. Hau da 95. artikulua 5. paragrafoaren testu berria:

«5. Prozedura hasi eta handik hamar hilabetera ez bada ebazpena oraindik jakinarazi, iraungita geratuko da, administrazio-prozedurari buruz indarrean dagoen araudian aurreikusitako ondorioekin. Hamar hilabeteko epe hori eten egingo da, bai Euskal Herriko Herri Administrazioen Zigor Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean aurreikusitako kasuetan, baita prozedura interesdunari edo prozeduraren xedea diren gertakizunak direla eta jardura judizial penalari egotz dakizkikeen arrazoiengatik geraturik dagoen tartean ere.»

Berrogeita bederatzia. Hau da 97. artikulua 2. paragrafoaren testu berria:

«2. Hutsegite oso larriak hiru urtera preskribatuko dira; larriak, bi urtera; eta arinak, hiru hilabetera. Hutsegitea egiten den unetik hasiko da kontatzen preskripzio-epea.»

Berrogeita hamar. Hau da 97. artikulua 3. paragrafoaren testu berria:

«3. Hutsegite oso larriengatik ezarritako zehapenak hiru urtera preskribatuko dira, hutsegite larriengatik ezarritakoak bi urtera, eta hutsegite arinengatik ezarritakoak hiru hilabetera. Preskripzio-epea zehatzeko ebazpena irmo bihurtu den egunaren biharamunetik hasiko da zenbatzen.»

Berrogeita hamaika. 97 bis artikulua eranstean da, eta honela geratzen da idatzita:

“97 bis artikulua.

1. Diziplina-zehapenak exekutiboak izango dira, baldin eta haien kontra ezin bada inolako errekurso arruntik ezarri bide administratiboan, eta haietan beren eraginkortasuna bermatzeko behar diren kautela-xedapenak hartu ahalko dira, baldin eta ez bada exekutiboa, eta kasuan kasuko hartu diren aldi baterako neurriei eustea izan ahalko da.

Ebazpena exekutiboa denean, eten ahalko da, kautelaz, baldin eta interesatuak adierazten badio Administrazioari ebazpen irmoaren aurkako administrazioarekiko auzi-errekursoa jartzeko asmoa duela, bide administratiboan.

Kautelazko etenaldi hori amaituko da lege aurreikusitako epea amaitzen denean, interesatuak administrazioarekiko auzi-errekursoa jarri gabe, edo, administrazioarekiko auzi-errekursoa jarrita ez bada izapide berean eskatu aurkatutako ebazpenaren

kautelazko etena edo organo judizialak ematen badu bere iritzia eskatutako kautelazko etenaldiari buruz bertan aurreikusitako moduan.

Berrogeita hamabi. 97 ter artikulua eransten da, eta honela geratzen da idatzita:

“97 ter artikulua.

1. Diziplina-zehapenak ezartzen diren ebazpenean ezarritakoaren arabera eta beren izaeraren arabera beteko dira, zehatutako pertsonari albait kalte gutxien egiteko moduan, eta zehapena exekutibotasuna hartzen duen egun berean hasiko dira betetzen, salbu eta, justifikatutako arrazoiak direla medio, ebazpenean bertan atzeratzen bada hura betetzea artikulua honetan aurreikusitakoaren arabera.

2. Ezin bada ebazpena ematen den unean zehapena ebatzi, funtzionarioaren administrazio-egoerak hori egitea eragozten duelako edo nahitaezko erretiroa hartu behar izan duelako, zehapena gauzatuko da soilik haren egoera-aldaketak horrela egitea uzten badu, salbu eta preskribatzeko epea igaro bada.

3. Eginkizunak aldi baterako eteteko zehapen bat baino gehiago egonez gero, zehapenen ezarpenaren ordena kronologikoari jarraituta beteko dira, eta, ordena horren barruan, larrienetatik hasita eta sei urteko muga bete arte. Zehapenen baturak muga hori gainditzen badu, gainerako denboran zehapena ez da beteko.

4. Eginkizunak aldi baterako eteteko zehapenaren ondorio ekonomikoak berehala gauzatuko dira zehapena jaso duen pertsonaren kargura.

5. Hutsegite arina edo larriarengatik gehienez 15 egun arteko etenaldiaz zehatutako funtzionarioak zehapen hori betetzeko alternatiba bat aukeratu ahalko du, aldez aurretik Administrazioak horrela egitea onartuz gero: ezarritako lanalditik kanpo lan egitea inolako ordainsaririk edo konpentsaziorik jaso gabe ezarritako zehapenaldia bitartean, eta edonola ere, lanaldien arteko atsedenen bermeak errespetatuz.

6. Segurtasun-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailburuak eta udalaren organo eskudunak, ofizioz zein interesdunak eskaturik, eta bidezko arrazoiak direla-eta, erabaki ahalko dute zehapena preskribitu aurreko tarte batez etetea, edo partzialki edo osorik bete beharrik ez izatea. Zehapena etenda egondako denbora kontuan hartuko da zehapena baliogabetzeari begira.”

Berrogeita hamahiru. Hau da 99. artikulua 3. paragrafoaren testu berria:

«3. Hautesle eta hautagai honako hauek izango dira, hauteskunde-bideari hasiera ematen zaion eguna abiapuntutzat harturik: zerbitzu egoeran edo bigarren jarduerako

egoeran ari diren karrerako funtzionarioak eta prestakuntza-ikastaroa gainditu ondoren praktiketan ari diren funtzionarioak.

Berrogeita hamalau. Hau da 105. artikuluaen testu berria:

“105. artikulua.

1. Ertzaintza eskaletan egituratzen da hierarkikoki, eta eskala horien barruan, kategoria hauetan:

- a) Goi-mailako eskalan: intendente-kategoriarekin.*
- b) Eskala betearazlean, bi kategoriarekin: komisario eta komisariorde.*
- c) Ikusapen-eskalan, bi kategoriarekin: ofiziala eta ofizial-ondokoa.*
- d) Oinarrizko eskalan, bi kategoriarekin: agente lehena eta agentea.*

2. Eskalak ondorengo lanbide-taldeetan eta azpi-taldeetan sailkatzen dira:

- a) Goi-mailako eskala talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A1 azpitaldea.*
- b) Eskala betearazlea talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A2 azpitaldea.*
- c) Ikusapen-eskala eta oinarrizko eskala talde hauetan sailkatzen dira: C taldea eta C1 azpitaldea.*

3. Medikuen eta Teknikarien Eskala ere egongo da Ertzaintzan, eta haren lanpostuak A1, A2 eta C1 sailkapen-taldekoak izango dira, kasuan kasuko eskatzen den titulazioaren arabera.

Berrogeita hamabost. IV. tituluaren (“Ertzaintzako funtzionarioak”) II. kapituluaren III. atala (“Polizia Judiziala”) honela geratzen da idatzita:

“Hirugarren atala.- Polizia Judiziala.

“112. artikulua.-

1. Ertzaintzako funtzionario guztiei dagokie polizia judizial gisa jardutea delituak ikertzen lagundu behar dutenean, bai eta delinkuenteak aurkitzean eta aseguratzean ere. Lan hori beren eskumenen barruan egingo dute, zeinak Autonomia Estatutuaren 17. artikuluan zehazten baitira, eta Segurtasun Batzordeak eginkizunak mugatzeko sinatutako akordioen barruan, eta betiere agintari judizialen eta Fiskaltzaren zuzendaritza-eginkizunen kalterik gabe.

2. Ertzaintzaren egituran, krimen-ikerketako eta polizia judizialeko unitateak ezarriko dira, zeinak funtzionalki agintari judizialen eta Fiskaltzaren mende egongo baitira, haiek agintzen dizkieten eta Botere Judizialaren Lege Organikoan jasotzen diren jarduera guztiak gauzatzean. Unitate polizial horietako arduradunek agintari judizialen eta

Fiskaltzaren errekerimenduak bideratuko dituzte, funtzionarioek edo aipatutako unitateetako baliabideek ikerketa batean esku har dezaten.

3. Segurtasun-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailak, jarduera-erritmoa eta langileen prestasuna kontuan hartuta, atxiki ahalko dizkie epaitegi edo tribunal jakin batzuei, iraunkortasunez eta egonkortasunez, ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuak, sekzioak edo unitate-taldeak.

113. artikulua

Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiaren bidez emango da ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioen prestakuntza espezifikoa, eta, hala badagokio, praktikak egiteko aldiak sartuko ditu, zeinetan Epailtzako eta Fiskaltzako kideek parte hartu ahalko baitute.

Dagokion espezializazio-diploma izatea bete beharreko baldintza izango da ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko unitateetako lanpostuak betetzeko.

114. artikulua

1. Ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioek eskusibotasunez beteko dute eginkizun hori, baina, nolanahi ere, delinkuentzia prebenitzeko misioak eta Ertzaintzari dagozkion eginkizunen artean eskatzen zaizkien gainerakoak ere garatu ahalko dituzte, egoerak hala egiteko eskatzen duenean.

2. Epaille edo fiskal eskudunak ikerketa jakin bat egiteko agintzen dien funtzionarioei, 112. artikuluan aipatzen diren zereginak betetzerakoan, ezin izango zaie kendu ikerketa horretatik, Botere Judizialaren Lege Organikoan aurreikusitako moduan izan ezik.”

3. Zigor-arloko jurisdikzioko eta Fiskaltzako organo judizialek izango dituzte, modu iraunkorrez esleitzen zaizkien ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko unitateei dagokienez, Segurtasuneko Indar eta Kidegoen martxoaren 13ko 2/86 Lege Organikoaren 35. artikulua aitortzen dizkieten ahalmen berberak.

4. Ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioei diziplina-espediente bat irekitzen zaienean, eta espedientearen xedea diren gertakariak harreman zuzena badute agindu zaien ikerketarekin, menpeko diren organo judizialaren edo Fiskaltzaren txostena eskatuko da, eta horrek ez du kenduko egokitzen jotzen dituzten beste batzuk ematea ere.

5. Sekzio honetan ezarritakoa kenduta, ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioen erregimena, oro har, lege honetan Ertzaintzarentzat aurreikusten den berbera izango da.

115. artikulua

Segurtasun-arloan eskumena duen Sailak bultzatuko du Ertzaintzaren partaidetza ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko koordinazioari buruzko batzorde eta foro erregional, estatal eta nazioarteko garrantzitsuetan.”

Berrogeita hamasei. Hau da 117. artikuluaen testu berria:

“117. artikulua

1. Udaltzaingorik ez duten udaletan, bost aguazil plaza sortu ahal izango dira, gehienez, haien postuetan agertzen diren beste batzuen artean, honako zereginak egiteko:

a) Udal eraikinak eta instalazioak zaintzea.

b) Herrigunean, trafikoa antolatu, seinaleztatu eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.

c) Polizia Administratiboa, ordenantzei, bandoei eta gainerako xedapen eta egintzei dagokienez, haren eskumen-eremuaren barruan, bai eta ingurumenari buruz eta ingurunekoa babesteari buruz indarrean dauden arauak betetzen direla zaintzea ere, gai horien tokiko eskumenen eremuan.

d) Sorospen ematea, istripua, ezbeharra edo kalamidade publikoa gertatuz gero, babes zibileko planak gauzatzen legeetan aurreikusitako moduan parte hartuz.

e) Gatazka pribatuak konpontzen laguntzea, hori egitea eskatzen zaienean.

2. Lehenengo paragrafoan zerrendatutako eginkizunak gauzatzean, agintaritzaren agente dira, eta lege honetan ezarritako oinarrizko jarduera-printzipioak eta kode deontologikoa bete beharko dituzte.

3. Aguazilek ezin izango dute suzko armarik eraman, eta uniformeak erabiliko dute beren lanean, poliziaren kidegoen berezko uniformetik desberdina izango dena.

4. Aguazilen jarduera-eremua bakoitzari dagokion udalerria izango da, alde batera utzita hondamendiko edo herri-lazeriako kasuetarako kasu bakoitzean indarrean dagoen legedian xedatutakoa.

5. Aguazil-lanpostuak C-2 taldeko edo baliokideko karrerako funtzionarioek beteko dituzte, eta toki-administrazioko funtzionarioei aplikatu beharreko estatutua aplikatuko zaie, lege honetan ezarritakoaren kalterik gabe.

6. Udaltzaingoko kideak hautatzeko ezarritako irizpide berberen arabera hautatuko dira, ezagutzen probak dagokion titulaziora egokituta, eta aurrez prestakuntza-ikastaro bat gainditu beharko dute Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademian.”

Berrogeita hamazazpi. Hau da 118. artikulua ren testu berria:

“118. artikulua

1. Udaltzaingoaren kidegoak eskaletan egituratzen dira hierarkikoki, eta eskala horien barruan, kategoria hauetan:

- a) Goi-mailako eskalan: intendente-kategoriarekin.
- b) Eskala betearazlean, bi kategoriarekin: komisario eta komisariorde.
- c) Ikuskapen-eskalan, bi kategoriarekin: ofiziala eta ofizial-ondokoa.
- d) Oinarrizko eskalan, bi kategoriarekin: agente lehena eta agentea.

2. Eskalak ondorengo lanbide-taldeetan eta azpi-taldeetan sailkatzen dira:

- a) Goi-mailako eskala talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A1 azpitaldea.
- b) Eskala betearazlea talde hauetan sailkatzen da: A taldea eta A2 azpitaldea.
- c) Ikuskapen-eskala eta oinarrizko eskala talde hauetan sailkatzen dira: C taldea eta C1 azpitaldea.

3. Udaltzaingoetan eskalak eta kategoriak sortzeak Eusko Jaurlaritzak erregelamendu bidez ezartzen dituen kategorien arteko proportzionaltasun-irizpideei erantzun behar die, biztanleria, herriaren ezaugarriak eta agente-kopurua kontuan hartuta, eta dagozkion kategoriak sortzera behartuta egongo dira honako kasu hauetan:

a) Intendente-kategoria, 150.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, bertako polizia-kidegoak 200 agente edo gehiago baldin baditu plantillan.

a) Komisario-kategoria, 50.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 100 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

b) Komisario-ondoko kategoria, 25.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 40 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

c) Ofizial-kategoria, 15.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 20 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

d) Ofizial-ondoko kategoria, 15.000 biztanle baino gutxiago eta plantillan 5 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan.

6. Goragoko kategoria bat eratzeko, azpiko beste kategoria guztiek aurrez eratuta egon beharko dute.

Berrogeita hamazortzi. Hau da 119. artikulua testu berria:

“119. artikulua

Udaltzaingoaren buruzagitzako lanpostuei dagokien kategoriari dagokionez, buruzagitza pertsona bakar baten esku dagoenean, udaltzaingoarentzat onartutako hierarkia-egiturako gorengo kategoriari egokituko zaio, aurreko artikuluan ezarritako irizpideei jarraikiz.”

Berrogeita hemeretzi. Hau da 120. artikulua testu berria:

“120. artikulua

1. Udal batek premiaz eta aldi baterako lanpostuak bete behar dituen udaltzaingoko zenbait kategoriatan, lege ezarritako udalen arteko lankidetzak bitartekoen arabera jokatu ahalko du, edo zenbait bitarteko funtzionario izendatu, funtzio publikoko legeria orokorrean ezarritakoaren arabera, betiere bitartekoei beren zereginetan jarduteko oinarritzko prestakuntza ematen zaiela bermatzen badu.

2. Toki-erakundeek Ertzaintzaren laguntza eskatu ahal izango diote segurtasun-arloan eskumena duen sailari, udaltzaingoari dagozkien polizia-funtzio hutsetan, bai eta zeharbide urbanoetan trafikoa antolatu eta zuzentzeko ere, polizia-kidegorik ez badute edo, izanda ere, beren eskumeneko zerbitzu guztiak emateko baliabide nahikorik ez badute. Azken kasu horretan, lankidetzak ezingo du iraunkorra izan.”

3. Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak lan-poltsak osatu ahal izango ditu, bitarteko funtzionarioak udaltzaingoan izendatzeko, berak antolatutako oinarritzko ikastaro bat gainditu dutenekin. Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak zehaztuko ditu ikastaroa egiteko baldintzak”

Hirurogei. III. kapitulua gehitzen zaio V. tituluari ("Mugikortasun-agenteak"), eta honela geratzen da:

“ III. kapitulua- Mugikortasun-agenteak.

121. artikulua

1. Biztanle ugari duten udalerrietan, Udalbatzaren Osoko Bilkurak funtzionario batzuk izendatu ahalko ditu hirigunean trafikoa antolatzeko, seinaltatzeko eta arautzeko funtzioak

esklusiboki betetzeko, trafiko eta bide-segurtasuneko arauetan ezarritakoaren arabera: mugikortasun-agente deituko dira. Hori egiteak ez du ekarriko agente-kopurua handitzea, ezta langile-kostuak ere.

2. Beren eginkizunak gauzatzean agente-agentetzat joko dira, tokian tokiko Udaltzaingoko langileen mende, baina kidego horietan sartu gabe; ezin izango dituzte eraman su-armak eta haien uniformeak argiro bereiztu beharko dira udaltzaingoak berezko dituenetik.”

3. Plaza horiek eskuratzeko, C-2 klasifikazio-taldeari edo baliokideari dagokion titulazioa eduki beharko da, eta aldez aurretik ikastaro teoriko-praktiko bat gainditu beharko dute, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademian edo hark izendatutako beste ordezkoko udal-ikastegietan, eta beste gainerako kontuetarako tokiko funtzionarioentzat aurreikusitako arau erkidearen arabera jo beharko dute.”

Hirurogeita bat. *Hogeita bigarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:*

“Hogeita bigarren xedapen gehigarria

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioek, baldin eta kondizio hori galdu badute erretiroa hartu dutelako, kidegoko kide erretiratuaren kondizioari eutsiko diote, erretiroa hartzerakoan zuten kategoriarekin, eta uniformea jantzi ahalko dute ekitaldi instituzional eta sozial hotsandikoetan, agiri profesionala izan eta ikur-plaka gorde, zeinak behar bezala aldatuko baitira erregelamendu bidez ezartzen den moduan. ”

Hirurogeita bi. *Hogeita hirugarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:*

“Hogeita hirugarren xedapen gehigarria.

Zerbitzu aktiboaz besteko egoeretan dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioek, bai eta erretiroa hartzeagatik funtzionario-kondizioa galdu dutenek ere, baldin eta judizio batean bertaratu behar badira lekuko edo peritu gisa zerbitzu aktiboan eman zuten denborarekin zerikusia duten gertakariak edo ikerketak direla-eta, zerbitzu-arrazoia dela eta aktiboan dauden funtzionarioentzat aurreikusitako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango dute. Judizioan bertaratu daitezen errazte aldera, oraingo helbidea jakinarazi beharko diote Administrazioari.”

Hirurogeita hiru. *Hogeita laugarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratzen da idatzita:*

“Hogeita hirugarren xedapen gehigarria.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak krimen-ikerketari eta polizia judizialari buruzko prestakuntza-jarduera espezifikoak antolatu ahalko ditu udaltzaingoentzat, betiere azken horiek ildo horretarako ekainaren 28ko 15/2012 Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legearen 44.3. eta 4. artikuluetan aurreikusitako lankidetzak hitzarmenak sinatu badituzte.”

Hirurogeita lau. Hauek guztiak kentzen dira: hirugarren xedapen gehigarria, zortzigarrena, hamabigarrenaren lehenengo eta hirugarren atala, eta hamaseigarrena, bai eta xedapen iragankorretatik, lehena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, zazpigarrena, zortzigarrena, bederatzigarrena, hamargarrena, hamaikagarrena eta hamabigarrena ere.

Hirurogeita bost. “Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria” jartzen da 42.2 eta 67.1 artikuluetan Ertzaintzaren Aldizkaria agertzen den aipamenetan.

Hirurogeita sei. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legean, “Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia” aipatzen den guztietan, “Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia” jarriko da; eta “Barne Saila” edo haren organoak aipatzen direnean, berriz, “Eusko Jaurlaritzan Segurtasun-arloko eskumena duen saila” jarriko da.

LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Martxan dauden hautaketa-prozesuak eta lanpostuak betetzeko prozesuak.

Gaur egun indarrean dauden hautaketa-prozesuak eta lanpostuak betetzeko prozesuak beren deialdiko arauen arabera izaten jarraituko dute.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Kondekorazio-erregimena eta zerbitzu-ekintza.

Harik eta 79 bis eta 80 artikuluetan ezarritakoa erregelamendu bidez garatu arte (zerbitzua ematerakoan gertatzen den heriotza eta nahitaezko erretiroa direla-eta ematen diren prestazioei eta ohorezko aitopenen erregimen berriari buruzkoak dira), lege honen aurka ez dagoen guztian, urriaren 16ko 202/2012 Dekretuan eta urtarrilaren 26ko 27/2010 Dekretuan ezarritakoa aplikatuko da (lehena Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzeko da, eta bigarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzainen kidegokoei aplikatutako kondekorazio-eta sari-erregimenari buruzkoa).

Hirugarren xedapen iragankorra.- Diziiplina-espedienteak.

Aurreko xedapenek arautuko dituzte arau hau indarrean sartzen den unean izapidetzen ari diren diziiplina-espedienteak, salbu eta arau honetakoak espedientatutako pertsonaren aldekoagoak badira.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.-Superintendente-kategoria.

Sei hilabeteko epean, Ertzaintzaren lanpostuen zerrenda aldatuko da, superintendente-kategoriarako erreserbatutako lanpostuak lege honetan ezarritakoaren arabera egokitzeko.

Aldaketa hori egin arte, legea indarrean hasten denean superintendente-kategoriako lanpostuak betetzen dituztenek jarraituko dute kategoria horri esleitutako ordainsariak jasotzen, aurreko arauen arabera.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Langileak oinarritzko eskalan sartzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako langileek, baldin eta lege hau indarrean hasi aurretik ezarritako prozeduretan Ertzaintzaren edo Udaltzaingoen Oinarritzko Eskalako agentearen izendapena lortu badute, ondorio guztietarako sartuko dira lege honetan aurreikusitako kategoria eta sailkapen-talde berrietan, abenduaren 13ko EDU/3497/2011 Aginduan (abenduaren 26ko BOE) ezarritako baliokidetzak egiaztatuz. Haren bidez ezarri da, hain zuzen, Ertzaintzaren Oinarritzko Eskalako Agentearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoko Kidegoetako Agentearen baliokidetzak hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketako teknikari-tituluarekiko.

SEIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Udaltzaingoko funtzionarioak goi-mailako eskalan sartzea.

1. Intendente-kategoriako Udaltzaingoko funtzionarioak berez sartzen dira goi-mailako eskalan. Orobat, komisario eta azpikomisario kategoriako funtzionarioak berez sartzen dira eskala betearazlearen barruan.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea indarrean sartu aurretik A mailako lanpostua lortu zuten eta horren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortutako plaza baino maila baxuagoko kategorietan sartu ziren Udaltzaingoko kidegoetako funtzionarioak goi-mailako eskalan sartuko dira, eragindako kategoria bakoitzeko lehentasun hierarkikoaren arabera eta baldin eta eskala horri dagokion titulazio akademikoa badute".

3. Eskala horretan sartzeak ezingo du ekarri gastu publikoa handitzerik, ez eta jasotzen duten guztizko urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarrizko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Udaltzaingoko burutza-lanpostuak egokitzea.

1. Lege hau indarrean sartu eta hiru urteko epean, polizia-kidegoa duten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek kidego horietako burutza-lanpostuak egokitu egin beharko dituzte, lege honek agindutakoarekin bat etortzeko.

2. Udaltzaingoko funtzionarioek, lege honetan ezarritakoaren arabera egokitu behar diren kidegoko burutza-lanpostuak betetzen dituztenean, jarraituko dute lanpostu horiek betetzen izendatu zituztenean ezarritako baldintza berberei jarraikiz, eta betetzen duten lanpostuari esleitutako ordainsariak jasoko dituzte.

Langile horiek birkalifikatutako postuari dagokion kategorian sartuko dira, betiere baldintza hauek betetzen badituzte: leku berean izatea lege hau indarrean sartu aurreko bost urteetan behin betiko destinoa; kategoria horri dagokion titulua edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen 59.2 artikuluan aurreikusitako gaikuntza-ikastaroak izatea, edo egokitzapena baino lehen deitutakoak; eta Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak emandako egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktikoa gaindituta izatea, zeinean kontuan hartuko baitira esperientzia profesionala, espezializazioko eta gaikuntzako ikastaroak eta aurrez eskatutako ezagutzak.

Eskala horretan sartzeak ezingo du ekarri gastu publikoa handitzerik, ez eta jasotzen duten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarrizko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

ZORTZIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Alguazilak.

1. Udaltzaingorik ez dagoen lekuetan, alguazilak, zaintzaileak edo antzeko funtzioak dituzten funtzionarioak alguazilak deituko dira, edozein izendapen dutela ere.

2. Lege hau indarrean sartzen denean lege honen arabera alguazil gisa eratutako postuak betetzen dituzten langile finkoek postu horietan jarraitu ahal izango dute, eta lege honetan eginkizun horiek betetzerakoan haientzat ezarritako babes juridikoa izango dute. Halaber, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez deitutako barne sustapeneko hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izango dute, alguazil izateko lehia askeko hautaketa-prozesuekin batera ala ez, betiere titulazioaren baldintza eta gainerakoak betetzen badituzte; ondorio horietarako, meritu gisa baloratuko dira lan-kontratudun langile finko gisa emandako zerbitzuak eta izaera hori eskuratzeko gainditutako hautaketa-probak.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Alguazilak udaltzaingoan sartzea.

Udaltzaingoa sortzen denean udalean zerbitzuak ematen ari ziren alguazilak Udaltzaingoan sartuko dira, behin lehiaketa mugatua gaindituta, adinaren eta altueraren baldintzetatik salbuetsita, eta Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak ezartzen duen ikastaroa gaindituta.

Udaltzaingoaren kidego berrian sartzeko prozedura gainditzeko ez dutenek jarraituko dute beren funtzioak egiten ezabatu beharreko postuetan.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENA.- Testu bategina prestatzeko gaikuntza.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legea indarrean sartu zenetik lege horri sartu zaizkion aldaketak testu bakar batean egonkortzeko, baimena ematen zaio gobernuari, aipatu arauaren testu bategina egiteko eta onartzeko, segurtasun-arloan eskumena duen sailak proposatuta, lege hau indarrean sartzeko denetik hamabi hilabeteko epean, berriz ere zenbatuz behar beste artikulua, kapitulu eta xedapen, legeek beren baitan beste arau batzuetara egiten dituzten bidalketak egokituz, hizkuntzaren erabilpena ez sexista egiteko egokituz, eta bategin egin beharreko legeko testuak arautuz, argituz eta armonizatuz.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.- Indarrean jartzea.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.



III

**INFORME RESPECTO A LA VIABILIDAD JURÍDICA DE QUE SE VUELVA A RETOMAR
POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO
EL 26 DE ABRIL DE 2016**

**TXOSTENA, 2016KO APIRILAREN 16AN ONARTUTAKO LEGE-PROIEKTUAREN
TESTUA GOBERNU KONTSEILUAK BERRIRO HARTZEAK DUEN BIDERAGARRITASUN
JURIDIKOARI BURUZKOA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN
BOSGARREN ALDAKETA LEGE
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



OPINIÓN LEGAL: Viabilidad jurídica de que se vuelva a retomar por el Consejo de Gobierno el texto del proyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco, y remitirlo al Parlamento Vasco admitiéndose como válidos los trámites procedimentales realizados anteriormente.

55/2018 DDLCN-OL

1. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de junio de 2018, desde la Asesoría Jurídica del Departamento de Seguridad, se dirigió a esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo una consulta en la que, tras una exposición de los eventos acaecidos desde la aprobación del proyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, se solicitaba la opinión legal de esta Dirección sobre la viabilidad jurídica de que se volviera a aprobar la remisión por el Consejo de Gobierno del citado proyecto de Ley (sin modificaciones sustanciales) y que fue aprobado por éste en su sesión de 26 de abril de 2016, y que pese a haber iniciado su tramitación durante la pasada X Legislatura, en vía parlamentaria decayó por la finalización de dicha legislatura.

La opinión legal que se solicita, centra la cuestión fundamental en el acto de Consejo de Gobierno de remisión al Parlamento del Proyecto de Ley ya aprobado, puesto que ello se haría en los mismos términos en los que se aprobó en su día dicho proyecto de Ley en la anterior legislatura. Con ello se pretende no reiterar procedimientos ya realizados, y considerar los trámites realizados anteriormente como válidos y eficaces, toda vez que el decaimiento de tramitación parlamentaria en ninguna parte del ordenamiento jurídico sanciona a éstos con nulidad.

Anteriormente se ha referido que el proyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco se pretende remitir al Parlamento en los mismos términos “sin modificaciones sustanciales”. Esto quiere decir que el que ahora se pretende remitir no es idéntico al aprobado en la anterior legislatura, pues el ahora sometido a este informe tiene dos modificaciones con respecto a aquél, que la Dirección remitente considera como sobrevenidas y no esenciales, a saber:

- a) *“La introducción en la parte expositiva de dos nuevos párrafos, con el fin de hacer referencia a los acuerdos de la Junta de Seguridad de 14 de junio de 2017, así como a la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía.*

- b) *El cambio de denominación de la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco, que se ha considerado más oportuno denominar "Comisión de Control y Transparencia de la Ley de Policía del País Vasco"*

Por la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, se emite el presente informe, en virtud de las funciones atribuidas al Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco por el artículo 5.2 de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco; de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.h) del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, así como en base a las competencias atribuidas a la citada Dirección, por el artículo 14.1.a), del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y el Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco.

2. CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO Y DISTINCIÓN RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN ADMINISTRATIVO

El Capítulo IX del reglamento del Parlamento Vasco, trata de la caducidad de las tramitaciones parlamentarias, señalando, con carácter general, en **su artículo 130**, que

*«Disuelto el Parlamento Vasco o expirado su mandato, **caducarán todos los asuntos en tramitación** con excepción de los que corresponda conocer a la Diputación Permanente o que deban prorrogarse por disposición legal.»*

Por tanto, independientemente de otros factores a los que luego atenderemos, el punto de partida de este análisis sobre las posibilidades de reiterar la iniciativa legislativa ejercida mediante el correspondiente acuerdo de Consejo de Gobierno, debe ser el clarificar la naturaleza e incidencia de dicho precepto sobre los proyectos y anteproyectos de Ley aprobados por Consejo de Gobierno.

Como decíamos en nuestros informes ("Opiniones legales" en términos del Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco) DDLCN 51/2017, 56/2017 y 61/2017, del contenido del artículo 130 del Reglamento del Parlamento Vasco, resulta evidente que acaecida su disolución o expirado su mandato por el transcurso del tiempo (a salvo las proposiciones de ley fruto de una iniciativa

legislativa popular, que son prorrogadas conforme al inciso final del mismo en virtud del artículo 12 de la Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular) todas las demás iniciativas y, por tanto, todos los proyectos de ley remitidos al Parlamento por el Gobierno Vasco –en el ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa, tal y como se reconoce en los artículos 16 y 18.a) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno (LG)– caducan en su tramitación parlamentaria.

Ahora bien, como también decíamos en aquél informe, siendo doctrina ya consolidada la referida a que –y salvo contadas excepciones– «*caducan*» los procedimientos, y «*prescriben*» los derechos, decaído un procedimiento por caducidad, el derecho pretendido puede volverse a ejercerse en otro procedimiento, en tanto en cuanto, el derecho no ha prescrito. Así, de entrada, *“es completamente indubitado que, en términos estrictamente parlamentarios, el nuevo Gobierno Vasco, en tanto que detentor del derecho de iniciativa legislativa, es plenamente capaz de reiterar ante la nueva cámara salida del correspondiente procedimiento electoral las iniciativas aprobadas por el anterior gabinete en sus mismos términos, por cuanto la caducidad de la iniciativa no se transmite al derecho del Gobierno para su presentación”*.

Por tanto, como ya sucediera con el citado Informe DDLCN 51/2017 (del que extraeremos, aún a riesgo de resultar redundantes, la mayor parte de las consideraciones que verteremos en este que nos ocupa), este informe debe circunscribirse a los eventuales efectos de la retirada o de la disolución del Parlamento, exclusivamente, sobre los procedimientos administrativos que sirvieron de base a la presentación por el Gobierno Vasco del correspondiente proyectos de Ley. Es decir, debe atender o descartar, únicamente, los potenciales efectos sobre la tramitación gubernativa o administrativa, y a su expediente, con independencia de la terminación o de la caducidad producida con respecto a la tramitación parlamentaria y su respectivo expediente.

Así mismo, cumple advertir que **este informe se circunscribirá también a la validez formal o procedimental, a día de hoy, de los actos de tramitación efectuados de forma previa a la aprobación y remisión al Parlamento del correspondiente proyecto de ley, sin atender a la actualidad o vigencia, desde un punto de vista material o de fondo, del proyecto o de sus premisas jurídicas**. Cuestión esta última que, obviamente, trasciende el objeto y el alcance de esta consulta.

3. ESPECIAL NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES CUANDO ES APLICADO A LOS ANTEPROYECTOS DE LEY

Como ya sucediera en el caso analizado en las opiniones legales DDLCN 51/2017, 56/2017 y 61/2017, de lo anterior debe extraerse que el punto de partida más adecuado para dar contestación a la pregunta que se nos plantea debe ser el estudio de la exegesis procedimental de estos “*anteproyectos de ley*” generados dentro de Ejecutivo y de forma previa a su aprobación remisión al Parlamento como “*proyectos de ley*”, al amparo, principalmente, de lo previsto en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de disposiciones generales del País Vasco (en adelante LPEDG). Incluyendo en el análisis todos los trámites preceptivos a los que se refieren los artículos 8 a 11 y cuya culminación concluye con la toma en consideración del Consejo de Gobierno que decide su aprobación final o no conforme al artículo 13 del mismo texto. Y ello porque, como dispone su exposición de motivos «*en el caso de las leyes, el procedimiento administrativo sólo comprende la fase previa a la iniciación del procedimiento legislativo stricto sensu, cuya regulación está establecida en el Reglamento del Parlamento Vasco*».

Ello no obstante, la nítida separación que venimos realizando respecto del procedimiento parlamentario caducado obliga a que este examen de las exigencias legales deba seguir la doctrina firmemente establecida de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), en el sentido de que *«cuando valora el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley toma en cuenta el distinto papel que aquél tiene en las normas legales y en las normas reglamentarias, tal y como se reconoce en la propia LPEDG»* (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 55). La diferencia con las iniciativas reglamentarias, en lo que ahora importa, introduce en el examen del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley una obligada flexibilidad y un carácter eminentemente material y anti-formalista. Y ello porque: *«Es en sede parlamentaria donde se desenvuelve con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la Constitución (CE) o el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) o, en algunos casos, las leyes orgánicas, imponen condiciones a su adopción, la única exigencia que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre ellos: cuando menos, la memoria general, anejo de financiación e informe de control económico en aquellos proyectos que comportan un gravamen al presupuesto, el dictamen de este órgano consultivo y los informes que, con arreglo a la legislación, sean preceptivos (artículo 57 de la Ley de Gobierno y artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara)»* (Dictamen N°: 120/2014 sobre anteproyecto de Ley de la Administración Pública Vasca; párrafo 85).

La especial naturaleza de los anteproyectos de ley permitiría relativizar incluso dicha exigibilidad de los informes preceptivos. El Tribunal Constitucional en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, que desestimaba un recurso contra la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que carecía del preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, estimó que: *«la ausencia de un determinado precedente sólo tendrá trascendencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero, en este caso, el efecto, que tuvo que ser conocido de inmediato, hubiese debido ser denunciado ante las mismas Cámaras y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese. No habiéndose producido esa denuncia, es forzoso concluir que las Cámaras no estimaron que el informe era un elemento de juicio necesario para su decisión, sin que este Tribunal pueda interferirse en la valoración de la relevancia que un elemento de juicio tuvo para los parlamentarios»*. Y más adelante aplica la misma doctrina por lo que se refiere a la falta de remisión al Congreso por el Gobierno de la exposición de motivos y de la memoria explicativa del proyecto de ley. No faltó la remisión de estos antecedentes sino que se hizo tardíamente, a juicio de los recurrentes. Pero, aunque hubieran faltado, dice el Alto Tribunal que: *«El defecto indicado sólo tendría relevancia si hubiese menoscabado los derechos de Diputados o grupos parlamentarios del Congreso, y siendo los hechos, en caso de ser ciertos, plenamente conocidos por ellos sin que mediase protesta por su parte, hay que entender que los afectados no consideraron que existiese lesión de sus derechos, y que, si defecto hubo, fue convalidado por la misma Cámara, por lo que este Tribunal no puede entrar a examinar su*

existencia o relevancia». En otras palabras, el Tribunal entiende que sólo puede considerarse necesario aquello que la propia Cámara estima como tal.

Bien es cierto que, en nuestro ordenamiento, la referencia por el artículo 133.2 del Reglamento de la Cámara a los informes preceptivos es explícita, lo que habilita perfectamente a la Cámara para exigirlos como requisito de admisibilidad del proyecto de ley que le sea remitido. Lo que a su vez nos vuelve a remitir a la LPEDG y su exégesis, aunque sea desde una lectura flexible y finalista.

Siguiendo nuevamente a la COJUA *“para realizar su análisis —material y esencialmente finalista— del procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha sistematizado las pautas de la LPEDG y viene distinguiendo: (i) una fase inicial, que se desenvuelve en el seno del órgano promotor de la iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, exteriorizar las razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada caso resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites ; (ii) una fase de apertura del procedimiento a los sectores y administraciones potencialmente afectadas por aquella; (iii) una fase de informes —preceptivos y facultativos—; y (iv) una fase final, en la que el órgano impulsor, tras evaluar el entero iter procedimental, establece el texto definitivo y elabora los documentos finales —memoria justificativa y económica—”* (Dictamen 129/2015 sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco; párrafo 56).

Tanto la COJUA como esta Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo tienen expresamente dictaminado (aunque principalmente respecto de la tramitación de iniciativas reglamentarias) que **el cambio de legislatura y de gabinete en el ejecutivo no produce por sí mismo, en modo alguno, una caducidad de los procedimientos de elaboración de las normas**, ni determina que devengan inválidos los trámites realizados en el seno de dichos procedimientos. Así, es práctica común, validada tanto por esta DDLCN como por la COJUA, que los trámites iniciados por una Consejera o Consejero anterior se den por buenos y formen parte, de forma natural, del expediente que el Consejero o Consejera que lo sustituya en la legislatura siguiente remita a la aprobación en Consejo de Gobierno. De esa manera, la tramitación iniciada en una legislatura se ha continuado en la siguiente sin interrupción ni solución de continuidad (por todos, entre los dictámenes de nuestro máximo órgano consultivo podemos citar: Dictamen 203/2009 sobre el proyecto Decreto de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi, párrafos 2 y 37; Dictamen 217/2009 sobre proyecto de Decreto por el que se regula el desarrollo y aplicación en la CAPV de la reglamentación comunitaria en el sector de frutas y hortalizas y el régimen de ayudas derivadas de la misma, párrafos 1 y 30; Dictamen 64/2013 «Proyecto de Decreto sobre el Consejo Económico y Social Vasco», párrafos 2 y 34).

Dicho de otra manera, la cuestión de la validez jurídica de esos actos de tramitación es independiente de que los mismos fueran o no anteriores a la disolución del Parlamento o a la conformación de un nuevo Gobierno, puesto que **la Administración es una, con una única personalidad jurídica para toda su estructura y todas sus funciones** (artículos 53 de la LG y

3.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público –en adelante LRJSP–), **independientemente de los cambios de Gobierno como titular de la misma**. Si esto es así, la autoría de los actos de tramitación, y por tanto su validez, permanece inalterable no obstante el cambio de titular del Ejecutivo.

En sentido estricto, no es necesario ningún acto específico de «*conversión*», «*conservación*» o «*convalidación*» de los trámites ya realizados en la legislatura anterior (figuras estas previstas en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –en adelante, LPACAP– como medidas de subsanación de los vicios de determinados actos), en la medida en que dichos trámites realizados en el seno del procedimiento de elaboración no devienen nulos ni pierden valor por el cambio de legislatura (artículos 47, 48 y 49 de la LPACAP). Y ello, a pesar de ser idéntica la lógica de economía procesal que subyace en la LPEDG, que postula la necesidad de, en la medida de lo posible, conservar la validez de las actuaciones realizadas hasta ese momento (art. 4.2 LPEDG).

Consecuentemente, y toda vez que no es precisa esa «economía procedimental de conservación», sólo será preciso la realización por el órgano competente de trámites procedentes para el impulso del procedimiento en sus diversas fases, sea ordenando su continuación o con ocasión de cualquiera de los hitos del procedimiento marcados por la LPEDG y la LG (orden de inicio, orden de aprobación previa, orden de solicitud de dictamen de la COJUA, proposición del texto definitivo de la norma al Consejo de Gobierno...).

Estos actos de impulso de la tramitación, en sí mismos, implican una asunción de la tramitación precedente y, por tanto, una valoración de su eficacia formal y material, que no sólo debe conectarse con el cumplimiento formal del expediente, sino que debe también atender a la utilidad real de los mismos al objeto de dotar al órgano decisor de los elementos de juicio adecuados para ajustar la norma a la coyuntura de cada momento, sea el órgano decisor el Gobierno, en el caso de las normas reglamentarias, sea aquél el Parlamento en el caso de los proyectos de Ley.

Por consiguiente, para decidir si se considera oportuno continuar con la tramitación desde un momento concreto de un procedimiento anterior, a fin de que no sea preciso reiniciarlo nuevamente, o para asumir y dar por buenos todos los trámites ya realizados, **deben tenerse en cuenta todos los factores circunstanciales que en el procedimiento concurren**.

Uno de estos factores circunstanciales será la constatación de si la norma ha sido objeto de anteriores tramitaciones que de reiterarse impliquen una duplicidad de actuaciones, al objeto precisamente de no duplicar trámites innecesariamente y agilizar el procedimiento. Otro, si razones de urgencia debidamente acreditadas justifican la necesidad de prescindir de alguno de los trámites, incluso cuando no se hubieran llevado a cabo, salvo cuando vengan exigidos por normas con rango de Ley (Dictamen nº 129/2015 de la COJUA sobre anteproyecto de Ley de transparencia, participación y buen gobierno del sector público vasco, párrafos 55, 59, 63 u 85).

También habrá de considerarse si en el ínterin han sobrevenido o no importantes cambios normativos o sociales que determinen la pérdida de actualidad o valor informativo de los trámites realizados hasta la fecha.

Del mismo modo, es también evidente que, sin soslayar las finalidades materiales a las que responde el proceso de elaboración, el hecho de simplificar o no la tramitación administrativa debe ser un criterio relevante a la hora de realizar esa valoración, pues resultan plenamente aplicables al procedimiento de elaboración de la norma los mismos principios de buena regulación que son aplicables a las normas que serán fruto de dicho procedimiento. De forma que «en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia» (artículo 129 de la LPACAP).

En todo caso, lo dicho hasta ahora **es aplicable a todos los actos del procedimiento administrativo previo a la remisión al Parlamento, desde la orden de inicio hasta el acto de aprobación por el Consejo de Gobierno, ambos inclusive**, siendo predicable el mantenimiento de la validez jurídica de los actos administrativos y el principio de conservación de los actos a todos ellos, incluido este último de remisión, debiendo ser tan solo objeto de valoración su vigencia material, en el sentido de los párrafos anteriores.

Pues bien, cuando hablamos de «*anteproyectos y proyectos de ley*», que implican la remisión al parlamento como otra fase añadida posterior al procedimiento de elaboración, esta valoración atañe tanto al Consejero o Consejera (que tendrá la responsabilidad durante el procedimiento previo y también en la decisión de su elevación al Consejo de Gobierno), como al propio Gobierno, como titular de la iniciativa legislativa ante la Cámara (que deberá efectuar esa misma valoración a la hora de aprobarlo y de decidir el momento de la remisión al órgano legislativo junto con los documentos preceptivos o la realización de cualquier otra actuación complementaria, tal y como dispone el artículo 13 LPEDG). Será por tanto, responsabilidad de dichos órganos, cada cual en el momento correspondiente, despejar cualquier duda que pudiera existir al respecto, incluso si para ello fuera necesario recabar, de sus propios servicios o de otros órganos, los informes que resulten pertinentes o si fuera necesario requerir algún trámite adicional o reiterar cualquiera de los ya efectuados.

Y ello, sin perder de vista que, como ya hemos dejado sentado, incluso la importancia de una eventual modificación sobrevenida del ordenamiento o cualquier otra circunstancia coyuntural que se hubiera dado en el ínterin y que afectara al proyecto, debería ser sopesada de una forma relativa, puesto que el «*proyecto de ley*», aún después de ser remitido a la Cámara y transformarse el procedimiento en parlamentario, ha de ser sometido a su tramitación en aquella sede. Tramitación parlamentaria durante la cual, y previo a su aprobación final y convertirse en Ley, el proyecto puede ser sujeto de enmienda por la Cámara, de forma que también en ese momento se podrán realizar los ajustes que resulten pertinentes.

En el caso concreto que se informa, la afirmación de la validez formal de los actos de tramitación previos que se pueda deducir de esta Opinión legal no releva al Departamento

promotor, en tanto que responsable del impulso del procedimiento y detentor del conocimiento sectorial especializado en el asunto, de ponderar si esta afirmación sobre la cuestión de fondo es o no correcta.

Ya hemos advertido que no es objeto de este informe el análisis material o de fondo del proyecto concreto por el que ahora se nos pregunta. Si bien en una preliminar aproximación al mismo, y a partir exclusivamente de la presunción de que la consulta que se nos dirige se sustenta sobre una ponderación previa de la oportunidad de relanzar el texto aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de abril de 2016, no parece que existan razones de fondo, o cambios normativos relevantes que, independientemente de la mentada validez formal de los efectuados en su día, impidan a día de hoy la aprobación del mismo texto que fue aprobado en su día.

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA E INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO COMO TRÁMITES ESPECÍFICOS.

Aunque la Disposición Adicional Segunda de la LPEDG, por razones estrictamente históricas (se aprobó un año antes de que se promulgara la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi o LCOJUA) se remite al Decreto 187/1999, de 13 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, es la LCOJUA (en concreto su artículo 3.1.a) la que, fuera de la LPEDG pero por remisión de la misma, regula la cuestión de la preceptividad del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA).

Conforme al citado artículo, la COJUA *«debe ser consultada»* en relación con todos los *«anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos...»* (excepto los de presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y los de metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales). Hasta aquí, lo dicho hasta ahora sobre el resto de trámites sería también aplicable al dictamen del alto órgano consultivo, cuya validez jurídica no resulta alterada por el cambio de Gobierno o por la caducidad de los expedientes parlamentarios a resultas de la disolución de la cámara.

Ahora bien, la especial naturaleza de este dictamen, ratificada por la jurisprudencia constitucional, hace que nuestro informe deba dedicarle un apartado específico. Como la propia COJUA explicaba en su dictamen nº 084/2003 sobre el anteproyecto de Ley de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco (párrafo 25), la interpretación que la jurisprudencia constitucional ha hecho del artículo 107 de la Constitución Española (CE) *«a juicio del Tribunal Constitucional, supone una suerte de constitucionalización de la "función consultiva superior", no del órgano, Consejo de Estado. Es el alto asesoramiento a la administración activa el que se convierte, por mor de aquél precepto, en un instrumento de relevancia constitucional, al configurar una "importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo»*. Se trata, afirma el Tribunal, *«...de una función muy*

cualificada que permite su subsunción en la categoría de norma básica del régimen jurídico de las administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común (artículo 149.1.18ª CE)».

Es esta singular y cualificada naturaleza del trámite la que justifica que el dictamen de la COJUA merezca una mención específica (junto con el informe previo de control económico normativo de la OCE) por el artículo 133 del reglamento del Parlamento entre los documentos que deben acompañar a todo proyecto de ley que sea remitido a la cámara. Y es la razón también que motiva la mención introducida en la LG por la Ley 8/2016, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, al dar a los artículos 56 y 57 de la LG la siguiente redacción:

Artículo 56

1. El Gobierno, en la fase inicial de elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto que deban ser remitidos a la Comisión Jurídica Asesora, únicamente enviará al Parlamento Vasco el texto de la disposición, una vez tenga la aprobación previa del órgano que haya dictado la orden de iniciación.

2. Asimismo, la misma documentación que se envíe a la Comisión Jurídica Asesora se remitirá, al mismo tiempo, al Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos parlamentarios.

3. Los anteproyectos de Ley y los proyectos de Decreto que hayan de ser acordados por el Gobierno, serán remitidos al Secretario del Gobierno, que procederá a su reparto. Se incluirán en el Orden del Día cuando los Departamentos interesados hayan manifestado su conformidad sobre el contenido, en la forma que el propio Gobierno establezca. No habiendo conformidad, o siendo ésta condicionada, corresponderá al Lehendakari decidir la inclusión del asunto en los debates del Consejo.

Artículo 57

1. Los proyectos de ley presentados al Parlamento Vasco habrán de ir acompañados del informe de la Comisión Jurídica Asesora y, en su caso, de la memoria de adaptación a dicho informe.

2. Si los Proyectos de Ley comportasen un gravamen al Presupuesto, deberán ir acompañados del correspondiente anejo de financiación que será discutido y votado con arreglo a lo que disponga el Reglamento del Parlamento sobre los Proyectos de Ley.

Cabe, por tanto, preguntarse si estos artículos implican especiales obligaciones de comunicación al Parlamento cuando se pretenda rescatar la tramitación de proyectos de ley elaborados durante legislaturas anteriores. De entrada, debe distinguirse (i) si de lo que hablamos es de continuar una tramitación previamente iniciada en la que no se hubieran producido aún la aprobación previa del texto (en cuyo caso será necesario cumplimentar la comunicación requerida por el artículo 56.1 LG), o bien si dicho procedimiento tenía aún pendiente el trámite de solicitud de dictamen a la COJUA (en cuyo caso sería necesario remitir al Parlamento todo lo dispuesto por el artículo 56.2 LG) (ii) de la situación en que nos encontramos ante un anteproyecto o un proyecto que sólo tuviera pendiente la aprobación del Consejo de

Gobierno o la de adoptar el acuerdo por este órgano de su remisión al Parlamento, bien por vez primera o bien por reiteración de otro acuerdo de remisión previamente efectuada (en cuyo caso nos encontraríamos ya en los casos previstos por los artículos 56.3 y 57 LG, y 133 del Reglamento del Parlamento).

Así mismo, cuando el anteproyecto o proyecto en cuestión hubiera llegado a ser dictaminado por la COJUA, a la vista de lo previsto en el artículo 29 LCOJUA, cabe también preguntarse si es suficiente en los casos anteriores con adjuntar el dictamen emitido en una legislatura anterior o si sería necesario la solicitud de un nuevo dictamen.

Dicho precepto determina que: «Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que verse es objeto de modificaciones sustanciales que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos cambios» Por tanto, del literal de la norma cabe colegir que, independientemente de que el dictamen hubiera sido o no emitido bajo un Gabinete anterior, **procederá un nuevo examen sólo si en la propuesta de proyecto de ley que se vaya a presentar de nuevo a Consejo de Gobierno para su aprobación o remisión concurren «modificaciones sustanciales»**, concepto jurídico indeterminado para cuya concreción, siguiendo el literal del artículo y como tiene explicado la propia COJUA, habrá de estarse a la conexión de aquellas con el previo anterior dictamen.

A este respecto, resulta relevante atender a la doctrina de la propia COJUA respecto a la interpretación que debe darse al artículo 29 LCOJUA, siendo esta una doctrina firmemente establecida en sus dictámenes y acuerdos de inadmisión. Por todos, podemos traer a este informe las palabras del reciente Acuerdo nº 4/2017 del Pleno de la COJUA, al inadmitir una solicitud de dictamen en la sesión del día 26 de abril de 2017:

7. O, en otras palabras, como se señaló en el Dictamen 10/2000, la Comisión sólo tendrá que volver a examinar el asunto cuando de su nueva elaboración se colija la existencia de elementos o aspectos sustantivos distintos de los examinados en su anterior intervención y cuya relevancia reclamen un nuevo análisis.

8. Esta doctrina es coherente con la establecida por el Tribunal Supremo en relación con el Consejo de Estado y, por tanto, plenamente aplicable a los supuestos de intervención de esta Comisión.

9. De acuerdo con dicha doctrina, en síntesis, procede la nueva consulta cuando "...las innovaciones introducidas tras el dictamen del Consejo de Estado no han sido sugeridas por éste, son ajenas a los términos de la consulta y, además, ostentan una relevancia sustancial" (STS de 27 de mayo de 1993 —RJ 1993\102040—).

10. Los supuestos han sido precisados en posteriores pronunciamientos, así la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de marzo de 2009 (RJ\2009\5110) subraya "que no es necesaria una nueva consulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el texto o se introducen modificaciones no sustanciales (...), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son consecuencias lógicas del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por distintos

órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por fin, aprobada, pudiendo añadirse que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías procedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justifican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden, en cuya valoración han de tenerse en cuenta las especialidades de la disposición general de que se trate (...)."

11. La misma STS de 10 de marzo de 2009 recuerda que es jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 8 de marzo de 2006) que cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo de una disposición general no sean sustanciales resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o entidades representativas de intereses legítimos en relación directa con el objeto de la disposición o un nuevo informe o dictamen del Consejo de Estado, "entre otras razones porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la modificación tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una alteración sustancial en el ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido (...) al establecer un procedimiento para la elaboración de los reglamentos (...)."

12. E invoca también la STS de 31 de enero de 2001, por referencia a la Sentencia de 27 de mayo de 1993, valorando las modificaciones allí producidas, que no requerían nuevo dictamen del Consejo de Estado, "ya que es necesario compatibilizar el carácter final de dicho dictamen, como juicio de síntesis de todas las cuestiones planteadas e informes específicos emitidos con anterioridad, con el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno (...), de la que resultaría desapoderado este si hubiese de ajustarse literalmente en la redacción definitiva a dicho dictamen, pues sólo si se regulasen materias no incluidas en el Proyecto remitido a dictamen o su ordenación resultase completa o sustancialmente diferente, sin haber sido sugerida por el propio Consejo de Estado, debería recabarse sobre tales extremos nuevo informe, ya que el titular de la potestad reglamentaria ostenta la facultad de introducir en el texto remitido al Consejo de Estado las reformas que considere adecuadas para la redacción final sin otro límite que el expresado (...)."

13. La precedente doctrina sigue plenamente vigente, tal y como se desprende de la lectura de la STS de 22 de diciembre de 2016 (RJ 2017/106).

14. Procede, por tanto, examinar el texto del proyecto sometido a consulta, conforme al señalado criterio de la conexión de las innovaciones con las consideraciones del dictamen anterior, esto es, si derivan de las sugerencias del dictamen de la Comisión o si, ajenas a este, ostentan una relevancia sustancial que exija una nueva intervención preceptiva.».

También se debe de hacer en este apartado, en tanto que informe explícitamente mencionado por el artículo 133 del Reglamento del Parlamento, al informe de control económico normativo que debe hacer la Oficina de Centro Económico a los «anteproyectos de ley» en virtud

de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (LCEyC).

Este informe aunque previo al informe que ha de realizar la COJUA (art. 27.1 LCEyC), es también de singular trascendencia pues la determinación del contenido o del impacto significativo que los «anteproyectos de ley» puedan tener en la actividad económica pueden determinar la preceptividad de la emisión de tal informe (art. 41 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley 14/1994) o la necesaria información y audiencia a la ciudadanía del proyecto (art. 133.4 LPACAP).

Este informe de control económico normativo, tiene más que ver con el contexto que con el texto mismo del «proyecto de ley», pues su finalidad no es otra que hacer un pronunciamiento sobre si las disposiciones en él previstas repercuten o afectan, directa o indirectamente, en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco así como en el régimen presupuestario y de ejecución del gasto e ingreso público. A tal efecto, es de singular pertinencia el dictaminar sobre «la incidencia o repercusión de la norma o disposición en el régimen de la Tesorería General del País Vasco, patrimonial, contable, de contratación, tributario propio, de endeudamiento o de concesión de garantías vigente en cada momento» (art. 26.1.b de la LCEyC) o «la razonabilidad financiera en términos cuantificables de la norma o disposición propuesta.» (art. 26.1.b de la LCEyC). Aspecto este último que, entre otros muchos matices, tiene repercusión en la normativa denominada de «Estabilidad financiera de las Administraciones Publicas».

Es bien cierto que aunque este informe preceptivo fuera desfavorable y obstativo, el «anteproyecto de ley» podría continuar su *iter* procedimental hasta su elevación por el Consejero o Consejera competente a Consejo de Gobierno, el cual es libérrimo en su decisión de aprobación o no según venimos exponiendo a lo largo de este informe.

Ahora bien, cabe reiterarse la ya esencial pregunta que pretende dar respuesta ente informe: ¿Es precisa su nueva emisión de informe OCE en relación con un «proyecto de ley» ya aprobado por Consejo de Gobierno e independientemente de si este tomó el acuerdo de su remisión al Parlamento o no? ¿Podría bastar con el informe OCE emitido previamente incluso aunque, remitido éste al Parlamento, su expediente parlamentario hubiera caducado por la disolución de la Cámara?

La normativa que regula este control económico normativo no establece de forma específica sobre la necesidad de nuevo pronunciamiento. Solo hace referencia en el artículo 27.1 in fine de la LCEyC, a los supuestos de proyectos normativos en que deba dictaminar la COJUA y, toda vez que esta es la última en pronunciarse, «...con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo.».

Es decir, sólo «deberá comunicarse», sin más trámites, la modificación introducida. No se debe formalizar un nuevo dictamen, y ello con independencia que el Consejero competente en

materia de Hacienda deba conocer de estas modificaciones por vía interna departamento y haga valer sus consideraciones en el Consejo de Gobierno.

Consecuentemente, y teniendo en cuenta las trascendentes repercusiones que cualquier normativa puede tener en la economía, quien esto informa cree que se debe ser consecuente con lo expuesto en los párrafos precedentes de este apartado, de forma tal que (i) si la COJUA no considera procedente pronunciarse sobre el reenvío de un proyecto de ley ya aprobado por Consejo de Gobierno al Parlamento, tampoco parece procedente que lo haga la OCE, y (ii) caso de que la COJUA decidiera que ha de pronunciarse sobre ese proyectos de ley, tampoco parece procedente que se pronuncie la OCE, sin perjuicio de que le sea comunicado el dictamen o parecer de ésta a los efectos legales oportunos, así como las modificaciones que en su caso se introdujeran.

Todo ello sin perjuicio de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41.2 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ley14/1994, **existe un deber de remisión del anteproyecto de ley a la OCE, a los efectos de su conocimiento del trámite y la valoración de la existencia o ausencia de contenido económico.**

5. LA DISTINCIÓN ENTRE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE LEY Y EL ACTO DE REMISIÓN A LA CÁMARA

Conforme a nuestra LG, es atribución de los Consejeros o Consejeras la presentación al Gobierno de anteproyectos que se deberán «*proponer para su aprobación por el Gobierno [como] Proyectos de Ley*» (artículo 26.8 LG en relación con el 55 LG). Los anteproyectos de ley «*se someterán a la toma en consideración del Consejo de Gobierno, que decidirá sobre su aprobación final en la misma sesión, o bien establecerá los criterios que hayan de tenerse en cuenta en su redacción final y las actuaciones que, en su caso, hayan de seguirse en su tramitación ulterior hasta dicha aprobación*» (artículo 13 LPEDG). Por su parte, corresponde el Gobierno «*aprobar los Proyectos de Ley para su remisión al Parlamento o determinar su retirada, en las condiciones que establezca el Reglamento de la Cámara*» (artículo 18.a LG).

En efecto, tanto la especial consideración de los anteproyectos de ley en comparación con la tramitación de las iniciativas reglamentarias, como la preceptividad de que sean tomados en consideración por el Consejo de Gobierno es un plus de especialidad en la tramitación, que reconoce la propia LPEDG al incluir el artículo 13 dentro de su Capítulo III, de «*Disposiciones Especiales*». Y ello porque, tal y como refiere en su Exposición de Motivos: «*Dada la especial relevancia de las leyes, se ha previsto con respecto a ellas un trámite específico de toma en consideración por el Consejo de Gobierno de los anteproyectos de ley. Su finalidad es que el órgano que ha de ejercer la iniciativa legislativa asuma y oriente la planificación ulterior del procedimiento de elaboración a la vista de un texto ya articulado y sin perjuicio de las modificaciones que resulten de los trámites de audiencia, consulta e informe posteriores*».

En este punto cabe preguntarse de nuevo cuál es la diferencia jurídica entre «*anteproyecto de ley*» objeto de tramitación administrativa y aprobado o no como «*proyecto de ley*», por un

lado, y el sustancial «*proyecto de ley*» que se remite al Parlamento, por otro. De entrada, debemos aclarar que no resulta esencialmente relevante para el presente informe la distinción nominal que de habitual se hace entre «*anteproyectos*» y «*proyectos*» –en los artículos de nuestra LG arriba citados parece extraerse que en el Ordenamiento de la CAE llama «*anteproyecto*» a los textos elaborados por los departamentos, que son presentados al Gobierno como propuestas para su adopción como «*proyectos de ley*», convirtiéndose en tales en el momento en que cuentan con la aprobación de dicho Órgano–. Sí resulta más relevante y sustancial, sin embargo, la distinción entre el «*texto*» en su fase de elaboración administrativa hasta su culminación en la aprobación por el Consejo de Gobierno y el «*documento objeto de ulterior remisión al Parlamento*», con la consiguiente y definitiva conversión en objeto de tramitación parlamentaria, en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa del Ejecutivo.

A este respecto, existe abundante documentación doctrinal, pero en la actualidad –y a salvo de exegesis más doctas– resulta bastante esclarecedor lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que bajo el epígrafe «*Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley*» dice:

«El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.»

«La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía. (...)»

Aunque la primera parte de este artículo puede considerarse de los preceptos que prevén su aplicación exclusiva en el ámbito de la Administración General del Estado (por lo que no sería de aplicación a la Comunidad Autónoma de Euskadi en los términos de la Disposición final primera LPACAP), no resulta contradictorio en ese punto con nuestra LG. Es decir, los Órganos de gobierno ejercen en dos fases la iniciativa legislativa que, en el presente caso, le confieren al Gobierno Vasco los artículos 16 y 18.a) LG: una primera e interna «*mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley*», y otra segunda y posterior con «*la ulterior remisión de los proyectos de ley*» al Parlamento Vasco.

Estas dos fases –y el producto resultante de sus tramitaciones– tienen, sin lugar a dudas, su trascendencia, pues reflejan la dicotomía del actuar del Ejecutivo en su doble faceta, pues por un lado es el órgano de dirección política y, por otro, es el órgano que culmina la estructura administrativa pública.

Así, se puede considerar que un «*anteproyecto de Ley*» es fruto de una actividad interna administrativa. Actividad administrativa con notables criterios de discrecionalidad pero sometida a programación (planificación normativa: art. 132 LPACAP) y un específico procedimiento (LPEDG), cuya ausencia puede ocasionar vicios de nulidad –incluso su impugnación en vía jurisdiccional–, y cuya aprobación por Consejo de Gobierno (y transformación en «*proyecto de*

ley» en la terminología de nuestra LG) le da ya un carácter acto jurídico final –art. 13 LPEDG–, que bien pudiera concluir su tramitación y efectos en ese momento.

Naturalmente, la finalidad última de los «*anteproyectos de Ley*», va más allá de su simple aprobación o conclusión del *iter* procedimental regulado en la LPEDG. Es decir, trasciende más allá de su aprobación y lánguida residencia como «*proyecto de ley aprobado*» en los servicios administrativos de Consejo de Gobierno (o de su Secretaría). Su pretensión es transformar el ordenamiento jurídico en un aspecto determinado –el objeto y finalidad del anteproyecto de ley–, y ello en base a un programa de Gobierno definido en función de las demandas reales de la sociedad y de la ciudadanía a la que sirve.

A esta finalidad novadora contribuye la remisión al Parlamento del «*proyecto de ley*», acto que se enmarca dentro de los denominados «*actos políticos*» cuya potestad no está reglada actualmente por norma alguna de Derecho Administrativo. Y ello, porque los preceptos referidos a cómo y junto a qué documentación ha de remitirse el proyecto al Parlamento están tan en la frontera de ambos mundos que prácticamente se pueden considerar como de Derecho parlamentario (artículo 57 LG como correlato del artículo 133 del Reglamento del Parlamento, artículo 58 LG como regulación del propio procedimiento parlamentario).

En este sentido el acto de remisión es un acto que concede un *plus*, que se añade al ya de por sí perfecto acto de aprobación del «*proyecto de ley*» por el Gobierno, con una finalidad superior cual es el dar contenido al programa legislativo contenido en el Programa de Gobierno en ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el ordenamiento jurídico le reconoce.

La naturaleza «*política*» de este «*acuerdo de remisión*» del Consejo de Gobierno de un «*proyecto de ley*» al Parlamento, se halla refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, entre otras, en su Sentencia de 15 de marzo de 1990 (RTC 1990, 45), manifiesta:

«... no toda actuación del gobierno, cuyas funciones se enuncian en el artículo 97 del Texto Constitucional, está sujeta al Derecho administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de ley u otros semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado artículo 97 CE. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a una u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes».

En este mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, que aunque centrada fundamentalmente en los supuestos de relaciones entre los poderes del Estado, ha dictado pronunciamientos referidos a supuestos de denegación de la solicitud de

ejercicio de la iniciativa legislativa o el ejercicio de ésta (SSTS 13 marzo 1990 [RJ 1990, 1938]; 25 octubre 1990 [RJ 1990, 7972]; y 10 diciembre 1991 [RJ 1991, 9254]).

De ello podemos obtener ya algunas conclusiones:

- I. La tramitación de los anteproyectos de Ley no se ve, en principio, afectada por la caducidad de los procedimientos parlamentarios fruto de la disolución del Parlamento.
- II. No se puede obviar la tramitación establecida en la LPEDG, pero en la medida de lo posible, y sin perjudicar a su finalidad material, debe entenderse que los trámites efectuados con anterioridad conservan plenamente su valor. Sin perjuicio de que ello deba ser siempre objeto de valoración por el órgano al que en cada caso corresponde el impulso del procedimiento y teniendo en cuenta, además, la especial consideración flexible y antiformalista que el procedimiento tiene en esos casos.
- III. Los «*anteproyectos de ley*» presentados al Consejo de Gobierno y aprobados por este como «*proyectos de ley*», independientemente de su remisión o no al Parlamento para continuar su tramitación en sede parlamentaria, son actos administrativos válidos (aunque no eficaces en la innovación del ordenamiento jurídico). Y como tales quedan residenciados en dicho Consejo de Gobierno, sin fecha de caducidad alguna, ya que suponen el fin del *iter* procedimental previsto en la LPEDG.
- IV. La toma en consideración y aprobación final del «*anteproyecto de ley*» por el Consejo de Gobierno puede ser anterior o simultánea en el tiempo a la decisión de su remisión al Parlamento como «*proyectos de ley*».
- V. Una vez aprobado por Consejo de Gobierno un «*proyecto de ley*», la decisión de su remisión a Parlamento excede de la función administrativa de éste, debiendo ser considerado como un «*acto político*». Acto político que, por lo tanto, no está sujeto a mandato normativo alguno sino, más bien, a criterios de oportunidad, sin perjuicio de las normas que especifican la documentación que debe acompañar esa remisión y que determinarán, en todo caso, su admisión o no por la mesa de la Cámara.

6. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS «PROYECTOS DE LEY» REMITIDOS AL PARLAMENTO TRAS SU DISOLUCIÓN.

Ya se ha comentado anteriormente que tras la disolución del Parlamento Vasco o expirado su mandato, caducarán en cuanto a su expediente parlamentario todos los asuntos en tramitación, y entre estos asuntos los «*proyectos de ley*» remitidos antes de su disolución. Entonces, cabe preguntarse en qué situación quedan, desde el punto de vista del Derecho administrativo, los «*proyectos de ley*» aprobados en Consejo de Gobierno y que posteriormente fueron remitidos como iniciativas legislativas al Parlamento, una vez que este es disuelto.

A juicio de quien esto informa tales «*proyectos de ley*» ya aprobados por Consejo de Gobierno cumplen, también después de la disolución del Parlamento, con la finalidad para la que

se han previsto en la fase, llamémosla administrativa. Esto es, y en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPEDG, con la finalidad de prever el contenido tanto de forma como de fondo de una previsible y concreta iniciativa legislativa mediante el método de:

«...aplicar a la redacción de las leyes en el seno del ejecutivo la misma metodología que a las disposiciones reglamentarias. De ese modo se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone. Sobre esa base más precisa y segura corresponde a la Cámara parlamentaria su enmienda y aprobación.»

La razón de ello es que la decisión de iniciar la elaboración de las normas, tanto en su fase administrativa como en la puesta en marcha de su tramitación parlamentaria mediante la remisión al Parlamento, “... no se concibe como una mera formalidad, sino como un acto de gran trascendencia jurídica y política que ha de basarse en una mínima reflexión sobre la necesidad y viabilidad de aquéllas. Por eso, se exige que tenga en cuenta los condicionamientos de toda clase (estudios, informes, audiencias, consultas, negociaciones, etc.) que puedan incidir en la fijación de su contenido, y una estimación del coste y eficacia de su puesta en vigor no sólo en relación con las Administraciones públicas, sino, también, para los ciudadanos y la economía en general» (Exposición de Motivos de la LPEDG).

Ahora bien, y es aquí donde entra en valor la alta dirección política de la que es titular el Consejo de Gobierno, ¿puede asumirse por el Consejo de Gobierno un «anteproyecto de ley» tramitado o incluso un «proyecto de ley» ya aprobado anteriormente y remitirlo de nuevo al Parlamento como «proyecto de ley»? ¿Puede hacerlo, incluso cuando dicho proyecto de Ley hubiera sido remitido ya previamente al Parlamento?

Según venimos exponiendo, independientemente de su “gran trascendencia”, en términos literales de la LPEDG, la decisión de asumir como propio un proyecto anterior y de decidir su remisión o no al nuevo Parlamento, reafirmando como iniciativa legislativa necesaria y oportuna –y por lo tanto vigente– conforme al Programa de Gobierno surgido de ese nuevo Parlamento, es **una decisión eminentemente política**.

Cierto es que **la remisión al Parlamento de cualquier proyecto de ley deberá acompañarse siempre, a fin de que no haya dudas respecto a la admisión del mismo por la Mesa de la Cámara, de los antecedentes y documentos exigidos por los artículos 57 LG y 133 del Reglamento del Parlamento. Pero a partir de ahí, es también una decisión eminentemente política la de asumir ese proyecto y esa tramitación administrativa llevada a cabo con anterioridad**. Decisión de carácter político adoptada por el nuevo Gobierno, todo más cuando en su faceta de dirección política y superior de la misma Administración que los adoptó originalmente –Administración que actúa siempre con personalidad única a pesar del cambio de Gobierno–, que conlleva el afirmar la suficiencia, actualidad y vigencia de lo ya tramitado en la fase administrativa.

Es decir, supuesta la validez jurídica de los actos de tramitación efectuados, tales actos no se han visto afectados ni por el cambio de Gobierno ni por la disolución del Parlamento.

Por tanto, en opinión de quien esto suscribe, en la respuesta a la cuestión planteada a esta Dirección no se podrá «*obviar*» y será preceptiva la tramitación de toda iniciativa conforme a la LPEDG. Aunque, tanto la Consejera o Consejero en su decisión de elevar la propuesta correspondiente al Consejo de Gobierno, como el Consejo de Gobierno al adoptar, en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa, el acuerdo de remisión al Parlamento, habrá de tener en cuenta y aprovechar los trámites válidamente efectuados con anterioridad. Al menos, toda vez que se **constate que tal «proyecto de ley» se adecua a las previsión política del nuevo Consejo de Gobierno a realizar durante su mandato, que siga siendo precisa su implementación en el ordenamiento jurídico y que los elementos esenciales del texto del «proyecto de ley» no se hayan visto afectados por normativa surgida con posterioridad a su aprobación.** Valoración esta que habrá de hacerse, en todo caso, desde criterios materiales y de estricta oportunidad y conveniencia.

En relación con lo que acabamos de decir, no podemos concluir este informe sin hacer mención a que el nuevo texto del proyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, **se incluyen algunas modificaciones conforme a las cuales el concreto texto sometido a esta Opinión legal difiere del aprobado por el anterior Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de abril de 2016**, y sobre las cuales hacemos nuestro el pronunciamiento referido en la Memoria que lo acompaña; esto es que «...*tan solo se han incluido dos mínimas modificaciones en el texto.*».

Respecto de la primera de las modificaciones, y que hace referencia a la introducción en la parte expositiva de dos nuevos párrafos, lo primero que hemos de señalar es que aunque la ubicación de tales cambios se haga en la exposición de motivos, ello no deja totalmente de tener trascendencia. Aunque no constituyen disposiciones imperativas, las exposiciones de motivos contribuyen a fijar, interpretar y determinar el alcance de la parte dispositiva. Baste recordar para esto lo establecido en el art. 129.1 *in fine* de la LPACAP, referido a la aplicación de los principios de buena regulación: «*En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.*»

En el caso concreto al que debemos ceñirnos, primeramente se hace referencia a la introducción de dos nuevos párrafos en la exposición de motivos, para incluir dos referencias concretas: i) a los acuerdos de la Junta de Seguridad de 14 de junio de 2017; así como a ii) la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía.

El primero de dichos nuevos párrafos se incluye como *párrafo segundo* del *Apartado I* de la exposición de motivos. Y tiene su encaje en el proyecto en los términos en que el mismo fue originalmente aprobado, en tanto en cuanto la pretensión de esta quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, consolidar la modificación del modelo de policía integral de la Ertzaintza, pretende únicamente afianzar en la Comunidad Autónoma de Euskadi la evolución

que en tal sentido se viene produciendo. Así pues, tal referencia a los acuerdos de la Junta de Seguridad no hace sino explicitar otro antecedente más, sobrevenido a la aprobación inicial del proyecto de Ley en 2016, y en consonancia a los ya existentes en el momento de su aprobación. Su valor exegético, por tanto es bastante limitado.

El segundo de los nuevos párrafos también está incluido en este *Apartado I* de la exposición de motivos, en concreto en el *párrafo quinto*, si podría tener una mayor trascendencia interpretativa, pues contribuye a ser una de las fuentes de integración e interpretación de la parte dispositiva de la normativa a medicar, y ello se deduce del literal:

*En una sociedad abierta y plural la Policía del País Vasco tiene como misión el compromiso activo en la defensa y protección de la defensa de los derechos y libertades, **por ello la presente ley asume como parte del ordenamiento aplicable a la Policía del País Vasco la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía***”

Es evidente que esta labor integradora e interpretativa del proyecto de Ley, tiene un carácter conformador y dinámico. No obstante, dada la vinculación a los derechos y libertades que promueve el Consejo de Europa en sus diversas facetas, esa adaptación era ya, de alguna manera, implícita al proyecto de Ley en su versión original. Y en tal sentido, su explicitación en la exposición de motivos tiene, a lo sumo, un valor clarificador que hace que las modificaciones normativas que promueve el proyecto de ley se adapten con mayor celeridad a la realidad del marco jurídico europeo al que pretende homologarse la Policía del País Vasco, haciendo más asequible su conocimiento y comprensión por la ciudadanía que viva en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Es pues un párrafo que concreta aún más el marco dispositivo del proyecto de Ley aprobado en 2016, pero que en el modo alguno lo altera o distorsiona lo en él regulado, sino que lo homologa al marco jurídico en el que ya estamos inmersos.

La segunda de las modificaciones referidas en la memoria que se nos remite, hace referencia a un cambio de denominación de una Comisión que se crea en el Proyecto de ley y que incluye dentro del nuevo Capítulo II (*Mecanismos de control de la actividad policial*). Esto se refleja, en concreto, en las redacciones dadas a los art. 10.1 y 2, art. 11 y art. 14.1, así como en la referencia que a tal redacción se hace en el apartado II de la Exposición de Motivos del proyecto de ley aprobado.

En la memoria que ahora se remite no se hace referencia a por qué se «*considera más oportuno*» tal cambio de denominación, aunque una posible justificación a ello se halle la nueva denominación del Capítulo II en el que dichos cambios se encuentran ubicados y que lleva por título el de «*Mecanismos de control de la actividad policial*». Lo que sin duda hace más acorde el denominar a esta Comisión como de «*Control y Transparencia de la Ley de Policía del País Vasco*». Y ello, a los efectos de ponderar el carácter más o menos sustancial de los cambios introducidos, resultaría irrelevante, al cambiar sólo el nombre del órgano sin que suponga

alteración de su composición, competencia o contenido sobre el proyecto de ley ya aprobado por Consejo de Gobierno en 2016.

Es decir, no parece que estos cambios puedan suponer una alteración sustancial o relevante de lo ya aprobado.

7. CONCLUSIÓN

A modo de resumen: el actual y vigente Consejo de Gobierno, puede en el ejercicio de la potestad de iniciativa legislativa que el reconocen los artículos 16 y 18.a) de la LG acordar la aprobación y remisión al Parlamento de un «*proyecto de ley*» aprobado ya con anterioridad, previa elevación a él por el o la Consejera competente (o por varios si fueran varios los competentes) de la correspondiente propuesta.

Esta elevación por uno o varios miembros del Consejo de Gobierno ha de tener por finalidad, además de reflejar la decisión formal de pertinencia y propuesta recogida en el art. 26.8 LG, la de aseverar tanto la vigencia de la viabilidad normativa (es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su anterior remisión) como la vigencia de los trámites anteriormente efectuados y la oportunidad y necesidad innovadora del ordenamiento jurídico que pretende, de acuerdo con los términos previstos en el proyecto político del Gobierno actual.

Así, los «*proyectos de ley*» ya aprobados y residenciados en el Consejo de Gobierno, volverán a ser desde una perspectiva parlamentaria nuevos «*proyectos de ley*» al ser remitidos, con todos sus antecedentes, al Parlamento, iniciándose de nuevo la tramitación parlamentaria caducada en su día por la disolución de este.

Este es mi informe que emito y someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

Ver firmantes

Cerrar ✕

Nombre	Departamento	Cargo	Fecha
XABIER UNANUE ORTEGA	GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO	DIRECTOR/A	21/06/2018
JESUS MARIA FERNANDEZ AGUADO	GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO	LETRADO/A SERVICIOS JURÍD...	22/06/2018
Primera página Anterior Página 1 de 1 Siguiente Última página 10 ▼ Mostrando 1-2 de 2			

LEGE-IRITZIA: Txostena, Gobernu Kontseiluak, lehenago egindako prozedura-izapideak baliozkotzat jota, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketari buruzko lege-proiektuaren testua berriz hartu eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzearen bideragarritasun juridikoari buruzkoa.

55/2018 LGAKZ-LI

1. AURREKARIAK

2018ko ekainaren 6an, Segurtasun Sailaren Aholkularitza Juridikoak kontsulta egin zion Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzari. Kontsulta horretan, Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren Legearen bosgarren aldaketaren lege-proiektuaren bidalketa (funtsezko aldaketarik gabe) berriz onartzearen bideragarritasun juridikoari buruzko lege-iritzia eskatu zion Zuzendaritza honi, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketaren lege-proiektua onetsi zenetik gertatutakoak adierazi ondoren. Lege-proiektua Gobernu Kontseiluak onetsi zuen 2016ko apirilaren 26ko bilkuran, eta X. legealdian zehar lege-proiektuaren izapideak hasi arren Legebiltzarrerako bidean bertan behera geratu zen, zen legealdia amaitu zelako.

Eskatzen den lege-iritzia Gobernu Kontseiluak dagoeneko onetsitako Lege Proiektua Legebiltzarrari bidaltzeko ekintzan jartzen du arreta, aurreko legealdian lege-proiektua bere garaian onetsi zen baldintza berberetan burutuko bailitzateke bidalketa. Horren bidez dagoeneko egindako prozedurak errepikatzea ekidin nahi da, eta lehenago egindako izapideak baliozko eta eraginkortzat jotzea, Legebiltzarreko izapideak indargabetzeak ez baititu izapideok deuseztapenarekin zehatzen ordenamendu juridikoan.

Lehenago, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legeari buruzko bosgarren aldaketaren lege-proiektua Legebiltzarrera bidali nahi dela aipatu da, baldintza berberetan, «funtsezko aldaketarik gabe». Horrek esan nahi du orain bidali nahi den lege-proiektua ez dela aurreko legealdian onartutakoaren berdin-berdina, txosten honetan aztertzen denak bi aldaketa baitaizka, bestearekin alderatuta. Zuzendaritza bidaltzaileak gerora sortutakotzat eta ez funtsezkotzat hartzen ditu bi aldaketok:

- a) «Azalpenaren zatian bi lerrokada berri sartuko dira, 2017ko ekainaren 14ko Segurtasun Batzarreko akordioak eta Poliziaren Etikaren Kode Europarrari buruzko Europako Kontseiluaren Gomendioa aipatzeko.*
- b) Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jardunbide Egokien Batzordearen izena aldatuko da eta "Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen Kontrol eta Gardentasunerako Batzardea" izena jarriko zaio, egokiagotzat jotzen baita».*

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari atxikitako Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritzak ematen du txosten hau, ekainaren 2ko 7/2016 Legeak (Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa antolatzekoa) 5.2 artikuluan Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiari ezartzen dizkion eginkizunak betez, Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioako sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen) 6.1.h artikuluan ezarritakoarekin bat, eta, halaber, apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren (Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa) 14.1.a artikuluan eta apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuan (Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoarena) gorago aipatutako zuzendaritzari ematen zaizkion eskumenetan oinarrituta.

2. PROZEDURA PARLAMENTARIOAREN IRAUNGIPENA, ETA ADMINISTRAZIOKO PROZEDURAREKIKO BEREIZKETA

Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren IX. kapituluak *Legebiltzarreko tramitazioen iraungipena* du izenburua, eta honako hau dio, arau orokor gisa, kapitulu horretako **130. artikulua**:

*«Eusko Legebiltzarra desegindakoan edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoan, **iraungi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak**, salbu eta Diputazio Iraunkorrek aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta atzeratu beharrekoak».*

Horrenbestez, ondoren aztertuko ditugun beste zenbait faktore gorabehera, Gobernu Kontseiluan hartutako erabakiaren ondorioz legegintzako ekimen hori berriz aurkezteko aukerei buruzko analisiaren abiapuntua manu horrek Gobernu Kontseiluak onetsitako lege-proiektu eta -aurreproiektuetan duen izaera eta eragina argitzea da.

LGAKZ 51/2017, 56/2017 eta 61/2017 txostenetan Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 130. artikuluari buruz esan bezala (Lege-iritzia, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuaren arabera), begien bistakoa da denbora igarota agintaldia desegin edo iraungi ondoren

(legegintzako herri-ekimenetik sortutako lege-proposamenak izan ezik, horiek Erregelamenduaren azken tartearen arabera luzatzen baitira Legegintzako Herri Ekimena arautzeari buruzko ekainaren 30eko 10/2016 Legearen 12. artikuluari jarraikiz), beste ekimen guztiak, eta beraz, Eusko Jaurlaritzak Legebiltzarrari bidalitako lege-proiektu guztiak – legegintzako ekimenerako duen ahalmena gauzatuz, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 16 eta 18 a) artikuluetan aitortzen zaion bezala– Legebiltzarreko tramitazioan iraungitzen dira.

Txosten hartan esaten genuen bezala, jada sendotuta dagoen doktrinaren arabera, «iraungi» prozedurak iraungitzen dira eta «preskribatu» eskubideak preskribatzen dira, aldi bakanetan izan ezik. Hala, prozedura bat iraungita egoteagatik bertan behera geratzen denean,

baliatu nahi izan den eskubidea berriro balia daiteke beste prozedura batean, eskubidea preskribatu gabe dagoen heinean. Beraz, hasteko *«zalantzarik gabekoa da guztiz, legebiltzarrari dagokionez soilik, Eusko Jaurlaritza berriak, legegintzako ekimenerako eskubidea duen neurrian, hauteskunde-prozeduraren ondoriozko ganbera berriaren aurrean aurreko kabineteak onartutako ekimenak modu berean errepikatzeko gaitasun osoa duela, ekimenaren iraungipenak ez baitio eragiten Jaurlaritzak haiek aurkezteko duen eskubideari»*.

Horrenbestez, arestian aipatutako LGAKZ 51/2017 txostenarekin gertatu zen bezala (txosten horretatik aterako ditugu –errepikakor izateko arriskuarekin– jorratzen ari garen gai honi buruz jarriko ditugun gogoeta gehienak), Legebiltzarra desegin edo lege-proiektua alde batera uzten bada, dagokion lege-proiektua aurkezteko Eusko Jaurlaritzak oinarritzat erabili zituen administrazio-prozedurei buruzko balizko ondorioetara soilik mugatu behar du txostenak. Alegia, Jaurlaritzako edo Administrazioako izapidetzean eta horren espedientean izan ditzakeen ondorioez bakarrik arduratu behar du, edo alde batera utzi, izapidetze parlamentarioa eta dagokion espedientea azkendu edo iraungi izana gorabehera.

Era berean, komeni da ohartaraztea **txosten hau mugatuko dela, halaber, lege-proiektu bakoitza onartu edo Legebiltzarrera bidali baino lehenago egindako izapidetze-egintzen gaur eguneko prozedurazko edo formazko baliozkotasunera, kontuan hartu gabe proiektu bakoitzaren edo haren premisa juridikoen gaurkotasuna edo iraunaldia –ikuspuntu material edo funtsezko ikuspegi batetik–**. Azken gai horrek argi eta garbi gainditzen du kontsulta honen xedea eta irismena.

3. XEDAPEN OROKORRAK EGITEKO PROZEDURAREN IZAERA BEREZIA, PROZEDURA HORI LEGE-AURREPROIEKTUEI APLIKATZEN ZAIENEAN

LGAKZ 51/2017, 56/2017 eta 61/2017 lege-iritzietan aztertutako kasuan gertatu zen bezala, aurrekoaz ondorioztatu behar da egin zaigun galderari erantzun ahal izateko abiapunturik egokiena Exekutiboan sortutako *«lege-aurreproiektu»* horien prozedura-exegesaren azterketa egitea dela, haiek Legebiltzarrean onartu eta Legebiltzarrera *«lege-proiektu»* gisa igorri baino lehen zuten forman, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen babesean, nagusiki (aurrerantzean, XOEPL). Analisisian 8.-11. artikuluetan adierazten diren nahitaezko izapideak sartzen dira. Haiek amaitutzat jotzen dira Gobernu Kontseiluak hartzen duen behin betiko erabakiarekin, hau da, onartzeko ala ez onartzeko erabakiarekin, testu horren 13. artikuluan ezarritakoa betez. Eta arrazoia zera da, zioen azalpenean adierazten den bezala, *«legeak egiteko orduan, berez legegintza-ekimena denaren aurreko fasea baino ez delako sartzen administrazio-prozeduraren baitan; izan ere, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduak arautzen du berez legegintza-ekimena dena»*.

Hori gorabehera, amaitu edo iraungitako prozedura parlamentarioarekiko egiten ari garen bereizketa garbia dela-eta legezko eskakizunen azterketa honetan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak sendo ezarritako doktrinari jarraitu behar diogu, zeren eta *«Batzordeak lege-*

aurreproiektuak egiteko prozedurak aztertzean, aldatu egiten baita haren langintza aztertutako araua legea edo erregelamendua denean, XOEPL berak adierazten duen moduan» (129/2015 Irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 55. zenbakia). Erregelamendu-ekimenekin alderatuz, orain axola duenari dagokionez, lege-aurreproiektuak egiteko prozeduraren azterketan beharrezko malgutasun bat sartzen du, bai eta bereziki material eta antiformalista bat ere. Eta horren arrazoia hau da: «Legebiltzarrean hedatzen da bere zabalean legegintza-prozedura, eta Konstituzioak (EK), Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuak (EAE) edo, batzuetan, lege organikoek lege-proiektua onartzeko baldintzak ezartzen dituzten berariazko kasuetan izan ezik, lege-proiektuek bete behar duten baldintza bakarra da beharrezko aurrekariekin batera bidaltzea Legebiltzarrera, Legebiltzarrak bere iritzia eman eta erabakia hartu ahal izan dezan; gutxienez ere, memoria orokorra, finantzaketari buruzko eranskina eta kontrol ekonomikoko txostena (aurrekontuari karga dakarkioten proiektuetan), kontsulta-organo honen irizpena eta legeriaren arabera nahitaezko diren beste txostenak (Jaurlaritzaren Legearen 57. artikulua, eta Eusko Legebiltzarreko Erregelamenduaren 133.2. artikulua)» (120/2014 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Legearen aurreproiektuari buruzkoa; 85. zenbakia).

Lege-aurreproiektuen izaera bereziak nahitaezko txostenen derrigortasun hori erlatibizatzea ere ahalbidetuko luke. Konstituzio Auzitegiak bere uztailaren 29ko 108/1986 Epaian errekurtsio bat gaitzesten zuen Botere Judizialaren Lege Organikoa aldatzeko lege-proiektuaren aurkakoa, zeinak Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren nahitaezko txostena ez baitzuen. Honako hau baietsi zuen: «Aurrekari jakin bat ez egoteak garrantzia izango du soilik Ganberei kendu izan balitzaie erabakia hartzeko beharrezko judizio-elementu bat, baina, kasu honetan, ondorioa, zeinak berehala izan behar zuen ezagun, Ganberen aurrean salatu beharra zegoen eta errekurtsogileek ez dute alegatu inoiz hori gertatu zenik. Salaketa hori egin ez denez, derrigorrezkoa da ondorioztatzea Ganberak ez zutela uste izan txostena erabakia hartzeko beharrezko judizio-elementu bat zenik; Auzitegi honek ez dauka sartzetik baloratzera judizio-elementu batek parlamentarioengan zenbaterainoko garrantzia izan zuen». Eta, ondoren, doktrina bera aplikatzen du Gobernuak Kongresuari lege-proiektuaren zioen azalpena eta azalpen-memoria igortzen ez dion kasuetan. Aurrekari horiek igorri ziren, baina berandu, errekurtsogileen iritziz. Nolanahi ere, falta izan balira ere, honako hau dio Goi-auzitegiak: «Adierazitako akats horrek garrantzia izango luke soilik Diputatuen edo Kongresuko talde parlamentarioen eskubideak kaltetu balitu, eta egitateak –egiazkoak izatekotan– haientzat guztiz ezagunak balira eta ez balego protestarik haien aldetik, ulertu behar da eragindakoek ez zutela uste izan beren eskubideak kaltetzen zirenik, eta, akatsik izan balitz, Ganberak berak baliozkotu zuela; horrenbestez, Auzitegi hau ezin daiteke sartu baloratzera horrelako akatsik egon zen ala ez edo zenbaterainoko garrantzia izan zezakeen». Bestela esanda, Auzitegiak ulertzen du garrantzitsutzat jo daitekeela soilik Ganberak garrantzitsutzat jotzen duena.

Egia da gure ordenamenduan, Ganberaren Erregelamenduaren 133.2 artikulua nahitaezko txostenak esplizituki aipatzen dituela, eta horrek Ganbera erabat gaitzen du txosten horiek

baldintzatzen eskatzera, bidaltzen zaizkion lege-proiektuak onartuak izan daitezkeen. Ildo horretatik, berriro jo behar dugu Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legea eta beraren exegesisira, betiere irakurketa malguta eta finalista bat eginez.

Berriz ere Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari jarraituz, «*lege-proiektuak egiteko prozedura aztertze*ko —*azterketa materiala da, eta funtsean, finalista*—, XOEPLaren jarraibideak sistematizatu ditu Batzordeak, eta honako fase hauek bereizi: (i) hasierako fasea, ekimena proposatu duen organoan garatu eta helburu nagusitzat duena hasierako testua finkatzea, hari eusten dioten arrazoiak nabarmentzea, eta, kasuan kasu, beharrezkoak diren izapideak egiteko beharrezkoa den dokumentazioa egitea; (ii) prozedura irekitzeko fasea, arauaren eraginpean gerta daitezkeen sektore eta administrazioak aintzat hartuta; (iii) txostenak —nahitaezkoak eta aukerakoak— egiteko fasea; eta (iv) amaierako fasea: ekimena bultzatu duen organoak, prozedura-iter guztia ebaluatuta, behin betiko testua finkatu, eta azken dokumentuak —justifikatzeko memoria eta memoria ekonomikoa— prestatzen ditu» (129/2015 Irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 56. zenbakia).

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak zein Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza honek berariaz emana dute irizpen hau (baina bereziki erregelamendu-ekimenei buruzko izapideei dagokienez): **legegintzaldi-aldaketak eta exekutiboko kabinete-aldaketak ez dute berez ekartzen, inola ere ez, arauak egiteko prozedurak iraungitzea**, ez eta prozedura horien baitan egindako izapideak baliogabe bihurtzea ere. Beraz, ohikoa da –LGAKZ honek zein Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak baliozkotzat jotzen dute– aurreko sailburu batek abiarazitako izapideak ontzat jotzea eta aurreko sailburua ordeztzen duen sailburuak Gobernu Kontseiluaren onespenerako bidaltzen duen espedientean, modu naturalean, jasota egotea. Horrela, legegintzaldi batean hasitako izapidetzea hurrengo legegintzaldian jarraitu da etenik gabe (gure kontsulta-organo gorenaren irizpenen artetik zenbait aipa ditzakegu: 203/2009 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Batasunak emandako neurriak garatzeko eta aplikatzeko Dekretuaren proiektuari buruzkoa (2. eta 37. zenbakiak); 217/2009 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoan fruten eta barazkien sektorea laguntzeko Europako Batasunaren araudia, bai eta araudi horretatik eratorritako laguntzen erregimena ere, garatzeko eta aplikatzeko Dekretuaren proiektuari buruzkoa (1. eta 30. zenbakiak); 64/2013 Irizpena, «Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeari buruzko Dekretuaren proiektua», (2. eta 34. zenbakiak).

Bestela esanda, izapidetze-egintza horien baliozkotasun juridikoaren auzia ez dago Legebiltzarra desagitearen edo Gobernu berria osatzearen mendean; izan ere, **Administrazioa bakarra da, pertsonalitate juridiko bakarra du bere egitura osorako eta funtzio guztietarako** (Jaurlaritzaren Legearen 53. artikulua eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3.4 artikulua), **Gobernuan eta haren titulartasunean egon daitezkeen aldaketak gorabehera**. Hori horrela bada, izapidetze-ekintzen egiletza, eta, horrenbestez, haien baliozkotasuna, ez da aldatzen Exekutiboaren titularra aldatu arren.

Hertsiki, ez dago aurreko legegintzaldian egindako izapideak «bihurtzeko», «mantentzeko» edo «baliozkotzeko» berariazko egintzen beharrik —figura horiek aurreikusten ditu urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearenak), hurrenez hurren 50., 51. eta 52. artikuluetan, zenbait egintzaren akatsak zuzentzeko neurri gisa—, xedapenak egiteko prozeduraren barruko izapide horiek ez baitira inoiz deusez bihurtzen eta ez dutelako baliorik galtzen, nahiz eta legegintzaldia aldatu (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 47., 48. eta 49. artikulua). Eta hori, XOEPLaren azpian ekonomia prozesaleko logika bera izan arren, ahal den neurrian une horretara arte egindako egintzen baliozkotasuna kontserbatzeko beharra agintzen baitu (XOEPLaren 4.2 artikulua).

Hortaz, «kontserbaziorako ekonomia prozesal» hori behar ez den bakoitzean, bidezko izapideen organo eskudunari dagokio, soil-soilik, prozeduraren fase ezberdinak aurrera eramateko izapideak egitea, prozedurak jarrai dezala aginduz, edo Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legean eta Jaurlaritzari buruzko Legean markatutako prozedura-mugarrietan behar diren izapideak eginez (abiarazte-agindua, aurretiazko onarpena emateko agindua, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari irizpena eskatzeko agindua, arauaren behin betiko testua proposatzea Gobernu Kontseiluari...).

Tramitazioa aurrera eramateko egintza horiek berez adierazten dute aurretik egindako izapideak onartzen direla eta horien eraginkortasun formala eta materiala baloratzen dela, ez bakarrik espedientearen betetze formalari lotuta, baizik eta horien benetako erabilgarritasuna ere kontuan hartuta, organo erabakitzaileak judizio-elementu egokiak izan ditzan araua unean uneko egoerari egokitzeko, bai organo erabakitzailea Jaurlaritza denean, erregelamenduzko arauen kasuan, bai Legebiltzarra denean, lege-proiektuen kasuan.

Horrenbestez, **prozeduran biltzen diren unean uneko alderdi guztiak hartu behar dira kontuan** erabaki ahal izateko ea egokitzen jotzen den, une jakin batetik aurrera, aurreko prozedura bat izapidetzen jarraitzea, prozedurari berriro hasieratik ekin beharrik ez izateko edo egindako izapide guztiak ontzat eman ahal izateko.

Unean uneko alderdietako bat izango da, araua aurrez tramitatu eta izapide horiek errepikatuz gero, egintzen bikoiztasuna ekarriko duen egiaztatzea, alferrik tramiteak ez bikoizteko eta prozedura arintzeko, hain zuzen ere. Beste bat da, behar bezala egiaztatutako premiazko arrazoiengatik izapideren bat alde batera uzteko beharra justifikatuta dagoen, baita gauzatu ez badira ere, lege-lerruna duten arauak eskatzen badute izan ezik (Aholku Batzorde Juridikoaren 129/2015 Irizpena, EAEko Sektore Publikoaren gardentasunerako, herritarren parte hartzerako eta gobernu onerako lege-aurreproiektuaren gainekoa; 55., 59., 63. edo 85. zenbakiak).

Era berean, kontuan hartu beharko da bitartean arau- edo gizarte-aldaketa garrantzitsuren bat gertatu ote den, behinola egindako izapideek gaurkotetasuna edo informazio-balioa galtzea eragin dezakeena.

Era berean, agerikoa da, elaborazio-prozesuak betetzen dituen helburu materialak saihestu gabe, tramitazio administratiboa sinplifikatu behar den ala ez irizpide garrantzitsua izan behar dela balorazio horretan, araua egiteko prozedurari guztiz aplikagarriak baitzaizkio prozedura horretatik sortzen diren arauari aplikagarriak zaizkien erregulazio onaren printzipio berberak. Beraz, «Legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala baliatzean, administrazio publikoek printzipio hauen arabera jokatu behar dute: premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia» (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 129. artikulua).

Edozein kasutan, orain arte esandakoa **aplikagarria da proiektua Legebiltzarrera igorri aurreko administrazio-prozedurako egintza guztietarako (abiarazte-agindutik hasi eta Gobernu Kontseiluaren onarpenerainoko egintza guztiak, bi horiek barne)**. Denetan, azken igorpen-egintza horretan ere bai, predikagarria da administrazio-egintzen baliozkotasun juridikoa mantentzearen printzipioa, eta haien indar materiala bakarrik baloratu behar da, aurreko lerrokadetan esandakoaren ildotik.

Bada, «*lege-aurreproiektuak eta -proiektuak*» aipatzen ditugunean —horiek Legebiltzarrera igorriko dira elaborazio-prozeduraren osteko fase erantsi gisa—, prozedura bultzatzeko egintzei dagokien balorazio hori egin behar dute bai sailburuak (prozedura bultzatzeko egintzen erantzukizuna izango du aurretiazko prozeduran zehar eta baita haiek Gobernu Kontseiluari aurkezteko erabakia hartzerakoan ere), bai Jaurlaritzak berak, legegintzako ekimenaren titularra baita Legebiltzarraren aurrean (balorazio hori berori egin beharko du hura onartzeko orduan eta nahitaezko agiriekin batera legegintzako organoari noiz igorri behar zaion erabakitzeke orduan edo beste edozein jarduketara osagarri egiterako orduan, XOEPLaren 13. artikuluan xedatutakoari jarraikiz). Horrenbestez, organo horien erantzukizuna izango da —organo bakoitzarena, dagokion unean— gaiari buruz egon daitezkeen edozein zalantza argitzea, eta, horretarako, beharrezkoa izango balitz, dagozkion txostenak edo izapide osagarriren bat eskatzea edo eginda daudenak berriz errepikatzea.

Eta hori guztia, bistatik galdu gabe, jada finkatu dugun bezala, gerora egon daitezkeen ordenamenduaren aldaketen edo bitartean gerta zitezkeen eta proiektuari eragin ziezaiokeen beste edozein koiunturazko egoeraren garrantzia modu erlatibo batean aztertu beharko litzatekeela; izan ere, «*lege-proiektuari*», Ganberara bidali eta prozedura Legebiltzarreko prozedura parlamentario bihurtu ondoren ere, Legebiltzarreko izapidetzea egin behar zaio. Legebiltzarreko izapidetze horretan zehar, onetsi eta lege bihurtu baino lehen, Ganberak zuzenketak aurkez diezazkioke, eta, horrela, une horretan egokitzen jotzen diren doikuntzak egin daitezke.

Txostenak xede duen kasu zehatz honi dagokionez, lege-iritzi honetatik ondorioztatu daitezkeen aurrez egindako izapidetzeen baliozkotasun formalari buruzko baieztapenak ez du ordezkatzen sail sustatzailea funtsezko gaiari buruzko baieztapen hau zuzena den ala ez

aztertzeko; izan ere, Saila bera da prozedura sustatu duena eta gai horri buruzko ezagutza sektorial espezializatua duena.

Jada ohartarazi dugu ez dela txosten honen xedea orain esku artean dugun proiektu zehatzari buruzko funtsezko analisia edo analisi materiala egitea. Nolanahi ere, atariko hurbilketa batean, eta helarazi zaigun eskaera Gobernu Kontseiluak 2016ko apirilaren 26an onetsitako testua berriz bultzatzeko aukeraren aurretiazko haztapen batean oinarrituta dagoela uste izanda, badirudi ez dagoela funtsezko arrazoirik edo lege-aldaketa esanguratsurik, bere garaian egin zirenen aipatutako baliozkotasun formala gorabehera, orduan onetsi zen testu berbera orain onestea uzten ez duenik.

4. AHOLKULARITZA JURIDIKOKO BATZORDEAREN IRIZPENA ETA KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA IZAPIDE ESPEZIFIKO GISA.

XOEPLaren 2. xedapen gehigarrian, arrazoi historikoak soilik direla medio (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legea aldarrikatu baino urtebete lehenago onetsi zen), Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoa sortu eta arautzen duen apirilaren 13ko 187/1999 Dekretuan xedatutakora jotzen bada ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legeak (zehazki 3.1.a artikulua) —XOEPLetik kanpo baina hark hala bidaltzen duelako— arautzen du Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren derrigortasunaren gaia.

Aipatutako artikuluekin bat etorritz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari «*kontsultatu behar*» zaizkio: «*Lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere...*» (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuenak eta baliabideen banaketarako eta foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenak izan ezik). Honaino, gainerako izapideei buruz orain arte esandakoa aholku-organo gorenaren irizpenari ere aplikatu ahalko litzaioke; irizpen horren baliozkotasun juridikoa ez da aldatzen gobernu-aldaketaren ondorioz edo Legebiltzarra desegin eta espediente parlamentarioak iraungitzearen ondorioz.

Horrenbestez, irizpen honen izaera berezia dela eta –konstituzio-jurisprudentziak berretsia–, gure txostenak atal espezifiko bat eskaini behar dio. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak bere Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoaren Lege-aurreproiektuari buruzko 084/2003 Irizpenean (25. zenbakia) azaltzen zuen konstituzio-jurisprudentziak Espainiako Konstituzioaren (EK) 107. artikuluari buruz egin duen interpretazioa: «*Konstituzio Auzitegiaren iritziz, "aholku-organo gorenaren funtzioaren" konstituzionalizazio-modu bat da, ez organoarena, Estatu Kontseilua. Administrazio aktiboaren aholkularitza gorena, manu haren ondorioz, garrantzia konstituzionaleko tresna bihurtzen da, "interes orokorraren eta legalitate objektiboaren oso berme garrantzitsua" eratzen baitu, eta, horren ondorioz, administrazio-prozedura jakin bateko alderdi direnen eskubide eta legezko interesena ere bai*». Auzitegi horrek dioenez, «... oso funtzio kualifikatua da, administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarritzko arauaren kategoriaren

barruan edo administrazio-prozedura erkidearen barruan sar daitekeena” (Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikulua)».

Izapidetzearen izaera bakar eta berezi horrek justifikatzen du Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenari aipamen berezi bat egitea (Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ekonomia- eta araudi-kontrolari buruzko aurretiko txostenarekin batera) Legebiltzarreko Erregelamenduaren 133. artikulua aldetik Ganberara igortzen den lege-proiektu ororekin bidali beharreko dokumentuen artean. Eta arrazoi horregatik sartu zen aipamena Jaurlaritzari buruzko Legean (ekainaren 2ko 8/2016 Legearen bidez, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legea aldatzen duena), Jaurlaritzari buruzko Legearen 56. eta 57. artikuluetan honela idatziz:

56. artikulua

1. Jaurlaritzak, Aholku Batzorde Juridikoari igorri behar zaizkion lege-aurreproiektuak eta dekretu-proiektuak egiteko hasierako fasean, xedapenaren testua bakarrik igorriko dio Eusko Legebiltzarrari, behin prozedura hasteko agindua eman duen organoaren aldez aurreko onespena izanda.

2. Era berean, Aholku Batzorde Juridikoari igortzen zaion dokumentazio bera, aldi berean, Eusko Legebiltzarrari ere igorriko zaio, legebiltzar-taldeek dokumentazio hori ezagut dezaten.

3. Jaurlaritzak erabaki beharreko Lege-aurreproiektuak eta Dekretu-proiektuak Jaurlaritzako idazkariari bidaliko zaizkio, banatu ditzan. Doazkien Sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan idazkiek diotenarekiko onarpena adierazi dezatenean, Gai-zerrendan sartuko dira. Bat etorri ez edo baldintzaren batekin bat badatoz, Lehendakariari dagokio arazo hori Kontseiluak aztertzeo gaietan sartu edo ez sartu erabakitzea.

57. artikulua

1. Eusko Legebiltzarrari aurkezten zaizkion lege-proiektuekin batera, Aholku Batzorde Juridikoaren txostena ere igorriko da eta, halakorik bada, txosten horretara egokitzeo oroitidazkia.

2. Lege-proiektuek Aurrekonturako zamaren bat badario horrentzako dirubideei buruzko eranskin bat eraman beharko du eta, hori, Legebiltzarraren Araudiak Lege-proiektuei buruz agindu dezanez eztabaidatuko eta bototara jarriko da.

Galdetu liteke, beraz, ea, artikuluen horien ondorioz, Legebiltzarrari jakinarazpena egiteko betebeharrak berezirik ba ote dagoen, aurreko legegintzaldietan sortutako lege-proiektuak izapidetzeari berriro ekin nahi zaionean. Lehenengo eta behin, bereizi egin behar da (i) lehendik hasita baina oraindik testuaren aurretiazko onarpenik gabe dagoen izapidetze bati jarraipena emateaz ari garen (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.1 artikuluan eskatzen den jakinarazpena egin beharko da), edo, bestela, prozedura horretan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari irizpena eskatzeko izapidea oraindik bete gabe dagoen (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.2 artikuluan aipatutako guztia igorri beharko zaio Legebiltzarrari); edo, aldiz, (ii) dena delako aurreproiektua edo proiektua soil-soilik Gobernu Kontseiluaren onarpenaren zain dagoen, edo organo horrek Legebiltzarrera igortzea erabaki zain, dela lehenengo aldiz, dela aldez aurreko beste igortze-erabaki bat errepikatuta (hala izanez gero, Jaurlaritzari buruzko Legearen 56.3

eta 57. artikuluetan eta Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan aurreikusitako kasuetan egongo gara).

Era berean, aurreproiektu bat edo proiektu bati buruz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak bere iritzia emango balu, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legearen 29. artikuluan xedatutakoarekin bat etorritz, planteatu behar da, halaber, ea arestiko kasuetan nahikoa den aurreko legegintzaldian emandako irizpena atxikitzea edo, oster, irizpen berri bat eskatu beharko litzatekeen.

Manu horrek honako hau zehazten du: «Irizpena eman eta gero, irizpenaren aztergaian garrantziko aldaketak egiten badira eta, ondorioz, batzordeak egindako iradokizun edo proposamenekin bat ez datozen edo horiek gainditzten dituzten eduki berriak jasotzen badira, aldaketa horiei buruzko kontsulta berria egin beharra dago». Arauaren testutik ondorioztatu daiteke, beraz, dagoen irizpena aurreko gobernu batentzat egina izan zein ez, **beste azterketa bat egitea bidezkoa izango dela baldin eta «funtsezko aldaketak» gertatu badira Gobernu Kontseiluari onarpenerako edo igorpenerako berriro aurkeztuko zaion lege-proiektuaren proposamenean**. Funtsezko aldaketen kontzeptu juridiko lausoa zehazteko, artikuluen testuari jarraituz eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak berak adierazi izan duen bezala, aldaketa horiek aurreko irizpenarekin duten loturari erreparatu beharko zaio.

Horri dagokionez, garrantzizkoa da Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren beraren doktrinara jotzea, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko Legearen 29. artikuluari eman behar zaion interpretazioa dela-eta. Ez onartzeko bere erabakietan eta irizpenetan Batzordeak irrimo ezarritako doktrina da. Duela gutxi Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkuran egindako 4/2017 Akordioa –2017ko apirilaren 26ko saioko irizpenaren eskaera onartzen ez zuena– hitzak ekar ditzakegu txosten honetara:

7. Edo, bestela esanda, 10/2000 Irizpenean adierazitakoaren ildotik, Batzordeak berriz aztertu beharko du gaia, baldin eta lantze berri horretatik ateratzen bada aurreko esku-hartzean aztertutako elementu edo alderdi substantiboez bestelakorik badela, eta duten garrantziagatik, beste azterketa bat eskatzen dutela: orduan bakarrik, eta ez bestela.

8. Doktrina hori bat dator Auzitegi Gorenak Estatu Kontseiluari dagokionez ezarritakoarekin, eta, ondorioz, guztiz aplikagarri zaie batzorde honek esku hartzeko kasuei.

9. Doktrina horrekin bat etorritz, laburbilduz, kontsulta berriz egitea egokia da, baldin eta «... Estatuko Kontseiluaren irizpenaren ostean egindako berrikuntzak ez baditu hark iradoki, kontsultarekin loturarik ez badute eta, gainera, funtsezko garrantzia badute» (AGE, 1993ko maiatzaren 27koa, RJ 1993\102040).

10. Ondorengo erabakietan zehaztu dituzte kasu horiek; horrela, bada, Auzitegi Gorenaren 2009ko martxoaren 10eko Epaiak (AGE – RJ\2009\5110) honako hau nabarmentzen du: «Ez da beharrezkoa Estatuko Kontseiluari beste kontsulta bat egitea testua orrazten badute edo funtsezkoak ez diren aldaketak egiten badituzte (...), ezta proiektuaren eta behin betiko testuaren arteko desadostasunak egiteko prozeduraren ondorio logikoak badira; horren barruan, izan ere, hainbat organok txostenak

egiten dituzte eta aldagetak eragiten dituzte horiek azkenean onartzen den xedapenean. Gaineratu daiteke, orobat, Salaren doktrinak berak nabarmendu duela xedapen orokorrak egiteko ezarritako prozedurako bermeen interpretazio funtzional eta teleologikoa egiteko beharra. Horiek ez baitaude justifikatuta egitearen formalismo hutsagatik, duten xedeagatik baizik, eta haien balorazioan dena delako xedapen orokorraren berezitasunak hartu behar dira kontuan (...).»

11. 2009ko martxoaren 10eko Auzitegi Gorenaren Epaiak gogorarazten du Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia dela honako hau (AGE, 2006ko martxoaren 8koa): xedapen orokor baten behin betiko testuan egindako aldagetak funtsezkoak ez badira, ez zaie xedapenak zuzenean eragiten dien elkarte, korporazio edo entitateei entzunaldi berririk egin behar eta ez da Estatu Kontseiluaren txosten edo irizpen berririk behar, «besteak beste, haren iritzia ez baita loteslea; beraz, aldageta jasota badago ikuspegi erlatibo batetik, testuan egindako berrikuntzak direla eta, zein ikuspegi absolutu batetik, berezkoa duen garrantzia dela eta, ez du funtsezko aldagetarik eragiten aurrez entzunaldia edo txostena egin duen ordenamenduan. Horien gabeziak, txertatutako erreformari dagokionez, ez dakar haren erabateko deuseztasuna; izan ere, xedapena behin betiko idazteko ahala duenak kontuan hartu ditu kontsultatutako entitate, korporazio, elkarte eta organismoen irizpide edo ilustrazioak, eta hori da, azken batean, bilatzen den helburua (...), erregelamenduak egiteko prozedura bat ezartzen baita (...).»

12. Era berean, 2001eko urtarilaren 31ko AGE aipatzen du, 1993ko maiatzaren 27ko Epaiaren erreferentziaz, eta han egindako aldagetak balioesten ditu, zeinak ez baitzuten Estatu Kontseiluaren irizpen berri bat eskatzen: «beharrezkoa baita irizpen horren behin betiko izaera bateratzea, aurrez emandako txosten espezifikoak eta planteatutako galdera guztien laburpen-judizio gisa, Gobernuaren arauzko ahala baliatzearekin (...), zeinari ahalmen hori kenduko litzaiokeen irizpen horren behin betiko idazketan literalki lotu beharko balitz; izan ere, irizpenerako bidalitako Proiektuak barne hartzen dituen gaiak arautuko balira soilik edo haren antolaketa osoa edo funtsean desberdina izango balitz, Estatu Kontseiluak halakorik iradoki gabe, orduan, alderdi horiei buruzko txosten berri bat eskatu beharko litzateke; izan ere, arauzko ahalmenaren titularrak Estatu Kontseilura bidalitako testuan beharrezkotzat jotzen dituen erreformak sartzeko ahalmena du azken idazketarako, adierazitakoa baino muga gehiagorik gabe (...).»

13. Aurreko doktrina erabat indarrean dago, 2016ko abenduaren 22ko AGE irakurrita ondoriozta daitekeenez (JB 2017/106).

14. Egokia da, horrenbestez, kontsultara aurkeztutako proiektuaren testua aztertzea berrikuntzen eta aurreko irizpenaren gogoeten arteko loturari buruzko irizpenari jarraikiz, hau da, Batzordearen irizpenaren iradokizunen ondorio diren edo, horrekin zerikusirik izan gabe, nahitaezko esku-hartze berri bat eskatzen duen funtsezko garrantzia duten.»

Halaber, Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan berariaz aipatutako txostena denez gero, atal honetan egin behar da arauen kontrol ekonomikoko txostena, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak «lege-aurreproiektuei» egin behar diena, ekainaren 30eko 14/1994 Legearen (Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzkoa) 25.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak egin behar duen txostena (Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol ekonomikoari eta kontabilitateari buruzko legearen 27.1 artikulua) baino lehenagokoa den arren, txosten horrek ere garrantzi berezia du; izan ere, jarduera ekonomikoan «lege-aurreproiektuek» izan dezaketen edukiaren zehaztapenak edo inpaktu nabarmenak horrelako txosten bat bidaltzeko derrigortasuna determina dezake (urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41. artikulua, 14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duena), bai eta hiritarrei eman beharreko proiektuari buruzko ezinbesteko informazioa eta entzunaldia ere (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 133.4 artikulua).

Ekonomia- eta araudi-kontrolari buruzko aurretiko txosten honek zerikusi handiagoa dauka testuinguruarekin, «lege-proiektuaren» beraren testuarekin baino, helburua honako hau baita: bertan ezarritako xedapenek, zuzenean edo zeharka, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren berezko gaietan zein gastuaren eta diru-sarrera publikoen aurrekontu-araubidean ondorioak dakartzaten edo eragina duten jakiteko adierazpena gauzatzea. Horretarako, garrantzi berezia du honi buruz irizpena emateak: «*Zer eragin duen arauak edo xedapenak une bakoitzean indarrean dagoen EAEko Diruzaintza Nagusiaren araubidean, ondarearenean, kontabilitatearenean, kontratazioarenean, bere zerga-sistemearenean, zorpetzearenean edo bermeak ematearenean.*» (Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen 26.1.b artikulua) edo «*proposatutako arauaren edo xedapenaren finantza-arrazoizkotasuna, kuantifikatzeko moduan.*» (Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen 26.1.b artikulua). Azken alderdi horrek, beste ñabardura ugariaren artean, «Administrazio Publikoen finantza-egonkortasuna» izeneko araudian du eragina.

Egia da nahitaezko txosten hori kontrakoa eta eragozlea izanda ere «lege-aurreproiektuak» bere prozeduran aurrera egin lezakeela harik eta sailburu eskudunak hura Gobernu Kontseiluari aurkeztu arte. Azken horrek proiektua onartzeko edo baztertzeko askatasun osoa du, txosten honetan zehar adierazi dugun moduan.

Txosten honen bidez erantzun nahi den funtsezko galderari helduko diogu berriz: Beharrezkoa al da Kontrol Ekonomikoko Bulegoak berriro txostena ematea Gobernu Kontseiluak jada onetsia duen «lege-proiektu» bati buruz, alбора utzita zer erabaki zuen Gobernu Kontseiluak, proiektua Legebiltzarrerara igortzea edo ez? Kontrol Ekonomikoko Bulegoak behinola emandako txostena nahikoa ote liteke hura Legebiltzarrerara igorri eta gero espediente parlamentarioa Ganbera desegitearen ondorioz iraungi bada?

Arauen kontrol ekonomiko horri buruzko araudiak ez du berariaz ezer xedatzen beste txosten baten beharrari buruz. Aipatzen ditu, soilik, EAEko Kontrol Ekonomikoari eta Kontabilitateari buruzko 27.1 *in fine* artikuluan aipatu ere, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpena egin behar dien arau-proiektuak, eta, batzorde hori izango denez erabakitzen azkena, «... *Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio organo aholku-emaile horren*

irizpenak jasotako iradokizun eta proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-proiektuetan egin daitezen aldaketak, onartu baino lehen».

Hau da, gehitutako aldaketa baino ez dute «jakinarazi beharko», bestelako izapiderik gabe. Ez dago beste irizpen bat formalizatu beharrik, nahiz eta, hori gorabehera, Ogasun gaietan eskumena duen sailburuak aldaketen berri jaso, sailaren barruko bideetatik, eta Gobernu Kontseiluan bere gogoetak baliarazi.

Ondorioz, kontuan izanik edozein araudik ekonomian garrantzizko eragina izan dezakeela, txosten honen egileak uste du atal honetako goiko paragrafoetan azaldutakoari eutsi behar diola; hala, bada, (i) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak ez badu bidezkoztat jotzen Gobernu Kontseiluak jada onetsitako lege-proiektu bat Legebiltzarrari berriro igortzeari buruz bere iritzia azaltzea, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak hori egiteak ere ez dirudi bidezkoa, eta (ii) erabakiko balitz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak lege-proiektu horren gaineko iritzia azaldu behar duela, kasu horretan ere ez dirudi bidezkoa Kontrol Ekonomikoko Bulegoak bere iritzia azaltzeak, ezertan galarazi gabe haren iritzia jakinaraztea legezko ondorio egokietarako, bai eta aldaketak ere, halakorik egiten bada.

Hori guztia, **alde batera utzi gabe lege-aurreproiektua Kontrol Ekonomikoko Bulegoari igortzeko betebeharra, izapiderearen jakitun izan dadin eta eduki ekonomikoa badagoen ala ez balora dezan**, bat etorritik 14/1994 Legearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 41.2 artikuluan ezarritakoarekin.

5. LEGE-AURREPROIEKTUEN ETA -PROIEKTUEN ARTEKO BEREIZKETA ETA LEGEBILTZARRERA IGORTZEKO EGINTZA

Jaurlaritzari buruzko Legearen arabera, sailburuen eskumena da Jaurlaritzari aurreproiektuak aurkeztea, eta horiek «*Jaurlaritzak lege-proiektu gisa onar ditzan proposatu*» behar dira (Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikulua, Jaurlaritzari buruzko Legearen 55. artikuluekin lotuta). Lege-aurreproiektuak «*Gobernu Kontseiluari aurkeztuko zaizkio, azter ditzan; aztertzen diren bilkuran bertan erabakiko du haiek behin betiko onartu edo ez, edo, bestela, azken idazketa egiteko kontuan hartu beharko diren irizpideak ezarriko ditu, bai eta, hala balegokio, behin betiko onartu bitarteko bidean egin beharreko jarduketak ere*» (XOEPLaren 13. artikulua). Bestalde, Jaurlaritzari dagokio «*Legebiltzarrerara bidaltzeko lege-proiektuak onartzea edo baztertzea, Legebiltzarraren Erregelamenduak finkatutako baldintzetan*» (Jaurlaritzari buruzko Legearen 18. artikulua).

Izan ere, bai lege-aurreproiektuek erregelamendu-ekimenen izapidetzearen aldean duten izaera berezia, bai Gobernu Kontseiluak nahitaez haiek aintzat hartu beharra, berezitasun gehigarriak dira lege-aurreproiektuak izapidetzean, eta horrela aitortzen du Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legeak berak, «*Xedapen bereziak*» izenburuko bere III. kapituluaren sartzen baitu 13. artikulua. Zioen azalpenean adierazten du horren arrazoia: «*Legeen garrantzi berezia dela eta, lege-aurreproiektuak aztertzeko berariazko izapide bat ezarri da Gobernu*

Kontseiluarentzat. Horren helburua da legegintzako ekimena erabili behar duen organoak, artikuluka banatutako testu bat aurrean izanez, legea egiteko prozeduraren planifikazioa bideratzea eta haren ardura bere gain hartzea, ondorengo entzunaldi-, kontsulta- eta txosten-izapideek ekar ditzaketen emaitzak gorabehera».

Hemen, berriz ere galdetu liteke zertan diren juridikoki ezberdin izapidetze administratiboaren xede izandako eta «lege-proiektu» gisa onartutako edo onartu gabeko «lege-aurreproiektuak», batetik, eta Legebiltzarrera igortzen diren «lege-proiektu» substantzialak, bestetik. Hasteko, argitu behar dugu txosten honetarako ez duela funtsezko garrantzirik «aurreproiektuen» eta «proiektuen» artean egin ohi den izen-bereizketak —gorago aipatu ditugun Jaurlaritzari buruzko Legearen artikuluko horien arabera, badirudi EAEko antolamenduan «aurreproiektu» deitzen zaiela sailek egindako testuei, zeinak Jaurlaritzari proposamen gisa aurkezten baitzaizkio «lege-proiektu» eran onar daitezen eta lege-proiektu bihurtzen baitira aipatutako organoaren onarpena jasotzen dutenean—. Garrantzi eta funts handiagokoa da, ordea, honako hauek bereiztea: «testua», bere prestatze administratiboaren fasean, harik eta Gobernu Kontseiluak onartzen duen arte, eta «Legebiltzarrera igortzekoa den dokumentua», izapidetze parlamentarioaren xede bihurtuko dena behin betiko, Jaurlaritzak legegintzako ekimenerako ahala baliatzean.

Horri buruzko doktrina ugari dago, baina gaur egun —exegesi jasoagoak salbu— nahiko argigarria da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 127. artikuluan «Legegintza-ekimena eta erregelamenduak eta lege-mailako xedapenak emateko ahala» izenburupean xedatutakoa:

«Nazioko gobernuak Konstituzioan aurreikusitako legegintza-ekimena baliatuko du, lege-aurreproiektuak prestatuz eta onetsiz eta gero lege-proiektuak Gorte Nagusietara igorritz.

Autonomia-erkidegoetako gobernu-organismoek Konstituzioan eta beren autonomia-estatutuetan ezarritako moduan baliatuko dute legegintza-ekimena. (...)»

Nahiz eta artikuluko horren lehenengo zatia kontsideratu daitekeen Estatuko Administrazio Orokorren esparruan haren aplikazio eskusiboa aplikatzea aurreikusten duten manuen arabera (horregatik, ez litzateke Euskal Autonomia Erkidegoan aplikagarria Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen azken xedapenetatik lehenengoan ezarritako moduan), ez dago kontraesanean, puntu horretan, Jaurlaritzari buruzko Legearekin. Alegia, gobernu-organismoek bi fasetan egikaritzen dute legegintzako ekimena, zeina, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari esleitzen baitiote Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. eta 18.a) artikuluek: lehenengo fasean, barrukoan, «lege-aurreproiektuak eginez eta onartuz», eta gero, bigarren fasean, «lege-proiektuak Eusko Legebiltzarrera bidaliz».

Bi fase horiek —eta beren izapidetzeen emaitzak—, zalantzarik gabe, badute garrantzia, Jaurlaritzaren jardunaren bi aldeak islatzen dituztelako: batetik, zuzendaritza politikoko organoa da, eta, bestetik, Administrazio Publikoaren egiturako organo gorena.

Esan daiteke, bada, «*Lege-aurreproiektu*» bat, Administrazioaren barruko jardueraren emaitza dela. Administrazioaren barruko jarduera horrek diskrezionaltasun-irizpide nabarmenak ditu, baina programaziopean dago (arau-plangintza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 132. artikulua) eta berariazko prozedura baten pean; horren gabeziak deuseztasun-akatsak sor ditzake —are bide jurisdikzionaletan aurkaratzeko modukoak—. Gobernu Kontseiluak hura onartzeak (eta «*lege-proiektu*» bihurtu, Jaurlaritzari buruzko Legearen terminologian) jada amaierako egintza juridikoaren izaera ematen dio —Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legearen 13. artikulua—, eta une horretantxe buka litezke haren izapidetzea eta ondorioak.

«*Lege-aurreproiektuen*» azken xedeak, noski, onartze soila edo Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legean araututako prozedura-ibilbidea bukatzea gainditzen ditu. Hau da, onartua izatetik eta Gobernu Kontseiluko (edo haren Idazkaritzako) administrazio-zerbitzuetan «*onartutako lege-proiektu*» gisa egonean egotetik harago doa. Aldiz, asmoa da antolamendu juridikoa eraldatzea alderdi jakin batean —lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua—, oinarritzat hartuta gizartearen eta zerbitzatu beharreko herritarren benetako eskakizunen arabera taxututako gobernu-programa bat.

Xede eraberritzaile horretarako lagungarria da «*lege-proiektua*» Legebiltzarrerara igortzea, gaur egun Administrazio Zuzenbideko inongo arauen pean ez dagoen ahala erabiliz burutzen diren «*egintza politiko*» horietako bat, hain zuzen. Izan ere, proiektua Legebiltzarrerara nola eta zein agirirekin batera igorri behar den zehazten duten manuak hain daude bi munduen arteko mugatik hurbil non ia-ia Zuzenbide Parlamentarioko manutzat jo daitezkeen (Jaurlaritzari buruzko Legearen 57. artikulua Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikulua korrelatibo gisa, Jaurlaritzari buruzko Legearen 58. artikulua prozedura parlamentarioaren beraren araudi gisa).

Illo horretatik, igortzeko egintzak plus bat eransten dio Jaurlaritzak onartutako «*lege-proiektuaren*» onespén-egintza perfektuari, helburu jasoago batekin, hots, gobernu-programan dagoen legeegintza-programari edukia emateko helburuarekin, antolamendu juridikoak aitortutako legeegintzako ekimenerako ahala baliatuz.

Gobernu Kontseiluak «*lege-proiektu*» bat Legebiltzarrari aurkezteko hartzen duen «*igorpen-erabaki*» horren izaera «*politikoa*» Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzian berretsita dago. Izan ere, 1990eko martxoaren 15eko Epaian (KAB 1990, 45), honako hau adierazi zuen Konstituzio Auzitegiak:

«... Gobernuaren eginkizunak Konstituzioaren 97. artikuluan aipatzen dira; ez daude Gobernuaren jarduketak guztiak Administrazio Zuzenbideari loturik. Dударik gabe, adibidez, ez daude loturik beste organo konstituzional batzuekiko harremanekin zerikusia duten jarduketak; besteak beste, lege-proiektu bat edo antzekoren bat Gorteetara bidaltzeko erabakia. Espainiako Konstituzioaren 97. artikuluan esleitzen zaion zuzendaritza politikoko eginkizuna ere betetzen du Gobernuak Gorteen bitartez. Kontrol judizialaren pean dauden

administrazio-jarduketan aldean bestelakoak dira Gobernuaren jarduketa horiek; mota horretakoak dira Gobernuari dagokion akzioaren alderdi bati edo besteari lehentasuna ematen dioten erabakiak, salbu eta lehentasun hori nahitaezkoa denean, legeek xedatutakoa betetzeko».

Auzitegi Gorenak ere ildo bereko adierazpenak egin ditu bere jurisprudentzian, funtsean Estatuko botereen arteko harremanei jarri badie ere arreta. Hala, legegintzako ekimena egikaritzeko eskaerari ezetza emateko edo ekimen hori egikaritu den kasuei buruzko epaiak eman ditu (Auzitegi Gorenaren 1990eko martxoaren 13ko Epaia [JB 1990, 1938]; 1990eko urriaren 25ekoa [JB 1990, 7972]; eta 1991ko abenduaren 10ekoa [JB 1991, 9254]).

Hortik jada ondorio batzuk atera ditzakegu:

- I. Lege-aurreproiektuen izapidetzeari ez dio eragiten, printzipioz, Legebiltzarra desegin eta prozedura parlamentarioak iraungitzeak.
- II. Ez dira alde batera utzi behar Xedapen Orokorrek egiteko Prozedurari buruzko Legean ezarritako izapideak, baina ahal bada, eta helburu materialari kalterik egin gabe, aurrez egindako izapideak balio osoa izaten jarraitzen dutela ulertu behar da. Hori beti prozedura sustatzeko ardura duen organoak balorazioa burutu beharra alde batera utzi gabe, eta kontuan hartuta, gainera, prozedurak kasu horietan duen izaera berezi malgua eta antiformalista.
- III. Gobernu Kontseiluari aurkeztzen zaizkion «lege-aurreproiektuak», eta hark «lege-proiektu» eran onartzen dituenak —Legebiltzarrera bidali edo ez bidali bertan izapidetzen jarraitzeko—, administrazio-egintza baliozkoak dira (antolamendu juridikoaren berrikuntzan eraginkorrak ez badira ere). Eta Gobernu Kontseilu horretan dute egoitza, inongo iraungitze-datarik gabe, Xedapen Orokorrek Egiteko Prozeduraren Legean aurreikusitako prozedura-ibilbideari amaiera ematen diotelako.
- IV. Gobernu Kontseiluak «lege-aurreproiektua» aintzat har dezake eta amaierako onarpena eman diezaioke Legebiltzarrera «lege-proiektu» gisa igortzea erabaki aurretik edo hori erabakitzearekin batera.
- V. Gobernu Kontseiluak «lege-proiektu» bat onetsi ondoren, Legebiltzarrera bidaltzeko erabakiak Gobernu Kontseiluaren administrazio-funtzioa gainditzen du, eta beraz, «egintza politikotzat» hartu beharko da. Ondorioz, egintza politiko hori ez dago arau-aginduen mende, aukera-irizpideen mende baizik, bidalketa horrekin batera aurkeztu behar diren agiriak zehazten dituzten arauak alde batera utzi gabe, betiere horiek zehaztuko baitute Ganberaren mahaiak onartuko dituen edo ez.

6. LEGEBILTZARRERA IGORRITAKO «LEGE-PROIEKTUEN» EGOERA ADMINISTRATIBOA HURA DESEGINDAKOAN.

Lehenago azaldu denez, Eusko Legebiltzarra desegin edo haren agintaldia amaitutakoan, iraungi egingo dira, beren espediente parlamentarioari dagokionez, izapidetzen ari diren gai guztiak, Legebiltzarra desegin aurretik bertara bidali diren «lege-proiektuak» ere tartean direla. Galdetu liteke, bada, Gobernu Kontseiluan onartu eta Legebiltzarrera legegintzako ekimen gisa igorritako «lege-proiektuak» zer egoeratan geratzen diren Legebiltzarra desegin ondoren, Administrazio Zuzenbidearen ikuspuntutik.

Gobernu Kontseiluak onartutako «lege-proiektu» horiek, txosten honen egilearen iritziz, fase administratiboa deituko diogun horretan ezarri zaien helburua betetzen dute baita Legebiltzarra desegin eta gero ere. Hau da, eta Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen zioen azalpenean adierazitako baldintzetan, aurrez ikus daitekeen eta zehatza den legegintzako ekimen baten edukiaren forma eta funtsa aurreikusteko, metodo honi jarraikiz:

«...erregelamenduaren mailako xedapenetarako ezarritako metodologia bera ezartzea Jaurlaritzaren barruan egiten diren legeetarako. Horrela legegintzako ahala duenaren eginkizuna erraztu egingo da, hobeto funtsatutako egitasmoak aurkeztuko baitzaizkio eztabaidarako eta erabakia hartzeko, helburuak iristeko egokiagoa eta finagoa den teknika juridikoaz artikuluka banatuak. Funts zehatzago eta ziurrago horren gainean dagokio Legebiltzarrari egitasmoak zuzendu eta onartzea».

Izan ere, arauak egiten hasteko erabakia, bai fase administratiboan, bai araua Legebiltzarrera igorritz haren izapidetze parlamentarioa abiarazteko garaian, ez da «... betekizun formal huts bat, baizik eta garrantzi juridiko eta politiko handia duen egintza bat, arauaren beharrian eta bideragarritasunaren gainean gutxieneko gogoeta behar duen egintza bat, alegia. Horrexegatik, arauaren edukia finkatzen eragina izango duten era guztietako aldagaiak kontuan hartzea eskatzen du (azterlanak, txostenak, entzunaldiak, kontsultak, negoziazioak eta abar); orobat, araua indarrean sartzeak gutxi gorabehera zer kostu ekarriko duen eta zer eraginkortasun izango duen kalkulatzeko eskatzen du, ez bakarrik herri-administrazioei begira, baita herritarrei eta, eskuarki, ekonomiari begira ere» (Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen zioen azalpena).

Hala ere —eta hemen hartzen du balioa Gobernu Kontseiluari dagokion goi-zuzendaritza politikoak—, Gobernu Kontseiluak bere egin ote dezake lehenago izapidetutako «lege-aurreproiektu» bat, edo are lehendik onartuta dagoen «lege-proiektu» bat, eta hura berriro igorri Legebiltzarrera «lege-proiektu» gisa? Hori egin al dezake dagoeneko lege-proiektu hori aurrez Legebiltzarrera bidalita dagoenean?

Azaltzen ari garenez, eta alde batera utzita xedapenaren «garrantzi handia» (Xedapen Orokorrak egiteko Prozedurari buruzko Legeak hitzez hitz dioen moduan), erabaki politikoa da, argi eta garbi, Gobernu Kontseiluak lehenagoko proiektu bat bere egitea eta Legebiltzar berriari igorri behar zaion ala ez erabakitzea; horrela, proiektu hori sendotu egiten du, beharrezkoa eta

egokia den —eta, beraz, indarra duen— legegintzako erabaki politiko gisa, Legebiltzar berritik sortutako gobernu-programari jarraituz.

Egia da edozein lege-proiektu Legebiltzarrera igortzen denean beti erantsi behar direla Jaurlaritzari buruzko Legearen 57. artikuluan eta Legebiltzarraren Erregelamenduaren 133. artikuluan eskatzen diren aurrekariak eta agiriak, ez dadin zalantzarik izan Legebiltzarreko Mahaiak hura onartzeari begira. Hortik aurrera, ordea, era berean erabaki nabarmenki politikoa da proiektu hori eta aurretik egindako izapidetze administratibo hori Gobernu Kontseiluak bere egitea. Jaurlaritza berriak erabaki politiko hori hartu du, hasiera batean proiektu horiek onartu zituen Administrazio beraren goi-zuzendaritzan eta zuzendaritza politikoan diharduela —Administrazioak nortasun juridiko bakarrarekin dihardu beti, nahiz eta Jaurlaritza aldatu—, dagoeneko fase administratiboan izapidetua izan den proiektuaren nahikotasuna, gaurkotasuna eta indarra berretsiz.

Hau da, egindako izapidetze-egintzen balizko baliozkotasun juridikoa ontzat emanda, egintza horiek ez dute eraginik izan Gobernua aldatzearen eta Legebiltzarra desegitearen ondorioz.

Beraz, dokumentu hau sinatzen duenaren iritziz, Zuzendaritza honi egindako galderari erantzunez, adierazten dugu ekimenen izapideak ezin izango direla *«alde batera utzi»* eta nahitaezkoak izango direla, Xedapen Orokorrek egiteko Prozedurari buruzko Legearekin bat etorritz. Hala sailburuak, proposamena Gobernu Kontseiluari aurkezterakoan, nola Gobernu Kontseiluak, ekimen legegilerako ahalmena erabiliz Legebiltzarrera bidaltzeko erabakia hartzerakoan, lehenago egindako baliozko izapideak kontuan hartu eta erabili egin beharko dituzte. Gutxienez, **«lege-proiektu»** hori **Gobernu Kontseilu berriak bere agintaldian zehar egingo duen aurreikuspen politikoarekin bat datorrela egiaztatzen bada, ordenamendu juridikoan ezartzea oraindik ere beharrezkoa bada eta lege-proiektua onetsi ondoren sortu den araudiak «lege-proiektuaren» testuko funtsezko osagaietan eraginik izan ez badu.** Balorazio hori, izatekotan, irizpide materialetan eta aukera- eta egokitasun-irizpide zorrotzetan oinarrituz egin beharko da.

Esandakoari dagokionez, ezin dugu txosten hau amaitu hau esan gabe: **Lege-iritziz honen xede den testu zehatza eta aurreko Gobernu Kontseiluak 2016ko apirilaren 26ko bilkuran onetsi zuen testua ez datoz bat** Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketari buruzko lege-proiektuaren testu berrietan jasotako aldaketa batzuetan, eta horiei buruzko adierazpena egin dugu lege-iritziarekin batera doan Memorian; honako adierazpen hau hain zuzen *«...testuan bi aldaketa txiki baino ez dira egin»*.

Azalpenen zatian bi lerrokada berri gehitzen dituen lehenengo aldaketari buruz, aipatu behar dugun lehenengo gauza da, aldaketok zioen azalpenen atalean kokatzen diren arren, horrek ez diela garrantzirik kentzen. Aginduzko xedapen ez izan arren, zioen azalpenek zati xedatzailea finkatu eta interpretatzen laguntzen dute eta bere irismena zehaztuko dute. Horretarako, nahikoa

da gogoraztea Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 129.1 *in fine* artikuluan, erregulazio onaren printzipioen ezarpenari buruzkoak: «Zioen azalpenean edo atarikoan –lege-aurreproiektua den edo erregelamendu-proiektua– behar bezala justifikatu beharko da printzipio horiei lotzen zaiela.»

Dagokigun kasuari dagokionez, lehenik, bi lerrokada berri gehituko direla aipatzen da zioen azalpenean bi aipamen zehatz egiteko: i) 2017ko ekainaren 14ko Segurtasun Batzarreko akordioak; eta ii) Poliziaren Etikaren Kode Europarrari buruzko Europako Kontseiluaren Gomendioa.

Lerrokada berri horietatik lehenengoa zioen azalpenaren *I. Apartatuko bigarren zenbakia* da. Eta proiektuan sartzan da jatorrian proiektu hori onartu zen baldintzetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legeari buruzko bosgarren aldaketa honen helburua, hots, Ertzaintzako polizia integralaren ereduaren aldaketa finkatzea, Euskadiko Autonomia Erkidegoan zentzu horretan gertatzen ari den bilakaera finkatzea baita. Beraz, Segurtasun Batzordeko akordioak aipatzeak beste aurrekari bat ezartzen du, 2016ko Lege-proiektuaren hasierako onetsi ondoren gertatutakoa, eta onespenaren unean dagoeneko zeudenekin bat datorrena. Hortaz, duen balio exegetikoa nahiko mugatua da.

Lerrokada berrietatik bigarrena ere zioen azalpenaren *I Apartatu* honetan sartuta dago, zehazki *bosgarren zenbakian*, interpretazio-garrantzi handiagoa izateari buruzkoan, araudiaren zati xedatzailearen integrazio eta interpretaziorako iturri bat izan baitaiteke, testutik ondoriozta daitekeenez:

*Gizarte ireki eta anitzean Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren helburua eskubide eta askatasunen defentsa defendatu eta babesteko konpromiso aktiboa hartzea da, **horregatik lege honek Poliziaren Etikaren Kode Europarrari buruzko Europako Kontseiluaren Gomendioa hartzen du bere gain Euskal Autonomia Erkidegoko poliziari aplika dakioken ordenamenduaren zati gisa.***

Argi dago Lege-proiektua integratzeko eta interpretatzeko lan honek izaera osatzaile eta dinamikoa duela. Hala ere, Europako Kontseiluak hainbat ikuspegitatik sustatzen dituen eskubideekin eta askatasunekin duten lotura kontuan hartuta, egokitzapen hori, nolabait, Lege-proiektuaren jatorrizko bertsioak barnean hartzen zuen. Eta zentzu horretan, zioen azalpenean esplizitu egiteak gehienez ere argitzeko balio du, eta horrek lege-proiektuak sustatzen dituen aldaketa arauemaileak Europako esparru juridikoaren errealitatera arinago egokitzea eragiten du –eta horren homologazioa lortu nahi du Euskal Autonomia Erkidegoko poliziak–, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren herritarrek errazago ezagutu eta ulertzea.

Hortaz, 2016an onetsitako Lege-proiektuaren esparru xedatzailea are gehiago zehazten du lerrokada horrek, baina ez du, inolaz ere, bertan arautzen dena aldatu edo eraldatzen, baizik eta dagoeneko sartuta gauden esparru juridikoan homologatu.

Bidali zaigun memorian aipatzen den bigarren aldaketa Lege-proiektuan sortzen den Batzorde baten izena aldatzeari buruzkoa da, eta II. Kapitulu berriaren barruan dago (*Polizia-jarduera kontrolatzeko mekanismoak*). Zehazki, 10.1 eta 2 artikuluari, 11. artikuluari eta 14.1 artikuluari emandako idazketan ikus daiteke hori, baita onetsitako lege-proiektuen Zioen Azalpeneko II. apartatuan idazketa horri egiten zaion aipamenean ere.

Orain bidali den memorian ez da esaten «*zergatik hartzen den egokiagotzat*» izen-aldaketa hori, baina arrazoietako bat II. Kapitulu izen berria izan daiteke, kapitulu horri baitagozkio aldaketak; «*Polizia-jarduera kontrolatzeko mekanismoak*» da izenburua. Zalantzarik gabe, egokiagoa da izen hau: «*Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen Kontrol eta Gardentasunerako Batzordea*». Eta horrek ez luke garrantzirik izango egindako aldaketen funtsezkotasuna neurtzeko, organoaren izena bakarrik aldatzen baita, eta ez 2016an Gobernu Kontseiluak onetsitako lege-proiektuaren osaera, eskumena edo edukia.

Hau da, ez dirudi aldaketok funtsezko aldaketarik edo aldaketa garrantzitsurik ekar dezaketarik dagoeneko onetsita dagoen lege-proiektuan.

7. ONDORIOA

Laburpen gisa: gaur egun indarrean dagoen Gobernu Kontseiluak, Jaurlaritzari buruzko Legearen 16. eta 18.a artikuluek aitortzen dioten legegintzako ekimenerako ahala baliatuz, erabaki dezake lehendik ere onartuta dagoen «*lege-proiektu*» bat onartzea eta Legebiltzarrera igortzea, aldeztu aurretik sailburu eskudun batek (edo gehiagok, eskudunak gehiago badira) proposamena aurkeztuta.

Gobernu Kontseiluko kide batek edo gehiagok aurkeztutako proposamen horrek helburutzat izan behar du, Jaurlaritzari buruzko Legearen 26.8 artikuluan jasotako egokitasun-erabaki formala eta proposamena islatzeaz gainera, berrestea bai arauaren bideragarritasunak indarrean dirauela (hots, ez diotela eragin lehengo igorpenaren ondoren onartutako arauak), bai lehenago egindako izapideek indarrean dirautela eta antolamendu juridikoan egin nahi den berrikuntza egokia eta beharrezkoa dela, egungo Jaurlaritzaren proiektu politikoan aurreikusitako ildoekin bat etorritik.

Hartara, jada onartuta eta Gobernu Kontseiluaren eskuetan dauden «*lege-proiektuak*» berriro izango dira, ikuspegi parlamentariotik, «*lege-proiektu*» berriak, Legebiltzarrera igortzen direnean, beren aurrekari guztiekin batera; eta berriro hasiko da behinola Legebiltzarra desegin zenean iraungitako izapidetze parlamentarioa.

Hauxe da egindako txostena, eta zuzenbidean hobeto oinarrituriko beste edozeinen mende dago.

IV

MEMORIAS EXPLICATIVAS / AZALPEN MEMORIAK.

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN
BOSGARREN ALDAKETA LEGE
PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



MEMORIA EXPLICATIVA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

Con fecha 21 de abril de 2016 se remitió al Consejo de Gobierno Anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco. En sesión celebrada el 26 de abril de 2016 el Consejo de Gobierno procedió a la aprobación del Proyecto de ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco. Dicha iniciativa fue registrada y admitida a trámite con fecha 10 de mayo de 2016 en la sede del Parlamento Vasco. Iniciada la tramitación parlamentaria, la misma decayó por llegar a su fin la X legislatura.

Por Orden de la Consejera de Seguridad de 12 de enero de 2018 por la que se aprueba la planificación normativa anual del Departamento de Seguridad correspondiente a 2018 se acuerda incluir en dicha planificación, entre otros, el Proyecto de ley de modificación de la Ley de policía del País Vasco y remitirlo a la la Secretaria General de la Presidencia para su inclusión en el Plan Anual Normativo del Gobierno de 2018.

Dado que en el nuevo Anteproyecto no se encuentran modificaciones legislativas sobrevenidas de carácter básico y que tan solo se han incluido en el mismo dos mínimas modificaciones en el texto, que consisten en:

- a) La introducción en la parte expositiva de dos nuevos párrafos, con el fin de hacer referencia a los acuerdos de la Junta de Seguridad de 14 de junio de 2017 así como a la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código Europeo de Ética de la Policía.
- b) El cambio de denominación de la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco, que se ha considerado más oportuno denominar “Comisión de Control y Transparencia de la Ley de Policía del País Vasco”

Es por lo que se considera conveniente volver a remitir el presente Anteproyecto al Consejo de Gobierno con toda la documentación ya tramitada para proceder a su remisión al Parlamento Vasco.

Fdo.: digitalmente: Eugenio Artetxe Palomar

DIRECTOR DE RÉGIMEN JURÍDICO, SERVICIOS Y PROCESOS ELECTORALES



Nahi izanez gero, J0D0Z-T17E6-JC19 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektronikoa honetan: <http://euskadi.eus/lokalizatzailea>

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

J0D0Z-T17E6-JC19 en la sede electrónica <http://euskadi.eus/localizador>
Donostia - San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
tel. 945 01 87 58 - Fax 945 01 87 53 -



**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIARI BURUZKO LEGEARI
BOSGARREN ALDAKETA EGITEKO PROIEKTUAREN AZALPEN-
MEMORIA OSAGARRIA**

2016ko apirilaren 21ean, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legeari bosgarren aldaketa egiteko legearen aurreproiektua bidali zitzaion Gobernu Kontseiluari. 2016ko apirilaren 26ko bileran, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legeari bosgarren aldaketa egiteko legearen proiektua onartu zuen Gobernu Kontseiluak. Ekimena 2016ko maiatzaren 10ean erregistratu zen, eta izapidetzeko onartu, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan. Legebiltzarreko izapidea hasita, indargabetu egin zen, X. legegintzaldia amaitu baitzen.

Segurtasuneko sailburuaren 2018ko urtarrilaren 12ko Aginduaren bidez (bertan, Segurtasun Sailaren 2018ko arauzko urteko plangintza onartzen da), plangintza horretara Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legea aldatzeko lege-aurreproiektua sartzea erabaki zen, eta Lehendakariitzako Idazkaritza Nagusira bidaltzea, Eusko Jaurlaritzaren 2018ko Arauzko Urteko Planera sar zedin.

Aurreproiektu berrian, ez da oinarrizko lege-aldaketa garrantzitsurik jasotzen, bi aldaketa txiki hauek bakarrik egin baitzaizkio testuari:

- a) Bi paragrafo berri sartu dira azalpen-zatira, Segurtasun Batzordearen 2017ko ekainaren 14ko erabakiak eta Europako Kontseiluak poliziaren kode etiko europarrari buruz emandako gomendioa aipatzeko xedez.
- b) Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jarduera Onen Batzordeari izena aldatu zaio, egokiago ikusi baita "Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen Kontrolerako eta Gardentasunerako Batzordea" izendatzea.

Beraz, egoki jotzen dugu aurreproiektua Gobernu Kontseiluari bidaltzea, dagoeneko izapidetuta dagoen dokumentazio guztiarekin batera, Eusko Legebiltzarrera bidaltzeari begira.

Sin.: (digitalki) Eugenio Artetxe Palomar
ARAUBIDE JURIDIKOKO, ZERBITZUETAKO ETA HAUTESKUNDE
PROZESUETAKO ZUZENDARIA



MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO.

I.- Descripción de los antecedentes y justificación de la iniciativa normativa

II.- Tramitación del proyecto de ley

III.- Resumen de las alegaciones, propuestas y observaciones recibidas.

IV.- Análisis de las alegaciones y observaciones con explicación de las modificaciones introducidas y justificación de las alegaciones rechazadas

IV.- Resumen de los cambios introducidos con referencia al primer borrador.

VI.- Incidencia normativa

I.- DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA NORMATIVA

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, ha sido modificada en diversas ocasiones, y en especial con la Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi que desgajó de tal regulación los aspectos comunes al conjunto de la seguridad pública, tales como la regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, la coordinación de policías locales o los mecanismos de cooperación policial.

En esta quinta modificación de la ley se aborda un conjunto de reformas parciales que en conjunto tienden a reforzar los aspectos del modelo policial relacionados con la prestación de servicio a una ciudadanía a la que se debe rendir cuentas y la imbricación de los servicios policiales con una sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por hombres y mujeres iguales en derechos.

Las concretas medidas que se abordan son las siguientes:

a) En lo que atañe al reforzamiento del modelo policial:

- Se recepciona el contenido del Código Europeo de Ética de la Policía, que no sólo fija pautas de comportamiento al personal policial y a las autoridades policiales tanto en la interrelación con la ciudadanía, como en la propia organización interna de los servicios, estableciendo pautas que se enmarcan en el apartado relativo a la rrendición de cuentas.
- Se refuerzan los mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial. Para ello se refuerza el sistema de estímulos positivos del buen hacer policial, incluyendo tanto los estímulos retributivos que suponen ciertos complementos de productividad, complementos de carrera profesional vinculados a la evaluación del desempeño, gratificaciones extraordinarias o el sistema de condecoraciones y distinciones; e igualmente se modifica el régimen disciplinario para establecer mecanismos internos eficaces, proporcionales, adecuados y justos, que vayan más allá de la investigación de casos particulares de indisciplina para analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral.
- Se contempla la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo.
- Se crea una Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco, como organismo híbrido de carácter permanente, con autonomía funcional respecto de la institución policial y compuesta por personas especializadas, incluyendo a expertos policiales. Su finalidad es estudiar, a solicitud de los órganos competentes, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o policía local sobre la que existan quejas o incidencia en la confianza ciudadana. Además estudiará de oficio los incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona y propondrá medidas para la mejora del

servicio. La regulación de esta comisión preserva la neutralidad e independencia de sus miembros.

b) En lo que atañe a la selección e ingreso:

- Se regulan los requisitos para ser admitido en las pruebas de ingreso en una norma con rango de ley formal que hasta la fecha aparecían regulados en un reglamento. Por otra parte, se acomoda la regulación de los órganos de selección a las características de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, así como al equilibrio entre hombres y mujeres previstos con carácter general para el funcionamiento. Igualmente se prevé la vinculación de las bases de las convocatorias, y los supuestos en los que puede modificarse el número de vacantes convocadas o rectificaciones de errores sin abrir otro plazo de presentación de solicitudes.
- La Academia Vasca de Policía y Emergencias se configura como órgano permanente de selección y se permite que, cuando se lo soliciten de forma voluntaria las entidades locales, pueda llevar a cabo los procedimientos de selección para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, incluso de forma conjunta.

c) Se establecen medidas de acción positiva para favorecer la entrada de mujeres en los cuerpos policiales y corregir así su escasa presencia actual.

- Así, se regulan los planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y carrera profesional; corregir su infrarrepresentación e incrementar la eficacia policial.
- Destacan, por novedosas, las medidas de acción positiva a favor de las mujeres en procedimientos selectivos por turno libre que implicarían la preferencia de la candidata mujer frente al hombre en determinadas circunstancias, de un modo compatible con los parámetros exigibles en la jurisprudencia comunitaria europea de previsión legal, proporcionalidad y razonabilidad.

d) En materia de promoción interna, carrera profesional y provisión:

- Se favorece la carrera administrativa mediante promoción interna. Para ello se facilita que el personal ascienda en la organización minorando el número de años de servicio para ascender de categoría. Por otro lado se suprime el límite de tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna, limitación que cercenaba el derecho a la carrera administrativa incluso si el funcionario o funcionaria hubiera aprobado las pruebas si no hubiese obtenido plaza. Y por último se permite la promoción interna de quienes estén en situaciones administrativas asimilables al servicio activo a efectos del derecho de promoción profesional.

- Se prevén otras medidas que guardan relación con la promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres con la posibilidad de presentarse en los procedimientos de promoción interna de quienes estén en excedencia por cuidado de hijos o familiares, excedencia por violencia de género y servicios especiales. Igualmente se contempla que, a efectos de calcular el tiempo de servicios efectivos preciso para la promoción interna, se tengan en cuenta los periodos transcurridos en las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna.”
- En lo que se refiere a la provisión de puestos por concurso se diferencian aquellos aspectos meritorios por ley de otros que puedan ser considerados mérito en función de las características propias del puesto a proveer. Además se pormenorizan los contenidos que deben tener los procedimientos de concurso.
- Desaparece la categoría de superintendente, de modo que se agiliza el acceso y cobertura de los puestos de mando de mayor responsabilidad en la Ertzaintza por medio de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos.
- Se regula la carrera profesional horizontal como la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. El sistema de carrera profesional horizontal implica la instauración de un mecanismo de reconocimiento que permite acceder a los diversos grados de desarrollo profesional previstos en cada categoría a lo largo de los años que se establezcan y mediante la acreditación de competencias profesionales. El grado de desarrollo profesional determina la percepción del complemento de carrera profesional y, en su caso, habilita para el desempeño de determinados puestos. Como consecuencia de lo antedicho se modifica la estructura retributiva para incorporar entre las retribuciones complementarias el complemento de carrera profesional.
- Se regula el régimen de las especialidades en la Ertzaintza para tareas con conocimientos específicos. El acceso a las mismas se realiza mediante la realización de un curso de especialización, pudiendo exigirse titulaciones o conocimientos concretos. La especialidad supone un compromiso de permanencia y superación pruebas de actualización para seguir en la especialidad, en su caso. En la regulación se contempla la posibilidad de convocatorias conjuntas entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y el Departamento competente en Seguridad en las que se vincule el acceso al curso de especialización y su aprobación al otorgamiento inmediato de comisiones de servicio voluntarias en vacantes existentes con especialidad.

e) En lo que atañe a las situaciones administrativas:

- Se regula el servicio activo modulado por la edad, consistente en la continuación del servicio activo realizando tareas apropiadas a su condición; el disfrute de un régimen de jornada que no incluya el turno de noche; otras modificaciones de las condiciones de prestación del servicio pertinentes en razón de la edad, como la reducción de la jornada anual de trabajo.
- La nueva regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales se caracteriza por el desempeño de puestos o funciones adaptados a las capacidades reales del

funcionario, a diferencia de la normativa precedente que partía del presupuesto de que en situación de segunda actividad una persona cobraba las retribuciones básicas a disposición de cuando le llamasen para ocupar un puesto o ejercer tareas policiales. En esta regulación el funcionario o funcionaria que pase a esta situación administrativa permanece trabajando ya sea en su puesto anterior si es susceptible de segunda actividad, ya en otro puesto susceptible de tal desempeño, y si la reubicación no fuera inmediata se adapta provisionalmente su puesto a sus necesidades.

- En referencia a la situación de suspensión provisional de funciones se incorporan dos precisiones: una referente al cómputo del tiempo en suspensión provisional en la suspensión firme y la otra correlativa sobre el deber de devolver lo percibido en suspensión provisional si se eleva a definitiva.

f) En el régimen de derechos y deberes del funcionario:

- Se contempla un nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco, atendiendo especialmente a la obligación de las administraciones de velar por las condiciones psicofísicas del personal y la vigilancia de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales.
- Se obliga a contar con mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo.
- Se da una regulación más amplia a los derechos complementarios en los casos de muerte o incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los Cuerpos de Policía del País Vasco al no vincularlo a la evaluación del comportamiento meritorio del agente policial.
- Se contempla por primera vez en la ley el régimen de concesión de condecoraciones y recompensas honoríficas, previendo la posibilidad del ascenso honorífico sin efectos económicos a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten a funcionarios o funcionarias fallecidos en acto de servicio o jubilados.
- En cuanto a la representación y participación del personal de la Ertzaintza se clarifica la intervención del Consejo de la Ertzaintza en procedimientos disciplinarios y expedientes de rehabilitación, así como en la aplicación del régimen de condecoraciones.

g) En cuanto al régimen disciplinario:

- Se introducen nuevas faltas muy graves en materia de acoso sexual y sexista y acoso laboral reiterado, e infracciones al régimen de utilización de videocámaras policiales, así como se da nueva redacción a la falta relativa a la prevalencia de la condición policial y el notorio incumplimiento de las funciones de forma más acorde con la normativa general de los empleados públicos.
- Se modera el elenco de sanciones a imponer, de modo que la sanción máxima de suspensión de funciones por falta leve pasa de 5 a 4 días; por falta grave de 2 años a 1 año

y la suspensión de funciones por falta muy grave se sanciona en su grado mínimo con 1 año y un día.

- Entre los criterios de graduación de la sanción se contempla el historial profesional como circunstancia atenuante, se delimita el concepto de reincidencia como agravante y en caso de faltas por delito se valora específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales.
- Se refuerzan las garantías de las personas expedientadas en cuanto a sus derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, así como a conocer el estado de tramitación del procedimiento. En cuanto al derecho de defensa se garantiza la posibilidad de contar con el asesoramiento y la asistencia de un abogado o abogada en ejercicio o de un funcionario o funcionaria del cuerpo policial de su confianza, facilitando las autoridades al funcionario designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado o expedientada.
- Se regula el régimen y plazo de caducidad del procedimiento y se reduce el plazo de prescripción de las faltas y sanciones muy graves de 6 a 3 años, aumentándose por el contrario el plazo de prescripción de las leves de 1 a 3 meses.
- Se contempla la ejecutividad de las sanciones y los casos en que procede su suspensión y remisión condicional si existen motivos para ello. La ejecución o cumplimiento de las sanciones se realiza del modo que menos perjudique al sancionado, de modo que se prevé, por ejemplo, la posibilidad de la remisión condicional del cumplimiento de la sanción si opta como medida alternativa de cumplimiento de la sanción por el trabajo fuera de la jornada laboral estipulada sin remuneración o compensación alguna por un periodo igual al de la sanción impuesta.

h) En lo que atañe al título dedicado específicamente al funcionariado de la Ertzaintza y a su estructura profesional:

- Desaparece la categoría de superintendente, de modo que las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría pasan a singularizarse en concretos puestos de trabajo, lo cual facilita el acceso a los mismos, siempre que se cumplan las condiciones del puesto por los sistemas ordinarios de provisión.
- Se da nueva redacción a la regulación referente a la estructura organizativa de la función de policía judicial en la Ertzaintza, dado que las remisiones a ciertas normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contenía la redacción vigente habían quedado obsoletas.

i) En lo que se refiere a los cuerpos de policía local:

- Se prevén medidas diversas que dan respuesta jurídica a prácticas existentes, como la posibilidad de que la policía local actúe fuera del término municipal para ejercer funciones de protección de autoridades locales, etc.
- Se prevé que la Academia Vasca de Policía y Emergencias pueda formar bolsas de trabajo con personas que hayan superado cursos básicos organizados por ella, que servirán para

abastecer la demanda de las corporaciones locales y permitir la formación de los funcionarios o funcionarias interinos.

- Se contempla la estructura profesional de los cuerpos de policía local de un modo similar a la Ertzaintza, y en particular, las categorías correspondientes a la jefatura de tales cuerpos policiales atendiendo a la población o el número de personas integrantes del cuerpo. Atendiendo a ello, el proyecto de ley regula la integración del personal de la policía local en las nuevas escalas, y la adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de policía local.
- Se regula la figura del alguacil para los municipios que no cuenten con cuerpo de policía local y la del agente de movilidad para regular la circulación en el casco urbano.

II.- TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY

a) Por Orden de 18-6-2015, de la Consejera de Seguridad, se inicia el procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

b) Elaborado un primer borrador del anteproyecto, el mismo es informado por la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad con fecha de 12/07/2015. Asimismo, y con la misma fecha, dicha dirección emite memoria explicativa sobre el anteproyecto e Informe de Impacto en Función del Género.

c) Dicho borrador inicial fue aprobado por la Consejera de Seguridad en fecha 13/07/2015.

d) Con fecha de 13-7-2015 se publica en el B.O.P.V. la Resolución de 13 de julio 2015, del Director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad, por la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco por un plazo de 20 días. El anteproyecto se publicó en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco, Euskadi.net.

e) Con fecha de 17-7-2015 se solicitan los siguientes informes:

- Informe de Normalización Lingüística.
- Informe de Emakunde. Adjunto a la solicitud se remite el Informe de Impacto en Función del Género, elaborado por la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad.
- Informe de la Dirección de Función Pública.
- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA).

f) Con igual fecha se da trámite de audiencia a los sindicatos más representativos, a las diputaciones forales y a EUDEL y a asociaciones profesionales involucradas e igualmente se da traslado a todos los Departamentos del Gobierno Vasco del anteproyecto de ley a fin de que realicen las observaciones que consideren oportunas al respecto.

g) Han presentado alegaciones:

- EUDEL 29/7/2015
- Sindicato ESAN 14/7/2015
- Sindicato UGT, 30/7/2015
- Sindicato ERNE, 6/8/2015
- Asociación de Alguaciles de Euskadi, 29/7/2015
- Asociación de Jefes de la Policía Local de Euskadi – AJEPL, 7/8/2015

h) Han presentado alegaciones los siguientes Departamentos del Gobierno Vasco: Lehendakaritza (10/09/2015); Medio Ambiente (18/9/2015), Salud (22/8/2015), Empleo y Políticas Sociales (29/9/2015) y Educación, Política Lingüística y Cultura (21/10/2015). E igualmente la Diputación Foral de Bizkaia con fecha 10/8/2015.

i) Se han recibido los siguientes informes:

- Informe de Emakunde, 24/7/2015
- Informe de normalización lingüística, 17/7/2015
- Informe DACIMA, 27/07/2015

j) A la vista de las alegaciones e informes recibidos se elaboró un segundo borrador del anteproyecto de ley que recogía aquellas observaciones que se ha entendido que mejoraban el texto y dicho segundo borrador fue remitido a la mesa de negociación prevista en el art. 103 de la LPPV. Durante un mes estuvo abierta la negociación y fue objeto de las reuniones formales de dicha mesa de negociación celebradas los días 10 de noviembre y de 10 de diciembre de 2015, fecha en la se da por concluido el trámite de negociación.

k) En la fase de negociación hubo sindicatos que aportaron sus alegaciones por escrito:

- CCOO 5/12/2015
- ERNE 10/12/2015
- ELA Ertzaintza 10/12/2015

l) El segundo borrador del anteproyecto de ley fue informado por la Comisión de coordinación de policías locales de Euskadi en fecha 2 de diciembre de 2015. ELA Udaltzaingoa expuso en tal reunión sus observaciones y las ha presentado por escrito con fecha 14 de diciembre de 2015.

m) El segundo borrador del anteproyecto de ley fue informado por el Consejo de la Ertzaintza en fecha 14 de diciembre de 2015.

n) La Dirección de Función Pública ha evacuado su informe con fecha 22 de diciembre de 2015.

o) Con fecha 14 de enero de 2016 se ha elaborado la memoria económica y la memoria del procedimiento.

p) Con fecha 20 de enero de 2016 se solicitó informe a la Oficina de Control Económico.

q) Con fecha 8 de febrero de 2016 se elabora Orden de la Consejera de Seguridad por la que se solicita Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora (C OJUA E). Se recibe dictamen el día 20 de abril de 2016-

III.- RESUMEN DE LAS ALEGACIONES Y OBSERVACIONES RECIBIDAS

1) Alegaciones presentadas al primer borrador durante la fase participación, audiencia e información pública.

a) Mecanismos de control de la actividad policial:

En relación a las propuestas de reforma en este capítulo se han presentado las siguientes aportaciones:

El sindicato **ERNE** pretende su eliminación.

El sindicato **ESAN** sugiere suprimir el capítulo porque, a su juicio tiene “intencionalidad política”. Considera que las funciones de la comisión de control tal y como aparecían en el primer borrador podían suponer una injerencia en la labor judicial en caso de existir una investigación penal por los mismos hechos.

El sindicato UGT sostiene que las policías locales tienen su propio sistema.

En cuanto a la composición de la comisión de control Emakunde exige que la misma tenga una composición equilibrada de hombres y mujeres y que en la misma exista presencia de expertos en materia de género e igualdad.

El sindicato **ESAN** pretende que no se exija que sus componentes sean del grupo A (es decir, que puedan ser agentes de la escala básica si tienen titulación universitaria).

El **grupo de norma marco** solicita ampliar la composición a funcionarios de la policía local.

En cuanto al auxilio de otros funcionarios a la comisión de control **ESAN** estima que no deberían ir en comisión de servicios, lo que entiende que permite que se les revoque por motivos de oportunidad política.

ERNE se queja de que Ekinbide se ha convertido exclusivamente en un instrumento para el inicio de actuaciones por asuntos internos, si bien no presenta ninguna propuesta al respecto.

b) Código deontológico:

En relación al código deontológico **ERNE** propone algunas modificaciones.

- Que se reconozca la condición de agente de la autoridad (art 33) incluso fuera de servicio para garantizar a los policías iguales garantías jurídicas en caso de agresión a su persona o patrimonio.

- Modificar el art. 34 relativo al uso de armas eliminando la exigencia de que el riesgo sea grave, así como toda la referencia a que el empleo de armas de fuego sea una medida extrema para los casos en que exista resistencia armada o peligro para la vida propia o de terceras personas y no pueda detenerse o reducirse al agresor por otros medios. La modificación pretendida supondría un paso atrás significativo en la regulación legal del empleo de armas por la policía.
- Extender el derecho a la defensa jurídica del funcionario en caso de acusación penal a otros supuestos como daños en su persona, bienes, amenazas, insultos por su condición de miembro de la policía.

c) Formación y bilingüismo:

El sindicato **ERNE** propone en relación a esta materia diversas cuestiones, algunas que exceden del ámbito propio de la LPPV, por referirse a la regulación de la AVPE, que se contiene en otra ley:

- a) Plantea modificar la LOSSPE para que en el Consejo Rector de la AVPE la representación de los representantes de los funcionarios de los cuerpos de policía local la ostenten los sindicatos con mayor implantación en dichos cuerpos .
- b) Propone determinar los puestos de la AVPE que deban ser desempeñados por funcionarios policiales y que su selección se realice por principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
- c) Pretende que expresamente el art. 39.2 establezca la obligatoriedad del cumplimiento de los planes de formación de la AVPE.
- d) Propone que la ley habilite al reglamento para definir la periodicidad obligatoria de los cursos de formación, capacitación y euskaldunización.
- e) Respecto al compromiso del bilingüismo y a la euskaldunización propone una serie de disposiciones adicionales y transitorias nuevas con el siguiente contenido:
 - Un régimen transitorio en el que las RPT no atribuirán perfiles lingüísticos a los puestos hasta tanto todos los funcionarios hayan podido ser liberados para euskaldunizarse. En dicho periodo el perfil lingüístico irá atado a la persona y no al puesto.
 - Liberación para aprender euskera desde cero con independencia de si están en adscripción definitiva o no y quienes quieran estudiar por su cuenta dispondrán de crédito horario por cada curso superado.
 - Aplicación automática del Decreto 47/2012 sobre reconocimiento de estudios en euskera y exención de acreditación de títulos

El sindicato **ESAN** solicita un plan de liberalizaciones para aprender euskera.

d) Selección e ingreso:

EUDEL se felicita porque se exija directamente a los aspirantes estar en posesión de titulación del subgrupo C1, si bien estima que debe establecerse el mecanismo transitorio para quienes con anterioridad a la ley han sido integrados en tal subgrupo a efectos retributivos y administrativos.

Los sindicatos **UGT, ERNE, CCOO y ELA** solicitan la supresión de la edad máxima para el ingreso.

Por su parte **EUDEL** propone que la posibilidad de compensar la edad máxima con servicios prestados en cuerpos de policía local no sea automática sino que se difiera a la decisión municipal en las bases de la convocatoria.

En referencia a la regulación de la composición de los **tribunales de selección** el sindicato **ERNE** estima que no debe excluirse de los mismos a los funcionarios interinos.

e) Medidas de acción positiva:

El **sindicato ERNE** se opone a las medidas de acción positiva destinadas a promocionar la igualdad de hombres y mujeres, mientras que **Emakunde** propone computar para la jubilación anticipada periodos en excedencia por hijo o violencia de género.

f) Provisión de puestos:

El **sindicato ERNE** solicita que se realice un **catálogo de puestos** que recoja todos los puestos existentes en todos los cuerpos policiales y dentro de esos puestos todas sus funciones con objeto de facilitar el conocimiento y gestión y la determinación de los puestos de segunda actividad. Al hilo de lo anterior, sugiere en referencia al art. 68, que no haya puestos singularizados hasta que se realice el catálogo de puestos reclamado.

En cuanto a la existencia de **especialidades ERNE** propone suprimir el art. 43.2. y el art 65 bis 3, para eliminar el compromiso de permanencia y la superación pruebas selectivas de actualización.. Por su parte **EUDEL** plantea contemplar la existencia de especialidades en policías locales.

ERNE sugiere modificar el art. 67.1 y suprimir el art. 67.2 para que la **publicación de las convocatorias de provisión y su resolución** se realice en el Boletín de la Ertzaintza y en tablonas, en vez de en el BOPV

En lo que atañe a la **provisión de puestos mediante concurso de méritos ERNE** propone el art. 65.2 para que no se valore como mérito nada más que la antigüedad y trabajo desarrollado, sirviendo el resto de méritos (cursos de formación, titulaciones,...) sólo como criterio de desempate. Y el euskera sólo valorarlo como criterio de desempate en un periodo transitorio hasta que se euskaldunice todo el colectivo. El sindicato **UGT**, por su parte, propone que reglamentariamente se desarrolle el concepto de trabajo desarrollado.

En cuanto al procedimiento de **provisión por libre designación ERNE** propone excluir del art. 63.3 tal procedimiento de los puestos de la escala básica, inspección y puestos de subcomisario y suprimir el párrafo que establece un porcentaje máximo de provisión por libre designación.

En referencia a la **permuta** en la policía local (prevista en la DA 21ª) **EUDEL** plantea incluir entre los requisitos que se cumplan los establecidos en la RPT. El sindicato **UGT** plantea la innecesidad de tal regulación, dado que tal provisión ya existe. La propuesta de UGT no carece de sentido, por lo que se acepta.

ERNE plantea en el art. 105.3 una cláusula que obligue a desarrollar en seis meses la escala de facultativos y técnicos, estableciendo las unidades y plazas y modificando la relación de puestos.

g) Carrera y promoción interna:

En relación a la **promoción interna** el sindicato **ERNE** plantea que nunca se pueda eximir la titulación académica como requisito (lo que implica eliminar los cursos de capacitación habilitante); no exigir la prestación de un determinado número de años en servicio en la categoría precedente (sólo valorarlo como mérito), y no deducir del cómputo de servicios efectivos las bajas laborales de ningún tipo. Se manifiestan conformes con eliminar el máximo de tres convocatorias.

En relación a la **carrera profesional horizontal** el sindicato **ERNE** plantea la sustitución de la redacción por el acuerdo de 2011 para la Ertzaintza. El sindicato **ESAN** pide directamente la retirada del capítulo. Al sindicato **UGT** le parece que más que configurar un derecho regula una concesión ambigua, al tiempo que en la regulación del régimen retributivo pide que se incluya en lo referente al complemento de carrera profesional a la policía local. **EUDEL** plantea la necesidad de que la carrera horizontal en las policías locales resulte de incorporación simultánea a la de los funcionarios en general sin disfunciones temporales o de otra índole.

h) Derechos y deberes:

En lo que atañe al **régimen retributivo**, el sindicato **ERNE** propone incorporar al art. 74.1 la prohibición de que las retribuciones sean minoradas. Tal propuesta no puede resultar una especificidad policial, por lo que, en su caso, debería ser objeto de la regulación general para los empleados públicos. El sindicato **UGT**, por su parte, pretende que la regulación del complemento de carrera profesional incluya a la policía local.

En cuanto al **régimen de incompatibilidades** el sindicato **ERNE** propone fijar un plazo de 6 meses para adecuar tal régimen y suavizarlo. UGT propone dejar claro el derecho a la compatibilidad en ciertas circunstancias.

ERNE, por otra parte, sugiere eliminar el **deber de residencia** contemplado en el art. 76.

En cuanto a los **mecanismos de protección social** las aportaciones de **ERNE** son las siguientes:

- Suprimir la referencia al dolo del art. 79 bis .2,
- Que la compensación para fallecimiento en acto de servicio pase de 2 a 3 anualidades si tuvieran los fallecidos hijos menores de 25 años.

- Que en caso de incapacidad derivada de acto de servicio se eleve la pensión al ciento por ciento y no al 80% como en la actualidad.

El sindicato **ERNE** propone además incorporar al texto de la ley la redacción del título V sobre prevención de **riesgos laborales** y salud laboral del acuerdo regulador.

i) Situaciones administrativas:

- Servicio activo modulado por la edad:

Respecto al servicio activo modulado por la edad **EUDEL** plantea que la ley fije que la edad de pase a tal modulación en las policías locales no sea inferior a los 56 años (previstos en la Ertzaintza). La razón de tal solicitud es que, si bien se valora positivamente el respeto a la autonomía local, parece conveniente que la ley establezca una edad de referencia o mínima.

Por otra parte **EUDEL** plantea que también en la policía local se puedan incorporar compromisos de petición de jubilación anticipada por los funcionarios que se adscriba a dicho servicio activo modulado. Y que en el art. 85.4 se diga que en la regulación local se establecerán los efectos económicos y administrativos de dicho reconocimiento.

El sindicato **UGT** propone que la concreta regulación de la modulación prevista para la Ertzaintza se extienda obligatoriamente a las policías locales.

El sindicato **ERNE** solicita eliminar el requisito de la garantía de continuidad en la prestación del servicio policial en la regulación de la modulación por la edad prevista en el art. 85.4.

EUDEL sugiere excluir de la posibilidad del pase al servicio activo modulado al personal de las escalas superior y facultativa de la policía local.

El sindicato **ERNE** plantea que mientras que en los casos en los que un funcionario en servicio activo modulado por la edad se encuentre transitoriamente sin destino a disposición se le abonen mientras esté en tal estado las percepciones económicas que tenía en el momento del paso a tal situación y no como en la actualidad y en el proyecto que se excluye el pago del componente singular del complemento específico.

Por último y en relación a la modulación del servicio activo por la edad **ERNE** solicita que se incorporen al texto de la ley la redacción prevista en el Decreto 194/2012.

- Segunda actividad:

El sindicato **ERNE** sugiere posibilitar el pase a situación de segunda actividad del personal de la escala de facultativos y técnicos.

El sindicato **UGT** estima que la regulación es ambiciosa, lo cual parece un elogio, pero ineficaz en las policías locales sin impulsar acuerdos institucionales, sin explicitar en qué habrían de consistir.

EUDEL plantea que en la composición del tribunal evaluador del pase a la situación de segunda actividad (art. 86.3) uno de los facultativos sea nombrado a propuesta del interesado o en su defecto de la representación sindical.

En cuanto a las retribuciones a percibir en caso de situación de segunda actividad los servicios de personal del Departamento han sugerido que se elimine la referencia a la determinación reglamentaria de las retribuciones, dado que si la regla es que en tal situación administrativa se ocupa un puesto de trabajo las retribuciones de referencia siempre serán las del puesto. Parece correcto tal razonamiento.

Siguiendo con las retribuciones en segunda actividad **ERNE** plantea en el art. 86.7 estipular que las retribuciones no serán inferiores a las que les correspondían antes del pase a esta situación administrativa.

El sindicato **UGT** plantea en el art. 87 referente a la garantía salarial en el caso de que excepcional y transitoriamente un funcionario en servicio modulado o segunda actividad quedase a disposición hasta que se le proporcione o adapte un puesto que se le abone el 100 % de lo que cobraba como complemento personal transitorio y no sólo en el caso de la Ertzaintza sino también en el de las policías locales.

EUDEL propone eliminar la disposición adicional 20ª sobre la posibilidad de que en segunda actividad policías locales ocupen puestos no policiales. En su opinión resulta innecesario incluirlo en la ley, ya que la capacidad organizativa municipal permite esta adscripción.

j) Régimen disciplinario:

- Faltas.

En referencia al art. 92.2.b) **ERNE** pretende exigir que el trato inhumano sea especialmente grave para que sea considerada falta muy grave.

En referencia a la falta contenida en el art. 92.2.g) **ERNE** plantea añadir al notorio incumplimiento el que sea "reiterado o continuado". **UGT** plantea sustituir la expresión "manifiesta" por "acreditada" falta de rendimiento.

En cuanto al art. 92.2.l) **ERNE** plantea no agravar una conducta de grave a muy grave por la reincidencia dado que la responsabilidad debe individualizarse en cada falta.

Emakunde sugiere incorporar a la falta muy grave del art. 92.1bis la expresión acoso sexista o por razón de sexo en el trabajo atendiendo a lo dispuesto en el art. 43.2 de la ley de igualdad que impone tal criterio. Se acepta en tales términos.

- Sanciones:

El sindicato **ERNE** quiere agravar las sanciones por faltas leves que ahora son castigadas con suspensión de 1 a 4 días. Según su propuesta serían sancionables con suspensión de hasta 14 días. Del mismo modo pretende agravar el castigo por faltas graves al pretender que la sanción mínima sea de 15 días. Por otra parte solicita que se elimine la referencia a "pérdida de remuneración" en el caso de la suspensión de funciones.

- Graduación:

El sindicato **ERNE** advierte que los apartados e) y h) del art. 94 son casi idénticos.

ERNE considera que en vez de considerar la entidad de la condena penal a la hora de sancionar como criterio de ponderación, sería mejor modificar la falta muy grave de delito doloso, de forma que sólo se sancionase por tal causa en vía disciplinaria los casos de condena por delito doloso que lleve aparejada pena privativa de libertad si el delito está relacionado con el servicio o causa graves daños a la Administración o a las personas. También plantea incluir expresamente la referencia a representante sindical en la posibilidad que se ofrece al funcionario expedientado de ser asistido por persona de su confianza prevista en el art. 95.2.bis.

- Plazos de prescripción:

El sindicato **ERNE** propone bajar los plazos de prescripción de 3 años (MG) 2 años (G) y 3 meses (L) a 1 año por graves y 1 mes por leves. Y en igual sentido los plazos de prescripción de las sanciones. **UGT** plantea un plazo de prescripción para faltas y sanciones leves de un mes.

- Ejecutividad y ejecución:

El sindicato **ERNE** sugiere que en el precepto que regula la posible suspensión cautelar de la ejecutividad de la sanción (art. 97 BIS) se añada que tal suspensión cautelar sólo proceda si el interesado la solicita expresamente.

ERNE sugiere que se añada al art. 97 ter referente al principio de ejecución en la forma que menos perjudique al sancionado, la posibilidad de un acuerdo con la jefatura de la unidad.

ERNE plantea que en el art. 97 TER 3 referente al cumplimiento múltiple de sanciones de suspensión de funciones el límite del conjunto de sanciones sea 5 años en vez de seis. Esto supondría que si me sancionan con dos suspensiones de cuatro años cada una cumpliría sólo 5 años en vez de 8 años.

Respecto al art. 97 ter 5 **EUDEL** propone que se incorpore que tal medida alternativa del cumplimiento de la sanción no sea sin más un derecho del sancionado, sino que requiera la previa aceptación por la administración, porque si no la sanción perdería su función ejemplarizante.

ERNE propone en este art. 97 que el trabajo extra se realiza en situación de alta y cotizando en la seguridad social. No parece preciso explicitarlo dado que el trabajador está en servicio activo y no en suspensión de funciones.

k) Participación del personal funcionario, negociación y Consejo de la Ertzaintza.

El sindicato **ERNE** propone modificar el art. 99.5 para imponer una circunscripción electoral única para toda la Ertzaintza en las elecciones a representantes del personal de este cuerpo policial cuando en la actualidad existen tres circunscripciones electorales.

ERNE reivindica que la totalidad de los asuntos objeto de negociación sean de la competencia exclusiva de la mesa de negociación de la Ertzaintza de un modo ajeno a la mesa general de la administración.

I) Policías locales

- Actuación extraterritorial:

AJEPLE propone que se incluya la posibilidad de actuación extraterritorial en caso de acuerdos de colaboración o asociaciones para prestar servicios policiales.

- Ingreso y selección:

EUDEL propone que se diga que las reglas básicas sobre el ingreso en policías locales a las que se refiere el art. 50.1 tengan carácter de mínimos.

- Escala de facultativos y técnicos

EUDEL propone crear escalas de facultativos y técnicos en la policía local.

- Policía judicial:

EUDEL y el grupo de norma marco plantea incorporar un artículo que hable de la formación en materia de policía judicial a la policía local en la AVPE. **AJEPLE** contempla que la ley exprese la posibilidad de que la AVPE organice actividades formativas específicas en investigación criminal y policía judicial para al menos aquellas policías locales que hayan suscritos los convenios de colaboración en tal sentido previstos en los arts. art 44.3 y 4 de la LOSSPE.

- Escalas y categorías

EUDEL considera que exigir el grupo C1 para el ingreso clarifica el modelo de clasificación descafeinada actual. No obstante estima conveniente un régimen transitorio de quienes ocupan plaza agente C2 (ahora asimilados a C1 pero muchos sin titulación), considerando que si las plazas pasan a ser C1 la reclasificación carece de efectos económicos suplementarios pues ya se les reconocieron. Por otra parte debe considerarse que los interinos actuales no están ni clasificados en C2..

AJEPLE reivindica que las escalas superior y ejecutiva se reclasifiquen como A1 (en el anteproyecto son A2); la escala de inspección en A2 (en el anteproyecto C1); y que la categoría de intendente sea obligatoria en municipios con más de 150.000 ó más de 200 efectivos (en el anteproyecto “y”).

Contrasta este criterio con la posición de **EUDEL** cuando plantea que la nueva estructura implica una excesiva jerarquización.

EUDEL argumenta que la nueva estructura no sólo obliga a crear nuevos puestos de jefatura con categorías superiores a las actualmente existentes, sino que obliga a crear todas las categorías intermedias, lo cual puede dar lugar a incrementos de plantilla y elevación de costes que afecte a objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todos o algunos ayuntamientos vascos. En tal sentido consideran que, conforme a la LRBRL, el legislador debería calcular dicho impacto financiero y dotar de recursos a los municipios para asegurar su suficiencia financiera.

- Jefatura de la policía local

EUDEL plantea con respecto al art. 119 que debería tenerse en cuenta que no todos los cuerpos locales cuentan ni deberían contar con una jefatura profesional unipersonal, y ponen el ejemplo de Bilbao.

AJEPLE plantea en el art 119 que se explicita el procedimiento de provisión de los puestos de jefatura por libre designación entre los funcionarios del propio cuerpo encuadrados en la máxima categoría del cuerpo y que sólo, en su defecto, se cubriría por miembros de otros cuerpos de la policía del País Vasco.

EUDEL se refiere a la disposición transitoria 5ª relativa a la integración de cierto personal de los cuerpos de policía local en la escala superior. Y estima que deberían establecerse criterios de transformación automática.

AJEPLE plantea reducir el plazo de adaptación de las jefaturas de 3 a 2 años y reducir la exigencia de tener destino definitivo durante un plazo determinado de 5 a 4 años. No se acepta, ya que se consideran plazos razonables.

AJEPLE reclama que la integración suponga incremento de las retribuciones básicas sin absorción en las complementarias.

- Funcionarios interinos:

ERNE plantea la prohibición del nombramiento de funcionarios interinos en la policía local (incorporar en el art. 25 la condición de funcionarios de carrera, eliminar referencias en exposición de motivos y en el art. 120.1 y 3 a los funcionarios interinos).

- Agentes de movilidad:

UGT se muestra contrario a la figura y pide potenciar en su lugar las plantillas de las policías locales.

EUDEL, por su parte, quiere no limitarlo a municipios de gran población y hacerlo extensible o posible en cualquier municipio o en municipios de una población superior a la que se determinen en la ley. El Grupo de Norma Marco plantea eliminar la expresión relativa a que la creación de la figura "no comporte incremento en efectivos ni costes de personal".

- Alguaciles:

El sindicato **UGT** plantea eliminar la figura y crear mancomunidades de policía local.

La **asociación de alguaciles de Euskadi** ha presentado diversas alegaciones en el siguiente sentido:

- Reivindican ser a todos los efectos agentes de policía y disponer de todas las funciones de la policía local: instruir atestados en accidentes si no hay heridos, participar en funciones de policía judicial y prevención del delito
- Reivindican portar armas o que se deje abierta esta posibilidad
- Reivindican llevar la misma uniformidad que las policías locales sólo distinguiendo el nombre de alguacil en vez de policía
- Reivindican el pase al grupo de clasificación C1 y la jubilación a los 60 años.

Por último la **Asociación de Alguaciles** inquiera en relación a la disposición transitoria relativa al personal laboral en funciones de alguacil con anterioridad a la ley dos cuestiones: a) aclarar si mientras permanezcan en tal situación se les considerará agentes de la autoridad y b) fijar un plazo de 3 años para su funcionarización por promoción interna.

2) Propuestas sindicales realizadas durante la fase de negociación.

a) Mecanismos de control de la actividad policial:

El sindicato **CCOO** solicita eliminar la comisión de buenas prácticas o en su defecto incluir lo siguiente:

- Que en cualquier operativo policial se publiquen todas las órdenes emitidas por la cadena de mando de la Ertzaintza especificando quien las emite y cómo se debe actuar, especificando el nivel de riesgo asignado, con antelación a su emisión para cada evento. Ello se pondrá en conocimiento de los sindicatos presentes en el Consejo de la Ertzaintza.
- Para valorar las órdenes emitidas se creará una comisión en la que estará presente un representante de los sindicatos presentes en el Consejo de Policía. Dicho Consejo no existe, aunque es posible que se quiera referir al Consejo de la Ertzaintza.
- En la Comisión de buenas prácticas se propone que la mitad de sus miembros sean ertzainak que tengan el mismo puesto y categoría que los ertzainak investigados al menos 5 años, además de un representante sindical.

ELA- Ertzaintza plantea que:

- En la Comisión de buenas prácticas la mitad de sus miembros sean funcionarios de la Ertzaintza con al menos 15 años de antigüedad en el cuerpo.
- Que además de hacerlo de oficio o a instancia de las autoridades, pueda intervenir la comisión a instancia de un grupo parlamentario o de I Ararteko.
- Que antes de emitir su informe se oiga al Consejo de la Ertzaintza.

Además **ELA - Ertzaintza** plantea que de cualquier queja que reciba Ekinbide que tenga relación con deficiencias en la organización del servicio se informe y se oiga a las organizaciones sindicales representativas (art. 7.3).

ELA - Udaltzaingoa propone eliminar la referencia a la posibilidad de encomienda de gestión a Ekinbide por los municipios en el art. 7.2.

b) Consejo de la Ertzaintza

ELA - Ertzaintza propone atribuir al Consejo las siguientes funciones:

- Informar todos los expedientes por faltas muy graves y graves contra cualquier funcionario, dando el derecho al expedientado de ser oído en el Consejo. E igualmente capacidad para conocer el resto de expedientes incoados, su resolución y la concesión de rehabilitaciones. art 17.d).
- Ser oído en los expedientes de acto de servicio con comparecencia voluntaria del solicitante a quien se le deniegue, e igualmente ser oído en la concesión de medallas y de reconocimientos de ascenso honorífico. art 17.i)

El sindicato **CCOO** proponen que:

- El Consejo de la Ertzaintza pase de ser un órgano consultivo a una nueva mesa de negociación en relación con todo lo que tengan que ver con la seguridad en las actuaciones de la Ertzaintza,
- Tener capacidad para querellarse contra los ciudadanos cuyas denuncias contra ertzainas no hayan dado lugar a una condena al quedar absueltos. Tal capacidad no la asumiría el consejo sino la representación sindical presente en él.

c) Derecho a la defensa jurídica de los policías

ELA Udaltzaingoa Propone que la asunción de la defensa del funcionario por la administración sea “de mutuo acuerdo” con el defendido. art. 37.2

d) Normalización lingüística

El sindicato **CCOO** propone:

- Obligación de formar a un mínimo de 100 agentes por año desde el inicio. Los voluntarios serían seleccionados por criterio de antigüedad.
- Disposición transitoria décima: Prohibición de asignar nuevas fechas de preceptividad en puestos de la Ertzaintza en tanto todos los funcionarios de la Ertzaintza que lo demanden no tengan la opción de liberarse desde cero para conseguir el perfil lingüístico.
- Disposición transitoria undécima: Valoración máxima del euskera como mérito en concursos del 3% de la totalidad de puntos del concurso hasta que todos los funcionarios que lo deseen hayan podido liberarse desde cero.

ELA Udaltzaingoa añadir en referencia a la capacitación lingüística una referencia a los *planes de Euskaldunización de cada Institución*. Art. 39.1.

e) Formación

El sindicato **CCOO** propone obligar a la AVPE a informar a cada agente de la oferta formativa que debe realizar y de entregarle la documentación del curso tras su finalización.

El sindicato **ELA Ertzaintza** propone:

Incluir en la ley una referencia expresa a que se capacitará a la policía en relación a derechos sociales como el derecho de huelga y a la vivienda. art 30 bis 3.

Añadir que la convalidación de cursos sea siempre que hayan sido impartidas en centros oficiales o policiales art 40.2.

Que la ley contenga un mandato para que cada administración reglamentariamente establezca, previa negociación, una formación mínima anual. Art . 39.

f) Oferta de empleo anual

El sindicato **CCOO** propone convocatorias anuales para cubrir el 100% de la plantilla incluyendo el número de quienes pudieran jubilarse antes de la finalización del curso básico.

El sindicato **CCOO** pretende obligar a convocatorias de promoción interna o de provisión de plazas con especialidad en el plazo de 3 meses cuando exista un número de vacante superior al 10% de las plazas en la categoría o especialidad. a rt. 46.

g) Medidas de promoción de la igualdad de oportunidades.

ELA Udaltzaingoa Plantean que en los casos en que el procedimiento selectivo convoque menos de 3 plazas el porcentaje mínimo no deba ser necesariamente no inferior al 25%, dado que a su juicio ello supondría que todas las plazas se reservan a mujeres.

ELA Ertzaintza propone eliminar la aplicabilidad de la ley de igualdad en los procedimientos de provisión de puestos. no aceptable. art. 47 bis. E).

h) Ingreso:

Tanto el sindicato **ELA** como el sindicato **CCOO** proponen eliminar la edad máxima para el ingreso.

ELA - Udaltzaingoa propone, por su parte:

- Que en el caso de convocatorias conjuntas la composición de los tribunales y las fórmulas de adjudicación de las plazas se determinen reglamentariamente (art. 50.3)
- Que la duración conjunta del curso de formación y periodo de prácticas no exceda conjuntamente de 24 meses y que el curso sea entre 6 y 9 meses y el periodo de prácticas no superior a 12 meses. En la actualidad la ley habla de 30 meses. (art. 52.1)

i) Promoción interna:

El sindicato **CCOO** propone eliminar los cursos de capacitación habilitante para la promoción interna (art .59.2).

Igualmente propone **CCOO** la obligación de convocatorias de promoción interna en el plazo de 3 meses cuando exista un número de vacante superior al 10% de las plazas en la categoría o especialidad. Y la eliminación de la limitación de 3 convocatorias para la promoción interna (ya aparece en el proyecto).

El sindicato **ELA - Ertzaintza** propone posibilitar la promoción interna a los sancionados con falta superior a 2 meses (debe entenderse que se refieren a sanción de suspensión de funciones). art 59.1.a, b, c, y d)

j) Provisión de puestos:

Las propuestas del sindicato **CCOO** son las siguientes:

- Proponen que las sanciones de suspensión de funciones en ningún caso tengan efectos sobre el meritaje de la antigüedad en los procedimientos de provisión de puestos.
- Limitar el procedimiento de libre designación a los puestos de la escala superior. art 65.3.
- Eliminar en el art 69 la exigencia de que hayan pasado 2 años desde la última adjudicación para participar en nuevos concursos.
- Eliminar la preferencia en los concursos de los cesados o removidos a obtener un puesto en la misma localidad del puesto anteriormente ocupado. art 71.2. Están en contra de la interpretación actual que habla de un radio de 30 kilómetros del puesto antes ocupado. En su defecto, definir que es misma localidad a estos efectos: término municipal del puesto removido y si no hay una unidad en tal localidad, la comisaría que cubra tal localidad.
- Recoger el supuesto de comisiones de servicios entre unidades atendiendo al criterio de antigüedad en el puesto y la puntuación de ingreso en la categoría como criterio de desempate art 71.1.2.

El sindicato **ELA Ertzaintza** propone los siguientes cambios en relación a la provisión de puestos:

- Que sólo se puedan reservar al procedimiento de libre designación los puestos de “alta dirección” en vez de los de carácter directivo o especial responsabilidad. (art. 65.3).
- Que sólo se exija exigencia de compromiso de permanencia si en la relación de puestos de trabajo se fija el requisito de máxima permanencia. art. 43.2.
- Que en el art. 71.3 se contemple, como en la actualidad, en el caso de quien esté en adscripción provisional por supresión del puesto, un complemento transitorio hasta la resolución del primer concurso en el que pueda participar.

ELA Udaltzaingoa plantea:

- La necesidad de incluir la referencia al grado personal que aparece en la LFPV en el art. 65.2.
- Volver a introducir la regulación de la permuta y no sólo permitirla entre policías locales sino entre funcionarios de cualquier cuerpo de la Policía del País Vasco.

k) Carrera profesional:

El sindicato **ELA - Ertzaintza** plantea las siguientes modificaciones:

- No condicionar la efectividad de la carrera profesional a las disponibilidades presupuestarias. Art. 73.ter.2)
- Corregir un error de numeración en el art. 73.ter.5.
- Suprimir la referencia a la posibilidad de pérdida del grado consolidado. art 73.ter.

Además **ELA Udaltzaingoa** propone fijar un plazo de 2 años para la implantación de los sistemas de carrera profesional. Art. 73.TER.1

l) Deberes:

Las propuestas del sindicato **CCOO** son las siguientes:

- Eliminar el deber de residencia. Art 76.
- Régimen de incompatibilidades. art 78.2. Consideran innecesaria la modificación por restrictiva.
- Incompatibilidad con la condición de reservista de las fuerzas armadas. consideran que "deberíamos estar orgullosos" de que agentes de la Ertzaintza se comprometan con las fuerzas armadas. Pero estiman que cabría incluir la incompatibilidad de la condición de reservista con el servicio activo en situaciones de crisis o emergencia en Euskadi.

ELA Udaltzaingoa, por su parte, estima que la incompatibilidad del servicio activo con la condición de reservista debe ser de aplicación al conjunto de la policía del País Vasco. (párrafo 2º del Art. 78 / párrafo 3º).

m) Retribuciones.

El sindicato **ELA Ertzaintza** plantea que en caso de comisiones de servicio a superior categoría el funcionario o funcionaria tenga derecho a la retribución complementaria desde que de facto sustituya a su superior y que si se desempeña la comisión de servicios por 3 años se consolide la percepción del complemento de destino de la categoría superior (art. 74.a)).

n) Jornada y vacaciones:

ELA Udaltzaingoa efectúa las siguientes propuestas:

- Art. 75. Añadir que el periodo vacacional se subordina no solo a las necesidades del servicio, sino también al acuerdo regulador de las condiciones laborales en vigor.
- Art. 77.1. Añadir que la jornada y régimen de descansos, horarios y fiestas debe ser objeto de negociación colectiva.
- Art. 77-2: Añadir al final que dichas *excepciones serán compensadas según lo dispuesto en el acuerdo regulador de las condiciones laborales de la entidad respectiva.*

o) Prevención de riesgos laborales

Ela Udaltzaingoa propone añadir un párrafo 3º al art. 79 que pormenorice los riesgos que al menos deben tenerse en cuenta en los planes de prevención de riesgos laborales.

p) Protección social complementaria

El sindicato ELA parece proponer que en los casos de jubilación forzosa por incapacidad por actos ilícitos de terceros tenga derecho, además de una prestación económica periódica, a una indemnización de dos anualidades de las retribuciones íntegras que percibiera la persona jubilada en el puesto de trabajo que ocupaba, para equipararlo a las indemnizaciones en caso de fallecimiento. Art. 79 ter. 4. La redacción de la propuesta es incorrecta dado que replica la redacción dada a los casos de fallecimiento.

q) Situaciones administrativas:

- Suspensión provisional

El sindicato **ELA** propone eliminar la devolución de lo percibido en suspensión provisional cuando se eleve a definitiva. (art. 84.5)

El sindicato **CCOO** propone eliminar los apartados 5 y 6 del art 84 (supuestos de suspensión firme cuando hubo una suspensión provisional)

- Servicio activo modulado (SAM).

Ela Udaltzaingoa propone eliminar el art. 85.4. No quieren el servicio activo modulado por la edad sino una segunda actividad por edad conforme a la siguiente propuesta: Proponen que voluntariamente cualquier funcionario de la policía local (a salvo de los de las escalas superior o ejecutiva o jefes) a los que les queden 10 años para la edad legal de jubilación ordinaria pueda pasar a una segunda actividad que supondría dejar vacante su plaza y trabajar en el propio cuerpo sin hacer noches (habría en cada cuerpo un catálogo de puestos de segunda actividad como plantilla ampliada) o prestar servicio en otros puestos de la administración, pero en cualquier caso cobrando lo que cobraba antes de la segunda actividad. No obstante, cuando le queden 5 años para la edad legal de jubilación ordinaria pasarían a segunda actividad sin destino (y sin trabajar a salvo de que excepcionalmente se les llame por razones de seguridad ciudadana) cobrando lo mismo que cobraba antes del pase a segunda actividad. Especifica que el pago correspondería al ayuntamiento y los costes de reposición del prejubilado (salarios de cobertura de la plaza vacante) los financiaría el Gobierno Vasco. Esta propuesta la pretende justificar como medida transitoria en tanto no la legislación de seguridad social no contemple la jubilación anticipada de las policías locales.

De forma algo contradictoria con lo antedicho ELA **Udaltzaingoa** propone que la edad de pase voluntario al servicio activo modulado en las policías locales no se fije por cada ayuntamiento sino que se fije por ley en 56 años o en la edad inferior que se fije por la negociación colectiva.

- Segunda actividad

El sindicato **ELA Ertzaintza** habla de negociar un nuevo acuerdo de segunda actividad en la Ertzaintza, sin efectuar una propuesta concreta que pueda ser analizada.

Pese a la expresión de tal desiderátum abstracto, el propio sindicato en las alegaciones presentadas como **ELA Udaltzaingoa** efectúan las siguientes propuestas:

- Art. 86.2: Eliminar la posibilidad de iniciar de oficio el pase a segunda actividad por insuficiencia psicofísica.
- Art. 86.3: Que el Tribunal evaluador del pase a la segunda actividad no tenga una composición estable sino que uno de los miembros se a de parte (nombrado por cada interesado en cada expediente).
- Art. 86.5.2º: Falta la referencia a los Ayuntamientos para los casos de los cuerpos de la Udaltzaingoa.
- Art. 86.6.2º: Añadir que en el caso de los cuerpos de la Udaltzaingoa, las condiciones serán las mismas que para la Ertzaintza, en el momento que se equipare la regulación para el acceso a la jubilación voluntaria anticipada entre ambos cuerpos por la Seguridad Social.
- Art. 86.7: Que el personal en segunda actividad perciba las retribuciones básicas y las complementarias sin merma de retribuciones totales.
- Disposición Transitoria Décimo primera. plazo de 2 años para que cada ayuntamiento ELA bore un reglamento de segunda actividad.

El sindicato **CCOO** propone que el funcionario en segunda actividad o SAM que permanezca transitoriamente sin destino a disposición siga cobrando las retribuciones del último puesto desempeñado salvo el CES que será el inferior de los previstos para el servicio activo (CES 11).

r) Régimen disciplinario:

El sindicato **ELA Ertzaintza** habla de equiparar el régimen disciplinario al resto de la administración, pero no expresa en qué sentido.

Otras propuestas del sindicato **ELA** son las siguientes:

- Art 92.2.g): Que sólo puede ser considerada como falta disciplinaria la falta de rendimiento y notorio incumplimiento, si previamente ha habido un expediente informativo por tales conductas art 95.5: Disminuir el plazo de caducidad a 3 meses.
- Art. 97.2 y 97.3. Que los plazos de prescripción de las faltas y sanciones graves bajen a 18 meses y los de las leves a 1 mes.

El sindicato **CCOO** propone bajar el plazo de prescripción de las faltas leves a un mes en vez de 3 meses. Art 97.2 y 3

s) Representación de los trabajadores y negociación colectiva:

El sindicato **CCOO** propone:

- Art. 99. Que el sistema de elección consista en listas abiertas.
- Art 101.1.d) Que la disponibilidad sobre el crédito horario corresponda exclusiva e individualmente a cada representante de los trabajadores y no a las organizaciones sindicales, pudiendo el representante cederlo y revocar tal cesión.
- Art 103.3. Obligación de grabar en audio y video las reuniones de la mesa de negociación, estando disponibles para su visionado por los funcionarios a través de la intranet departamental.

El sindicato **ELA Ertzaintza** propone en el art. 104.5, añadir que "en caso de derogación unilateral de los acuerdos vigentes se precisará su aprobación por el Parlamento Vasco".

t) Estructura profesional:

El sindicato **ELA Ertzaintza** pretende que se diga en el art. 105.2.c) que en las prácticas in job los aspirantes serán retribuidos conforme al grupo de clasificación C1. Es obvio que tras la aprobación de la ley será así, puesto que no se les podría retribuir conforme a ningún otro grupo (ya que para participar en el proceso se les exige titulación C1).

Respecto a la estructura profesional **ELA -Udaltzaingoa** pretende que se exija titulación universitaria a todos los policías locales que no sean agentes o agentes primeros. Se desconoce si el sindicato **ELA** asume tal criterio igualmente para la **Ertzaintza** o, por el contrario, pretenden que exista una disparidad de estructuras tan acusada entre los cuerpos policiales vascos.

El sindicato **ELA Ertzaintza** pretende que en el art. 112 donde se habla de la posibilidad de adscribir funcionarios de policía judicial a determinados juzgados con carácter permanente se emplee un verbo imperativo.

u) Policías locales:

- Denominación:

ELA Udaltzaingoa propone incorporar como denominación única de los cuerpos de policía local la de "Udaltzaingoa/policía local". así propone modificar el art 2 y art. 24.3.

- Instituto armado

ELA Udaltzaingoa (art 25): propone añadir un párrafo al art 25 para aclarar el concepto de "instituto armado" y la obligación o no de portar arma de fuego. Sin embargo, el texto propuesto se limite a expresar que reglamentariamente se establecerá la dotación policial que incluya *el arma de fuego, el bastón y demás equipamientos, así como la formación teórico-práctica para su uso, con el fin de homogeneizar medios.*

- Funciones

ELA Udaltzaingoa Art. 26.3 Los cuerpos de Udaltzaingoa, en sus respectivos territorios, ejercerán las funciones que a los cuerpos y fuerzas de seguridad atribuye el ordenamiento jurídico, y las que específicamente se les asigna en esta Ley.

ELA Udaltzaingoa plantea la posibilidad de adscribir a la unidad de policía judicial o de investigación criminal de la Ertzaintza funcionarios de cuerpos de policía local y que a tal efecto se posibilite que tales funcionarios realicen formación específica en materia de investigación criminal y policía judicial, con las mismas condiciones y requisitos que la Ertzaintza.

- Alguaciles

ELA Udaltzaingoa propone describir claramente cuáles son las funciones de los alguaciles, sin necesidad de tener que desgranarlas de las funciones de la Udaltzaingoa previstas en el art. 27.1.

- Estructura profesional

ELA Udaltzaingoa propone que la escala de inspección pertenezca al subgrupo A2; integrar en la misma a los *actuales suboficiales y oficiales automáticamente sin exigencia de titulación universitaria y que cualquier agente primero con 4 años de antigüedad puedan promover a la escala de inspección sin requisito de titulación.* (Art. 118.2.b) y disposición transitoria 10ª)

ELA Udaltzaingoa propone establecer por ley ratios de las diferentes categorías: 2 agentes por cada mil habitantes; cada 4 agentes un agente primero; cada 4 agentes primeros un suboficial, cada 2 suboficiales 1 oficial, cada 2 oficiales 1 subcomisario y cada 2 subcomisarios un comisario. (Art. 118.7 y 8).

- Funcionarios interinos

ELA Udaltzaingoa no se manifiesta en contra de la figura del personal interino, pero entiende que se debe limitar a la cobertura de necesidades temporales o estacionales extraordinarias sin que se cubran vacantes de plantilla (Art. 120.1). Y consideran que en el art. 120.3 referente a la creación de bolsas de trabajo para policía local la conformación de tales bolsas debe proceder de convocatorias específicas y no conformarla con aprobados sin plaza de convocatorias de ingreso a la Ertzaintza.

- Agentes de movilidad.

ELA Udaltzaingoa propone eliminar la referencia en el art. 121.1 a que la creación de tales cuerpos de funcionarios “*no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal*”.

3) Observaciones recibidas en informes y dictámenes.

a) Informe de política lingüística:

El informe concluye que el anteproyecto es conforme a la legislación lingüística vigente y destaca que el borrador está elaborado en los dos idiomas oficiales, para después examinar aquellos contenidos relacionados con el uso de las lenguas oficiales tales como los contenidos en la exposición de motivos; los artículos 30 bis.2; 39.1; 41.2.d), 45 y 47.3, así como la disposición adicional 7ª y la disposición transitoria 5ª.

Finaliza el informe con dos propuestas:

- a) Incorporar al art. 30 bis.1.c) la no discriminación por razón de lengua
- b) Nueva disposición que diga lo siguiente: La Policía del País Vasco garantizará el derecho de la ciudadanía a recibir atención en el idioma que escojan, sea euskera o castellano, tanto oral como por escrito.

b) Informe de la DACIMA

El anteproyecto les merece una valoración positiva por la flexibilidad y racionalidad en la conformación de estructuras organizativas profesionales de las policías locales; la clarificación de funciones en procedimientos disciplinarios y expedientes de rehabilitación del Consejo de la Ertzaintza, o las medidas de simplificación y mejora de procedimientos en referencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias como órgano permanente de selección y los mecanismos que de cooperación intermunicipal.

Consideran que la regulación de los mecanismos de control policial, interrelación con la ciudadanía y dación de cuentas responden a la previsión 61 del Código europeo de Ética de la Policía - Recomendación del Consejo de Europa del 2001- que contempla “la implantación de mecanismos que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comunicación y la comprensión entre la población y la policía” y entroncan con la filosofía de Transparencia y Buen Gobierno del Plan de Innovación Pública 2014-2016.

Meritan el compromiso con la dación o “rendición de cuentas”, a través de la publicidad activa, mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial, como la evaluación del desempeño de los miembros de la policía, o, más allá de las medidas coercitivas, la instauración de mecanismos preventivos que permitan analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral y la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo reforzado con la creación de una comisión de control externo

Además de la citada valoración efectúan las siguientes observaciones:

- a) El art. 95.2.ter plantea la remisión por medios electrónicos del expediente como mera posibilidad, cuando la nueva ley de procedimiento administrativo común (aún no en vigor) contempla la generalización y obligatoriedad del uso de medios electrónicos en las relaciones de

la administración con sus funcionarios y entre administraciones. Y además implica la no necesidad de remisión de los documentos en tales casos por medios electrónicos puesto que la obligación de proporcionar copia de los documentos obrantes en el expediente se cumple con la puesta a disposición en el punto de acceso general electrónico o en la sede electrónica de la administración competente.

b) En relación a la comisión de buenas prácticas debería tenerse en cuenta la nueva ley de procedimiento administrativo común que contempla que “salvo que no sea posible, las convocatorias han de ser remitidas a los miembros a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión”, igualmente “se remitirán las actas de cada sesión a través de medios electrónicos”.

c) Sugieren que quedan algunos términos masculinos utilizados como genéricos y que debieran corregirse, como por ejemplo: “funcionarios”, “empleados públicos”, “ciudadanos”, “el agente de movilidad”, “el alguacil”...

c) Informe de Emakunde:

Efectúa las siguientes observaciones:

- Siempre que sea conforme a la legislación vigente en materia de seguridad social, computar los periodos de permanencia en situación de excedencia por cuidado y/o violencia de género como tiempo efectivamente trabajado a efectos de la reducción de la edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación. No aceptable. Excede de la competencia y ámbito de esta ley, es materia de la legislación de la seguridad social.
- Contemplar en la letra I bis) del párrafo 2º del artículo 92, como falta disciplinaria muy grave, además del acoso sexual y el acoso laboral, el acoso sexista o por razón de sexo en el trabajo, tal y como se exige en el artículo 43.2 de la Ley 4/2005. Aceptada.
- En la Comisión de control de la Ertzaintza, plantean no sólo una presencia equilibrada de mujeres y hombres sino incluir una persona experta en materia de género.
- Hacer una revisión y adecuación de los términos enunciados exclusivamente en masculino en el texto del Anteproyecto tales como “funcionario/o s”, “los empleados públicos”, “sancionado”, etc.

d) Alegaciones departamentales e institucionales

Han presentado alegaciones los siguientes Departamentos del Gobierno Vasco: Lehendakaritza; Salud; Medio Ambiente y Política Territorial; Empleo y Políticas Sociales; Educación, Política Lingüística y Cultura.

De todos ellos el único Departamento que realiza observaciones a analizar es el de Educación, Política Lingüística y Cultura, al artículo 40.1 en cuya redacción corrige una errata.

La Diputación Foral de Bizkaia también ha respondido en el periodo de alegaciones manifestando no tener nada que decir.

e) Informe del Consejo de la Ertzaintza.

No contiene observaciones.

f) Informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Euskadi.

No contiene observaciones.

g) Informe de la Dirección de Función Pública:

La Dirección de Función Pública ha emitido su informe 29/2015, sobre el anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco. Sus aportaciones son las siguientes:

- Respecto al capítulo dedicado a los mecanismos de control de la acción policial el informe se muestra favorable.

- En relación a la disposición transitoria quinta (integración automática del personal funcionario de los cuerpos de policía local en la categoría superior) estiman que si existiere personal con la categoría de intendente en tales cuerpos sería coherente incluir un apartado que regulara las retribuciones del personal.

- Selección e ingreso: Plantean dos observaciones:

- En relación a la regla de inamovilidad de la convocatoria de ingreso y sus excepciones, considera el informe que debería limitarse la ampliación del número de plazas pendiente la convocatoria y sin nuevo plazo de solicitudes a un porcentaje ponderado que no sea de tal magnitud que cambien las expectativas de los aspirantes, ya que en tal caso sería preciso abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes o la convocatoria posterior de otro procedimiento (nuevo apartado quinto al artículo 47).
- En relación a los procesos selectivos plantea añadir que la actuación de los asesores expertos que participen en los mismos se sujete a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

- Carrera profesional: recuerda la inexistencia actual de una regulación general, aunque el proyecto de ley de empleo público vasco si la contempla y prevé el desarrollo reglamentario armonizado por las distintas administraciones bajo unos criterios básicos comunes para todas señalados por la futura Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi. Por lo tanto estima que la implantación efectiva de cualquier modalidad de carrera horizontal requiere de la correspondiente regulación sometida, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias de las respectivas Administraciones y al respeto a la legislación básica de función pública. Considera que debe ser la Ley de Empleo Público Vasco la que aporte homogeneidad al conjunto de las Administraciones Públicas Vascas y por ello, del mismo modo que en tal anteproyecto, en éste deben incorporarse las siguientes previsiones:

- “Disposición transitoria: No se podrán reconocer retribuciones a cuenta o anticipadas del complemento de carrera profesional al personal de la Ertzaintza ni al personal del cuerpo de policía dependiente de la Administración Local”
- “No se podrán reconocer derechos retributivos referidos a la carrera profesional con carácter retroactivo.”

- Servicio activo modulado y segunda actividad: considera que tal regulación ya se contiene en el Decreto 194/2012, de 9 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013, y que no se explica la razón para elevar a rango de ley formal dicha regulación, que entiende más propia de un acuerdo regulador que module la prestación de servicios concretando medidas de mejora de las condiciones laborales. Estima que la regulación de la modulación del servicio activo por razón de la edad no es una situación administrativa distinta del servicio activo, sino una modulación de las condiciones laborales propia de la negociación colectiva y no materia propia de regulación en ley formal por lo que informan negativamente la propuesta.

Además no comparte que quepa la situación de servicio activo modulado o segunda actividad sin trabajar a disposición de la Administración, aún con carácter transitorio, y cobrando la práctica totalidad de las retribuciones que cobrase con anterioridad. Estima que tales retribuciones son injustificadas por ser superiores a las que se puede cobrar en expectativa de destino o en excedencia forzosa, que serían situaciones equivalentes en las que no se ejerce trabajo, o en la situación de segunda actividad policial vigente sin destino. Y por otra parte subraya que el anteproyecto no contempla limitaciones del número de personas que anualmente pueda pasar a tales situaciones atendiendo a las disponibilidades organizativas existentes. Considera que tales modificaciones son innecesarias por venir ya previstas en norma reglamentaria donde encuentran mejor acomodo, y que su aplicación podría resultar inasumible en términos organizativos y presupuestarios si no se limita el número de efectivos que anualmente pueden pasar a estas modulaciones y la permanencia en expectativa de destino sin trabajar es retribuida de la forma en la que aparece en el borrador. Y entiende que en el expediente no se justifica la viabilidad económica y organizativa de una propuesta que, a su juicio, podría suponer problemas organizativos que implicasen dejar en expectativa de destino a un número elevado de funcionarios con un sobre coste alto sin la contrapartida de la prestación del servicio.

Por otra parte considera que la permanencia sin destino a disposición de la Administración hasta que no se le asigne destino o se adapte el puesto es confusa puesto que cabría entender que se le pueden asignar funciones no policiales en cualquier área de la Administración aun sin estar

prevista tal posibilidad de apertura en las relaciones de puestos de trabajo. Informan negativamente la propuesta por prever que el personal en segunda actividad pueda quedar a disposición de la administración en vez de a disposición del Departamento de Seguridad.

Respecto a la situación administrativa de segunda actividad proponen que se concrete que el puesto a desempeñar debe haber calificado en la correspondiente relación de puestos de trabajo como puesto de susceptible desempeño por funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

- Prevención de riesgos laborales: el informe considera que el servicio médico o de prevención no tiene capacidad para celebrar contratos o convenios.

- Alguaciles y Agentes de Movilidad: Propone que en referencia a estos dos tipos de funcionarios que se establezca una remisión expresa a la disposición adicional segunda del EBEP. Igualmente habla de la necesidad de que los alguaciles se formen en el uso de las armas o presupone que el personal laboral alguacil no puede ser funcionarizado. Respecto a la disposición transitoria octava, que contempla una hipótesis hacia el futuro en el que un ayuntamiento decida crear un cuerpo de policía local, el informe considera que en el cuerpo de policía local futuro sólo podrán integrarse los alguaciles que sean funcionarios y especificar la situación en que quedarían quienes no lo son. Se acepta. Igualmente proponen que se añada que la integración no supondrá incremento del gasto público, ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporte se absorberá en otras retribuciones complementarias.

- Estructuras y Jefaturas de las policías locales:

Plantea que si variasen los parámetros poblacionales de un municipio ello supondría la necesidad de acomodar la estructura del cuerpo de policía local que si supone una disminución de la categoría de jefatura existiendo un titular éste habría de continuar en el desempeño de los mismos con la condición de “a extinguir”. Si por el contrario se produjera una variación al alza, el personal funcionario continuaría en el desempeño de los mismos rigiéndose por las condiciones por las que fueron nombrados y percibiendo las retribuciones efectivamente asignadas al puesto de trabajo ocupado.

Recuerda que en la integración del personal a los nuevos puestos de jefatura de los cuerpos de policía local es preciso exigir el cumplimiento del requisito de la titulación suficiente, lo cual a su juicio no sucede en la Disposición Transitoria sexta, párrafo 2 del apartado 2, porque entiende que la titulación se supliría por la experiencia.

h) Informe de la OCE

En cuanto a la repercusión presupuestaria que la entrada en vigor del Anteproyecto de Ley de Quinta Modificación de la Ley de Policía del País Vasco, pudiera generar en los Presupuestos de Gobierno Vasco, en el 2016 y ejercicios futuros, analizada la documentación remitida por los Departamentos de Seguridad y de Administración Pública y Justicia, la Dirección de Presupuestos considera que se derivarán incrementos de costes económicos básicamente por los siguientes conceptos:

1.-Es previsible un incremento de coste referente al cambio de grupo de adscripción de los **ertzainas en prácticas**, que se ha estimado por la Dirección de Presupuestos en 916.000 € anuales.

2.-También se derivarán nuevas necesidades retributivas para compensar el efecto de la regulación de las **modulaciones del servicio activo por razón de la edad**, cuya cuantía no se evalúa por del Departamento de Seguridad, siendo éste un déficit de la Memoria Económica presentada. Únicamente se indica que parte de esas medidas ya se aplican actualmente en la Ertzaintza y su impacto económico está siendo asumido con las dotaciones presupuestarias asignadas al personal de la Ertzaintza.

3.-Podría ser relevante en el futuro la implantación del **complemento de carrera profesional en la Ertzaintza**, una vez regulada la carrera profesional horizontal en el conjunto de la Administración Pública Vasca. Sin embargo esta situación no es posible de evaluar económicamente pues no existen referencias en las que basarse.

En cualquier caso, los diferentes incrementos de coste de personal derivados de la modificación de la Ley de Policía del País Vasco que se propone, deberán ser asumidos anualmente con las dotaciones económicas asignadas para el Capítulo 1, al Departamento de Seguridad, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las cuales se ajustarán anualmente a las directrices económicas que apruebe el Gobierno.

i) Dictamen COJUA

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha remitido al Departamento el dictamen 62/2016, de 19 de abril de 2016, en el que informan favorablemente el proyecto de ley.

En dicho dictamen se realizan algunas observaciones de técnica legislativa que han sido tenidas en cuenta en su mayor parte en el texto definitivo.

No se acepta la sugerencia de derogar el art. 16 de la Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del Sistema de seguridad pública de Euskadi, por cuanto su contenido y alcance supera el previsto en este proyecto de ley. La oficina Ekinbi de regulada en aquella ley tiene un ámbito de actuación y funciones que excede el de las quejas policiales, ya que su ámbito abarca la totalidad del sistema de seguridad pública de Euskadi incluyendo lo relativo a los servicios de emergencias y protección civil no policiales. Las regulaciones contenidas en la ley de 2012 y la contemplada en este proyecto lejos de colisionar, resultan ser complementarias.”

IV.- ANALISIS DE LAS ALEGACIONES Y OBSERVACIONES

Además del análisis temático de las alegaciones y observaciones recibidas y las modificaciones subsiguientes en los borradores iniciales, se han incorporado cambios al repasar el lenguaje del texto desde la perspectiva no sexista,

- Mecanismos de control actividad policial

En este apartado debe precisarse que las alegaciones efectuadas por las organizaciones sindicales se realizan como tales alegaciones puesto que el contenido de este capítulo por su naturaleza no cabe considerarse como inserto entre las materias sujetas a negociación.

En referencia al primer borrador se presentaron las siguientes aportaciones:

El sindicato **ERNE** pretende su eliminación. El sindicato **ESAN** sugiere suprimir el capítulo porque, a su juicio tiene “intencionalidad política”. El sindicato **UGT** sostiene que las policías locales tienen su propio sistema, mientras que desde el mundo de la administración local, por el contrario, se manifiesta la oportunidad de que la comisión de control cuente con representación de funcionarios de la policía local (EUDEL). En el grupo de trabajo denominado “norma marco” constituido por representantes de las policías locales y el Departamento de Seguridad en virtud del convenio de colaboración suscrito con EUDEL se sugiere incorporar la posibilidad de que cuando se traten actuaciones propias de las policías locales, se puedan incorporar a dicha Comisión miembros representantes de las policías locales. Y cambiar el nombre a Comisión de Control de la Policía Vasca”.

En cuanto a las funciones de la comisión de control se plantea el modo de compaginar las tareas de tal comisión con las exigencias de la investigación penal en curso en los casos previstos en el art. 11.2.a) que podrían tratarse de hechos penalmente típicos abocados a investigación de la policía judicial y conocimiento inmediato de la autoridad judicial. El sindicato **ESAN** sostiene que puede suponer una injerencia en la labor judicial.

En cuanto a la composición de la comisión de control Emakunde exige que la misma tenga una composición equilibrada de hombres y mujeres. El sindicato **ESAN** pretende que no se exija que sus componentes sean del grupo A (es decir, que puedan ser agentes de la escala básica si tienen titulación universitaria). El grupo de norma marco solicita ampliar la composición a funcionarios de la policía local.

En cuanto al auxilio de otros funcionarios a la comisión de control **ESAN** estima que no deberían ir en comisión de servicios, lo que entiende que permite que se les revoque por motivos de oportunidad política.

ERNE se queja de que Ekinbide se ha convertido exclusivamente en un instrumento para el inicio de actuaciones por asuntos internos, si bien no presenta ninguna propuesta al respecto.

Analizadas las anteriores observaciones la valoración que se realiza es la siguiente:

En respuesta a **ESAN** debe decirse que toda ley es expresión de un programa político por lo que carece de lógica descalificar una norma por lo que es su sentido innato. Si lo que pretenden decir es que se somete la actividad policial a un control partidista, nada más alejado de la realidad. La actividad policial es una actividad administrativa y como tal está sujeta a los controles previstos en el ordenamiento tanto el jerárquico de la Administración y el Gobierno del que dependen, como al control político parlamentario. Pero la modificación de la norma no incide en tales controles sino que configura un mecanismo que precisamente incide en la transparencia de tal control al habilitar a un panel de expertos con garantías de independencia funcional en su criterio el estudio de determinadas prácticas policiales.

Atendiendo a las sugerencias procedentes del mundo local y a la realidad de la existencia de la Policía del País Vasco como concepto englobante de Ertzaintza y policías locales bajo diferentes administraciones pero compartiendo la finalidad de la seguridad integral, se acepta la inclusión en el ámbito de actuación de la comisión al conjunto de la Policía del País Vasco.

Ello implica el cambio de la denominación propuesta inicialmente y la apertura de su composición a cualesquiera expertos del grupo A de los cuerpos de la Policía del País Vasco. No obstante, se matiza que la solicitud de intervención de la comisión será a instancia del Departamento de Seguridad o del respectivo ayuntamiento dependiendo de la dependencia de los cuerpos de que se trate.

Por otra parte se modifica la redacción para clarificar las posibilidades de actuación de la comisión en los casos en que estudie la actuación policial en casos de fallecimiento o lesiones graves que estén bajo investigación penal.

En este sentido se contempla que la comisión pondrá en conocimiento de la autoridad judicial su actividad con el fin de no interferir en tal investigación penal, ni en la reserva de sus actuaciones; el personal investigado en las diligencias penales no tendrá obligación de colaborar con la comisión, y si ésta precisa acceder a documentación administrativa (no diligencias penales o el atestado) relacionada con el caso o realizar inspecciones in situ deberá obtener la previa aprobación de la autoridad judicial.

Se matiza que la actuación de la comisión no es investigar la autoría de los hechos, ni depurar responsabilidades, por lo que se corrigen las referencias a términos como investigación, y se altera la denominación de la propia comisión que pasa a llamarse “comisión de buenas prácticas”. El carácter y finalidad de la comisión se refuerza al definir los contenidos de sus informes.

Respecto a la queja de **ERNE** sobre Ekinbide cabe decir que la misma no se sustenta en ningún dato, y por el contrario es fácilmente rebatible con los meros datos estadísticos incorporados a la memoria de dicho organismo que se remite anualmente al Parlamento.

En atención a las alegaciones presentadas se reformuló notablemente el borrador inicial con el segundo borrador en este apartado en el sentido ya expuesto.

Frente a la nueva redacción **ERNE** presentó de nuevo las mismas alegaciones en fase de negociación, pese a los cambios introducidos. No obstante, la redacción del segundo borrador ya ha atendido a algunas de las sugerencias tanto de **ERNE** como de **ESAN**.

El sindicato **CCOO** solicitó eliminar la regulación propuesta o en su defecto una regulación que con carácter previo a cualquier operativo policial la cadena de mando publique las órdenes de actuación especificando el nivel de riesgo, lo cual se pondría en conocimiento de la representación sindical. El análisis y valoración de las órdenes emitidas se realizará por una comisión específica en la que habrá presencia de la representación sindical. Esta propuesta es inaceptable. El trabajo policial implica atender situaciones de riesgo y peligro cuya previsibilidad no siempre es fácil de anticipar o que puede cambiar o que puede aparecer de modo inesperado y que motivan que cualquier agente de la autoridad debe tomar decisiones propias porque son su esfera de responsabilidad y para ello le habilita el ordenamiento vigente. Lo que propone es

por lo tanto impracticable. Y además la labor sindical no puede consistir en ejercer el control de las decisiones de la cadena de mando.

Respecto a la comisión de buenas prácticas **CCOO** propone que la mitad sean ertzainas del mismo puesto y categoría que los investigados con una antigüedad no menor de 5 años, además de representación sindical. El sindicato **ELA** propone que la mitad de los miembros de la comisión de buenas prácticas sean funcionarios de la Ertzaintza con al menos 15 años de antigüedad en el cuerpo

Respecto a la composición de la comisión de buenas prácticas las propuestas sindicales, en cuanto a que excluyen la presencia de quienes sean o hayan sido funcionarios de otros cuerpos de la Policía del País Vasco que no sean la Ertzaintza, plantean dudas sobre si aceptan que el ámbito de actuación de esta comisión sea la Policía del País Vasco en su conjunto. Dado que el ámbito propuesto es la Policía del País Vasco carece de sentido que la mitad de sus miembros deba proceder de un cuerpo concreto de la misma.

Hay otro factor que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar estas alegaciones. No es labor de la comisión investigar, ni, mucho menos, enjuiciar comportamientos individuales, sino aspectos más complejos que usualmente trascienden de actos singulares, aspectos organizativos, estructurales, etc. y cuyo estudio requiere de una alta cualificación profesional.

La propuesta de **CCOO** es inconsistente. Primero porque no es labor de esta comisión investigar a funcionarios concretos (es más expresamente se dice que no tienen competencia para ello) y por lo tanto no puede ser el elemento determinante de la designación de los miembros de la comisión el puesto de trabajo de los investigados. Segundo, porque lo que se analiza es el conjunto de la actuación lo que incluye la planificación, el desarrollo y los resultados, así como las condiciones preexistentes, lo cual incluye las decisiones políticas, las normas, los medios, lo planificado y su ejecución y nunca sólo el actuar individualizado, por ello no sirve para definir la composición el criterio propuesto. Tercero, porque conforme a dicho criterio existirían tantas composiciones como casos analizados, de modo que no existiría una composición estable, que es uno de los propósitos del proyecto.

Lo mismo se puede decir de la propuesta de **ELA -Ertzaintza**, que al sólo mencionar la participación en la comisión de funcionarios de la Ertzaintza parece excluir a otros posibles candidatos procedentes de las policías locales vascas (también incluidas en el ámbito de aplicación). La antigüedad no es un criterio válido para formar parte de esta comisión y si lo es la cualificación académica y profesional. Por otra parte, no parece de recibo que se coarte la independencia de la comisión exigiéndole que previamente a concluir su informe oiga a un órgano institucional paritario como el Consejo de la Ertzaintza. La Comisión debe ser libre para determinar que testimonios debe recabar y el testimonio del Consejo de la Ertzaintza por sí mismo no parece que vaya a ser determinante en todo caso. Tampoco es aceptable que la comisión de buenas prácticas deba rendir cuentas al Consejo de la Ertzaintza dándole cuenta de lo actuado.

Por otra parte el sindicato **ELA** propone que la comisión pueda intervenir a instancia de un grupo parlamentario o del Ararteko y que antes de emitir su informe se oiga al Consejo de la Ertzaintza. Al respecto cabe señalar que la integridad, imparcialidad e independencia de la comisión de buenas prácticas debe ser preservada en cualquier caso. Por tales razones tampoco

parece razonable que este mecanismo pueda activarse a solicitud de un grupo parlamentario, dado que ello conduciría a emplear este mecanismo de forma partidaria, además de resultar exorbitante e inédito que un grupo político unilateralmente pueda activar mecanismos administrativo al margen de los mecanismos de control previstos en el propio reglamento parlamentario. En lo que se refiere al Ararteko debe considerarse que el mismo ya dispone de sus propios mecanismos y procedimientos para actuar de oficio, que pueden desarrollarse sin perjuicio de los trabajos de esta comisión.

El informe de la **DACIMA** contempla que en relación a la comisión de buenas prácticas debe considerarse, conforme a la nueva ley de procedimiento administrativo común la exigencia de que por regla general las convocatorias y la remisión de las actas se ha de realizar por medios electrónicos. Tal propuesta no aporta nada a la regulación, la cual no entra en regular ni las convocatorias, ni la expedición de actas de las reuniones de tal comisión, por lo cual serán de aplicación las reglas del procedimiento común que se citan, sin necesidad de explicitarlo en el texto de esta ley.

Para terminar en lo que respecta a este capítulo y en respuesta al planteamiento de **ELA** de que se oiga a la representación sindical en los expedientes de Ekinbide relacionados con quejas por deficiencias del servicio, debe decirse que tal exigencia no aporta nada al procedimiento de queja e interfiere en la relación directa con la ciudadanía. Por otra parte los informes de Ekinbide se publicitan.

En relación igualmente a Ekinbide no cabe admitir la propuesta de **ELA - Udaltzaingoa** de eliminar la posibilidad de que los ayuntamientos en comienden voluntariamente a Ekinbide la gestión de quejas. Tal posibilidad existiría aunque no se diga nada en el proyecto.

- Código deontológico

En relación al código deontológico **ERNE** propone algunas modificaciones.

La primera es que se reconozca la condición de agente de la autoridad (art 33) incluso fuera de servicio para garantizar a los policías iguales garantías jurídicas en caso de agresión a su persona o patrimonio. Tal cuestión excede de las posibilidades de una ley autonómica: la ley puede establecer que tienen carácter de agente de la autoridad (en igual sentido que la LOFCS), pero no puede interpretar las consecuencias penales de tal conceptualización. No obstante, el Código Penal vigente ofrece protección penal especial en el delito de atentado a los agentes no sólo cuando están en el ejercicio de sus funciones (y hay que tener en cuenta el deber de servicio permanente), sino igualmente cuando son atacados con ocasión de tales funciones. Ir más allá implicaría la reforma del código penal.

Por otra parte **ERNE** pretende modificar el art. 34 relativo al uso de armas eliminando la exigencia de que el riesgo sea grave, así como toda la referencia a que el empleo de armas de fuego sea una medida extrema para los casos en que exista resistencia armada o peligro para la vida propia o de terceras personas y no pueda detenerse o reducirse al agresor por otros medios. La modificación pretendida supondría un paso atrás significativo en la regulación legal del empleo de armas por la policía.

Por último **ERNE** propone extender el derecho a la defensa jurídica del funcionario en caso de acusación penal a otros supuestos como daños en su persona, bienes, amenazas, insultos por su condición de miembro de la policía. Dicha propuesta en realidad ya tiene acogida en el Decreto de 1995 que regula la representación y defensa en estos casos y en el proyecto de ley de asistencia jurídica del Gobierno Vasco.

Por su parte **ELA Udaltzaingoa** propone que la asunción de la defensa del funcionario por la administración sea “de mutuo acuerdo” con el defendido. Se trata de una precisión innecesaria, dado que sólo con el consenso del defendido se puede ejercer su defensa y representación conforme a las leyes procesales.

El **informe de política lingüística** planteaba dos propuestas en relación al art. 30:

- Incorporar al art. 30 bis.1.c) la no discriminación por razón de lengua. El precepto contempla el principio de no discriminación por cualquier característica personal sea cual sea, y los derechos lingüísticos pueden tener una formulación más expresa en el art. 30 bis .2 conforme a lo que pasamos a analizar.
- Nueva disposición que diga lo siguiente: La Policía del País Vasco garantizará el derecho de la ciudadanía a recibir atención en el idioma que escojan, sea euskera o castellano, tanto oral como por escrito. Los derechos lingüísticos de la ciudadanía están ya regulados en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, «Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera», resultando inconveniente dispersar su regulación sustantiva. No obstante, cabe la remisión a tal regulación, por lo que se modifica el art.230bis. 2 para adicionar lo siguiente: *La Policía del País Vasco en sus relaciones con la ciudadanía el derecho tendrá en cuenta los derechos lingüísticos reconocidos en Ley 10/1982, de 24 de noviembre, «Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera».*

- Formación y bilingüismo.

El proyecto aborda algunas cuestiones relacionadas con la formación policial y el bilingüismo sobre las que se han hecho aportaciones diversas que trataremos conjuntamente.

Por una parte y excediendo de lo que sería la propuesta de esta ley de modificación de la LPPV, **ERNE** plantea modificar la LOSSPE para que en el Consejo Rector de la AVPE la representación de los representantes de los funcionarios de los cuerpos de policía local la ostenten los sindicatos con mayor implantación en dichos cuerpos. No es aceptable por dos razones: a) la AVPE no sólo forma a los funcionarios locales de los cuerpos de policía, sino también a los de los cuerpos de bomberos, por lo que su representación no puede medirse sólo entre funcionarios de cuerpos policiales, y b) porque sería imposible medir la representatividad en los cuerpos de policía local dado que en los municipios las elecciones sindicales no se efectúan en los cuerpos policiales de forma separada respecto al resto del funcionariado.

También excediendo de lo que es propio de la LPPV **ERNE** propone determinar los puestos de la misma que deban ser desempeñados por funcionarios policiales y que su selección se realice por principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Tales previsiones ya están en la

normativa vigente, por lo tanto no es una cuestión que debe llevarse a esta ley, ni a la LOSSPE, sino, en su caso, a la RPT de la AVPE.

En referencia a la formación **ERNE** pretende que expresamente el art. 39.2 establezca la obligatoriedad del cumplimiento de los planes de formación de la AVPE. Tal propuesta resulta imprecisa en cuanto a quién sería el sujeto obligado. Debe recordarse que la AVPE es un organismo instrumental y es obvio que le obliga su propia programación. Además todo lo referente a la planificación y programación de la formación se regula en la LOSSPE.

CCOO quiere obligar a la AVPE a informar a cada agente de la oferta formativa que debe realizar y de entregarle la documentación del curso tras su finalización, y **ELA** propone que la ley contenga un mandato para que cada administración reglamentariamente establezca, previa negociación, una formación mínima anual.

Lo pretendido podría ser atendido sin necesidad de la ley. La información sobre la oferta formativa debe publicitarse ampliamente entre sus destinatarios, pero no parece razonable tal exigencia relativa a la información personal. Tampoco está claro si se refieren a formación obligatoria o voluntaria. Existen cursos de reciclaje u otros que son de obligada realización y otros que se ofertan voluntariamente y corresponde a cada funcionario decidir si le parecen de interés. Cuando la formación es obligada no puede ser la AVPE sino los responsables policiales quienes deciden quienes deben asistir. Y respecto al resto la inscripción voluntaria dependerá del interés de cada funcionario y los criterios de selección dependerán de cada curso. Puede darse el caso que unos funcionarios hayan realizado varios cursos y otros ninguno, pero tal circunstancia puede depender de la programación anual, del interés de cada funcionario o de las decisiones organizativas concurrentes y todo ello no se solventa con la redacción propuesta para la ley.

ELA propone que se imparta formación sobre el derecho de huelga y el derecho a una vivienda o que sólo se convaliden estudios en centros oficiales o policiales. Respecto a lo primero no parece razonable que la ley singularize la enseñanza de dos derechos como los señalados pretiriendo el resto de derechos fundamentales igual o más importantes. Y la precisión de que sólo se puedan convalidar estudios en centros oficiales o policiales va de suyo.

Tales pretensiones en su conjunto no parecen apropiadas para esta reforma legal, ya que o bien se refieren más a la regulación de la AVPE que se contiene en la LOSSPE o son más propias de normas con un rango inferior y más dinámico.

- Normalización Lingüística

ERNE propone que la ley habilite al reglamento para definir la periodicidad obligatoria de los cursos de formación, capacitación y euskaldunización. En respuesta a esta propuesta cabe decir que una formulación semejante no habilita al reglamento nada que el propio reglamento pueda ya hacer. Sin embargo, no resulta fácil establecer una periodicidad estable reglamentariamente, siendo más propio bien de los instrumentos de negociación colectiva, bien de la planificación formativa.

Respecto al compromiso del bilingüismo y a la euskaldunización tanto **ERNE** como **ESAN** solicitan un plan de liberalizaciones. **ERNE**, además, propone una serie de disposiciones adicionales y transitorias nuevas que supondrían vincular el perfil lingüístico al funcionario y no al puesto hasta tanto todos los funcionarios hayan podido ser liberados para euskaldunizarse desde cero y aplicación automática del Decreto 47/2012 sobre reconocimiento de estudios en euskera y exención de acreditación de títulos. Por su parte sindicato CCOO propone no asignar nuevas fechas de preceptividad en la Ertzaintza y que el euskera sólo sea valorado como máximo con un 3% de la totalidad de puestos de los concursos hasta que todos los funcionarios tengan la opción de liberarse desde cero para conseguir el perfil lingüístico, para lo cual se liberarían un mínimo de 100 agentes por año.

La euskaldunización de la Ertzaintza se rige por los mismos mecanismos previstos para el conjunto del funcionariado, si bien se han diseñado perfiles lingüísticos singulares en atención a las singularidades del trabajo policial. Los perfiles lingüísticos atienden a las necesidades del puesto y su entorno por lo que no pueden venir vinculados a la persona. Además la política de liberaciones para el aprendizaje del euskera está condicionada por la imposibilidad de suplir al personal con personal interino. Ambas cuestiones hacen imposible aceptar el planteamiento de un régimen transitorio como el propuesto por ERNE.

Por otra parte las exenciones del Decreto 47/2012, de conformidad con lo previsto en el mismo son de directa aplicación: Las exenciones previstas en los artículos 2, 3 y 4 de este Decreto surtirán efectos cuando los títulos o certificaciones lingüísticas sean exigidos como requisito o valorados como mérito, en los procedimientos de selección y provisión de empleo público convocados en el País Vasco por las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

La propuesta de ELA **Udaltzaingoa** de añadir en relación a la capacitación lingüística una referencia a los planes de euskaldunización de cada Institución no parece que aporte novedad al proyecto.

- Medidas de promoción de la igualdad de oportunidades.

ERNE se opone a las medidas de acción positiva propuestas destinadas a promocionar la igualdad de hombres y mujeres, sin aportar otras propuestas al efecto. Por su parte **ELA Ertzaintza** propone eliminar la aplicabilidad de la ley de igualdad en los procedimientos de provisión de puestos, lo cual no es aceptable.

ELA Udaltzaingoa Plantean que en los casos en que el procedimiento selectivo convoque menos de 3 plazas el porcentaje mínimo no deba ser necesariamente inferior al 25%, dado que a su juicio ello supondría que todas las plazas se reservan a mujeres. Se atiende a la sugerencia modificando el texto para incorporar el siguiente texto: *Como regla general, en tanto no se elaboren tales planes de promoción de las mujeres, el porcentaje mínimo no podrá ser inferior al 25% siempre que se convoquen más de 3 plazas.*

Emakunde propone computar para la jubilación anticipada periodos en excedencia por hijo o violencia de género, sin embargo, ello excede de la competencia legislativa vasca, puesto que implica la modificación de la legislación general de la seguridad social.

- Ingreso y selección.

El sindicato **CCOO** propone ofertas de empleo anuales para cubrir el 100% de la plantilla incluyendo el número de quienes pudieran jubilarse antes de la finalización del curso básico. No es aceptable. En la Ertzaintza no existe como tal el concepto de OPE. Y en cualquier caso, tal inclusión en la ley no frenaría ningún recurso como los que durante dos años seguidos ha presentado el Gobierno español, y probablemente supondría un nuevo recurso contra la propia ley. Además no cabría incorporar a una OPE vacantes no existentes a la fecha de su convocatoria.

Respecto a los **requisitos de ingreso** por una parte **EUDEL** se felicita porque se exija directamente a los aspirantes estar en posesión de **titulación** del subgrupo C1, si bien estima que debe establecerse el mecanismo transitorio para quienes con anterioridad a la ley han sido integrados en tal subgrupo a efectos retributivos y administrativos.

ERNE, ELA, UGT y CCOO solicitan la supresión de la **edad máxima para el ingreso**. En lo que atañe a la edad máxima para el ingreso recordar que no existe a día de hoy ninguna sentencia que falle en contra de tal requisito en el caso de la Ertzaintza. El TSJPV se ha pronunciado en favor de dicha limitación en alguna sentencia, si bien recientemente ha decidido remitir el asunto al TJCE como cuestión prejudicial. Los precedentes de la jurisprudencia interna se refieren a la policía nacional española (siendo así que en la guardia civil se ha mantenido la limitación) y de la jurisprudencia europea referentes a la policía local de Asturias. El debate jurídico al respecto estriba en si existe una justificación racional para tal medida que implique que se trate de una discriminación razonable y en el caso de la Ertzaintza concurren motivos que permiten indicar que la edad deviene en un condicionante decisivo en la organización: a) pérdida progresiva de condiciones psicofísicas a partir de los 40-50 años que supone que a partir de los 55-56 se les exima de realizar parte de las tareas ordinarias con habitualidad y que se jubilen a los 59 o 60 años; B) cálculos actuariales de los coeficientes reguladores para el acceso a la jubilación anticipada a los 50/60 efectuados sobre un promedio de vida laboral en el cuerpo de 25 a 30 años. En cualquier caso serán los tribunales quienes decidan si tal medida está justificada o no.

Por su parte **EUDEL** propone que la posibilidad de compensar la edad máxima con servicios prestados en cuerpos de policía local no sea automática sino que se difiera a la decisión municipal en las bases de la convocatoria. No parece razonable diferir tal decisión a cada convocatoria puesto que no ofrecería suficiente seguridad jurídica respecto a los requisitos de ingreso.

Respecto a la propuesta de **Emakunde** relativa al cómputo para la **jubilación anticipada de los periodos en excedencia** por hijo o violencia de género si bien puede ser razonable, excede de nuestra competencia, es una cuestión de la LOGSS que habla de años completos efectivamente trabajados

En referencia a la regulación de la composición de los **tribunales de selección ERNE** estima que no debe excluirse de los mismos a los funcionarios interinos. La exclusión de los funcionarios interinos de los tribunales de selección es una regla aplicable al conjunto de la función pública por venir prevista en el EBEP.

ELA- Udaltzaingoa plantea que en el caso de convocatorias conjuntas de varios municipios la composición de los tribunales y las fórmulas de adjudicación de las plazas se regulará reglamentariamente. Tal precisión es innecesaria ya que habrán de ser las convocatorias conjuntas las que determinen tales reglas.

Igualmente **ELA - Udaltzaingoa** propone que la duración conjunta de curso y prácticas no exceda de 24 meses (en vez de la referencia legal actual a 30 meses) y que el curso sea entre 6 y 9 meses y el periodo de prácticas no superior a 12 meses. La duración de los cursos y periodos de prácticas está estandarizada ya y no plantea problemas, ni perspectivas de cambio. La redacción del legislador imponía un límite que aunque esté por encima de los cursos estandarizados no plantea problema alguno para los mismos que obliga a la reforma legal.

La **Dirección de Función Pública** realiza dos observaciones:

- En relación a la regla de inamovilidad de la convocatoria de ingreso y sus excepciones, considera el informe que, pese a tratarse de una regla ya contenida en el vigente reglamento de selección y formación, debería limitarse la ampliación del número de plazas sin nuevo plazo de solicitudes a un porcentaje ponderado que no sea de tal magnitud que cambien las expectativas de los aspirantes, ya que en tal caso sería preciso abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes o la convocatoria posterior de otro procedimiento (nuevo apartado quinto al artículo 47 No se aceptan las sugerencias de la Dirección de Función Pública por entender que no es preciso establecer un porcentaje, cuya plasmación en ley resultaría difícil de predeterminedar. La redacción es la vigente en el reglamento de selección y formación.
- En relación a los procesos selectivos plantea añadir que la actuación de los asesores expertos que participen en los mismos se sujete a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad. Se acepta e incorpora al texto.

- **Provisión de puestos**

- **Catálogo o relación de puestos**

ERNE solicita que se realice un catálogo de puestos que recoja todos los puestos existentes en todos los cuerpos policiales y dentro de esos puestos todas sus funciones con objeto de facilitar el conocimiento y gestión y la determinación de los puestos de segunda actividad. Al hilo de lo anterior, sugiere en referencia al art. 68, que no haya puestos singularizados hasta que se realice el catálogo de puestos reclamado.

Esta petición no se traduce en una propuesta concreta cara el proyecto de ley, pero si cabe apuntar a que la relación de puestos de trabajo cumple la función de identificar los puestos existentes en cada organización y no es un instrumento distinto del citado catálogo. La configuración de las funciones de cada puesto se contiene en las correspondientes monografías. Si lo que se pretende es un estudio para racionalizar y categorizar los puestos de trabajo existentes en cualquier organización policial para una posible reforma ulterior de las relaciones de puestos ello no requiere de habilitación legal previa alguna. En una organización policial la mayor parte de los puestos de trabajo son indistintos y responden a un conjunto de tareas correspondientes a un puesto tipo correspondiente a una categoría determinada, resultando escasos en proporción los puestos singularizados, que sin embargo, si existen en la actualidad. La proliferación de puestos singularizados no se adecúa a la polivalencia propia del trabajo a desarrollar.

En cuanto a la existencia de **especialidades ERNE** propone suprimir el art. 43.2. y el art 65 bis 3, para eliminar el compromiso de permanencia y la superación pruebas selectivas de actualización. No se estima la alegación. Por su parte EUDEL plantea contemplar la existencia de especialidades en policías locales, lo cual puede resultar aceptable.

ERNE sugiere modificar el art. 67.1 y suprimir el art. 67.2 para que la publicación de las convocatorias de provisión y su resolución se realice en el Boletín de la Ertzaintza y en tablones, en vez de en el BOPV. En la actualidad se publican las convocatorias en el BOPV (en ausencia del boletín de la Ertzaintza que no se llegó a crear) y en tablones, mientras que las resoluciones de adjudicación se publican en Gurenet. En el proyecto de ley desaparece la previsión de un boletín de la Ertzaintza, por lo que se actuaría como en la actualidad. La propuesta de **ERNE** es incompatible con la desaparición del boletín de la Ertzaintza y la práctica vigente permite compatibilizar el principio de publicidad y las exigencias de confidencialidad y seguridad.

ELA- Ertzaintza propone que sólo se exija exigencia de compromiso de permanencia si en la relación de puestos de trabajo se fija el requisito de máxima permanencia. No se comprende la propuesta; los requisitos de mínima o máxima permanencia se contemplan en la RPT.

Por otra parte **ELA - Ertzaintza** propone que en el art. 71.3 segundo párrafo se contemple, como en la actualidad, que quien esté en adscripción provisional por supresión del puesto percibe un complemento transitorio hasta la resolución del primer concurso en el que pueda participar. El precepto a que se refiere no se ve alterado en el anteproyecto, que sólo modifica el primer párrafo del art. 71.3.

- Concurso de méritos

En lo que atañe a la provisión de puestos mediante concurso de méritos **ERNE** propone el art. 65.2 para que no se valore como mérito nada más que la que antigüedad y trabajo desarrollado, sirviendo el resto de méritos (cursos de formación, titulaciones,...) sólo como criterio de desempate. Y el euskera sólo valorarlo como criterio de desempate en un periodo transitorio hasta que se euskaldunice todo el colectivo.

Respecto a la propuesta de **ERNE** se estima que podría aceptarse que para determinados puestos pudiera atenderse como mérito a la antigüedad y trabajo desarrollado, sirviendo el resto de méritos (cursos de formación, titulaciones,...) como criterio de desempate, pero ello no es

posible extenderlo a la totalidad de los puestos, puesto que desfiguraría el propio concepto del concurso de méritos previsto en la legislación general de los empleados públicos. No resulta, en cambio, aceptable la pretensión relativa al periodo transitorio propuesta que relegaría el euskera a mero criterio de desempate. Por ello se propone una redacción que contemple que la antigüedad y el trabajo desarrollado, así como el euskera cuando no constituya requisito, resulte siempre valorables, mientras que el resto de posibles méritos sólo se contemplen si así expresamente se decida en la convocatoria en atención a su relación con los puestos de trabajo.

UGT, por su parte, propone que reglamentariamente se desarrolle el concepto de trabajo desarrollado. Respecto a tal apreciación decir que el reglamento de provisión de puestos ya desarrolla tal previsión.

CCOO propone varias reformas:

a) que las sanciones de suspensión de funciones en ningún caso tengan efectos sobre el meritage de la antigüedad. No se acepta. Lo contrario sería más injusto para quienes han desempeñado correctamente su trabajo.

b) que quien haya obtenido un puesto en un concurso pueda presentarse en los siguientes aun cuando no hayan transcurridos 2 años. No es aceptable, es una exigencia que aparece en la función pública general y que permite consolidar las estructuras mínimamente y evitar el cambio incesante de la totalidad de la organización sin consolidarse en unidades concretas..

c) que se elimine la preferencia a obtener destino en la misma localidad a quienes hayan visto suprimido su puesto o, al menos, que misma localidad a estos efectos es el término municipal del puesto removido y si no hay una unidad en tal localidad, la comisaria que cubra tal localidad. La preferencia en caso de supresión del puesto es una garantía para el funcionario que se recoge en la función pública general. No es preciso modificar la ley para, en su caso, incorporar una regla interpretativa como la propuesta, por ejemplo, en el reglamento de provisión de puestos.

Es una cuestión más propia del reglamento que de la ley.

d) llevar a la ley la regulación de las comisiones de servicios inter unidades atendiendo al criterio de antigüedad en el puesto y la puntuación de ingreso en la categoría como criterio de desempate. No es necesario llevar a la ley este aspecto, si ya tiene acomodo en sus normas de desarrollo.

ELA Udaltzaingoa plantea la necesidad de incluir la referencia al grado personal que aparece en la LFPV en el art. 65.2, se acepta atendiendo a las diferencias de régimen en esta materia entre Ertzaintza y policías locales.

- Libre designación

En cuanto al procedimiento de provisión por libre designación **ERNE** propone excluir del art. 63.3 tal procedimiento de los puestos de la escala básica, inspección y puestos de subcomisario y suprimir el párrafo que establece un porcentaje máximo de provisión por libre designación.

ELA Ertzaintza propone limitarlos a los puestos de "alta dirección" y **CCOO** a los puestos de la escala superior.

En la actualidad se ha rebajado el porcentaje de puestos de libre designación por debajo del límite previsto en el reglamento de provisión de puestos y parece adecuado incidir en tal dirección, restringiendo los puestos de libre designación a aquellos estrictamente precisos. Como es obvio responden al criterio habilitante de la libre designación en mayor medida los puestos más altos de la organización por el nivel de responsabilidad y confianza exigibles; no obstante, aún con mayor excepcionalidad pueden darse tales exigencias en puestos de categorías inferiores, por lo que el planteamiento del sindicato podría esclerotizar los mecanismos de provisión de puestos. Como alternativa se plantea la posibilidad de establecer reglamentariamente porcentajes máximos no sólo en la totalidad del cuerpo sino en cada una de las escalas o categorías.

- Permuta

En referencia a la permuta en la policía local (prevista en la DA 21ª en el borrador inicial) **EUDEL** planteaba incluir entre los requisitos que se cumplan los establecidos en la RPT, lo cual era razonable. **UGT** plantea la innecesidad de tal regulación, dado que tal previsión ya existe. La propuesta de UGT no carece de sentido, por lo que se aceptó y desaparece en el segundo borrador.

ELA Udaltzaingoa, a la vista del segundo borrador, plantea volver a introducir la regulación de la permuta y no sólo permitirla entre policías locales sino entre funcionarios de cualquier cuerpo de la Policía del País Vasco.

Se mantiene la no incorporación de esta regulación aceptando los criterios expuestos por UGT. No obstante, debe tenerse en consideración que la figura de la permuta está siendo cuestionada por algunos juzgados de lo contencioso-administrativo en cuanto a su posible falta de adecuación a los principios de igualdad, mérito y capacidad exigibles para la provisión de puestos.

- Escala de facultativos y técnicos

ERNE plantea en el art. 105.3 una cláusula que obligue a desarrollar en seis meses la escala de facultativos y técnicos, estableciendo las unidades y plazas y modificando la relación de puestos. Al respecto debe considerarse que la citada escala ya existe y la relación de puestos actual contiene las plazas que hoy en día están integradas en dicha escala.

- Carrera y promoción interna

- Promoción interna

CCOO propone la obligación de convocatorias de promoción interna en el plazo de 3 meses cuando exista un número de vacante superior al 10% de las plazas en la categoría o especialidad. No es posible acceder a tal propósito. La previsión, planificación y ejecución de las convocatorias de promoción interna requiere unos tiempos que en ninguna administración son asumibles con los plazos que se proponen.

ERNE plantea que nunca se pueda eximir la titulación académica como requisito (lo que implica eliminar los cursos de capacitación habilitante); más explícitamente **CCOO** propone eliminar los cursos de capacitación habilitante para la promoción interna (art .59.2). No es propósito de este anteproyecto modificar la regulación de los cursos de capacitación habilitante, los cuales están ligados de algún modo al hecho de que la carrera funcional se configure pensando en que el mecanismo de ingreso se realice como regla general desde la categoría más baja a la que se pide, ahora, titulación del subgrupo C1. Este modelo condiciona la regulación de la promoción interna, dado que es la experiencia adquirida en el trabajo la determinante del sucesivo ascenso tanto como la titulación. El anteproyecto pretende disminuir el tiempo de servicios en cada categoría para acceder a la promoción, pero su eliminación total conduciría a carreras administrativas meteóricas en muy pocos años sin el peso de la experiencia adquirida en cada nivel de mando. Tal virtualidad pondría en cuestión el cierre de los mecanismos de ingreso de las escalas de mando al turno libre.

ELA- Ertzaintza propone posibilitar la promoción interna a los sancionados con falta superior a 2 meses (debe entenderse que se refieren a sanción de suspensión de funciones). Esta propuesta tiene relación con otras de otros sindicatos tendentes a facilitar que quienes hayan incurrido en sanción de suspensión de funciones no vean mermadas sus posibilidades para los concursos de méritos en determinados casos. Se analizarán conjuntamente.

ERNE propone no exigir la prestación de un determinado número de años en servicio en la categoría precedente (sólo valorarlo como mérito), y no deducir del cómputo de servicios efectivos las bajas laborales de ningún tipo. En lo que atañe al cómputo como servicios efectivos de las bajas laborales a los efectos de cumplimiento del tiempo en la categoría de precedencia parece razonable y ha sido tenido en cuenta en el segundo borrador.

ERNE se manifiesta conforme con eliminar el máximo de tres convocatorias. **CCOO** aluden a tal eliminación, que ya está en el borrador.

Por último, de la relectura del texto se infiere la conveniencia de definir mejor las situaciones administrativas desde las que se puede promocionar, evitando la indefinición del concepto de “situaciones asimiladas”, aunque se pueda deducir su significado de una lectura contextual.

- Carrera profesional

En relación a la carrera profesional horizontal **ESAN** pide directamente la retirada del capítulo. **ERNE** plantea la sustitución de la redacción por el acuerdo de 2011 para la Ertzaintza. A **UGT** le parece que más que configurar un derecho regula una concesión ambigua, al tiempo que en la regulación del régimen retributivo pide que se incluya en lo referente al complemento de carrera profesional a la policía local. **ELA- Ertzaintza** propone que las disponibilidades presupestarias no condicionen la efectividad de la carrera profesional y que se suprima la referencia a la posibilidad de pérdida del grado consolidado, además de corregir una errata en la numeración. **ELA- Udaltzaingoa** propone fijar un plazo de 2 años para la implantación de los sistemas de carrera profesional. **EUDEL** plantea la necesidad de que la carrera horizontal en las policías locales resulte de incorporación simultánea a la de los funcionarios en general sin disfunciones temporales o de otra índole.

En referencia a la propuesta de **ESAN** debe decirse que la falta de regulación legal de la carrera profesional supondría la imposibilidad de desarrollarla.

En respuesta al planteamiento de **ERNE** debe considerarse que la regulación de la carrera horizontal se contempla en el anteproyecto en referencia al conjunto de la Policía del País Vasco, por lo cual no es fácil trasladar sin más las referencias que puedan existir en la Ertzaintza más allá de dicho colectivo desatendiendo las necesidades existentes en el ámbito local y su autonomía. Ello impide el planteamiento de ERNE, además de que en el ámbito de la ley nos situamos en la confección de principios y reglas básicas que permitan un desarrollo acorde a las necesidades de cada momento. La regulación contiene, por ello, los elementos básicos y requeridos de normativización en una ley formal por el principio de reserva de ley que sirvan para implementar a futuro los sistemas de desarrollo profesional o carrera horizontal en cada ámbito concreto.

Lo antedicho sirve para dar respuesta a **UGT**.

ELA- Ertzaintza propone que las disponibilidades presupuestarias no condicionen la efectividad de la carrera profesional y que se suprima la referencia a la posibilidad de pérdida del grado consolidado

La propuesta de **ELA- Udaltzaingoa** no puede aceptarse puesto que debe tenerse en cuenta lo que dice acertadamente EUDEL.

Todo lo antedicho debe ser puesto en concordancia con las conclusiones del informe de la **Dirección de Función Pública** y con el contenido del Proyecto de ley de empleo público vasco recientemente remitido al Parlamento Vasco.

El proyecto de ley de empleo público vasco deja margen para que pudiera existir una normativa específica en la Ertzaintza, pero con aplicación su plenitud de lo previsto no sólo en dicha ley, sino igualmente en su normativa de desarrollo. El proyecto parte del principio de que exista un único sistema de carrera profesional horizontal en cada Administración pública vasca o ámbito sectorial, pero que además los distintos sistemas confluyan gracias a los modelos de reglamento de carrera profesional que proponga la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, que faciliten la movilidad interadministrativa del personal empleado público y el reconocimiento mutuo de los diferentes grados de desarrollo profesional.

Debe notarse que la posibilidad de una normativa específica sólo se contempla para la Ertzaintza y no para las policías locales.

Para que la configuración de la función pública general sea coherente con la del sector de la Policía del País Vasco y que se cumplan, especialmente en el nivel local, tal y como ya apuntaba EUDEL, de unidad del sistema de carrera profesional en cada Administración y de armonización y posibilidad de reconocimiento mutuo de los grados de desarrollo profesional y movilidad interadministrativa dentro del sector de la Policía del País Vasco, singularizada en el caso de los cuerpos de policía local, es preciso que ambas normativas resulten coherentes.

Atendiendo a lo expuesto se aceptan las propuestas de la Dirección de Función Pública y se incorporan al texto.

- Derechos y deberes

- Régimen retributivo

ERNE propone incorporar al art. 74.1 la prohibición de que las retribuciones sean minoradas. Tal propuesta no puede resultar una especificidad policial, por lo que, en su caso, debería ser objeto de la regulación general para los empleados públicos.

UGT, por su parte, pretende que la regulación del complemento de carrera profesional incluya a la policía local. Sin embargo, el precepto en su conjunto sólo se dedica a la Ertzaintza, dado que el régimen retributivo de las policías locales sigue al previsto para los funcionarios locales en general y el proyecto de ley de empleo público ya contempla para ellos tal tipo de complementos.

ELA Ertzaintza plantea que en caso de comisiones de servicio a superior categoría el funcionario o funcionaria tenga derecho a la retribución complementaria desde que de facto sustituya a su superior y que si se desempeña la comisión de servicios por 3 años se consolide la percepción del complemento de destino de la categoría superior (art. 74.a)) Existe una imposibilidad legal para acceder a tal pretensión, puesto que la misma desborda las reglas más básicas comunes a la función pública. Primero porque da carta de naturaleza a situaciones de facto no jurídicas, al diferenciar comisiones de servicio regladas y de facto. Segundo, porque propone un mecanismo de promoción interna encubierto y ajeno a los principios de mérito y capacidad y al principio de publicidad que permitiría consolidar retribuciones complementarias asignadas a una categoría correspondiente a un grupo de titulación a quien ni tiene la titulación requerida, ni ha promocionado a la categoría bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad en un procedimiento reglado de promoción interna.

- Régimen de incompatibilidades

En cuanto al régimen de incompatibilidades **ERNE** propone fijar un plazo de 6 meses para adecuar tal régimen y suavizarlo. **UGT** propone dejar claro el derecho a la compatibilidad en ciertas circunstancias. **CCOO** considera innecesaria la modificación por restrictiva y estima que la incompatibilidad de la condición de reservista con el servicio activo debe reducirse a situaciones de crisis o emergencia en Euskadi. **ELA Udaltzaingoa**, por el contrario, estima que tal incompatibilidad debe extenderse al conjunto de la policía del País Vasco.

Al respecto conviene indicar que la reforma pretende ya la suavización del régimen de incompatibilidades preexistente acercándolo, al amparo de la última jurisprudencia, al régimen general de los empleados públicos.

Respecto a la propuesta de **ERNE**, no es preciso un plazo para la adecuación, dado que sería de aplicación inmediata con la entrada en vigor de la ley. Respecto a lo opinado por **UGT** la respuesta es que no se requiere de clarificación, dado que implica la aplicación de la normativa común.

Respecto a la incompatibilidad con la condición de reservista no existen las intencionalidades o “fobias” de las que habla **CCOO**, que no están en el trasfondo del asunto. Muy al contrario, el problema parte de la regulación de la condición de reservista en las normas estatales y lo que se pretende es un tratamiento semejante al régimen de incompatibilidades con la condición de reservista previsto en la normativa estatal respecto a la guardia civil. La propia CCOO admite la necesidad de considerar incompatible tal actividad en determinadas circunstancias. No parece extrapolable lo anterior al conjunto de la policía del País Vasco, dadas las diferentes funciones que asumen las policías locales en materia de orden público.

- Deber de residencia

Los sindicatos **ERNE** y **CCOO** sugieren eliminar el deber de residencia contemplado en el art. 76. Al respecto debe considerarse que la redacción ha sido lo suficientemente flexible como para que a lo largo de la vida de la ley de 1992 la aplicabilidad de tal deber no haya impedido que el personal esté empadronado no sólo fuera de la localidad donde está destinado sino en un radio geográfico ciertamente extenso a la vista de la realidad.

- Jornada y vacaciones:

Las propuestas de **ELA Udaltzaingoa** sobre jornada y vacaciones no aportan novedad normativa alguna a la regulación vigente a día de hoy en cuanto a las materias que deben ser objeto de negociación.

- Prevención de riesgos laborales

ERNE proponía incorporar al texto de la ley la redacción del título V sobre prevención de riesgos laborales y salud laboral del acuerdo regulador. De las propuestas reseñadas parece que pudiera ser aceptable la referida a la incorporación de los principios básicos contenidos en el acuerdo regulador de las condiciones laborales de la Ertzaintza al texto de la ley, pero no el propio texto del acuerdo dado que resultaría desproporcionado e inflacionario dado que es un texto más propio de un cuerpo reglamentario que de una ley formal.

Por su parte, **ELA Udaltzaingoa** propone añadir un párrafo 3º al art. 79 que pormenore los riesgos que al menos deben tenerse en cuenta en los planes de prevención de riesgos laborales. La redacción propuesta resulta excesivamente detallista para esta ley cuando la misma acoge la regulación prevista en la legislación de riesgos laborales que ya contempla el contenido de los planes de prevención de riesgos.

El Informe de la **Dirección de Función Pública** yerra al interpretar el art. 79 cuando habla, en relación a la prevención de riesgos, que debe existir un servicio sanitario, “pudiéndose celebrar contratos o convenios de colaboración con profesionales médicos o entidades sanitarias públicas o privadas” para ello. El informe entiende que se habilita al servicio médico para celebrar tales contratos o convenios, lo cual no se deduce del texto en ningún caso, ya que lo que hace es prever que el servicio pueda ser propio o concertado o complementado con terceros.

- Mecanismos de protección social

ERNE propone:

- Suprimir la referencia al dolo del art. 79 bis .2, lo que supondría que la cobertura aseguradora no sería aplicable a situaciones de negligencia pero si a las dolosas, lo cual carece de sentido.
- Proponen que la compensación para fallecimiento en acto de servicio pase de 2 a 3 anualidades si tuviera el fallecido o fallecida hijos menores de 25 años.
- Proponen que en caso de incapacidad derivada de acto de servicio se eleve la pensión al ciento por ciento y no al 80% como en la actualidad .

El sindicato **ELA** propone que en los casos de jubilación forzosa por incapacidad por actos ilícitos de terceros tenga derecho, además de una prestación económica periódica, a una indemnización de dos anualidades de las retribuciones íntegras que percibiera la persona jubilada en el puesto de trabajo que ocupaba, para equipararlo a las indemnizaciones en caso de fallecimiento.

No se aceptan las propuestas. Los funcionarios de la Ertzaintza disponen ya de una cobertura adecuada atendiendo no sólo a la protección de la seguridad social, sino igualmente a las pólizas de aseguramiento suscritas a las que se añade esta regulación que viene a objetivar la regulación precedente para los casos de fallecimiento o jubilación forzosa por de acto de servicio.

ELA- Udaltzaingoa propone que en la disposición adicional décima de la LPPV que habla de que la Ertzaintza se sujeta al régimen general de la seguridad social se mencione no a la Ertzaintza sino a la Policía del País Vasco, para que se incluya también a las policías locales. No es necesaria ninguna precisión, las policías locales siguen en este punto el régimen común a cualquier funcionario de la Administración local y están ya desde hace décadas en el régimen general de la seguridad social.

- Situaciones administrativas

- Suspensión provisional

ELA propone eliminar la devolución de lo percibido en suspensión provisional cuando se eleve a definitiva y **CCOO** eliminar los apartados 5 y 6 del art 84 (supuestos de suspensión firme cuando hubo una suspensión provisional). No se acepta. Para el funcionario es una garantía que el tiempo en suspensión provisional se descuente en el cómputo de la suspensión firme y el resto de lo regulado es una simple consecuencia de lo ant edicho.

- Servicio activo modulado por la edad:

Respecto al servicio activo modulado por la edad **EUDEL** plantea que la ley fije que la edad de pase a tal modulación en las policías locales no se a inferior a los 56 años (previstos en la Ertzaintza). La razón de tal solicitud es que, si bien se valora positivamente el respeto a la

autonomía local, parece conveniente que la ley establezca una edad de referencia o mínima. Tal consideración parece razonable, pero parece preferible que el mínimo sea, como en el proyecto de la anterior legislatura, los 60 años, dado que de otro modo se recorta en exceso la capacidad municipal para implantar modulaciones del servicio acordes a sus posibilidades.

Por otra parte **EUDEL** plantea que también en la policía local se puedan incorporar compromisos de petición de jubilación anticipada por los funcionarios que se adscriba a dicho servicio activo modulado. Lo cual puede acogerse,

UGT propone que la concreta regulación de la modulación prevista para la Ertzaintza se extienda obligatoriamente a las policías locales. Sin embargo, debe considerarse que la virtualidad de este mecanismo y sus condiciones pueden estar condicionadas por el tamaño de la plantilla y las funciones a realizar, por lo que es mejor que se decidan en el ámbito administrativo correspondiente. En este sentido parece razonable la propuesta de **EUDEL** en cuanto a que en el art. 85.4 se diga que en la regulación local se establecerán los efectos económicos y administrativos de dicho reconocimiento.

ERNE solicita eliminar el requisito de la garantía de continuidad en la prestación del servicio policial en la regulación de la modulación por la edad prevista en el art. 85.4. Debe considerarse que tal exigencia sólo se contempla para las policías locales y no para la Ertzaintza. En cuerpos de policía local pequeños el pase al servicio modulado por edad de parte de la plantilla si supone, por ejemplo, la exención del servicio nocturno, implicaría la eliminación del servicio policial permanente.

EUDEL sugiere excluir de la posibilidad del pase al servicio activo modulado al personal de las escalas superior y facultativa de la policía local. Tal propuesta se pretende justificar en la analogía con la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza, que están excluidos. Sin embargo, tal analogía no tiene lógica y si se excluyese del servicio modulado a los titulados superiores en pura lógica habría que hacerlo para el conjunto de las escalas superior y ejecutiva del conjunto de los cuerpos de la policía del País Vasco.

De la relectura del anteproyecto se constata de oficio que no se ha incluido dentro del servicio modulado por la edad a quienes estén en segunda actividad, lo cual es correcto, dado que es una modulación del servicio activo. Sin perjuicio de ello se considera que los funcionarios en segunda actividad deben tener derecho a las mismas modulaciones en función de la edad de quienes se encuentren en servicio activo.

ERNE plantea que en los casos en los que un funcionario en servicio activo modulado por la edad se encuentre transitoriamente sin destino a disposición se le abonen mientras esté en tal estado las percepciones económicas que tenía en el momento del paso a tal situación y no como en la actualidad y en el proyecto que se excluye el pago del componente singular del complemento específico.

Por último y en relación a la modulación del servicio activo por la edad **ERNE** solicita que se incorporen al texto de la ley la redacción prevista en el Decreto 194/2012, de modificación del Acuerdo regulador de la Ertzaintza dedicado a adoptar medidas para hacer efectiva la protección del personal por razones de edad. En nuestra opinión la regulación propuesta no varía las

previsiones del decreto citado, sino que las habilita y no tiene sentido llevar a la ley algo tan reglamentista.

ELA-Udaltzaingoa realiza una propuesta de “segunda actividad” por edad en dos fases: a) desde los 55 a los 60 en servicio en puestos añadidos a los de la plantilla ordinaria no haciendo noches y cobrando lo mismo que con anterioridad al pase a la nueva situación y b) desde los 60 a la jubilación sin trabajar (salvo llamamientos excepcionales) y siguiendo cobrando el 100% a cargo del ayuntamiento, mientras el Gobierno Vasco financiaría el salario de sus sustituto en la policía local. La propuesta no es admisible.

De forma algo contradictoria con lo antedicho ELA **Udaltzaingoa** propone que la edad de pase voluntario al servicio activo modulado en las policías locales no se fije por cada ayuntamiento sino que se fije por ley en 56 años o en la edad inferior que se fije por la negociación colectiva. No se acepta.

- Segunda actividad:

ELA- Ertzaintza habla de negociar un nuevo acuerdo de segunda actividad en la Ertzaintza, sin efectuar una propuesta concreta que pueda ser analizada.

ELA Udaltzaingoa pretende: a) que a segunda actividad sólo pueda pasarse a instancia de parte. No es aceptable por ser incompatible con los deberes del empleador cara, por ejemplo, a la prevención de riesgos laborales; b) que en el tribunal evaluador uno de los 3 miembros actúe a instancia de la parte interesada. No es posible, dado que impediría una composición estable que fijase un criterio común para casos semejantes y además viciaría la imparcialidad del órgano evaluador, y el interesado siempre puede aportar informes médicos de parte o contradecir el criterio del órgano evaluador; c) que en el art. 86.6.2º referente al compromiso de jubilarse a la edad de jubilación anticipada en caso de pase a segunda actividad se incluya a las policías locales en el caso de que se modifique la legislación de seguridad social en el mismo sentido que la regulación actual de la Ertzaintza (supondría introducir una norma condicionada, pero que podría hacerse d) que en el art. 86.5.2º se haga también referencia a los ayuntamientos (que sería correcto); e) que las retribuciones del personal en segunda actividad sean como mínimo las totales que venía percibiendo con anterioridad (lo lógico es que reciba las del puesto desempeñado); f) obligar a cada municipio a en 2 años elaborar un reglamento de segunda actividad (la capacidad reglamentaria en desarrollo de esta ley no puede ser municipal)

EUDEL propone eliminar la disposición adicional 20ª sobre la posibilidad de que en segunda actividad policías locales ocupen puestos no policiales. En su opinión resulta innecesario incluirlo en la ley, ya que la capacidad organizativa municipal permite esta adscripción. Atendiendo a tal criterio, en el segundo borrador se decidió eliminar la disposición adicional 20ª. No obstante, ello ha supuesto el vacío legal alegado por ELA-Udaltzaingoa respecto a la falta de regla aplicable a las policías locales en el art. 86.5.2º, que debe corregirse.

CCOO propone que el funcionario en segunda actividad o servicios activo modulado por la edad (SAM) que permanezca transitoriamente sin destino a disposición siga cobrando las retribuciones del último puesto desempeñado salvo el CES que será el inferior de los previstos para el servicio activo (CES 11). Esta situación en realidad es prácticamente inimaginable dado

que en segunda actividad o en SAM uno permanece en su puesto de trabajo adaptado o con ciertas modificaciones del desempeño. Y no parece lógico en cualquier caso que uno perciba las mismas retribuciones trabajando que sin trabajar.

ERNE sugiere posibilitar el pase a situación de segunda actividad del personal de la escala de facultativos y técnicos. En la actualidad no se contempla tal situación en dicha escala atendiendo a que las funciones de la misma no requieren como en el resto de escalas de la Policía del País Vasco de una previsión específica para el caso del menoscabo funcional.

UGT estima que la regulación es ambiciosa, lo cual parece un elogio, pero ineficaz en las policías locales sin impulsar acuerdos institucionales, sin explicitar en qué habrían de consistir. Lo cierto es que el perfil de la situación administrativa de segunda actividad en las policías locales que se plantea es sustancialmente similar a la ahora vigente.

EUDEL plantea que en la composición del tribunal evaluador del pase a la situación de segunda actividad (art. 86.3) uno de los facultativos sea nombrado a propuesta del interesado o en su defecto de la representación sindical. No parece aceptable tal pretensión por cuanto ello supondría la existencia de tantos tribunales como casos, con un nombramiento ad hoc. Ello que impediría crear una doctrina y el tratamiento igualitario de los casos. La regulación responde a la normativa vigente en la actualidad en este punto.

A propósito de la composición de los tribunales evaluadores del pase a segunda actividad en algunas ocasiones se ha planteado por municipios la posibilidad de que el tribunal evaluador existente en la Ertzaintza pudiera examinar los casos que se plantean en policías locales cuando así se lo encomiende el municipio. Parece razonable contemplar tal posibilidad.

En cuanto a las retribuciones a percibir en caso de situación de segunda actividad los servicios de personal del Departamento han sugerido que se elimine la referencia a la determinación reglamentaria de las retribuciones, dado que si la regla es que en tal situación administrativa se ocupa un puesto de trabajo las retribuciones de referencia siempre serán las del puesto. Parece correcto tal razonamiento.

Siguiendo con las retribuciones en segunda actividad **ERNE** plantea en el art. 86.7 estipular que las retribuciones no serán inferiores a las que les correspondían antes del pase a esta situación administrativa. La respuesta a tal planteamiento es que debe existir una correspondencia entre las retribuciones complementarias y el trabajo desempeñado. La eliminación del párrafo contenido en el art. 86.7 referentes a cierta modulación salarial para el personal en segunda actividad que pudiera dar que pensar en una minoración retributiva respecto al desempeño de un puesto ordinario de trabajo queda eliminada.

UGT plantea en el art. 87 referente a la garantía salarial en el caso de que excepcional y transitoriamente un funcionario en servicio modulado o segunda actividad quedase a disposición hasta que se le proporcione o adapte un puesto que se le abone el 100 % de lo que cobraba como complemento personal transitorio y no sólo en el caso de la Ertzaintza sino también en el de las policías locales. En el anteproyecto se contempla una garantía de las básicas y las complementarias excepto el complemento específico singular, que está vinculado a un puesto concreto. Debe considerarse que se trata de algo más que excepcional, hipotético y que debe existir una correspondencia entre tales complementos singulares y el desempeño efectivo de un

puesto concreto. En lo que atañe a la aplicabilidad del precepto a las policías locales puede resultar razonable. Se modifica en consecuencia.

Las observaciones que realiza la **Dirección de Función Pública** tanto al servicio activo modulado por la edad, como a la situación de segunda actividad, merecen un análisis diferenciado del resto.

Preliminarmente advertir lo erróneo de considerar como parámetro de legalidad de un anteproyecto de ley su adecuación a otras leyes ordinarias vigentes, porque el parámetro de validez de un proyecto de ley sólo puede venir definido por normas de rango superior: constitución o estatuto de autonomía, o por la existencia de normas básicas estatales que resulten de aplicación.

El informe considera que la regulación puede suponer problemas organizativos que impliquen dejar en expectativa de destino a un número elevado de funcionarios con un sobre coste alto sin la contrapartida de la prestación del servicio. Y ello porque, a su juicio, permite la permanencia sin destino a disposición de la Administración de quienes pasen a segunda actividad o servicio activo modulado hasta que no se le asigne destino o se adapte el puesto cobrando la práctica totalidad de las retribuciones que venían percibiendo, a diferencia de otras situaciones análogas como la expectativa de destino o la excedencia forzosa.

Pasamos a analizar tales argumentos, de modo que sirvan para complementar la justificación sobre la viabilidad de la propuesta que requería la Dirección de Función Pública.

En la actualidad ya existe tanto la situación de segunda actividad como el servicio activo modulado por la edad (SAM) en la Ertzaintza y no hay ningún funcionario que se encuentre en expectativa de destino por estas circunstancias.

Con datos de 2014 había aproximadamente 100 ertzainas en situación de segunda actividad, todos ocupando un puesto de trabajo. Debe considerarse que la regulación vigente desde 2012 de la segunda actividad por insuficiencia garantiza la continuidad en la prestación del servicio en el mismo puesto adaptado o en otro.

En la Ertzaintza pueden solicitar el servicio activo modulado por la edad (SAM) a partir de los 56 años y con 60 años cabe la jubilación anticipada. Por lo tanto el periodo en el que normalmente podría tener reconocido el SAM sería de los 56 a los 59 o 60 años.

El reconocimiento del SAM no supone, como regla, la remoción del puesto de trabajo, sino la adaptación de su desempeño, que se exterioriza fundamentalmente en la posibilidad de no trabajar en horario nocturno y a partir de los 59 años, no realizar patrullas en el exterior de las instalaciones policiales. Por lo tanto, es incierta la aseveración del informe de función pública relativa a que la regulación abre paso a la posibilidad de un contingente de funcionarios sin destino ni trabajo cobrando la práctica totalidad de las retribuciones.

Sólo excepcionalmente y respecto a unidades operativas y en investigación criminal se contempla la posibilidad de que si no cabe la adaptación funcional del puesto ocupado, se le readscriba a otro ya de la propia unidad u otro vacante conforme a los criterios preferenciales preestablecidos. Y únicamente se contempla la posibilidad de estar a disposición sin destino

transitoriamente hasta que se adapta el puesto o se le readscribe a otro. Por lo tanto, tal posibilidad transitoria de estar sin destino no se dará en el grueso de la organización, es decir, seguridad ciudadana, y supone un supuesto extraordinario y de corta duración, suponiendo una garantía y no existiendo nunca un derecho o una opción a la expectativa de destino.

Con datos de 2014 había en la Ertzaintza un 10% de la plantilla con 56 o más años, es decir, 756 personas, el 80% de los cuales pertenecía a la escala básica. La edad media de la Ertzaintza se cifraba entonces en 47 años. De todos los que podrían haber solicitado el SAM lo hizo el 85%, es decir 639 de los 756.

De las 639 personas que tenían reconocido el SAM en 2014, 355 trabajaban en horario nocturno y 284 habían solicitado la exención del mismo (es decir el 45%).

Con estos datos cabe realizar una extrapolación a los próximos años atendiendo a la pirámide de edad del personal, los porcentajes de petición de reconocimiento de SAM (85%) y los porcentajes de petición de exención del trabajo nocturno (45% de los que tienen reconocido el SAM).

	Nº personas que potencialmente podrían solicitar el SAM (1)	Previsión de personas que tendrían reconocido el SAM (2)	Previsión de personas con exención de patrullaje externo
2015	1082	414	226
2016	1412	540	339
2017	1711	654	471
2018	1965	752	654
2019	2137	817	804
2020	2215	847	855

- (1) Personal que en un año dado esté en la franja de edad comprendida entre los 56 y 60 años. Calculamos que solicitarán el SAM el 85% de los que tengan derecho.
- (2) Previsión del número de personas que estarían en un año dado con SAM reconocido, extrapolación los porcentajes actuales de las solicitudes de SAM (45% de los que tendrían derecho)
- (3) Previsión de personas con exención de patrullaje fuera de las instalaciones policiales por tener cumplidos los 59 años.

A la vista de lo expuesto no cabe compartir las prevenciones y conclusiones de la Dirección de Función Pública. Muy al contrario de las mismas, el proyecto viene a derogar lo que en la ley hoy vigente resultaba la regla general para los funcionarios en segunda actividad. En el mismo sentido de las modificaciones reglamentarias de 2012 se trata de asegurar que en los casos en los que el menoscabo del funcionario por razón de la edad o de insuficiencia de las condiciones psicofísicas que no determinan su jubilación siga prestando servicios en la organización policial de un modo adecuado a sus condiciones personales y en un puesto de trabajo adecuado.

Es cierto que en los próximos años en la Ertzaintza se producirá un incremento importante de las jubilaciones y otras bajas vegetativas y que se incrementará, como hemos visto, el número de personal que pase o pueda pasar al servicio activo modulado. El pase a la situación de segunda

actividad es menos predecible, pero se mantiene siempre en unas estadísticas similares y no perturbadoras del servicio.

La exigencia de velar por la salud del personal obliga a adecuar y modular el desempeño del trabajo a partir de cierta edad y cuando así se solicite por el interesado. Pero ello no supone, como hemos visto, un cambio en el puesto de trabajo, salvo muy excepcionalmente y para determinadas unidades singulares, que no son el grueso de la organización. Por lo tanto no se aprecian los problemas organizativos y presupuestarios de los que habla el informe, para el caso de que un contingente de la plantilla quedara sin destino cobrando unas retribuciones exorbitantes.

Por otra parte Función Pública informa negativamente el que el personal en segunda actividad pueda quedar a disposición de la administración en vez de a disposición del Departamento de Seguridad y ser llamado a prestar funciones en la Administración general aun cuando tal posibilidad no se contemple mediante la apertura en las relaciones de puestos de trabajo a funcionarios de otros cuerpos o sectores de las administraciones. La referencia a la Administración en vez al Departamento de Seguridad no desdice tal conclusión. No obstante, con el fin de clarificar el precepto se incorporan los siguientes cambios: a) la referencia pasa a ser a cualquier funcionario de la Policía del País Vasco y no sólo a la Ertzaintza y b) el funcionario estaría a disposición del cuerpo policial y no de la administración genéricamente.

Respecto a la situación administrativa de segunda actividad proponen que se concrete que el puesto a desempeñar debe haber calificado en la correspondiente relación de puestos de trabajo como puesto de susceptible desempeño por funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En esta conclusión hay un exceso de prevención que dista de la lógica del precepto y que no tiene en consideración otros preceptos de la LPPV que inciden en tal cuestión y dejan diáfana y clara la imposibilidad de destinar a funcionarios policiales a tareas propias de la administración general salvo en un caso muy concreto. Pero, además, el dictado del precepto del proyecto en nada permite concluir una interpretación como la que preventivamente sugiere el informe.

Por otra parte considera que el servicio activo modulado por edad el informe es una mera modulación de las condiciones laborales propia de la negociación colectiva y no materia propia de regulación en ley formal por lo que informan negativamente la propuesta.

La observación adversa relativa al rango legal de la regulación del servicio activo modulado no expresa un criterio legal o constitucional sino un mero parecer de oportunidad. No hay una reserva de rango al reglamento para ninguna materia y tampoco hay materias vedadas a la ley. El desempeño de un puesto de trabajo es obviamente el presupuesto del servicio activo, y en tal sentido la modulación de la prestación no desnaturaliza el tipo de situación administrativa. Sin embargo, la situación de segunda actividad en la regulación preexistente y más en la propuesta supone igualmente prestación permanente de servicio y no por ello entiende el informante que deba discutirse su carácter de situación administrativa o eliminarse de la ley.

En cualquier caso que la modulación del servicio activo por la edad no sea una situación administrativa diferenciada no implica que sea útil elevar a la ley la regulación de lo que ya está reglamentariamente reconocido, cuando los presupuestos de su reconocimiento tienen consecuencias determinantes en los derechos y obligaciones del funcionario que se acoge a

esta modulación. Igualmente debe tenerse en consideración la reforma que implica la ley en cuanto a los supuestos de la situación administrativa de segunda actividad.

Ello no obstante, si cabe considerar si es preciso elevar a una norma con rango de ley además de los principios y reglas básicas de la figura, otra pormenorización de determinados aspectos que pudieran tener mejor acomodo en una norma reglamentaria, que además está vigente ya para la Ertzaintza. Y máxime cuando la regulación resultante no resulta común al conjunto de la Policía del País Vasco, ya que es extensiva respecto a la Ertzaintza mientras difiere a los desarrollos de cada Administración en el caso de las policías locales.

- Régimen disciplinario

- Faltas.

En referencia al art. 92.2.b) **ERNE** pretende exigir que el trato inhumano sea especialmente grave para que sea considerada falta muy grave. No se acepta, dado que el trato inhumano implica una gravedad muy relevante, todo trato inhumano es grave.

En referencia a la falta contenida en el art. 92.2.g) **ERNE** plantea añadir al notorio incumplimiento el que sea “reiterado o continuado”, lo cual no es preciso dado que el calificativo de notorio denota la gravedad, que además sea reiterado. **UGT** plantea sustituir la expresión “manifiesta” por “acreditada” falta de rendimiento, lo cual tampoco es aceptable, ya que por un lado los hechos siempre deben acreditarse o probarse y por otro lado la expresión “manifiesta” va más lejos, dado que requiere que sea palpable y reconocible la falta de rendimiento. **ELA** plantea que la falta de rendimiento o el notorio incumplimiento de los deberes sólo sea castigable si previamente ha habido un expediente informativo por tales conductas. No se comprende que clase de expediente sería ese si no es de carácter disciplinario, ni cómo podría concluir, si no es con una resolución sancionadora aunque fuera de apercibimiento.

En cuanto al art. 92.2.l) **ERNE** plantea no agravar una conducta de grave a muy grave por la reincidencia dado que la responsabilidad debe individualizarse en cada falta. En respuesta a este planteamiento debe decirse que es común a todo régimen sancionador que la reincidencia cualifique o agrave la falta.

Emakunde sugiere incorporar a la falta muy grave del art. 92.1bis la expresión acoso sexista o por razón de sexo en el trabajo atendiendo a lo dispuesto en el art. 43.2 de la ley de igualdad que impone tal criterio. Se acepta en tales términos.

- Sanciones:

ERNE quiere agravar las sanciones por faltas leves que ahora son castigadas con suspensión de 1 a 4 días. Según su propuesta serían sancionables con suspensión de hasta 14 días. Del mismo modo pretende agravar el castigo por faltas graves al pretender que la sanción mínima sea de 15 días. Por otra parte solicita que se elimine la referencia a “pérdida de remuneración” en el caso de la suspensión de funciones.

La agravación de las sanciones leves ya se planteó la pasada legislatura sin acuerdo sindical por lo que se desechó. Entonces se trataba de incrementar las sanciones leves en detrimento de las sanciones graves que acostumbraban a ser estadísticamente más relevantes. Sancionar con suspensión de funciones leve suponía sobre todo una menor repercusión en la carrera administrativa, dado que el tiempo de suspensión no se detrae de la antigüedad como mérito. Por otra parte las pólizas de seguros frente a sanciones disciplinarias suelen cubrir las impuestas por faltas leves y no las impuestas por faltas graves.

Sin embargo, la mera ampliación de la penalidad de las sanciones leves no tiene efectos sobre la clasificación de las faltas existente, de forma que las conductas ahora sancionadas como leves y graves verían incrementada su penalidad.

Otra cosa es que se reconvirtiesen en leves ciertas faltas actualmente graves o que se modulen las consecuencias disciplinarias en las sanciones graves de suspensión de funciones. Por ejemplo, que la suspensión de funciones como sanción grave cuando sea por tiempo no superior a 15 días no conlleve pérdida de antigüedad.

Por lo demás la sugerencia de **ERNE** relativa a eliminar la referencia a “pérdida de remuneración” en el caso de la suspensión de funciones es acertada. La suspensión de funciones es una situación administrativa a la que se pasa en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria, además de como medida cautelar en los expedientes disciplinarios o en los casos de prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo (suspensión provisional). En tal situación administrativa no ha lugar a percibo de haberes, salvo en el caso de suspensión provisional (básicas y ayuda por hijo). Por lo tanto la pérdida de retribuciones no es consecuencia de la sanción sino de la situación administrativa.

Por otra parte **ERNE** realiza una interpretación más que aportación de la regulación propuesta para la sanción de traslado forzoso que debe ser considerada correcta. Entienden que la resolución sancionadora debe especificar si supone o no pérdida de destino. Si no supone pérdida de destino y consta en la sanción una vez cumplida vuelve a su destino y no debe penalizarse su reincorporación.

- Graduación

ERNE advierte que los apartados e) y h) del art. 94 son casi idénticos. Es cierto y en consecuencia se suprime el apartado h).

ERNE considera que en vez de considerar la entidad de la condena penal a la hora de sancionar como criterio de ponderación, sería mejor modificar la falta muy grave de delito doloso, de forma que sólo se sancionase por tal causa en vía disciplinaria los casos de condena por

delito doloso que lleve aparejada pena privativa de libertad si el delito está relacionado con el servicio o causa graves daños a la Administración o a las personas. No se acepta, la prisión de un agente de la ley por infringirla afecta en todo caso al servicio, dado que se espera que quien debe perseguir el delito no lo ha de cometer.

Deben eliminarse las referencias a faltas penales, dado que la última reforma penal ha eliminado tal figura.

Es aceptable incluir expresamente la referencia a representante sindical en la posibilidad que se ofrece al funcionario expedientado de ser asistido por persona de su confianza prevista en el art. 95.2.bis.

- Procedimiento.

El informe de la DACIMA plantea respecto al art. 95.2.ter que debe contemplarse lo dispuesto en la nueva ley de procedimiento administrativo común respecto al empleo obligatorio de medios electrónicos. Se tiene en consideración y se modifica el texto en consecuencia.

- Caducidad:

ELA Udaltzaingoa pretende que el plazo de caducidad previsto en el art. 95.5 sea de 3 meses como en la actualidad, en vez de 6 meses como en la propuesta. No es cierto que en la actualidad el plazo de caducidad sea de 3 meses. Y si se contrasta con otros regímenes disciplinarios se advierte que en los funcionarios civiles estatales el plazo es de 12 meses, en el proyecto de ley de empleo público vasco de 6 meses y lo mismo en el régimen disciplinario de la Policía Nacional española. Dados los trámites y garantías procedimentales exigibles en un procedimiento disciplinario resulta imposible instruir un expediente disciplinario con garantías en un plazo de 3 meses, por lo que no se acepta.

- Plazos de prescripción:

ERNE propone bajar los plazos de prescripción de 3 años (muy graves) 2 años (graves) y 3 meses (leves) a 1 año por graves y 1 mes por leves. Y en igual sentido los plazos de prescripción de las sanciones. **UGT** plantea un plazo de prescripción para faltas y sanciones leves de un mes. **CCOO** propone bajar el plazo de prescripción de las faltas leves a un mes en vez de 3 meses. **ELA** que los plazos de prescripción de las faltas y sanciones graves bajen a 18 meses y los de las leves a 1 mes.

En el proyecto de ley vasca de empleo público los plazos de prescripción son los siguientes: faltas muy graves (3 años), graves (2 años) y leves (6 meses). Sanciones muy graves (3 años); graves (2 años) y leves (1 año). Tiene sentido que los plazos de prescripción sean más o menos comunes en los diferentes colectivos de empleados públicos de las administraciones vascas por seguridad jurídica. Así todo en el borrador los plazos de prescripción de faltas y sanciones leves son menores que en el régimen general.

- Ejecutividad y ejecución:

ERNE sugiere que en el precepto que regula la posible suspensión cautelar de la ejecutividad de la sanción (art. 97 BIS) se añada que tal suspensión cautelar sólo proceda si el interesado la solicita expresamente. En respuesta a la sugerencia se modifica el segundo párrafo del art. 97 bis: *“La persona interesada podrá solicitar la suspensión cautelar de la ejecutividad de la sanción disciplinaria firme en vía administrativa manifestando a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la misma.”*

ERNE sugiere que se añada al art. 97 ter referente al principio de ejecución en la forma que menos perjudique al sancionado, la posibilidad de un acuerdo con la jefatura de la unidad. Tal sugerencia no es aceptable en estos términos dado que la forma de ejecución no necesariamente depende de la decisión de la jefatura de la unidad.

Como sugerencia surgida de la revisión interna del anteproyecto se aprecia que en el art. 97.ter. 2, referente al modo de hacer efectivo el cumplimiento de la sanción en los casos en los que el funcionario pasa a otras situaciones, debe incluirse el supuesto de imposibilidad de cumplimiento por haber perdido la condición funcional por jubilación forzosa.

ERNE plantea que en el art. 97 TER 3 referente al cumplimiento múltiple de sanciones de suspensión de funciones el límite del conjunto de sanciones sea 5 años en vez de seis. Esto supondría que si me sancionan con dos suspensiones de cuatro años cada una cumpliría sólo 5 años en vez de 8 años. Lo cual no parece proporcionado. Parece razonable como está.

Respecto al art. 97 ter 4 relativo al fraccionamiento de la detracción de las retribuciones surge el interrogante sobre el modo de aplicar tal procedimiento cuando se trata de una suspensión de funciones firme en la que no se percibe ningún emolumento. Existen previsiones semejantes en el régimen disciplinario de la policía nacional española y de la guardia civil, si bien tal fraccionamiento sólo es posible en caso de suspensiones por falta grave (debe considerarse que la suspensión por falta grave es de un máximo de 3 meses) y en el de la guardia civil no cabe el fraccionamiento sino cuando se sanciona con pérdida de haberes que es una sanción económica distinta de la suspensión de empleo.

En nuestro caso la pérdida de haberes no es una sanción económica sino la consecuencia de una situación administrativa. Además sería inviable en la práctica fraccionar la detracción de haberes cuando la sanción rebasa con mucho el periodo de una nómina.

Respecto al art. 97 ter 5 **EUDEL** propone que se incorpore que tal medida alternativa del cumplimiento de la sanción no sea sin más un derecho del sancionado, sino que requiera la previa aceptación por la administración, porque si no la sanción perdería su función ejemplarizante. Se acepta.

Del repaso interno del texto se propone sustituir “hasta 15 días” por “igual o inferior a 15 días”.

ERNE propone en este art. 97 que el trabajo extra se realiza en situación de alta y cotizando en la seguridad social. No parece preciso explicitarlo dado que el trabajador está en servicio activo y no en suspensión de funciones.

- Representación y participación del personal funcionario y Consejo de la Ertzaintza

ERNE propone modificar el art. 99.5 para imponer una circunscripción electoral única para toda la Ertzaintza en las elecciones a representantes de l personal de este cuerpo policial cuando en la actualidad existen tres circunscripciones electoral es. No se trata de una propuesta que aparezca en el borrador, que no modifica nada sustancial de este capítulo y tampoco se conoce que ningún otro sindicato reivindique un cambio en este sentido. Para abordar esta cuestión se requeriría un cierto consenso entre los actores sindicales.

ERNE reivindica que la totalidad de los asuntos objeto de negociación sean de la competencia exclusiva de la mesa de negociación de la Ertzaintza de un modo ajeno a la mesa general de la administración. Tal pretensión no resulta aceptable, dado que existen elementos objeto de la negociación que afectan al conjunto del personal al servicio de la administración vasca y los organismos del sector público, sin que quepa disgregar totalmente los ámbitos de la negociación por razones de mera coherencia en la política gubernamental.

CCOO propone que la elección de los representantes de los trabajadores se realice en listas abiertas; que la disponibilidad sobre el crédito horario corresponda exclusiva e individualmente a cada representante de los trabajadores y no a las organizaciones sindicales y que se obligue a grabar en audio y video las reuniones de la mesa de negociación, estando disponibles para su visionado por los funcionarios a través de la intranet departamental. Se trata de proposiciones que no han tenido eco en ninguna otra organización sindical, siendo así que su abordaje requeriría un cierto consenso entre los actores sindicales.

ELA Ertzaintza propone diferir al legislador vasco la modificación de los acuerdos sobre condiciones laborales. Se trata de una propuesta llamativa puesto que supone el reconocimiento sindical de la capacidad de la ley para alterar el resultado de la negociación colectiva vigente al margen (o con omisión) de la misma. Pero además plantea problemas desde diferentes perspectivas: a) no se trata de una cuestión que pueda abordarse desde una ley sectorial para un colectivo funcional específico, sino que sería una regla para el conjunto de la función pública y por consiguiente no cabe abordarla en esta ley; b) supone un desapoderamiento de las funciones propias del ejecutivo y una atribución impropia al poder legislativo que tiene unas consecuencias que no han sido tenidas en cuenta, probablemente, por el proponente y que se exponen a continuación; c) La aprobación por el legislativo de una norma sólo puede realizarse mediante el procedimiento legislativo, de forma expresa en este caso puesto que la modificación del reglamento sólo cabría realizarse por medio de una ley y ésta supondría la congelación material del rango de la norma resultante. Por lo tanto una vez que se produjera tal intervención parlamentaria unilateral y sin margen para la negociación colectiva ello limitaría a futuro la capacidad para llegar a cualquier acuerdo entre los sindicatos y la administración dado que requeriría el consenso parlamentario y su aprobación por los cauces legislativos oportunos.

Respecto a la regulación del **Consejo de la Ertzaintza**, se realizan las siguientes propuestas:

CCOO propone que se constituya en una mesa de negociación específica sobre las cuestiones de la seguridad en las actuaciones policiales, y que los representantes sindicales en dicho Consejo tengan la capacidad para querellarse contra ciudadanos denunciantes de ertzainas cuando éstos hayan sido absueltos. No se acepta la pretensión de reconvertir este órgano de

naturaleza consultiva en otra mesa de negociación sectorial distinta de la prevista en el art. 103 LPPV. Por otra parte cualquier organización sindical puede intentar ejercer acciones penales sin necesidad que se transfiera tal responsabilidad a un órgano administrativo en el que participan. Además de las limitaciones que legalmente tiene la Administración para personarse como acusación penal como tal (de lo cual esta Administración tiene experiencia).

ELA Ertzaintza propone que el Consejo de la Ertzaintza informe todos los expedientes disciplinarios contra cualquier funcionario (salvo en caso de falta leve) con comparecencia personal del expedientado ante el Consejo. A la vista de la propuesta no se entiende que añadan como función conocer el resto de expedientes incoados y su resolución (dado que sólo quedarían al margen las faltas leves). En la actualidad y en el borrador el informe del Consejo de la Ertzaintza se recaba en los casos más graves y cuando el expedientado es representante sindical. Recabar el informe del Consejo de la Ertzaintza en todos los expedientes disciplinario supondría recargar su funcionamiento sin que ello supusiese mayores garantías procedimentales y por el contrario si mayor retraso en la tramitación y resolución de los mismos, con riesgo de que caducasen (más que riesgos sería certeza si se aceptarían propuestas como rebajar el tiempo del expediente a 3 meses). Dado que ELA reivindica la aproximación al régimen disciplinario común al resto de funcionarios no se explica la propuesta: el procedimiento disciplinario, que es un procedimiento escrito y no verbal garantiza los principios de contradicción, audiencia y defensa de los expedientados. Y la naturaleza del Consejo de la Ertzaintza es consultiva y no instructora (si tuviese una capacidad instructora su intervención en el procedimiento sancionador se aproximaría a los tribunales de honor que el art. 26 de la Constitución proscribió en el ámbito de la administración y las organizaciones profesionales.

Semejantes consideraciones cabe realizarlas respecto a la propuesta de ELA en relación con la concesión de honores.

- Estructura profesional:

El sindicato **ELA Ertzaintza** pretende que se diga en el art. 105.2.c) __que en las prácticas posteriores al periodo de formación los aspirantes serán retribuidos conforme al grupo de clasificación C1. Es obvio que tras la aprobación de la ley será así, puesto que no podría ser de otro forma: no se les podría retribuir conforme a ningún otro grupo de clasificación ya que para participar en el proceso se les exige titulación C1.

Respecto a la estructura profesional **ELA -Udaltzaingoa** pretende que se exija titulación universitaria a todos los policías locales que no sean agentes o agentes primeros. Se desconoce si el sindicato **ELA** asume tal criterio igualmente para la Ertzaintza o, por el contrario, pretenden que exista una disparidad de estructuras tan acusada entre los cuerpos policiales vascos.

El sindicato **ELA Ertzaintza** pretende que en el art. 112, donde se habla de la posibilidad de adscribir funcionarios de policía judicial a determinados juzgados con carácter permanente, se emplee un verbo imperativo. El empleo del imperativo en este caso es improcedente, ya que en el precepto no se determinan (sería imposible) los juzgados a los que se adscribirían. Esta figura de la adscripción especial a un juzgado singular y concreto se contempla en el reglamento de policía judicial de 1987 vigente como una especialidad respecto a la dependencia funcional de las unidades de policía judicial respecto de los órganos del poder judicial, y se da cuando algún

juzgado concreto o una fiscalía especial precisan con carácter estable de la adscripción de funcionarios. El precepto del reglamento de policía judicial que se trae a colación en este artículo supone una habilitación, pero no puede ser un mandato concreto si de antemano no se puede definir los órganos judiciales determinados a los que se adscribirían. Por ello no procede aquí el empleo de la forma verbal imperativa.

- Policías locales

- Denominación:

Aunque no es objeto del anteproyecto, **ELA- Udaltzaingoa** propone incorporar como denominación única de los cuerpos de policía local la de “Udaltzaingoa/policía local”, modificando para ello el art 2 y art. 24.3. Es razonable la pretensión de unificar la denominación; no obstante, también debe tenerse en cuenta que tal debate se mantuvo con ocasión de la elaboración de las normas marco de las policías locales y prosperó la idea de que era conveniente preservar las denominaciones tradicionales en cada uno de los municipios ya que contaban con gran raigambre (por ejemplo, guardia urbana, policía municipal, etc. No se acepta.

- Concepto de instituto armado:

Aunque no es objeto del anteproyecto, **ELA- Udaltzaingoa** propone añadir un párrafo al art 25 para aclarar el concepto de “instituto armado” y la obligación o no de portar arma de fuego. Sin embargo, el texto propuesto se limite a expresar que reglamentariamente se establecerá la dotación policial que incluya el arma de fuego, el bastón y demás equipamientos, así como la formación teórico-práctica para su uso, con el fin de homogeneizar medios. La naturaleza de institutos armados deviene de la LOFCS y ya aparece en la LPPV vigente, por lo que no cabría matización en tal sentido. La capacidad para homogeneizar medios y dotaciones por reglamento ya se contiene en la LOSSPE por lo que nada aporta en este sentido. Se puede entender la propuesta como una propuesta para modificar las normas marco o para desarrollarlas incorporando bases que permitan la homogeneización de las dotaciones.

- Funciones:

Aunque no es objeto del anteproyecto, **ELA- Udaltzaingoa** propone modificar el art. 26.3 para incorporar una redacción que diga que las policías locales ejercen en el término municipal las funciones que a los cuerpos y fuerzas de seguridad atribuye el ordenamiento jurídico, y las que específicamente se les asigna en esta Ley. Esta propuesta choca frontalmente con la regulación estatal dado que supone atribuir a las policías locales una competencia general en materia policial, dado que no sólo tendrían las propias de las policías locales sino todas las de la Ertzaintza o incluso las de las FCSE. Lo cual choca frontalmente con la LOFCS y además supondría un caos competencial y operativo con la Ertzaintza al existir una duplicidad total de funciones y servicios.

- Actuación extraterritorial:

AJEPLE propone que se incluya la posibilidad de actuación extraterritorial en caso de acuerdos de colaboración o asociaciones para prestar servicios policiales. Tal tipo de actuación está ya prevista en la Ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi.

- Ingreso y selección:

EUDEL propone que se diga que las reglas básicas sobre el ingreso en policías locales a las que se refiere el art. 50.1 tengan carácter de mínimos. No se acepta, ya que sería redundante: las reglas son “básicas” precisamente porque son “de mínimos”.

- Estructura profesional, escalas y categorías

EUDEL considera que exigir el grupo C1 para el ingreso clarifica el modelo de clasificación descafeinada actual. No obstante estima conveniente un régimen transitorio de quienes ocupan plaza agente C2 (ahora asimilados a C1 pero muchos sin titulación), considerando que si las plazas pasan a ser C1 la reclasificación carece de efectos económicos suplementarios pues ya se les reconocieron. Por otra parte debe considerarse que los interinos actuales no están ni clasificados en C2. En respuesta a dichas observaciones se introducen unas disposiciones transitorias.

AJEPLE por su parte reivindica que las escalas superior y ejecutiva se reclasifiquen como A1 (en el anteproyecto son A2); la escala de inspección en A2 (en el anteproyecto C1); y que la categoría de intendente sea obligatoria en municipios con más de 150.000 o más de 200 efectivos (en el anteproyecto “y”). Parcialmente en igual sentido **ELA Udaltzaingoa** propone que la escala de inspección pertenezca al subgrupo A2.

Contrasta este criterio con la posición de **EUDEL** cuando plantea que la nueva estructura implica una excesiva jerarquización. Aceptar la propuesta de **AJEPLE** contribuiría sin duda a exacerbar tal cuestión y las subsiguientes planteadas por **EUDEL** relativas al coste financiero de tal propuesta.

Entre otras cosas supondría que salvo la escala básica el resto de plazas y no solo en policías locales estaría reservada a funcionarios universitarios (es decir de 8 categorías 6 se reservarían a grados universitarios), salto notabilísimo cuando hasta la fecha la única titulación exigible para el ingreso en un cuerpo policial y para hacer carrera en el mismo (aún con limitaciones) era el graduado escolar.

Además en la propuesta de **ELA- Udaltzaingoa** se propone que quienes ocupen puestos de suboficial y oficial sean integrados automáticamente a la entrada en vigor de la ley en el subgrupo A2 aunque no dispongan de la titulación universitaria requerida. Y que los agentes primeros con 4 años de antigüedad puedan promocionar a la escala de inspección sin titulación. Tal propuesta no es conforme a las reglas básicas comunes a la función pública dado que desvincula absolutamente el grupo de clasificación y la categoría o escala de la titulación.

Desechadas las propuestas de **AJEPLE** y **ELA- Udaltzaingoa** en tal sentido, si cabe aceptar la propuesta de que la categoría de intendente sea obligatoria en municipios con más de 150.000 o más de 200 efectivos (en el anteproyecto “y”).



En cuanto a la estructura profesional el informe de la Dirección de Función Pública analiza el supuesto de una variación de los parámetros poblacionales que obligue a modificación la estructura. Según su criterio, aunque aquí no apunta observación alguna, si acomodarse a los cambios implica una disminución de la categoría de jefatura si tienen titular continuarán en el desempeño de los mismos con la condición de “a extinguir”. Si como consecuencia de la variación de los baremos aplicados para la clasificación de las escalas, produjeran una modificación al alza, el personal funcionario continuará en el desempeño de los mismos rigiéndose por las condiciones por las que fueron nombrados y percibiendo las retribuciones efectivamente asignadas al puesto de trabajo ocupado.

ELA Udaltzaingoa en referencia a la estructura profesional que, en vez de establecerse por ley un mandato al desarrollo reglamentario para fijar los criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías en los cuerpos de la policía local (como en el anteproyecto), sea la propia ley la que los fije y propone unos ratios sobre los que no aporta ningún elemento objetivo o estudio que respalde la proporcionalidad de su propuesta. Se trata de un asunto complejo que requiere realizar estudios serios y sobre el que no cabe fiar a la improvisación, dado que tiene consecuencias sobre las plantillas, dado que atendiendo al ratio de 2 funcionarios locales por cada 1.000 habitantes y la proporcionalidad entre categorías propuesta un número importante de municipios debería incrementar notablemente sus efectivos y quizás algunos pocos bajarlos. Sería preciso, además de efectuar estudios concluyentes, que la norma tuviese en cuenta otros factores además del poblacional o la proporcionalidad aritmética entre categorías, y tuviese en cuenta de modo flexible las necesidades reales de cada municipio, dando el margen debido a la autonomía organizativa local. Si tal cuestión quedara fijada por ley formal, además de cercenar en exceso la autonomía local, supondría una excesiva esclerotización de las estructuras sin atender a otros factores que pueden ser determinantes de la plantilla local (población estacional, factores de riesgo socioeconómico singulares, etc.) y la rigidez propia de una ley dificultaría su adaptabilidad a cambios sociales sobrevenidos. Por ello parece más propia habilitar al Ejecutivo para determinar los parámetros homogéneos de las plantillas locales. Por lo tanto no se puede aceptar la propuesta.

Además tal propuesta agravaría la sensación de **EUDEL** de que la nueva estructura no sólo obliga a crear nuevos puestos de jefatura con categorías superiores a las actualmente existentes, sino que obliga a crear todas las categorías intermedias, lo cual puede dar lugar a incrementos de plantilla y elevación de costes que afecte a objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todos o algunos ayuntamientos vascos. En tal sentido consideran que, conforme a la LRBRL, el legislador debería calcular dicho impacto financiero y dotar de recursos a los municipios para asegurar su suficiencia financiera.

Respecto a esta advertencia de **EUDEL** debe considerarse que en la memoria económica del procedimiento se realiza un estudio sobre el impacto que pudiera tener en las administraciones locales la nueva regulación en estos aspectos, que a continuación se resume.

Sin embargo, no se comparte la apreciación de que la reforma legal en este punto implique la obligación del legislador autonómico de dotar de recursos a los municipios para asegurar su suficiencia financiera a la hora de cumplir con la ley. Tal previsión de la LRBRL se refiere a los supuestos en que el legislador estatal o autonómico atribuye a los municipios nuevas competencias, lo que no es el caso que nos ocupa, y a que la competencia en materia de policía

local es una competencia propia local y ni siquiera se alteran las funciones definitorias de la policía local.

Debe además considerarse que el vigente Decreto 58/2015, de 5 de mayo, por el que se establecen las normas marco aplicables a la organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de Euskadi, ya establece unos criterios de estructuración de las escalas y categorías en tales cuerpos que, en tanto suponían la asignación de los puestos de jefatura a determinadas categorías en función de la población municipal, obligaban a una adecuación. La reforma legal, ciertamente, altera parcialmente, el resultado del Decreto de las normas marco, pero atendiendo al impacto que ya ha supuesto el citado Decreto, el que origina la reforma legal es menor.

Si tenemos en cuenta la adaptación derivada del Decreto 58/2015 y la que pudiera dar lugar la reforma de la ley propuesta, los municipios estarían obligados a crear en el plazo de adaptación de la ley y respecto a la situación anterior al Decreto 58/2015, las siguientes categorías:

- Intendente: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián
- Comisario: Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun
- Subcomisario: Getxo; Irun; Santurtzi, Errenteria, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Galdakao
- Oficial: Santurtzi, Eibar, Galdakao, Hernani, Tolosa, Arrasate- Mondragon, Sopela, Mungia, Lasarte-Oria, Llodio, Amorebieta, Gernika-Lumo, Ermua, Andoain,
- Suboficial: Andoain, Arrigorriaga, Etxebarri, Oiartzun; Gortz: Ordizia: Zumaia: Ondarroa: Lekeitio: Muskiz: Urretxu: Balmaseda: Güeñes: Ortuella: Elorrio: Abadiño: Astigarraga: Orio: Villabona: Zalla: Plentzia, Urnieta, Derio; Lezo; Ugao-Miraballes; Usurbil; Mutriku;

No obstante, si atendemos exclusivamente al impacto de la propuesta de ley obtenemos el siguiente cuadro:

a) Intendente: es actualmente de creación voluntaria y sólo factible en municipios de más de 300.000 habitantes y siempre que la plantilla sea de 400 o más efectivos. La propuesta es que tal categoría sea de creación obligada en cualquier municipio con población superior a 150.000 habitantes o que disponga de 200 efectivos de plantilla. Sólo entran dentro de las condiciones exigibles las tres capitales, ninguna de las cuales dispone en la actualidad de intendentes, por lo tanto deberían adecuarse a la nueva estructura. No obstante, sí disponen del resto de categorías, por lo que no tendrían que crear otras plazas intermedias.

b) Comisario: actualmente es exigible en los municipios con más de 150.000 habitantes que dispongan de 100 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible en municipios con más de 50.000 habitantes o más de 100 efectivos de plantilla. Lo cual incluye a Barakaldo, Getxo e Irun en los que concurren tanto el requisito de población como el de la plantilla. Ninguno de ellos dispone en la actualidad de tal categoría. En el caso de Irun también deberían de crear la categoría de subcomisario, dado que no existe en la actualidad.

c) Subcomisario: es actualmente exigible en los municipios con más de 100.000 habitantes y 40 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible

en municipios con más de 25.000 habitantes o más de 40 efectivos de plantilla. Ello afectaría a municipios como Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio o Galdakao. Algunos de ellos no disponen en la actualidad tampoco de la categoría de oficial.

d) Oficial: es actualmente exigible en los municipios con más de 15.000 habitantes y 20 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible en municipios con más de 15.000 habitantes o más de 20 efectivos de plantilla. Ello afectaría a los mismos municipios que el decreto vigente. No obstante sería una obligación nueva para Andoain, ya que si bien no estaría obligado por la población si lo estará por el número de la plantilla de la policía local.

e) Suboficial: en la actualidad es exigible en los municipios con menos de 15.000 habitantes y 5 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible en municipios con menos de 15.000 habitantes y 5 o más efectivos de plantilla. Ello afectaría a los mismos municipios que el decreto vigente con lo cual la aprobación de la ley no tendría impacto novedoso respecto a dichos municipios.

En definitiva la novedad del impacto de la propuesta legal se limitaría a la creación de la categoría de intendente en las capitales, la de comisario en los municipios de Barakaldo, Getxo e Irún y la de subcomisario en los municipios de Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio o Galdakao, además de Irún.

El informe de la **Dirección de Función Pública** estima en relación a la disposición transitoria quinta (integración automática del personal funcionario de los cuerpos de policía local en la categoría superior) que si existiere personal con la categoría de intendente en tales cuerpos sería coherente incluir un apartado que regulara las retribuciones del personal. No obstante, no existe tal personal en la actualidad por lo que parece innecesaria la precisión.

- Jefatura de la policía local

EUDEL plantean con respecto al art. 119 que debería tenerse en cuenta que no todos los cuerpos locales cuentan ni deberían contar con una jefatura profesional unipersonal, y ponen el ejemplo de Bilbao. Se tiene en consideración tal propuesta.

AJEPL plantea en el art 119 que se explicita el procedimiento de provisión de los puestos de jefatura por libre designación entre los funcionarios del propio cuerpo encuadrados en la máxima categoría del cuerpo y que sólo, en su defecto, se cubriría por miembros de otros cuerpos de la policía del País Vasco. No se considera preciso regular esta cuestión, ya que cada administración debe contemplar si abre sus puestos a la posible cobertura entre funcionarios de otras administraciones.

EUDEL se refiere a la disposición transitoria 5ª relativa a la integración de cierto personal de los cuerpos de policía local en la escala superior. Se trata de las personas que habiéndoseles exigido para el ingreso titulación universitaria superior con anterioridad a 1992 la entrada en vigor ese año de la LPPV les reintegró en una escala inferior a la de origen. Afecta a menos de una

decena de funcionarios del ayuntamiento de Bilbao. El anteproyecto opta por reintegrarlos a la escala superior, sin que ello suponga incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias. EUDEL estima que deberían establecerse criterios de transformación automática, lo cual ciertamente parece ya desprenderse de la redacción del anteproyecto, y proponen una redacción alternativa que se puede aceptar.

AJEPLE plantea reducir el plazo de adaptación de las jefaturas de 3 a 2 años y reducir la exigencia de tener destino definitivo durante un plazo determinado de 5 a 4 años. No se acepta, ya que se consideran plazos razonables.

AJEPLE reclama que la integración suponga incremento de las retribuciones básicas sin absorción en las complementarias. No se acepta, dado que es la regla que ha resultado común a todos los casos de reclasificación funcional sem ejantes.

Conforme al informe de la **Dirección de Función Pública** la integración del personal a los nuevos puestos de jefatura de los cuerpos de policía Local, dice el informe, debe adaptarse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al parecer emitido por la COJUE en sus dictámenes, resultando por tanto necesario el cumplimiento del requisito de la titulación suficiente. El informe interpreta equivocadamente la disposición Transitoria sexta, párrafo 2 del apartado 2, como si cada uno de los requisitos que acumulativamente deben cumplirse para la integración fuesen independientes y en consecuencia la antigüedad eximiese de la titulación. Pero ello radicalmente no es así ni en la interpretación más literal del precepto, como demuestra que se trate de una enumeración que se cierra con una conjunción copulativa y no adversativa.

- Escala de facultativos y técnicos

EUDEL propone crear escalas de facultativos y técnicos en la policía local. Tal propuesta no se compadece con las estructuras, dimensión y plantillas de los cuerpos locales y parece fruto de una cierta improvisación dado que hasta el momento ninguna institución municipal ha manifestado su criterio favorable en este sentido.

- Policía judicial:

EUDEL y el grupo de norma marco plantea incorporar un artículo que hable de la formación en materia de policía judicial a la policía local en la AVPE. No es aceptable, dado que la ubicación en el texto se refiere a la estructura de la Ertzaintza.

No obstante **AJEPLE** si contempla de un modo más adecuado el que la ley exprese la posibilidad de que la AVPE organice actividades formativas específicas en investigación criminal y policía judicial para al menos aquellas policías locales que hayan suscritos los convenios de colaboración en tal sentido previstos en los arts 44.3 y 4 de la LOSSPE. Se acepta pero debe tener una ubicación adecuada.

- Funcionarios interinos:

ERNE plantea la prohibición del nombramiento de funcionarios interinos en la policía local (incorporar en el art. 25 la condición de funcionarios de carrera, eliminar referencias en exposición de motivos y en el art. 120.1 y 3 a los funcionarios interinos).

Conforme a los datos del Registro de Policías Locales de un total de 81 cuerpos de policía local, 68 municipios tienen nombramientos de funcionarios interinos, es decir sólo en 13 municipios no hay o no ha habido interinos (de estos Zestoa y Eskoriatza tienen sólo 2 agentes en plantilla y Aulesti 1). En la actualidad un 11,4% del total de efectivos de la policía local en Euskadi son funcionarios interinos, sumando 379 funcionarios y funcionarias interinos de la policía local.

Existe alguna sentencia que ha puesto en cuestión la propia figura de los funcionarios interinos en la policía local, pero con argumentos que afectarían igualmente a la mayor parte de los funcionarios interinos al servicio de las administraciones públicas en funciones que pudieran estar reservadas a funcionarios de carrera. Tal pronunciamiento singular dista mucho de haberse consolidado como doctrina y el órgano judicial autor de dicha sentencia, el TSJ del País Vasco, ha matizado en algún otro pronunciamiento su parecer aún sin haber entrado de nuevo en el fondo de la cuestión (caso de la bolsa de trabajo para interinos de la policía local y requisito de la edad).

Lo cierto es que si aceptamos la imposibilidad legal de ejercer funciones de policía local con nombramiento de funcionario interino había que automáticamente cesar a las personas que ocupan ilícitamente tales funciones, es decir, a 379 personas, sin ni siquiera esperar a la posible cobertura de las plazas vacantes por funcionarios de carrera. Resultaría paradójico que tal fuera el propósito del sindicato alegante.

Por su parte **ELA Udaltzaingoa** no pretende eliminar que existan funcionarios interinos locales, pero si pretende limitar tal posibilidad a los casos de cobertura de necesidades temporales o estacionales extraordinarias y en ningún caso para cubrir un puesto vacante. No obstante debe considerarse que el anteproyecto no está regulando los supuestos en los que cabría el nombramiento de un funcionario interino sino que se remite a lo dispuesto en la normativa de función pública aplicable, precisando únicamente que en caso de que proceda tal nombramiento debe exigirse una formación mínima al nombrado. En cualquier caso, cabe dar al art. 120.1 una redacción más adecuada que no se refiere precisamente a la cobertura de vacantes. **ELA Udaltzaingoa** plantea igualmente que las bolsas de trabajo que pudiera gestionar la Academia devengan de procesos de selección ad hoc y no del listado de aprobados sin plaza en convocatorias de ingreso en la Ertzaintza. La redacción del art. 120 no menciona de ningún modo cómo se conformarán las bolsas.

- Agentes de movilidad:

UGT se muestra contrario a la figura y pide potenciar en su lugar las plantillas de las policías locales. Al respecto debe decirse que la potenciación de las plantillas locales es competencia de cada una de las administraciones atendiendo a sus necesidades y no del legislador y que la figura es una figura ya contemplada en la legislación estatal y creada en algún municipio vasco como Donostia hace ya varios años.

EUDEL, por su parte, quiere no limitarlo a municipios de gran población y hacerlo extensible o posible en cualquier municipio o en municipios de una población superior a la que se determinen en la ley. El Grupo de Norma Marco plantea eliminar la expresión relativa a que la creación de la figura “no comporte incremento en efectivos ni costes de personal”. Ambas apreciaciones no se admiten, dado que ello supondría adoptar criterios no coincidentes con los previstos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que darían probablemente lugar a su impugnación ante el Tribunal Constitucional como en algún caso precedente similar que se saldó con la anulación de un precepto de la Ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi.

ELA- Udaltzaingoa propone eliminar “*de manera que ello no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal*”. Tal redacción aparece en la LOFCS y su eliminación en la ley vasca correría un riesgo cierto de anulación por el Tribunal Constitucional. No se puede aceptar por tal razón.

- Alguaciles:

El sindicato **UGT** plantea eliminar la figura y crear mancomunidades de policía local.

La **Asociación de Alguaciles de Euskadi** ha presentado diversas alegaciones reivindicando en su conjunto la reconversión total de los alguaciles actuales en policías locales (iguales funciones, posibilidad de ir armados, pasar al subgrupo C1, misma uniformidad que la policía local e incluso jubilarse a los 60 años).

Cualquier municipio de más de 5.000 habitantes puede contar con cuerpo de policía local y algunos menores si el ayuntamiento así lo creen conveniente y se le autoriza. Por lo tanto la persistencia de alguaciles responde a una evaluación de las necesidades observadas en cada municipio si considera no ser preciso contar con un servicio destinado a realizar las funciones propias de la policía local y se basta con alguaciles para realizar algunas de las funciones que en otro caso sería encomendada a la policía local.

Por consiguiente la reconversión de los alguaciles en policías locales derivará de la evaluación y decisión que realice cada ayuntamiento, no de su posición legal.

ELA Udaltzaingoa propone describir claramente cuáles son las funciones de los alguaciles, sin necesidad de tener que desgarnarlas de las funciones de la Udaltzaingoa previstas en el art. 27.1. Atendiendo a la propuesta se da nueva redacción al precepto.

La **Asociación de Alguaciles** inquiriere en relación a la disposición transitoria relativa al personal laboral en funciones de alguacil con anterioridad a la ley dos cuestiones: a) aclarar si mientras permanezcan en tal situación se les considerará agentes de la autoridad y b) fijar un plazo de 3 años para su funcionarización por promoción interna. Respecto a la segunda cuestión parece razonable que sean los ayuntamientos quienes contemplen los plazos de tales procedimientos y respecto de la primera, se considera oportuno determinar que en tanto en cuanto realicen tales funciones tendrán la protección jurídica reservada a los alguaciles conforme a esta ley.

Respecto a las observaciones del informe de la **Dirección de Función Pública** sobre la figura de los alguaciles cabe responder lo siguiente: El anteproyecto califica expresamente los puestos de alguaciles como reservados a personal funcionario, por lo que sobra hacer más consideración al respecto a ninguna otra norma, aunque sea coincidente con las previsiones del EBEP, dado que los alguaciles asumen funciones que bien suponen ejercicio de autoridad o bien funciones inspectoras en policía administrativa. Lo que en ningún caso hace el EBEP es reservar puestos a personal laboral, por lo tanto esta ley podría reservar a personal funcionario puestos que excediese de la reserva prevista en la Disposición adicional segunda del EBEP. De hecho y en referencia a los agentes de movilidad la reserva a personal funcionario se realiza específicamente en la LOFCS. Por lo tanto no es preciso añadir una coletilla en el que se remitiera a la disposición citada del EBEP.

Dicho informe de la Dirección de Función Pública habla de la necesidad de que los alguaciles se formen en el uso de las armas lo cual no es cierto, ni se deduce del borrador. Igualmente presupone que el personal laboral alguacil no puede ser funcionarizado, lo cual no es la pretensión del anteproyecto, siendo así que el texto es muy claro al determinar la situación en la que queda el personal laboral preexistente y los mecanismos para su posible funcionarización.

Respecto a la disposición transitoria octava, que contempla una hipótesis hacia el futuro en el que un ayuntamiento decida crear un cuerpo de policía local, el informe de la Dirección de Función Pública considera que en el cuerpo de policía local futuro sólo podrán integrarse los alguaciles que sean funcionarios y especificar la situación en que quedarían quienes no lo son. Se acepta. Igualmente proponen que se añada que la integración no supondrá incremento del gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporte se absorberá en otras retribuciones complementarias.

V.- RESUMEN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS CON REFERENCIA AL PRIMER BORRADOR.

Exposición de motivos:

- II d).- Se adecua la redacción a la nueva configuración de la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco.
- IV b) y c): se adecua el texto a los cambios introducidos en la regulación de la promoción interna y provisión de puestos.
- V.- Se adecua a los cambios producidos en el texto.
- VII.- Se adecua a los cambios producidos en el texto.

Uno. Capítulo II del título I.- Mecanismos de control de la actividad policial. Se da nueva redacción a los arts. 10, 11, 12, 13 y 14. Lo que en el primer borrador se llamaba comisión de control de la Ertzaintza cambia en su denominación y en su ámbito de actuación, pasando a ser la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco. Se acomodan sus funciones a dicho ámbito y se delimitan mejor con el objeto de clarificar: a) que su finalidad y facultades no se dirigen a investigar y depurar responsabilidades individuales sino a estudiar prácticas para proponer mejoras, y b) que la actuación de esta comisión no debe interferir indebidamente en la actuación de la jurisdicción penal, para lo cual se establecen ciertas cautelas. La composición de la comisión varía atendiendo al nuevo ámbito funcional de la misma que incluye al conjunto de la Policía del País Vasco.

Siete. En el artículo 30 bis dedicado a los principios de relación con la ciudadanía se incorpora en su apartado 2º una referencia explícita al respecto de los derechos lingüísticos reconocidos en Ley 10/1982, de 24 de noviembre, «Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera».

Ocho.- Se corrige una errata en el artículo 40.

Nueve. La referencia a las especialidades contenida en el artículo 43, que se refería exclusivamente a la Ertzaintza pasa a referirse a la Policía del País Vasco, de modo que no cercena que puedan existir especialidades en otros cuerpos policiales.

Once. En el apartado 2º del nuevo párrafo 5º al artículo 47 se sustituye la referencia a la ley de procedimiento administrativo común que va a ser sustituida por la nueva que entra en vigor en junio por una referencia genérica.

Doce. En el nuevo artículo 47 bis, relativo a las medidas dirigidas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se modifica el tercer párrafo del apartado 4º para tener en cuenta que el porcentaje mínimo supletorio a considerar en defecto de plan de promoción de las mujeres proceda siempre que se convoquen más de 3 plazas.

Trece. En el artículo 48.7 referente a que los asesoras y asesores con que cuente el tribunal de selección deban sujetarse a los mismos principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad que afectan a quien forma parte del tribunal de selección.

Quince. En el nuevo artículo 55 bis se clarifica que, salvo en el caso de las excepciones expresamente previstas en la propia ley, los requisitos de acceso deben poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Diecisiete. En la letra e) del párrafo 1º del artículo 59 se incorpora la regla referente al ingreso en la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza.

Diecinueve. En el párrafo 4º del artículo 59 se determina que el tiempo del periodo de prácticas se cuantifica a los efectos de cómputo del tiempo de servicios efectivos en la categoría de procedencia, siempre que el proceso selectivo hubiera sido superado.”

Veintidós. En el párrafo 2º del artículo 65, relativo al concurso de méritos como forma de provisión de puestos se concretan los méritos que en todo caso, ex lege, son de aplicación en las convocatorias, mientras que otros podrán serlo cuando así se determine en la convocatoria por resultar adecuados en función de las características propias del puesto a proveer.

Veinticinco. Se clarifican los requisitos de las convocatorias de los procedimientos de concurso de méritos por contraposición a los de libre designación.

Veintiocho. En el nuevo Capítulo II bis al título III, titulado “Promoción y carrera profesional”, se incorporan las reglas de la irretroactividad de los complementos retributivos derivados del grado de desarrollo profesional, así como de la imposibilidad de retribuciones de tal naturaleza a cuenta de tal complemento retributivo.

Treinta y tres. Se establece un capítulo V en el título III dedicado exclusivamente a la protección de la salud laboral, la prevención de riesgos laborales, la protección social ordinaria y complementaria

Treinta y cuatro. Regula un nuevo capítulo V bis del título III dedicado al régimen de condecoraciones honoríficas.

Treinta y seis. Contempla las consecuencias de que la suspensión provisional acabe en una suspensión firme o que por el contrario se levante sin convertirse en firme. A diferencia del primer borrador se incorpora el que en caso de no devenir en sanción firme se deba restituirle la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

Treinta y ocho. La regulación del servicio activo modulado por la edad se modifica para que su régimen atienda a principios generales que permitan que, previa negociación colectiva, en cada administración se determine tanto la edad del reconocimiento de tales modulaciones como las adaptaciones de las condiciones laborales que procedan.

Treinta y nueve. Se incorporan ciertas menciones a las policías locales que en la primera redacción se referían exclusivamente a la Ertzaintza creando una suerte de vacío legal para las primeras. Se clarifica que en segunda actividad se ocupan puestos del cuerpo policial. E igualmente que el personal en segunda actividad puede acogerse a la modulación de la prestación del servicio previsto para el servicio activo modulado.

Cuarenta. Se modifica el artículo 87 para clarificar que en el caso excepcional de que a un funcionario el pase a segunda actividad o servicio modulado le suponga la readscripción a otro puesto en el interin puede quedar a disposición del cuerpo policial y no genéricamente de la Administración.

Cuarenta y tres. Se incorpora a la definición de la falta de acoso sexual y laboral el acoso sexista.

Cuarenta y cuatro. Se eliminan las referencias en el artículo 93 a que la suspensión de funciones es con pérdida de retribuciones, porque la pérdida de retribuciones es inherente a la propia situación administrativa en la que queda, por lo que es redundante.

Cuarenta y cinco. Se corrige la errata en la numeración del artículo 94, ya que se repetía una letra.

Cuarenta y seis. Se incorpora al nuevo párrafo 2 bis al artículo 95 una referencia explícita a que el expedientado en un procedimiento disciplinario pueda contar con la asistencia de un representante sindical en las actuaciones del procedimiento.

Cuarenta y siete. Se modifica el nuevo párrafo 2 ter al artículo 95 a la vista de las modificaciones contenidas en la nueva ley del procedimiento administrativo común que entra en vigor en junio.

Cincuenta. Se modifica el plazo de prescripción de las sanciones por faltas leves, que se reduce a 3 meses.

Cincuenta y uno. En el nuevo artículo 97 bis.1 segundo párrafo se incorpora la referencia a la manifestación de la persona interesada de su intención de recurrir al contencioso-administrativo como presupuesto para suspender cautelarmente la ejecutividad de la sanción.

Cincuenta y dos. En el nuevo artículo 97 ter. 2 se contemplan los problemas de la ejecución de la sanción en el caso en que sea imposible por haberse jubilado el sancionado, cuando a posteriori quepa la eventualidad de su reincorporación al cuerpo. Igualmente en el 97.ter.5 (medida alternativa de cumplimiento de la sanción) se matiza que el supuesto cabe aún si la sanción es igual a 15 días y que es precisa la aceptación por la administración de la medida alternativa.

Cincuenta y seis. En el artículo 117 se enumeran las funciones de los alguaciles.

Cincuenta y siete. En el artículo 118.3.a) para el caso de la categoría de intendente se sigue el mismo requisito disyuntivo que para el resto de categorías.

Cincuenta y ocho. El artículo 119 se modifica para dar cabida a la posibilidad de que, como existe en la actualidad, exista no una jefatura unipersonal sino colegiada en los cuerpos de policía local bajo la dirección política correspondiente.

Disposición Transitoria quinta.- Se incorpora una nueva disposición transitoria destinada a la integración del personal de la escala básica.

Disposición Transitoria sexta.- En referencia a la integración de personal funcionario de la policía local en la escala superior de quienes habían obtenido plaza en la policía local exigiéndoles titulación del grupo A con anterioridad a la LPPV se introduce la regla o criterio que sugería EUDEL.

Disposición Transitoria Octava.- Alguaciles. Se clarifica la protección jurídica en el ejercicio de sus funciones del personal laboral que venía desempeñando puestos de alguacil y que continúe desempeñándolos.

Disposición Transitoria Novena.- Integración de alguaciles en los cuerpos de la policía local. Se clarifica la situación jurídica de quienes no se lleguen a integrar en el nuevo cuerpo tras su creación.

VI.- INCIDENCIA NORMATIVA.

a) Análisis de impactos

Adecuación al orden de competencias: La Comunidad Autónoma es competente para regular esta modificación de la ley de Policía del País Vasco en virtud de las competencias atribuidas en materia de régimen de la policía autónoma y régimen de los funcionarios públicos. Se respeta la legislación estatal que pudiera resultar básica, considerando que la LOFCS sólo es aplicable en

determinados preceptos y que el EBEP no es aplicable directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El rango de la norma es el de una ley autonómica, de modificación de una norma con rango de ley preexistente, por lo tanto la nueva norma afecta a la que es modificada y consiguientemente a aquellas disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma.

b) Efectos sobre la economía en general.

En relación con la competencia la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia, ni sobre la pequeña o mediana empresa.

Tampoco parece tener un impacto directo desde el punto de vista de las cargas administrativas atendiendo a una definición estricta de las mismas, si bien en la medida que implica una simplificación y mejora de procedimientos por ejemplo en cuanto a la Academia Vasca de Policía y Emergencias como órgano permanente de selección o a ciertos mecanismos que de cooperación intermunicipal o a la flexibilidad y racionalidad en la conformación de estructuras organizativas profesionales de las policías locales cabe genéricamente suponer un efecto positivo respecto a las cargas administrativas.

c) Impacto económico y presupuestario:

La memoria económica pormenoriza el análisis desde el punto de vista presupuestario, siendo la conclusión general que no hay una afección al gasto que derive de la aplicación directa de la ley que no sea asumible con los presupuestos actualmente existentes. No implica ninguna previsión de ingresos.

Respecto al impacto en otras instituciones públicas, como los municipios, la ley puede tener un impacto presupuestario como se explica en la memoria económica, ya que si bien la reestructuración de escalas y categorías y grupos de clasificación tiene un impacto organizativo, y en algunos pocos casos obliga a crear nuevos puestos de jefatura, la integración en las nuevas estructuras del personal preexistente se realizará de forma que ello no suponga incremento presupuestario, debiendo el incremento en las retribuciones básicas absorberse con una disminución equivalente en las complementarias. Por otra parte, ciertas medidas del anteproyecto tienden a racionalizar los costes municipales mediante fórmulas cooperativas como la posibilidad de procesos selectivos conjuntos o la creación de bolsas de trabajo con personal formado por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

d) Impacto de género:

La norma tiene un impacto de género positivo que se analiza en el informe de impacto de género.

e) Otros impactos considerados:

Desde el punto de vista social, esta ley contribuye a crear una percepción de fiabilidad en la gestión de la Administración policial.

La regulación de los mecanismos de control policial, interrelación con la ciudadanía y dación de cuentas responden a la previsión 61 del Código europeo de Ética de la Policía - Recomendación del Consejo de Europa del 2001- que contempla “la implantación de mecanismos que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comunicación y la comprensión entre la población y la policía” y entroncan con la filosofía de Transparencia y Buen Gobierno del Plan de Innovación Pública 2014-2016.

El compromiso con la dación o “rendición de cuentas”, a través de la publicidad activa, mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial, como la evaluación del desempeño de los miembros de la policía, o, más allá de las medidas coercitivas, la instauración de mecanismos preventivos que permitan analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral y la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo reforzado con la creación de una comisión de buenas prácticas.

Firmante del documento electrónico

Nombre	Departamento	Cargo	Fecha de la firma	Estado
Nombre	Departamento	Cargo	Fecha	
EUGENIO ARTECHE PALOMAR	SEGURIDAD	DIRECTOR/A	21/04/2016	



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETAREN LEGE-AURREPROIEKTUAREN MEMORIA.

I.- Aurrekarien azalpena eta arau-ekimenaren justifikazioa

II.- Lege-proiektua izapidetzea

III.- Jasotako alegazio, proposamen eta oharren laburpena

IV.- Alegazio eta oharren azterketa: egindako aldaketen azalpena eta baztertutako alegazioen justifikazioa

IV.- Lehenengo zirriborroarekin alderatuta egin diren aldaketen laburpena

VI.- Arautegiaren gaineko eragina

I.- AURREKARIEN AZALPENA ETA ARAU-EKIMENAREN JUSTIFIKAZIOA

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea zenbait aldiz aldatu da; bereziki Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen bidez, lege hartatik segurtasun publiko osoaren alde erkideak bereizi baitzituen, hala nola Polizia eta Larrialdi etako Euskal Akademiaren erregulazioa, udaltzaingoen arteko koordinazioa edo polizia-lankidetzako mekanismoak.

Legearen bosgarren aldaketa honetan, erreforma partzial batzuk egin dira, baina, oro har, indartu egin dituzte polizia-ereduaren zenbait alderdi, hain zuzen ere, herritarrei zerbitzua eta kontuak ematearekin erlazionatutakoak eta polizia-zerbitzuen eta eskubide berberak dituzten gizon eta emakumez osatutako gizarte ireki, plural eta elebidunaren arteko loturarekin erlazionatutakoak.

Neurri zehatz hauei heldu zaie:

a) Polizia-eredua indartzeari dagokionez:

- Poliziaren Etikaren Kode Europarraren edukia jaso da, zeinak, polizien jokabide-jarraibideak ez ezik, polizia-agintarienak ere finkatzen baititu, bai herritarrekiko harremanetan, bai zerbitzuen barruko antolaketari dagokionez, eta, horretarako, jarraibideak ezarri ditu kontuak emateari buruzko atalean.
- Zerbitzu poliziala ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak indartu dira. Horretarako, poliziaren jardun onari lotutako pizgarri positiboen sistema indartu da, zenbait ordain-pizgarri sartuta, hala nola produktibitate-osagarri batzuk, jardunaren ebaluazioari lotutako lanbide-karrerako osagarriak, aparteko ordainsariak edo kondekorazioen eta sarien sistema. Era berean, diziplina-erregimena aldatu da, barneko mekanismo eraginkor, proportzional, egoki eta justuak ezartzeko, betiere, diziplina-ezaren kasu partikularretatik eta arrisku-faktoreetatik harago joz, prestakuntzan edo prozeduran edo lan-giroan hobekuntzak egiteko orientazioa emateko helburuz.
- Poliziaren eta herritarren arteko derrigorrezko interakzioa jaso da, kexak tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialarekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismo gabe tratatuko direlako konfiantza izan dezaten.
- Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jokabide Egokien Batzordea sortu da, erakunde iraunkor hibrido gisa, autonomia funtzionala duena erakunde polizialarekiko, eta espezializatutako pertsonen osatua, aditu polizialak barne. Batzordearen funtzioak dira aztertzea, organo eskudunek eskatuta, Ertzaintzaren edo udaltzaingoen baitako jokabideak eta jardunbideak, baldin eta herritarrek kexak badituzte haien gainean edo poliziarekiko zuten konfiantzan eragina badute. Gainera, poliziaren esku-hartze edo operatibo baten testuinguruan edo zaintza poliziala egiten den bitartean pertsona bat hiltzen edo larriki lesionatzen bada, ofizioz ikertuko ditu gorabehera horiek, eta zerbitzua hobetzeko neurriak

proposatuko ditu. Batzordearen araudiak batzordekideen neutraltasuna eta independentzia babesten ditu.

b) Langileak hautatzeari eta kidegoan sartzeari dagokionez:

- Probetan onartua izateko baldintzak lege-mailako arau baten bidez zehaztu dira, eta ez orain arte bezala, erregelamendu bidez. Bestalde, hautaketa-organoetako arauak egokitu dira, bi kontu hauek gogoan hartuta: organo horiek inpartzialak, profesionalak eta dena delako espezialitatekoak izatea, eta, funtzionario publikoen artean, orokorrean, gizon eta emakume kopuruari dagokionez oreka egotea. Era berean, deialdietako oinarrien arteko lotura egin dadila xedatu da, eta orobat zehaztu da zein kasutan izango den zilegi deialdi bateko lanpostu hutsen kopurua aldatzea edo akatsak zuzentzea, eskabideak aurkezteko beste eperik hasi gabe.
- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia hautaketa-organo iraunkor gisa eratu da, eta, gainera, aukera eman da udaltzaingoan sartzeko hautaketa-prozedurak batera egiteko, toki-administrazioako erakundeek beren borondatez hala eskatzen badiote.

c) Ekintza positiboko neurriak ezarri dira emakumeak polizia-kidegoetan sartzeko eta polizian emakumeen kopurua handitzeko, gaur egun kopuru hori urria da eta.

- Hala, bada, polizia-kidegoetako emakumeentzako lanbide-sustapeneko planak arautu dira, kidegoetan sartzean eta lanbide-karreraren berdintasuna bermaturik izan dezaten, dagokiena baino daukaten ordezkaritza urriago hori zuzentzeko, eta poliziaren eraginkortasuna handitzeko.
- Nabarmentzekoak dira, berrikuntza dakarten aldetik, txanda libreko hautaketa-prozeduretarako emakumeen alde ezarri diren ekintza positiboko neurriak, zenbait egoeratan emakumezko hautagaia gizonezkoaren gainetik hobestea ekarriko baitute, Europako Erkidegoetako jurisprudentziak lege-neurriei, proportzionaltasunari eta arrazoizkotasunari buruz ezartzen dituen eskakizunen kontra jo gabe.

d) Barne-sustapenari, lanbide-karrerari eta lanpostuak betetzeari dagokienez:

- Administrazio-karrera bultzatu da, barne-sustapenaren bidez. Horretarako, erraztu egin da langileek erakundearen barruan gora egitea, goragoko kategoria batera igaro ahal izateko zerbitzuan bete beharreko urte kopurua gutxituz. Beste alde batetik, bertan behera utzi da barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga, muga horrek murriztu egiten baitzuen administrazio-karrerarako eskubidea, baita funtzionarioek probak gaingitu bai baina plazarik lortzen ez zuten kasuetan ere. Eta, azkenik, zerbitzu aktiboaren pareko administrazio-egoeretan daudenen barne-sustapena ahalbidetu da, lanbide-sustapena izateko eskubidearen ondorioetarako.

- Beste neurri batzuk ere ezarri dira, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzearekin zerikusia dutenak, hala nola haurrak edo senitartekoak zaintzeko edo genero-bortizkeriarengatik eta zerbitzu bereziengatik eszedentzian direnek barne-sustapeneko prozeduretan aurkezteko duten aukera. Era berean ezarri da ezen, barne-sustapeneko benetako zerbitzuetan emandako denbora kalkulatzeko aldera, kontuan hartuko direla barne-sustapenean parte hartzea ahalbidetzen duten egoera administratiboetan emanda ko denboraldiak.
- Lanpostuak lehiaketa bidez betetzeari dagokionez, alderdi hauek bereizi dira: batetik, legearen arabera merezimendutzat jo daitezkeen alderdiak eta, bestetik, bete beharreko lanpostuak berezko dituen ezaugarrien arabera merezimendutzat jo daitezkeenak. Gainera, lehiaketa-prozedurek eduki behar dituzten edukiak zehaztu dira.
- Superintendente-kategoria kendu da, eta, horrela, Ertzaintzaren erantzukizun goreneko lanpostuak eskuratzea eta betetzea bizkortzen da, lanpostuak betetzeko prozedura arrunten bidez.
- Lanbide-karrera horizontala arautu da, lanpostua aldatu beharrik gabe garapen profesionalaren mailan aurrera egiteko aukera gisa ulertuta. Lanbide-karrerako sistemak berarekin dakar ezagutza-mekanismo bat ezartzea, kategoria bakoitzean aurreikusitako garapen profesionaleko maila desberdinetara urteetan zehar sartu ahal izateko, gaitasun profesionalak egiaztatuta. Garapen profesionaleko mailaren arabera jasotzen da ala ez lanbide-karrerako osagarria, eta, hala badagokio, maila horrek lanpostu jakin batzuk betetzeko gaitzen du. Orain arte adierazitakoaren ondorioz, ordainketa-egitura aldatu da, lanbide-karrerako osagarria ordainsari osagarrien artean sartzeko.
- Ertzaintzaren espezialitateen erregimena arautu da, ezagutza espezifikoak eskatzen dituzten zereginetarako. Espezialitate horietan sartzeko, espezializatzeko ikastaro bat egin beharko da, eta titulazio edo ezagutza jakin batzuk eskatu ahal izango dira. Espezializatzeko jarraitzeko konpromisoa dakar berekin, baita espezialitatean jarraitzeko gaurkotze-probak egitea ere, hala behar izanez gero. Halaber, lege honetan, Polizia eta Larrialdietako Eusko Akademiak eta segurtasun-arloan eskumena duen sailak deialdi bateratuak egiteko aukera jaso da; deialdiotan, espezializazio-ikastaro batean sartzeko eta hura gainditzea lotuko da borondatezko zerbitzu-eginkizunak berehala ematearekin, hutsik dauden lanpostu espezializatuetan.

e) Egoera administratiboetarako dagokionez:

- Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa arautzen da, zeina honetan baitatza: zerbitzu aktiboan jarraitzean, poliziaren egoerarako egokiak diren eginkizunak eginez; gau-txandarik gabeko lanaldi-erregimena izatean; eta adina dela-eta zerbitzua emateko baldintzen bestelako aldaketak egitean; esaterako, urteko lanaldia gutxitzean.
- Lan polizial guztiak normaltasunez betetzeko gaitasun psikofisiko nahikorik ez dutelako bigarren jardueran aritzen diren polizien egoera administratiboari buruz ere arau berriak ezarri dira; hala, bada, haien arabera, funtzionarioek beren benetako gaitasunetara egokitutako lanpostuak edo funtzioak bete beharko dituzte,

aurreko araudietan ez bezala, hura premisa honetatik abiatzen baitzen: bigarren jardueran aritzen zirenek oinarritzko ordainsariak kobratzen zituzten, lanpostu bat betetzeko edo jarduera polizialak betetzeko deitzen zieten arte. Lege honetan, berriz, egoera administratibo horretara igarotzen diren funtzionarioek lan egiten jarraituko dute, nola aurreko lanpostuan —bigarren jardueran aritu ahal izanez gero— hala bete dezaketen beste lanpostu batean; eta birkokapena berehala egin ezean, poliziaren lanpostua bere premietara egokitu ko da aldi baterako.

- Behin-behinean eginkizunez gabetuta egoteari dagokionez, bi zehaztapen egin dira: bata, behin-behinean eginkizunez gabetuta emandako denbora gabetze irmoan kontuan hartzeari buruzkoa; bestea, horrekin lotua, behin-behineko gabetzea irmo bilakatuz gero, behin-behineko gabealdian jasotako dirua itzuli beharrari buruzkoa.

f) Funtzionarioen eskubide eta betebeharren erregimenean:

- Kapitulu berria sartu da, EAEko polizia-kidegoen babes sozialari buruzkoa, oinarritzkoa zein osagarria izan, eta bereziki kontuan hartuta administrazioek langileen baldintza psikofisikoak, laneko osasuna eta laneko arriskuen prebentzioa zaintzeko obligazioa dutela.
- Lanean edo lanaren ondorioz sortutako gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologiak direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak izatera behartu da.
- Polizien heriotza edo laneko ezintasunak direla-eta dauden eskubide osagarri horiei buruzko arau gehiago ezarri dira, egoera horiek zerbitzu poliziala edo haren funtzioak betetzen edo EAEko polizia-kidegoetako funtzionario izatearen ondorioz gertatzen diren kasuetarako, ez baitzaio lotzen poliziaren merituzko jokabidearen ebaluazioari.
- Aurreneko aldiz jaso da kondekorazioak eta ohorezko sariak emateko erregimena, zerbitzu-egintzan hildako funtzionarioak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ondorio ekonomikorik gabe eta ohore gisa igarotzeko aukera jasoz.
- Ertzaintzako funtzionarioen ordezkartzari eta partaidetzari dagokienez, argitu egin da Ertzaintzaren Kontseiluak izan beharreko esku-hartzea diziiplina-prozeduretan eta birgaitze-espedienteetan, bai eta kondekorazio-erregimena aplikatzean ere.

g) Diziiplina-erregimenari dagokionez:

- Sexu-jazarpenarekin eta laneko jazarpen errepikatuarekin zerikusia duten falta berriak sartu dira, oso larriak, bai eta polizia-bideokamarak erabiltzerakoan eginiko arau-haustea ere; halaber, beste era batera idatzi da polizia izatetik abantaila ateratzeari buruzko faltaz eta funtzioak nabarmen bete ez izanaz, enplegatu publikoen arau orokorrekin bat etorritz.
- Arindu egin da ezarri beharreko zehapen-multzoa, eta, hala, falta arinagatik ezartzen den eginkizun-gabetzerik luzeena 4 egunekoa da, 5 egunekoa izan beharrean; falta larriarengatik, urtebetekoa (lehen, 2 urtekoa zen); eta oso falta larriengatik eginkizun-gabetzea, berriz, gutxienezko mailan zehatu da: urtebete eta egun bat.

- Zehapena graduatzeko irizpideen artean, curriculum profesionala inguruabar aringarritzat jo da, berriz egin izanaren kontzeptu a larrigarria izatea mugatu da, eta, delitua dela-eta izandako falten kasuan, berariaz baloratu da ezarritako zigorraren zenbatekoa edo entitatea epai irmoaren arabera, bai eta delituzko jokabideak eginkizun polizialekin duen harremana ere.
- Espedientepeko pertsonen bermeak indartzen dira, deklarazioak ez egiteko dituzten eskubideei dagokienez, bai eta beren buruaren kontra ez egiteko, beren burua erruduntzat ez jotzeko eta errugabetasun-presuntzioa izateko ere, bai eta prozeduraren izapideen egoeraren berri izateko esku bideei dagokienez ere. Defentsa-eskubideari dagokionez, espedientepeko pertsonen jarduneko abokatu edo konfiantzazko kidego polizialeko funtzionario baten aholkularitza eta laguntza izateko aukera bermatu zaie, eta ezarri da, baita ere, agintariek erraztasunak emango dizkietela izendatutako funtzionarioei espedientatutako pertsonaren agerraldi pertsonaletan egon daitezen.
- Orobat, prozeduraren erregimena eta iraungitze-epea arautu dira, eta falta eta zehapen oso larrien preskripzio-epea gutxitu da, 6 urtetik 3ra; aitzitik, legeak preskribatzeko epea zabaldu egin da, hilabetetik 3 hilabetera.
- Zehapenen bete beharra jaso da, bai eta zehapena eten beharreko edo baldintzapean kentzeko kasuak ere, horrela jokatzeko motiboak daudenean. Zehatutako pertsonari albait kalterik txikiena egin da beteko dira zehapenak; horrela, bada, aurreikusi da zehapena baldintzapean kentzea, baldin eta zehatutako pertsonak zehapena betetzeko hautazko neurri gisa hartzen badu lanalditik kanpo lan egitea, soldatarik edo inolako konpentsaziorik gabe, jarritako zehapen-aldia bitartean.

h) Ertzaintzako funtzionarioei eta haien egitura profesionalari buruzko titulu espezifikoari dagokionez:

- Superintendente-kategoria desagertu da; hala, eskala eta kategoria horretan sartutako plazen eginkizunak lanpostu jakin batzuetan bereizten dira, eta hark lanpostu horietara sartzen laguntzen du, betiere, lanpostuaren baldintzak lanpostuak betetzeko ohiko sistemen bidez betetzen badira.
- Berridatzi egin da Ertzaintzak polizia judizial gisa duen eginkizunaren antolaketa-egiturari buruzko erregulazioa; izan ere, indarrean zegoen testuan Botere Judizialaren Lege Organikoaren arau jakin batzuetara jotzen zen, bidalketa horiek zaharkituta geratu baitziren.

i) Udaltzaingoko kidegoei dagokienez:

- Dauden jardunbideei erantzun juridikoa emateko, askotariko neurriak aurreikusi dira, esaterako, udaltzaingoak udalerritik kanpo jarduteko aukera, tokiko agintariak babesteko funtzioak gauzatzeko, etab.
- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak lan-politsak osatu ahal izatea ezarri da, berak antolatutako oinarritzko ikastaroak gainditu dituztenekin, haien bitartez, toki-korporazioen eskaerei erantzuteko eta bitarteko funtzionarioei prestakuntza emateko.

- Udaltzaingoetako lanbide-egitura jaso da, Ertzaintzako bezalatsu. Bereziki, udaltzaingoetako buruzagitza-kategoriak zehaztu dira, biztanleriaren arabera edo kidegoa osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera. Hori kontuan hartuz, lege-proiektuak udaltzaingoko langileak eskala berrietan sartzea arautu du, bai eta udaltzaingoetako buruzagitza-lanpostuen egokitzapena ere.
- Azkenik, aguazilaren figura arautu da udaltzaingoa ez duten udalerrietarako; eta mugikortasun-agentearena, hirigunean zirkulazioa arautzeko.

II.- LEGE-AURREPROIEKTUA IZAPIDETZEA

a) Segurtasuneko sailburuaren 2015/06/18ko Aginduaren bidez, hasiera eman zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketaren lege-aurreproiektua prestatzeko prozedurari.

b) Aurreproiektuaren lehenengo zirriborroa egin ondoren, haren berri eman zitzaion, 2015eko uztailaren 12an, Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzari. Orobat, egun berean, zuzendaritzak aurreproiektuaren azalpen-memoria eta generoaren araberako eraginaren txostena egin zituen.

c) 2015eko uztailaren 13an onartu zuen Segurtasuneko sailburuak hasierako zirriborro hori.

d) 2015eko uztailaren 13an, ebazpena argitaratu zen EHAAn, Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendariak emana, egun berean. Ebazpenaren bidez, 20 egunez jendaurrerik jarri zen Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketaren lege-aurreproiektua. Lege-aurreproiektua Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratu zen (Euskadi.net).

e) 2015eko uztailaren 17an, txosten hauek eskatu ziren:

- Hizkuntza-normalizazioari buruzko txostena.
- Emakunderen txostena. Eskabidearekin batera, generoaren araberako eraginaren txostena ere bidali zen, Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzak egin.
- Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostena.
- Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren (DACIMA) txostena.

f) Egun berean, entzunaldi-izapidea egin zitzaion sindikatu nagusiei, foru-aldundiei eta EUELi, eta erlazionatutako elkarte profesionalei. Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzako sail guztiei helarazi zitzaion lege-aurreproiektua, egokitze jotzen zituzten oharak egin zituzten.

g) Hauek egin zituzten alegazioak:

- EUELI (2015/07/29)
- ESAN sindikatua (2015/07/14)
- UGT sindikatua (2015/07/30)

- ERNE sindikatua (2015/08/06)
- Euskadiko Aguazilen Elkarte (2015/07/29)
- Euskadiko Udaltzainburuen Elkarte (AJEPL-EUBE) (2015/08/07)

h) Eusko Jaurlaritzako sail hauek egin zituzten alegazioak: Lehendakaritza (2015/09/10); Ingurumena (2015/09/18); Osasuna (2015/08/22); Enplegua eta Gizarte Politikak (2015/09/29); eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura (2015/10/21). Baita Bizkaiko Foru Aldundiak ere (2015/08/10).

i) Txosten hauek jaso dira:

- Emakunderen txostena (2015/07/24)
- Hizkuntza Normalkuntzako Zuzendaritzaren txostena (2015/07/17)
- DACIMAREN txostena (2015/07/27)

j) Jasotako alegazioak eta txostenak ikusita, lege-aurreproiektuaren bigarren zirriborroa prestatu zen, eta, bertan, ustez testua hobetzen zuten oharak jaso ziren. Bigarren zirriborroa EPLren 103. artikuluan ezarritako negoziazio-mahaiari bidali zitzaion. Hilabetez egon zen zabalik negoziazio-aldia, eta negoziatio-mahaiak bilera formalak egin zituen 2015eko azaroaren 10ean eta abenduaren 10ean. Azken data horretan eman zen amaitutzat negoziatio-izapidea.

k) Negoziatio-fasean, zenbait sindikatuk alegazioak egin zituzten, idatziz:

- CCOO (2015/12/05)
- ERNE (2015/12/10)
- ELA-Ertzaintza (2015/12/10)

l) Euskadiko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordeak 2015eko abenduaren 2an eman zuen lege-aurreproiektuaren bigarren zirriborroaren berri. Bilera hartan, ELA-Udaltzaingoak oharak egin zituen, eta idatziz aurkeztu ditu 2015eko abenduaren 14an.

m) Ertzaintzaren Kontseiluak 2015eko abenduaren 14an eman zuen lege-aurreproiektuaren bigarren zirriborroaren berri.

n) Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak 2015eko abenduaren 22an egin du txostena.

o) 2016ko urtarrilaren 14an, memoria ekonomikoa eta prozeduraren memoria egin dira.

p) 2016ko urtarrilaren 16an txostena eskatu genion Kontrol Ekonomikoko Bulegoari. Erantzuteko epea otsailaren 6an amaitu zenez, izapideekin aurrera jarraitzea erabaki genuen KEBak erantzun bitartean.

q) 2016ko otsailaren 8an, Segurtasun sailburuak Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari (EABJ) txostena eskatzeko Agindua eman zuen.

III.- JASOTAKO OHARREN ETA EGINDAKO ALDAKETEN LABURPENA

1) Partaidetza-fasean, entzunaldian eta jendaurreko informazioaldian lehenengo zirriborroari buruz egindako alegazioak.

a) Poliziaren jarduna kontrolatzeko mekanismoak:

Kapitulu hau berritzeko proposamenei dagokionez, ek arpen hauek egin dira:

ERNE sindikatuak kendu egin nahi du.

ESAN sindikatuak kapitulua kentzea iradoki du, haren ustez, “asmo politikoak” dituelako. Haren iritziz, kontrol-batzordearen egin kizunek, lehenengo zirriborroan zehaztutakoaren arabera, epaileen lanean eskua sartzea ekar zezaketen, gertakari berberengatik ikerketa penala egonez gero.

UGT sindikatuak dio udaltzaingoen sistema propioa d utela.

Kontrol-batzordearen osaerari dagokionez, Emakundek eskatu du gizon eta emakume kopuru orekatua izan dezala eta genero eta berdintasunaren arloko adituak izan ditzala.

ESAN sindikatuak nahi du batzordekideak ez daitezela izan A taldekoak (hau da, oinarritzko eskalako agenteak ere izan daitezela, un ibertsitateko titulua baldin badute).

Oinarritzko Arauaren Taldeak eskatu du udaltzaingoko funtzionarioak ere izan daitezela batzordekide.

Beste funtzionario batzuk kontrol-batzordeari laguntzera joateari dagokionez, **ESAN** sindikatuak uste du ez luketela zerbitzu-eginkizune an joan behar, haren ustez, horrek bidea ematen duelako aukera politikoengatik ezezt a dakien.

ERNE kexu da barne-arazoengatik jardunei hasiera emateko tresna eksklusiboa bihurtu delako Ekinbide, baina ez du horren inguruko proposamenik egin.

b) Kode deontologikoa:

Kode deontologikoari dagokionez, **ERNE** sindikatuak zenbait aldaketa proposatu ditu.

- Agintaritzako agentearen izaera aitortzea (33. art.), baita zerbitzuz kanpo ere, polizia berme juridiko berberak eskaini ahal izateko euren edo ondarearen aurkako erasorik izanez gero.
- 34. artikulua aldatzea, armak erabiltzeari buruzkoa; hain zuzen ere, arriskua larria izatearen eskakizuna kentzea, baita erresistentzia armatua dagoenean edo norberarentzat edo hirugarrenentzat arriskua dagoenean eta beste bide batzuk erabilita erasotzailea gelditu edo azpiratu ezin denean su-armak erabiltzea muturreko neurria dela esaten duen aipamen oro ere. Egin nahi den aldaketa atzerapauso nabarmena da poliziak armak erabiltzear en inguruko legeetan.
- Akusazio penalen kasuan funtzionarioek duten babes juridikorako bermea beste kasu batzuetara ere zabaltzea, besteak beste, funtzionarioei eurei edo ondasunei kalte eginez gero, eta polizia izanagatik mehatxuak edo irainak jasoz gero.

c) Prestakuntza eta elebitasuna:

ERNE sindikatuak zenbait proposamen egin ditu gai batzuen inguruan (gai horietako batzuk EPLren beraren esparrua gainditzen dute, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren araudiari buruzkoak direlako, eta araudi hori beste lege batean jasota dagoelako):

- a) LOSSPE aldatu behar litzateke, PLEAko Kontseilu Errektorean udaltzaingoetako sindikatu nagusiak ardura daitezen kidego horietako ordezkarietzaz.
- b) Zehaztu egin behar litzateke PLEAko zer lanpostu bete behar dituzten polizia-funtzionarioek, publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioetan oinarrituta.
- c) 39.2 artikulua berariaz ezarri behar luke PLEAko prestakuntza-planak nahitaez bete behar direla.
- d) Legeak gaitasuna eman behar lioke erregelamenduari prestakuntza-, gaikuntza- eta euskalduntze-ikastaroak zer maiztasunarekin egin behar diren zehazteko.
- e) Elebitasunaren konpromisoari eta euskalduntzeari dagokienez, xedapen gehigarri eta iragankor berri hauek barneratu behar lirateke, gai hauei buruzkoak:
 - Erregimen iragankorra, LPZk hizkuntza-profilik ezar ez dezan lanpostuetan, funtzionario guztiak euskalduntzeko liberatzen ez diren arte. Denboraldi horretan, hizkuntza-profila pertsonari lotuta egongo litzateke, eta ez lanpostuari.
 - Liberazioa, hutsetik has daitezen euskara ikasten, behin betiko atxikita dauden ala ez. Beren kabuz ikasi nahi dutenek ordu-kreditua izango dute gainditutako ikastaro bakoitzeko.
 - 47/2012 Dekretua automatikoki aplikatzea, euskarazko ikasketak aitortzeari eta tituluen egiaztapenetik salbuesteari buruzkoa.

ESAN sindikatuak liberalizazio-plana eskatu du euskara ikasteko.

d) Hautaketa eta sarrera:

EUDEL pozik dago, hautagaiei zuzenean eskatzen baitzaie C1 azpitaldeko titulua izatea. Hala ere, uste du mekanismo iragankorra ezarri behar dela azpitaldean legea indarrean sartu aurretik sartu direnentsat, ordainketa- eta administrazio-ondorioetarako.

UGT, ERNE, CCOO eta ELA sindikatuak eskatu dute ken dadila kidegoan sartzeko gehienezko adina.

Bestalde, **EUDELek** proposatu du ez dadila automatikoa izan gehienezko adina udaltzaingoetan emandako zerbitzuekin konpentsatzeko aukera, baizik eta deialdiaren oinarrietako udal erabakira jo dadila.

Hautaketa-epaimahaiak osatzeko arauari dagokienez, ERNE sindikatuak uste du ez direla kanpo utzi behar bitarteko funtzionarioak.

e) Ekintza positiboko neurriak:

ERNE sindikatua ez dago ados gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzera bideratutako ekintza positiboko neurriekin. Bestalde, **Emakundek** proposatu du seme-alabak zaintzeko edo genero-indarkeriagatik hartuta ko eszedentzia-aldiak ere kontuan har daitezela erretiro aurreratuari begira.

f) Lanpostuak betetzea:

ERNE sindikatuak eskatu du **lanpostuen katalogoa** egin dadila eta, bertan, polizia-kidego guztietako lanpostuak eta lanpostuen eginkizunak jaso daitezela, bigarren jarduerako lanpostuak ezagutzeko, kudeatzeko eta zehazteko. Aurrekoaren ildotik, 68. artikuluari buruz dio ez dadila lanpostu bereizirik egon lanpostuen katalogoa egiten den arte.

Espezialitateak egoteari dagokionez, **ERNEk** 43.2. eta 65 bis 3 artikulua ezabatzea proposatu du, iraupen-konpromisoa eta eguneratze-hautaprobak gainditu beharra ezabatzeko. Bestalde, **EUDELe**k proposatu du udaltzaingoetan ere espezialitateak egotea.

ERNEk iradoki du 67.1 artikulua aldatzea eta 67.2 artikulua ezabatzea, **lanpostuak betetzeko deialdiak eta haien ebazpena** Ertzaintzaren aldzkarian eta iragarki-tauletan argitara daitezen, eta ez EHAA-n.

Lanpostuak merezimendu-lehiaketa bidez betetzeari dagokionez, ERNEk proposatu du 65.2 artikuluan jasotzea merezimendu gisa ez daitezela hartu, soil-soilik, antzintasuna eta egindako lana, gainerako merezimenduak (prestakuntza-ikastaroak, titulazioak, etab.) ez daitezela hartu besterik gabe berdinketa hausteko, eta aldi batez, kolektibo osoa euskalduntzen ez den arte, euskara ez dadila baloratu berdinketa hausteko irizpide gisa. Bestalde, **UGT** sindikatuak proposatu du arauen bidez gara dadila egindako lanaren kontzeptua.

Lanpostuak **izendapen aske bidez betetzeko** prozedurari dagokionez, **ERNEk** proposatu du 63.3 artikulutik kanpo utzi dadila prozedura, oinarritzko eskalako lanpostuei, ikuskaritzakoei eta komisariorde-lanpostuei dagokienez, eta ezaba dadila izendapen aske bidez bete daitezkeen lanpostuen gehieneko ehunekoari buruzko paragrafoa.

Udaltzaingoko **trukeari** dagokionez (21. xedapen gehigarrian jaso), **EUDELe**k proposatu du LPZn ezarritako baldintzak bete daitezela. **UGT** sindikatuak dio ez dela halako araudirik behar, badagoelako aurreikuspen hori. UGTren proposamena zentzuzkoa da, eta onartu egin da.

ERNEk proposatu du 105.3 artikuluan gehitu dadila klausula bat sei hilabetetan gara dadin fakultatiboen eta teknikarien eskala (unitateak eta plazak ezartzea, eta lanpostuen zerrenda aldatzea).

g) Karrera eta barne-sustapena:

Barne-sustapenari dagokionez, **ERNE** sindikatuak proposatu du ez dadila inoiz baldintzetatik kanpo utzi titulazio akademikoa (horrek gaitasun-ikastaroak kentzea dakar), ez dadila eskatu aurreko kategorian gutxien ez urte kopuru jakin bat eman izana (hau da, ez daitezela soilik merezimendu gisa baloratu), eta ez daitezela kendu ezein

eratako laneko bajak benetan egindako zerbitzuen zenbaketatik. Bat dator gehienez hiru deialdi egingo direla dioen esaldiarekin.

Lanbide-karrera horizontalari dagokionez, **ERNE** sindikatuak proposatu du idazketa ordezka dadila eta Ertzaintzaren 2011ko erabakia jar dadila. **ESAN** sindikatuak zuzenean eskatu du kapitulua kentzeko. **UGT** sindikatuaren ustez, eskubidea eratu baino, emakida anbigua arautzen du. Bestalde, eskatu du udaltzaingoa sar dadila ordainsari-erregimenaren araudian, lanbide-karrerak o osagarriari dagokionez. **EUDELeK** adierazi du beharrezkoa dela ELA-Udaltzaingoan karrera horizontalean eta funtzionarioenean aldi berean sartzea oro har, denborazko edo bestelako disfuntziorik gabe.

h) Eskubideak eta betebeharrak:

Ordainsari-erregimenari dagokionez, **ERNE** sindikatuak proposatu du ordainsariak murrizteko debekua sar dadila 74.1 artikuluan. Proposamen horrek ezin du izan polizientzat espezifiko; horrenbestez, hala badagokio, enplegatu publikoen araudi orokorrean jaso behar litzateke. Bestalde, **UGT** sindikatuak nahi du udaltzaingoa ere sar dadila lanbide-karrerako osagarriaren araudian.

Bateraezintasunen erregimenari dagokionez, **ERNE** sindikatuak proposatu du sei hilabeteko epea ezar dadila erregimena egokitzeko eta leuntzeko. **UGT** proposatu du argi utzi behar dela inguruabar jakin batzuetan bateragarritasunerako eskubidea dagoela.

Bestalde, **ERNE** sindikatuak iradoki du ezaba dadila 76. artikuluan ezarritako **betebarra, hots, bizitokia bertan izatekoa**.

Gizarte-babeserako mekanismoei dagokienez, ekarpen hauek egin ditu **ERNE** sindikatuak:

- Doluaren aipamena ezabatzea (79 bis 2 artikulua).
- Zerbitzu-egintzan hilez gero ematen den konpentsazioa hiru urterokoetakoa izatea (eta ez bikoia), hildakoek 25 urtetik beherako seme-alabak badituzte.
- Zerbitzu-egintzaren ondorioz ezinduta geratuz gero, pentsio osoa jasotzea, eta ez pentsioaren % 80, orain arte bezala.

Horretaz gain, **ERNE** sindikatuak proposatu du akordio arautzailearen V. tituluan idatzitakoa ere (**laneko arriskuen** prebentzioari eta laneko osasunari buruzkoa) jaso dadila legearen testuan.

i) Administrazio-egoerak:

- Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa:

Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboari dagokionez, **EUDELeK** proposatu du legean jasota gera dadila udaltzaingoetan lanpostua egokitzeko adina ez dela izango 56 urtetik beherakoa (Ertzaintzan bezala). Hori eskatzeko arrazoia da, nahiz eta positibotzat jotzen den tokiko autonomia errespetatzea, komenigarria dirudiela legeak erreferentziako edo gutxieneko adina ezartzea.

Bestalde, **EUDELe**k proposatu du udaltzaingoan ere aukera egon dadila egokitutako zerbitzu aktibora atxikitzen diren funtzionarioek erretiro aurreratua eskatzeko konpromisoak barneratzeko, eta 85.4 artikuluan jaso dadila aintzatespen horren ondorio ekonomiko eta administratiboak tokiko araudian ezarriko direla.

UGT sindikatuak proposatu du Ertzaintzarako aurreikusitako egokitzapenaren araudi zehatza udaltzaingoetara ere hedatzea dadila nahitaez.

ERNE sindikatuak eskatu du ezaba dadila polizia-zerbitzuan jarraitzeko bermearen baldintza 85.4 artikuluan ezarritako adina dela-eta lanpostua egokitzeko arauditik.

EUDELek iradoki du egokitutako zerbitzu aktibora pasatzeko aukeratik kanpo uztea udaltzaingoetako goi-mailako eskalako eta eskala fa kultatiboko langileak.

ERNE sindikatuak proposatu du, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboko funtzionarioak aldi batez destinorik ez duen bitartean, ordain diezazkiotela egoera horretara igarotzerakoan jasotzen zituen ordainsariak, eta ez gaur egun egiten dena eta proiektuak ezartzen duena; alegia, ez ordaindu berariazko osagarriaren osagai berezia.

Azkenik, zerbitzu aktiboa adina dela-eta egokitzeari dagokionez, **ERNE** sindikatuak eskatu du 194/2012 Dekretuan ezarritako idazketa jaso dadila legearen testuan.

- Bigarren jardura:

ERNE sindikatuak iradoki du bigarren jarduerako egoerara pasatzeko aukera ematea fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileei.

UGT sindikatuak uste du araudia asmo handikoa dela (laudorio moduan, agian), baina ez dela eraginkorra udaltzaingoetan akordio instituzionalik egiten ez bada. Ez du esaten, ordea, zer eratako akordioak izan behar luketen.

EUDELek proposatu du bigarren jarduerako egoerara pasatzeko ebaluazio-epaimahairen osakeran (86.3 art.) fakultatiboetako bat interesdunak proposatutakoa izan dadila edo, bestela, ordezkari sindikalek proposatutakoa.

Bigarren jarduerako egoerara pasatuz gero jaso beharreko ordainsariei dagokienez, Saileko langile-zerbitzuek iradoki dute ezaba dadila ordainsariak arau bidez ezarriko direlako erreferentzia. Izan ere, araua bada administrazio-egoera horretan lanpostua betetzen dela, erreferentziazko ordainsariak lanpostuari dagozkionak izango dira. Egokia dirudi arrazoibideak.

Bigarren jarduerako ordainsariekin jarraituz, **ERNE**k proposatu du 86.7 artikuluan ezar dadila ordainsariak ez direla izango administrazio-egoera horretara pasatu aurretik zegozkienak baino txikiagoak.

UGT sindikatuak bermearen osagarriari buruz (87. artikulua) proposatu du, egokitutako zerbitzuan edo bigarren jardueran dagoen funtzionarioa salbuespen gisa eta aldi batez aldatu geratzen bada beste lanpostu bat eskaintzen edo egokitzen zaion arte, aldi baterako osagarri pertsonal gisa jasotzen zuen guztia ordain diezaiotela, ez bakarrik Ertzaintzaren kasuan, baizik eta baita udaltzaingoen kasuan ere.

EUDELek proposatu du ezaba dadila 20. xedapen gehigarria, bigarren jardueran udaltzainek poliziarenak ez diren lanpostuak betetzeko aukera izateari buruzkoa. Haren iritziz, ez da beharrezkoa legean sartzea, udalen antolaketa-ahalmenak onartzen baitu atxikipen hori.

j) Diziplina-erregimena:

- Faltak.

92.2.b) artikulua dela eta, **ERNE**k exijitu nahi du tratu gizagabea bereziki larria izan dadila, falta oso larritzat har dadin.

92.2.g) artikuluko faltari dagokionez, **ERNE**k proposatu du “behin eta berriro edo jarraian” gehitzea funtzioak nabarmen ez betetzeari. **UGTk** proposatu du errendimendu-falta “ziurtatua” izan dadila, eta ez “nabaria”.

92.2.l) artikuluari dagokionez, **ERNE**k proposatu du ez daitezela areagotu jokabide larriak oso larrietara behin eta berriro gertatu izanagatik, erantzukizuna banakatu egin behar baita falta bakoitzean.

Emakundek iradoki du “jazarpen sexista edo sexuagatiko jazarpena lanean” esamoldea gehitzea 92.1bis artikuluko falta oso larrien artean, Berdintasun Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, irizpide hori jasotzen baitu. Bere horretan onartu da.

- Zehapenak:

ERNE sindikatuak areagotu egin nahi ditu falta arinengatiko zehapenak. Gaur egun, 1 eta 4 egun bitartean kentzen dira lana eta soldata, baina, sindikatuak proposatu duenez, 14 egunez ere kendu ahal izango dira. Era berean, falta larriengatiko zigorra ere areagotu nahi du, gutxieneko zehapena 15 egunekoa izatea nahi baitu. Bestalde, eskatu du ken dadila “ordainsaria galtzea” erreferentzia eginkizunez gabetzen direnean.

- Graduazioa:

ERNE sindikatuak ohartarazi du 94. artikuluko e) eta h) letrak ia berdinak direla.

ERNEk uste du, zehatzerakoan zigor penalaren garrantzia haztapen-irizpide gisa hartu ordez, hobe litzatekeela doluzko delituaren falta oso larria aldatzea. Horrela, askatasunaz gabetzeko zigorra dakarren doluzko delituagatiko zigor-kasuak soilik zehatuko lirateke diziplina-bidetik kausa horrengatik, delitua zerbitzuarekin erlazionatuta badago edo Administrazioari nahiz pertsonen kalte larriak eragiten badizkie. Halaber proposatu du berariaz sartzea ordezkari sindikalaren erreferentzia espedientepeko funtzionarioari 95.2.bis artikuluan aipatzen den konfiantzazko pertsonaren laguntza jasotzeko eskaintzen zaion aukerari.

- Preskripzio-epeak:

ERNEk preskripzio-epeak laburtzea proposatu du, 3 urtetik (oso larria), 2 urtetik (larria) eta 3 hilabetetik (arina) urtebetera (larriak) eta hilabetera (arinak). Baita zehapenen preskripzio-epeak ere. **UGTk** proposatu du hilabeteko epean preskriba daitezela falta eta zehapen arinak.

- Betearaztasuna eta betearazpena:

ERNE sindikatuak iradoki du gehi dadila zehapenaren bet earaztasuna kautelaz eteteko aukera arautzen duen manuan (97 BIS art.) interesdunak berariaz hala eskatzen badu soilik aplikatuko dela kautelazko etenaldia.

ERNEk iradoki du gehi dadila 97 ter artikuluan, zehatutakoari ahalik eta kalterik txikiena eginez betearazteko printzipioari buruzkoa n, unitateko buruzagitzarekin hitzarmena egiteko aukera.

ERNEk proposatu du bost urtekoa izan dadila (eta ez seikoa) zehapenen multzoaren muga 97 TER 3 artikuluan, eginkizunak kentzeko zehapen bat baino gehiago betetzeari buruzkoan. Hortaz, adibidez, launa urteko bi zehapen jarri eta eginkizunak kentzen badizkirate, bost urte baino ez nintzateke egongo zigortuta, eta ez zortzi.

97 ter 5 artikuluari dagokionez, **EUDELe**k proposatu du jaso dadila zehapena betetzeko ordezkot neurria ez dela izango, besterik gabe, zehatutakoaren eskubidea, baizik eta administrazioak onartu egin beharko duela, bestela, zehapenak eredu garri izateari utziko liokeelako.

97. artikuluari dagokionez, **ERNEk** esan du aparteko lana alta-egoeran egiten dela eta kotizatzen dela Gizarte Segurantzari. Ez dirudi esplizitatu behar denik, langilea zerbitzu aktiboan baitago, eta ez eginkizunez gabetuta.

k) Funtzionarioen partaidetza, negoziazioa eta Ertzaintzaren Kontseilua.

ERNE sindikatuak proposatu du 99.5 artikulua aldatzea, Ertzaintza osorako hautesbarruti bakarra ezartzeko polizia-kidego horretako ordezkarien hauteskundeetan (gaur egun, hiru hautesbarruti daude).

ERNEk eskatu du Ertzaintzaren negoziatio-mahaiaren eskumen eskusiboa izan daitezela negoziatu beharreko gai guztiak, eta ez administrazio-mahai orokorrarena.

l) Udaltzainak

- Lurraldez kanpoko jarduna:

AJEPL-EUBEk proposatu du lurraldez kanpo jarduteko aukera sar dadila polizia-zerbitzuak eskaintzeko egiten diren lankidetza-hitzarmen edo elkartzeetan.

- Sarrera eta hautapena:

EUDELek proposatu du jasota geratzea gutxienekoak izango direla 50.1 artikuluan aipatzen diren udaltzaingoetan sartzeko oinarritzko arauak.

- Fakultatiboen eta teknikarien eskala:

EUDELek proposatu du udaltzaingoan ere fakultatiboen eta teknikarien eskala sortzea.

- Polizia judiziala:

EUDELek eta Oinarritzko Arauaren Taldeak proposatu dute beste artikulua bat gehitzea, PLEAn polizia judizialari buruzko prestakuntza emateko udaltzainei. **AJEPL-EUBEren** iritziz, legean jasota egon behar luke PLEAk aukera duela ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko prestakuntza-jarduera espezifikoko antolatze, LOSSPEren 44.3 eta 44.4 artikuluetan aipatutako lankidetza-hitzarmenak sinatu dituzten udaltzaingoentzat gutxienez.

- Eskalak eta kategoriak:

EUDELen ustez, kidegoan sartzeko C1 taldea eskatzeak garbi uzten du egungo sailkapen-ereduak ez duela funtsik. Hala ere, komenigarritzat jotzen du erregimen iragankorra ezartzea C2 agente plaza dutenentzat (C1 agenteekin parekatu dira orain, baina askok ez dute titulurik). Izan ere, plazak C1 izatera pasatzen badira, birsailkapenak ez du ondorio ekonomiko gehigarririk izango, dagoeneko onartu baitzitzaizkien. Bestalde, kontuan izan behar da egungo bitartekoak ez daudela C2 kategorian sailkatuta ere.

AJEPLE-EUBEK eskatu du goi-mailako eskala eta betearazpen-eskala A1 gisa sailka daitezela (aurreproiektuan A2 dira); ikuskapen-eskala, A2 gisa (aurreproiektuan, C1); eta intendente-kategoria nahitaezkoa izan dadila 150.000 biztanle baino gehiago edo 200 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan (aurreproiektuan, “y”).

Irizpide hori ez dator bat **EUDELen** iritziarekin, egitura berriak hierarkizazio handiegia dakarrela esan baitu.

EUDELeK argudiatu du egitura berriak, gaur egungoak baino goragoko kategorietako buruzagitza-lanpostu berriak ez ezik, bitarteko kategoria guztiak ere sortzera behartzen duela. Hori dela eta, baliteke langile kopurua handitzea eta kostuak igotzea, eta horrek eragina izan dezake euskal udal guztien edo batzuen aurrekontu-egonkortasunean eta finantza-iraunkortasunean. Horren ildotik uste dute, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen arabera, legegileak finantza-eragin hori kalkulatu behar lukeela, eta udalerrak baliabideez hornitu, diru nahikoa dutela bermatzeko.

- Udaltzaingoko buruzagitza:

119. artikuluari dagokionez, **EUDELeK** dio kontuan izan behar litzateke ELA-Udaltzaingo guztiek ez dutela (eta ez luketela izan behar) pertsona bakarreko buruzagitza profesionala; Bilbo da horren adibide.

Artikulu hori bera dela eta, **AJEPLE-EUBEK** dio zehaztu egin behar dela nola betetzen diren buruzagitza-lanpostuak izendapen aske bidez kidegoaren kategoria gorenetan dauden kidegoko bertako funtzionarioen artean, eta kategoria hori egon ezean soilik beteko liratekeela lanpostu horiek EAEko poliziako beste kidego batzuetako kideekin.

EUDELeK 5. xedapen iragankorra aipatu du, udaltzaingoetako zenbait langile goi-mailako eskalan integratzeari buruzkoa. Elkartearen ustez, transformazio automatikoko irizpideak ezarri behar lirateke.

AJEPLE-EUBEK proposatu du buruzagitzak egokitze epea 3 urtetik 2 urtera murriztea, baita denboraldi jakin batean behin betiko destinoa izan beharra ere, 5 urtetik 4 urtera. Ez da onartu, arrazoizko epeak direla uste baita.

AJEPLE-EUBEK eskatu du, integrazioa eginez gero, oinarrizko ordainsariak handi daitezela, eta ez daitezela geratu osagarrietan jasota.

- Bitarteko funtzionarioak:

ERNEK proposatu du debeka dadila udaltzaingoetan bitarteko funtzionarioak izendatzea (25. artikuluan, karrerako funtzionarioen baldintza sartzeari; eta zioen

azalpenean eta 120. artikuluko 1. eta 3. paragrafoetan, bitarteko funtzionarioen aipamenak kentzea).

- Mugikortasun-agentek:

UGT ez dago ados figura horrekin, eta, haren ordez, udaltzaingoetako plantillak indartzeko eskatu du.

Bestalde, **EUDELe**k nahi du ez dadila biztanle askoko udalerrietara mugatu, eta zabal dadila edozer udalerritara edo legeak zehaztutakoa baino biztanle kopuru handiagoko udalerrietara (edo horretarako aukera egon dadila). Oinarrizko Arauaren Taldeak proposatu du ezaba dadila figura sortzeari buruz esandakoa; alegia, “udaltzain kopurua ez handitzea, ezta langile-kostuak ere”.

- Aguazilak:

UGT sindikatuak proposatu du figura ezabatzea eta udaltzainen mankomunitateak sortzea.

Euskadiko Aguazilen Elkarteak zenbait alegazio egin ditu:

- Ondorio guztietarako, poliziako agentetzat har ditzatela nahi dute, eta udaltzainen eginkizun guztiak izan nahi dituzte: atestatuak bideratu zauriturik gabeko istripuetan, polizia judizialeko eta delituaren prebentzioko eginkizunetan parte hartu.
- Armak eraman nahi dituzte, edo horretarako aukera izan.
- Udaltzainen uniforme bera eraman nahi dute, baina, polizia jarri ordez, aguazil jarrita.
- C1 sailkapen-taldera pasatu nahi dute, eta erretiroa 60 urtetan hartu ahal izatea.

Azkenik, **Aguazilen Elkarteak** bi alderdi nabarmendu ditu legea indarrean sartu aurretik aguazil gisa ibilitako lan-kontratudun lan gileei buruzko xedapen iragankorraren inguruan: a) egoera horretan dauden bitartean agintaritzaren agentetzat hartuko diren argitzea; eta b) 3 urteko epea finkatzea barne-sustapen bidez funtzionario bihurtzeko.

2) Negoziazio-fasean sindikatuak egindako proposamenak.

a) Poliziaren jarduna kontrolatzeko mekanismoak:

CCOO sindikatuak eskatu du ezaba dadila jardunbide egokiaren batzordea, edo, bestela, hau gehitu:

- Operatibo polizialetan, Ertzaintzaren agente-kateak emandako agindu guztiak argitara daitezela, gertakari bakoitza baino lehen, eta xehetasun guztiak adierazi: nork ematen dituen eta nola jokatu behar den, eta zer arrisku-maila dagoen. Horren berri eman zaie Ertzaintzaren Kontseiluan ordezkaritza duten sindikatuak.
- Emandako aginduak baloratzeko, batzordea sortuko da; bertan, Polizia Kontseiluan ordezkaritza duten sindikatuak parte hartuko dute, ordezkaritza banarekin. Kontseilu hori ez dago, baina baliteke Ertzaintzaren Kontseiluari buruz aritzea.

- Jardunbide Egokien Batzordeari dagokionez, proposatu du bertako kideen erdiak ikertutako ertzainen lanpostu eta kategoria bereko ertzainak izatea, gutxienez 5 urtez, baita ordezkari sindikal bat ere.

ELA-Ertzaintzak esan duenez:

- Jardunbide Egokien Batzordean, kideen erdiek Ertzaintzako funtzionarioak izan behar dute, eta gutxienez 15 urte eraman behar dituzte kidegoan.
- Ofizioz edo agintariak hala eskatuta esku hartzeaz gain, Batzordeak esku hartu ahal izan behar du, baita ere, Legebiltzarreko talderen batek edo Arartekoak hala eskatuz gero.
- Txostena eman aurretik, Ertzaintzaren Kontseiluari entzun behar zaio.

Gainera, **ELA-Ertzaintzak** proposatu du eman dadila zerbitzuaren antolaketan izandako gorabeherari buruz Ekinbideak jasotzen dituen kexen berri, eta entzun dakiela ordezkariak duten erakunde sindikalei (7.3 art.).

ELA-Udaltzaingoak proposatu du ezaba dadila udalerriek kudeaketa Ekinbideren esku uzteko 7.2 artikuluan jasotzen den aipamena.

b) Ertzaintzaren Kontseilua:

ELA-Ertzaintzak proposatu du Kontseiluari funtzio hauek egokitzea:

- Falta oso larri edo larriengatik funtzionarioen aurka bideratzen diren espediente guztien berri eman, eta espedientepekoari eskubidea eman Kontseiluak entzun diezaion. Baita zer espediente hasi diren, nola ebatzi diren eta birgaitzeak onartu diren ala ez ezagutzeko gaitasuna ere (17.d art.).
- Zerbitzu-egintzako espedienteetan entzuna izan, uko a jaso duen eskatzailea bere borondatez aurrean dela, eta, orobat, dominak ematerakoan eta ohorezko sustapenerako aintzatespenetan entzuna izan (17.i art.).

CCOO sindikatuak hau proposatu du:

- Ertzaintzaren Kontseilua, kontsulta-organoa izan ordez, beste negoziazio-mahai bat izatea, Ertzaintzaren jardunetan segurtasunarekin zerikusia duen guztiaz ardura dadin.
- Ertzainen aurkako salaketak egin dituzten herritarak auzitara eramateko ahalmena izatea, salaketek ez badute zigorrik ekarri eta salatutako ertzainak absolbitu egin badira. Ahalmen hori ez luke Kontseiluak izango, baizik eta bertako ordezkariak sindikalak.

c) Polizien babes juridikorako eskubidea

ELA-Udaltzaingoak proposatu du funtzionarioarekin “adostea” administrazioak eskaintzen dion babesa (37.2 art.).

d) Hizkuntza-normalkuntza

CCOO sindikatuak hau proposatu du:

- Urtean gutxienez 100 polizia trebatzea hasieratik. Antzintasun-irizpidearen arabera hautatuko lirateke boluntarioak.
- Hamargarren xedapen iragankorra: Ertzaintzako lanpostuetan derrigortasun-data berriak jartzeko debekua, harik eta hala eskatzen duten Ertzaintzako funtzionario guztiek hutsetik liberatzeko aukera ez duten hizkuntza-eskakizuna lortzeko.
- Hamaikagarren xedapen iragankorra: Lehiaketetan, euskararen gehienezko balorazioa, merezimendu gisa (hau da, lehiaketako puntu guztien % 3), harik eta hala nahi duten funtzionarioak hutsetik liberatu arte.

ELA-Udaltzaingoak *erakunde bakoitzeko euskalduntze-planak* aipatzen ditu hizkuntza-gaikuntzari dagokionez. 39.1 artikulua

e) Prestakuntza

CCOOk proposatu du PLEA behartzea polizia bakoitzari jakinaraz diezaion zer prestakuntza-eskaintza osatu behar duen, eta ikastaroak bukatzean haiei buruzko dokumentazioa eman diezaion.

ELA-Ertzaintzak hau proposatu du:

Legeari berariaz aipatzea polizia gaituko dela gizarte-eskubideen arloan (besteak beste, grebarako eskubidea eta etxebizitzarako eskubidea) (30 bis 3 art.).

Zentro ofizialetan edo polizia-zentroetan emandako ikastaroak soilik baliozkotuko direla gehitzea (40.2 art.).

Legeak ezartzea administrazio bakoitzak arauz ezarriko duela, negoziazioa egin ondoren, urteko gutxieneko prestakuntza. 39. artikulua

f) Urteko enplegu-eskaintza

CCOO sindikatuak proposatu du urtero egitea deialdiak plantilla osoa betetzeko, baita oinarritzko ikastaroa amaitu aurretik erretiroa hartuko dutenen kopurua ere.

CCOO sindikatuak proposatu du 3 hilabeteko epean egin daitezela barne-sustapenerako deialdiak edo espezialitadedun plaza betetzeko deialdiak, plaza hutsen kopurua kategoria edo espezialitateko plazen % 10 baino handiagoa denean (46. art.).

g) Aukera-berdintasuna sustatzeko neurriak.

ELA-Udaltzaingoak proposatu du, hautapen-prozeduretan 3 plaza baino gutxiago eskaintzen direnean, gutxieneko portzentajea ez dadila zertan izan % 25 baino txikiagoa; bestela, plaza guztiak emakumeentzat gorde beharko lirateke.

ELA-Ertzaintzak proposatu du ez dadila aplikatu berdintasun-legea lanpostuak betetzeko prozeduretan (47 bis art.). Ezin da onartu. E).

h) Kidegoan sartzea:

Bai **ELA** sindikatuak bai **CCOO** sindikatuak proposatu dute ezaba dadila kidegoan sartzeko gehienezko adina.

Bestalde, **ELA-Udaltzaingoak** hau proposatu du:

- Baterako deialdien kasuan, arau bidez zehaztea epaimahaien osaera eta plazak esleitzeko formulak (50.3 art.).
- Prestakuntza-ikastaroaren eta praktikaldiaren iraupena, oro har, ez dadila izan 24 hilabetetik gorakoa; ikastaroa 6 eta 9 hilabete bitartekoa izatea, eta praktikaldia ez izatea 12 hilabetetik gorakoa. Gaur egun, legeak 30 hilabete aipatzen ditu (52.1 art.).

i) Barne-sustapena:

CCOO sindikatuak proposatu du ezaba daitezela barne-sustapenerako gaitasun-ikastaroak (art .59.2).

Era berean, **CCOO** proposatu du 3 hilabeteko epean egin daitezela barne-sustapenerako deialdiak, plaza hutsen kopurua kategorioa edo espezialitateko plazen % 10 baino handiagoa denean. Eta ezabatu dadila barne-sustapenerako 3 deialdien muga (dagoeneko ageri da proiektuan).

ELA-Ertzaintza sindikatuak proposatu du barne-sustapenean parte hartzeko aukera ematea 2 hilabetetik gorako falta egin eta zigorra jaso dutenek (alegia, eginkizunetz gabetuta egon direnek) (59.1.a, b, c eta d art.).

j) Lanpostuak betetzea:

CCOO sindikatuak proposamen hauek egin ditu:

- Eginkizunetz gabetzeko zehapenek inoiz ez izatea ondorioz antzinasunaren merezimendua kontuan hartzean lanpostuak betetzeko prozeduretan.
- Izendapen askeko prozedura goi-mailako eskalako lanpostuetara mugatzea (65.3 art.).
- Lehiaketa berrian parte hartu ahal izateko azken esleipenetik gutxienez 2 urte igaro izanaren baldintza kentzea 69. artikulutik.
- Lanpostua utzi dutenen edo lanpostutik kendu direnen lehiaketetan aurreko lanpostuaren herri berean dagoen lanpostua lortzeko lehentasuna kentzea (71.2 art.). Ez daude ados oraingo interpretazioarekin; alegia, lehengo lanpostutik 30 kilometroko ingurura egotea lanpostu berria. Ondorio horietarako, herri bera zer den zehaztea: kendutako lanpostuaren udal mugartea eta, herri horretan unitaterik egon ezean, herri horretaz arduratzen den komisaria.
- Unitateen arteko zerbitzu-eginkizunak biltzea, lanpostuko antzinasuna eta kategorian sartzeko puntuazioa hartuta berdintasuna hausteko irizpide gisa (71.1.2 art.).

ELA-Ertzaintza sindikatuak aldaketa hauek egitea proposatu du lanpostuak betetzeari dagokionez:

- Izendapen askeko prozeduretarako “goi-zuzendaritza ko” lanpostuak soilik erreserba daitezela, eta ez zuzendaritzakoak edo erantzukizun berezikoak (65.3 art.).
- Lanpostuen zerrendan iraupen maximoko baldintza ez artzen bada soilik eskatzea iraupen-konpromisoa (43.2 art.).
- 71.3 artikuluan jasota gera dadila, gaur egun bezala, aldi baterako osagarria emango zaiela lanpostua ezabatzearen ondorioz behin-behinean atxikita daudenei, parte har dezaketen lehenengo lehiaketa ebazten den arte.

ELA-Udaltzaingoak hau proposatu du:

- Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legean agertzen den maila pertsonala aipatzea 65.2 artikuluan.
- Trukearen arauak berriro sartzea, eta ez aplikatzea udaltzainen artean soilik, baizik eta baita EAEko poliziaren edozein kidegotako funtzionarioen artean ere.

k) Lanbide-karrera:

ELA-Ertzaintza sindikatuak aldaketa hauek proposatu ditu:

- Lanbide-karreraren eraginkortasuna ez egotea aurrekontuetan erabilgarri dauden baliabideen arabera (73.ter.2 artikulua).
- 73.ter.5 artikuluko numerazio-akatsa zuzentzea.
- Maila finkatua galtzeko aukeraren aipamena ezabatzea (73.ter art.).

Gainera, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du 2 urteko epea ezar dadila lanbide-karrerako sistemak ezartzeko (73.TER.1 artikulua).

l) Betebeharrak:

CCOO sindikatuak proposamen hauek egin ditu:

- Bizitokia bertan izateko betebeharra ezabatzea (76. artikulua).
- Bateriaezintasunen erregimena (78.2 artikulua). Haien ustez, ez da beharrezkoa aldaketarik egitea, murriztailea delako.
- Bateriaezina da armadako erreserbista izatearekin. Haien iritziz, “harro egon behar genuke” Ertzaintzako agenteek armadarekin konpromisoa hartzen dutela ikusita. Baina, haien aburuz, erreserbista izatea bateraezina da zerbitzu aktiboarekin Euskadin krisialdiak edo larrialdiak daudenean.

Bestalde, **ELA-Udaltzaingoak** uste du EAEko poliziako kide guztiei aplikatu behar zaiela zerbitzu aktiboan egotearen eta erreserbista izatearen arteko bateraezintasuna (78. artikuluko 2. paragrafoa / 3. paragrafoa).

m) Ordainsariak.

ELA-Ertzaintzak proposatu du, goragoko kategorietako zerbitzu-eginkizunetan, funtzionarioak eskubidea izan dezala ordainsari osagarria jasotzeko nagusia de facto ordeztu duenetik, eta, zerbitzu-eginkizun horretan 3 urte ematen baditu, finka dadila goragoko kategorian jasotzen den destino-osagarria (74.a art.).

n) Jardunaldia eta oporraldia:

ELA-Udaltzaingoak proposamen hauek egin ditu:

- 75. art.: Gehitzea oporraldia ez dagoela soilik zerbitzuaren beharren arabera, baizik eta baita lan-baldintzak arautzen dituen indarreko hitzarmenaren arabera ere.
- 77.1 art.: Gehitzea jardunaldia eta atsedenaldeen erregimena, ordutegia eta jaiegunak negoziazio kolektiboaren bidez ezarri behar direla.
- 77-2 art.: Amaieran gehitzea *salbuespen horiek konpentsatu egingo direla, dagokion erakundeko lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmenean ezarritakoaren arabera.*

o) Laneko arriskuen prebentzioa

ELA-Udaltzaingoak proposatu du 3. paragrafoa gehitzea 79. artikuluan eta, bertan, zehatz-mehatz jasotzea gutxienez zer arrisku hartu behar diren kontuan laneko arriskuei aurrea hartzeko planetan.

p) Gizarte-babes osagarria

Dirudienez, ELA sindikatuak proposatu du, hirugarrenen legez kontrako ekintzek eragindako ezintasunagatik funtzionarioak nahitaezko erretiroa hartu behar badu, aldi baterako prestazio ekonomikoaz gain, kalte-ordaina ere jaso dezala, lanpostuan jasotzen zituen ordainsari osoen bi urterokori dagokiona, heriotzagatiko kalte-ordainekin parekatzeko (79 ter art.). 4. Proposamena ez dago ondo emana, heriotza-kasuetarako ezarritakoa erabiltzen baitu.

q) Administrazio-egoerak:

- Behin-behineko eginkizun-gabetzea

ELA sindikatuak proposatu du ezaba dadila behin-behineko eginkizun-gabetzean jasotakoa behin betiko bihurtzen denean (84.5 art.).

CCOO sindikatuak proposatu du ezaba daitezela 84. artikuluko 5. eta 6. zenbakiak (eginkizun-gabetze irmoa, behin-behinekoa izan ondoren).

- Egokitutako zerbitzu aktiboa.

ELA-Udaltzaingoak 85.4 artikulua ezabatzea proposatu du. Ez dute nahi adina delata eta egokitutako zerbitzu aktiboa, baizik eta adinaren araberrako bigarren jarduera, proposamen honi jarraiki: Erretiroa hartzeko ohikoa den legezk adina izateko 10 urte falta zaizkien udaltzaingoko funtzionarioek (goi-mailako eskalakoak edo betearazpen-eskalakoak izan ezik), beren borondatez, bigarren jarduerara pasatuko lirateke. Hori eginez gero, hutsik utzi behar lukete uneko plaza, baina kidego berean lan egin, gauez izan ezik (kidego bakoitzean bigarren jarduerako lanpostuen katalogoa egongo litzateke, plantilla zabaldu gisa), edo administrazioko beste lanpostu batzuetan eman behar litzateke zerbitzuak; hori guztia gorabehera, bigarren jardueran hasi baino lehen kobratzen zutena kobratuko lukete. Hala ere, erretiroa hartzeko ohikoa den legezk

adina izateko 5 urte falta zaizkienean, bigarren jarduerara pasatuko lirateke, destinorik gabe (eta lanik egin gabe, non eta, salbuespen gisa, ez zaien herritarren segurtasunarekin erlazionatutako arrazoiengatik dei egiten), eta bigarren jardueran hasi baino lehen kobratzen zutena kobratuta. Dioenez, haien ordainsariaz udala arduratuko litzateke; eta erretiro aurreratua hartu duena ordeztzeko kostuez (plaza hutsak betetzeko soldatez), berriz, Eusko Jaurlaritza. Proposamena zurtzeko dio aldi baterako neurria izango litzatekeela, gizarte-segurtasunerako legeriak udaltzainen erretiro aurreratua aurreikusten ez duen bitartean.

Horrekin nolabait kontraesanean, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du ez dezala udal bakoitzak ezarri egokitutako zerbitzu aktibora borondatez pasatzeko adina udaltzainen kidegoan, baizik eta, legez, 56 urtetan finka dadila, edo negoziazio kolektibo bidez erabakitzen den adin txikiagoan.

- Bigarren jarduera:

ELA-Ertzaintza sindikatuak aipatu du bigarren jarduerako beste hitzarmen bat negoziatu behar litzatekeELA-Ertzaintzan, baina ez du proposamen zehatzik egin, aztertu ahal izateko.

Nahi abstraktua azaldu arren, sindikatuak berak, egindako alegazioen bidez, eta **ELA-Udaltzaingoak** proposamen hauek egin dituzte:

- 86.2. art.: Ez dadila aukerarik egon bigarren jarduerara pasatzeko prozedura hasteko gaitasun psikofisiko nahikorik ez dagoenean.
- 86.3. art.: Bigarren jarduerara pasatzeko ebaluazio-epaimahaiak ez dezala osaera egonkorra izan, baizik eta kideetako bat espediente bakoitzeko interesdun bakoitzak izenda dezala.
- 86.5.2 art.: Ez dira aipatzen udalak udaltzaingoez hitz egiterakoan.
- 86.6.2 art.: Gehi dadila baldintzak berberak izango direla udaltzaingoetan eta Ertzaintzan, borondatezko erretiro aurreratua hartzeko araudia bi kidegoetan parekatzen duenean Gizarte Segurantzak.
- 86.7. art.: Bigarren jarduerako langileek oinarritzko ordainsariak eta ordainsari osagarriak jaso ditzatela, ordainsari osoak murriztu gabe.
- Hamaikagarren xedapen iragankorra. 2 urteko epea, udal bakoitzak bigarren jarduerari buruzko araudia presta dezan.

CCOO sindikatuak proposatu du aldi batez destinorik gabe eta altan dagoen bigarren jarduerako edo egokitutako zerbitzu aktiboko funtzionarioek betetako azken lanpostuko ordainsariak jasotzen jarrai dezatela, berariazko osagarri berezia izan ezik, zerbitzu aktiborako aurreikusitakoetatik txikiena (berariazko osagarri berezia, 11).

r) Diziplina-erregimena:

ELA-Ertzaintza sindikatuak esan du diziplina-erregimena administrazioaren gainerakoan aplikatzen denarekin parekatu behar litzatekeela, baina ez du zehazten zer zentzutan.

Hona hemen **ELA** sindikatuaren beste proposamen batzuk:

- 92.2.g) art.: Errendimendu-falta eta funtzioak nabarmen ez betetzea izango dira diziplinazko falta, baldin eta aurrez jokabide horien ondoriozko informazio-espedientea egon bada (95.5 art.). Iraungitze-epea 3 hilabetera murrizt dadila
- (97.2. eta 97.3. art.). Falta eta zehapen larrien preskripzio-epeak 18 hilabetera murrizt daitezela, eta arinenak, berriz, hilabetera.

CCOO sindikatuak proposatu hilabetera murrizt dadila (3 hilabetetik) falta arinen preskripzio-epea (97.2. eta 3 art.).

s) Langileen ordezkariak eta negoziaketa kolektiboak:

CCOO sindikatuak hau proposatu du:

- 99. art.: Hautapen-sistema zerrenda irekiak izan daitezela.
- 101.1.d) art.: Langileen ordezkari bakoitzak kudea dezala ordu-kreditua, eta ez erakunde sindikalek. Ordezkariak berak laga ahal izango du, edo lagapena bertan behera utzi.
- 103.3. art.: Audioan eta bideoan graba daitezela, nahitaez, negoziaketa-mahaiaren bilerak, eta sailaren intranetean jar daitezela funtzionarioen esku.

ELA-Ertzaintza sindikatuak proposatu du hau gehi dadila 104.5 artikuluan: "indarreko hitzarmenak alde bakarrez indargabetu nahi badira, onarpena eman beharko du Eusko Legebiltzarrak".

t) Egitura profesionala:

ELA-Ertzaintzak nahi du 105.2.c) artikuluan jasota gera dadila, laneko praktikaldian, C1 sailkapen-taldearen arabera ordainduko zaiela izangaiei. Bistakoa denez, legea onartu ondoren, hala izango da, ezin izango bailitzaieke beste edozein talderen arabera ordaindu (prozesuan parte hartzeko, C1 titulu eskatzen zaie).

Egitura profesionalari dagokionez, **ELAUdaltzaingoak** nahi du unibertsitateko titulua eska dakiela agenteak edo agente lehenak ez diren udaltzain guztiei. Ez dago garbi ELA sindikatuak irizpide bera aplikatzen duen Ertzaintza ere, edo, bestela, halako egitura-desberdintasuna egotea nahi duen euskal polizia-kidegoen artean.

ELA-Ertzaintzak nahi du aginduzko aditza erabil dadila 112. artikuluan, polizia judizialeko funtzionarioak epaitegi zehatzetara betiko atxikitzeko aukerari buruzkoan.

u) Udaltzainak:

- Izena:

ELA-Udaltzaingoak proposatu du "Udaltzaingoa / Policía local" izendapen bakarra erabil dadila udaltzaingoez hitz egiteko. Horren il dotik, 2. artikulua eta 24.3 artikulua aldatzea proposatu du.

- Erakunde armatua

ELA-Udaltzaingoak proposatu du paragrafo bat gehitzea 25. artikuluan, “erakunde armatua” kontzeptua eta su-arma eramateko edo ez eramateko betebeharra argitzeko. Hala ere, proposatutako testuak besterik gabe dio arau bidez ezarriko dela polizien hornidura, besteak beste, *su-arma, bastoia eta gainerako ekipamendua, baita haiek erabiltzeko prestakuntza teoriko eta praktikoa ere, bitartekoak homogeneizatzeko.*

- Funtzioak

26.3 artikuluari dagokionez, **ELA-Udaltzaingoak** esan du udaltzaingoek antolamendu juridikoaren bidez segurtasun-kidego eta -indarrei egokitu zaizkien funtzioak beteko dituztela, baita legeak berariaz ezartzen dizkienak ere.

ELA-Udaltzaingoak proposatu du udaltzaingoetako funtzionarioak atxiki daitezkeela polizia judizialeko edo ikerketa kriminaleko unitat era, eta, horretarako, aukera eman dadila funtzionarioek ikerketa kriminalaren eta polizia judizialaren arloko prestakuntza espezifiko jaso dezaten, Ertzaintzari eskaintzen zaizkien baldintza berberetan.

- Aguazilak

ELA-Udaltzaingoak proposatu du argi eta garbi zehatz dadila zer funtzio dituzten aguazilek, 27.1 artikuluan aipatzen diren udaltzain en funtzioetatik bereizi beharrik izan gabe.

- Egitura profesionala

ELA-Udaltzaingoak proposatu du A2 azpitaldean sar dadila ikuskapen-e skala, eskala horretan barnera daitezela, *automatikoki, egungo ofizialordeak eta ofizialak, unibertsitateko titulua izan gabe ere, eta 4 urteko antzinatasuna duten agente lehenek aukera izan dezatela, titulua izan gabe ere, ikuskapen-eskalara sustatzeko* (118.2.b) artikulua eta hamargarren xedapen iragankorra).

ELA-Udaltzaingoak proposatu du legez ezar daitezela kategoria guztietako ratioak: bi agente mila biztanleko; agente lehen bat lau agenteko; ofizialorde bat lau agente leheneko; ofizial bat bi ofizialordeko; komisariorde bat bi ofizialeko; eta komisario bat eta bi komisariordeko (118. artikuluko 7. eta 8. zenbakiak).

- Bitarteko funtzionarioak

ELA-Udaltzaingoak ez du esan bitarteko langileen kontra dagoenik, bai na, bere ustez, aldi baterako edo aldi jakinetako aparteko beharrak estaltzeko erabili behar dira, plantillako langileen plaza hutsak betetzeko (120.1 art.). Sindikatuaren iritziz, 120.3 artikuluan, udaltzaingoko lan-poltsak sortzeari buruzkoan, berariazko deialdien bidez osatu behar dira lan-poltsak, eta ez Ertzaintzan sartzeko deialdiak gainditu bai baina plazarik ez dutenekin.

- Mugikortasun-agentek

ELA-Udaltzaingoak proposatu du ezaba dadila 121.1 artikuluko aipamena, hain zuzen ere, funtzionarioen kidegoak sortzerakoan, “*ez dadila handitu udaltzain kopurua, ezta langile-kostuak ere*”.

3) Txosten eta irizpenetatik ateratako oharrak.

a) Hizkuntza Politikaren txostena:

Txostenak ondorioztatu du aurreproiektua bat datorrela indarreko hizkuntza-legeriarekin, eta nabarmendu du zirriborroa bi hizkuntza ofizialetan dagoela. Ondoren, hizkuntza ofizialen erabilerarekin erlazionatutako edukiak aztertu ditu, besteak beste, zioen azalpeneko edukia, zenbait artikulua (esaterako, 30 bis.2; 39.1; 41.2.d), 45 eta 47.3, zazpigarren xedapen gehigarria eta bosgarren xedapen iragankorra.

Bi proposamen egin ditu txostenaren amaieran:

- a) 30 bis.1.c) artikuluan aipatzea ez dela inor baztertuko hizkuntzagatik.
- b) Xedapen berria txertatzea: EAEko poliziak bermatu egin behar du biztanleek nahi duten hizkuntzan (euskaraz edo gaztelaniaz) jaso ahal izatea arreta, ahoz zein idatziz.

b) DACIMaren txostena

Aurreproiektuaren balorazio positiboa egin dute, ha inbat arrazoiengatik: udaltzaingoen antolaketa-egitura profesionalak eratzerakoan malgutasuna eta arrazionaltasuna erabiltzea; Ertzaintzaren Batzordearen diziplina-prozeduretan eta birgaitze-espedienteetan funtzioak argitzea; prozedurak sinplifikatzeko eta hobetzeko neurriak hartzea Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari dagokionez, hautapen-organo iraunkor gisa; eta udal arteko lankidetzak sustatzeko mekanismoak erabiltzea.

Haien ustez, Poliziaren Etikaren Europako Kodearen 61. aurreikuspenari erantzuten diote (2001eko Kontseilu Europarraren gomendioa) polizia-kontrolerako mekanismoen arauak, poliziaren eta herritarren arteko elkarrekaritza eta kontuak emateko konpromisoak. Aurreikuspen horren arabera, "erantzukizunaren alde egiten duten eta herritarren eta poliziaren arteko komunikazioan eta ulermenean oinarritzen diren mekanismoak ezarriko dira"; hori guztia bat dator Berrikuntza Publikoaren Planeko (2014-2016) gardentasunaren eta gobernu onaren filiofiarekin.

Balioespen positiboa egin dute gai hauen inguruan: kontu ematearekiko konpromisoa, publikitate aktiboaren bidez; polizia-zerbitzua ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak, besteak beste, polizien zeregina ebaluatzeko mekanismoak edo, neurri hertsatzaileez gainera, prestakuntza, prozeduretan edo lan-giroan hobekuntzak emateko ereduak eta arrisku-faktoreak aztertu ahal izateko prebentzio-mekanismoen ezarpena; eta poliziaren eta herritarren arteko derrigorrezko interakzioa, kexak tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismo gabe tratatuko direlako konfiantza izan dezaten, kanpo-kontrolerako batzorde baten sorrerarekin sendotuta.

Balorazio horretaz gain, ohar hauek ere egin dituzte:

- a) 95.2.ter artikulua aukeran jartzen du espedientea baliabide elektronikoaren bidez jasotzea. Aldiz, administrazio-prozedura erkideari buruzko lege berriak (oraindik indarrean sartu ez denak) dio nahitaez eta oro har erabiliko dituela administrazioak

baliabide elektronikoak funtzionarioekin eta beste administrazio batzuekin izan beharreko harremanetan. Gainera, horrek esan nahi du halakoetan dokumentuak ez direla zertan baliabide elektronikoen bidez bidali, espedienteko dokumentuen kopia helarazteko betebeharra betetzen baita dagokion administrazio eskudunaren sargune orokor elektronikoan edo egoitza elektronikoan esku ra jarrita.

b) Jardunbide egokien batzordeari dagokionez, kontuan izan behar da administrazio-prozedura erkideari buruzko lege berria. Haren arabera, "ahal dela, deialdiak kideei baliabide elektronikoen bidez bidali behar zaizkie, eta, haietan, gai-zerrenda, bilera zer baldintzatan egingo den, konexio-sistema eta, hala badagokio, bilerara bertaratzeko eta bertan parte hartzeko beharrezko baliabide teknikoak zer lekutan dauden eskuragarri zehaztu beharko da"; era berean, "bilera bakoitzeko aktak igorriko dira, baliabide elektronikoen bidez".

c) Adierazi dute oraindik ere erabiltzen direla gaztelaniaz gizonezkoen termino batzuk generiko gisa, eta haiek zuzendu egin behar direla iradoki dute. Esate baterako: "funcionarios", "empleados públicos", "ciudadanos", "el agente de movilidad", "el alguacil"...

c) Emakunderen txostena

Ohar hauek egin ditu:

- Betiere, Gizarte Segurantzaren alorrean indarrean dagoen legediarekin bat baldin badator, zaintzagatiko eta/edo genero-indarkeriagatiko eszedentzia-aldiak benetan lan egindako alditzat zenbatuak izatea, erretiro-pentsioa jasotzeko eskatzen den ohiko adina murriztu ahal izateko. Ez da onargarria. Lege honen eskumena eta esparrua gainditzen du; alderdi hori Gizarte Segurantzaren arloko legediari dagokio.
- 92. artikulua 2. paragrafoko I bis) letran diziplinazko falta oso larritzat begiestea, sexu-jazarpenaz eta laneko jazarpenaz gainera, laneko jazarpen sexista edo sexuan oinarritutakoa, 4/2005 Legearen 43.2 artikuluan eskatzen denarekin bat. Onartua.
- Ertzaintzaren Kontrol Batzordeari dagokionez, proposatu dute, ez bakarrik emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egotea, baizik eta baita generoaren arloan esperientzia duen pertsona bat sartzea ere.
- Gaztelaniazko testuan, genero maskulinoan soilik agertzen diren terminoak berrikusteko eta egokitzeko eskatu dute, hala nola "funcionario/os", "los empleados públicos", "sancionado", etab.

d) Sailen eta erakundeen alegazioak

Eusko Jaurlaritzako sail hauek egin dituzte alegazioak: Lehendakaritza; Osasuna; Ingurumena eta Lurralde Politika; Enplegua eta Gizarte Politikak; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura.

Haietatik guztietatik, sail bakarrak (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura) egin ditu aztertu beharreko oharra, hain zuzen ere, 40.1 artikulua ingurukoak, akats bat zuzentzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiak alegazio-aldian esan du ez duela ezer esatekorik.

e) Ertzaintzaren Kontseiluaren txostena.

Ez dakar oharrik.

f) Euskadiko Udaltzainak Koordinatzeko Batzordearen txostena.

Ez dakar oharrik.

g) Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostena.

29/2015 txostena egin du Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketaren lege-aurreproiektuari buruzkoa. Ekarpen hauek egin ditu:

- Polizia-jarduera kontrolatzeko mekanismoen kapituluaren esandakoaren alde dago txostena.

- Bosgarren xedapen iragankorrari dagokionez (udaltzaingoetako funtzionarioak automatikoki goragoko kategorian integratzea), uste du, kidego horietan intendente-kategoria duen langilerik balego, koherentea izango litzatekeela langileen ordainsariak arautzeko atal bat biltzea.

- Hautaketa eta sarrera: Bi ohar egin ditu:

- Sartzeko deialdiaren baldintzak ez aldatzeko arauak eta haien salbuespenei dagokienez, txostenak dio neurritz mugatu behar dela deitutako eta eskabidea aurkezteko epe berririk gabeko plaza kopuruaren gehikuntza, hartzaileen espektatibak alda ez daitezen. Hori gertatzen bada, derrigorrean ireki beharko da eskabideak aurkezteko beste epe bat, edo geroagoko beste prozedura baterako deialdia (47. artikuluan bosgarren paragrafoa gehitzea).

- Hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten aholkulari adituei dagokienez, proposatu du haien jardunak objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioak bete behar dituela.

- Lanbide-karrera: gogorarazi du egun ez dagoela arau orokorrik. Hala ere, euskal funtzio publikoaren lege-proiektuak jasotzen du, eta administrazioek arau bidez modu harmonizatuan garatzea aurreikusten du, Euskadiko Enplegu Publikoa Koordinatzeko sortuko den Batzordeak ezarriko dituen oinarritzko irizpide komunetan oinarrituta. Horrenbestez, uste du karrera horizontalaren modalitate desberdinen ezarpen eraginkorra arautu egin behar dela, dagozkion administrazioen aurrekontu-ahalmenaren baitan egongo dela, eta funtzio publikoaren alorreko oinarritzko legeria errespetatu behar dela. Haren ustez, Euskal Enplegu Publikoari buruzko Legeak homogeneotasuna ezarri behar du Euskal Administrazio Publikoetan, eta, hortaz, haren aurreproiektuan bezala, hemen ere aurreikuspen hauek jaso behar dira:

- “Xedapen iragankorra: Ertzaintzako langileei eta Toki Administrazioaren mendeko udaltzainei ezin izango zaie karrera profesionaleko osagarriaren konturako edo aurreratutako ordainsaririk onartu.”
- “Karrera profesionalari dagozkion ordainsari-eskubideak ezin izango dira atzeraeraginez onartu.”

- Egokitutako zerbitzu aktiboa eta bigarren jarduera: dioenez, araudi hori badago urriaren 9ko 194/2012 Dekretuan, Ertzaintzako langileen 2011ko, 2012ko eta 2013ko lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmena onartzen duen dekretua aldatzekoan, eta ez du ulertzen zergatik hartzen den lege gisa araudi hori; egokiagoa dirudi hitzarmen arautzailean biltzea, zerbitzuen prestazioa egokitu ta eta lan-baldintzak hobetuko dituen neurriak zehaztuta. Haren ustez, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa ez da zerbitzu aktiboaren desberdina, baizik eta lan-baldintzen egokitzapena, negoziazio kolektiboaren bidez egina, eta ez da lege bidez arautu behar. Hori guztia dela eta, proposamenaren aurka agertu dira.

Gainera, ez dago ados egokitutako zerbitzu aktiboaren edo bigarren jardueraren egoera posible denik Administrazioaren esku eta lanik egin gabe egonda, aldi baterako bada ere, eta aurretik jasotzen zituen ordainsari guztiak jasota. Haren iritziz, ordainsari horiek ez daude justifikatuta, destinoaren zain edo nahitaezko eszedentzia-aldian (hau da, lanik egin gabe) edo destinorik gabeko bigarren polizia-jarduerako egoeran egonda kobra daitezkeenak baino handiagoak baitira. Bestalde, nabarmendu du aurreproiektuak ez duela mugatzen urtero zenbat pertsona pasa daitezkeen egoera horietara, dauden antolaketa-ahalbideak kontuan hartuta. Haren ustez, aldaketa horiek ez dira beharrezkoak, dagoeneko ezarrita daudelako arauetan (hain zuzen ere, hobeto egokitzen zaizkie arauak), eta agian ezin izango lirakekeela aplikatu antolaketari eta aurrekontuei dagokienez, non eta ez den mugatzen urtero halako egokitzapenetara igaro daitekeen polizia kopurua eta destinoaren zain eta lanik egin gabe dauden langileei ez zaien zirriborroan ageri bezala ordaintzen. Eta ulertzen du espedientean ez dela justifikatzen proposamenaren bideragarritasun ekonomiko eta antolakuntzakoa. Haren ustez, baliteke proposamenak arazoak sortzea antolakuntzan. Funtzionario asko eta asko destinoaren zain geratuko lirakeke; horrek gainkostu handia eragingo lioke administrazioari, baina, trukean, ez lituzke zerbitzuak jasoko.

Bestalde, uste du nahasgarria dela destinoa esleitzen den arte edo lanpostua egokitzen den arte Administrazioaren esku destinorik gabe egotea; izan ere, pentsa liteke poliziakoak ez diren eginkizunak ere esleiri daitezkeela Administrazioko edozein arlotan, nahiz eta beste arlo batzuetara zabaltzeko aukera ez dagoen jasota lanpostuen zerrendetan. Proposamenaren aurka dagoela esan du, bigarren jarduerako langileak Administrazioaren esku gera daitezkeela uler baitaiteke, eta ez Segurtasun Sailaren esku.

Bigarren jarduerako administrazio-egoerari dagokion ez, proposatu du segurtasun-kidego eta -indarretako funtzionarioek bete dezaketen lanpostu gisa sailka dadila bete beharreko lanpostua dagokion lanpostuen zerrendan.

- Laneko arriskuen prebentzioa: txostenak dio zerbitzu medikoak edo prebentzio-zerbitzuak ez duela kontratuak edo hitzarmenak egiteko eskumenik.

- Aguazilak eta mugikortasun-agentek: Bi funtzionario mota horiei dagokienez, proposatu du berariaz lot dakiola Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren

(EPOE) bigarren xedapen gehigarriari. Era berean, esan du beharrezkoa dela aguazilek prestakuntza jasotzea armak erabiltzen ikasteko; bestela, lan-kontratadun aguazilek ezin izango omen dute funtzionario izan. Zortzigarren xedapen gehigarri dagokionez (udalek udaltzaingoa sortzea erabakitzen dutenerako hipotesia jasotzen duena), txostenak dio funtzionario aguazilak soilik integratuko direla sortuko den udaltzaingoa, eta funtzionario ez direnak zer egoeratan geratuko lirатеkeen ere zehaztu behar dela. Onartu da. Orobat, proposatu du integrazioak ezin izango duela ekarri gastu publikoa handitzerik, ez eta jasotzen diuzten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarrizko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

- Udaltzaingoen egiturak eta buruzagitzak:

Adierazi du, udalerriko populazio-parametroak aldatuz gero, udaltzaingoaren egitura doitu beharko litzatekeela. Horrek buruzagitzaren kategoria murrizten badu, eta kategoriak titularra badu, titullarrak eginkizunak betetzen jarraituko du, eta lanpostua “desagertzeko” daudenen artean sailkatuko da. Aldiz, goranzko aldaketa gertatuko balitz, funtzionarioek lanpostuan jarraituko dute, izendatu zituztenean zeuzkaten baldintzekin eta betetzen ari diren lanpostuari benetan esleitu zitzaizkien ordainsariak jasoz.

Gogoan izan, langileak udaltzaingoetako buruzagitza-lanpostu berrietan integratzerakoan, beharrezko titulua izan behar dela. Haren ustez, ordea, ez da hori gertatzen seigarren xedapen iragankorreko bigarren zenbakiko bigarren paragrafoan, esperientziak ordeztu egiten baitu titulua.

h) KEBren txostena

Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen Bosgarren Aldaketari buruzko Lege Aurreproiektua indarrean sartzeak 2016an Eusko Jaurlaritzako Aurrekontuetan eta etorkizunekoetan ekar dezakeen aurrekontu-eragina dela eta, Segurtasun eta Administrazio Publikoko eta Justiziako sailek emandako dokumentazioa aztertuta, Aurrekontuen Zuzendaritzak uste du kostu ekonomikoen gorakadak izango direla, funtsean, kontzeptu hauengatik:

1.- **Praktiketan dauden ertzainen** atxikipen-taldearen aldaketari dagokion kostuaren gorakada aurreikus daiteke, eta Aurrekontuen Zuzendaritzak urtean 916.000 €-an kalkulatu du.

2.- Halaber, ordainsari-behar berriak ondorioztatuko dira, **adinaren arabera zerbitzu aktiboaren modulazioen** arauketaren eragina konpentsatzeko; zenbatekoa ez du ebaluatzen Segurtasun Sailak, hura aurkeztutako memoria ekonomikoaren defizita izanik. Bakarrik adierazten da neurri horietako batzuk dagoeneko aplikatzen direla gaur egun Ertzaintzan, eta eragin ekonomikoa ri Ertzaintzako langileei esleitutako aurrekontu-zuzkidurekin ari zaio erantzuten.

3.- Etorkizunean esanguratsua izan daiteke **Ertzaintzan lanbide-karreraren osagarria** ezartzea, euskal administrazio publikoan lanbide-karrera horizontala araututa. Hala ere, egoera hori ezin da ekonomikoki ebaluatu, ez baitago oinarri hartzeko aipamenik.

Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen inguruan proposatzen den aldaketak dakartzan langile aldetik o kostuen gorakadei urtero erantzun behar zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan Segurtasun Sailari 1. kapitulurako esleitutako zuzkidura ekonomikoen bidez; horiek urtero egokituko dira Jaurlearitzak onesten dituen jarraibide ekonomikoetara.

i) EABJren irizpena

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 62/2016 Irizpena igorri du gure Sailera, 2016ko apirilaren 19koa. Irizpena aldekoa da. Legegintza-teknikari buruzko zenbait ohartarazpen egin digute, eta gehienak behin betiko testuan jaso ditugu. Ez dugu onartu, ordea, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema antolatzeke Legearen 16. artikulua indargabetzeko iradokizuna, iradokitakoa lege-proiektu honek araututakotik haratago baitoa; izan ere, legean araututako EKINBIDE bulegoak polizia-kexak artatzea baino eginkizun gehiago du. Bulegoaren jardun-eremua zabalagoa da, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema osoari eragiten diolarik, alegia polizia-zerbitzuei ez ezik larrialdiei eta babes zibilariei ere eragiten die. Hortaz, 2012ko legean aurreikusitakoak eta lege honetan aurreikusitakoak ez dute talkarik egiten; alderantziz baizik, bata bestearen osagarri dira.

IV.- ALEGAZIOEN ETA OHARREN ANALISIA

Jasotako alegazioak eta oharrak aztertu ondoren, eta hasierako zirriborroetan aldaketak egin ondoren, aldaketak egin dira testuaren hizkera ikuspegi ez sexistatik berrikustean.

- Polizia-jarduera kontrolatzeko mekanismoak

Atal honetan esan behar da erakunde sindikalek egin dituzten alegazioak alegazio gisa hartu direla, kapitulu honetako edukia ez baitago negoziatu beharreko gaien artean.

Lehenengo zirriborroari dagokionez, ekarpen hauek egin ziren:

ERNE sindikatuak kendu egin nahi du. **ESAN** sindikatuak kapitulua kentzea iradoki du, bere ustez, “asmo politikoak” dituelako. **UGT** sindikatuak esan du udaltzaingoei beren sistema dutela; aldiz, toki-administrazioak adierazi du aukera dagoela kontrol-batzordean udaltzaingoko funtzionarioen ordezkariak egoteko (EUDEL). Oinarritzko Arauaren Taldean, udaltzaingoko eta Segurtasun Saileko ordezkariak EUDELekin sinatutako lankidetzaren hitzarmenaren baitan sortutakoan, iradoki da udaltzaingoko ordezkariak ere sartzea batzordean, udaltzaingoei dagozkien jardunei buruz hitz egitean. Eta batzordeari izen hau jartzea: “EAEko Polizia Kontrolatzeko Batzordea”.

Kontrol-batzordearen eginkizunei dagokienez, azaldu du nola bateratuko liritekeen batzordearen eginkizunak eta aribideko ikerketa penala 11.2.a) artikuluko kasuetan, zeinak penalki ohikoak diren egitateak izan daitezkeen, polizia judizialak ikertu beharrekoak eta agintaritzaren judizialari berehala ez agutarazi beharrekoak. **ESAN** sindikatuak esan du horrek epaileen lanean eskua sartzea ekar dezakeela.

Kontrol-batzordearen osakerari dagokionez, Emakundek eskatu du gizon eta emakume kopuru orekatua izan dezala. **ESAN** sindikatuak nahi du batzordekideak ez daitezela izan A taldekoak (hau da, oinarritzko eskalako agenteak ere izan daitezela,

unibertsitateko titulua baldin badute). Oinarrizko Arauaren Taldeak eskatu du udaltzaingoko funtzionarioak ere izan daitezela bat zordekide.

Beste funtzionario batzuk kontrol-batzordeari laguntzera joateari dagokionez, **ESAN** sindikatuak uste du ez luketela zerbitzu-eginkizunean joan behar, haren ustez, horrek bidea ematen duelako aukera politikoengatik ezeztatu dakien.

ERNE kexu da barne-arazoengatik jardunei hasiera emateko tresna eskusiboa bihurtu delako Ekinbide, baina ez du horren inguruko proposamenik egin.

Oharrak aztertu ondoren, balorazio hau egin da:

ESAN sindikatuari erantzunez, esan behar da lege orok programa politiko bat islatzen duela; hortaz, ez da logikoa arauak berezko duten zentzuagatik gaitzestea. Polizia-jarduera kontrol partidistaren pean dagoela esan nahi bada, hori ez da inola ere horrela. Polizia-jarduera jarduera administratiboa da eta, hala denez, ordenamenduan adierazitako kontrolen pean dago, bai administrazioaren eta gobernuaren hierarkia-kontrolaren pean, bai parlamentuaren kontrol politikoaren pean. Baina araua aldatzeak ez du eraginik kontrol horietan; aitzitik, kontrol horren gardentasunean eragiten duen mekanismoa konfiguratu du, polizia-jardun jakin batzuk aztertzeako eskumena ematen baitie eginkizun independenteak dituzten zenbait adituri.

Tokiko iradokizunei jaramon eginez, eta kontuan izanda badago ELA-Ertzaintza eta udaltzaingoko biltzen dituen EAEko polizia, hainbat administrazioen ardurapean dagoena baina helburu bera duena, hau da, erabateko segurtasuna bermatzea, onartzen da EAEko polizia osoa sartzea batzordearen jardun-esparruan.

Hortaz, aldatu egingo da hasieran proposatutako izendapena, eta kide izan ahalko dira EAEko polizia-kidegoetako A taldeko aditu guztiak. Hala ere, argitu behar da Segurtasun Sailak edo dagokion udalak hala eskatuz gero esku hartuko duela batzordeak, kidegoa zeinen menpe dagoen.

Bestalde, idazketa aldatu da, garbi gera dadin jarduteko zer aukera dituen batzordeak zigorbidetik ikertzen ari diren heriotza-kasuetan edo lesio larriko kasuetan izandako polizia-jarduna aztertzerakoan.

Horren ildotik, esan behar da batzordeak bere jardueraren berri emango diola agintaritza judizialari, ikerketa penala ez eragozteko, ezta jardunen erreserba ere. Eginbide penaletan ikertutako langileek ez du zertan batzordearekin elkarlanean aritu, eta batzordeak kasuarekin erlazionatutako dokumentazio administratiboa behar badu (ez eginbide penalak edo atestatua), edo *in situ* egin behar baditu ikuskapenak, agintaritza judizialaren onarpena lortu beharko du.

Zehaztu behar da batzordearen jarduna ez dela egitateen egilea nor izan den ikertzea, ezta erantzukizunak argitzea ere. Hori dela eta, zuzendu egin dira zenbait hitzen erabilera, besteak beste, “ikerketa”, eta aldatu egin da batzordearen beraren izendapena. Horrela, aurrerantzean, “jardunbide egozkie batzordea” izango da. Indartu egin dira batzordearen izaera eta xedea, txostenetako edukia zehaztuta.

ERNEK Ekinbideri buruz egin duen kexa dela eta, esan behar da hura ez dagoela ezein datutan oinarrituta. Areago, erraz egin dakioke kontra erakundeak urtero Legebiltzarrari bidaltzen dion memoriako datu estatistikoak erabilita baino ez.

Aurkeztutako alegazioei jaramon eginez, nabarmen al datu du bigarren zirriborroak atal hori hasierako zirriborrotik, esandako ildotik.

Idazketa berria egin ondoren, **ERNEk** alegazio berberak egin zituen negoziazio-fasean, nahiz eta zenbait aldaketa egin ziren. Hala ere, bigarren zirriborroaren idazketak dagoeneko erantzun die **ERNEren** eta **ESANen** iradokizunetako batzuei.

CCOO sindikatuak eskatu zuen ezaba zedila proposatutako araudia, eta beste bat eman zedila. Horren arabera, aginte-kateak jarduera polizial bakoitzaren aurretik argitaratuko ditu jardun-aginduak, arrisku-maila ze haztuta. Ordezkarri sindikalei horren berri emango litzaieke. Emandako aginduak batzorde espezifikoak aztertu eta baloratuko ditu; ordezkarri sindikalak ere egongo dira batzorde horretan. Ezin da onartu proposamena. Poliziaren lana da arrisku-egoerei erantzutea. Arriskua ezin da beti erraz aurreikusi, edo alda daiteke, edo ustekabeen ager daiteke. Halako egoeretan, agintaritzaren agenteek erabakiak hartu behar dituzte, haien ardura delako eta horretarako eskumena ematen dielako indarreko antolamenduak. Hortaz, ezin da egin proposatutakoa. Gainera, sindikatuen lana ezin da izan aginte-katearen erabakiak kontrolatzea.

Jardunbide egokien batzordeari dagokionez, **CCOOk** proposatu du erdiak ikertutakoen lanpostu eta kategoria bereko ertzainak izan daitezela, gutxienez 5 urteko antzinatasuna dutenak, eta ordezkarri sindikalak ere egon daitezela. **ELA** sindikatuak proposatu du jardunbide egokien batzordeko kideen erdiak Ertzaintzako funtzionarioak izan daitezela, kidegoan gutxienez 15 urteko esperientzia dutenak.

Jardunbide egokien batzordearen osakerari dagokionez, proposamen sindikalek kanpo uzten dituzte Ertzaintza ez den EAEko poliziako beste kidego batzuetako funtzionarioak edo funtzionario izandakoak. Hori dela eta, ez dago garbi ea onartzen duten batzordearen jardun-esparrua EAEko polizia osoa izatea. Proposatutako esparrua EAEko polizia denez, ez du zentzurik batzordekideen erdiak kidego zehatz batekoak izateak.

Alegazioak aztertzerakoan bada kontuan hartu beharreko beste faktore bat. Batzordearen lana ez da banakoen portaerak ikertzea, eta are gutxiago haiek epaitzea; alderdi konplexuagoez arduratzen da. Alderdi horiek gainditu egin ohi dituzte egintza bereziak, antolakuntzako alderdiak, egiturazkoak, etab., eta, haiek aztertzeko, gaikuntza profesional handia behar da.

CCOOn proposamenak ez du funtsik. Lehenik, ez dagokio batzordeari funtzionario zehatzak ikertzea (areago, berriaz esaten da ez dutela horretarako eskumenik). Hortaz, ikertutakoen lanpostuak ezin du inola ere izan batzordeko kideak izendatzeko elementu erabakigarria. Bigarren, jardun osoa aztertzen da (plangintza, garapena eta emaitzak), baita aurretik zeuden baldintzak ere (erabaki politikoak, arauak, baliabideak, plangintza eta gauzatzea); inoiz ez da aztertzen banakoen jarduna. Hori dela eta, proposatutako irizpideak ez du balio osaera zehazteko. Hirugarren, irizpide horren arabera, aztertutako kasu bezainbeste osaera egongo lirateke. Hortaz, ez legoke osaera egonkorrik, eta osaera egonkorra izan dezan nahi du proiektuak.

Gauza bera esan dezakegu **ELA Ertzaintzak** egindako proposamenaz. Batzordean Ertzaintzako funtzionarioak egongo direla baino esaten ez duenez, euskal udaltzaingoetako beste hautagai posible batzuk kanpoan uzten direla dirudi (udaltzaingo horiek ere badaude aplikazio-eremuan). Antzinatasunak ez du balio batzordearen osaera zehazteko irizpide gisa; bai, ordea, gaikuntza akademikoa eta

profesionala. Bestalde, ez dirudi onargarria denik batzordearen independentzia mugatzea, eta hari eskatzea, txostena amaitu aurretik, erakunde-organo paritario bati entzuteko (adibidez, Ertzaintzaren Kontseiluari). Batzordeak askatasuna izan behar du erabakitzeko zer lekukotza bildu behar dituen. Edonola ere, ez dirudi Ertzaintzaren Kontseiluaren lekukotza, berez, erabakigarria izango denik. Ezin da onartu, ezta ere, jardunbide egokien batzordeak Ertzaintzaren Kontseiluari ematea egiten duenaren berri.

Bestalde, **ELA** sindikatuak proposatu du Legebiltzarreko talderen batek edo Arartekoak hala eskatuz gero ere esku har dezala Batzordeak, eta, txostena eman aurretik, Ertzaintzaren Kontseiluari entzun diezaiola. Horri buruz esan behar da beti gorde behar direla jardunbide egokien batzordearen zintzotasuna, inpartzialtasuna eta independentzia. Hori dela eta, ez dirudi arrazoizkoa, ezta ere, Legebiltzarreko talderen batek hala eskatuta aktibatu ahal izatea mekanismoa, mekanismoaren erabilera alderdikoia bailitzateke hori; areago, gehiegizkoa eta berria litzateke alderdi politiko bakarrak aktibatzea mekanismo administratiboak, Legebiltzarraren erregelamenduan bertan ezarritako kontrol-mekanismoak alde batera utzita. Arartekoari dagokionez, kontuan izan behar da hark bere mekanismo eta prozedurak dituela ofizioz jarduteko, eta mekanismo eta prozedura horiek batzordearen eginkizunei kalterik egin gabe gauza daitezkeela.

DACIMaren txostenaren arabera, jardunbide egokien batzordeari dagokionez, kontuan izan behar da administrazio-prozedura erkideari buruzko lege berria. Haren arabera, oro har, baliabide elektronikoen bidez bidali behar dira deialdiak eta aktak. Proposamen horrek ez dakarkio ezer araudiari. Araudiak ez du arautzen ez nola egin batzordearen bileretarako deialdiak ez nola bidali aktak. Hortaz, aipatu diren prozedura erkidearen arauak aplikatuko dira, baina lege honen testuan ez da zehaztu beharrik zertan datzan prozedura.

Kapitulu honi amaiera emateko, eta ELAren proposamenari erantzunez (alegia, entzun dakiela ordezkari sindikalei Ekinbidek egindako espedienteetan, zerbitzuan izandako gorabeheren inguruko kexekin erlazionatutakoetan), esan behar da eskakizun horrek ez dakarkiola ezer kexaren prozedurari, eta eragotzi egiten duela herritarrekin zuzenean harremanetan egotea. Bestalde, Ekinbideren txostenak argitaratu egiten dira.

Ekinbideri dagokionez ere, ezin onar daiteke **ELA-Udaltzaingoaren** proposamena, alegia, ezaba dadila udalerriek kexen kudeaketa Ekinbideren esku uzteko aukera. Aukera hori egongo litzateke, nahiz eta proiektuan ez ezer esan.

- Kode deontologikoa

Kode deontologikoari dagokionez, **ERNE** sindikatuak zenbait aldaketa proposatu ditu.

Lehena da agintaritzaren agentearen izaera aitortzea (33. art.), baita zerbitzuz kanpo ere, polizia berme juridiko berberak eskaini ahal izateko euren edo ondarearen aurkako erasorik izanez gero. Gai hori lege autonomikoaren esparrutik kanpo dago: legeak ezar dezake agintaritzaren agentearen izaera dutela (Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikoak bezala), baina ezin interperta ditzake horrek izan ditzakeen ondorio penalak. Hala ere, indarreko Kode Penalak babes penal berezia ematen die agenteei atentatu-delitua gertatzean, ez bakarrik eginkizunak betetzen ari direnean (kontuan izan behar da zerbitzua etengabe emateko betebeharra dutela), baizik eta

baita eginkizunak betetzen ari direla eraso egiten dietenean ere. Haratago joanez gero, aldatu egin beharko litzateke Kode Penala.

Bestalde, **ERNEK** nahi du 34. artikulua aldatzea, armak erabiltzeari buruzkoa; hain zuzen ere, arriskua larria izatearen eskakizuna kentzea, baita erresistentzia armatua dagoenean edo norberarentzat edo hirugarrenentzat arriskua dagoenean eta beste bide batzuk erabilia erasotzailea gelditu edo azpi ratu ezin denean su-armak erabiltzea muturreko neurria dela esaten duen aipamen oro ere. Egin nahi den aldaketa atzerapauso nabarmena da poliziak armak erabiltzearen inguruko legeetan.

Azkenik, **ERNEK** proposatu du akusazio penalen kasuan funtzionarioek duten babes juridikorako bermea beste kasu batzuetara ere zabaltzea, besteak beste, funtzionarioei eurei edo ondasunei kalte eginez gero, eta polizia izanagatik mehatxuak edo irainak jasoz gero. Egia esan, proposamen hori badago 1995eko Dekretuan (kasu horietako ordezkartza eta babesa arautzekoan) eta laguntza juridikoari buruzko Eusko Jaurlaritzaren lege-proiektuan.

Bestalde, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du funtzionarioarekin “adostea” administrazioak eskaintzen dion babesa. Ez da beharrezkoa hori zehaztea, defendatutakoa ados badago baino ezin baita hura defendatu eta ordezkatu, prozedura-legeen arabera.

Hizkuntza Politikaren txostenak bi proposamen egin ditu 30. artikuluari dagokionez :

- 30 bis.1.c) artikuluan aipatzea ez dela inor baztertuko hizkuntzagatik. Aginduak dio ez dela inor baztertuko ezaugarri pertsonalengatik, ezaugarria edozein dela ere, eta hizkuntza-eskubideak argiago jasota egon daitezke 30 bis 2 artikuluan; beraz, haren arabera aztertuko ditugu.
- Xedapen berria txertatzea: EAEko poliziak bermatu egin behar du biztanleek nahi duten hizkuntzan (euskaraz edo gaztelaniaz) jaso ahal izatea arreta, ahoz zein idatziz. 10/1982 Legearen bidez arautzen dira herriarren hizkuntza-eskubideak (10/1982 Legea, azaroaren 24koa, euskararen erabilera normalizatzeko oinarritzko legea), eta ez da komeni funtsezko araudia sakabanatzea. Hala ere, hel dakiok araudi horri. Beraz, aldatu egingo da 230 bis 2 artikulua, eta hau gehitu: *Herritarrekiko harremanetan, EAEko poliziak kontuan izango ditu Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarritzko Legean aitortutako hizkuntza-eskubideak.*

- Prestakuntza eta elebitasuna.

Proiektuan, polizien prestakuntzari eta elebitasunari buruzko zenbait alderdiri heldu zaie. Hainbat ekarpen egin dira gai horien inguruan, eta batera aztertuko ditugu.

Bestalde, eta EPL aldatzeko legearen proposamenetik harantz, **ERNEK** proposatu du LOSSPE aldatzea, PLEAko Kontseilu Errektorean udaltzaingoaren kidegoetako sindikatu nagusiak ardura daitezen kidego horietako ordezkartaz. Ez da onargarria, bi arrazoiengatik: a) PLEAko polizia-kidegoetako tokiko funtzionarioak prestatzen ditu, baina baita suhiltzaile-kidegoetakoak ere; hortaz, bertako ordezkartza ezin da polizia-kidegoetako funtzionarioen artean soilik banatu. b) Ezinezkoa izango litzateke

udaltzaingo-kidegoak soilik arduratzea ordezkaritza z, udalerrietan batera egiten direlako polizia-kidegoen eta gainerako funtzionarioen hauteskunde sindikalak.

EPLren esparrutik kanpo ere, **ERNEK** proposatu du zehatz dadila PLEAko zer lanpostu bete behar dituzten polizia-funtzionarioek, eta publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioetan oinarrituta hauta daitezela. Indarreko arategiak dagoeneko biltzen ditu aurreikuspen horiek; beraz, alderdi hori ez dagokio lege honi edo LOSSPERi, baizik eta, hala badagokio, PLEAren LPZri.

Prestakuntza dela eta, **ERNEK** proposatu du 39.2 artikulua berariaz ezar dezala PLEAko prestakuntza-planak nahitaez bete behar direla. Alabaina, proposamenak ez du zehazten nork bete behar dituen. Gogorazi behar da erakunde instrumentala dela PLEA eta, nola ez, bere programazioak behartzen duela. Gainera, prestakuntzaren plangintzarekin eta programazioarekin erlazionatuta ko guztia LOSSPEN araututa dago.

CCOOK nahi du PLEA behar dadila agente bakoitzari jakinaraz diezaion zer prestakuntza-eskaintza osatu behar duen, eta ikastaroak bukatzean haiei buruzko dokumentazioa eman diezaion. **ELAK** proposatu du Legeak ezartzea administrazio bakoitzak arauz ezarriko duela, negoziazioa egin ondoren, urteko gutxieneko prestakuntza.

Legerik gabe ere erantzun ahal izango litzaioke horri. Hartzaile guztiei eman behar zaie prestakuntza-eskaintzaren berri, baina ez dirudi arrazoizkoa informazio pertsonala ematea. Ez dago argi, ezta ere, nahitaezko edo borondatezko prestakuntzaz ari diren. Ikastaro batzuk nahitaezkoak dira (birziklapen-ikastaroak eta beste batzuk), eta beste batzuk, berriz, borondatezkoak. Funtzionario bakoitzari dagokio esatea zein interesatzen zaion. Prestakuntza nahitaezkoa denean, polizia-arduradunek erabakitzen dute nork joan behar duen, baina ez PLEAk. Gainerakoetan, zer interes duen emango du izena funtzionario bakoitzak, eta, ikastaroaren arabera, hautaketa-irizpide batzuk edo beste aplikatuko dira. Gerta liteke funtzionario batzuek ikastaro batzuk baino gehiago egin izana, eta beste batzuek, berriz, bat ere ez. Baina hori hainbat gauzaren arabera egon daiteke (urteko programazioa, funtzionario bakoitzaren interesa, edo uneko antolakuntza-erabakiak), eta hori guztia ez da konponduko legea proposatu bezala aldatuta.

ELAK proposatu du prestakuntza eman dadila grebarako eskubideari eta etxebizitzarako eskubideari buruz, edota zentro ofizialetan edo polizia-zentroetan egindako ikasketak soilik baliozkotu daitezela. Lehenengoari dagokionez, ez dirudi arrazoizkoa adierazitakoen moduko bi eskubide irakats daitezen bereiztea, eta haiek bezain garrantzitsuak edo haiek baino garrantzitsuagoak diren oinarritzko gainerako eskubideak alde batera uztea. Eta, noski, ez da esan beharrik zentro ofizialetan edo polizia-zentroetan egindako ikasketak soilik baliozkoak direla.

Uzi horiek, oro har, ez dirudite egokiak lege-erreforma honetarako, LOSSPEN jasotako PLEAren araudian sartzen direlako, edo beheragoko arau dinamikoagoei dagozkielako.

- Hizkuntza Normalkuntza

ERNEK proposatu du legeak modua eman diezaiola erregelamenduari prestakuntza-, gaikuntza- eta euskalduntze-ikastaroak zer maiztasunarekin egin behar diren zehazteko. Proposamen horri erantzunez, esan behar da horrelako zerbait adierazteak

ez duela erregelamendua gaitzen dagoeneko egin deza keena egiteko. Hala ere, ez da erraza araudi bidez ezartzea maiztasun egonkorra; horretarako, egokiagoa da negoziazio kolektiboko tresnak edo prestakuntza-plangintza erabiltzea.

Elebitasunarekiko konpromisoari eta euskalduntzeari dagokionez, **ERNEk** eta **ESANek** liberalizazio-plana eskatu dute. **ERNEk** proposatu du, gainera, xedapen gehigarri eta iragankor berri batzuk barnera daitezela, hizkuntza-profila funtzionarioari lotzeko, eta ez lanpostuari, funtzionario guztiak hutsetik euskalduntzeko liberatzen ez diren arte, eta automatikoki aplikatzen dadila 47/2012 Dekretua, euskarazko ikasketak aitortzeari eta tituluen egiaztapenetik salbuesteari buruzkoa. Bestalde, CCOO sindikatuak proposatu du ez dadila beste derrigortasun-datarik ezarri Ertzaintzan eta, lehiaketetan, euskararen gehieneko balorazioa lehiaketako lanpostu guztien % 3 izan dadila gehienez, harik eta hala nahi duten funtzionarioak hutsetik liberatu arte (horretarako, gutxienez 100 agente liberatuko lirarteke urtean).

Ertzaintza euskalduntzeko prozesuan beste edozein funtzionario-taldeetarako ezarritako mekanismo berberak aplikatzen dira, baina hizkuntza-profil bereziak ere diseinatu dira polizia-lanaren berezitasunak aintzat hartuta. Hizkuntza-profilek lanpostuaren eta ingurunearen beharrei erantzuten diete; horregatik ezin dute egon pertsonari lotuta. Gainera, euskara ikasteko liberazio-politikan, ezinezkoa da langileak bitartekoekin ordeztzea. Bi alderdi horiek direla eta, ezin da onartu **ERNEk** proposatutakoaren moduko erregimen iragankorra.

Bestalde, zuzenean aplikatuko dira 47/2012 Dekretuko salbuespenak, bertan adierazitakoaren arabera: Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 2. artikuluan adierazitako administrazio publikoek eta erakundeek EAEn antolatzen dituzten enplegu publikoko hautapen- eta hornikuntza-prozeduretan, hizkuntza-titulu edo -ziurtagiriak baldintza gisa ezarri edo merezimendu gisa baloratzen direnean izango dituzte ondorioak Dekretuaren 2., 3. eta 4. artikuluetan ezarritako salbuespenek.

Dirudienez, proiektuari ez dakarkio ezer **ELA-Udaltzaingoaren** proposamenak, alegia, hizkuntza-gaikuntzari dagokionez erakunde bakoitzaren euskalduntze-planak aipatzeak.

- Aukera-berdintasuna sustatzeko neurriak.

ERNE ez dago ados gizonen eta emakumeen berdintasuna sustatzera bideratutako ekintza positiboko neurriekin, baina ez du horren inguruko beste proposamenik egin. Bestalde, **ELA-Ertzaintzak** proposatu du ez dadila aplikatu berdintasun-legea lanpostuak hornitzeko prozeduretan, baina ezin da onartu.

ELA-Udaltzaingoak proposatu du, hautapen-prozeduretan 3 plaza baino gutxiago eskaintzen direnean, gutxieneko portzentajea ez dadila zertan izan % 25 baino txikiagoa; bestela, plaza guztiak emakumeentzat gorde beharko lirarteke. Jaramon egin zaio iradokizunari. Testua aldatu da, eta hau txertatu: *Oro har, emakumeak sustatzeko planak egiten ez diren bitartean, gutxieneko portzentajeak ezin du izan % 25 baino txikiagoa, betiere, hiru plaza baino gehiago badaude deialdian.*

Emakundek proposatu du seme-alabak zaintzeko edo genero-indarkeriagatik hartutako eszedentzia-aldiak ere kontuan har daitezela erretiro aurreratuari begira.

Alabaina, horrek gainditu egiten du Euskadiko legegintza-ahalmena, Gizarte Segurantzaren legeria orokorra aldatzea baitakar.

- Sarrera eta hautapena.

CCOO sindikatuak proposatu du urtero egitea deialdiak plantilla osoa betetzeko, baita oinarritzko ikastaroa amaitu aurretik erretiroa hartuko dutenen kopurua ere. Ezin da onartu. Ertzaintzan, ez dago lan-eskaintza publikorik. Edonola ere, legean sartzeak ez luke eragotziko Espainiako gobernuak bi urtetan egin dituenaren moduko errekurtsioak egitea; baliteke horrek legearen aurka beste errekurtsio bat jartzeko bidea ematea. Gainera, ezin izango lirateke lan-eskaintza publikoan sartu deialdia egiterakoan hutsik ez dagoen lanposturik.

Kidegoan **sartzeko baldintzei** dagokienez, batetik **EUDEL** pozik dago, hautagaiei zuzenean eskatzen baitaie C1 azpitaldeko titulua izatea. Hala ere, uste du mekanismo iragankorra ezarri behar dela azpitaldean legea indarrean jarri aurretik sartu direnentsat, ordainketa- eta administrazio-onorioetarako.

ERNEk, ELAk, UGTk eta CCOOk eskatu dute ken dadila **kidegoan sartzeko gehienezko adina**. Kidegoan sartzeko gehienezko adinari dagokionez, gogorarazi behar da gaur egun ez dagoela eskakizun horren aurkako epairik Ertzaintzaren kasuan. EJA adina mugatzearen alde azaldu da epairen batean; hala ere, berriki, EEJAra bideratu du gaia, arazo prejudizial gisa. Barne-jurisprudentziaren aurrekariak Espainiako polizia nazionalari dagozkio (hori dela eta, goardia zibilean ere mugatura dago adina); eta Europako jurisprudentzia, berriz, Asturiasko udaltzaingoari. Gai horren inguruko eztabaida juridikoaren oinarria da ea bada goen justifikazio arrazionalik halako neurri batek arrazoizko diskriminazioa dakarrela esateko. Ertzaintzaren kasuan, hainbat arrazoiengatik adieraz daiteke adina baldintzatzaile erabakigarria dela antolaketan: a) 40-50 urtetik aurrera, pixkanaka galtzen dira baldintza psikofisikoak (hori dela eta, 55-56 urtetik aurrera, ohiko jardueretako batzuk egiteak salbuesten dira, eta 59 edo 60 urterekin erretiroa ematen zaie); b) 50/60 urterekin erretiro aurreratua hartzeko aukera arautzen duten koefizienteak kalkulatzeko (kalkuluak egiteko, kidegoan batez beste 25-30 urte bitartean eramatea hartu da aintzat). Edonola ere, epaitegiek erabakiko dute neurria justifikatuta dagoen ala ez.

Bestalde, **EUDELe** proposatu du gehienezko adina udaltzaingoen kidegoetan emandako zerbitzuekin konpentsatzeko aukera ez dadila automatikoa izan, baizik eta deialdiaren oinarrietako udal erabakira jo dadila. Ez dirudi arrazoizkoa deialdi bakoitzean erabakitzea hori, ez bailuke segurtasun juridiko nahikoa eskainiko sartzeko baldintzei dagokienez.

Erretiro aurreratuari begira seme-alabak zaintzeko edo genero-indarkeriagatik hartutako eszedentzia-aldiak ere kontuan har daitezkeen **Emakundek** egin duen proposamenari dagokionez, arrazoizkoa izan liteke, baina LOGSSeko gaia da. Legeak benetan lan egindako urte osoak aipatzen ditu.

Hautapen-epaimahaien osaera arautzeari dagokionez, **ERNEk** uste du ez direla kanpoan utzi behar bitarteko funtzionarioak. Funtzio publiko osoan uzten dira bitarteko funtzionarioak hautapen-epaimahaietatik kanpo, EPOEn hala ezarrita dagoelako.

ELA-Udaltzaingoak proposatu du, baterako deialdien kasuan, arau bidez zehatz daitezela epaimahaien osaera eta plazak esleitzeko formulak. Ez da beharrezkoa hori zehaztea, baterako deialdiek ezarriko baitituzte arauak.

Era berean, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du prestakuntza-ikastaroaren eta praktikaldiaren iraupena, oro har, ez dadila izan 24 hilabetetik gorakoa (egun, legeak dio 30 hilabetekoa izango dela); ikastaroa 6 eta 9 hilabete bitartekoa izatea, eta praktikaldia ez izatea 12 hilabetetik gorakoa. Ikastaroen eta praktikaldien iraupena estandarizatuta dago; ez du arazorik sortzen, eta ez dirudi aldatuko denik. Legegileak muga ezarri zuen, baina, ikastaro estandarizatuena gainditu arren, ez du arazorik sortzen eta, ondorioz, ez du legea aldatzera behartzen.

Funtzio Publikoko Zuzendaritzak bi ohar egin ditu:

- Sartzeko deialdiaren baldintzak ez aldatzeko arauari eta haien salbuespenei dagokienez, txostenak dio, indarreko hautapen- eta prestakuntza-erregelamenduan jasota egon arren, neurriz mugatu behar dela deitutako eta eskabidea aurkezteko epe berririk gabeko plaza kopuruaren gehikuntza, hartzaileen espektatibak alda ez daitezela. Hori gertatzen bada, derrigorrean ireki beharko da eskabideak aurkezteko beste epe bat, edo geroagoko beste prozedura baterako deialdia (47. artikuluan bosgarren zenbakia gehitzea). Ez dira onartzen Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren iradokizunak, ez baita beharrezkoa ehunekorik ezartzea, legeari nekez erabaki ahal izango litzatekeelako aurrez legeari. Hautaketa eta prestakuntzarako erregimenean indarrean den testu berari eutsi zaio.
- Hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten aholkulari adituei dagokienez, proposatu du haien jardunak objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioak bete behar dituela. Onartu da testua, eta txertatu egin da.

- Lanpostuak betetzea

- Lanpostuen katalogoa edo zerrenda

ERNEK eskatu du lanpostuen katalogoa egin dadila eta, bertan, polizia-kidego guztietako lanpostuak eta lanpostuen eginkizunak jasotzeko daitezela, bigarren jarduerako lanpostuak ezagutzeko, kudeatzeko eta zehazteko. Aurrekoaren ildotik, 68. artikuluari buruz dio ez dadila lanpostu bereizirik egon lanpostuen katalogoa egiten den arte.

Eskaerak, ordea, ez dakar proposamen zehatzik lege-proiektuari begira, baina esan behar da lanpostuen zerrendak erakunde bakoitzeko lanpostuak identifikatzen dituela, eta katalogoaren berdina dela. Monografiatan zehazten dira lanpostu bakoitzaren eginkizunak. Polizia-erakundeetako lanpostuak arrazionalizatu eta kategorizatu nahi badira eta, ondoren, lanpostuen zerrenda berri, legeak ez du ahalmenik eman behar horretarako. Polizia-erakundeetan, lanpostu gehienak orokorrak dira eta kategoriatan jakin bateko lanpostu-ereduari dagozkion eginkizunak dituzte. Proporzioan, lanpostu bereizituak urriak dira, baina, gaur egun, badira batzuk. Lanpostu bereizituak ez dira sortzen egin beharrekoko lana askotarikoa denean.

Espezialitateak egoteari dagokionez, **ERNEk** 43.2. eta 65 bis 3 artikulua ezabatzea proposatu du, iraupen-konpromisoa eta eguneratze-hautaprobak gainditu beharra ezabatzeko. Ez da onartu alegazioa. Bestalde, **EUDELe**k proposatu du udaltzaingoetan ere espezialitateak egotea. Onargarria izan daiteke hori.

ERNEk iradoki du 67.1 artikulua aldatzea eta 67.2 artikulua ezabatzea, lanpostuak betetzeko deialdiak eta haien ebazpena Ertzaintzaren aldizkarian eta iragarki-tauletan argitara daitezen, eta ez EHAA-n. Gaur egun, EHAA-n argitaratzen dira deialdiak (ez baitzen sortu Ertzaintzaren aldizkaririk), baita iragarki-tauletan ere; aldiz, Gurenetan argitaratzen dira esleipen-ebazpenak. Lege-proiektuan jada ez dago Ertzaintzaren aldizkaria sortzeko aurreikuspena; hortaz, egun egiten den bezala egingo da. **ERNEren** proposamena ez da bateragarria Ertzaintzaren aldizkaria desagertzearekin, eta indarreko jardunbideak aukera ematen du publizitate-printzipioa eta konfidentzialtasun- eta segurtasun-eskakizunak bateragarri egiteko.

ELA-Ertzaintzak proposatu du lanpostuen zerrendan iraupen maximoko baldintza ezartzen bada soilik eskatzea iraupen-konpromisoa. Ez da proposamena ulertzen; LPZn jasota daude iraupen minimoko edo maximoko eskakizunak.

Bestalde, **ELA-Ertzaintzak** proposatu du 71.3 artikuluko bigarren paragrafoan jasota gera dadila, gaur egun bezala, aldi baterako osagarria emango zaiela lanpostua ezabatzearen ondorioz behin-behinean atxikita daudenei, parte har dezaketen lehenengo lehiaketa ebazten den arte. Agindu hori ez da aldatuko aurreproiektuan; 71.3 artikuluko lehenengo paragrafoa soilik aldatuko da.

- Merezimendu-lehiaketa

Lanpostuak merezimendu-lehiaketa bidez betetzeari dagokionez, **ERNEk** 65.2 artikulua proposatu du, merezimendu gisa ez daitezela hartu, soil-soilik, antzinasuna eta egindako lana, gainerako merezimenduak (prestakuntza-ikastaroak, titulazioak, etab.) ez daitezela hartu besterik gabe berdinketa hausteko, eta aldi batez, kolektibo osoa euskalduntzen ez den arte, euskara ez dadila baloratu berdinketa hausteko irizpide gisa.

Onar liteke **ERNEren** proposamena, alegia, lanpostu jakin batzuetarako merezimendu gisa har daitezela antzinasuna eta egindako lana, eta gainerako merezimenduak (prestakuntza-ikastaroak, titulazioak, etab.) berdinketa hausteko har daitezela. Alabaina, irizpide hori ezin zaie lanpostu guztiei aplikatu, desitxuratu egingo lukeelako enplegatu publikoen legeria orokorrean ezarritako merezimendu bidezko lehiaketaren kontzeptua bera. Aldiz, ezin da onartu euskara aldi batez soilik har dadila kontuan, berdinketa hausteko irizpide hutsean geratuko bailitzateke. Hori dela eta, proposatu da beti balora daitezela antzinasuna eta egindako lana, baita euskara ere baldintza ez denean; eta gainerako merezimenduak, berriz, deialdian berariaz hala erabakitzen bada soilik jaso daitezela, lanpostuekin duten harremana kontuan hartuta.

Bestalde, **UGTk** proposatu du arauen bidez gara dadila egindako lanaren kontzeptua. Horri dagokionez, esan behar da lanpostuak betetzeko erregelamenduak dagoeneko garatzen duela alderdi hori.

Aldaketa hauek proposatu ditu **CCOOK**:

a) Eginkizunez gabetzeko zehapenek inoiz ez izatea ondorioz antzinasunaren merezimendua kontuan hartzean. Ez da onartu. Kontrakoa bidegabeagoa izango litzateke lana behar bezala egin dutenentzat.

b) Lehiaketa bidez lanpostua lortu dutenak hurrengoetara ere aurkeztu ahal izatea, 2 urte pasatu ez badira ere. Ezin da onartu. Baldintza hori funtzio publiko orokorrean aplikatzen da, eta aukera ematen du gutxieneko egitura batzuk finkatzeko eta erakundeak etengabe goitik behera aldatu behar ez izateko, unitate zehatzak osatu aurretik.

c) Lanpostua desagertzearen ondorioz lanposturik ga be gelditu direnek lanpostua herri berean lortzeko lehentasuna kentzea edo, gutxienez, ondorio hauetarako, kendutako lanpostuari dagokion udal mugartea izatea herria, eta, herri horretan unitaterik egon ezean, herri horretaz arduratzen den komisaria. Lanpostua kenduz gero, lehentasunak bermea ematen dio funtzionarioari, eta funtzio publiko orokorrean jasota dago. Ez da beharrezkoa legea aldatzea, adibidez lanpostuak betetzeko erregelamenduan proposatutakoaren moduko interpretazio-araua jaso d ezan. Erregelamenduaren gauza da hori, ez legearena.

d) Unitateen arteko zerbitzu-eginkizunak biltzea, lanpostuko antzinasuna eta kategorian sartzeko puntuazioa hartuta berdintasuna hausteko irizpide gisa. Ez da beharrezkoa alderdi hori legean jasotzea, dagoeneko ageri delako hura garatzen duten arauetan.

ELA-Udaltzaingoak proposatu du beharrezkoa dela Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legean agertzen den maila pertsonala aipatzea 65.2 artikuluan. Onartu egin da, arlo horretan Ertzaintzaren eta udaltzaingoaren artean erregimen-desberdintasunak daudela kontuan hartuta.

- Izendapen askea

Lanpostuak izendapen aske bidez betetzeko prozedura ri dagokionez, **ERNEK** proposatu du 63.3 artikulutik kanpo utz dadila prozedura, oinarritzako eskalako lanpostuak, ikuskaritzakoak eta komisariorde-lanpostuak betetzeko, eta ezaba dadila izendapen aske bidez bete daitezkeen lanpostuen gehienezko ehunekoari buruzko paragrafoa. **ELA-Ertzaintzak** proposatu du “goi-zuzendaritzako” lanpostuetara muga daitezela, eta **CCOOK**, berriz, goi-mailako eskalako lanpostuetara.

Gaur egun, lanpostuak betetzeko erregelamenduan ezarritako mugatik behera dago izendapen aske bidezko lanpostuen ehunekoa. Egokia dirudi horri eustea, eta izendapen askeko lanpostuak behar-beharrezkoetara mugatzea. Bistakoa denez, erakundeko maila goreneko lanpostuetan aplikatzen da, hein handiagoan, izendapen askearen irizpidea, erantzukizun eta konfiantza handiagoa eskatzen dutelako. Hala ere, kasu bakan batzuetan, beheragoko kategorietan ere aplika daiteke. Hortaz, baliteke sindikatuaren proposamenak lanpostuak betetzeko mekanismoak etetea. Horren ordez, proposatu da arauen bidez gehienezko portzentajeak ezar daitezkeela, ez bakarrik kidego osoan, baizik eta baita eskala edo kategorietako bakoitzean ere.

- Trukea

Udaltzaingoko trukeari dagokionez (hasierako zirriborroaren 21. xedapen gehigarrian jasoa), **EUDELeK** proposatu du LPZn ezarritako baldintzak bete daitezela. Arrazoizkoa da hori. **UGT** sindikatuak dio ez dela halako araudirik behar, ba dagoelako aurreikuspen

hori. UGTren proposamenak zentzua du; hori dela eta, onartu egin da, eta kendu egin da araudia bigarren zirriborrotik.

Bigarren zirriborhoa ikusita, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du trukearen arauak berriro sartzea, eta ez aplikatzea udaltzainen artean soilik, baizik eta baita EAEko poliziaren edozein kidegotako funtzionarioen artean ere.

Ez da jasoko araudia, eta onartu egin dira UGTk adierazitako irizpideak. Hala ere, kontuan izan behar da administrazioarekiko auzien zenbait epaitegik zalantzan jarri dutela trukearen figura, agian ez datorrelako bat lanpostuak betetzeko ezinbestekoak diren berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioekin.

- Fakultatiboen eta teknikarien eskala

ERNEK proposatu du 105.3 artikuluan gehitu dadila klausula bat sei hilabetetan gara dadin fakultatiboen eta teknikarien eskala (unitateak eta plazak ezartzea, eta lanpostuen zerrenda aldatzea). Hori dela eta, gogoan izan behar da eskala hori badagoela, eta egungo lanpostuen zerrendak ez duela eskala horretako plazarik.

- Karrera eta barne-sustapena

- Barne-sustapena

CCOOK proposatu du 3 hilabeteko epean egin daitezela barne-sustapenerako deialdiak edo espezialitatedun plazak betetzeko deialdiak, plaza hutsen kopurua kategoria edo espezialitateko plazen % 10 baino handiagoa denean. Ezin da onartu proposamena. Denbora behar da barne-sustapenerako deialdiak aurreikusteko, planifikatzeko eta gauzatzeko; hori dela eta, ezein administrazioek ezin ditu egin beharreko lanak egin proposatutako epeen barruan.

ERNEK proposatu du ez dadila inoiz baldintzetatik kanpo utzi titulazio akademikoa (horrek gaitasun-ikastaroak kentzea dakar); zehatzago, **CCOOK** proposatu du ezaba daitezela barne-sustapenerako gaitasun-ikastaroak (art. 59.2). Aurreproiektu honen helburua ez da gaitasun-ikastaroetako araudia aldatzea. Ikastaroak nolabait lotuta daude funtzionario-karrera konfiguratzeko moduarekin; alegia, oro har, kategoria baxuenetik (hots, C1 azpitaldea) egiten dela nahi den kategorian sartzeko eskaera. Eredu horrek barne-sustapenaren araudia baldintzatzen du, titulazioak bezainbeste erabakitzen baitu lanean hartutako esperientziak ondorengo sustapena. Aurreproiektuak murriztu egin nahi du igo ahal izateko kategoria bakoitzean zerbitzuak ematen egin behar den denbora, baina, denbora hori guztiz ezabatuz gero, administrazio-karrerak oso bizkor hasiko dira urte gutxitan, eta ez dute izango agintemaila bakoitzean hartutako esperientziarik. Hori gauzatuz gero, zalantzan jarriko litzateke aginte-eskaletatik txanda librean sartzeko mekanismoen itxiera.

ELA-Ertzaintzak proposatu du barne-sustapenean parte hartzeko aukera ematea 2 hilabetetik gorako falta egin eta zigorra jaso dutenek (alegia, eginkizunez gabetuta egon direnek). Proposamen hori lotuta dago beste sindikatu batzuek egindakoekin. Proposamen horietan, aukera berberak eman nahi zaizkie, kasu jakin batzuetan, eginkizunez gabetuta egon direnei merezimendu-lehia ketetan parte hartzean. Batera aztertuko dira proposamen guztiak.

ERNEK proposatu du ez dadila eskatu aurreko kategorian gutxienez urte kopuru jakin bat eman izana (hau da, ez dadila soilik merezimendu gisa baloratu), eta ez daitezela kendu ezein eratako laneko bajak benetan egindako zerbitzuen zenbaketatik. Aurreko kategorian egin beharreko denbora betetzearren laneko bajak benetan egindako zerbitzu gisa zenbatzeari dagokionez, arrazoizkoa dirudi proposamenak, eta kontuan izan da bigarren zirriborroan.

ERNEK adierazi du ados dagoela hiru deialdien gehieneko kopurua ezabatzearekin. **CCOOK** ere aipatu du hori, eta dagoeneko jaso da zirriborroan.

Azkenik, testua berriro irakurrita ondorioztatu da komenigarria dela hobeto definitzea zer administrazio-egoeretatik igo daitekeen, eta “antzeko beste egoera batzuk” kontzeptuaren zehazgabetasuna saihestea, nahiz eta testuingurutik ulertu zer esan nahi duen.

- Ibilbide profesionala

Lanbide-karrera horizontalari dagokionez, **ESANek** zuzenean eskatu du kapitulua kentzeko. **ERNEK** proposatu du idazketa ordezkia dadila eta Ertzaintzaren 2011ko erabakia jar dadila. **UGT** sindikatuaren ustez, eskubidea eratu baino, emakida anbigua arautzen du. Bestalde, eskatu du udaltzaingoa sar dadila ordainsari-erregimenaren araudian, lanbide-karrerako osagarria ri dagokionez. **ELA-Ertzaintzak** proposatu du lanbide-karreraren eraginkortasuna ez dadila egon aurrekontuetan erabilgarri dauden baliabideen arabera eta ezaba dadila maila finkatua galtzeko aukeraren aipamena; akats bat ere zuzendu du numerazioan. **ELA-Udaltzaingoa** proposatu du 2 urteko epea ezar dadila lanbide-karrerako sistemak ezartzeko. **EUDELe** adierazi du beharrezkoa dELA-Udaltzaingoaren karrera horizontalean eta funtzionarioenean aldi berean sartzea oro har, denborazko edo bestelako disfuntziorik gabe.

ESANen proposamenari dagokionez, esan behar da, lanbide-karrera legez araututa ez badago, ezin izango litzatekeela garatu.

ERNEren proposamenari dagokionez, kontuan izan behar da EAEko polizia osoari buruz aipatzen direla karrera horizontalaren arauak aurreproiektuan. Hortaz, ez da erraza Ertzaintzan egon daitezkeen erreferentziak besterik gabe kolektibo horretatik kanpo aplikatzea, udalerrietan eta autonomian egon litezkeen beharrei jaramon egin gabe. Horrek eragotzi egiten du ERNEren proposamena; gainera, legearen esparruan, oinarritzko printzipio eta arau batzuk prestatzen dira, unean uneko beharren arabera garapena egin ahal izateko. Hortaz, araudian, legearen erreserba-printzipioak lege formalei eskatzen dizkien arautzeko oinarritzko eta beharrezko elementuak jasotzen dira; elementu horiek aukera emango dute eremu bakoitzean garapen profesionaleko edo karrera horizontaleko sistemak ezartzeko etorkizunean.

Horrek **UGTri** erantzuten dio.

ELA-Ertzaintzak proposatu du lanbide-karreraren eraginkortasuna ez dadila egon aurrekontuetan erabilgarri dauden baliabideen arabera eta ezaba dadila maila finkatua galtzeko aukeraren aipamena.

Ezin da onartu **ELA-Udaltzaingoaren** proposamena, kontuan hartu behar baita EUDELe egokiro dioena.

Hori guztia bat etorrarazi behar da **Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren** txosteneko ondorioekin eta berriki Eusko Legebiltzarrera bidali den euskal enplegu publikoari buruzko lege-proiektuaren edukiarekin.

Euskal enplegu publikoari buruzko lege-proiektuak aukera ematen du Ertzaintzan araudi espezifikoaren egon dadin, baina lege horretan eta haren garapen-araudian ezarritakoaren osagarri gisa aplikatu dadin. Proiektuaren abiapuntua da lanbide-karrera horizontaleko sistema bakarra egon dadila euskal administrazio publiko edo eremu sektorial bakoitzean, baina, horretaz gain, sistema guztiek bat egin dezatela, Euskadiko Enplegu Publikoa Koordinatzeko Batzordeak proposatzen dituen lanbide-karreraren erregelamendu-ereduei esker, horrela errazagoa izango baita enplegatu publikoak administrazio batetik bestera mugitzea eta garapen profesionaleko mailak elkarri aitortzea.

Kontuan izan behar da Ertzaintzarako soilik aipatzen dela araudi espezifikoaren sortzeko aukera, ez udaltzaingoetarako.

Funtzio publiko orokorraren konfigurazioa koherentea izan dadin EAEko poliziaren sektorekoarekin, eta irizpide guztiak bete daitezkeen, bereziki udaltzaingoan, EUDELe esan bezala (alegia, administrazio guztietan lanbide-karrerako sistema bakarra egotea; EAEko poliziaren sektorean garapen profesionaleko mailak harmonizatzea eta elkarri aitortzea, eta administrazio arteko mugikortasuna erraztea, berezia baita udaltzaingokidegoen kasuan), beharrezkoa da bi araudiak koherenteak izatea.

Esandakoari jaramon eginez, onartu egin dira Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak egindako proposamenak, eta testuan txertatu dira.

- Eskubideak eta betebeharrak

- Ordainsari-erregimena

ERNEK proposatu du ordainsariak murrizteko debekua sar dadila 74.1 artikuluan. Proposamen horrek ezin du izan polizientzat espezifikoak; horrenbestez, hala badagokio, enplegatu publikoen araudi orokorrean ja so behar litzateke.

Bestalde, UGTk eskatu du udaltzaingoa sar dadila ordainsari-erregimenaren araudian, lanbide-karrerako osagarriari dagokionez. Hala ere, aginduak, oro har, Ertzaintza soilik du hizpide, udaltzaingoen ordainsari-erregimenak oro har tokiko funtzionarioentzat ezarritakoari jarraitzen baitio. Enplegatu publikoaren lege-proiektuak dagoeneko ezartzen ditu halako osagarriak funtzionario horientzat.

ELA-Ertzaintzak proposatu du, goragoko kategorietako zerbitzu-eginkizunetan, funtzionarioak eskubidea izan dezala ordainsari osagarria jasotzeko nagusia de facto ordeztu duenetik, eta, zerbitzu-eginkizun horretan 3 urte ematen baditu, finka dadila goragoko kategorian jasotzen den destino-osagarria (74.a) art.). Alabaina, ezintasun legala dago uzi hori onartzeko, gauditu egiten baititu funtzio publikoaren araurik oinarritzkoenak. Batetik, indarrean jartzen dituelako de facto juridikoak ez diren egoerak, de facto zerbitzu-eginkizunak eta zerbitzu-eginkizun arautuak berezita. Bestetik, barne-sustapenerako mekanismo ezkutua proposatzen duelako, zerikusirik ez duena merezimendu- eta gaitasun-printzipioekin eta publizitate-printzipioarekin; mekanismo horren bidez, finkatu egingo lirateke titulazio-talde bateko kategoria bateko

ordainsari osagarriak, kontuan izan gabe kategoria horrek ez duela beharrezko titulazioa eta ez dela kategoriara igo berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioetan oinarrituta barne-sustapenerako prozedura arautuan.

- Bateriaezintasunen erregimena

Bateriaezintasunen erregimenari dagokionez, **ERNEk** proposatu du sei hilabeteko epea ezar dadila erregimena egokitzeko eta leuntzeko. **UGTk** proposatu du argi utzi behar dela inguruabar jakin batzuetan bateragarritasunera ko eskubidea dagoela. **CCOOK** uste du ez dela beharrezkoa aldaketarik egitea, murriztailea delako, eta Euskadin krisialdiak edo larrialdiak daudenean soilik izan behar lukeela bateraezina erreserbista izatea. Bestalde, **ELA-Udaltzaingoak** uste du EAEko poliziako kide guztiei aplikatu behar zaiela bateraezintasun hori.

Horri buruz esan behar da, erreforma horren bidez, bateraezintasunen erregimena leundu nahi dela, eta, azken jurisprudentziaren babesean, enplegatu publikoen erregimen orokorrera hurbildu.

ERNEren proposamena dela eta, ez da beharrezkoa eperik ezartzea erregimena doitzeko, berehala aplikatuko bailitzateke legea indarrean sartzean. **UGTren** iritziaziari dagokionez, ez da ezer argitu beharrik, araudi erki-dea aplikatzea baitakar.

Erreserbista izatearen bateraezintasunari dagokionez, ez dago **CCOOK** adierazitako asmo edo "beldurrik"; gaiaren oinarrian ez dago halakorik. Aldiz, Estatuko arauetan erreserbista nola araututa dagoen da arazoa. Beraz, asmoa da Estatuko araudian jasota dagoen erreserbista izatearekiko bateraezintasunen erregimenak goardia zibilari ematen dion tratamendu bera ematea. **CCOOK** berak onartu du, inguruabar jakin batzuetan, bateraezina dela jarduera hori. Dirudien ez, aurrekoa ezin da EAEko polizia osora estrapolatu, udaltzaingoek eginkizun desberdina dituztelako ordena publikoaren arloan.

- Bizitokia bertan izateko betebeharra

ERNE eta **CCOO** sindikatuek iradoki dute ezaba dadila 76. artikuluan ezarritako betebeharra, hots, bizitokia bertan izatekoa. Horri buruz esan behar da ahalik eta malgutasun handienaz idatzi dela legea; halako malgutasunez, ezen 1992ko legearen bizialdi osoan betebehara hori aplikatzeak ez baitu eragotzi langileak destinoa dagoen herritik kanpo erroldatuta egotea, baita inguru geografiko zabal samarrean ere, errealtateari jaramon eginez.

- Jardunaldia eta oporraldia:

ELA-Udaltzaingoak jardunaldiari eta oporraldiari buruz egin dituen proposamenek ez diote ekarpen arautzailerik egin gaur egun indarrean dagoen araudiari negoziatu beharreko arloak direla eta.

- Laneko arriskuen prebentzioa

ERNEK proposatu du akordio arautzailearen V. tituluan idatzitakoa ere (laneko arriskuen prebentzioari eta laneko osasunari buruzkoa) jaso dadila legearen testuan. Aipatutako proposamenak ikusita, badirudi onargarria izan daiteke ELA-Ertzaintzaren lan-baldintzak arautzen dituen akordioan jasotako oinarritzko printzipioak legearen testuan sartzekoa, baina ez akordioaren testua bera, neurrigabea eta gehiegizkoa izango bailitzateke, egokiagoa delako erregelamendu multzo batean jasotzeko, lege formaletan baino.

Bestalde, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du 3. paragrafoa gehitzea 79. artikuluan eta, bertan, zehatz-mehatz jasotzea gutxienez zer arrisku hartu behar diren kontuan laneko arriskuei aurrea hartzeko planetan. Proposatutako testua zehatzegia da lege honetarako; izan ere, legeak berak jasotzen du laneko arriskuen legeriako araudia, eta araudian aipatzen da laneko arriskuei aurrea hartzeko planetako edukia.

Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostenak ez du egoki interpretatu 79. artikulua. Hari buruz dio, laneko arriskuei aurrea harteari dagokionez, osasun-zerbitzua izan behar dela, eta, horretarako, “kontratuak edo lankidetzak hitzarmenak sinatu ahal izango direla profesional medikoekin edo osasun-erakunde publiko nahiz pribatuekin”. Txostenaren arabera, zerbitzu medikoak eskumena izango du kontratu edo hitzarmen horiek sinatzeko. Testutik, ordea, ez da halakorik ondorioztatzen; aldiz, zerbitzua barnekoa izan daitekeela edo hirugarrenen in hitzartu edo osa daitekeela aurreikusten du.

- Gizarte-babeserako mekanismoak

ERNEK hau proposatu du:

- Doluaren aipamena ezabatzea (79 bis 2 artikulua). Horrek esan nahi du aseguru-estaldura ez litzatekeela aplikatuko arduragabekeria-egoeretan, baina bai doluzkoetan, eta horrek ez du zentzurik.
- Zerbitzu-egintzan hilez gero ematen den konpentsazioa hiru urterokoetakoa izatea (eta ez bikoia), hildakoek 25 urtetik beherako seme-alabak badituzte.
- Zerbitzu-egintzaren ondorioz ezinduta geratuz gero, pentsio osoa jasotzea, eta ez pentsioaren % 80, orain arte bezala.

ELA sindikatuak proposatu du, hirugarrenen legez kontrako ekintzek eragindako ezintasunagatik funtzionarioak nahitaezko erretiroa hartu behar badu, aldi baterako prestazio ekonomikoaz gain, kalte-ordaina ere jaso dezala, lanpostuan jasotzen zituen ordainsari osoen bi urterokori dagokiona, heriotzag atiko kalte-ordainekin parekatzeko.

Ez dira onartu proposamenak. Ertzaintzako funtzionarioek dagoeneko badute estaldura egokia, ez bakarrik Gizarte Segurantzaren babesaren bidez, baizik eta baita sinatutako aseguru-polizen bidez ere. Araudi hau ere gehitu behar zaie, zeinak objektibatu egiten baitu zerbitzu-egintzan hilez gero edo nahitaezko erretiroa hartu behar izanez gero aplikatzen zen lehengo araudia.

ELA-Udaltzaingoak proposatu du, EPLren hamargarren xedapen iragankorrean (Ertzaintza Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrari lotuta dagoela dioenak), EAEko polizia aipa dadila, eta ez Ertzaintza, udaltzaingoak ere sar daitezten. Ez da zehaztapenik egin behar. Toki-administrazioako funtzionario orori aplikatzen zaion erregimena aplikatzen zaie udaltzaingoei, eta hamar kadak daramatzate Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean.

- Administrazio-egoerak

- Behin-behineko eginkizun-gabetzea

ELAk proposatu du itzul dadila behin-behinean eginkizune z gabetuta egondako aldian jasotakoa; eta **CCOOK**, berriz, ezaba daitezela 84. artikuluko 5. eta 6. zenbakiak (eginkizun-gabetze irmoa, behin-behinekoa izan ondoren). Ez da onartu. Funtzionarioentzat bermea da behin-behinean eginkizunik gabe emandako denbora eginkizun-gabetze irmoaren denboralditik deskontatzea, eta araututako gainerakoa esandakoaren ondorioa besterik ez da.

- Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa:

Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboari dagokionez, **EUDELe**k proposatu du legean jasota gera dadila udaltzaingoetan egokitzapenera pasatzeko adina ez dela izango 56 urtetik beherakoa (Ertzaintzan bezala). Hori eskatzeko arrazoia da komenigarria dirudiela legeak erreferentziako edo gutxieneko adina ezartzea; hala ere, positibotzat jo da tokiko autonomia errespetatzea. Arrazoizkoa dirudi horrek, baina agian hobe da gutxienekoa 60 urtetan egotea, aurreko legegintzaldiaren proiektuan bezala. Bestela, gehiegi mugatzen da udalen ahalmena zerbitzua dauzkaten aukeren arabera egokitzeko.

Bestalde, **EUDELe**k proposatu du udaltzaingoan ere aukera egon dadila egokitutako zerbitzu aktibora atxikitzen diren funtzionarioek erretiro aurreratua eskatzeko konpromisoak barneratzeko. Jaso daiteke.

UGTk proposatu du Ertzaintzarako aurreikusitako egokitzapenaren araudi zehatza udaltzaingotara ere hedatzea. Hala ere, kontuan izan behar da mekanismoaren birtualtasuna eta baldintzak langile kopuruaren eta egin beharreko lanen arabera egon daitezkeela. Hortaz, hobe da dagokion administrazio-esparruan erabakitzea. Horren ildotik, arrazoizkoa dirudi **EUDELe**n proposamenak, alegia, 85.4 artikuluan jaso dadila aintzatespen horren ondorio ekonomiko eta administratiboak tokiko araudian ezarriko direla.

ERNEk eskatu du ezaba dadila polizia-zerbitzuan jarraitze ko bermearen baldintza 85.4 artikuluan ezarritako adina dela-eta egin beharreko egokitzapenaren arauditik. Kontuan izan behar da eskakizun hori udaltzaingoentzat soilik dela, eta ez Ertzaintzarako. Udaltzaingo txikietan, langile batzuk adina dela-eta egokitutako zerbitzura igarotzen badira eta gaueko txanda egitetik salbuesten badira, polizia-zerbitzu iraunkorretik kenduko dira.

EUDELek iradoki du egokitutako zerbitzu aktibora pasatzeko aukeratik kanpo uztea udaltzaingotako goi-mailako eskalako eta eskala fakultatiboko langileak. Proposamen horrek justifikatu egin nahi du antzekotasunak daudELA-Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalarekin (eskala hori ez da sartzen). Hala ere, antzekotasun horiek ez dute logikarik, eta, goi-mailako tituludunak egokitutako zerbitzutik kanpo utziz gero, EAEko polizia-kidego guztietako goi-mailako eskala eta betearazpen-eskala guztietakoak ere kendu behar lirateke.

Aurreproiektua berriro irakurri ondoren ofizioz egiatzatu da ez direla adina dela-eta egokitutako zerbitzuan sartu bigarren jardueran daudenak (zuzena da hori), zerbitzu aktiboaren egokitzapena baita. Horri kalterik egin gabe, uste da adina dela-eta egokitzeko eskubide berberak izan behar dituztela bigarren jarduerako funtzionarioek eta zerbitzu aktiboan daudenek.

ERNEk proposatu du, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboko funtzionarioak aldi batez destinatorik ez duen bitartean, ordain diezazkiotela egoera horretara igarotzerakoan jasotzen zituen ordainsariak, eta ez gaur egun egiten dena eta proiektuak ezartzen duena; alegia, ez ordaindu berariazko osagarriaren osagarri berezia.

Bestalde, zerbitzu aktiboa adina dela-eta egokitzeari dagokionez, **ERNEk** eskatu du 194/2012 Dekretuan ezarritako idazketa jaso dadila legearen testuan (194/2012 Dekretua, langileak adinagatik babesteko neurriak hartzen dituen Ertzaintzaren hitzarmen arautzailea aldatzekoa). Gure ustez, proposatutako araudiak ez ditu aldatzen dekretu horretako aurreikuspenak, baizik eta gaitu egiten ditu. Beraz, ez du zentzurik arautegietan hain oinarrituta dagoen zerbitzu legean txertatzea.

ELA-Udaltzaingoak bigarren jarduerako proposamena egin du, adina dela-eta, bi fasetan: a) 55-60 urte bitartean zerbitzuan, ohiko langile taldeko lanpostuei gehitutakoetan, gaueko txandarik gabe eta egoera berrira pasatu aurretik kobratzen zuena kobratuta; eta b) 60 urtetik erretiroa hartu bitartean, lanik egin gabe (salbuespenezko deialdiak izan ezik) eta ordainsari osoa kobratuta, udalaren kontura. Eusko Jaurlaritzak udaltzaingoko ordezkariaren soldata finantzatzeko luke. Ezin da onartu proposamena.

Horrekin nolabait kontraesanean, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du ez dezala udal bakoitzak ezarri egokitutako zerbitzu aktibora borondatez pasatzeko adina udaltzainen kidegoan, baizik eta, legez, 56 urtetan finka dadila, edo negoziazio kolektibo bidez erabakitzen den adin txikiagoan. Ez da onartu.

- Bigarren jarduera:

ELA-Ertzaintzak aipatu du bigarren jarduerako beste hitzarmen bat negoziatu behar litzateke ELA-Ertzaintzan, baina ez du proposamen zehatzik egin, aztertu ahal izateko.

ELA-Udaltzaingoak hau nahi du: a) Alderdiak eskatuta soilik pasatu ahal izatea bigarren jarduerara. Ezin da onartu, ez baita bateragarria enplegatzaileak laneko arriskuen prebentziorako (adibidez) dauzkan betebeharrekin. b) Ebaluazio-epaimahaian, alderdi interesdunak eskatuta jardun dadila hiru kideetako bat. Ez da posible, eragotzi egingo bailuke epaimahaiak osaera egonkorra izatea antzeko kasuetarako irizpide komuna finkatzeko. Horretaz gain, akastu egingo luke ebaluazio-organoaren inpartzialtasuna (interesdunak edonoiz aurkeztu ahal izango ditu alderdiaren txosten medikoak, edo ebaluazio-organoaren irizpidea ezeztatu). c) 86.6.2 artikuluan (bigarren jarduerara pasatuz gero erretiroa erretiro aurreratua hartzeko adinean hartzeko konpromisoa), udaltzaingoak ere sar daitezela Gizarte Segurantzaren legeria aldatuz gero, eta Ertzaintzaren egungo araudiko baldintza berberak aplika daitezela (hori eginez gero, arau baldintzatua sartu behar litzateke, baina posible da). d) 86.5.2 artikuluan, udalak ere aipa daitezela (eta hala behar luke). e) Bigarren jarduerako langileen ordainsariak aurretik jasotzen zituenak izatea gutxienez (bete den lanpostuarenak jasotzea da logikoa). f) Udalei 2 urteko epea

ematea bakoitzak bigarren jarduerari buruzko araudia presta dezan nahitaez (lege hau garatzeko eskumen arautzaileak ezin du udalena izan).

EUDELek proposatu du ezaba dadila 20. xedapen gehigarria, bigarren jardueran udaltzainek poliziarrenak ez diren lanpostuak betetzeko aukera izateari buruzkoa. Haren iritziz, ez da beharrezkoa legean sartzea, udalen antolaketa-ahalmenak onartzen baitu atxikipen hori. Irizpide horri jaramon eginez, bigarren zirriborroan hogeigarren xedapen gehigarria ezabatzea erabaki zen. Hala ere, hutsune legal bat sortu da, ELA-Udaltzaingoak adierazi bezala, 86.5.2 artikuluan ez dagoelako udaltzaingoei aplika dakiekeen araurik. Hortaz, zuzendu egin behar da.

CCOOK proposatu du aldi batez destinorik gabe eta altan dagoen bigarren jarduerako edo egokitutako zerbitzu aktiboko funtzionarioek betetako azken lanpostuko ordainsariak jasotzen jarrai dezatela, berariazko osagarri berezia izan ezik, zerbitzu aktiborako aurreikusitakoetatik txikiena (berariazko osagarri berezia, 11). Egia esan, egoera hori ia pentsaezina da, bigarren jardueran edo egokitutako zerbitzu aktiboan daudenean, lanpostu berean jarraitzen baitute funtzionarioek, jarduera egokিতa edo nolabait aldatuta. Dirudenez, ez da inola ere arrazoizkoa ordainsari berberak izatea lanean edo lanik egin gabe.

ERNEK iradoki du bigarren jarduerako egoerara pasatzeko aukera ematea fakultatiboen eta teknikarien eskalako langileei. Gaur egun, ez da halako egoerarik jasotzen eskala horretan, bertako eginkizunek ez dutelako behar, EAEko poliziako gainerako eskaletan bezala, aurreikuspen espezifiko rik kalte funtzionala dagoenean.

UGTk uste du araudia asmo handikoa dela (laudorio moduan, agian), baina ez dela eraginkorra udaltzaingoetan akordio instituzionalik egiten ez bada. Ez du esaten, ordea, zer eratako akordioak izan behar luketen. Kontua da udaltzaingoetarako proposatu den bigarren jarduerako administrazio-egoeraren profila, funtsean, indarrean dagoenaren antzekoa dela.

EUDELek proposatu du bigarren jarduerako egoerara pasatzeko ebaluazio-epaimahairen osaeran (86.3 art.) fakultatiboetako bat interesdunak proposatutakoa izan dadila edo, bestela, ordezkari sindikalek proposatutakoa. Ez dirudi uzia onar daitekeenik, epaimahaiak adina kasu egongo lirarteke elako, eta epaimahaikideak ad hoc izendatuko lirartekeelako. Horrek, gainera, doktrina sortzea eragotziko luke, baita kasuak berdintasunez tratatzea ere. Araudia bat dator gai honen inguruan indarrean dagoenarekin.

Bigarren jarduerara igarotzeko epaimahai ebaluatzaileen osaerari dagokionez, batzuetan udalerriek proposatu dute Ertzaintzako epaimahai ebaluatzailea arduratzea udaltzaingoetako kasuak aztertzeaz, udalerriak hala agintzen dionean. Arrazoizkoa dirudi aukera hori aztertzeak.

Bigarren jarduerako egoerara pasatuz gero jaso beharreko ordainsariei dagokienez, Saileko langile-zerbitzuek iradoki dute ezaba dadila ordainsariak arau bidez ezarriko direlako erreferentzia. Izan ere, araua bada administrazio-egoera horretan lanpostua betetzen dela, erreferentziako ordainsariak lanpostuari dagozkionak izango dira. Egokia dirudi arrazoibideak.

Bigarren jarduerako ordainsariekin jarraituz, **ERNEK** proposatu du 86.7 artikuluan ezar dadila ordainsariak ez direla izango administrazio-egoera horretara pasatu aurretik zegozkienak baino txikiagoak. Horri erantzunez esan behar da korrespondentzia egon

behar duela ordainsari osagarrien eta egindako lana ren artean. Ezabatu egin da 86.7 artikuluko paragrafoa, bigarren jarduerako langileen ordainsaria nolabait egokitzeari buruzkoa, lanpostu arruntetako baina ordainsari txikiagoa jasoko dela pentsarazten baitzuen.

UGTk bermearen osagarriari buruz (87. artikulua) proposatu du, egokitutako zerbitzuan edo bigarren jardueran dagoen funtzionarioa salbuespen gisa eta aldi batez altan geratzen bada beste lanpostu bat eskaintzen edo egokitzen zaion arte, aldi baterako osagarri pertsonal gisa jasotzen zuen guztia ordain diezaiotela, ez bakarrik Ertzaintzaren kasuan, baizik eta baita udaltzaingoen kasuan ere. Aurreproiektuan, oinarritzakoak eta osagarriak bermatzen dira, berariazko osagarri berezia izan ezik, lanpostu zehatz bati lotuta dagoelako. Kontuan izan behar da salbuespena baina zerbait gehiago dela, hots, hipotetikoa, eta korrespondentzia egon behar duela osagarri berezi horiek jasotzearen eta lanpostu zehatz batean benetan aritzearen artean. Bestalde, arrazoizkoa izan daiteke agindua udaltzaingoei aplikagarri izatea. Beraz, aldatu egin da zirriborroa.

Bereiz aztertu beharrekoak dira **Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak** egokitutako zerbitzu aktiboari eta bigarren jarduerako egoerari buruz egin dituen oharrak.

Lehenik, ohartarazi behar da okerra dela lege-aurre proiektuen legezkotasun-parametro gisa erabiltzea ea indarreko beste lege arrunt batzuetara egokitzen den. Izan ere, lege-proiektuen baliozkotasuna neurtzeko parametroa gora goko mailako arauak soilik ezar dezakete (konstituzioa edo autonomia-estatutua), edo aplikagarri diren Estatuko oinarritzako arauak.

Txostenaren arabera, baliteke araudiak arazoak sortzea antolaketan. Funtzionario asko eta asko destinoaren zain geratuko lirateke; horrek gailentze handia eragingo lioke administrazioari, baina, trukean, ez litzuke zerbitzuak jasoko. Izan ere, haren ustez, destinorik gabe eta Administrazioaren esku egon daitezke bigarren jarduerara edo egokitutako zerbitzu aktibora igaro direnak destinoa esleitzen zaien arte edo lanpostua egokitzen zaien arte; eta hori, aurretik jasotzen zituzten ordainsari guztiak jasota, antzeko beste egoera batzuetan gertatzen ez den bezala (besteak beste, destinoaren zain egotea edo nahitaezko eszedentzia-aldian egotea).

Ondoren, arrazoibide horiek aztertuko ditugu, Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak egindako proposamenaren bideragarritasunari buruzko justifikazioa osa dezaten.

Gaur egun, Ertzaintzan badaude bigarren jarduerako egoera eta adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboarena, eta ez dago funtzionariorik inguruabar horiengatik destinoaren zain.

2014ko datuen arabera, gutxi gorabehera 100 ertzain zeuden bigarren jarduerako egoeran; guztiak ere lanpostuan. Kontuan izan behar da 2012az geroztik indarrean dagoen gutxiegitasunagatik bigarren jardueraren araudiak bermatu egiten duela lanpostu egokitu berean edo beste batean zerbitzua ematen jarraitzea.

Ertzaintzan, 56 urtetik aurrera eska dezakete adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa, eta 60 urtetik aurrera erretiro aurreratua eska daiteke. Horrenbestez, normalean, 56 eta 59 edo 60 urte bitartean aitortuko litzateke egokitutako zerbitzu aktiboa.

Arau gisa, egokitutako zerbitzu aktiboa aitortzeak ez dakar lanpostutik mugiaraztea, baizik eta jarduera egokitzea. Egokitzapen horretan, funtsean, aukera ematen da gauez lan ez egiteko eta, 59 urtetik aurrera, polizia-instalazioetik kanpo patruilan ez ibiltzeko. Horrenbestez, ez da egia Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txosteneko baieztapena; alegia, araudiak aukera ematen duela destinorik eta lanik gabe dagoen funtzionario talde batek ia ordainsari guztiak kobra ditzan.

Salbuespen gisa baino ez, eta unitate operatiboei eta ikerketa kriminalari dagokienez, aukera dago, lanpostuaren eginkizunak egokitu ezin badira, unitate bereko beste lanpostu batera edo lanpostu huts batera atxikitzeko, aurrez ezarritako lehentasunezko irizpideen arabera. Aldi batez, lanpostua egokitu edo beste lanpostu batera atxiki arte, soilik egon ahal izango da destinorik gabe Administrazioaren esku. Horrenbestez, ez zaio erakundearen zati handienari (hots, herritarren segurtasunari) aplikatuko aldi batez destinorik gabe egoteko aukera; ezohiko eta iraupen laburreko kasua da, bermea dakar, eta ez du sortzen destinoaren zain egoteko eskubide edo aukerarik.

2014ko datuen arabera, Ertzaintzako langileen % 10ek zituzten 56 urte edo gehiago, hau da, 756 pertsonak, eta haietatik % 80 oinarritzko eskalakoak ziren. Garai hartan, ertzainen batez besteko adina 47 urtekoa zen. Egokitutako zerbitzu aktiboa eskatu ahal izango luketenetatik, % 85ek eskatu zuten; hau da, 756 pertsonatik 639k.

2014an egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta zuten 639 pertsonatik, 355ek gauez lan egiten zuten, eta 284k (hau da, % 45ek) gaueko txandatik salbuestea eskatu zuten.

Datu horietan oinarrituta, datozen urteetarako estrapolazioa egin daiteke, alderdi hauei erreparatuta: langileen adin-piramidea, egokitutako zerbitzu aktiboa aitortzeko eskaeren ehunekoak (% 85) eta gaueko txandatik salbuesteko eskaeren ehunekoak (egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta dutenen % 45).

	Egokitutako zerbitzu aktiboa eskatu ahal izango lukeen pertsona kopurua (1)	Egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta izango lukeen pertsona kopuruaren aurreikuspena (2)	Polizia-instalazioetatik kanpo patruilan ibiltzetik salbuetsita dagoen pertsona kopuruaren aurreikuspena
2015	1.082	414	226
2016	1.412	540	339
2017	1.711	654	471
2018	1.965	752	654
2019	2.137	817	804
2020	2.215	847	855

- (1) Urte jakin batean 56 eta 60 urte bitarteko adin-tartean dauden langileak. Gure kalkuluen arabera, eskubidea dutenen % 85ek eskatuko dute egokitutako zerbitzu aktiboa.
- (2) Urte jakin batean egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta izango lukeen pertsona kopuruaren aurreikuspena, egokitutako zerbitzu aktibko eskaeren egungo ehunekoen estrapolazioa (eskubidea izango luketenen % 45)
- (3) 59 urte beteta izateagatik polizia-instalazioetatik kanpo patruilan ibiltzetik salbuetsita dagoen pertsona kopuruaren aurreikuspena.

Esandakoa ikusita, ezin dugu ados egon Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren prebentzio eta ondorioekin. Alderantziz, proiektuak indargabetu egiten du indarreko legeriaren arabera bigarren jarduerako funtzionario entzat arau orokorra zena. 2012ko erregelamendu-aldaketen ildotik, ziurtatu egin nahi da, funtzionarioak baldintza psikofisiko nahikoak ez dituenean edo adinagatik ha ren gaitasunak murrizten direnean baina erretiroa hartzeko besteko egoerak ez direnean, zerbitzuak ematen jarraituko duela polizia-erakundean, baldintza pertsonalen araberak eta lanpostu egokian.

Egia da, datozen urteetan, Ertzaintzan nabarmen handituko dela erretiroen eta beste baja begetatibo batzuen kopurua, eta, ikusi dugun bezala, baita egokitutako zerbitzu aktibora igaroko den edo igaro ahal izango den langile kopurua ere. Zailagoa da iragartzea zenbat igaroko diren bigarren jarduerako egoerara, baina estatistikak beti antzekoak izan ohi dira, eta ez dute zerbitzua asal datzen.

Langileen osasuna zaindu behar denez, adin jakin batetik aurrera, eta interesdunak hala eskatzean, egokitu egin behar da laneko jarduerak. Baina, ikusi dugunez, horrek ez dakar lanpostua aldatzea, salbuespenezko kasu batzuetan eta unitate jakin batzuetan izan ezik (edonola ere, unitate horiek ez dira erakundearen zatirik handiena). Horrenbestez, ez da ikusten txostenean aipatzen diren antolaketa- eta aurrekontu-arazoak egon daitezkeenik langileetako batzuk destinatorik gabe geratuko balira, ezta neurritz gaineko ordainsariak jasoko litzuketenik ere.

Bestalde, Funtzio Publikoa ez dago ados bigarren jarduerako langileak Administrazioaren esku geratzearekin, eta ez Segurtasun Sailaren esku, ezta haiei administrazio orokorrean zerbitzuak emateko deitzearekin, nahiz eta horretarako aukerarik ez eman lanpostuen zerrendak administrazioetako beste kidego edo sektore batzuetako funtzionarioentzat ere zabalduta. Administrazioa aipatu arren, eta ez Segurtasun Saila, ondorioa bera da. Hala ere, agindua argitzeko asmoz, aldaketa hauek egin dira: a) EAEko poliziako funtzionarioak aipatuko dira, eta ez bakarrik Ertzaintzakoak; eta b) funtzionarioa polizia-kidegoaren esku egongo litzateke, eta ez, oro har, administrazioaren esku.

Bigarren jarduerako administrazio-egoerari dagokion ez, proposatu du segurtasun-indar eta -kidegoetako funtzionarioek bete dezaketen lanpostu gisa sailka dadila bete beharreko lanpostua dagokion lanpostuen zerrendan. Ondorio horretan, prebentzioa handiegia da, ez du zerikusirik aginduaren logikarekin, ez ditu kontuan hartzen EPLko beste agindu batzuk, eta argi baino argiago uzten du ezinezkoa dela, oso kasu zehatz batean izan ezik, polizia-funtzionarioak administrazio orokorreko berezko eginkizunetara bideratzea. Baina, horretaz gain, proiektuko agindua irakurrita, ezin da inola ere egin txostenak egiten duen interpretazioa.

Bestalde, uste du, adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboari dagokionez, txostenak negoziazio kolektiboko lan-baldintzak egokitu besterik ez duela egiten, eta egokitzeapena ez dela lege bidez arautzekoa. Hori dela eta, proposamenaren kontrako txostena egin dute.

Egokitutako zerbitzu aktiboari buruzko araudiaren lege-mailaren aurkako oharra ez du irizpide legal edo konstituzionalik, baizik eta egokitasun-iritzia soilik. Ez dago erregelamendu-erreserbarik ezein gaitan, ezta legeari debekatu zaion gairik ere. Lanpostuan aritzea da, noski, zerbitzu aktiboaren oinarria. Horren ildotik, zerbitzua egokitzeak ez du aldatzen administrazio-egoeraren mota. Hala ere, indarreko araudiari eta, areago, proposamenari jarraiki, bigarren jarduerako egoerak zerbitzua etengabe

ematea dakar, baina horrek ez du esan nahi administrazio-egoeraren izaera eztabaidatu edo legetik kendu behar denik.

Edonola ere, zerbitzu aktiboa adina dela-eta egokitzea administrazio-egoera bereizia ez izateak ez du esan nahi hutsala denik legean jasotzea erregelamendu bidez aitortuta dagoenari buruzko arauak, aitortenaren oinarriek ondorio erabakigarriak baitituzte egokitzapenari heltzen dion funtzionarioaren eskubide eta betebeharrak. Era berean, kontuan izan behar da legeak aldatu egin nahi dituela bigarren jarduerako administrazio-egoeraren kasuak.

Hori gorabehera, azter daiteke ea beharrezkoa den lege-mailako arauan jasotzea, ez bakarrik figuraren oinarriko printzipio eta arauak, baizik eta baita agintarauetara hobeto egoki litezkeen alderdi zehatzei buruzko xehetasunak ere (Ertzaintza dagoeneko indarrean da). Eta are gehiago araudia EAEko poliziakide guztientzat berdina ez denean; izan ere, Ertzaintza ere hartzen du barnean, baina ez dator bat udaltzaingoaren kasuan administrazio bakoitzak bere garapena egitearekin.

- Diziplina-erregimena

- Faltak.

92.2.b) artikulua dela eta, **ERNEK** exijitu nahi du tratu gizagabea bereziki larria izan dadila, falta oso larritzat har dadin. Ez da onartzen, tratu bidegabea oso larria baita; tratu bidegabe oro da larria.

92.2.g) artikuluko faltari dagokionez, **ERNEK** proposatu du “behin eta berriro edo jarraian” gehitzea funtzioak nabarmen ez betetzeari. Hori, ordea, ez da beharrezkoa, “nabarmen” hitzak larritasuna adierazten baitu, behin eta berriro egiteaz gain. **UGTK** proposatu du errendimendu-falta “ziurtatua” izan dadila, eta ez “nabaria”. Baina hori ere ez da onargarria: batetik, gertakariak beti egiaztatu edo frogatu behar direlako; eta, bestetik, “nabaria” haratago doalako, errendimendu-faltak ageria eta antzemateko modukoa izan behar duelako. **ELAK** proposatu du, errendimendu-falta eta funtzioak nabarmen ez betetzea zigortu ahal izateko, aurrez jokabide horien ondoriozko informazio-espeditatea egotea. Ez da ulertzen zer motatako espeditatea izango litzatekeen hori, non eta diziplinazkoa ez den, ezta nola amaituko litzatekeen ere, non eta zehapen-ebazpenarekin amaitzen ez den, ohartara zenezkoa bada ere.

92.2.l) artikuluari dagokionez, **ERNEK** proposatu du ez daitezela areagotu jokabide larriak oso larrietara behin eta berriro gertatu izanagatik, erantzukizuna banakatu egin behar baita falta bakoitzean. Proposamen horri erantzunez, esan behar da zehapen-erregimen osoan kualifikatzen edo areagotzen duela falta behin eta behin gertatu izanak.

Emakundek iradoki du “jazarpen sexista edo sexuagatiko jazarpena lanean” esamoldea gehitzea 92.1bis artikuluko falta oso larrien artean, Berdintasun Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, irizpide hori jasotzen baitu. Onartu egin da.

- Zehapenak:

ERNEK areagotu egin nahi ditu falta arinengatiko zehapena k. Gaur egun, 1 eta 4 egun bitartean kentzen dira lana eta soldata, baina, sindikatuak proposatu duenez, 14 egunez ere kendu ahal izango dira. Era berean, falta larriengatiko zigorra ere areagotu nahi du, gutxieneko zehapena 15 egunekoa izatea nahi baitu. Bestalde, eskatu du ken dadila “ordainsaria galtzea” erreferentzia eginkizu nez gabetzen direnean.

Aurreko legegintzaldian ere proposatu zen zehapen arinak areagotzea, baina ez zen akordiorik lortu sindikatuekin, eta baztertu egin zen. Orduan, zehapen arinak gehitu nahi izan ziren, zehapen larrien kalterako, estatistikoki nabarmengoak izan ohi baitziren. Eginkizun-gabetze arinak eragin txikiagoa zuen administrazio-karreraren, gabetze-aldia ez delako antzinatasunetik kentzen. Bestalde, diziplina-zehapenei aurre egiteko aseguru-polizek falta arinengatik ezarritako zehapenak estali ohi dituzte, baina falta larriengatik ezarritakoak.

Hala ere, zehapen arinetako zigorrak areagotzeak ez du aldatzen falten egungo sailkapena; besterik gabe, arin edo larri gisa zehatzen diren jokabideei zigor handiagoak ezarriko litzaizkieke.

Beste kontu bat da zenbait falta larri arin bihurtzea, edo eginkizunez gabetzeko zehapen larrietan diziplina-ondorioak egokitzea. Adibidez, zehapen larri gisa gehienez 15 egunez eginkizunez gabetuz gero, antzinatasunik ez galtzea.

Gainerakoan, egokia da **ERNEren** iradokizuna, alegia, eginkizunez gabetzean “ordainsaria galtzea” erreferentzia kentzearena. Auzi penalean emandako epai bidez edo diziplina-zehapenaren ondorioz pasatzen da eginkizun-gabetzeko administrazio egoerara. Kautelazko neurri gisa ere erabiltzen da diziplina-espedienteak bideratzen direnean edo prebentziozko espetxealdia ezartzen denean, baita epaileak hala erabakiz gero ere lanpostuan aritzeko ezintasuna adierazteko (behin-behineko gabetzea). Administrazio-egoera horretan, ezin da ordainsaririk edo bestelakorik jaso, non eta gabetzea behin-behinekoa ez den (oinarrizko ordainsariak eta seme-alaba zaintzeagatiko laguntzea). Horrenbestez, ordainsariak galtzea ez da zehapenaren ondorioa, baizik eta administrazio-egoerarena.

Bestalde, **ERNEK**, ekarpena baino, nahitaezko lekualdatzearen zehapenari buruz proposatutako araudiaren inguruko interpretazioa egin du, interpretazio egokia egin ere. Haren ustez, zehapen-ebazpenak zehaztu egin behar du destinoa galduko den ala ez. Destinoa galduko ez bada eta hala adierazten bada zehapenean, hura betetakoan destinora itzuliko da, eta ez da zigortu behar destinora itzuli izana.

- Graduazioa

ERNEK ohartarazi du 94. artikuluko e) eta h) letrak ia berdinak direla. Hala da. Hortaz, h) letra ezabatu da.

ERNEK uste du, zehatzerakoan zigor penalaren garrantzia haztapen-irizpide gisa hartu ordez, hobe litzatekeela doluzko delituaren falta oso larria aldatzea. Horrela,

askatasunaz gabetzeko zigorra dakarren doluzko delituagatiko zigor-kasuak soilik zehatuko lirateke diziplina-bidetik kausa horrengatik, delitua zerbitzuarekin erlazionatuta badago edo Administrazioari nahiz pertsonen kalte larriak eragiten badizkie. Ez da onartzen. Legea urratu duen polizia-agentea espetxeratzeak zerbitzu osoan du eragina, delitua jazarri behar duenak delituek ez egitea espero baita.

Kendu egin behar dira falta penalen erreferentziak, azken erreforma penalak kendu egin duelako figura hori.

Onartzen da berariaz sartzea ordezkari sindikalaren erreferentzia espedientepeko funtzionarioari 95.2.bis artikuluan aipatzen den konfiantzazko pertsonaren laguntza jasotzeko eskaintzen zaion aukeran.

- Prozedura.

DACIMAREN txostenak 95.2.ter artikuluari buruz dio administrazio-prozedura erkideari buruzko lege berriak dioena jaso behar dela, alegia, nahitaez erabili behar direla baliabide elektronikoak. Kontuan hartu da, eta testua aldatu da.

- Iraungitzea:

ELA-Udaltzaingoak nahi du 95.5 artikuluan ezarritako iraungitze-epea 3 hilabetekoa izan dadila, gaur egun bezala, eta ez 6 hilabetekoa, proposamenean bezala. Ez da egia; gaur egun, iraungitze-epea ez da 3 hilabetekoa. Beste diziplina-erregimen batzuekin alderatuta ikus daitekeenez, epea 12 hilabetekoa da Estatuko funtzionario zibilen kidegoan; 6 hilabetekoa, euskal enplegu publikoari buruzko legean; eta 6 hilabetekoa, baita ere, Espainiako polizia nazionalaren diziplina-erregimenean. Diziplina-prozeduretan egin behar diren izapideak eta prozedura-bermeak ikusita, ezin da bermedun diziplina-espedienterik bideratu 3 hilabeteko epean. Hori dela eta, ez da onartu proposamena.

- Preskripzio-epeak:

ERNEK preskripzio-epeak laburtzea proposatu du, 3 urtetik (oso larria), 2 urtetik (larria) eta 3 hilabetetik (arina) urtebetera (larriak) eta hilabetera (arinak). Baita zehapenen preskripzio-epeak ere. **UGTK** proposatu du hilabeteko epean preskriba daitezela falta eta zehapen arinak. **CCOOK** proposatu hilabetera murriz dadila (3 hilabetetik) falta arinen preskripzio-epea. **ELAK** proposatu du falta eta zehapen larrien preskripzio-epeak 18 hilabetera murriz daitezela, eta arinenak, berriz, hilabetera.

Enplegu publikoari buruzko euskal lege-proiektuan, preskripzio-epe hauek daude: falta oso larriak, 3 urte; larriak, 2 urte; eta arinak, 6 hilabete. Zehapen oso larriak, 3 urte; larriak, 2 urte; eta arinak, urtebete. Zentzuzkoa da, segurtasun juridikoagatik, preskripzio-epeak nolabait komunak izatea euskal administrazioetako enplegu publikoen talde guztietan. Hala ere, zirriborroan, falta eta zehapenen preskripzio-epeak txikiagoak dira erregimen orokorrean baino.

- Betearaztasuna eta betearazpena:

ERNEK iradoki du gehi dadila zehapenaren betearazpena ka utelaz eteteko aukera arautzen duen manuan (97 BIS art.) interesdunak berariaz hala eskatzen badu soilik aplikatuko dela kautelazko etenaldia. Iradokizunari erantzunez, aldatu egin da 97 bis artikuluko bigarren paragrafoa: *“Administrazio-bideko diziiplina-zehapen irmoaren betearaztasuna kautelaz eteteko eskatu ahal izango du interesdunak, eta administrazioarekiko auzi-errekurtsua aurkeztuko duela adieraziko dio Administrazioari.”*

ERNEK iradoki du gehi dadila 97 ter artikuluan, zehatutakoari ahalik eta kalterik txikiena eginez betearazteko printzipioari buruzkoan, unitateko buruzagitzarekin hitzarmena egiteko aukera. Ezin da onartu iradokizuna, betearazteko modua ez baitago zertan unitateko buruzagitzaren erabakiaren menpe.

Aurreproiektua hemen berrikusi ondoren, uste dugu 97.ter.2 artikuluan (funtzionarioak beste egoera batzuetara pasatzean zehapena betearazteko moduari buruzkoan) adierazi behar dela ezin dela zehapena bete, nahitaezko erretiroa hartu eta funtzionario izateari utzi zaiolako.

ERNEK proposatu du bost urtekoa izan dadila (eta ez seikoa) zehapenen multzoaren muga 97 TER 3 artikuluan, eginkizunak kentzeko zehapen bat baino gehiago betetzeari buruzkoan. Hortaz, adibidez, launa urteko bi zehapen jarri eta eginkizunak kentzen badizkidate, bost urte baino ez nintzateke egongo zigortuta, eta ez zortzi. Ez dirudi neurrizkoa. Zentzuzkoagoa dirudi dagoen beza la uzteak.

97 ter 4 artikulua dela eta (ordainsariak kendu eta zatikatzea), galdera da ea nola aplikatuko den prozedura hori, eginkizun-gabetze irmoa baita eta egoera horretan ez baita ordainsaririk jasotzen. Badira antzeko aurreikuspenak Espainiako polizia nazionalaren eta goardia zibilaren diziiplina-erregimenen. Hala ere, polizia nazionalaren kasuan, falta larrien ondoriozko eginkizun-gabetzeetan soilik aplika daiteke zatikatzea (falta larriagatik eginkizun-gabetzea gehienez 3 hilabetekoa da) eta, goardia zibilaren kasuan, ezin da zatikatzea aplikatu, non eta ez den ordainsariak eta bestelakoak kenduta zehatzen (zehapen ekonomikoa da, baina ez du zerikusirik enplegu-gabetzearekin).

Gure kasuan, ordainsariak eta bestelakoak kentzea ez da zehapen ekonomikoa, baizik eta administrazio-egoera baten ondorioa. Gainera, praktikan, bideraezina litzateke kendutako ordainsariak zatikatzea zehapenak gainditu duenean nomina baten denboraldia.

97 ter 5 artikuluari dagokionez, **EUDELeK** proposatu du jaso dadila zehapena betetzeko ordezkariak ezin izan, besterik gabe, zehatutakoaren eskubidea, baizik eta administrazioak onartu egin beharko duela, bestela, zehapenak eredu garri izateari utziko liokeelako. Onartu da.

Testua hemen berraztertu ondoren, proposatzen dugu “gehienez 15 egun” kentzea eta “15 egun edo gutxiago” jartzea.

97. artikuluari dagokionez, **ERNEK** esan du aparteko lana alta-egoeran egiten dela eta kotizatzen dela Gizarte Segurantzari. Ez dirudi esplizitatu behar denik, langilea zerbitzu aktiboan baitago, eta ez eginkizun-gabetuta.

ERNEK proposatu du 99.5 artikulua aldatzea, Ertzaintza osorako hautesbarruti bakarra ezartzeko polizia-kidego horretako ordezkarien hauteskundeetan (gaur egun, hiru hautesbarruti daude). Zirriborroan ez dago proposamen hori. Hala ere, ez du kapituluko funtsezko ezer aldatzen, eta beste sindikatuak ere ez dute eskatu alderdi hori aldatzea. Gai horri heltzeko, nolabait ados jarri behar lukete eragile sindikalek.

ERNEK eskatu du Ertzaintzaren negoziazio-mahaiaren eskumen eskusiboa izan daitezela negoziatu beharreko gai guztiak, eta ez administrazio-mahai orokorrarena. Uzi hori ez da onargarria, negoziazio-elementu batzuek euskal administrazioaren eta sektore publikoko erakundeen zerbitzura dauden langile guztiei eragiten baitiete, eta ezin baitira guztiz banandu negoziazio-eremuak, gobernu-politikaren koherentziari eusteko.

CCOOK hainbat gauza proposatu ditu: langileen ordezkariak zerrenda irekien bidez hauta daitezela; langileen ordezkari bakoitzak kudea dezala ordu-kreditua, eta ez erakunde sindikalek; eta audioan eta bideoan graba daitezela, nahitaez, negoziazio-mahaiaren bilerak, eta sailaren intranetean jar daitezela funtzionarioen esku. Proposamen horiek ez dute oihartzunik izan beste erakunde sindikaletan. Gai horri heltzeko, nolabait ados jarri behar lukete eragile sindikalek.

ELA-Ertzaintzak proposatu du euskal legegileen esku utz dadila lan-baldintzei buruzko akordioak aldatzeko eginkizuna. Deigarria da, sindikatuak aitortu egiten baitute legeak gaitasuna duela indarreko negoziazio kolektiboaren emaitza aldatzeko, hura alde batera utzita. Baina, horretaz gain, hainbat arazo sortzen ditu: a) Gaiari ezin zaio heldu funtzionario talde espezifikoari buruzko lege sektorialaren bidez, baizik eta funtzio publiko osorako araua izango litzateke eta, hortaz, ez litzateke lege honetan sartuko. b) Zenbait eginkizun kentzen dizkio botere betearazleari, eta botere legegileari bidegabe esleitzen dizkio, eta proposamengileak ez ditu kontuan hartu horren guztiaren ondorioak, jarraian adieraziko direnak. c) Prozedura legegilearen bidez soilik onar ditzake arauak botere legegileak, kasu honetan bitxia dena, legearen bidez soilik aldatu ahal izango litzatekeelako erregelamendua eta horrek blokeatu egingo lukeelako, materialki, ondoriozko arauaren maila. Horrenbestez, Legebiltzarrak esku hartu ondoren, negoziazio kolektiborik gabe, mugatu egingo litzateke sindikatuak eta administrazioak akordioak egiteko ahalmena, Legebiltzarrak ere ados egon behar lukeelako eta bide legegile egokietatik onartu behar litzatekeelako.

Ertzaintzaren Kontseiluaren erregulazioari dagokionez, proposamen hauek egin dira:

CCOOK proposatu du negoziazio-mahai espezifiko bihurtzea, polizia-jardunetan segurtasunarekin zerikusia duen guztiaz ardura dadin, eta kontseilu horretako erakunde sindikalek ertzainen aurkako salaketak egin dituzten herritarrek auzitara eramateko ahalmena izatea, salaketek ez badute zigorrik ekarri eta salatutako ertzainak absolbitu egin badira. Ez da onartu kontsulta-organo hau beste negoziazio-mahai sektorial bat, EPLren 103. artikuluan ezarritakoaz bestelakoa, bihurtzeko uzia. Bestalde, edozein erakunde sindikalek bidera ditzake ekintza penalak; ez da beharrezkoa erantzukizun hori administrazio-organoari transferitzea. Horretaz gain, Administrazioak muga legalak ditu akusazio penal gisa agertzeko (eta administrazio honek badu horretan esperientzia).

ELA-Ertzaintzak proposatu du funtzionarioen aurkako diziiplina-espediente guztien berri eman dezala Ertzaintzaren Kontseiluak (falta arinen kasuan izan ezik), eta Kontseiluan ager dadila espedientepekoa. Proposamena ikusita, ez da ulertzen funtzio

gisa gehitzea hasitako gainerako espedienteak eta haien ebazpena ezagutu beharra (falta arinenak soilik geratuko lirateke alde batera). Gaur egun, zirriborroaren arabera, kasurik larrienetan eta espedientepekoa ordezkari sindikala denean eskatzen da Ertzaintzaren Kontseiluaren txostena. Ertzaintzaren Kontseiluak diziplina-espediente guztietan txostena egin dezala eskatzeak Kontseilua gainkargatuko luke, baina horrek ez du prozedura-berme handiagorik ematen. Aitzitik, atzeratu egingo luke espedienteak izapidetzeko eta ebazteko prozesua, eta espedienteak iraungitzeko arriskua egongo litzateke (arriskua baino, ziurtasuna izango litzateke zenbait proposamen onartuko balira, besteak beste, espedientearen indarraldia 3 hilabetera murriztea). Gainerako funtzionarioen diziplina-erregimen erkidera hurbiltzeko eskatu duenez ELAk, ez da ulertzen proposamena: diziplina-prozedurak, prozedura idatzia (ez ahozkoa) denak, kontraesan-, entzunaldi- eta defentsa-printzipioak bermatzen dizkie espedientepekoiei Ertzaintzaren Kontseilua kontsulta-organoa da, ez instrukzio-organoa (instrukzio-ahalmena izango balu, ohorezko auzitegienaren antzeko esku-hartzea izango luke zehapen-prozeduretan; Konstituzioaren 26. artikuluaaren arabera, debekatuta daude ohorezko auzitegiak administrazioaren eta erakunde profesionalen arloan).

Antzekoa esan daiteke ohoreak emateari buruzko ELAren proposamenari dagokionez.

- Egitura profesionala:

ELA-Ertzaintza sindikatuak nahi du 105.2.c) artikuluan jasota gera dadila, prestakuntza ondorengo praktikaldian, C1 sailkapen-taldearen arabera ordainduko zaiela izangaiei. Bistakoa da, legea onartu ondoren, hala izango dela, ezin baita beste inola izan; alegia, ezin izango litzateke beste edozein sailkapen-talderen arabera ordaindu, C1 titulazioa eskatzen baitzaie prozesuan parte hartu ahal izateko.

Egitura profesionalari dagokionez, **ELA-Udaltzaingoak** nahi du unibertsitateko titulua eska dakiela agenteak edo agente lehenak ez diren udaltzain guztiei. Ez dago argi **ELA** sindikatuak irizpide bera duen Ertzaintzari dagokionez, edo, euskal polizia-kidegoen artean halako egitura-desberdintasun nabar mena egotea nahi duen.

ELA-Ertzaintza sindikatuak nahi du aginduzko aditza erabil dadila 112. artikuluan, polizia judizialeko funtzionarioak epaitegi zehatzetara betiko atxikitzeke aukerari buruzkoan. Kasu honetan, bidegabekia da aginduzko aditza erabiltzea, aginduan ez baita zehazten zer epaitegitara atxikiko liratekeen (areago, ezin izango litzateke). Epaitegi bakar eta zehatzera atxikitzearen figura polizia judizialari buruzko 1987ko erregelamenduan jasota dago, polizia judizialeko unitateek botere judizialaren organoekiko menpekotasun funtzionalaren berezitasun gisa, eta epaitegi zehatz edo fiskaltza berezi batek funtzionarioak modu iraunkorrean atxikitzea behar duenean sortzen da. Artikulu honetan aipatzen den polizia judizialari buruzko erregelamenduko aginduak habilitazioa dakar, baina ezin da agindu zehatz gisa hartu, aurrez ezin baitira zehaztu zer organo judizial zehatzetara atxikiko diren. Hori dela eta, ez da egokia aginduzko aditz-forma erabiltzea.

- Udaltzaingoak

- Izendapena:

Nahiz eta aurreproiektuaren xede ez izan, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du “Udaltzaingoa / Policía local” izendapen bakarra erabil dadila udaltzaingoez hitz egiteko. Horren ildotik, 2. artikulua eta 24.3 artikulua aldatzea proposatu du. Arrazoizkoa dirudi izendapena bateratzeko uziak. Hala ere, kontuan izan behar da, baita ere, udaltzaingoen oinarritzko arauak prestatzerakoan eztabaidatu zela horren inguruan, eta komenigarritzat jo zen udalerri bakoitzean izendapen tradizionalei eustea, oso errotuta zeudelako (adibidez, “udaltzaina”, “polizia munizipala”, “guardia urbana”, “policía municipal”, etab.). Ez da onartu.

- Erakunde armatuaren kontzeptua:

Nahiz eta aurreproiektuaren xede ez izan, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du paragrafo bat gehitzea 25. artikuluan, “erakunde armatua” kontzeptua eta su-arma eramateko edo ez eramateko betebeharra argitzeko. Hala ere, proposatutako testuak besterik gabe dio arau bidez ezarriko dela polizien hornidura, besteak beste, su-arma, bastoia eta gainerako ekipamendua, baita haiek erabiltzeko prestakuntza teoriko eta praktikoa ere, bitartekoak homogeneizatzeko. Erakunde armatuen izaera Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikotik dator, eta jada ageri da indarreko EPLn. Hortaz, ezin izango litzateke ezer zehaztu gai horren inguruan. LOSSPEn ere jasota dago bitartekoak eta hornidurak homogeneizatzeko ahalmena. Beraz, ez da egin ekarpen berririk. Pentsa liteke proposamenak oinarritzko arauak aldatu edo garatu nahi dituela, hornidurak homogeneizatu ahal izateko oinarriak sartuta.

- Funtzioak:

Nahiz eta aurreproiektuaren xede ez izan, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du alda dila 26.3 artikulua, eta ezar dezala udaltzaingoko kidegoek antolamendu juridikoaren bidez segurtasun-kidego eta -indarrei egokitu zaizkien funtzioak beteko dituztela, baita legeak berariaz ezartzen dizkienak ere. Proposamen hori ez dator inola ere bat Estatuko araudiarekin, polizia-arloko eskumen orokorra emango bailitzaieke udaltzaingoei. Hortaz, udaltzaingoei dagozkienak izan ezik, Ertzaintzaren eskumen guztiak ere izango litzukete, baita Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoenak ere. Hori ez dator inola ere bat Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikoarekin; gainera, nahaspila sortuko luke Ertzaintzarekin eskumenei eta operazioei dagokienez, funtzioak eta zerbitzuak bikoiztuta egongo bailirateke.

- Lurraldez kanpoko jarduna:

AJEPLE-EUBEk proposatu du lurraldez kanpo jarduteko aukera sar dadila polizia-zerbitzuak eskaintzeko egiten diren lankidetzak-hitzarmen edo elkarteetan. Euskadiko segurtasun publikoaren sistema antolatzeke legeak jada aurreikusita du jardun mota hori.

- Sarrera eta hautapena:

EUDELek proposatu du jasota geratzea gutxienekoak izango direla 50.1 artikuluan aipatzen diren udaltzaingoetan sartzeko oinarritzko arauak. Ez da onartu, erredundantea izango litzatekeelako: hain zuzen ere “gutxienekoak” direlako dira “oinarritzko” arauak.

- Egitura profesionala, eskalak eta kategoriak

EUDELen ustez, kidegoan sartzeko C1 taldea eskatzeak garbi uzten du egungo sailkapen-ereduak ez duela funtsik. Hala ere, komenigarritzat jotzen du erregimen iragankorra ezartzea C2 agente-plaza dutenentzat (C1 agenteekin parekatu dira orain, baina askok ez dute titulurik). Izan ere, plazak C1 izatera pasatzen badira, birsailkapenak ez du ondorio ekonomiko gehigarririk izango, dagoeneko onartu baitzitzaizkien. Bestalde, kontuan izan behar da egungo bitartekoak ez daudela C2 taldean sailkatuta ere. Ohar horiei erantzunez, xedapen iragankor batzuk eman dituzte.

Bestalde, **AJEPLE-EUBEK** eskatu du goi-mailako eskala eta betearazpen-eskala A1 gisa sailka daitezela (aurreproiektuan A2 dira); ikuskapen-eskala, A2 gisa (aurreproiektuan, C1); eta intendente-kategoria nahitaezkoa izan dadila 150.000 biztanle baino gehiago edo 200 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan (aurreproiektuan, “y”). Partzialki zentzu berean proposatu du **ELA-Udaltzaingoak** A2 azpitaldean sar dadila ikuskapen-eskala.

Irizpide hori ez dator bat **EUDEL**en iritziarekin, egitura berriak hierarkizazio handiegia dakarrela esan baitu. Dударik gabe, onartuz gero, **AJEPLE-EUBEren** proposamenak larriagotu egiten ditu gai hau eta **EUDEL**ek proposatutako besteak, hots, proposamenaren finantza-kostuari buruzkoak.

Hainbat ondorio izango lituzke horrek, baina, besteak beste, unibertsitateko graduatuentzat izango liratekeela oinarritzko eskala koak ez beste plazak, eta ez bakarrik udaltzaingoetan (hortaz, 8 kategoriatik, 6 unibertsitateko graduatuentzat izango lirateke). Alde handia da hori, orain arte, eskola-graduatu baino ez baitzen eskatzen polizia-kidegoetan sartzeko eta karrera egiteko (zenbait muga egon arren).

Gainera, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du, legea indarrean sartzean, A2 azpitaldean barnera daitezela, automatikoki, egun ofizial edo ofizialorde gisa ari direnak, nahiz eta horretarako behar den unibertsitateko titulua ez izan, eta 4 urteko antzinatasuna duten agente lehenek aukera izan dezatela, titulua izan gabe ere, ikuskapen-eskalara igotzeko. Proposamen hori ez dator bat funtzio publikoko oinarritzko arau erkideekin, guztiz bereizten baititu sailkapen-taldea eta titulazioaren kategoria edo eskala.

Beraz, baztertu egin dira **AJEPLE-EUBEK** eta **ELA-Udaltzaingoak** gai horri buruz egin dituzten proposamenak. Onartu egin da, ordea, 150.000 biztanle baino gehiago edo 200 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan (aurreproiektuan “y”) intendente-kategoria nahitaezkoa izan dadila dioen proposamena.

Egitura profesionalari dagokionez, Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostenak adierazi du, udalerriko populazio-parametroak aldatuz gero, udaltzaingoaren egitura doitu beharko litzatekeela. Oharrik ez du egin, baina, haren iritziz, aldaketetara moldatzeak buruzagitzaren kategoria murrizten badu, eta kategoriak titularra badu, titularrak eginkizunak betetzen jarraituko du, eta lanpostua “desagertzeko” daudenen artean sailkatuko da. Eskalak sailkatzeko aplikatzen diren baremoak aldatzearen ondorioz goranzko aldaketa gertatuko balitz, funtzionarioek lanpostuan jarraituko dute, izendatu zituztenean zeuzkaten baldintzekin eta betetzen ari diren lanpostuari benetan esleitu zitzaizkien ordainsariak jasoz.

Egitura profesionala dela eta, **ELA-Udaltzaingoak** esan du lege bidez ezarri ordez garatu egin behar dela Udaltzaingoetan kategorien arteko proportzionaltasun-irizpideak finkatuko dituen araudia (aurreproiektuan bezala), legeak berak finka ditzala irizpide horiek, eta ratio batzuk proposatu ditu. Dena dela, ez du ekarri proposamenaren proportzionaltasuna babesten duen elementu objektibo edo azterketarik. Gai zaila da;

ganorazko azterketak egitea eskatzen du, eta ez du inprobisatzeko aukerarik ematen, ondorioak baititu plantilletan. Izan ere, kontuan hartuta bi udaltzain egon behar direla 1.000 herritarreko, eta kategorien artean proportzionaltasuna egon behar dela, udalerri askok nabarmen handitu behar lukete udaltzain kopurua, eta gutxi batzuek, berriz, txikitu. Beharrezkoa litzateke, azterketa eztaba daezinak egiteaz gain, arauak kontuan izatea, baita ere, beste faktore batzuk, ez bakarrik populazioarena edo kategorien arteko proportzionaltasun aritmetikoa, malgutasunez hartzea udalerri bakoitzaren benetako beharrak, eta dagokion marjina ematea tokiko antolaketa-autonomiari. Gaia lege formalaren bidez finkatuko balitz, tokiko autonomia gehiegi murrizteaz gain, egiturak gehiegi eten ere egingo lirateke, udaltzainen plantillan erabakigarriak izan daitezkeen beste faktore batzuei jaramon egin gabe (aldi jakin bateko populazioa, arrisku sozioekonomiko bereziko faktoreak, etab.), eta legeen berezko zurruntasunak zaildu egingo luke bat-bateko aldaketa sozialetara egokitu ahal izatea. Horregatik, egokiagoa dirudi botere betearazlea gaitzea udaltza inen plantilletako parametro homogeenak zehazteko. Horrenbestez, ezin da onartu proposamena.

Gainera, proposamenak areagotu egingo luke **EUDELen** sentsazioa, hau da, egitura berriak behartu egiten duela, ez bakarrik gaur egungoen gainetik dauden kategoriekin buruzagitza-lanpostuak sortzera, baizik eta baita bitarteko kategoria guztiak sortzera ere. Horren ondorioz, baliteke plantillak handitu behar izatea eta kostuak areagotzea, eta horrek eragina izan dezake euskal udal batzuen edo guztien aurrekontu-egonkortasuneko eta finantza-iraunkortasuneko helburuetan. Horren ildotik uste dute, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen arabera, legegileak finantza-eragin hori kalkulatu behar lukeela, eta udalerriak baliabideez hornitu, diru nahikoa dutela bermatzeko.

EUDELen ohartarazpenari dagokionez, kontuan izan behar da prozeduraren memoria ekonomikoan aztertzen duela zer eragin izan dezakeen alderdi horiei buruzko araudi berriak tokiko administrazioetan. Jarraian jaso da araudia, laburtuta.

Hala ere, ez gaude ados beste adierazpenarekin; alegia, alderdi horren inguruko lege-erreformak derrigortu egin behar duela legegile autonomikoa udalerriak baliabidez hornitzera, legea betetzerakoan diru nahikoa dutela bermatzeko. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen aurreikuspen horretako kasuetan, Estatuko legegileak edo legegile autonomikoak eskumen berriak eman dizkie udalerriari. Baina hori ez da gure kasua, udaltzaingoaren arloko eskumena tokiko eskumena baita; areago, udaltzaingoaren funtzio mugatzaileak aldatu ere ez dira egin.

Kontuan izan behar da, gainera, indarrean dagoen maiatzaren 5eko 58/2015 Dekretuak, Euskadiko udaltzaingoaren antolamenduari eta funtzionamenduari aplikagarri zaizkion esparru-arauak ezartzen dituenak, zenbait irizpide ezartzen dituela kidego horietako eskalak eta kategoriak egituratzeko. Kidego horietan, udalerriko populazioaren arabera esleitzen zitzaizkien buruzagitza-lanpostuak kategoria jakin batzuei, eta, horregatik, egokitzen egin behar ziren. Egiaz, erreforma legalak partzialki aldatzen du oinarritzko arauari buruzko dekretuaren emaitza, baina, dekretu horrek zer eragin izan duen ikusita, erreforma legalarena txikiagoa da.

Kontuan hartzen baditugu 58/2015 Dekretuaren ondoriozko egokitzapena eta proposatutako legearen erreformak eragin lezakeena, udalerriek kategoria hauek sortu beharko dituzte legearen egokitzapen-aldian, 58/2015 Dekretua indarrean sartu aurreko egoerari dagokionez:

- Intendentea: Bilbo, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián.

- Komisarioa: Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun
- Komisariordea: Getxo; Irun; Santurtzi, Errenteria, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Galdakao
- Ofiziala: Santurtzi, Eibar, Galdakao, Hernani, Tolosa, Arrasate- Mondragon, Sopela, Mungia, Lasarte-Oria, Llodio, Amorebieta, Gernika-Lumo, Ermua, Andoain
- Ofizialordea: Andoain, Arrigorriaga, Etxebarri, Oiartzun; Gorliz: Ordizia: Zumaia: Ondarroa: Lekeitio: Muskiz: Urretxu: Balmaseda: Gueñes: Ortuella: Elorrio: Abadiño: Astigarraga: Orio: Villabona: Zalla: Plentzia, Urnieta, Derio; Lezo; Ugao-Miraballes; Usurbil; Mutriku;

Hala ere, lege-proiektuak zer eragin izango duen baino ez badugu hartzen kontuan, koadro hau izango dugu:

a) Intendentea: gaur egun, borondatez sortzen da, eta 300.000 biztanletik gorako udalerrietan soilik ezar daiteke, betiere, plantillak 400 udaltzain edo gehiago baditu. Proposamenaren arabera, kategoria nahitaez sortu behar da 150.000 biztanle baino gehiago edo plantillan 200 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan. Hiru hiriburuek soilik betetzen dituzte baldintza horiek, baina haietako batean ere ez dago intendenterik. Hortaz, egokitu egin behar lukete egitura berrira. Hala ere, badituzte gainerako kategoriak. Beraz, ez lituzkete bitarteko beste plazak sortu behar.

b) Komisarioa: gaur egun, 150.000 biztanle baino gehiago edo plantillan 100 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan ezar daiteke. Proposamenaren arabera, 50.000 biztanle baino gehiago edo plantillan 100 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan ezarri ahal izango litzateke kategoria hau. Udalerrri horien artean daude Barakaldo, Getxo eta Irun; hirurek betetzen dituzte biztanleen eta plantillaren baldintzak. Hala ere, gaur egun, batek berak ere ez du kategoria hau. Iruni dagokionez, komisariorde-kategoria ere sortu behar litzateke, gaur egun ez baitago.

c) Komisariordea: gaur egun, 100.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 40 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan ezar daiteke. Proposamenaren arabera, 25.000 biztanle baino gehiago edo plantillan 40 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan ezarri ahal izango litzateke kategoria hau. Horrek udalerrri hauetan izango luke eragina: Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio eta Galdakao. Gaur egun, haietako batzuek ez dute ofizial-kategoria ere.

d) Ofiziala: gaur egun, 15.000 biztanle baino gehiago eta plantillan 20 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan ezar daiteke. Proposamenaren arabera, 15.000 biztanle baino gehiago edo plantillan 20 udaltzain baino gehiago dituzten udalerrietan ezarri ahal izango litzateke kategoria hau. Horrek indarreko dekretuan agertzen diren udalerrri berberetan izango luke eragina. Hala ere, betebeharrak berria izango litzateke Andoainerako; populazioaren parametroak ez du behartzen, baina bai plantillako udaltzain kopuruak.

e) Ofizialordea: gaur egun, 15.000 biztanle baino gutxiago eta plantillan 5 udaltzain edo gehiago dituzten udalerrietan ezar daiteke. Proposamenaren arabera, 15.000 biztanle baino gutxiago eta plantillan 5 udaltzain baino gutxiago dituzten udalerrietan ezarri ahal izango litzateke kategoria hau. Horrek indarreko dekretuan agertzen diren udalerrri berberetan izango luke eragina. Hortaz, legea onartzeak ez luke eragin berririk izango udalerrri horietan.

Azken batean, lege-proposamenak eragin mugatua izango luke. Horrela, intendente-kategoria sortu beharko litzateke hiriburuetan; komisario-kategoria, Barakaldon, Getxon eta Irunen; eta komisariorde-kategoria, Santurtzin, Errenterian, Portugaleten, Sestaon, Basaurin, Durangon, Eibarren, Zarautzen, Leioan, Erandion, Galdakaon eta Irunen.

Bosgarren xedapen iragankorrari dagokionez (udaltza ingoetako funtzionarioak automatikoki goragoko kategorian integratzea), **Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren** txostenak uste du, kidego horietan intendente-kategoria duen langilerik balego, koherentea izango litzatekeela langileen ordainsariak arautzeko atal bat biltzea. Hala ere, gaur egun ez dago halako langilerik. Hortaz, ez da beharrezkoa zehaztapena.

- Udaltzaingoko buruzagitza

119. artikuluari dagokionez, **EUDELe**k dio kontuan izan behar litzatekeELA-Udaltzaingo guztiek ez dutela (eta ez luketela izan behar) pertsona bakarreko buruzagitza profesionala; Bilbo da horren adibide. Kontuan hartu da proposamena.

Artikulu hori bera dela eta, **AJEPLE-EUBEK** dio zehaztu egin behar dela nola hornitzen diren buruzagitza-lanpostuak izendapen aske bidez kidegoaren kategoria gorenetan dauden kidegoko bertako funtzionarioen artean, eta kategoria hori egon ezean soilik beteko liratekeela lanpostu horiek EAEko poliziako beste kidego batzuetako kideekin. Ez da beharrezkoa alderdi hori arautzea, administrazio bakoitzak erabaki behar baitu bere lanpostuak beste administrazio batzuetako funtzionarioei eskaini nahi dizkien.

EUDELek 5. xedapen iragankorra aipatu du, udaltzaingoen kidegoetako zenbait langile goi-mailako eskalan integratzeari buruzkoa. Pertsona horiei unibertsitateko titulua izatea eskatu zitzaion, 1992 baino lehen, polizia-kidegoetan sartzeko, baina urte berean EPL indarrean sartzean jatorrizkoa baino beharagoko eskalara itzuli ziren. Bilboko Udaleko hamar funtzionario baino gutxiago dira. Aurreproiektuak goragoko eskalan sartu ditu, baina horrek ezingo du ekarri gastu publikoa handitzerik, ez eta funtzionario horiek jasotzen dituzten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarritzko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute. EUDELen iritziz, eraldatze automatikoko irizpideak ezarri behar lirateke. Dirudenez, halaxe ondorioztatzen da aurreproiektutik, eta ordezkio testua proposatu du. Onartu da proposatutako testua.

AJEPLE-EUBEK proposatu du buruzagitza egokitze epea 3 urtetik 2 urtera murriztea, baita denboraldi jakin batean behin betiko destinoa izan beharra ere, 5 urtetik 4 urtera. Ez da onartu, arrazoizko epeak direla uste baita.

AJEPLE-EUBEK eskatu du, integrazioa eginez gero, oinarritzko ordainsariak handi daitezela, eta ez daitezela geratu osagarrietan jasota. Ez da onartu, funtzionarioak berriro sailkatze antzeko kasu guztiei aplikatu baitzaie.

Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostenaren arabera, langileak udaltzaingoetako buruzagitza-lanpostu berrietan integratzeko prozesuak Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziara egokitu behar du, baita Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpenetan adierazitakora ere. Horrenbestez, beharrezkoa da titulazio nahikoa izatearen baldintza betetzea. Txostenak oker interpretatzen du seigarren

xedapen iragankorreko 2. zenbakiko bigarren paragrafoa; txostenaren arabera, integrazioarako bete behar diren baldintza guztiak independenteak dira eta, ondorioz, antzinasunak titulaziotik salbuesten du. Baina hori ez da inola ere horrela, ezta agindua hitzez hitz interpretatuta ere; ikus daitekeenez, zerrendaketa da eta, amaieran, emendiozko juntagailua du, ez aurkaritzakoa.

- Fakultatiboen eta teknikarien eskala

EUDELek proposatu du udaltzaingoan ere fakultatiboen eta teknikarien eskala sortzea. Proposamena ez dator bat kidegoetako egiturekin, tamainarekin eta plantillekin, eta nolabait inprobisatu egin dela dirudi, orain arte udal erakunde bakar batek ere ez baitu adierazi eskala sortzearen alde dagoenik.

- Polizia judiziala:

EUDELek eta Oinarritzko Arauaren Taldeak proposatu dute beste artikulua bat gehitzea, PLEAn polizia judizialari buruzko prestakuntza emateko udaltzainei. Ezin da onartu, testuaren arabera Ertzaintzaren egiturari buruz ari baita.

Hala ere, AJEPLE-EUBEk egokiago adierazten du legean jasota egon behar lukeela PLEAk aukera duela ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko prestakuntza-jarduera espezifikoak antolatzeke, LOSSPERen 44.3 eta 44.4 artikuluetan aipatutako lankidetzahitzarmenak sinatu dituzten udaltzaingoentzat gutxienez. Onartu da, baina egoki kokatu behar da testuan.

- Bitarteko funtzionarioak:

ERNEk proposatu du debeka dadila udaltzaingoetan bitarteko funtzionarioak izendatzea (25. artikuluan, karrerako funtzionarioen baldintza sartzea; eta zioen azalpenean eta 120. artikuluko 1. eta 3. paragrafoetan, bitarteko funtzionarioen aipamenak kentzea).

Udaltzaingoen Erregistroko datuen arabera, 81 udaltzaingoetatik 68 udalerritakoek bitarteko funtzionarioak dituzte; hau da, 13 udalerritan soilik ez dago (edo ez da egon) bitartekorik (haietatik, Zestoak eta Eskoriatzak bi agente baino ez dituzte plantillan; eta Aulestik, bat). Gaur egun, Euskadiko udaltzain guztien % 11,4 dira bitarteko funtzionarioak, alegia, 379 udaltzain.

Epairen batek zalantzan jarri du udaltzaingoko bitarteko funtzionarioen figura bera, baina erabilitako arrazoibideak berdin-berdin aplikatu ahal izango litzaizkieke karrerako funtzionarioentzat izan litezkeen jarduneko administrazio publikoen zerbitzura dauden bitarteko funtzionario gehieneri. Adierazpen hori ez da inola ere doktrina gisa finkatu, eta epaia eman duen organo judizialak (EAEko Auzitegi Nagusia) beste adierazpenen batean ere zehaztu du bere iritzia, nahiz eta ez den berriro arazoaren muinean sartu (adibidez, udaltzaingoko bitarteko lan-poltsa eta adinaren eskakizuna).

Kontua da, onartzen badugu lege ezin direla udaltzainen funtzioak bete bitarteko funtzionario gisa, automatikoki kendu behar liratekeela kargutik lege kontra funtzio horietan ari direnak, hau da, 379 pertsona, plaza hutsak karrerako funtzionarioek bete ote ditzaketan zain egon ere egin gabe. Paradoxikoa litzateke hori izatea alegazioa egin duen sindikatuaren asmoa.

Bestalde, **ELA-Udaltzaingoak** ez du nahi udaltzaingoetan bitarteko funtzionariorik ez egotea, baina bai aldi baterako edo une jakin batzuetako beharrak estaltzeko kasuetara mugatu aukera hori, eta inoiz ez dadila erabili lanpostu hutsak betetzeko. Hala ere, kontuan izan behar da aurreproiektuak ez duela arautzen zer kasutan izendatu ahal izango liratekeen bitarteko funtzionarioak, baizik eta funtzio publikoaren araudi aplikagarrian ezarritakora jotzen duela, eta besterik gabe dio, bitarteko funtzionariorik izendatu behar izanez gero, gutxieneko prestakuntza izatea eskatu behar zaiola izendatutakoari. Edonola ere, egokiago adierazi behar da 120.1 artikulua, baina ez, hain zuzen ere, lanpostu hutsak betetzeari dagokionez. Halaber, **ELA-Udaltzaingoak** proposatu du ad hoc hautapen-prozesuetatik atera daitezela Akademiak kudeatu ahal izango lituzkeen lan-poltsak, eta ez Ertzaintzan sartzeko deialdietan plazarik gabe dauden onartuen zerrendatik. 120. artikulua ez du inola ere esaten nola sortuko liratekeen poltsak.

- Mugikortasun-agentek:

UGT ez dago ados figura horrekin, eta, haren ordeztu, udaltzaingoetako plantillak indartzeko eskatu du. Horri buruz esan behar da administrazio bakoitzari dagokiola udaltzainen plantillak indartzea (beharren arabera), eta ez legegileari; gainera, figura hori jasota dago Estatuko legerian, eta duela urte batzuk zenbait euskal udalerrietan (tartean, Donostia).

Bestalde, **EUDELe** nahi du ez dadila biztanle askoko udalerrietara mugatu, eta zabal dadila edozer udalerriara edo legeak zehaztutakoa baino biztanle kopuru handiagoko udalerrietara (edo horretarako aukera egon dadila). Oinarrizko Arauaren Taldeak proposatu du ezaba dadila figura sortzeari buruz esandakoa; alegia, “ez handitzea udaltzain kopurua, ezta langile-kostuak ere”. Ez da onartu ez batek ez besteak esandakoa, hartu beharreko irizpideak ez liratekeelako bat etorriko Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikoan ezarritakoekin eta, ondorioz, beharbada inpugnatu egingo litzatekeelako zati hau Konstituzio Auzitegian, aurreko beste kasu batean gertatu zen bezala (kasu horretan, indargabetu egin zen Euskadiko segurtasun publikoko sistema antolatzeke legearen agindu bat).

ELA-Udaltzaingoak ezabatzea proposatu du, “*horrek ez dezan handitu udaltzain kopurua, ezta langile-kostuak ere*”. Halaxe dago jasota Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikoan eta, euskal legetik ezabatuko balitz, beharbada indargabetu egingo luke Konstituzio Auzitegiak. Ezin da onartu arrazoibidea.

- Aguazilak:

UGT sindikatuak proposatu du figura ezabatzea eta udaltzainen mankomunitateak sortzea.

Euskadiko Aguazilen Elkarteak zenbait alegazio egin ditu, oro har egungo aguazilak udaltzain bihurtzeko eskatzeko (eginkizun berberak, arma eramateko aukera, C1 azpitaldera igarotzea, udaltzainen uniforme berdina, eta erretiroa 60 urtetan hartzea).

5.000 biztanle baino gehiagoko udalerri guztietan egon daiteke udaltzaingoa, baita biztanle gutxiagoko batzuetan ere, udalari komenigarria iruditzen bazaio eta baimena

ematen bazaio. Horrenbestez, aguazilak egon ala ez erabakitzeke, udalerri bakoitzeko beharrak ebaluatzen dira. Horrela, mantendu egingo dira aguazilak beharrezkotzat jotzen ez bada udaltzainen funtzioak beteko dituen zerbitzua jartzea eta nahikoak badira aguazilak bestela udaltzainek egingo lituzke ten funtzioetako batzuk egiteko.

Hortaz, udal bakoitzak erabakiko du aguazilak udaltzain bihurtu ala ez, ebaluazioaren emaitzan oinarrituta, baina ezin da lege ezarri.

ELA-Udaltzaingoak proposatu du argi eta garbi zehatz dadila zer funtzio dituzten aguazilek, 27.1 artikuluan aipatzen diren udaltzainen funtzioetatik bereizi beharrik izan gabe. Proposamenari jaramon eginez, berriatzi egin da agindua.

Aguazilen Elkarteak bi alderdi nabarmendu ditu legea indarrean sartu aurretik aguazil gisa ibilitako lan-kontratudun langileei buruzko xedapen iragankorraren inguruan: a) egoera horretan dauden bitartean agintaritzaren agentzetatik hartuko diren argitzea; eta b) 3 urteko epea finkatzea barne-sustapen bidez funtzionario bihurtzeko. Bigarren alderdiari dagokionez, arrazoizkotzat jo daiteke esatea udalek ezarri behar dituztela prozedura horien epeak. Lehenengo alderdia dela eta, esan behar da, eginkizun horietan diharduten bitartean, legeak aguazilei ematen dien babes juridikoa izango dutela.

Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostenak aguazilei buruz egindako oharrek direla eta, hau esan daiteke: Aurreproiektuak funtzionarioentzako lanpostu gisa kalifikatzen ditu, berariaz, aguazil-lanpostuak. Hortaz, ez da beste ezein arautara jo behar, nahiz eta EPOEko aurreikuspenekin bat etorri; izan ere, aguazilek, beren eginkizunetan, aginpideaz baliatu behar izaten baitute, edo polizia administratiboko ikuskapen-lanak egin. Baina EPOEk ez du lanposturik gordetzen lan-kontratudunentzat. Hortaz, legeak funtzioarentzat gorde ahal izango lituzke EPOEren bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitako erreserba gaitzen dituzten lanpostuak. Izan ere, mugikortasun-agenteei dagokienez, Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikoan erreserbatzen zaizkie lanpostuak funtzionarioei. Horrenbestez, ez da gehitu behar EPOEko xedapen horretara daraman oharrik.

Funtzio Publikoaren Zuzendaritzaren txostenak dio beharrezkoa dela aguazilek prestakuntza jasotzea armak erabiltzen ikasteko. Hori, ordea, ez da horrela, eta zirriborrotik ere ez da halakorik ondorioztatzen. Era berean, ondorioztatu du lan-kontratudun aguazilak ezin direla funtzionario izan, baina hori ez da aurreproiektuaren asmoa. Areago, testuak argi eta garbi zehaztu du zer egoeratan eratuko diren lehengo lan-kontratudun langileak, baita haiek funtzionario bihurtzeko mekanismoak ere.

Zortzigarren xedapen iragankorrari dagokionez (udalek udaltzaingoa sortzea erabakitzen dutenerako hipotesia jasotzen duena), txostenak dio funtzionario aguazilak soilik integratuko direla sortuko den udaltzaingoan, eta funtzionario ez direnak zer egoeratan eratuko liratekeen ere zehaztu behar dela. Onartu da. Halaber proposatu du gehi dadila eskala horretan sartzeak ezingo duela ekarri gastu publikoa handitzerik, ez eta funtzionario horiek jasotzen dituzten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarritzko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

V.- LEHENENGO ZIRRIBORROARI DAGOKIONEZ EGINDAKO ALDAKETEN LABURPENA.

Zioen azalpena:

- II d).- Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jardunbide Egokien Batzordearen konfigurazio berrira egokitu da.
- IV b) eta c).- Barne-sustapeneko eta lanpostuak betetzeko araudian egindako aldaketetara egokitu dira.
- V.- Testuan egindako aldaketetara egokitu da.
- VII.- Testuan egindako aldaketetara egokitu da.

Bat. I. tituluko II. kapitulua.- Poliziaren jarduna kontrolatzeko mekanismoak. Berridatzi egin dira artikuluko hauek: 10, 11, 12, 13 eta 14. Izena eta jardun-eremua aldatu zaskio lehenengo zirriborroko Ertzaintzaren Kontrol Batzordeari. Aurrerantzean, EAEko Poliziaren Jardunbide Egokien Batzordea izango da. Eremu horretara egokitu dira haren funtzioak, eta hobeto zehaztu dira, alderdi hauek argitzeko asmoz: a) haren helburua eta ahalmenak ez direla banakako erantzuki zuna ikertzea eta araztea, baizik eta jardunbideak aztertzea, hobekuntzak proposatu ahal izateko; eta b) Batzordearen jardunak ez dezala bidegabe eragotzi jurisdikzio penalaren jarduna eta, horretarako, zenbait neurri har ditzala. Batzordearen osaera aldatu egin da, funtzio-eremu berria kontuan hartuta, alegia, EAEko polizia osoa.

Zazpi. 30 bis artikuluan, herritarrekiko harremanaren printzipioei buruzkoan, berariaz aipatu dira, 2. paragrafoan, azaroaren 24ko 10/1982 Legeak (Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarriko Legea) aitortzen dituen hizkuntza-eskubideak.

Zortzigarrena. Akatsa zuzendu da 40. artikuluan.

Bederatzi. 43. artikuluan espezialitateak aipatzen dira. Lehen, Ertzaintzakoetara mugatzen ziren, baina, orain, EAEko polizia osokoetara zabaltu dira. Hortaz, ez du mugatzen beste polizia-kidego batzuetan ere espezialitateak egon daitezkeenik.

Hamaika. 47. artikuluko 5. zenbakiaren 2. paragrafoan, ordeztu egin da administrazio-prozedura erkideari buruzko legearen aipamena. Horren ordez, indarrean ekainean sartuko dena jasoko da.

Hamabi. 47 bis artikuluko berrian (emakumeen eta gizoneen aukera-berdintasuna lortzeko neurriei buruzkoa), aldatu egin da 4. zenbakiko hirugarren paragrafoa, eta adierazi da, emakumeak sustatzeko planik ezean, ordeztu gutxieneko ehunekoa erabil dadila gutxienez 3 plaza bete nahi direnean.

Hamahiru. 48.7 artikuluko dio hautapen-epaimahaiaren aholkulariek hautapen-epaimahaiko kideen objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipio berberak bete behar dituztela.

Hamabost. 55 bis artikuluko berriak argitzen du, legeak berak berariaz ezartzen dituen salbuespenetan izan ezik, eskaerak aurkezteko epearen amaieran bete behar direla sartzeko baldintzak.

Hamazazpi. 59. artikuluko 1. paragrafoaren e) hizkian, Ertzaintzako fakultatiboen eta teknikarien eskalan sartzeko araua txertatu da.

Hemeretzi. 59. artikuluko 4. paragrafoak zehazten du jatorrizko kategorian egindako benetako zerbitzualdia kalkulatzeko zenbatzen dela praktikaldia, betiere, hautapen-prozesua gainditu bada.”

Hogeita bi. 65. artikuluko 2. paragrafoan (merezimendu-lehiaketa lanpostuak betetzeko modu gisa erabiltzeari buruzkoa), deialdi guztietan ex lege aplikatzen diren merezimenduak zehazten dira; beste merezimendu batzuk ere aplikatu ahal izango dira, deialdiak hala ezartzen badu, bete beharreko ezaugarrien arabera egokiak direlako.

Hogeita bost. Garbi adierazten da zer baldintza aplikatuko diren merezimendu-lehiaketako prozeduren deialdietan, eta zer baldintza izendapen askekoetan.

Hogeita zortzi. III. tituluan erantsi den II bis kapitulu berrian (“Sustapena eta lanbide-karrera”), bi arau gehitu dira: garapen profesionaleko mailatik ondorioztatutako ordainsari-osagarrien atzeraeraginik ezarena; eta ordainsari-osagarriaren kontura halako ordainsariak ezin jasotzekoa.

Hogeita hamahiru. V. kapitulua ezarri da III. tituluan, laneko osasunaren babesari, laneko arriskuen prebentzioari eta gizarte-babes ar runt eta osagarriari buruzkoa.

Hogeita hamalau. V bis kapitulua gehitu da III. tituluan, ohorezko kondekorazioen erregimenari buruzkoa.

Hogeita hamasei. Behin-behineko eginbide-gabetzea gabetze ildo bihurtzeak zer ondorio dituen biltzen du, edo, alderantziz, ildo bihurtu aurretik gabetzea kentzeak zer ondorio dituen. Lehenengo zirriborroan ez bezala, g gehitu da, zigor ildo bihurtu ezean, itzuli egin beharko dela benetan jasotako ordainsarien eta eskubide guztiak izanez gero jaso izango zirenen arteko aldea.

Hogeita hemezortzi. Aldatu egin da adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboari buruzko araudia, haren erregimenak printzipio orokorrak ere bil ditzan. Irizpide orokor horiei esker, administrazio bakoitzak aukera du, negozioak kolektiboak egin aurretik, egokitzapenak aitortzeko adina eta dagozkion lan-baldintzen egokitzapenak zehazteko.

Hogeita hemeretzi. Udaltzaingoak aipatzen dira. Lehenengo zirriborroan Ertzaintza baino ez zen aipatzen, eta nolabaiteko hutsune legala sortu zuen udaltzaingoentzat. Garbi utzi da bigarren jardueran polizia-kidegoko lanpostuak betetzen direla, baita egokitutako zerbitzu aktiborako ezarritako zerbitzuaren prestazioaren egokitzapenari heldu ahal izango diotela bigarren jarduerako langileek ere.

Berrogei. Aldatu egin da 87. artikulua, garbi gera dadin, funtzionarioa bigarren jarduerara edo egokitutako zerbitzura pasatu bitartean beste lanpostu batera atxikitzen bada, polizia-kidegoaren esku gera daitekeela, eta ez, oro har, administrazioaren esku.

Berrogeita hiru. Sexu-jazarpenaren eta laneko jazarpenaren falta definitzerakoan, jazarpen sexista ere sartu da.

Berrogeita lau. 93. artikuluan, ezabatu egin da, eginkizunez gabetzean, ordainsariak galduko direla dioen zatia, ondoriozko administrazio-egoerak berak baitakar ordainsariak galtzea. Beraz, erredundantea da.

Berrogeita bost. Zuzendu egin da 94. artikulua agertzen den numerazioko akatsa, hizki bat erreplikatuta baitzegoen.

Berrogeita sei. 95. artikuluan gehitu den 2 bis paragrafo berrian, berariaz gaineratu da diziplina-prozedurako espedientepekoak ordezkari sindikal baten laguntza izan dezakeela prozeduraren jardunetan.

Berrogeita zazpi. Aldatu egin da 95. artikuluan gehitu den 2.ter. paragrafo berria, ekainean indarrean sartuko den administrazio-prozedura erkideari buruzko lege berriko aldaketak aintzat hartuta.

Berrogeita hamar. Falta arinengatiko zehapenen preskripzio-epea aldatu da, eta 3 hilabetera murriztu.

Berrogeita hamaika. 97 bis 1 artikulua berriko bigarren paragrafoan gehitu da interesdunak zehapenaren betearaztasuna kautelaz eten ahal izango duela eta, horretarako, Administrazioari adierazi behar diola administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztuko duela.

Berrogeita hamabi. 97.ter.2 artikulua berriak dio arazoak egon daitezkeela zehapena betearazteko, ezinezkoa denean, funtzionarioak erretiroa hartu duelako, baina a posteriori kidegora itzultzeko aukera sortzen bada. Era berean, 97.ter.5 artikulua (zehapena betetzeko ordezkotzaren neurria) zehazten du badagoela aukera hori zehapena 15 eguneko baldin bada, eta beharrezkoa dela administrazioak ordezkotzaren neurria onartzea.

Berrogeita hamasei. 117. artikuluan, agutzaren funtzioak zerrendatu dira.

Berrogeita hamazazpi. 118.3 a) artikuluan (intendente-kategoria), gainerako kategorietan aplikatzen den eskakizun hautakari berria ezarri da.

Berrogeita hamazortzi. Aldatu egin da 119. artikulua, gaur egun bezala, udaltzaingoetan pertsona bakarreko buruzagitza egon ez dadin, baizik eta kide anitzekoa, dagokion politika-zuzendaritzaren menpe.

Bosgarren xedapen iragankorra. Beste xedapen iragankor bat gehitu da, oinarritzko eskalako langileak integratzeko.

Seigarren xedapen gehigarria. EPL indarrean sartu aurretik A taldeko titulua eskatzen zuten plaza lortu zutenen goragoko eskalan udaltzaingoko funtzionarioak integratzeari dagokionez, EUDelen araua edo irizpidea txertatu da.

Zortzigarren xedapen iragankorra.- Agutzilak. Argitu egin da zertan datzan agutzil-lanpostuetan ziharduten eta hala diharduten lan-kontratadun langileei eginkizunetan ari direnean dagokien babes juridikoa.

Bederatzigarren xedapen iragankorra. Agutzilak udaltzaingoan sartzea. Argitu egin da zer egoera juridikotan geratuko diren kidego berriak sartzen ez direnak.

VI.- ARAUTEGIAREN GAINEKO ERAGINA.

a) Eraginaren analisia

Eskumenen ordenara egokitzea: Autonomia Erkidegoak eskumena du Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen aldaketa hau arautzeko, polizia autonomoaren erregimenaren eta funtzionario publikoen erregimenaren arloan dauzkan eskumenen arabera. Estatuko oinarritzko legeak errespetatu da; Segurtasun

Indar eta Kidegoen Oinarrizko Legearen agindu batzuk soilik aplikatuko dira, eta EPOE ez zaie zuzenean aplikatzen segurtasun-indar eta -kidegoei.

Araua lege autonomikoa da, eta lehendik zegoen lege-mailako araua aldatzen du. Horrenbestez, aldatutakoan du eragina arau berriak, baita aldatutakoa garatzen duten erregelamenduzko xedapenetan ere.

b) Oro har ekonomian dituen ondorioak.

Lehiari dagokionez, arauak ez du ondorio nabarmenik lehiari, ezta enpresa txiki edo ertainetan ere.

Ez dirudi, ezta ere, eragin zuzena duenik administrazio-kargen ikuspegitik, haien definizio zorrotzean oinarrituta. Hala ere, prozedurak hobetu eta sinplifikatzen dituzenez (adibidez, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari dagokionez, hautapen-organo iraunkor gisa; edo udalerrien arteko lankidetzarako mekanismo jakin batzuei dagokionez; edo udaltzaingoetako antolaketa-egitura profesionalak osatzeko malgutasunari eta arrazionaltasunari dagokionez), administrazio-kargetan eragin positiboa izango duela pentsa liteke oro har.

C.- Ekonomiaren eta aurrekontuen gaineko eragina.

Memoria ekonomikoak zehatz-mehatz azaltzen du aurrekontuen ikuspegitik egindako analisia. Ondorio orokorra da legea zuzenean aplikatzeak ez dakarrela gaur egun dauden aurrekontuen bidez ordaindu ezin den gasturik. Ez dakar diru-sarreraren aurreikuspenik egin beharra.

Beste erakunde publiko batzuetan (adibidez, udalerrietan) izango duen eraginari dagokionez, aurrekontuetan izan dezake eragina legeak, memoria ekonomikoan adierazi bezala. Nahiz eta eskalak, kategoriak eta sailkapen-taldeak berregituratzeak antolaketan izan eragina, eta, batzuetan, buruzagitza-lanpostuak sortzera behartu, aurrekontua ez handitu behar izateko moduan integratuko dira lehendik dauden langileak egitura berrietan, eta oinarrizko ordains ariak handitutakoa beste murriztuko dira osagarriak. Bestalde, aurreproiektuaren neurri batzuek arrazionalizatu egiten dituzte udal kostuak, lankidetzak-formulak erabiltzen, esaterako, hautapenezkoak batera antolatzeko aukera, edo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak prestatutako langileez osatutako lan-poltsak sortzeko aukera.

d) Genero-eragina:

Genero-eragin positiboa du arauak; genero-eraginari buruzko txostenean aztertu da.

e) Beste eragin batzuk:

Ikuspegi sozialetik, polizia-administrazioaren kudeaketa fidagarria dela erakusten du legeak.

Poliziaren Etikaren Europako Kodearen 61. aurreikuspenari erantzuten diote (2001eko Kontseilu Europarraren gomendioa) polizia-kontrolerako mekanismoen arauak, poliziaren eta herritarren arteko elkarreraginak eta kontuak emateko konpromisoak. Aurreikuspen horren arabera, "erantzukizunaren alde egiten duten eta herritarren eta

poliziaren arteko komunikazioan eta ulermenean oinarritzen diren mekanismoak ezarriko dira”; hori guztia bat dator Berrikuntza Publikoaren Planeko (2014-2016) gardentasunaren eta gobernu onaren filosofiarekin.

Oso garrantzitsuak dira gai hauek: kontu ematearekiko konpromisoa, publizitate aktiboaren bidez; polizia-zerbitzua ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak, besteak beste, polizien zeregina ebaluatzeko mekanismoak edo, neurri hertsatzaileez gainera, prestakuntzan, prozeduretan edo lan-giroan hobekuntzak egiteko ereduak eta arrisku-faktoreak aztertu ahal izateko prebentzio-mekanismoen ezarpena; eta poliziaren eta herritarren arteko derrigorrezko interakzioa, kexak tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialarekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismorik gabe tratatuko dituztelako konfiantza izan dezaten, jardunbide egokien batzorde baten sorrerarekin sendotuta.

V

MEMORIA ECONÓMICA / MEMORIA EKONOMIKOA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS ECONÓMICOS DE LA NECESIDAD DE LA DISPOSICIÓN

Los antecedentes del proyecto a examen son examinados en la memoria explicativa, así como los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta y figuran en el expediente y en la citada memoria explicativa los datos, informes, estudios que permiten conocer las líneas generales de la regulación propuesta.

A modo de resumen debe decirse que se trata de un proyecto de modificación de la Ley de Policía del País Vasco, que afecta a contenidos muy variados que pasamos a resumir:

1. Se recepciona el Código Europeo de Ética de la Policía.
2. Se refuerzan los mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial.
3. Se contempla la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo.
4. Se crea una Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco, como organismo híbrido de carácter permanente, con autonomía funcional respecto de la institución policial y compuesta por personas especializadas, incluyendo a expertos policiales. Las funciones de la comisión son las de estudiar, a solicitud de los órganos competentes, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o policía local sobre la existencia de quejas e incidencia en la confianza ciudadana. Además estudiará de oficio los incidentes en los que en el contexto de una intervención u operativo policial o durante la custodia policial se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona y propondrá medidas para la mejora del servicio.
5. En materia de selección e ingreso se regulan los requisitos para ser admitido en las pruebas de ingreso en una norma con rango de ley formal que hasta la fecha aparecían regulados en un reglamento. Por otra parte, se acomoda la regulación de los órganos de selección a las características de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, así como al equilibrio entre hombres y mujeres previstos con carácter general para el funcionariado. Igualmente se prevé la vinculación de las bases de las convocatorias, y los supuestos en los que puede modificarse el número de vacantes convocadas o rectificaciones de errores sin abrir otro plazo de presentación de solicitudes.
6. La Academia Vasca de Policía y Emergencias se configura como órgano permanente de selección y se permite que, cuando se lo soliciten de forma voluntaria las entidades locales, pueda llevar a cabo los procedimientos de selección para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, incluso de forma conjunta.

7. Se establecen medidas de acción positiva para favorecer la entrada de mujeres en los cuerpos policiales y corregir así su escasa presencia actual. Así, se regulan los planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y carrera profesional; corregir su infrarrepresentación e incrementar la eficacia policial. Destacan, por novedosas, las medidas de acción positiva a favor de las mujeres en procedimientos selectivos por turno libre que implicarían la preferencia de la candidata mujer frente al hombre en determinadas circunstancias, de un modo compatible con los parámetros exigibles en la jurisprudencia comunitaria europea de previsión legal, proporcionalidad y razonabilidad.
8. Se prevén otras medidas que guardan relación con la promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres con la posibilidad de presentarse en los procedimientos de promoción interna de quienes estén en excedencia por cuidado de hijos o familiares, excedencia por violencia de género y servicios especiales. Igualmente se contempla que, a efectos de calcular el tiempo de servicios efectivos preciso para la promoción interna, se tengan en cuenta los periodos transcurridos en las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna.
9. Se favorece la carrera administrativa mediante promoción interna. Para ello se facilita que el personal ascienda en la organización minorando el número de años de servicio para ascender de categoría. Por otro lado se suprime el límite de tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna, limitación que cercenaba el derecho a la carrera administrativa incluso si el funcionario o funcionaria hubiera aprobado las pruebas si no hubiese obtenido plaza. Y por último se permite la promoción interna de quienes estén en situaciones administrativas asimilables al servicio activo a efectos del derecho de promoción profesional.
10. En lo que se refiere a la provisión de puestos por concurso se diferencian aquellos aspectos meritorios por ley de otros que puedan ser considerados mérito en función de las características propias del puesto a proveer. Además se pormenorizan los contenidos que deben tener los procedimientos de concurso.
11. Desaparece la categoría de superintendente, de modo que se agiliza el acceso y cobertura de los puestos de mando de mayor responsabilidad en la Ertzaintza por medio de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos.
12. Se regula la carrera profesional horizontal como la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. El sistema de carrera profesional horizontal implica la instauración de un mecanismo de reconocimiento que permite acceder a los diversos grados de desarrollo profesional previstos en cada categoría a lo largo de los años que se establezcan y mediante la acreditación de competencias profesionales. El grado de desarrollo profesional determina la percepción del complemento de carrera profesional y, en su caso, habilita para el desempeño de determinados puestos. Como consecuencia de lo anterior se modifica la estructura retributiva para incorporar entre las retribuciones complementarias el complemento de carrera profesional.
13. Se regula el régimen de las especialidades en la Ertzaintza para tareas con conocimientos específicos.
14. Se regula el servicio activo modulado por la edad.

15. Se contempla una nueva regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales se caracteriza por el desempeño de puestos o funciones adaptados a las capacidades reales del funcionario, a diferencia de la normativa precedente que partía del presupuesto de que en situación de segunda actividad una persona cobraba las retribuciones básicas a disposición de cuando le llamasen para ocupar un puesto o ejercer tareas policiales.
16. Se contempla un nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco, atendiendo especialmente a la obligación de las administraciones de velar por las condiciones psicofísicas del personal y la vigilancia de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Se obliga a contar con mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo. En este sentido se da una regulación más amplia a los derechos complementarios en los casos de muerte o incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los Cuerpos de Policía del País Vasco al no vincularlo a la evaluación del comportamiento meritorio del agente policial.
17. Se contempla por primera vez en la ley el régimen de concesión de condecoraciones y recompensas honoríficas, previendo la posibilidad del ascenso honorífico sin efectos económicos a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten a funcionarios o funcionarias fallecidos en acto de servicio o jubilados.
18. Se clarifica la intervención del Consejo de la Ertzaintza en procedimientos disciplinarios y expedientes de rehabilitación, así como en la aplicación del régimen de condecoraciones.
19. Se modera el régimen disciplinario e incrementan las garantías de las personas expedientadas. Se contempla la ejecutividad de las sanciones y los casos en que procede su suspensión y remisión condicional si existen motivos para ello.
20. Desaparece la categoría de superintendente, de modo que las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría pasan a singularizarse en concretos puestos de trabajo, lo cual facilita el acceso a los mismos, siempre que se cumplan las condiciones del puesto por los sistemas ordinarios de provisión.
21. Se actualiza la regulación referente a la estructura organizativa de la función de policía judicial en la Ertzaintza, dado que las remisiones a ciertas normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contenía la redacción vigente habían quedado obsoletas.
22. En lo que se refiere a los cuerpos de policía local se prevén diversas medidas:
 - la posibilidad de que la policía local actúe fuera del término municipal para ejercer funciones de protección de autoridades locales.
 - La posibilidad de formar bolsas de trabajo con personas que hayan superado cursos básicos organizados por ella, que servirán para abastecer la demanda de las corporaciones locales y permitir la formación de los funcionarios o funcionarias interinos.
 - Una estructura profesional similar a la Ertzaintza,

- La determinación de las categorías correspondientes a la jefatura de tales cuerpos policiales atendiendo a la población o el número de personas integrantes del cuerpo. Atendiendo a ello, el proyecto de ley regula la integración del personal de la policía local en las nuevas escalas, y la adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de policía local.
23. Se regula la figura del alguacil para los municipios sin cuerpo de policía local y la del agente de movilidad para regular la circulación en el casco urbano.
24. Se habilita al Gobierno para aprobar un texto refundido de la LPPV.

2.- CUANTIFICACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS QUE OCASIONA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA DISPOSICIÓN

La entrada en vigor de esta disposición no implica gastos o ingresos presupuestarios directos, ni indirectos, no contemplados de uno u otro modo en los vigentes presupuestos generales de la CAPV para el ejercicio 2016.

No se contempla la previsibilidad de gastos o ingresos presupuestarios cuantificables derivados de la aplicación directa de las reformas legales.

No obstante, se pueden analizar las consecuencias económico-presupuestarias que de un modo mediato pudiera hipotéticamente suponer la aplicación de las normas concretas que se pretenden aprobar entendiendo que la reducción o limitaciones de determinadas cargas administrativas pueden implicar una minoración en el gasto público, aun cuando no resulte especialmente significativo o cuantificable en términos presupuestarios.

a) Mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial:

No existe impacto presupuestario en relación al tratamiento de quejas dado que el mismo se asigna a un servicio ya existente como **Ekinbide**, que viene realizando tales funciones, si bien el procedimiento se estandariza y se lleva a una norma con rango de ley formal.

La llamada **Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco** si es un órgano de nueva creación y como tal podría dar lugar a gastos supuestamente en funcionamiento; no obstante, debe considerarse que no se trata de un órgano que requiera de una estructura administrativa o de apoyo estable y propia, por lo que los gastos previsibles se referirán como mucho a las dietas que se deban abonar a los integrantes de tal comisión, tampoco sujetas a cronificación o periodicidad, ya que la comisión sólo se activa cuando se producen los presupuestos previstos en la norma, sea de oficio, sea a instancia de las administraciones. Por lo tanto no resulta a priori cuantificable el gasto, si bien en ningún caso resultará presupuestariamente significativo.

b) Modificaciones en selección e ingreso:

La ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi ya atribuye las funciones aquí previstas a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por lo que no existe impacto o repercusión presupuestaria más allá de los que pasamos a comentar.

La regulación de los requisitos de ingreso implica la exigencia de inicio para presentarse en las pruebas de estar en posesión de la titulación correspondiente al grupo de clasificación al que

se pretende ingresar, lo que en el caso de la escala básica será el grupo C1. Esto difiere de la situación actual en la que a los aspirantes se les exige estar en posesión de titulación del grupo C2 y cuando son nombrados funcionarios de carrera se les reclasifica con efectos retributivos administrativos limitados en el grupo C1.

Ciertamente la modificación no afecta a quienes ya sean funcionarios de carrera antes de la entrada en vigor de esta nueva ley (ya que están reclasificados a tales efectos y además pueden solicitar la convalidación de efectos académicos de la preparación recibida para el ingreso), pero puede tener repercusión económica respecto de los aspirantes de las futuras promociones de ingreso a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.

En la actualidad los funcionarios en prácticas perciben las básicas correspondientes al subgrupo C2, dado que no se les reclasifica en el C1 sino después del nombramiento como funcionarios de carrera. La reforma supondría que la retribución de los funcionarios en prácticas sería más elevada en cuanto a las retribuciones básicas correspondientes al grupo de clasificación. El impacto económico no es cuantificable de antemano puesto que para cada Administración dependerá del número de plazas convocadas en cada momento y el número de funcionarios en prácticas.

El resto de modificaciones relativas al ingreso, selección y formación no tiene un alcance presupuestario cuantificable.

La posibilidad de que los ayuntamientos convengan con la Academia la llevanza de los procesos de selección para el ingreso en policías locales o que se acuerde incluso procedimientos selectivos conjuntos es una medida de carácter consensuado, como lo serían las aportaciones de las partes acordantes, y no tiene un reflejo presupuestario negativo, más bien sirve para racionalizar eficientemente recursos, no sólo con ahorro real para los entes locales por economía de escalas, sino igualmente para la Academia, dado que ello permitiría coordinar la fase de selección con la de formación obligada en la Academia, permitiendo planificar los cursos de un modo más eficaz al aunar en unas mismas fechas la suma de todos los alumnos anuales para el ingreso en las policías locales.

c) Modificaciones relativas a la igualdad de oportunidades y promoción de las mujeres

Las medidas relativas a la promoción del equilibrio entre hombres y mujeres en las plantillas policiales no tienen un impacto presupuestario.

Cabe significar la obligatoriedad de realizar planes de promoción como actividad planificadora que supone una carga administrativa periódica pero asimilable por las estructuras organizativas preexistentes en el Departamento de Seguridad o en cualquier de los ayuntamientos que cuentan con unidades de igualdad.

Ningún impacto presupuestario apreciable tienen el resto de medidas relativas a la posibilidad de presentarse en los procedimientos de promoción interna de quienes estén en excedencia por cuidado de hijos o familiares, excedencia por violencia de género, o que, a efectos de calcular el tiempo de servicios efectivos preciso para la promoción interna, se tengan en

cuenta los periodos transcurridos en las situaciones administrativas que permiten el acceso a la promoción interna.

d) Modificaciones relativas a la carrera administrativa

Las medidas destinadas a favorecer la carrera administrativa por medio de la promoción interna no tienen impacto presupuestario, como tampoco lo tienen aquellas relativas a la provisión de puestos, o a creación y dotación de puestos de especialidad, ya que los mismos ya existen y ya requieren de la superación de cursos de especialidad.

Tiene un impacto potencial la regulación de la carrera profesional horizontal y la consiguiente aparición de un complemento de carrera profesional vinculado a la misma.

No obstante, debe decirse que el anteproyecto de ley únicamente contempla los principios generales que posibilitarían la aprobación reglamentaria de un sistema de carrera profesional instaurado bajo dichos principios. Por lo tanto, la regulación en sí misma es habilitante de la implantación de tales sistemas en la Ertzaintza o en las policías locales, pero no obliga a su implantación, ni determina sus presupuestos monetarios, de modo que no es factible la evaluación hipotética del impacto presupuestario que pudiera tener cada uno de los sistemas que pudieran llegar a aprobarse.

e) Modificaciones relativas a las situaciones administrativas.

La regulación de las modulaciones del servicio activo por razón de la edad ya se contemplan para la Ertzaintza en el Acuerdo Regulador de las condiciones laborales, por lo que el impacto económico que las mismas pudieran tener ya está asumido de antemano. En la regulación actual

A la hora de determinar el impacto del servicio activo modulado la segunda actividad por edad vamos a exponer las cifras de las edades del personal de la Ertzaintza de las Divisiones que tienen turno de noche ya que ese es el impacto diseñado en el anteproyecto de Ley para esta declaración.

En la actualidad ya existe tanto la situación de segunda actividad como el servicio activo modulado por la edad (SAM) en la Ertzaintza.

Con datos de 2014 había aproximadamente 100 ertzainas en situación de segunda actividad, todas ocupando un puesto de trabajo. Debe considerarse que la regulación vigente desde 2012 de la segunda actividad por insuficiencia garantiza la continuidad en la prestación del servicio en el mismo puesto adaptado o en otro.

En la Ertzaintza pueden solicitar el servicio activo modulado por la edad (SAM) a partir de los 56 años y con 60 años cabe la jubilación anticipada. Por lo tanto el periodo en el que normalmente podría tener reconocido el SAM sería de los 56 a los 59 o 60 años.

El reconocimiento del SAM no supone, como regla, la remoción del puesto de trabajo, sino la adaptación de su desempeño, que se exterioriza fundamentalmente en la posibilidad de no trabajar en horario nocturno y a partir de los 59 años, no realizar patrullas en el exterior de las

instalaciones policiales. Por lo tanto, es incierta la aseveración del informe de función pública relativa a que la regulación abre paso a la posibilidad de un contingente de funcionarios sin destino ni trabajo cobrando la práctica totalidad de las retribuciones.

Sólo excepcionalmente y respecto a unidades operativas y en investigación criminal se contempla la posibilidad de que si no cabe la adaptación funcional del puesto ocupado, se le readscriba a otro ya de la propia unidad u otro vacante conforme a los criterios preferenciales preestablecidos. Y únicamente se contempla la posibilidad de estar a disposición sin destino transitoriamente hasta que se adapta el puesto o se le readscribe a otro. Por lo tanto, tal posibilidad transitoria de estar sin destino no se dará en el grueso de la organización, es decir, seguridad ciudadana, y supone un supuesto extraordinario y de corta duración, suponiendo una garantía y no existiendo nunca un derecho o una opción a la expectativa de destino.

Con datos de 2014 había en la Ertzaintza un 10% de la plantilla con 56 o más años, es decir, 756 personas, el 80% de los cuales pertenecía a la escala básica. La edad media de la Ertzaintza se cifraba entonces en 47 años. De todos los que podrían haber solicitado el SAM lo hizo el 85%, es decir 639 de los 756.

De las 639 personas que tenían reconocido el SAM en 2014, 355 trabajaban en horario nocturno y 284 habían solicitado la exención del mismo (es decir el 45%).

Con estos datos cabe realizar una extrapolación a los próximos años atendiendo a la pirámide de edad del personal, los porcentajes de petición de reconocimiento de SAM (85%) y los porcentajes de petición de exención del trabajo nocturno (45% de los que tienen reconocido el SAM).

	Nº personas que potencialmente podrían solicitar el SAM (1)	Previsión de personas que tendrían reconocido el SAM (2)	Previsión de personas con exención de patrullaje externo
2015	1082	414	226
2016	1412	540	339
2017	1711	654	471
2018	1965	752	654
2019	2137	817	804
2020	2215	847	855

- (1) Personal que en un año dado esté en la franja de edad comprendida entre los 56 y 60 años. Calculamos que solicitarán el SAM el 85% de los que tengan derecho.
- (2) Previsión del número de personas que estarían en un año dado con SAM reconocido, extrapolación los porcentajes actuales de las solicitudes de SAM (45% de los que tendrían derecho)
- (3) Previsión de personas con exención de patrullaje fuera de las instalaciones policiales por tener cumplidos los 59 años.

El anteproyecto viene a derogar lo que en la ley hoy vigente resultaba la regla general para los funcionarios en segunda actividad. En el mismo sentido de las modificaciones reglamentarias de 2012 se trata de asegurar que en los casos en los que el menoscabo del funcionario por razón de la edad o de insuficiencia de las condiciones psicofísicas que no determinan su

jubilación siga prestando servicios en la organización policial de un modo adecuado a sus condiciones personales y en un puesto de trabajo adecuado.

Es cierto que en los próximos años en la Ertzaintza se producirá un incremento importante de las jubilaciones y otras bajas vegetativas y que se incrementará, como hemos visto, el número de personal que pase o pueda pasar al servicio activo modulado. El pase a la situación de segunda actividad es menos predecible, pero se mantiene siempre en unas estadísticas similares y no perturbadoras del servicio.

La exigencia de velar por la salud del personal obliga a adecuar y modular el desempeño del trabajo a partir de cierta edad y cuando así se solicite por el interesado. Pero ello no supone, como hemos visto, un cambio en el puesto de trabajo, salvo muy excepcionalmente y para determinadas unidades singulares, que no son el grueso de la organización. Por lo tanto no se aprecian los problemas organizativos y presupuestarios de los que habla el informe, para el caso de que un contingente de la plantilla quedara sin destino cobrando unas retribuciones exorbitantes.

De todas formas hay que recordar que parte de las medidas ya se están aplicando a través de lo dispuesto en el Acuerdo Regulador y que están siendo asumidas con medidas reorganizativas. No plantea por lo tanto impacto presupuestario no previsto desde dicha fecha. Debe considerarse que en la Ertzaintza no cabe suplir las ausencias con el nombramiento de personal funcionario interino.

Resulta en este momento prácticamente imposible efectuar un cálculo real de dichas repercusiones en los próximos años, debido principalmente a que la modalidad de servicio modulado por razón de la edad resultan derechos y no deberes para el personal funcionario, de modo que su ejercicio implica una decisión individual y voluntaria, que impide una estimación aproximada del número de personas que pudieran optar por ejercer tales derechos.

La nueva regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales es igualmente es concorde con la situación existente en la Ertzaintza a raíz de la reforma del Decreto regulador del pase a dicha situación administrativa del año 2012. No plantea por lo tanto impacto presupuestario no previsto desde dicha fecha.

f) Modificaciones relativas a la protección social y al reconocimiento del mérito.

El nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco no supone cambio respecto a la situación fáctica preexistente, lo cual no resta valor a su incorporación a la ley.

Es clarificador abordar la obligación de las administraciones en orden a la prevención de riesgos laborales del personal policial, dado que ha existido históricamente cierta confusión al respecto de la aplicabilidad de la ley de prevención de riesgos laborales a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero ello no supone cambio práctico alguno respecto a la situación actual.

Tanto la Ertzaintza como las policías locales disponen de mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo.

Las previsiones de los derechos complementarios en los casos de muerte o incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los Cuerpos de Policía del País Vasco no son novedosas ni en la Ertzaintza ni en las policías locales, ya que se encuentran en sus respectivas regulaciones reglamentarias relativas al régimen de condecoraciones por razón del servicio. La novedad estriba en desvincular tales prestaciones sociales de la evaluación del comportamiento meritario del agente policial.

Algo semejante se puede decir del régimen de concesión de condecoraciones honoríficas; la concesión de medallas al mérito policial tanto en el caso de la Ertzaintza como de las policías locales no varía respecto a la regulación reglamentaria preexistente contenida en sendos reglamentos con matices diferenciados. La previsión en el proyecto del ascenso honorífico póstumo o a jubilados carece de efectos económicos.

Se modera el régimen disciplinario e incrementan las garantías de las personas expedientadas. Se contempla la ejecutividad de las sanciones y los casos en que procede su suspensión y remisión condicional si existen motivos para ello.

g) Modificaciones relativas a la estructura profesional en la Ertzaintza.

La desaparición de la categoría de superintendente tiene un efecto limitado, debido a que no existe ningún funcionario que pertenezca a tal categoría. Las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría (ahora cubiertas en comisión de servicios a superior categoría) pasan a singularizarse en concretos puestos de trabajo de la escala superior. El efecto presupuestario es poco apreciable dado que se trata de pocos puestos (3) y que en realidad las retribuciones de tales puestos vinculadas a la categoría a suprimir se refieren exclusivamente al complemento de destino (categoría) que, dado que no hay ningún funcionario que ostente tal categoría, ello no tiene efectos a salvo de algunas eventuales gratificaciones extraordinarias.

h) Modificaciones relativas a las policías locales.

En lo que se refiere a los cuerpos de policía local se prevén diversas medidas que afectan a la estructura profesional de los mismos y que pudieran tener en algunos casos algún impacto económico en ciertos municipios.

Sin embargo, ello no implica obligación del legislador autonómico de dotar de recursos a los municipios para asegurar su suficiencia financiera a la hora de cumplir con la ley. Tal previsión de la LRBRL se refiere a los supuestos en que el legislador estatal o autonómico atribuye a los municipios nuevas competencias, lo que no es el caso que nos ocupa, ya que la competencia en materia de policía local es una competencia propia local y ni siquiera se alteran las funciones definitorias de la policía local.

Los posibles impactos económicos o presupuestarios derivan de lo siguiente:

Por un lado, al igual que en el caso de la Ertzaintza, se exigirá la titulación del grupo C1 para el ingreso en la escala básica. Ello sin embargo, no tiene efecto económico respecto a los funcionarios de carrera a la entrada en vigor de la ley, ya que el nombramiento como funcionarios de carrera en la anterior regulación suponía la reclasificación a efectos retributivos como C1. Conforme a la disposición transitoria 5ª del anteproyecto se integra al personal de la escala básica a todos los efectos en el grupo C1 atendiendo a la equivalencia académica reconocida por el Ministerio de Educación en la Orden EDU/3497/2011, de 13 de diciembre (BOE 26 de diciembre).

Si en cambio puede tener efectos respecto a las retribuciones básicas y trienios que vienen cobrando los funcionarios interinos de las policías locales. En la actualidad un 11,4% del total de efectivos de la policía local en Euskadi son funcionarios interinos, sumando 379 funcionarios y funcionarias interinos de la policía local. La diferencia del sueldo base entre el grupo C1 y C2 para 2016 es de 1.463,96 euros. El mismo efecto tendría en el caso de los funcionarios policiales en prácticas.

Por otra parte en la propuesta se revisan los límites a la creación de escalas y categorías contemplados en la ley vigente. La estructura profesional de los cuerpos de policía local difiere de la de la Ertzaintza en que no existen las escalas superior y ejecutiva, sino una escala técnica que abarca las categorías de intendente, comisario y subcomisario y sólo se puede crear en municipios de más de 100.000 habitantes. La categoría de intendente (grupo A-1) sólo se puede crear en municipios de más de 300.000 habitantes y al menos 400 funcionarios. Es decir, a salvo de las capitales, en el resto de policías locales toda la estructura profesional se integra en el grupo de clasificación C-1, incluidas las jefaturas, no exigiéndose titulación universitaria alguna para ejercer el mando de organizaciones que integran varias decenas de funcionarios y que cada vez requieren de mayores conocimientos por la creciente complejidad, dificultad y volumen de tareas asumidas por la policía local.

Lo antedicho ha traído como consecuencia la creación de estructuras de dirección ajenas al organigrama propio del cuerpo de policía, pero que ejercen tales tareas, con denominaciones tales como “dirección” o “subdirecciones” adscritas a la policía local o el nombramiento de personal eventual para tales funciones, con el problema que como tal personal eventual no pueden ejercer el mando de la organización.

La propuesta al respecto es unificar las escalas y categorías existentes en la Ertzaintza y las policías locales. Con ello se pretende facilitar la movilidad interadministrativa y la interrelación operativa entre los cuerpos. Lo cual no quiere decir que tengan que existir todas las escalas y categorías en todos los cuerpos locales, ya que debe existir una correlación entre la plantilla y estructura de la policía local y la población municipal.

Con ello se trata de evitar el aplanamiento total de la estructura de mando en la mayor parte de los cuerpos, no coherente con las necesidades y exigencias de los servicios, que derivaba principalmente de las limitaciones legales anteriores. Dado que el proyecto exige que la creación de una determinada categoría obliga a crear las inferiores, la adecuación a la ley

supondrá en algunos casos la necesidad de reforzar con nuevas categorías algunos cuerpos. Se prevé igualmente la integración del personal preexistente en la reorganización resultante.

Ello puede tener un impacto económico variable dependiendo de los municipios. Pero debe considerarse que el vigente Decreto 58/2015, de 5 de mayo, por el que se establecen las normas marco aplicables a la organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de Euskadi, ya establece unos criterios de estructuración de las escalas y categorías en tales cuerpos que, en tanto suponían la asignación de los puestos de jefatura a determinadas categorías en función de la población municipal, obligaban a una adecuación. La reforma legal, ciertamente, altera parcialmente, el resultado del Decreto de las normas marco, pero atendiendo al impacto que ya ha supuesto el citado Decreto, el que origina la reforma legal es menor.

Si tenemos en cuenta la adaptación derivada del Decreto 58/2015 y la que pudiera dar lugar la reforma de la ley propuesta, los municipios estarían obligados a crear en el plazo de adaptación de la ley y respecto a la situación anterior al Decreto 58/2015, las siguientes categorías:

- Intendente: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián.
- Comisario: Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irún.
- Subcomisario: Getxo; Irún; Santurtzi, Errenteria, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zaratuz, Leioa, Galdakao.
- Oficial: Santurtzi, Eibar, Galdakao, Hernani, Tolosa, Arrasate-Mondragón, Sopela, Mungia, Lasarte-Oria, Llodio, Amorebieta, Gernika-Lumo, Ermua, Andoain.
- Suboficial: Andoain, Arrigorriaga, Etxebarri, Oiartzun; Gorliz: Ordizia: Zumaia: Ondarroa: Lekeitio: Muskiz: Urretxu: Balmaseda: Güeñes: Ortuella: Elorrio: Abadiño: Astigarraga: Orío: Villabona: Zalla: Plentzia, Urnieta, Derio; Lezo; Ugao-Miraballes; Usurbil; Mutriku.

No obstante, si atendemos exclusivamente al impacto de la propuesta de ley obtenemos el siguiente cuadro:

a) Intendente: es actualmente de creación voluntaria y sólo factible en municipios de más de 300.000 habitantes y siempre que la plantilla sea de 400 o más efectivos. La propuesta es que tal categoría sea de creación obligada en cualquier municipio con población superior a 150.000 habitantes o que disponga de 200 efectivos de plantilla. Sólo entran dentro de las condiciones exigibles las tres capitales, ninguna de las cuales dispone en la actualidad de intendentes, por lo tanto deberían adecuarse a la nueva estructura. Pero sí disponen del resto de categorías, por lo que no tendrían que crear otras plazas intermedias.

b) Comisario: actualmente es exigible en los municipios con más de 150.000 habitantes que dispongan de 100 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible en municipios con más de 50.000 habitantes o más de 100 efectivos de plantilla. Lo cual incluye a Barakaldo, Getxo e Irún en los que concurren tanto el requisito de población como el de la plantilla. Ninguno de ellos dispone en la actualidad de tal categoría. En

el caso de Irún también deberían de crear la categoría de subcomisario, dado que no existe en la actualidad.

c) Subcomisario: es actualmente exigible en los municipios con más de 100.000 habitantes y 40 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible en municipios con más de 25.000 habitantes o más de 40 efectivos de plantilla. Ello afectaría a municipios como Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio o Galdakao. Algunos de ellos no disponen en la actualidad tampoco de la categoría de oficial.

d) Oficial: es actualmente exigible en los municipios con más de 15.000 habitantes y 20 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible en municipios con más de 15.000 habitantes o más de 20 efectivos de plantilla. Ello afectaría a los mismos municipios que el decreto vigente. No obstante sería una obligación nueva para Andoain, ya que si bien no estaría obligado por la población si lo estará por el número de la plantilla de la policía local.

e) Suboficial: en la actualidad es exigible en los municipios con menos de 15.000 habitantes y 5 o más efectivos de plantilla. Conforme a la propuesta la creación de esta categoría sería exigible en municipios menos de 15.000 habitantes y 5 o más efectivos de plantilla. Ello afectaría a los mismos municipios que el decreto vigente con lo cual la aprobación de la ley no tendría impacto novedoso respecto a dichos municipios.

En definitiva la novedad del impacto de la propuesta legal se limitaría a la creación de la categoría de intendente en las capitales, la de comisario en los municipios de Barakaldo, Getxo e Irún y la de subcomisario en los municipios de Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio o Galdakao, además de Irún.

En conclusión, es previsible que en los casos previstos la ley determine la necesidad de crear nuevos puestos de jefatura con categorías superiores a las actualmente existentes, e igualmente a crear todas las categorías intermedias, lo cual puede dar lugar a incrementos de plantilla y elevación de costes.

No obstante, como se puede apreciar el impacto financiero es limitado y no susceptible de afectar a objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de ningún municipio.

La disposición transitoria séptima del anteproyecto contempla la adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de la Policía Local a la nueva ley en un plazo de 3 años. Quienes ocupen puestos de jefatura continuarán en el desempeño de los mismos rigiéndose por las condiciones por las que fueron nombrados, y percibiendo las retribuciones efectivamente asignadas al puesto de trabajo ocupado. La integración de tal personal en la categoría correspondiente al puesto recalificado sólo se realizará si poseen el título académico correspondiente o los cursos de capacitación previstos en el artículo 59.2 de la Ley de Policía del País Vasco convocados o que se convoquen antes de la adaptación; tengan su destino definitivo en el mismo durante los últimos cinco años antes de la entrada en vigor de la Ley; y superase un curso teórico-práctico de acreditación profesional impartido por la Academia

Vasca de Policía y Emergencias en el que se tendrá en cuenta la experiencia profesional, los cursos de especialización y capacitación realizados y los conocimientos previamente exigidos.

Igualmente se estipula que tal integración no podrá suponer incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias.

La disposición transitoria sexta intenta solventar un problema creado con la ley de 1992 en referencia a cierto personal de la policía local de Bilbao que fue reclasificado en categorías de un grupo de titulación inferior al que en su momento se les exigió para el ingreso. Ello derivaba de las limitaciones que dicha ley imponía a los municipios en cuanto a la posibilidad de crear categorías profesionales. Afecta a un número reducido de funcionarios (menos de 10). En cualquier caso la disposición transitoria indica que tal integración en la escala correspondiente no podrá suponer incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias.

i) Modificaciones relativas a alguaciles y agentes de movilidad.

En referencia a los alguaciles municipales el anteproyecto plantea una regulación mínima de su estatuto jurídico, hasta ahora inexistente, diferenciado del de las policías locales.

Ello supone una unificación de su denominación, funciones, exigencias y formación. El principal coste al respecto, el formativo, pasa a ser responsabilidad de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. No supone un coste significativo en cualquier caso ya que el número de alguaciles a fecha 30 de junio de 2015 en todo Euzkadi era de 64 personas, no siendo previsible que en los próximos ejercicios haya una demanda de formación de nuevos alguaciles que resulte inasumible ni organizativamente ni presupuestariamente.

El anteproyecto incluye la previsión de procesos de funcionarización de quienes ejerzan como personal laboral fijo puestos de alguaciles.

En la nueva configuración los puestos de alguacil están reservados a funcionarios por lo que el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de esta ley esté desempeñando puestos configurados como de alguaciles podrá seguir desempeñándolos, y participar en los procesos selectivos de promoción interna su funcionarización.

Igualmente el anteproyecto contempla la posibilidad de integración de los alguaciles en los cuerpos de policía local en el caso en que se creen.

En lo que atañe a los agentes de movilidad debe considerarse que el anteproyecto no impone la obligación de su creación, que tal posibilidad ya está contemplada en la normativa estatal y que en su virtud existe un único cuerpo en Euzkadi, el de agentes de movilidad del ayuntamiento de Donostia. En cualquier caso, y a efectos del análisis del impacto presupuestario, decir que el impacto de tal creación, al menos en cuanto a créditos de personal, debe ser neutro, a tenor de lo que expresa la LOPFCS y que recoge este anteproyecto.

j) Afección a la Academia Vasca de Policía y emergencias:.

A lo largo del articulado del anteproyecto se aprecian remisiones a las tareas formativas de la Academia en aspectos tales como selección y formación de funcionarios de los cuerpos policiales, cursos de especialización, bolsas de trabajo con personas que hayan superado cursos básicos para abastecer la demanda de las corporaciones locales; formación de agentes de movilidad o de alguaciles.

El espectro de destinatarios no es novedoso a tenor de las funciones que ya le encomendaba la ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi, y el volumen de trabajo que pudiera implicar no será, atendiendo a las previsiones que en un ejercicio prospectivo pudiéramos realizar, significativo ni organizativamente, ni presupuestariamente.

3.- FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y NO PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO

Atendiendo a lo expresado en el apartado anterior no se prevé la necesidad de financiar gastos presupuestarios no contemplados de uno u otro modo en los presupuestos generales de la CAPV para el ejercicio 2016.

4.- IDENTIFICACIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS DE LA DISPOSICIÓN QUE INCIDAN O REPERCUTAN EN MATERIAS PROPIAS DE LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO

No existen

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ECONÓMICO PRESUPUESTARIO EN EL QUE SE INSERTA LA DISPOSICIÓN PROPUESTA

Se justifica en los programas presupuestarios del Departamento de Seguridad y de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Son concordantes con las previsiones contenidas en las memorias relativas a programas tales como el 2223 “Ertzaintza en servicio” o el 2224 “Academia Vasca de Policía y Emergencias”, sin que sea preciso en principios efectuar corrección alguna respecto a sus objetivos, acciones o indicadores.

6.- IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO DE LEY EN OTRAS ADMINISTRACIONES O EN LA SOCIEDAD.

Además de a la Ertzaintza el proyecto resulta de aplicación a las policías locales y a los ayuntamientos, a los que cabe extender las apreciaciones efectuadas con anterioridad.

Singularmente se ha examinado tal incidencia en un apartado específico más arriba respecto de las medidas normativas propuestas referentes exclusivamente al ámbito municipal.

El proyecto carece de impacto en el sector empresarial o la ciudadanía tal y como se deduce de objeto y contenidos.

Vitoria- Gasteiz, a 20 de enero de 2016

Fdo: Rosa B allestero Martínez

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS GENERALES



FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: **ROSA MARIA BALLESTERO MARTINEZ**

Fecha de la firma: **20/01/2016 9:44:34**

Validación de la firma:  **Correcta**



EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIAREN BOSGARREN ALDAKETARAKO LEGE-PROIEKTUAREN MEMORIA EKONOMIKOA

1.- AURREKARIEN DESKRIBAPENA ETA XEDAPENA BEHARREZKOA DELA ERAKUSTEN DUTEN ARRAZOI EKONOMIKOAK

Aztertu beharreko proiektuaren aurrekariak azalpen-memorian aztertzen dira, baita proposatutako erregulazioa gaitzen duten aurrekontu juridikoak ere, eta proposatutako erregulazioaren ildo orokorrak ezagutzeko aukera ematen duten datuak, txostenak eta azterlanak espedientean eta azalpen-memorian daude bilduta.

Laburbilduz, esan behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legea aldatzeko proiektu bat dela, eta eduki asko hartzen dituela barnean, z e inak ondoren laburbiltzen ditugun:

1. Poliziaren Etikako Europako Kodearen harrera egiten da.
2. Zerbitzu poliziala ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak indartzen dira.
3. Poliziaren eta herritarren arteko derrigorrezko interakzioa jasotzen da, kexak tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialarekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismoari gabe tratatuko dituztelako konfiantza izan dezaten.
4. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jokabide Ego kien Batzordea sortzen da, erakunde iraunkor hibrido gisa, autonomia funtzionala duena erakunde polizialarekiko, eta espezializatutako pertsonen osatuta, aditu polizialak barne. Batzordearen funtzioa, organo eskudunek eskatuta Ertzaintzaren edo udaltzaingoa ren baitako jokabideak eta praktikak aztertzea da, baldin eta herritarrek kexak badituzte haien gainean edo polizialarekiko zuten konfiantzan eragina badute. Gainera, poliziaren esk u-hartze edo operatibo baten testuinguruan edo zaintza polizial bat bitartean pertsona bat hiltzen bada edo larriki lesionatuta suertatzen bada, ofizioz ikertuko dituzte gorabehera horiek, eta zerbitzua hobetzeko neurriak proposatuko ditu.
5. Langileak hautatzeari eta haiek kidegoan sartzeari dagokionez, probetan onartua izateko baldintzak lege mailako arau baten bidez zehazten dira, eta ez orain arte bezala, erregelamendu bidez. Bestalde, hautaketa-organoetako arauak egokitzen dira, bi kontu hauek gogoan hartuta: organo horiek inpartzialak, profesionalak eta dena delako espezialitatekoak izatea, eta, funtzionario publiko en artean, orokorrean, gizon eta emakume kopuruari dagokionez oreka egotea. Era berean, deialdietako oinarrien arteko lotura egin dadila xedatzen da, eta orobat zehazten da zein kasutan izango den zilegi deialdi bateko lanpostu hutsen kopurua aldatzea edo akatsak zuzentzea, eskabideak aurkezteko beste eperik hasi gabe.
6. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia hautaketa-organoa iraunkor gisa eratzen da, eta, gainera, aukera ematen da udaltzaingoan sartzeko hautaketa-prozedurak batera egiteko, toki-administrazioako erakundeek beren borondatez hasi eskatzen badiote.

7. Ekintza positiboko neurriak ezartzen dira emakumeak polizia-kidegoetan sartzeko eta polizian emakumeen kopurua handitzeko, gaur egun ko puru hori urria da-eta. Hala, bada, polizia-kidegoetako emakumeentzako lanbide-sustapeneko planak arautzen dira, kidegoetan sartzean eta karrera profesionalean berdintasuna bermaturik izan dezaten, dagokiena baino daukaten ordezkaritza urriago hori zuzentzeko, eta poliziaren eraginkortasuna handitzeko. Nabarmentzekoak dira, berrikuntza dakarten aldetik, txanda libreko hautaketa-prozeduretarako emakumeen alde ezartzen diren ekintza positiboko neurriak, zenbait egoeratan emakumezko hautagaia gizonezkoaren gainetik hobestea ekarriko baitute, Europako Erkidegoetako jurisprudentziak lege-neurriei, proportzionaltasunari eta arrazoizkotasunari buruz ezartzen dituen eskakizunen kontra jo gabe.
8. Beste neurri batzuk ere ezartzen dira, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzearekin zerikusia dutenak, hala nola haurrak edo senitartekoak zaintzeko edo genero-bortizkeriarengatik eta zerbitzu bereziengatik eszedentzian direnek barne-sustapeneko prozeduretan aurkezteko duten aukera. Era berean ezartzen da, ezen, barne-sustapenerako benetako zerbitzuetan emandako denbora kalkulatzeko aldera, barne-sustapenean parte hartzea ahalbidetzen duten egoera administratiboetan emandako denboraldiak kontuan hartuko direla.
9. Karrera administratiboa bultzatzen da, barne-sustapenaren bidez. Horretarako, erraztu egiten da langileek erakundearen barruan gora egitea, goragoko kategoria batera igarotzeko zerbitzuan bete beharreko urte-kopurua gutxituz. Beste alde batetik, bertan behera uzten da barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga; muga horrek murriztu egiten baitzuen ibilbide administratiborako eskubidea, baita funtzionarioek probak gaingitu bai, baina plazarik lortzen ez zuten kasuetan ere. Eta, azkenik, zerbitzu aktiboaren pareko administrazio-egoeretan daudenen barneko sustapena ahalbidetzen da, sustapen profesionala izateko esku bidearen ondorioetarako.
10. Lanpostuak lehiaketa bidez hornitzeari dagokionez, legearen arabera merezimendutzat jo daitezkeen aldeak bereizten dira hornitu beharreko postuak berezko dituen ezaugarrien arabera. Gainera, lehiaketa-prozedurek eduki behar dituzten edukiak zehazten dira.
11. Superintendente-kategoria kentzen da, eta, horrela, Ertzaintzaren erantzukizun goreneko postuak eskuratzea eta betetzea bizkortzen da, lanpostuak betetzeko prozedura arrunten bidez.
12. Karrera profesional horizontala arautzen da, lanpos tua aldatu beharrik gabe garapen profesionalaren mailan aurrera egiteko aukera gisa ulertuta. Karrera profesional horizontaleko sistemak berarekin batera dakar ezagutza-mekanismo bat ezartzea, kategoria bakoitzean aurreikusitako garapen profesionalako maila desberdinetara urteetan zehar sartu ahal izateko, eta gaitasun profesionalak egiaztatzearen bitartez. Garapen profesionalako mailaren arabera jasotzen da ala ez karrera profesionalako osagarria, eta, hala badagokio, maila horrek lanpostu jakin batzuk betetzeko gaitzen du. Orain arte adierazitakoaren ondorioz, ordainketa-egitura aldatzen da, karrera profesionalako osagarria ordainsari osagarrien artean sartzeko.
13. Ertzaintzaren espezialitateen erregimena arautzen da, ezagutza espezifikoak eskatzen dituzten zereginetarako.
14. Adinak modulaturako zerbitzu aktiboa erregulatzen da.

15. Lan polizial guztiak normaltasunez betetzeko gaitasun nahikorik ez dutelako bigarren jardueran aritzen diren polizien egoera administratiboari buruz ere arau berriak ezartzen dira; hala, bada, haien arabera, funtzionarioek beren benetako gaitasunetara egokitutako lanpostuak edo funtzioak bete beharko dituzte, aurreko araudietan ez bezala, hura premisa honetatik abiatzen baitzen: bigarren jardueran aritzen zirenek oinarritzko ordainsariak kobratzen zituzten, lanpostu bat betetzeko edo jarduera polizialak betetzeko deitzen zieten arte.
16. Kapitulu berria sartzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoen babes sozialari buruzkoa, oinarritzkoa zein osagarria izan, eta bereziki kontuan hartuta administrazioek langileen baldintza psikofisikoak, laneko osasuna eta laneko arriskuen prebentzioa zaintzeko betebeharra dutela. Lanean edo lanaren ondorioz sortutako gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologiak direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak izatera behartzen da. Ildo horretan, agenteen heriotza edo laneko ezintasunak direla-eta dauden eskubide osagarri horiei buruzko arau gehiago ezartzen dira, egoera horiek zerbitzu poliziala edo beren funtzioak betetzen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionario izatearen ondorioz gertatzen diren kasuetarako, ez baitaio lotzen agente polizialaren merituzko jokabidearen ebaluazioari.
17. Aurreneko aldiz jasotzen da kondekorazioak eta ohorezko sariak emateko erregimena, zerbitzu-egintzan hildako funtzionarioak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ondorio ekonomikorik gabe eta ohore gisa igarotzeko aukera jasoz.
18. Argitu egiten da Ertzaintzaren Kontseiluak izan beharreko esku-hartzea diziplina-prozeduretan eta birgaitze-espedituetan, baita kondekorazio-erregimena aplikatzean ere.
19. Diziplina-erregimena arintzen da eta espedientatzen diren pertsonen bermeak handitzen dira. Zehapenen bete beharra jasotzen da, baita zehapena eten beharreko edo baldintzapean kentzeko kasuak ere, horrela jokatzeko motiboak daudenean.
20. Superintendente-kategoria desagertzen da; hala, eskala eta kategoria horretan sartutako plazen eginkizunak lanpostu jakin batzuetan bereizten dira, eta hark lanpostu horietara sartzen laguntzen du, betiere lanpostuaren baldintzak lanpostuak betetzeko ohiko sistemen bidez betetzen badira.
21. Ertzaintzak polizia judizial gisa duen eginkizunaren antolakunde-egiturari buruzko erregulazioa eguneratzen da; izan ere, indarrean zegoen testuan Botere Judizialaren Lege Organikoaren arau jakin batzuetara jotzen zen, bidalketa horiek zaharkituta geratu baitziren.
22. Udaltzaingoei dagokienez, hainbat neurri aurreikusten dira:
 - udaltzaingoak udal mugartetik kanpo jarduteko aukera, tokiko agintarien babes-zereginak betetzeko.
 - Lan-poltsak osatu ahal izatea, berak antolatutako oinarritzko ikastaroak gainditu dituztenekin, haien bitartez, toki-korporazioen eskariei erantzuteko eta bitarteko funtzionarioei prestakuntza emateko.
 - Ertzaintzaren antzeko egitura profesionala.
 - Polizia-kidego horietako buruzagitzeari dagozkien kategoria egokiak ezartzea, biztanleria edota polizia hori osatzen duten langile kopurua aintzat hartuta. Hori kontuan hartuz, lege-

proiektuak udaltzaingoko langileak eskala berrietan sartzea arautzen du, baita udaltzaingoko kidegoetako buruzagitza-postuen egoki tzapena ere.

23. Aguazilaren figura arautzen da udaltzaingoa ez dute n udalerrietarako; eta mugikortasun-agentearena, zirkulazioa arautzeko hirigunean.
24. Jaurlaritza gaitzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategin bat onartzeko.

2.- XEDAPENA INDARREAN SARTZEAK ERAGINGO DITUEN AURREKONTU-GASTU ETA -SARRERAK KUANTIFIKATZEA

2016ko ekitaldirako indarrean dauden EAEko aurrekontu orokorretan modu batera edo bestera jasota ez dagoen zeharkako edo zuzeneko aurrekontu-gastu edo -sarrerarik ez da sortuko xedapen hau indarrean sartzearen eraginez.

Lege-erreformaren zuzeneko aplikaziotik eratorritako aurrekontu-gastu edo -sarrera kuantifikagarriak ez da aurreikusten.

Dena dela, onetsi nahi diren arau zehatzen aplikazioak ekonomian eta aurrekontuetan hola edo hala eragin ditzakeen ondorioak azter daitezke, administrazio-karga jakin batzuk gutxiagotzeko edo murrizteko gastu publikoa txikiagotzea ekar dezakeela ulertuta, aurrekontuetan bereziki adierazgarria edo kuantifikagarria ez izan arren.

a) Zerbitzu poliziala ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak:

Ez dago aurrekontu-eraginik kexen tratamenduari dagokionez, hori dagoeneko existitzen den eta zeregin horiek egiten dituen zerbitzu bati (**Ekinbide**) esleitzen zaiolako, baina prozedura estandarizatu egiten da eta lege-lerrun formala duen arau batera eramaten da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jokabide Egokien Batzordea deitutakoa sortu berri den organoa da, eta funtzionamenduan jartzeak gastuak sor ditzake; hala eta guztiz ere, kontuan izan behar da ez dela administrazio- edo la guntza-egitura egonkorra eta propioa behar duen organo bat, eta horregatik gastu aurreikusgarriak gehienez ere batzorde horretako kideei ordaindu beharreko dietak izango dira, eta horiek ez daude kronifikazio edo aldizkakotasunari lotuta, arauan aurreikusitako gertakariaren bat gertatzen denean bakarrik aktibatzen baita batzordea, hala ofizioz nola administrazio-eragilearen eskariz. Beraz, gastua ezin da aldeztu aurretik kuantifikatu, eta edonola ere ez da esanguratsua izango aurrekontuari dagokionez.

b) Aldaketak hautaketan eta kidegoan sartzean:

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzearen Legeak hemen aurreikusitako zereginak dagoeneko esleitzen dizkio Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, eta beraz ez dago ondoren komentatuko ditugunez bestelako aurrekontu-inpaktu edo -eraginik.

Kidegoan sartzeko baldintzen erregulazioak zera dakar, probetan aurkezteko hasierako eskakizuna izango dela sartu nahi den sailkapen-tal deari dagokion titulazioa edukitzea, eta oinarritzko eskalaren kasuan C1 taldea izango da. Hori ez dator bat egungo egoerarekin, izan ere, izangaiei C2 taldeko titulazioa edukitzea eskatzen baitaie, eta karrerako funtzionario

izendatzen dituztenean administratiboki C1 taldean mugatutako ordainsari-eraginekin birsailkatzen dituzte.

Egia esan, aldaketak ez du eraginik izango lege berri hau indarrean jarri baino lehen karrerako funtzionario direnengan (ondorio horietarako birsai lkatuta daudelako eta gainera kidegoan sartzeko jasotako prestakuntzaren eragin akademikoen konbalidazioa eska dezaketelako), baina eragin ekonomikoa izan dezake lege berria indarrean jartzen denetik aurrera sartzen diren promozioetako izangaiei dagokienez.

Gaur egun praktiketako funtzionarioek C2 azpitaldeari dagozkion oinarritzkoak jasotzen dituzte, karrerako funtzionario izendatu ondoren arte C1ean ez zaielako birsailkatzen. Erreformak ekarriko luke praktiketako funtzionarioen ordainsaria handiagoa izango litzatekeela sailkapen-taldeari dagozkion oinarritzko ordainsarie kin alderatuta. Eragin ekonomikoa ezin da aldeztu aurretik kuantifikatu, izan ere, Administrazio bakoitzarentzat une bakoitzean deitutako plaza kopuruaren eta praktiketako funtzionario kopu ruaren arabera izango baita.

Kidegoan sartzeari, hautaketari eta prestakuntzari buruzko gainerako aldaketek aurrekontuan izango duten norainokoa ezin da kuantifikatu.

Udalek udaltzaingoetan sartzeko hautaketa-prozesuen garapena Akademiarekin hitzartzeko edota hautaketa-prozedura bateratuak adosteko aukera adostu den neurria da, eta halaxe izango lirateke akordioa lortzen duten alderdien ekarpenak, eta ez du aurrekontu-iruzur negatiborik, baliabideak modu egokian arrazionalizatzeko baliagarria baita, eta toki-erakundeek benetako aurrezpena lortuko badute eskala-ekonomia dela medio, Akademiak ere aurrezteko lortuko du, hautaketa-fasea eta Akademian nahitaez egin beharreko prestakuntza-fasea koordinatu ahal izango direlako, ikastaroak modu eraginkorragoan planifikatu, udaltzaingoetan sartu nahi duten urteko ikasle guztiak data berdinetan elkartu ahal izango dituztelako.

c) Aukera-berdintasunari eta emakumeen sustapenari buruzko aldaketak

Polizia-plantilletan gizonen eta emakumeen arteko oreka sustatzeko neurriak ez dute aurrekontu-eraginik.

Aipatu behar da sustapen-planak egitea nahitaezkoa dela plangintza-jarduera gisa, eta horrek aldizkako administrazio-karga dakar, baina Segurtasun Sailean edo berdintasun-unitateak dituzten udaletan lehendik zeuden antolaketa-egiturak asimilatze modukoa da.

Seme-alabak edo senitartekoak zaintzeagatik eszedentzian edo genero-indarkeriagatik eszedentzian daudenak barne-sustapeneko prozeduretan aurkezteko posibilitateari buruzko gainerako neurriak ez dute aurrekontu-eragin berezirik, ezta, barne-sustapenerako zerbitzu efektiboen denbora kalkulatzeko, barne-sustapenean sartzea ahalbidetzen duten administrazio-egoeretan igarotako denborak kontuan hartzeak ere.

d) Administrazio-karrerari buruzko aldaketak

Barne-sustapenaren bitartez administrazio-karrera bultzatzera bideratutako neurriak ez dute aurrekontu-eraginik, ezta lanpostuak hornitzeari edota espezialitate-lanpostuak sortu edo

zuzkitzeari buruzkoek ere, horiek lehendik existitzen direlako eta espezialitate-ikastaroak gainditzea eskatzen dutelako.

Karrera profesional horizontalaren erregulazioak eta hari lotutako karrera profesionaleko osagarri bat agertzeak eragina izan dezake.

Hala eta guztiz ere, esan behar da lege-aurreproiektuak soilik printzipio orokor batzuk biltzen dituela eta printzipio horiekin ezarritako karrera profesionaleko sistema baten erregelamendu-onarpena ahalbidetuko luketela. Beraz, erregulazioa berez sistema horiek Ertzaintzan edo udaltzaingoetan ezartzeko gai da, baina ez du haiek ezartzera behartzen, eta ez ditu haien moneta-aurrekontuan ezartzen, eta beraz, onar daitekeen sistema bakoitzak izan zezakeen aurrekontu-eraginaren ebaluazio hipotetikoa ezin da egin.

e) Administrazio-egoerei buruzko aldaketak.

Adina dela-eta zerbitzu aktiboaren egokitzapenak Ertzaintzarentzat dagoeneko bilduta daude lan-baldintzak arautzen dituen akordioan, eta beraz haiek izan dezaketen eragin ekonomikoa aldezturik bereganatuta dago. Egungo erregulazioan

Adinari dagokion bigarren jardueraren eragina zehazteko garaian, Ertzaintzan gaueko txanda egiten duten Dibisioetako langileei erreparatuko diegu, adierazpen honi dagokion lege-proiektuan diseinatutako eragina baita; eta haien kopuruak azalduko ditugu, adinaren arabera.

Ertzaintzan gaur egun dagoeneko ezarrita daude bigarren jarduerako egoera eta adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa (SAM).

2014. urteko datuekin gutxi gorabehera 100 ertzain zeuden bigarren jarduerako egoeran, guztiak lanpostu bat okupatzen. Kontuan izan behar da 2012. urteaz geroztik indarrean dagoen urritasunagatiko bigarren jardueraren erregulazioak zerbitzugintzan jarraitzea bermatzen duela, egokitutako lanpostu berean edota beste batean.

Ertzaintzan adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa (SAM) 56 urtetik aurrera eska dezakete, eta 60 urterekin erretiro aurreratua lortu dezake. Beraz, egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta izan dezaketen aldia 56 urtetik 59 edo 60 urtera bitartekoa da.

Egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta ere horrek ez du esan nahi, arau gisa, lanpostutik mugiaraziko denik, egin beharreko jarduna egokitu egingo dela baizik, eta batez ere gauzatzen da gaueko txandan lanik ez egiteko aukeran eta, 59 urtetik aurrera, polizia-instalazioetatik kanpo patruilak ez egiteko aukeran. Beraz, funtzio publikoak bere txostenean egiten duen baiespena, erregulazioak destino eta lanik gabe dauden eta ordainsariak ia osorik kobratzen dituzten funtzionario-talde bat sor dezakeela adierazten duena, ez da egia.

Salbuespen gisa eta unitate operatiboei eta ikerketa kriminalekoei dagokienez bakarrik aurreikusten da okupatutako lanpostuaren egokitzapen funtzionala ezin denean egin unitate berekoa den edo hutsik dagoen beste lanpostu batera atxikitzea, aurrez ezarritako lehentasun-irizpideak kontuan izanik. Eta lanerako prest eta destinorik gabe egoteko posibilitatea soilik aurreikusten da lanpostua egokitu arte edo beste batera atxikitzen zaion arte. Beraz, destinorik gabe egoteko posibilitate iragankor hori ez da gertatuko erakundearen zatirik handienera, hau

da, herritarren segurtasunean, eta kasu hori ezohikoa eta iraupen laburrekoak izango da, berme bat izanik eta inola ere eskubide bat edo destinoaren zain egoteko aukera bat izan gabe.

2014. urteko datuekin Ertzaintzan plantillaren % 10 ak 56 urte edo gehiago zituen, hau da, 756 pertsonak, eta haietatik % 80 oinarritzko eskalakoak ziren. Ertzaintzaren batez besteko adina une horretan 47 urte zen. Egokitutako zerbitzu aktiboa eska zezakeen guztietatik % 85 izan ziren eskatu zutenak, hau da, 756tik 639k.

2014an egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta zuten 639 lagunetatik 355ek gaueko ordutegian lan egiten zuten eta 284k (hau da, % 45ek) ordutegi horretatik salbuestea eskatu zuten.

Datu horiekin datozen urteetarako estrapolazioa egin daiteke langileen adinaren piramidean, kontuan izanik egokitutako zerbitzu aktiboa aitortu eko eskaeren portzentajeak (% 85) eta gaueko lanetik salbuesteko eskaeren portzentajeak (egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta dutenen % 45).

	Egokitutako zerbitzu aktiboa eskatu ahal izango zuketenen pertsonen kopurua (1)	Egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta edukiko zuketenen pertsonen aurreikuspena (2)	Kanpo-patrula egiteko salbuestitako pertsonen aurreikuspena
2015	1082	414	226
2016	1412	540	339
2017	1711	654	471
2018	1965	752	654
2019	2137	817	804
2020	2215	847	855

- (1) Urte jakin batean 56 eta 60 urte bitarteko adin-tartean egongo diren langileak. Kalkulatzen dugun eskubidea dutenen % 85ek eskatuko dutela egokitutako zerbitzu aktiboa.
- (2) Urte jakin batean egokitutako zerbitzu aktiboa aitortuta edukiko zuketenen pertsonen kopuruaren aurreikuspena, egokitutako zerbitzu aktiboko eskaeren egungo portzentajeak (eskubidea izango zuketenen pertsonen % 45) estrapolatuz.
- (3) 59 urte beteta izateagatik polizia-instalazioetatik kanpo patruilatzeko salbuespena izango duten pertsonen aurreikuspena.

Gaur egun indarrean zegoen legean bigarren jarduerako funtzionarioentzat arau orokorra zena indargabetzen du aurreproiektuak. 2012ko erregelamendu-aldaketen ildo beretik, funtzionarioak adina dela-eta edo baldintza psikofik sikoak murriztuta izateagatik dituen kalteek bere erretiroa ezartzen ez duten kasuetan ziurtatu nahi da polizia-erakundearen zerbitzuak bere baldintza pertsonalen arabera eta lanpostu egoki batean egiten jarraituko duela.

Egia da Ertzaintzan datozen urteetan erretiroak eta beste baja begetatibo batzuk asko igoko direla eta, ikusi dugun bezala, egokitutako zerbitzu aktibora igaroko diren edo igaro daitezkeen langileen kopurua handitu egingo dela. Bigarren jarduerako egoerara zenbat igaroko diren aurreikustea zailagoa da, baina beti antzekoak diren eta zerbitzua nahasten ez duten estatistikei eusten die.

Langileen osasuna zaintzeko betebeharrak, adin jakin batetik aurrera eta interesdunak hala eskatzen duenean egin beharreko lana moldatu eta egokitzera behartzen du. Baina, ikusi dugun bezala, horrek ez dakar lanpostua aldatzea, oso ezohikoa denean eta unitate berezi jakin batzuetarako salbu, unitate horiek erakundearen oso zati txikia izanik. Beraz, plantillaren zati bat destinorik gabe eta kopuru ikaragarriak kobratzen geratzen den kasurako txostenak aipatzen dituen antolaketa- eta aurrekontu-arazoak ez dira antzematen.

Dena dela, gogoan izan behar da neurri horietako ba tzuk aplikatzen direla jada lan-baldintzak arautzeko akordioan xedatutakoaren bitartez, eta berrantolaketa-neurriekin gainean hartzen ari direla. Beraz, ez du planteatzen data horretatik aurrera aurreikusi gabeko aurrekontu-eraginik. Kontuan izan behar da Ertzaintzan absentez ia ezin direla ordeztu bitarteko langile funtzionarioen izendapenarekin.

Kontuan izan behar da une honetan ia ezinezkoa dela hurrengo urteetan eragingo diren ondorioen benetako kalkulua egitea. Horren arrazoi nagusia da, adina dela-eta egokitutako zerbitzuaren modalitatea funtzionarioen eskubidea dela, eta ez obligazio. Horrenbestez, aukera horiez baliatzea banakako eta borondatezko erabakiaren ondorio izango da, eta ezin da jakin, gutxi gorabehera, zenbatek erabakiko duten eskubide horiek gauzatzea.

Polizia-lanak modu arruntean egiteko urritasun psik ofisikoagatiko bigarren jardueraren administrazio-egoeraren erregulazio berria, era berean, 2012. urteko administrazio-egoera horretara igarotzea erregulatzen duen Dekretuaren erreformaren ondorioz Ertzaintzan dagoen egoerarekin bat dator. Beraz, ez du planteatzen data horretatik aurrera aurreikusi gabeko aurrekontu-eraginik.

f) Babes sozialari eta merezimendua aitortzeari buruzko aldaketak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoen oin arrizko babes sozialari buruzko kapitulu berriak ez dakar lehendik zegoen egiazko egoerarekko aldaketarik, baina horrek ez dio baliorik kentzen kapitulu hori legean sartzeari.

Administrazioek polizia-langileen lan-arriskuen pre bentzioa garatzeko duten betebeharra aztertzea argigarria da; izan ere, lan-arriskuen prebentzioari buruzko legea segurtasun-indar eta -kidegoei aplikatzeko aukerari buruz nolabaiteko nahasmendua egon delako historikoki. Baina horrek ez dakar inolako aldaketa praktikorik egungo egoerarekin alderatuta.

Lanean edo lanaren ondorioz sortutako gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologiak direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak dituzte Ertzaintzak nahiz udaltzaingoei.

Zerbitzu poliziala edo beren funtzioak betetzen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionario izatearen ondorioz gertatz en diren heriotza- edo ezintasun-kasuetan dauden eskubide osagarrien aurreikuspenak ez dira berriak ez Ertzaintzan ezta udaltzaingoetan ere, kidego horien zerbitzuarengatik kondekorazio-erregimenari buruzko erregelamenduzko erregulazioetan dagoeneko agertzen direlako. Prestazio sozial horiek agente polizialaren merituzko jokabidearen ebaluazioari ez lotzean datz a berritasuna.

Antzekoa esan daiteke ohorezko kondekorazioak emateko erregimenari buruz; polizia-lanarengatiko domina ematea Ertzaintzaren nahiz uda Itzaingoen kasuan ez da aldatzen, bakoitzaren erregelamenduan ñabardura bereizgarriekin bilduta dagoen aurretiazko erregelamendu-erregulazioarekin alderatuta. Proiektuan zerbitzu-ekintzan hildakoak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ohore gisa igarotzeko aurreikuspenak ez du ondorio ekonomikorik.

Diziplina-erregimena arintzen da eta espedientatzen diren pertsonen bermeak handitzen dira. Zehapenen bete beharra jasotzen da, baita zehapena eten beharreko edo baldintzapean kentzeko kasuak ere, horrela jokatzeko motiboak daudenean.

g) Ertzaintzaren egitura profesionalari buruzko aldaketak.

Superintendente-kategoria kentzeak eragin mugatua du, ez baitago kategoria hori duen funtzionario bakar bat ere. Eskala eta kategoria horien barnean hartutako plazei (orain goragoko kategoriako zerbitzu-eginkizunean estalita daude) dagozkien funtzioak goragoko eskalako lanpostu zehatzetan ezartzen dira. Aurrekontu-eragina ez da asko nabaritzen lanpostu gutxi direlako (3) eta lanpostu horien ord ainsariak, ezabatuko den kategoriari lotuta daudenak, destino-osagarriari (kategoria) buruzkoak baitira soilik, eta kategoria hori duen funtzionario bakar bat ez dagoenez, horrek ez du inolako eraginik, eman daitezkeen aparteko haborokinak salbu.

h) Udaltzaingoei buruzko aldaketak.

Udaltzaingoei dagokienez, haien egitura profesionalean eragina duten hainbat neurri aurreikusten dira, eta hainbat kasutan nolabaiteko eragin ekonomikoa izan dezakete udalerrri jakin batzuetan.

Hala eta guztiz ere, horrek erkidegoko legegilea ez du behartzen udalerriei baliabideak zuzkitzera, legea betetzerakoan haien finantza-nahikotasuna ziurtatzeko. Toki-araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legearen aurreikuspen hori estatuko edo erkidegoko legegileak udalerriei eskumen berriak esleitzen dien kasuei buruzkoa da, eta hori ez da aztergai dugun kasua, udaltzaingoaren alorreko eskumena berezko tokiko eskumena delako eta udaltzaingoa definitzen duten funtzioak ere aldatzen ez direlako .

Egon daitezkeen ekonomia- edo aurrekontu-eraginak honako honetatik eratortzen dira:

Batetik, Ertzaintzaren kasuan bezala, C1 taldeko titulazioa eskatuko da oinarritzko eskalan sartzeko. Horrek, ordea, ez du eragin ekonomikorik karrerako funtzionarioei dagokienez legea indarrean jartzen denean, aurreko erregulazioan karrerako funtzionario gisa izendatzeak ordainsariei dagokienez C1 bezala birsailkatzea zekarrelako. Aurreproiektuaren 5. xedapen iragankorraren arabera, oinarritzko eskalako langileak ondorio guztietarako C1 taldean sartuko dira, Hezkuntza Ministerioak abenduaren 13ko EDU/3497/2011 Aginduan (abenduaren 26ko BOE) aitortutako baliokidetasun akademikoa kontuan izanik.

Eraginak izan ditzake, ordea, udaltzaingoetako bitarteko funtzionarioak kobratzen ari diren oinarritzko ordainsariei eta hirurtekoei dagokienez. Gaur egun Euskadin udaltzaingoko langile guztien % 11,4 bitarteko funtzionarioak dira, udaltzaingoko bitarteko funtzionarioak 379 izanik.

C1 eta C2 taldeen oinarritzko soldaten artean dagoen diferentzia 2016. urterako 1.463,96 euro da. Eragin berbera izango luke praktiketako polizia -funtzionarioen kasuan.

Bestalde, indarrean dagoen legerian bildutako eskala- eta kategoria-sorkuntzari jarritako mugak berrikusten dira proposamenean. Udaltzaingoen egitura profesionalaren eta Ertzaintzaren artean dagoen diferentzia da goi-mailako eskala eta eskala betearazlea ez direla existitzen, intendente, komisario eta komisariorde kategoriak biltzen dituen eskala tekniko bat baizik, eta 100.000 biztanletik gorako udalerrietan bakarrik sor daitekeela. Intendente-kategoria (A-1 taldea) 300.000 biztanletik gora eta gutxienez 400 funtzionario dituzten udalerrietan bakarrik sor daiteke. Hau da, hiriburuak salbu, gainerako udaltzaingo guztietan egitura profesional osoa C-1 sailkapen ta ldean txertatzen da, buruzagitza barne, hainbat dozena funtzionario biltzen dituzten eta ud altzaingoak bere gain hartutako zereginen konplexutasun, zailtasun eta bolumen handiagoa dela medio gero eta jakintza gehiago behar dituzten antolakundearen agintea egikaritzeko inolako unibertsitate-titulaziorik eskatu gabe.

Lehendik adierazitakoaren ondorioz polizia-kidegoaren berezko organigramaz kanpo dauden baina zeregin horiek egiten dituzten zuzendaritza-e giturak sortu dira, udaltzaingoari atxikitako "zuzendaritza" edo "zuzendariordetza" izenekin, edo zeregin horiek betetzeko aldi baterako langileak izendatu dira, eta horrek dakarren arazoa da aldi baterako langileak direnez gero ezin dutela antolakundearen agintea egikaritu.

Gai horri lotuta proposatzen da Ertzaintzan eta uda ltzaingoetan dauden eskalak eta kategoriak bateratzea. Horrekin administrazioen arteko mugikortasuna eta kidegoen arteko elkarreragin operatiboa erraztu nahi da. Horrek ez du esan nahi udaltzaingo guztietan eskala eta kategoria guztiak egon behar direnik, udaltzaingoaren plantila eta egituraren eta udalerriko biztanleen arteko korrelazioa egon behar duelako.

Horrekin kidego gehienetan aginte-egitura erabat berdindu dadin saihestu nahi da, ez datorrelako bat zerbitzuen premia eta eskakizunekin, aurreko lege-mugetatik eratorritzen zena batez ere. Kategoria jakin bat sortzeak haren azpiko kategoriak sortzera behartzen duenez proiektuak, legera egokitzeak hainbat kasutan kidego batzuk kategoria berriekin indartu beharra ekarriko du. Era berean, aurreikusten da lehendik zeuden langileak sortzen den berrantolaketa txertatu beharko direla.

Horrek eragin ekonomiko aldakorra izan dezake udalerrien arabera. Baina kontuan izan behar da Euskadiko udaltzaingoen antolamenduari eta funtz ionamenduari aplikagarri zaizkion esparru-arauak ezartzen dituen eta indarrean dagoen maiatzaren 5eko 58/2015 Dekretuak kidego horietan eskalak eta kategoriak egituratzeko irizpide batzuk ezartzen dituela, eta, udalerriko biztanle kopuruaren arabera buruzagitza-postuak kategoria jakin batzuei esleitzea zekartenez, egokitzapen bat egitera behartzen zuten. Lege-erreformak, egia esan, esparru-arauen Dekretuaren emaitza partzialki aldatzen du, baina aipatu Dekretuak dagoeneko izan duen eragina kontuan izanik, lege-erreformak sortzen duena txikiagoa da.

58/2015 Dekretutik eratorritako egokitzapena eta proposatzen den lege-erreformak ekar zezakeena kontuan hartzen baditugu, udalak, legearen egokitzapen-aldian eta 58/2015 Dekretuaren aurreko egoerarekin alderatuta, honako kategoria hauek sortzera behartuta egongo lirateke:

- Intendentea: Bilbo, Gasteiz, Donostia.
- Komisarioa: Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun.
- Komisariordea: Getxo; Irun; Santurtzi, Errenteria, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Galdakao.
- Ofiziala: Santurtzi, Eibar, Galdakao, Hernani, Tolosa, Arrasate- Mondragon, Sopela, Mungia, Lasarte-Oria, Laudio, Zornotza, Gernika-Lumoa, Ermua, Andoain.
- Ofizial ondokoa: Andoain, Arrigorriaga, Etxebarri, Oiartzun; Gorliz: Ordizia: Zumaia: Ondarroa: Lekeitio: Muskiz: Urretxu: Balmaseda: Gueñes: Ortuella: Elorrio: Abadiño: Astigarraga: Orio: Villabona: Zalla: Plentzia, Urnieta, Derio; Lezo; Ugao; Usurbil; Mutriku.

Hala eta guztiz ere, soilik lege-proposamenaren eragina hartzen badugu kontuan honako taula hau lortzen dugu:

a) Intendentea: gaur egun haren sorkuntza borondatezkoa da, eta 300.000 biztanletik gora eta 400 kideko edo gehiagoko plantilla dituzten udalerrietan bakarrik sortu daiteke. Proposamenak dio kategoria hori nahitaez sortu behar izango dela 150.000 biztanletik gora edo 200 kideko plantilla dituen edozein udalerritan. Eskatzen diren baldintza horiek hiru hiriburuek bakarrik betetzen dituzte, eta horietako bakar batek ere ez du intendenterik gaur egun; beraz, egitura berrira egokitu beharko lirateke. Baina badituzte gainerako kategoriak, eta beraz ez lituzkete beste bitarteko plaza batzuk sortu beharko.

b) Komisarioa: gaur egun 150.000 biztanletik gora eta 100 kideko edo gehiagoko plantilla dituzten udalerrietan eskatzen da. Proposamenaren arabera, 50.000 biztanletik gora edo 100 kideko gorako plantilla dituzten udalerrietan eskatuko litzateke kategoria hori sortzea. Horrek Barakaldo, Getxo eta Irun hartzen ditu barnean, biztanleen eta plantillaren baldintzak betetzen dituztelako. Gaur egun udalerririk horietako bakar batek ere ez du kategoria hori. Irunen kasuan komisariorde-kategoria ere sortu beharko lukete, gaur egun ez dagoelako halakorik.

c) Komisariordea: gaur egun 100.000 biztanletik gora eta plantillan 40 kide edo gehiago dituzten udalerrietan eskatzen da. Proposamenaren arabera, 25.000 biztanletik gora edo 40 kideko gorako plantilla dituzten udalerrietan eskatuko litzateke kategoria hori sortzea. Horrek honako udalerririk hauek izango luke eragina: Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio edo Galdakao. Aipatutako hainbat udalerririk gaur egun ofizial-kategoriarik ere ez dute.

d) Ofiziala: gaur egun 15.000 biztanletik gora eta plantillan 20 kide edo gehiago dituzten udalerrietan eskatzen da. Proposamenaren arabera, 15.000 biztanletik gora edo 20 kideko gorako plantilla dituzten udalerrietan eskatuko litzateke kategoria hori sortzea. Horrek eragina izango luke indarrean dagoen dekretuak eragina duen udalerririk berberetan. Hala eta guztiz ere betebeharrak berria izango litzateke Andoainentzat, izan ere, biztanle kopuruak behartzen ez duen arren udaltzaingoaren plantillako kide kopuruak behartzen baitu.

e) Ofizial ondokoa: gaur egun 15.000 biztanletik behera eta plantillan 5 kide edo gehiago dituzten udalerrietan eskatzen da. Proposamenaren arabera, 15.000 biztanletik behera edo plantillan 5 kide edo gehiago dituzten udalerrietan eskatuko litzateke kategoria hori sortzea.

Horrek eragina izango luke indarrean dagoen dekretuak eragina duen udalerri berberetan, eta beraz, legea onartzeak ez luke eragin berririk izango aipatu udalerrietan.

Azken batean, lege-proposamenaren eraginaren nobedadea hiriburuetan intendente-kategoria, Barakaldo, Getxo eta Irungo udalerrietan komisario-kategoria eta Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio edo Galdakaon, baita Irunen ere, komisariorde-kategoria sortzera mugatuko litzateke.

Ondorio gisa, litekeena da aurreikusitako kasuetan legeak buruzagitza-postu berriak eta egun daudenak baino goragoko kategoriak eta era berean bitarteko kategoria guztiak sortu behar direla ezartzea, eta horrek plantillak handitzea eta kostuak igotzea ekar dezake.

Hala eta guztiz ere, ikus daitekeenez finantza-eragina mugatua da eta ez dirudi aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-jasangarritasunari lot utako helburuetan eragina izan dezakeenik ezein udalerritan.

Proiektuaren zazpigarren xedapen iragankorrak aurreikusten du udaltzaingoan buruzagitza-postuak 3 urteko epearen barruan lege berrira egokitu beharko direla. Buruzagitza-postuak betetzen dituztenek postu horiek betetzen jarraituko dute izendatu zituztenean ezarritako baldintza bereberri jarraikiz, eta betetzen duten postuari esleitutako ordainsariak jasoko dituzte. Langile horiek birkalifikatutako postuari dagokion kategorian sartuko dira soilik dagokion titulu akademikoa edo egokitzapena baino lehen deitu diren edo deituko diren Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen 59.2 artikuluan aurreikusitako gaikuntza-ikastaroak badituzte; leku berean badute lege hau indarrean sartu aurreko bost urteetan behin betiko destinoa; eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak emandako egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktikoa gaindituta izatea, zeinean kontuan hartuko baitira esperientzia profesionala, espezializazioko eta gaikuntzako ikastaroak eta aurrez eskatutako ezagutzak.

Era berean ezartzen da eskala horretan sartzeak ezingo duela ekarri gastu publikoa handitzerik, ezta jasotzen dituzten guztizko ordainsarien urteko zenbatekoa aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarrizko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

Seigarren xedapen iragankorrak 1992ko legearekin sortutako arazo bat konpondu nahi du, bere garaian udaltzaingoan sartzeko eskatu zitzaiena baino titulazio-talde baxuago bateko kategorietan birsailkatuak izan ziren Bilboko udaltzaingoko langile jakin batzuei lotuta. Aipatu legeak udalerriei kategoria profesionalak sortzeko posibilitateari dagokionez inposatzen zizkien mugapenetatik eratoritzen zen hori. Funtzionario kopuru txiki bat (10 baino gutxiago) hartzen du eraginpean. Edonola ere xedapen iragankorrak adierazten du eskala horretan sartzeak ezingo duela ekarri gastu publikoa handitzerik, ezta jasotzen dituzten guztizko ordainsarien urteko zenbatekoa aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarrizko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

[i\) Aguazilei eta mugikortasun-agenteei buruzko aldaketak.](#)

Udal-aguazilei dagokienez, aurreproiektuak haien estatutu juridikoaren oso erregulazio txikia planteatzen du, orain arte ez zegoena, eta udaltzaingoenetik bereizia.

Horrek haien izena, funtzioak, eskakizunak eta prestakuntza bateratzea dakar. Horri lotutako kostu nagusia, prestakuntzarena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren erantzukizuna izango da aurrerantzean. Edonola ere kostu hori ez da esanguratsua, 2015eko ekainaren 30ean Euskadi osoan 64 aguazil besterik ez zeudelako, eta ez da aurreikusten datozen ekitaldietan antolaketaren eta aurrekontuaren ikuspuntutik onartezina izango den aguazil berrien prestakuntza-eskaria egingo denik.

Langile lan-kontratudun finko gisa aguazil-postuak betetzen dituztenak funtzionario bihurtzeko prozesuen aurreikuspena biltzen du aurreproiektuak.

Konfigurazio berrian aguazil-postuak funtzionarioe i erreserbatuta daude, eta beraz lege hau indarrean jartzen den unean aguazil gisa eratutako postuak betetzen ari diren langile lan-kontratudun finkoek postu horietan jarraitu ahal izango dute, eta era berean barne-sustapeneko hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izango dute funtzionario bihurtzeko.

Era berean, aguazilak udaltzaingoetan sartzeko posi bilitatea barne hartzen du aurreproiektuak, baldin eta haiek sortzen badira.

Mugikortasun-agenteei dagokienez kontuan izan behar da aurreproiektuak ez duela inposatzen horiek sortu beharra, aukera hori estatuko araudian dagoeneko barne hartuta dagoela eta horren indarrez Euskadin kidego bakarra dagoela, Donostiako udaleko mugikortasun-agenteeana, hain zuzen ere. Edonola ere, eta aurrekontu-eragina aztertzeko xedez, adierazi behar da sorkuntza horren eraginak, gutxienez ere langile-kredituei dagokienez, neutroa izan behar duela, Segurtasun Indar eta Kide goei buruzko Lege Organikoak adierazten duena eta aurreproiektu honek biltzen duena kontuan izanik.

j) Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiarekikolotura:

Aurreproiektuko artikuluetan ikus daiteke Akademiaren prestakuntza-zereginetara jotzen dela hainbat alderditan, adibidez: polizia-kidegoetako funtzionarioen hautaketa eta prestakuntza; espezializazio-ikastaroak; toki-korporazioen eskaera hornitzeko oinarritzko ikastaroak gaingitu dituzten pertsonekin egindako lan-poltsak; mugikortasun-agenteen edo aguazilen prestakuntza.

Hartzaileen espektroa ez da berria, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko Legeak jadanik esleitzen zizkion zereginak kontuan izanik, eta ekar dezakeen lan-bolumena, aurrera begira egin ditzakegun aurreikuspenak kontuan izanik, ez da esanguratsua izango antolaketari nahiz aurrekontuari dagokienez.

3.- AURREKONTUKO GASTUEN FINANTZAKETA ETA AURREKONTUTIK EZ DATOZEN GASTUEN FINANTZAKETA

Aurreko atalean adierazi bezala, ez da aurreikusi 2016ko ekitaldirako EAEko aurrekontu orokorretan modu batera edo bestera jasota ez dauden aurrekontu-gastuak finantzatzeko beharra.

4.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO OGASUN NAGUSIAREN BEREZKO GAIEN GAI NEAN ERAGINA DUTEN XEDAPENAREN ALDERDIAK IDENTIFIKATZEA

Ez dago

5.- PROPOSATUTAKO XEDAPENA JASOTZEN DUEN EKONOMIA ETA AURREKONTU PROGRAMAREN DESKRIBAPENA.

Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako aurrekontu-programetan justifikatzen da.

Bat datoz 2223 "Ertzaintza zerbitzuan" eta 2224 "Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia" programei buruzko memorietan jasotako aurreikuspenekin, eta, hasiera batean, ez da zuzenketarik egin behar, helburuei, ekintzei edota adierazleei dagokienez.

6.- BESTE ADMINISTRAZIO BATZUETAN EDO GIZARTEAN LEGE-PROIEKTUAK IZANGO DUEN ERAGIN EKONOMIKOA

Ertzaintzari aplikatzeaz gain, proiektua udaltzaing oei eta udalei ere aplikatuko zaie, zeinei lehendik egindako oharren berri eman behar zaien.

Bereziki eragin hori lehenago, atal espezifiko batean, aztertu da, soilik udal-eremuari buruz proposatutako neurri arautzaileei dagokienez.

Proiektuak ez du eraginik enpresa-sektorean, ezta herritarrengan ere, haren xedeari eta edukiei erreparatuta ondoriozta daitekeen bezala.

Vitoria-Gasteiz, 2016 ko urtarrilaren 20a

Sin.: Rosa Ballesteró Martínez

KUDEAKETA EKONOMIKOAREN ETA BALIABIDE OROKORREN ZUZENDARITZA

VI

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA / AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **EUGENIO ARTECHE PALOMAR**Fecha de la firma: **12/07/2015 21:27:05**Validación de la firma:  **Correcta**

INFORME JURIDICO SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

Se emite el presente informe por la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el vigente Decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad y en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de las disposiciones de carácter general.

1.- ANTECEDENTES

La Consejera de Seguridad ordenó la iniciación del procedimiento para la elaboración, tramitación y presentación al Consejo de Gobierno de un proyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, tal y como se contempla en el calendario legislativo elaborado por el Gobierno Vasco para la presente legislatura.

El anteproyecto de ley a examen tiene como objetivo modificar parcialmente la LPPV para incorporar una serie de modificaciones puntuales que afectan a la regulación del régimen específico del personal de los Cuerpos de Policía dependientes de las administraciones públicas vascas. Así como habilitar al Gobierno para aprobar un texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco (en adelante LPPV) ha sido objeto de diversas modificaciones relativas al régimen retributivo de los funcionarios de la Ertzaintza; al sistema de representación de los trabajadores de la misma o a los grupos de clasificación funcionarial. La Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi, ha supuesto la cuarta modificación de la LPPV, extrayendo de tal regulación aspectos que resultaban comunes al conjunto de la seguridad pública, tales como la regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, u otros referentes al subsistema policial o de seguridad ciudadana que por su carácter organizativo o relacional convenía incluirlos en la citada la Ley, como lo relativo a la potestad de coordinación de policías locales o los mecanismos de cooperación policial. De este modo en la actualidad la LPPV tiene un contenido primordialmente relacionado con el régimen estatutario del personal de los Cuerpos de la Policía del País Vasco.

La presente Ley pretende abordar una quinta modificación de la LPPV que atiende a diversas razones: el influjo de otras leyes estatales o autonómicas sobrevenidas; la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa vigente y los pronunciamientos judiciales que la interpretan; el contexto de los proyectos de modernización de la Ertzaintza; el resultado de los trabajos desarrollados durante los últimos años en grupos

de trabajo derivados del convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Municipios Vascos - Eudel, etc.

2.- CONTENIDO.

1. “Capítulo ii.- Mecanismos de Control de la Actividad Policial. (arts.6 a 14)
2. Consejo De La Ertzaintza modificación de la letra d) del artículo 17 (actividad en relación con la aplicación del régimen disciplinario)
3. Consejo De La Ertzaintza: letra i) del artículo 17 ((actividad en relación con la aplicación del régimen de reconocimientos honoríficos)
4. Policía Local: nuevo párrafo 4º al artículo 27 (funciones de protección de autoridades locales fuera del término municipal)
5. Código Deontológico: nuevo párrafo 2º al artículo 28, (Recepción del código europeo de ética de la policía)
6. Código Deontológico: (suprime el párrafo 3º del artículo 30) Su contenido para al art. 30 bis.
7. Código deontológico: nuevo artículo 30 bis (relaciones con la ciudadanía en sociedad bilingüe y plural)
8. Formación: artículo 40: solicitar equivalencias con titulaciones académicas y convalidar materias
9. Especialidades: artículo 43
10. Selección: convocatorias. Alusión al temario.
11. Vinculación bases convocatoria: nuevo párrafo 5º al artículo 47.
12. Medidas promoción equilibrio hombres y mujeres: nuevo artículo 47 BIS,
13. Selección e ingreso: Órganos de selección: Artículo 48
14. Selección e ingreso: Encomienda a la academia de los procesos selectivos de la policía local. Posibilidad de realización conjunta de convocatorias: párrafo 2º al artículo 50
15. Selección e ingreso: requisitos. nuevo artículo 55 bis
16. Selección e ingreso: Eliminación referencia a superintendentes: párrafo 4º del artículo 56.
17. Promoción interna: Minoración años de servicio para el ascenso.
18. Promoción Interna: conciliación vida laboral y familiar. se equipara al servicio activo la excedencia por cuidado de hijos o hijas o de familiares, de excedencia por razón de la violencia de género: párrafo 3º del artículo 59
19. Promoción interna: conciliación vida laboral y familiar. valoración como tiempo de servicios efectivos. párrafo 4º del artículo 59
20. Pérdida de la condición funcionarial: remisión al régimen general de funcionarios; párrafo 1º del artículo 61
21. Pérdida de la condición funcionarial: jubilación: remisión al régimen general de funcionarios. Artículo 62
22. Provisión de puestos: eliminación de la mención a grado personal y sustitución por grado de desarrollo profesional. Párrafo 2º del artículo 65
23. Provisión de puestos con especialidad. Nuevo artículo 65 bis.
24. Provisión de puestos abiertos a segunda actividad: preferencia (se elimina la referencia a la preferencia de quienes están con incapacidad permanente total, porque están jubilados). Artículo 66

25. Provisión de puestos abiertos a segunda actividad: se suprime la previsión de remoción del funcionario en servicio activo desplazado por funcionario en segunda actividad: Suprime el párrafo 5º del artículo 70.
26. Provisión de puestos: desempeño provisional: se elimina la referencia al grado personal. Párrafo 3º del artículo 71
27. Capítulo II bis.- Carrera profesional. (arts. 73 bis y ter)
28. Régimen retributivo: Remisión al régimen general con especialidades. párrafo 1º del artículo 74 :
29. Régimen retributivo: eliminación de la referencia a superintendente: letra a) del párrafo 1º del artículo 74.
- 30.- Régimen retributivo: Complemento de carrera profesional. Nueva letra a) bis al párrafo 1º del artículo 74
31. Incompatibilidades: remisión al régimen de los funcionarios de las administraciones vascas: párrafo 2º del artículo 78
32. “Capítulo V.- Salud y Protección social.(arts 79 y 79 bis)
33. Capítulo V Bis.- Condecoraciones y reconocimientos.
34. Situaciones administrativas: remisión al régimen general del funcionariado con especialidades. Artículo 81
35. Suspensión provisional nuevo párrafo 5º al artículo 84,
36. Suspensión provisional nuevo párrafo 6º al artículo 84,
37. servicio activo modulado por razón de la edad: Artículo 85
38. Segunda Actividad: Artículo 86
38. Servicio modulado por edad o segunda actividad transitoriamente sin destino. Garantías: Artículo 87
40. Segunda actividad sin destino: Suprime el artículo 88.
41. Régimen disciplinario: infracciones: Se modifican las letras b), d), g), k y l) del párrafo 2º del artículo 92
42. Régimen disciplinario: Infracciones: nuevas letras l bis) y l ter) al párrafo 2º del artículo 92
43. Régimen disciplinario: sanciones: Artículo 93
44. Régimen disciplinario: criterios de ponderación de faltas y sanciones: artículo 94
45. Régimen disciplinario: derechos del expedientado nuevo párrafo 2 bis al art. 95.
46. Régimen disciplinario: derechos del expedientado nuevo párrafo 2 ter al art.95.
47. Caducidad: Párrafo 5º del artículo 95
48. Prescripción de las faltas: Párrafo 2º del artículo 97
49. Prescripción de las sanciones: párrafo 3º del artículo 97
50. Ejecutividad de las sanciones: nuevo artículo 97 bis,
51. Ejecución de las sanciones: Nuevo artículo 97 ter,
52. Elecciones Ertzaintza: Condición de electores: eliminar la referencia a interinos: párrafo 3º del artículo 99
53. Escalas y categorías en la Ertzaintza: elimina la referencia a superintendentes. artículo 105
54. Ertzaintza: “sección tercera.- policía judicial.” ajustes para ponerse al día
55. Alguaciles: Artículo 117
56. Escalas y categorías en policías locales: Artículo 118
57. Escalas y categorías en policías locales. Jefaturas. Artículo 119
58. Mecanismos de suplir necesidades temporales: colaboración intermunicipal, auxilio de la Ertzaintza. Formación de funcionarios interinos. Artículo 120
59. “Capítulo iii.- Agentes de movilidad”,
60. Segunda actividad en la policía local: Nueva disposición adicional vigésima

61. Permuta en la policía local: nueva disposición adicional vigésimoprimera
 62. Funcionarios jubilados: Nueva disposición adicional vigésimosegunda
 63. Asistencia a juicio por hechos relacionados con el servicio activo nueva disposición adicional vigésimotercera
 64. Se suprimen las disposiciones adicionales tercera, octava, duodécima en su apartados primero y tercero, y decimosexta, así como las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima.
 65. Referencias al boletín de la ertzaintza
 66. Referencias, a la “academia de policía del país vasco” y al “departamento de interior” o a órganos del mismo
- Disposición transitoria primera.- procesos selectivos y de provisión en curso.
- Disposición transitoria segunda.- régimen de condecoraciones y acto de servicio.
- Disposición transitoria tercera.- expedientes disciplinarios
- Disposición transitoria cuarta.- categoría de superintendente a extinguir
- Disposición transitoria quinta.- integración de personal funcionario de la policía local en la escala superior.
- Disposición transitoria sexta.- adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de la policía local.
- Disposición transitoria séptima.- Alguaciles
- Disposición transitoria octava.- Integración de alguaciles en los cuerpos de la policía local.
- Disposición final primera.-. Habilitación para elaborar un texto refundido
- Disposición final segunda.- Entrada en vigor

2.- CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROYECTO

2.1.- COMPETENCIA

a) Habilitación competencial

Es indudable la competencia autonómica para ordenar la materia objeto del anteproyecto, en virtud de la competencia que el artículo 17 EAPV le atribuye en cuanto al “régimen de la Policía Autónoma” en actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera CE. Título habilitante al que hay que sumar el título relativo al desarrollo del régimen de los funcionarios públicos conforme a lo dispuesto en el art. 10.4 EAPV.

No es menester profundizar en dichas reflexiones por cuanto se trata de la cuarta modificación de una norma legal, y existe numerosa jurisprudencia sobre la misma, al igual de una cumplida doctrina de la Comisión Jurídica Asesora.

Basta por ello con guiarnos por la estela que marcan diversos dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora, tales como el dictamen N°: 120/2007 o el dictamen N°: 67/200, que se pronunciaban sobre anteriores reformas de la LPPV.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 EAPV, el Parlamento Vasco aprobó la LPPV, que regula el régimen estatutario de los policías del País Vasco, “lo más próximo posible al general de la función pública vasca, sin perjuicio de las necesarias particularidades” (Exposición de Motivos), declarando su disposición final primera que “los funcionarios de la Ertzaintza y de la Policía Local se registrarán supletoriamente, en lo que respecta a su régimen estatutario, por la legislación general de la Función Pública Vasca”.

Hay que recordar que la exigencia de un estatuto específico y diferenciado con respecto al régimen funcional común viene impuesto por las características singulares de su función, pues el artículo 104.1 CE señala que su misión es la de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, debiendo ser, por mandato del artículo 104.2 CE, una Ley orgánica la que determine sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Mandato que ha cumplido la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFCS) que, en lo que nos interesa, completa el bloque de la constitucionalidad, debiendo repararse en que su disposición final 1ª excluye su aplicación a la Policía Autónoma del País Vasco, salvo las reglas generales y básicas sobre actuación y estatuto que recoge en los artículos 5, 6, 7 y 8.

Resulta patente que en la cuestión que nos atañe no existe límite estatal alguno a la capacidad normativa autonómica, salvo la previsión de carácter principal y orientativo, según la cual los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad, a tenor de lo dispuesto en la correspondiente reglamentación (artículo 6.6 LOFCS).

Por su parte, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de carácter básico respecto al régimen estatutario de los funcionarios al amparo del artículo 149.1.18ª CE, excluye de su ámbito a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y señala que sus disposiciones sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica (artículo 4).

Todo ello significa que la ley autonómica puede establecer las características del estatuto singular que rige en la Ertzaintza y, en particular, ordenar la estructura interna de la policía autonómica, sin tener que seguir reglas de carácter básico o comunes impuestas en garantía de una mínima uniformidad en todo el Estado.

Esa libertad de opción no significa obviamente que, en su caso, no existan límites como los que se derivan de los derechos fundamentales reconocidos por la CE, en particular el de igualdad en la ley del artículo 14, del que es especificación en el acceso a la función pública el derecho reconocido por el artículo 23.2 CE.

Por su parte, en el caso de los funcionarios de las Policías Locales, la respuesta debe ser más matizada, dada la importancia que la Policía Local tiene como elemento del régimen local, sin que pueda excluirse como título para realizar ese reparto competencial lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE en relación al artículo 10.4 del EAPV.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, por la se aprueba el Estatuto del Empleado Público (EBEP), que no incluye a los funcionarios policiales, prevé sin embargo en su artículo 3.2 que los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto lo establecido para ellos en la LOFCS.

Existe, por tanto, una introducción en este ámbito de la competencia estatal para aprobar las bases del régimen de la Policía Local ex artículo 149.1.18 CE, correspondiendo a la Comunidad Autónoma el desarrollo de las bases en virtud del artículo 10.4 EAPV.

En cualquier caso, hay que decir que las previsiones del EBEP en materia de provisión de puestos de trabajo y movilidad sólo producirán efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP (disposición final 4ª.2).

Por tanto, serán de aplicación hasta entonces las bases que se contienen en la legislación local [disposición final tercera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL) y disposición transitoria cuarta del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante TRRL)], que han sido desarrolladas en la Comunidad Autónoma por la LPPV, Ley que es de aplicación a los Cuerpos de Policía Local [artículo 2 b) LPPV].

b) Rango de la iniciativa y habilitación del promotor:

Es preciso el rango legal en tanto en cuanto se regulan aspectos básicos del estatuto funcional del personal de los cuerpos de policía, sobre el que existe una reserva de ley. La reserva legal del artículo 103.3 CE obliga al legislador autonómico, al igual que la del artículo 23.2 CE que se remite a una regulación de las condiciones de acceso conforme a los requisitos “que señalen las leyes”. Máxime cuando atañe a aspectos que ya vienen regulados parcialmente en otras normas con rango de ley formal, como la ley de policía del País Vasco.

No cabe duda de la habilitación del Departamento de Seguridad como promotor de la iniciativa a tenor del reparto de áreas de actuación del Gobierno Vasco, y lo dispuesto en la propia LPPV y en el Decreto de Estructura Orgánica de dicho Departamento.

c) Conclusión:

A la vista de las consideraciones precedentes se estima que la Comunidad Autónoma Vasca es competente para abordar la regulación a examen atendiendo principalmente al título competencial contenido en el art. 17 EAPV en materia de "régimen de la policía autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público", enmarcada en el proceso de actualización del régimen foral previsto en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, sin perjuicio de la posible invocación de otros títulos habilitantes como los arts. 10.2 o singularmente el art. 10.4 del mismo Estatuto de Autonomía.

El límite de esta regulación en lo que atañe a la Ertzaintza se encontraría en los principios generales y derechos constitucionales que atañen al conjunto de la función pública, como los principios de igualdad, mérito y capacidad, por ejemplo, las reglas generales de los arts. 5, 6, 7, y 8 de la LOFCS, quedando un margen considerable para el normador autonómico, dado que tampoco le resulta de aplicación directa el EBEP.

Cuestión distinta es que el propio legislador autonómico decida aproximar el estatuto funcional policial al general de los funcionarios, y determine su aplicación directa en determinadas cuestiones como las situaciones administrativas, derechos y deberes o retribuciones o declare su aplicabilidad supletoria con carácter general.

En el caso de los funcionarios de policía local el legislador vasco dispone también de un amplio margen, si bien en este caso, el artículo 3.2 del EBEP declara que los mismos se rigen por dicho Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas.

2.2.- EXAMEN DEL PROYECTO

A la vista del examen competencial examinado se puede concluir que el proyecto no plantea problemas de índole legal o constitucional en cuanto a su inserción en el marco jurídico.

Estructuraremos este repaso jurídico de un modo analítico, por temas y no siguiendo estrictamente la enumeración de las reformas, al tiempo que procurando evitar reiterar los planteamientos profusamente examinados en las memorias.

2.2.1.- Mecanismos de dación de cuentas.

Se introduce un nuevo capítulo dedicado a regular mecanismos complementarios de dación de cuentas de la actividad policial, para responder frente a la ciudadanía de la corrección y eficacia de sus actuaciones, además de los mecanismos de control jurisdiccional y de control parlamentario existentes para el conjunto de la actividad administrativa. Su finalidad es lograr el mejor servicio policial a la ciudadanía, asegurando que se cumplen los estándares del servicio policial de un modo eficiente y eficaz y con respeto a las leyes y procedimientos preestablecidos.

El reforzamiento de los mecanismos de dación de cuentas y de transparencia administrativa pasa por integrar elementos interrelacionados tales como la inspección y supervisión de la eficacia y eficiencia de los servicios; reforzar el sistema de estímulos positivos del buen hacer policial, incluyendo tanto los estímulos retributivos que suponen ciertos complementos de productividad, complementos de carrera profesional vinculados a la evaluación del desempeño, gratificaciones extraordinarias o el sistema de condecoraciones y distinciones; establecer mecanismos disciplinarios internos eficaces, proporcionales, adecuados y justos, que vayan más allá de la investigación de casos particulares de indisciplina para analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral y reforzar la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo.

Para apuntalar la última línea estratégica mencionada además de reforzar los mecanismos de interacción con la ciudadanía en la recepción y tratamiento de quejas a través de la Oficina para la mejora del sistema de seguridad pública, se crea un organismo híbrido de carácter permanente, con autonomía funcional respecto de la institución policial y compuesta por personas especializadas, pero al tiempo que se incluya a miembros de la policía, de modo que pueda generar confianza en la ciudadanía, al tiempo que no suscite rechazo entre el propio colectivo policial.

Las funciones de la comisión son las de investigar de oficio incidentes en los que una intervención policial pudiera haber contribuido directa o indirectamente al fallecimiento o lesiones graves de una persona; investigar a solicitud del titular del Departamento cualquier conducta o práctica sobre la que se hayan recibido quejas en las que exista seria preocupación sobre el impacto en la confianza de la ciudadanía, y supervisar el funcionamiento del tratamiento de quejas referentes al servicio policial.

La regulación de esta comisión preserva la neutralidad e independencia de sus miembros, regulándose de forma tasada las causas que permiten su destitución, para evitar que sean apartados en el curso de una investigación de forma arbitraria. Se contempla el deber de colaboración con la comisión y la posibilidad de que en el curso de sus investigaciones puedan ser apoyados por funcionarios públicos en comisión de servicios o bien encomendar la investigación en los servicios de asuntos internos de la Ertzaintza bajo la supervisión directa de la propia Comisión. Además se contempla que la comisión deba rendir cuentas por su actividad directamente ante el Parlamento Vasco.

En la misma línea se establece una remisión expresa a la aplicabilidad del contenido del Código Europeo de Ética de la Policía, el cual no sólo fija pautas de comportamiento a los funcionarios de policía, sino igualmente a las autoridades policiales en aspectos no sólo de la interrelación con la ciudadanía, sino igualmente en cuanto a la propia organización interna de los servicios, estableciendo pautas que se enmarcan en lo examinado más arriba en el apartado relativo a la dación de cuentas.

2.2.2.- Selección e ingreso:

Algunas de las reformas tienden a modernizar los procedimientos de ingreso, incorporando reglas que se han extendido al conjunto de los empleados públicos en el EBEP, tales como las referentes a la composición de los órganos de selección y su imparcialidad, profesionalidad y especialidad. Respecto a la composición de dichos órganos de selección se incorpora la representación equilibrada de mujeres y hombres derivada de la ley de igualdad entre hombres y mujeres.

Se asumen otras reglas previstas en el EBEP como la designación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias como órgano permanente de selección especializado en los procesos selectivos de la Ertzaintza y en aquellos en que se le encomiende por las administraciones locales. Cuestión en la que incide igualmente la modificación del art. 50.3 LPPV.

Sin duda las principales novedades en lo que se refiere al ingreso se refieren a la regulación de los requisitos de acceso y a las medidas de acción positiva a favor de las mujeres.

Requisitos de ingreso:

Hasta la fecha la regulación de los requisitos para ser funcionario policial se contenía en el reglamento de selección y formación de la Policía del País Vasco, y han ido cambiando cada pocos años, singularmente en lo referente a la estatura mínima y edad máxima de ingreso. Lo cierto es que el EBEP, de aplicación directa a las policías locales, y supletoria por el juego de remisiones en el caso de la Ertzaintza, fija que la edad máxima para el ingreso debe fijarse en una ley formal. Ello justifica traer a la LPPV la regulación de los requisitos de ingreso, que por otra parte, coinciden con los actualmente exigibles.

El requisito relativo a la edad máxima para el ingreso en el cuerpo policial en la categoría de agente cuando tal ingreso se realiza por el turno libre ha sido objeto de diversas controversias judiciales. Hasta la fecha hay pronunciamientos del TSJPV que avalan la exigencia de tal requisito al considerarlo justificado y proporcionado por razones de interés público prevalente de carácter organizacional, si bien han considerado que tal justificación carece de fundamento en el caso del nombramiento de funcionarios interinos de la policía local. Existe jurisprudencia española y europea que pone en cuestión la legitimidad de la imposición de una edad máxima para el ingreso en la policía por considerarla discriminatoria al no soportarse en una justificación fundada y proporcional. Sin embargo, en tales casos la justificación aducida residía exclusivamente en las exigencias físicas del trabajo policial y no en las exigencias organizativas públicas.

En el caso de la Ertzaintza se ha razonado que existen motivos adicionales determinantes que tienen que ver con el diseño en su conjunto del cuerpo y su carrera profesional, que está pensada de forma que el ingreso se produce desde la categoría inferior y la carrera profesional está pensada de forma que a lo largo de toda la vida profesional pueda ascenderse a los puestos más elevados. Además el sistema de jubilación anticipada a los 59 o 60 años mediante el pago de cotizaciones reforzadas durante toda la vida profesional está pensado sobre cálculos actuariales que toman como base el promedio de vida laboral de un funcionario que entre antes de los 35 años de edad. En cualquier caso existen procedimientos judiciales pendientes de resolver relativos a las 24 y 25 promociones que determinarán el sentido de esta reforma.

Medidas de acción positiva.

Destacan, por novedosas, las medidas de acción positiva a favor de las mujeres en procedimientos selectivos por turno libre que implicarían la preferencia de la candidata mujer frente al hombre en determinadas circunstancias, de un modo compatible con los parámetros exigibles en la jurisprudencia comunitaria europea de previsión legal, proporcionalidad y razonabilidad. En este sentido, la medida se prevé en una norma con rango de ley formal. Es razonable ya que limita su alcance al ingreso por turno libre y trata de no sólo de paliar una discriminación fáctica histórica, sino por las propias exigencias de una masa crítica de mujeres para la eficaz prestación del servicio policial.

Resulta proporcionada porque la prioridad se aplica de un modo subsidiario y restringido, garantizando siempre una cierta equivalencia de capacitación entre la candidata elegida al aplicar la prioridad y el candidato postergado. Y además se trata de una medida excepcional por su temporalidad, ya que dejará de aplicarse cuando la presencia femenina alcance el 33% en el cuerpo, escala y categoría correspondiente. Este tipo de medida no tiene como objetivo la paridad de sexos, sino alcanzar al menos una masa crítica de presencia femenina (un 33%).

La regulación legal en el nuevo art. 47 bis de medidas de acción positiva a favor de la mujer merece destacarse, puesto que trata de incorporar medidas que sirvan de modo eficaz y excepcionalmente para facilitar la incorporación de la mujer a los cuerpos de policía. En el expediente del proyecto figuran los estudios e informes que avalan esta propuesta, así como las causas de la actual infrarrepresentación femenina, que descubren una situación histórica de desigualdad primero de derecho y luego de hecho, que se pretende paliar, pero no para lograr una paridad, sino una mínima masa crítica de un 35%. La preferencia cesaría en su vigencia cuando se alcanzase tal techo.

Esta medida legal intenta recoger el sentir de los pronunciamientos judiciales que anularon la reserva del cincuenta por ciento de las plazas convocadas a mujeres en las convocatorias de ingreso libre y promoción interna dentro de la Ertzaintza, entendiéndose que se trataba de cuotas cerradas, de carácter discriminatorio, no justificadas y sin soporte en una ley formal.

La medida de acción positiva que contempla la reforma no sólo busca el soporte de una ley formal, sino que contempla una medida que debe ser justificada razonablemente con base a planes de promoción de la mujer; que es excepcional y temporal hasta alcanzar una mínima masa crítica, no la paridad; que no es aplicable más que en los procesos de ingreso por turno libre, y que no se establecen cuotas cerradas, sino una mera preferencia de la mujer sobre el hombre en un número máximo de plazas atendiendo a los planes de promoción de la mujer, siempre que exista una equivalencia de capacitación concretada en que el diferencial de puntuación no debe superar un determinado porcentaje.

Con las cautelas empleadas entendemos que la medida puede ser compatible con el Derecho comunitario europeo y con los arts. 14 y 23.2 CE, dado que cumple los requisitos de legalidad y proporcionalidad exigidos en las sentencias del TSJPV que anularon convocatorias selectivas en las que se introducían cupos cerrados o reserva de plazas a mujeres (STSJPV 55/2001, de 26-1-2011, y otras como las de fecha 12-5-2010 o 26-10-2010).

La regulación propuesta es la misma que la contemplada en el proyecto presentado ante el Parlamento Vasco la pasada legislatura y que ya fue analizada por la Comisión Jurídica Asesora. Dicha Comisión en su dictamen concluía que el legislador está facultado para tomar medidas de discriminación positiva en el acceso a los Cuerpos de Policía del País Vasco al tiempo que efectuaba alguna observación para reforzar la proporcionalidad de tales medidas.

El texto aprobado en aquel momento por el Consejo de Gobierno acogió las observaciones y precisiones que dicha Comisión Jurídica Asesora efectuó en su dictamen y es el que ahora recupera este anteproyecto.

Otras cuestiones relativas a la selección.

Se acomoda la regulación de los órganos de selección a las características de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, así como al equilibrio entre hombres y mujeres previstos con carácter general para el funcionariado. E igualmente se prevé la vinculación de las bases de las convocatorias, y los supuestos en los que puede modificarse el número de vacantes convocadas o rectificaciones de errores sin abrir otro plazo de presentación de solicitudes.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias se configura como órgano permanente de selección y se permite que, cuando se lo soliciten de forma voluntaria las entidades locales, pueda llevar a cabo los procedimientos de selección para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, incluso de forma conjunta.

Se establecen medidas de acción positiva para favorecer la entrada de mujeres en los cuerpos policiales y corregir así su escasa presencia actual. Así, se regulan los planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y carrera profesional; corregir su infrarrepresentación e incrementar la eficacia policial.

2.2.3.- Promoción y carrera profesional:

En materia de promoción interna y carrera profesional se contemplan importantes novedades.

En lo que se refiere a la promoción interna se suprime el límite de tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna, limitación que cercenaba el derecho a la carrera administrativa incluso si el funcionario o funcionaria hubiera aprobado las pruebas si no hubiese obtenido plaza.

Se prevén otras medidas que guardan relación con la promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres con la posibilidad de presentarse en los procedimientos de promoción interna de quienes estén en excedencia por cuidado de hijos o familiares, excedencia por violencia de género y servicios especiales. Igualmente se contempla que, a efectos de calcular el tiempo de servicios efectivos preciso para la promoción interna, se tenga en cuenta el periodo de disfrute de permisos de maternidad y paternidad y baja por embarazo.

Desaparece la categoría de superintendente, de modo que se agiliza la cobertura de los puestos de mando de mayor responsabilidad en la Ertzaintza por medio de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos.

Además de lo antedicho la medida de mayor impacto en lo que atañe a la promoción interna es la minoración del número de años de servicio para ascender de categoría.

Se regula la carrera profesional horizontal como la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

El sistema de carrera profesional horizontal implica la instauración de un mecanismo de reconocimiento que permite acceder a los diversos grados de desarrollo profesional previstos en cada categoría a lo largo de los años que se establezcan y mediante la acreditación de competencias profesionales. El grado de desarrollo profesional determina la percepción del complemento de carrera profesional y, en su caso, habilita para el desempeño de determinados puestos.

Como consecuencia de lo antedicho se modifica la estructura retributiva para incorporar entre las retribuciones complementarias el complemento de carrera profesional.

2.2.4.- Provisión de puestos:

En materia de provisión de puestos destaca la regulación del régimen de las especialidades en la Ertzaintza para tareas con conocimientos específicos.

El acceso a las mismas se realiza mediante la realización de un curso de especialización, pudiendo exigirse titulaciones o conocimientos concretos. La especialidad supone un compromiso de permanencia y superación pruebas de actualización para seguir en la especialidad, en su caso.

En la regulación se contempla la posibilidad de convocatorias conjuntas entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y el Departamento competente en Seguridad en las que se vincule el acceso al curso de especialización y su aprobación al otorgamiento inmediato de comisiones de servicio voluntarias en vacantes existentes con especialidad.

2.2.5.- Situaciones administrativas:

La LPPV no regulaba las situaciones administrativas, sino que las enumeraba y se remitía a la legislación general de los funcionarios a salvo de las especialidades contenidas en la propia LPPV (en segunda actividad y en suspensión de funciones, principalmente). Sin embargo, la regulación de las situaciones administrativas de los empleados públicos ha variado desde la aprobación del EBEP y el listado de la LPPV ha quedado obsoleto. Por esta razón el proyecto, en vez de enumerar las situaciones administrativas, se remite directamente a la regulación general de los funcionarios.

Se sigue optando por regular las singularidades, por lo que se modifica parcialmente la situación de suspensión de funciones, pero la reforma con mayor calado incumbe a las modulaciones del desempeño derivadas de la edad o la insuficiencia sobrevenidas de las capacidades precisas para el desempeño ordinario del conjunto de tareas propias de la función policial en consonancia con el derecho a la protección de la salud del funcionariado.

La situación de segunda actividad en la regulación precedente tenía unos perfiles que dificultaban su asunción práctica por las administraciones si se trataba de un número elevado de personas, dado que oscilaba difusamente entre la reubicación en puestos

susceptibles de desempeño por tal personal o una suerte de prejubilación al alcanzar una edad que nunca se determinó ya que planteaba problemas financieros considerables, además de las dificultades para renovar la plantilla.

Por ello la regulación propuesta parte delimita esta situación administrativa de un modo más claro: se trata de que quienes tuvieren una disminución de sus facultades y capacidades que no implique incapacidad para realizar las tareas fundamentales de la profesión policial y que por consiguiente no se le va a jubilar por incapacidad, puedan ser reubicados a puestos o funciones apropiadas a sus circunstancias.

En conclusión, en la nueva regulación desaparece la figura del funcionario a disposición de la Administración, y deja de tener sentido el pase automático por razón de la edad a dicha situación.

Ello no impide que si un funcionario o funcionaria de edad avanzada presenta una disminución de sus facultades que impida el normal ejercicio con carácter ordinario de la totalidad de sus quehaceres policiales pase a segunda actividad, o que se prevea la modulación del servicio activo por razón de la edad, es decir, una reasignación a funciones o tareas a quienes hayan alcanzado determinada edad y tengan un determinado número de años de servicio, por ejemplo, eximiéndoles de realizar con carácter ordinario determinadas labores especialmente penosas o peligrosas.

Se regula el servicio activo modulado por la edad, consistente en la continuación del servicio activo realizando tareas apropiadas a su condición; el disfrute de un régimen de jornada que no incluya el turno de noche; otras modificaciones de las condiciones de prestación del servicio pertinentes en razón de la edad, como la reducción de la jornada anual de trabajo.

Para el caso de la Ertzaintza se posibilita que el personal lo pueda solicitar a partir de los 56 años y conlleva el compromiso de jubilación voluntaria anticipada (con posible retraso si no cumple los requisitos para pensión equivalente al cien por cien de su base reguladora).

Es posible la movilidad mediante la adscripción a un puesto de trabajo de otros centros policiales que como máximo se encuentren en el entorno limítrofe de la demarcación territorial que abarque la Unidad a la que estaba destinado en las mismas condiciones de provisión en las que fue nombrado en el puesto anteriormente ocupado.

Si tal adscripción no fuera posible, transitoriamente permanecerá sin destino a disposición de la administración hasta tanto no se le asigne destino o se adapte el puesto de trabajo. En el caso de las policías locales la implantación del servicio modulado por la edad es posible siempre que se garantice la continuidad de la prestación del servicio policial, fijándose la edad por el ayuntamiento, que nunca podrá ser inferior a los sesenta años.

La nueva regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales se caracteriza por el desempeño de puestos o funciones adaptados a las capacidades reales del funcionario, a diferencia de la normativa precedente que partía del presupuesto de que en segunda actividad una persona cobraba las retribuciones

básicas a disposición de cuando le llamasen para ocupar un puesto o ejercer tareas policiales. En esta regulación el funcionario o funcionaria que pase a esta situación administrativa permanece trabajando ya sea en su puesto anterior si es susceptible de segunda actividad, ya en otro puesto susceptible de tal desempeño, y si la reubicación no fuera inmediata se adapta provisionalmente su puesto a sus necesidades.

En referencia a la situación de suspensión provisional de funciones se incorporan dos precisiones: una referente al cómputo del tiempo en suspensión provisional en la suspensión firme y la otra correlativa sobre el deber de devolver lo percibido en suspensión provisional si se eleva a definitiva.

2.2.6.- Protección social:

Se contempla un nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco, atendiendo especialmente a la obligación de las administraciones de velar por las condiciones psicofísicas del personal y la vigilancia de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales.

En materia de prevención de riesgos laborales ha existido controversia en referencia a en qué medida resultaba aplicable la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las policía, dado que el art. 3.2 de dicha ley dice que “no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de Policía, seguridad, resguardo aduanero, ni de los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública”.

En todo caso, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que “inspirará” la actuación preventiva de las actividades excluidas, puesto que, a pesar de ser una exclusión, la propia empresa deberá establecer medidas preventivas para minimizar los riesgos a los que los Policías se ven obligados a enfrentarse, y estas acciones deben inspirarse en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El asunto fue tratado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a cuyas resultas la administración estatal reguló en sendos Reales Decretos la prevención de riesgos laborales en los ámbitos de las FCSE. Por su parte en lo que se refiere a la Ertzaintza se incorporó el régimen de la prevención de riesgos laborales a los acuerdos reguladores de las condiciones laborales. En el caso de las policías locales no se ha producido adecuación normativa alguna con carácter general, razón por la cual en la actualidad existen denuncias por incumplimiento de la normativa europea sobre prevención de riesgos laborales en dicho ámbito.

Por otra parte, en el proyecto se obliga a contar con mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal para el servicio motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo.

En la actualidad la regulación de los derechos complementarios en los casos de muerte en accidente o violenta durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones, así como en los casos de incapacidad en el ejercicio de sus funciones o como

consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los Cuerpos de la Policía del País Vasco se vincula a la llamada declaración de acto de servicio cuya regulación entremezcla el régimen de las recompensas honoríficas con lo que sería propio de la protección social de los trabajadores.

La regulación de 1992 trataba de disipar los problemas derivados de la regulación precedente del reglamento de la policía vasca de 1982, cuya incompleta regulación había determinado la confusión entre conceptos diseñados para cuerpos normativos diferenciados: el accidente de trabajo como contingencia prevista en el régimen de la seguridad social aplicable a los ertzainak y la contingencia equivalente del régimen de clases pasivas del Estado vinculada al concepto de acto de servicio. Para evitar tal confusión la LPPV partía de un concepto de acto de servicio vinculado al mérito extraordinario, salvo en el caso de muerte durante el servicio. Los desarrollos reglamentarios de 2004 y de 2012 recogieron no sólo el procedimiento para el otorgamiento de la declaración de acto de servicio y sus consecuencias económicas, sino igualmente un elenco de condecoraciones que podías estar ligadas a la declaración de acto de servicio o no estarlo.

Sin embargo, los supuestos declarativos de acto de servicio no siempre tienen que corresponder a una actuación positiva y meritoria del agente. La reforma pretende dar sustantividad propia al régimen de condecoraciones y desvincular el examen de la ejemplaridad del funcionario en los casos en los que se haya producido la muerte o incapacidad permanente del funcionario de las consecuencias jurídicas y económicas de tal contingencia, viniendo a objetivarlas.

2.2.7.- Reconocimiento social:

Se contempla por primera vez en la ley el régimen de concesión de condecoraciones y recompensas honoríficas, previendo la posibilidad del ascenso honorífico sin efectos económicos a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten a funcionarios o funcionarias fallecidos en acto de servicio o jubilados.

2.2.8.- Régimen disciplinario:

Los cambios introducidos en el régimen disciplinario abarcan a nuevos tipos de infracciones (que en realidad ya se contemplaban fuera de la LPPV en otras normas); la modificación de la doximetria punitivas por infracciones leves, graves y muy graves; la régimen de prescripción y caducidad; y la regulación del modo de cumplimiento de las sanciones, permitiendo su flexibilización.

Las modificaciones previstas para el régimen disciplinario son las siguientes:

Se introducen nuevas faltas muy graves en materia de acoso sexual y acoso laboral reiterado, e infracciones al régimen de utilización de videocámaras policiales.

Se modera el elenco de sanciones a imponer. Esta minoración de la penalidad de las faltas disciplinarias en cuanto a la suspensión de funciones parte de la consideración de que una mayor severidad no redunda siempre en una mayor eficacia o efectividad de los

efectos disuasorios o preventivos de la norma. Lo cual no plantea problema de legalidad alguno, y aproxima al régimen disciplinario a las regulaciones más recientes de nuestro entorno jurídico.

Entre los criterios de graduación de la sanción se contempla el historial profesional como circunstancia atenuante, se delimita el concepto de reincidencia como agravante y en caso de faltas por delito o falta penal se valora específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales.

Se refuerzan las garantías del expedientado en cuanto a sus derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, así como a conocer el estado de tramitación del procedimiento. En cuanto al derecho de defensa se garantiza la posibilidad de contar con el asesoramiento y la asistencia de un abogado o abogada en ejercicio o de un funcionario o funcionaria del cuerpo policial de su confianza con la formación adecuada, facilitando las autoridades al funcionario designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado o expedientada.

Se regula el régimen y plazo para la caducidad del procedimiento, lo cual palia la anulación de un precepto del reglamento del régimen disciplinario por el TSJPV sobrevenida tras las últimas reformas de la LRJPAC.

Se reduce el plazo de prescripción de las faltas y sanciones muy graves de 6 a 3 años, aumentándose, por el contrario, el plazo de prescripción de las leves de 1 a 3 meses.

Se contempla la ejecutividad de las sanciones y los casos en que procede su suspensión y remisión condicional si existen motivos para ello.

La ejecución o cumplimiento de las sanciones se realiza del modo que menos perjudique al sancionado, de modo que se prevé la posibilidad de que opte por el fraccionamiento de su cumplimiento, o incluso, en caso de suspensión de funciones por un periodo inferior a los 15 días, se le ofrece la posibilidad de que solicite la remisión condicional del cumplimiento de la sanción si opta como medida alternativa de cumplimiento de la sanción por el trabajo fuera de la jornada laboral estipulada sin remuneración o compensación alguna por un periodo igual al de la sanción impuesta.

No plantea problema la regulación de determinados aspectos relativos a la ejecutividad de las sanciones y su remisión condicional, ni la devolución de los importes percibidos durante la suspensión provisional si se eleva a definitiva, así como el cómputo del tiempo de permanencia en suspensión provisional para el cumplimiento de la suspensión firme.

2.2.9.- Estructura y organización de la Ertzaintza:

En lo que atañe a la estructura profesional de la Ertzaintza destaca la desaparición de la categoría de superintendente y la adecuación a los cambios normativos y a la estructura actual de la Ertzaintza en referencia a la labor de policía judicial.

Se justifica la eliminación de la categoría de superintendente atendiendo a cómo queda la configuración de la estructura profesional en su cúspide, en la que las categorías de subcomisario, comisario, intendente y superintendente quedan abiertas a quienes ostenten la misma titulación académica universitaria.

Teniendo en cuenta que la singularización de los puestos de trabajo de superintendente no presentará la necesidad de acreditar una cualificación académica distinta al grupo de procedencia, que es lo que ordinariamente funda el sistema de promoción interna.

Por otra parte cabe considerar que se trata de puestos contados de carácter realmente directivo que requieren de la confianza propia de la libre designación, y que la consolidación de la categoría sin relación al puesto ocupado supondría una cierta esclerosis de los posibles aspirantes a ocupar tales puestos.

2.2.10.- Policías locales:

En lo que se refiere a los cuerpos de policía local la reforma trata tanto de conjugar la consolidación de estructuras profesionales homologables como permitir que cada municipio encuentre soluciones organizativas apropiadas a sus necesidades y peculiaridades.

Así, se prevén medidas diversas que dan respuesta jurídica a prácticas existentes, como la posibilidad de que la policía local actuar fuera del término municipal para ejercer funciones de protección de autoridades locales; la posibilidad de permuta de destinos entre miembros de los cuerpos de la policía local; la previsión de la existencia de agentes de movilidad o la previsión de mecanismos para facilitar la formación de los funcionarios interinos de la policía local.

Destaca el que se contemple la estructura profesional de los cuerpos de policía local de un modo similar a la Ertzaintza, y en particular, las categorías correspondientes a la jefatura de tales cuerpos policiales atendiendo a la población o el número de personas integrantes del cuerpo. Atendiendo a ello, el proyecto de ley regula la integración de los funcionarios de la policía local en las nuevas escalas, y la adaptación de los puestos de jefatura de los cuerpos de policía local.

Por un lado se unifican sus escalas y categorías con las de la Ertzaintza, lo que no quiere decir que tengan que existir todas las escalas y categorías en todos los cuerpos locales.

El proyecto fija la categoría precisa para ostentar la jefatura del cuerpo en los diversos cuerpos policiales atendiendo a la población local o al número de funcionarios del cuerpo.

De este modo se asegura que en todos los casos exista un mínimo de escalonamiento jerárquico, corrigiendo la situación actual en la que, salvo en las capitales, en el resto de municipios la cúspide de la estructura profesional y las jefaturas sería como mucho un oficial del grupo de clasificación C-1, que es en el que se integra toda la plantilla.

Por otro lado se habilita al Gobierno para establecer reglamentariamente los criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías de los cuerpos de Policía Local atendiendo a la población y características de cada localidad.

Los municipios disponen de tres años para adaptar los puestos de jefatura de las mismas a los dictados de la Ley. Una vez producida tal adecuación, quienes ocupasen puestos de jefatura del cuerpo que resulten modificados quedarán integrados en la categoría correspondiente al puesto recalificado, siempre que hayan desempeñado el mismo durante los últimos cinco años; posean el título correspondiente a dicha categoría (o los cursos de capacitación previstos en el artículo 59.2 de la Ley de Policía del País Vasco convocados o que se convoquen antes de la adaptación), y superasen un curso teórico-práctico de acreditación profesional impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias en el que se tendrá en cuenta la experiencia profesional, los cursos de especialización y capacitación realizados y los conocimientos previamente exigidos.

Si no reuniesen los requisitos citados para la integración en la categoría correspondiente al puesto reclasificado, continuarán en el desempeño del puesto rigiéndose por las condiciones por las que fueron nombrados, y percibiendo las retribuciones efectivamente asignadas al puesto de trabajo ocupado.

Por otro lado se regula en una nueva disposición adicional la permuta de destinos entre miembros de los cuerpos de policía local en servicio activo.

Se regula el régimen jurídico aplicable a los alguaciles: En aquellos municipios que no dispongan de policía local, podrán crearse plazas de alguacil (hasta 5) con un estatuto determinado, funciones legalmente definidas, reconocimiento de su carácter de agentes de la autoridad y con formación en la Academia de Policía y Emergencias. La ley prevé la integración de los actuales alguaciles o vigilantes en esta figura, así como si el municipio decidiera crear un cuerpo de policía su integración en el mismo.

Se contempla la figura de los Agentes de Movilidad en los mismos términos que en la LOPFCS como cuerpo funcional dedicado a la vigilancia del tráfico, distinto del cuerpo de policía local, y que facilita centrar a los efectivos policiales en tareas de policía de seguridad.

En referencia a la figura del funcionario interino en la policía local el proyecto posibilita un mecanismo para la formación de quienes vayan a ser nombrados como tales con la creación de bolsas de empleo con personas formadas por la AVPE.

La figura del funcionario interino en la policía local ha existido siempre, aún con polémica. En la actualidad hay más de 300 interinos en la policía local, muchos responden a sustituciones de funcionarios de carrera y otros a nombramientos para complementar tareas o funciones con carácter estacional o ante circunstancias concretas que requieren de refuerzo. El Tribunal Supremo hace pocos años se pronunció con rotundidad sobre la posibilidad de esta figura y así lo hizo también el TSJPV. No obstante, alguna sentencia reciente de este último Tribunal varía sus pronunciamientos anteriores entendiendo que sobre las previsiones de la LPPV y la LFPV se impone el criterio de la ley básica estatal constituida por el EBEP, el cual determina que se reservan a funcionarios de carrera los puestos que supongan ejercicio de autoridad, lo cual a su juicio inhabilitaría el nombramiento de interinos en la policía local. Tal tesis,

por su rotundidad, debe ser puesta en cuestión, ya que el EBEP no innova en este aspecto lo que ya decía la LBRL desde mucho antes de sentar doctrina el Tribunal Supremo en el sentido de considerar posible el nombramiento de interinos en la policía local. Por lo demás en coherencia con el argumento del TSJPV el mismo llevaría a la prohibición de cualquier tipo de interinaje en las funciones de asesoramiento jurídico, gestión contable o de tesorería, etc. tanto en el ámbito local como en el autonómico o estatal, lo cual debería implicar el cese inmediato de no ya 360 policías locales, sino de miles y miles de funcionarios interinos, paralizando las administraciones públicas hasta tanto no se produjese el nombramiento de funcionarios de carrera para dicha plazas.

2.2.11.- Habilitación de la delegación legislativa:

La delegación legislativa se contempla en el art. 52.2 de la Ley de Gobierno, en el que al igual que en el art. 82 de la Constitución se contempla que el Parlamento Vasco podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, llamadas decretos legislativos, salvo en una serie de materias, entre las cuales no se encuentra las que ocupan a este anteproyecto.

Se distinguen dos modalidades de delegación legislativa: (i) mediante una ley de bases cuando su objeto sea la elaboración de textos articulados; (ii) mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno. La labor refundidora también aporta un contenido innovador, dado que en cualquier caso supone un juicio de fondo sobre la interpretación sistemática de los preceptos refundidos, sobre todo si la delegación incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos

lagunas, dado que implica la depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas en la regulación precedente, para lograr así que el Texto Refundido resulte coherente y sistemático» (STC 166/2007, de 4 de julio, FJ 8).

La premisa de la delegación para elaborar un texto refundido es que existan varios textos legales a refundir, razón por la cual a veces se ha considerado que carece de sentido la refundición cuando se trata de una mera modificación de una norma precedente, pues sus preceptos se integran en la norma modificada.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante la quinta modificación de una misma norma, siendo algunas de las modificaciones precedentes contenidas en leyes de presupuestos o en leyes con contenidos más amplios que la LPPV, como sucede con la ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi. Como resultado de la norma aprobada en 1992 poco es reconocible en la actualmente vigente y en la que quede tras la presente modificación. Por lo cual se entiende que se dan los presupuestos de la delegación legislativa.

Igualmente parece adecuado optar por la fórmula de la delegación legislativa más amplia (que incluye también las tareas de regularizar, aclarar y armonizar) frente a la ceñida a la autorización del Parlamento al Gobierno para la integración de varias normas legales en un texto, permitiendo únicamente reenumerar los artículos, capítulos y disposiciones que fueran necesarias, así como adecuar las remisiones internas de las leyes objeto de refundición a la nueva numeración.

Esta observación tiene sentido especialmente en lo que atañe a la versión en euskera de la ley vigente, como en otras ocasiones ha apuntado la Comisión Jurídica Asesora, al comprobar las necesidades que han surgido como consecuencia del proceso de actualización experimentado por el euskera en su léxico común, técnico y jurídico que, en ocasiones, hace aconsejable homogeneizar la terminología de normas dictadas en periodos de tiempo distantes para subsanar posibles incoherencias en el resultado final que afectan negativamente al principio de seguridad jurídica.

Por lo demás la cláusula de habilitación respeta las exigencias previstas para la misma: a) se otorga al Gobierno de forma expresa; b) se otorga para materia concreta (no excluida de la posibilidad de delegación legislativa) y con expresa indicación del plazo para su ejercicio, y c) se delimita con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa.

2.3.- TÉCNICA LEGISLATIVA

El proyecto es conforme a lo dispuesto en las directrices dictadas por Consejo de Gobierno para la elaboración de disposiciones de carácter general, y a grandes rasgos con las Instrucciones del Lehendakari de 18 de marzo de 1994 para erradicar el lenguaje sexista en las disposiciones normativas y documentos administrativos, así como en la información y divulgación de la acción institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Según las Directrices referidas el título de la norma modificativa explicitará su carácter de tal. Asimismo, no constará la fecha y el número de las Leyes o Decretos modificados, ni los artículos, secciones o capítulos modificados. Toda disposición que contenga una novedad requiere su formulación en un artículo independiente, y no en un apartado de otro ya existente.

Como regla general, las normas modificativas usarán el estilo de regulación (dar nueva redacción a las disposiciones modificadas) excepto en los casos de sustitución de palabras aisladas, de cambio reiterado de las mismas expresiones, de alteración de cantidades y de otras análogos que se usará el estilo de modificación (sustituir algunas palabras sin dar nueva redacción).

El texto marco y el texto de regulación deben ir separados perfectamente: El texto marco: indicará con absoluta claridad los datos de la parte que se modifica (las normas, los capítulos, artículos, párrafos y letras objeto de modificación) y expresará el tipo de modificación que sea (nueva redacción, adición, derogación). El texto de regulación: irá entre comillas colocadas al principio y al final del mismo y en un párrafo independiente de manera que se perciba a simple vista cuál es la nueva regulación. y se utilizarán recursos tipográficos como por ejemplo el sangrado de márgenes o un tipo de letra distinto.

Cuando haya que añadir nuevos artículos se mantendrá siempre la numeración del articulado originario a fin de no alterar el juego de remisiones que se hubiera podido hacer al mismo por otras disposiciones. Los artículos adicionados recibirán el número

del artículo tras el que se sitúen seguido del adverbio numeral latino que por orden corresponda (bis, ter, quáter, etc). Esta regla se aplicará con independencia del número de artículos de que conste la norma modificada y del lugar que en la misma vayan a ocupar los nuevos artículos, incluyendo, por tanto, los supuestos de adición a disposiciones de artículo único.

En Vitoria-Gasteiz, 8 de julio de 2015.

Eugenio Artetxe Palomar
Director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales



EUSKAL HERRIKO POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETARAKO LEGE-AURREPROIEKTUAREN TXOSTEN JURIDIKOA

Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzak txosten hau egin du, indarrean dagoen Dekretuak, Segurtasun Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoak, xedatutakoari eta abenduaren 22ko 8/2003 Legeak, xedapen orokorrak egiteko prozedurarenak, xedatutakoari jarraikiz.

1.- AURREKARIAK

Herrizaingoko sailburuak agindu zuen Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea bosgarrenez aldatzeko lege-proiektu bat egiteko, izapidetzeko eta Gobernu Kontseiluari aurkezteko prozedurari hasiera ematea, Eusko Jaurlaritzak oraingo legegintzaldirako egindako legegintza-egutegian aurreikusitakoaren arabera.

Aztertutako lege-proiektuaren helburua da EHPL partzialki aldatzea, EAEko herri-administrazioen mendeko polizia-kidegoetako langileen berariazko araubidean eragina duten aldaketa zehatz batzuk sartzeko. Halaber, Gobernua gaitu nahi du, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testuategia onetsi dezan.

Euskal Herriko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legeak (aurrerantzean EHPL) aldaketa asko izan ditu Ertzaintzako funtzionarioen ordainsarien araubidean, Ertzaintzako langileen ordezkartzean edo funtzionarioen sailkapen-taldeetan. Euskadiko segurtasun publikoaren sistema arautzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legeak bosgarren aldiz aldatu du EHPL, eta erregulatu gabe utzi ditu segurtasun publiko osoan eragina zuten alderdiak, esate baterako, Poliziaren eta Larrialdietako Zerbitzuen Euskal Ikastegiaren araubidea edota poliziaren azpi-sistemari edo herritarren segurtasunari buruzko beste zenbait alderdi; udaltzaingoak koordinatzeko eskumenari edo polizia-lankidetzarako mekanismoei buruzkoak, adibidez. Izan ere, antolaketa edo harreman aldetik komeni zen alderdi horiek Euskadiko segurtasun publikoaren sistema arautzeko legean jasotzea. Horrenbestez, Euskal Herriko Polizia-kidegoetako langileen estatutu-araubide zehatzarekin loturiko edukiak jasotzen ditu funtsean Euskal Herriko Poliziari buruzko Legeak

Lege honek EHPL bosgarren aldiz aldatu nahi du, hainbat arrazoiengatik: Estatuko edo autonomia-erkidegoko beste lege batzuen eragina; Indarrean dagoen legedia eta interpretatzen duten erabaki judizialak aplikatzerakoan pilatutako esperientzia; Ertzaintza modernizatzeko proiektuen testuingurua; azken urteotan Eudelekin (Euskadiko Udalen Elkarteak) sinatutako lankidetzak-hitzarmeneko lantaldeetan burututako lanen emaitza, etab.



2.- EDUKIA

1. "II. kapitulua.- Poliziaren jarduna kontrolatzeko mekanismoak. (6-14. artikulua)
2. Ertzaintzaren Kontseilua: 17. artikuluko d) letra aldatzen da (jarduera diziiplina-araubidearen aplikazioari dagokionez)
3. Ertzaintzaren Kontseilua: 17. artikuluko d) letra (jarduera ohorezko aintzatespenen araubidearen aplikazioari dagokionez)
4. Udaltzaingoa: 4. lerrokada berria eranstean zaio 27. artikuluari (toki-agintariak babesteko lanak udal-mugartetik kanpo)
5. Kode deontologikoa: 2. lerrokada berria eranstean zaio 28. artikuluari (poliziaren kode etiko europarra barneratzea)
6. Kode deontologikoa: (30. artikuluko 3. lerrokada kentzen da) Bere edukia 30 bis artikuluan jarriko da.
7. Kode deontologikoa: 30 bis artikulua berria (herritarrekiko harremanak gizarte elebidun eta anitzean)
8. Prestakuntza: 40. artikulua: titulu akademikoen baliokidetasunak eskatzea eta ikasgaiak baliozkotzea
9. Espezialitateak: 43. artikulua.
10. Hautaketa: deialdiak. Ikasgai-zerrendari zehar-esana.
11. Deialdiko oinarriekin lotura: 5. lerrokada berria eranstean zaio 47. artikuluari.
12. Gizon eta emakumeen oreka sustatzeko neurriak: 47 BIS artikulua berria.
13. Hautaketa eta sarrera: Hautaketa-organoak: 48. artikulua
14. Hautaketa eta sarrera: Akademiaren esku uzten ditu Udaltzaingoen hautaketa-prozesuak. Deialdiak batera egiteko aukera: 2. lerrokada eranstean zaio 50. artikuluari.
15. Hautaketa eta sarrera: eskakizunak. 55 bis artikulua berria
16. Hautaketa eta sarrera: Superintendentei egiten zaien aipamena kentzea: 56. artikuluko 4. lerrokada.
17. Barne-sustapena: Mailaz igotzeko zerbitzu-urteak gutxitzea.
18. Barne-sustapena: laneko bizitza eta familia-bizitza uztartzea. Seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzia eta genero-indarkeriagatik hartutako eszedentzia zerbitzu aktiboarekin parekatzen da. 59. artikuluen 3. lerrokada.
19. Barne-sustapena: laneko bizitza eta familia-bizitza uztartzea. Benetako zerbitzutzat hartzea. 59. artikuluen 4. lerrokada.
20. Funtzionarioaren izaera galtzea: funtzionarioen araubide orokorrera bidaltze-oharra; 61. artikuluen 1. lerrokada.
21. Funtzionarioaren izaera galtzea: erretiroa: funtzionarioen araubide orokorrera bidaltze-oharra. 62. artikulua
22. Lanpostuak betetzea: maila pertsonalaren aipamena kendu eta lanbide-garapenaren mailagatik ordezkatzeko. 65. artikuluen 2. lerrokada.
23. Espezialitadedun lanpostuak betetzea. 65 bis artikulua berria.
24. Bigarren jarduerarako ezarrita dauden lanpostuak betetzea: lehentasuna (ezintasun iraunkor osoa dutenen lehentasunari eginiko aipamena kentzen da, erretiratuta baitaude). 66. artikulua
25. Bigarren jarduerarako ezarrita dauden lanpostuak betetzea: zerbitzu aktiboan lekualdatutako funtzionarioa enkaitzeko aurreikuspena kentzen da eta bigarren jarduerarako funtzionarioa jarri: Kendu egiten da 70. artikuluen 5. lerrokada.



26. Lanpostuak betetzea: lanpostua aldi baterako betetzea: maila pertsonalari egindako aipamena kentzen da. 71. artikulua 3. lerrokada.
27. II bis kapitulua.- Lanbide-karrera. (73 bis eta ter artikulua)
28. Ordainsarien araubidea: Espezialitatedun araubide orokorrera bidaltze-oharra. 74. artikulua 1. lerrokada:
29. Ordainsarien araubidea: superintendenteari egiten zaion aipamena kentzen da: 74. artikulua 1. lerrokadako a) letra.
- 30.- Ordainsarien araubidea: Lanbide-karreraren osagarria. a) bis letra berria eranstean zaio 74. artikulua 1. lerrokadari.
31. Batera ezintasunak: euskal administrazioetako funtzionarioen araubideari bidaltze-oharra: 78. artikulua 2. lerrokada.
32. "V. kapitulua.- Osasuna eta Gizarte-babesa. (79. eta 79 bis artikulua)
33. V. Bis kapitulua.- Kondekorazioak eta aintzatespenak.
34. Administrazio-egoerak: espezialitatedun funtzionarioen araubide orokorrari bidaltze-oharra. 81. artikulua
35. 84. artikulua 5. lerrokada berria behin-behinean gabetzen da.
36. 84. artikulua 6. lerrokada berria behin-behinean gabetzen da.
37. Adinagatik baldintzatutako zerbitzu aktiboa: 85. artikulua
38. Bigarren jardura: 86. artikulua
38. Adinaren edo behin-behinean destinorik gabe dagoen bigarren jardueraren arabera zerbitzua. Bermeak: 87. artikulua
40. Destinorik gabeko bigarren jardura: Kendu egiten da 88. artikulua.
41. Diziiplina-araubidea: zehapenak: 92. artikulua 2. lerrokadako b), d) , g), k) eta l) letrak aldatzen dira
42. Diziiplina-araubidea: Arau-haustea: bi letra berri —I bis) eta I ter)— eranstean zaizkio 92. artikulua 2. lerrokadari.
43. Diziiplina-araubidea: zehapenak: 93. artikulua
44. Diziiplina-araubidea: faltak eta zehapenak neurtzeko irizpideak: 94. artikulua
45. Diziiplina-araubidea: espedientepean dagoen pertsonaren eskubideak 95. artikulua 2 bis lerrokada berria eranstean zaio.
46. Diziiplina-araubidea: espedientepean dagoen pertsonaren eskubideak 95. artikulua 2 ter lerrokada berria eranstean zaio.
47. Iraungipena: 95. artikulua 5. lerrokada.
48. Falten preskripzioa: 97. artikulua 2. lerrokada.
49. Zehapenen preskripzioa: 97. artikulua 3. lerrokada
50. Zehapenak betearaztea: 97 bis artikulua berria,
51. Zehapenak betearaztea: 97.ter artikulua berria,
52. Ertzaintzaren hauteskundeak: Hautesleen izaera: bitartekoei egiten zaion aipamena kentzen da: 99. artikulua 3. lerrokada.
53. Ertzaintzako eskalak eta kategoriak: superintendentei egiten zaion aipamena kentzen da. 105. artikulua
54. Ertzaintza: "hirugarren atala - polizia judiziala". Doitu egiten da eguneratzeko
55. Aguazilak: 117. artikulua
56. Udaltzaingoko eskalak eta kategoriak: 118. artikulua
57. Udaltzaingoaren eskalak eta kategoriak. Burutzak. 119. artikulua
58. Aldi baterako beharrak betetzeko mekanismoak: udalerrien arteko lankidetzak, Ertzaintzaren laguntza. Bitarteko funtzionarioen prestakuntza. 120. artikulua
59. " III. kapitulua- Mugikortasun-agentekak",



60. Bigarren jarduera udaltzaingoan: Hogeigarren xedapen gehigarri berria
 61. Trukatzea udaltzaingoan: hogeigarren xedapen gehigarri berria
 62. Erretirodun funtzionarioak: Hogeita bigarren xedapen gehigarri berria
 63. Zerbitzu aktiboan jazotako gertaerengatik epaiketara joatea, hogeita hirugarren xedapen gehigarri berria
 64. Hauek guztiak kentzen dira: hirugarren xedapen gehigarria, zortzigarrena, hamabigarrenaren lehenengo eta hirugarren atala, eta hamaseigarrena, bai eta xedapen iragankorretatik, lehena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, zazpigarrena, zortzigarrena, bederatzigarrena, hamargarrena, hamaikagarrena eta hamabigarrena ere.
 65. Ertzaintzaren aldizkariari aipamena
 66. Aipamenak "Euskal Herriko poliziaren akademiari" eta "'Herrizaingo Sailari" edo bere organoei.
- Lehen xedapen iragankorra.- Martxan dauden hautaketa-prozesuak eta lanpostuak betetzeko prozesuak.
- Bigarren xedapen iragankorra.- Kondekorazio-erregimena eta zerbitzu-ekintza.
- Hirugarren xedapen iragankorra.- Diziiplina-espedienteak.
- Laugarren xedapen iragankorra.- superintendentearen kategoria desagertuko da.
- Bosgarren xedapen gehigarria.- Udaltzaingoko funtzionarioak goi-mailako eskalan sartzea.
- Seigarren xedapen gehigarria.- Udaltzaingoaren burutza-lanpostuak egokitzea.
- Zazpigarren xedapen iragankorra.- Aguazilak.
- Zortzigarren xedapen iragankorra.- Aguazilak udaltzaingoan sartzea.
- Azken xedapenetatik lehenengoa. - Testuategina egiteko gaitzea
- Bigarren azken xedapena.- Indarrean jartzea

2.- PROIEKTUAREN EDUKIARI BURUZKO OHARPENAK

2.1.- ESKUMENA

a) Eskumen-gaitasuna

Aurreproiektuak lantzen duen gaia arautzeki dagokionez, ez dago autonomia-erkidegoaren eskumenari buruzko zalantzarik: EHAren 17. artikulua eskumena esleitzen dio "Autonomia Erkidegoko poliziaren araubidea" antolatzeke, horrenbestez eguneratzen da foru-araubidea, Konstituzioaren xedapen gehigarrietako lehenengoan aurreikusi bezala. Gaitasuna aitortzen duen titulu horri erantsi behar zaio funtzionario publikoen araubidearen garapeneri buruzko titulua, EHAren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Gogoeta horietan sakontzeko premiarik ez dago, lege horren laugarren aldaketa baita eta jurisprudentzia ugari baitago, baita Aholku Batzorde Juridikoaren doktrina oparoa ere.

Horretarako, nahikoa dugu Aholku Batzorde Juridikoaren irizpen batzuk adierazten duten bidea jarraitzearekin, EHPLren urreko erreformei buruzko 120/2007 edo 67/200 irizpenek esandakoa, esaterako.



EHAren 17. artikuluan xedatutakoa garatzeko onetsi zuen Eusko Legebiltzarrak EHPL, Euskal Herriko polizien estatutu-araubidea arautzen duena, Autonomia Erkidegoko funtzionarioen araubide orokorretik ahalik eta hurbilen, beharrezko berezitasunei kalterik gabe (Zioen Adierazpena), eta azken xedapenetako lehenengoan honela dio: “Ertzaintzako eta Udaltzaingoko funtzionarioak, bere estatutu araubideari dagokionean, Euskal Funtzio Publikoaren legedi orokorrean ezarritakoaren arabera araupetuko dira osagarri moduan”.

Gogoan izan behar da berariazko estatutua –funtzionarioen araubide orokorretik berezia– eratzeko premia datorrela polizien eginkizunaren ezaugarri berezien ondorioz; izan ere, Konstituzioaren 104.1 artikulua adierazten du haien xedea dela “eskubide eta askatasunen egikaritza askea babestea eta herritarren segurtasuna bermatzea”, eta, Konstituzioaren 104.2 artikulua agintzen du Lege Organiko batek zehaztu behar dituela Segurtasun Indar eta Kidegoen eginkizunak, jarduteko oinarritzko printzipioak, eta estatutuak.

Agindu hori bete du martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoak, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoak (aurrerantzean SIKLO); hizpide dugun alorrean konstituzionaltasunaren blokea osatzen du. Gainera, kontuan hartu behar da azken xedapenetako lehenengoan baztertzen duela Euskal Herriko Polizia Autonomoari aplikatzeko aukera, 5., 6., 7. eta 8. artikuluetan adierazitako arau orokorrak eta oinarritzkoak, jarduerari eta estatutuari buruzkoak, izan ezik.

Bistakoa da dagokigun auzian estatuak ez diola mugarik jartzen autonomia-erkidegoaren arautzeko gaitasunari, oinarritzko aurreikuspen orientatzailea salbu. Aurreikuspen horren arabera, kategoria bakoitzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeko, aintzat hartuko dira meritua, gaitasuna eta antzintasuna, dagokion araudian xedatutakoari jarraikiz (6.6 artikulua, SIKLO).

Bestalde, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarritzko Estatutuarenak, funtzionarioen estatutu-araubiderako oinarritzkoa denak, Konstituzioaren 149.1.18 artikulua babesean, bere eragin-eremutik kanpo uzten ditu Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideak, eta adierazten du Lege horretan xedatutakoak aplikatuko zaizkiela soilik haien berariazko legediak hala xedatuz gero (4. artikulua).

Horrek guztiak esan nahi du autonomia-erkidegoko legeak zehatz ditzakeela Ertzaintza arautzeko estatutu bereziaren ezaugarriak, eta, zehazki, autonomia-erkidegoko poliziaren barne-egitura antola dezakeela, Estatuan gutxieneko berdintasuna bermatzeko ezarritako oinarritzko arauak edo arau erkideak jarraitzeko obligaziorik gabe.

Aukera-askatasun horrek, jakina, ez du esan nahi mugarik ez dagoenik; esate baterako, Konstituzioak aitortutako funtsezko eskubideetatik ondorioztatzen direnak, bereziki 14. artikuluko legearen aurreko berdintasuna, Konstituzioaren 23.2 artikulua aitortutako eskubidea zehazten duena, funtzio publikoan sartzeari dagokionez.

Bestalde, udaltzaingoetako funtzionarioen kasuan, erantzunak ñabartuagoa izan behar du, udaltzaingoak toki-araubideko elementu gisa duen garrantzia aintzat hartuta.



Horrenbestez, ezin da baztertu Konstituzioaren 149.1.18. artikuluan xedatutakoa eskumen-banaketa hori egiteko titulu izatea, EHAEn 10.4 artikuluari dagokionez.

Apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onesten duenak (EPOE), ez ditu polizia-funtzionarioak barne hartzen. Hala ere, 3.2 artikuluan aurreikusten du udaltzaingo-kidegoak ere estatutu horren arabera eta autonomia-erkidegoetako legediaren arabera arautzea, SIKLOn haientzat xedatutakoa salbu.

Horrenbestez, estatu-eskumena eremu horretan sartzen da, udaltzaingoen araubidearen oinarriak onesteko, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluen arabera, eta autonomia-erkidegoari dagokio oinarriak garatzea, EHAEn 10.4 artikuluari jarraikiz.

Dena dela, esan behar da, lanpostuak hornitzearen eta mugikortasunaren kontuetan EPOEn adierazitako aurreikuspenek ondorioak izango dituztela soilik EPOE garatzeko emandako Funtzio Publikoaren legeak indarrean jarri ostean (azken xedapenetako 4.2).

Horrenbestez, ordura bitartean, tokiko araubidean jasotako oinarriak aplikatu behar dira [apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak (aurrerantzean TAOL), azken xedapenetako hirugarrenean agindutakoa; eta toki-araubidearen arloan indarrean diren xedapenen testu bateginak (aurrerantzean TATB), apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsiak, aldi baterako xedapenetako laugarrenaren bidez agindutakoa]. Oinarri horiek EHPLren bitartez garatu dira EAEn, eta lege hori aplikatu behar da udaltzaingo-kidegoetan (EHPLren 2.b artikulua).

b) Ekimenaren maila eta sustatzailearen gaitasuna:

Lege-maila izan behar du, polizia-kidegoetako langileen funtzionario-estatutuaren oinarrizko alderdiak arautu ahal izateko, eremu horretan lege-erreserba baitago. Konstituzioaren 103.3 artikuluan xedatutako lege-erreserbak autonomia-erkidegoko legegilea behartzen du, baita Konstituzioaren 23.2 artikuluen edukiak ere, sarrera-baldintzak arautzean "legeek ezartzen dituzten" betekizunen arabera izan behar dutela adierazten baitu. Bereziki lege-mailako beste arau batzuetan partzialki araututako alderdiak badira (hala nola Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea).

Eusko Jaurlaritzako jardura-eremuen banaketa kontuan hartuta, eta EHPLn bertan eta sail horren egitura organikoa zehazten duen dekretuan xedatutakoari erreparatuta, Segurtasun Sailak ekimenaren sustatzaile izateko gaitasuna du, zalantzarik gabe.

c) Ondorioa:

Aurreko kontsiderazioei erreparatuta, Euskal Autonomia Erkidegoak aztergai dugun arauketari ekiteko eskumena duela irizten dugu; batik bat kontuan hartzen badugu EHAEn 17. artikuluan jasotako eskumen-titulua, "gizakien eta ondasunen babeserako eta herri-bakea zaintzeko Autonomia Erkidegoko poliziaren araubidea" ezartzeko eskuduntza ematen duena, Konstituzioaren xedapen gehigarrietako lehenengoan aurreikusitako foru-araubidearen eguneratze-prozesuaren esparruan, eskuduntza ematen



duten beste titulu batzuen kalterik gabe, hala nola EHAE beraren 10.2 artikulua eta, bereziki, 10.4 artikulua.

Arauketa horretarako muga, Ertzaintzari dagokionez, funtzio publiko guztian eragina duten printzipio orokorrak eta eskubide konstituzionalak dira; esate baterako berdintasunaren, merituen eta gaitasunaren printzipioak, eta SIKLOren 5., 6., 7. eta 8. artikuluetan adierazitako arau orokorrak. Horrenbestez, autonomia-erkidegoko araugileak aukera ugari ditu, EPOE ere ez baitu zuzenean aplikatu behar.

Bestelako kontua da autonomia-erkidegoko legegileak berak poliziako funtzionarioen estatutua beste funtzionarioen estatuarekin berdintzea erabakitzen badu, eta gai jakinetan zuzenean aplikatzea erabakitzen badu, esaterako administrazio-egoeretan, eskubide eta betebeharretan edo ordainsarrietan, edo oro har, horren ordeztu aplikatu daitezkeela ezartzen badu.

Udaltzaingoetako funtzionarioen kasuan ere, EAEko legegileak aukera asko ditu bere esku; hala ere, kasu horretan EPOEren 3.2 artikulua adierazten du estatutu horretan adierazitakoari eta autonomia-erkidegoetako legedietan xedatutakoari jarraitu behar diotela.

2.2.- PROIEKTUAREN AZTERKETA

Eskumenen azterketa hori egin ostean, atera daitezkeen ondorioak da proiektuak ez duela arazorik sortzen legeen eta Konstituzioaren aldetik, esparru juridikoan txertatzeari dagokionez.

Berrikuste juridikoa analitikoki egituratuko dugu, gaien arabera, aldaketen zerrendan ageri den ordena zehatz-mehatz jarraitu gabe; eta, aldi berean, memorietan erruz aztertutako planteamenduak ez errepikatzeko ahalegina egingo dugu.

2.2.1.- Kontuak emateko mekanismoak.

Kapitulu berri bat sartuko da, polizia-jardueraren kontuak emateko mekanismoak arautzeari buruzkoa, herritarren aurrean beren jardueren egokitasun eta eraginkortasunari buruz erantzuteko. Horrez gain, administrazio-jarduera osoarentzako lehendik dauden kontrol jurisdikzionalerako mekanismoak eta Legebiltzar kontrolerako mekanismoak hartu behar dira kontuan. Horien xedea da poliziek herritarrei ematen dieten zerbitzua hobetzea, polizia-zerbitzuaren estandarrak eraginkortasunez eta efikaziaz eta aurrez ezarrita dauden legeak eta prozedurak errespetatuz betetzen direla bermatzeko.

Kontuak emateko mekanismoak eta administrazio-gardentasunerako mekanismoak indartzeko, elkarrekiko erlazioa duten elementuak integratu behar dira, honako hauek, adibidez: zerbitzuen efikazia eta eraginkortasuna ikuskatu eta gainbegiratu; polizia-jardunbide egokia modu positiboan suspertzeko sistema indartu (ordainsariaren pizgarriak, hala nola, produkzio-osagarri jakinak, jardunaren ebaluazioarekin lotutako

lanbide-karrerako osagarriak, aparteko haborokinak edo kondekorazio eta sarien sistema); barneko diziiplina-mekanismoak ezarri, eraginkorrak, zentzuzkoak, egokiak eta zuzenak diziiplina faltari buruzko kasu partikularrak ikertzeaz gain arrisku-alderdiak eta segurtasun-ereduak aztertuko dituztenak, prestakuntza, prozedurak edo laneko giroa hobetzeko orientabidea eskaintzeko eta herritar eta poliziaren arteko nahitaezko elkarrekintza indartzeko. Xede hori lortzeko kexen tratamendurako mekanismoak bermatuko dira, polizia-zerbitzuarekiko independenteak herritarrengan fidagarritasuna eragingo dutenak, kexak neutral eta modu ez korporatiboan landuz.

Segurtasun publikoa hobetzeko sistemaren bidez kexak jaso eta landuz, herritarrekiko erlazio-mekanismoak indartzeaz gain, aipatutako azken ildo estrategikoa sendotzeko, erakunde hibrido iraunkor bat sortu da, polizia-erakundearekiko autonomia funtzionala duena eta pertsona espezializatuak osatutakoa. Baina era berean, poliziako kide guztiak barne hartzen ditu, herritarrengan konfiantza sortzeko, baina polizien kolektiboan ere gaitzespenik eragin ez dezan.

Batzordeak eginkizun hauek izango ditu: poliziaren esku-hartzeak zuzenean edo zeharka pertsona baten heriotza edo lesio larriak eragiten lagundu ahal izan duenean, istilu horiek ofizioz ikertzea; poliziaren beste edozein jokabide edo jardun ere ikertzea Saileko titullarrak eskatuta, baldin eta haiei buruz herritarren konfiantzan izandako inpaktuaz kezka larria adierazten duten kexak jaso badira; eta, orobat, berrikustea nola funtzionatzen duen zerbitzu polizialari buruzko kexen tratamenduak.

Batzorde horren erregulazioak batzordekideen neutraltasuna eta independentzia babesten ditu, kideok kargugabetzeko kausak era tasatuan arautuz, ez daitezen zerbitzutik bereizi arbitrarioki, ikerketa bat gauzatzen ari denean. Batzordeari laguntzeko obligazioa jasotzen da, bi aukera emanez: funtzionario publikoek laguntzea, zerbitzu-eginkizunetan, batzordea ikerketak egiten ari denean; edo Ertzaintzaren Barne Arazoetarako Zerbitzuari eskatzea berak egin dezala ikerketa, eta Batzordeak zuzenean gainbegiratzea. Gainera, batzordeak bere jardueraren gaineko kontuak Eusko Legebiltzarrari zuzenean ematea ere aurreikusten da.

Ildo horretan, Poliziaren Etikaren Kode Europarraren edukiaren aplikagarritasunari berariazko aipamena egiten zaio. Kode horrek polizia-funtzionarioen jokabide-jarraibideak ez ezik, polizia-agintarienak ere finkatzen baititu, ez bakarrik herritarrekiko harremanetan, baita zerbitzuen barruko antolakundeari dagokionez ere, eta, horretarako, jarraibideak ezartzen ditu, kontuak emateari buruzko atalean aztertutakoari jarraituz.

2.2.2.- Hautaketa eta sarrera:

Aldaketa batzuek sarrera-prozedura modernizatzeko joera dute, EPOEn enplegatu publiko guztietara hedatutako arauak txertatzearen bidez; esate baterako hautaketa-organoen osaera, eta haien inpartzialtasuna, profesionaltasuna eta berezitasuna. Hautaketa-organo horien osaerari dagokionez, emakumeen eta gizonen ordezkapen orekatuak behar dira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako legearen ondorioz.



EPOEn aurreikusitako beste arau batzuk hartzen dira; esate baterako, Euskal Herriko Polizia eta Larrialdi Ikastegia izendatzea Ertzaintzako hautaketa-prozesuetan espezializatutako hautaketa-organo iraunkorra izateko, baita tokiko administrazioek eskatutako prozesuetan ere. Gai horri heltzen dio, halaber, EHPLren 50.3 artikulua aldaketak.

Zalantzarik gabe, sarrerari buruzko berrikuntza nagusienak dira sarrera-baldintzen arautzea eta emakumeen aldeko ekintza positiborako neurriak.

Sartzeko baldintzak:

Orain arte, polizia-funtzionarioa izateko baldintzak Euskal Herriko Poliziaren hautaketarako eta prestakuntzarako araudian jasota zeuden, eta urte gutxi batzuk igaro orduko aldatzen zen, sartzeko gutxieneko garaierari eta gehieneko adinari dagokienez. Kontua da EPOEk –udaltzaingoei zuzenean aplikatu beharrekoa, eta Ertzaintzaren kasuan gehigarria dena, aipamenak direla-eta– xedatzen duela sartzeko gehieneko adina lege formal baten bidez finkatu behar dela. Horrenbestez justifikatzen da sarrera-baldintzak EHPLn arautzea. Bestalde, baldintza horiek bat datoz gaur egun eska daitezkeenekin.

Agente-kategorian polizia-kidegora sartzeko gehieneko adinari buruzko baldintzak eztabaida judizialak sortu ditu, sarrera txanda libre bidez burutzen denean. Orain arte, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako erabaki batzuk baldintza hori eskatzea bermatzen dute, arrazoizko eta zentzuzkotzat hartzen baitute, antolamendu-arloko lehentasunezko interes publikoarengatik. Dena den, arrazoi horrek ez duela oinarririk uste dute udaltzaingoaren bitarteko funtzionarioen izendapenen kasuan. Polizian sartzeko gehieneko adina ezartzearen legezkotasuna zalantzan jartzen duten Espainiako eta Europako jurisprudentzia badago, baztertzailea dela uste dutelako ez baita arrazoi sendo eta zentzuzkoan oinarritzen. Hala ere, horrelakoetan, ematen zen arrazoia polizia-lanaren eskakizun fisiko hutsa zen, eta ez antolamendu-eskakizun publikoak.

Ertzaintzan gehieneko adina ezartzeko arrazoi gehigarri baldintzatzaileak daude, kidego osoaren diseinuarekin eta lanbide-karrerarekin zerikusia dutenak. Izan ere, kidegora beheko kategoriatik sartzeko diseinatuta dago, eta lanbide-karrera, aldiz lanbide-bizi osoan zehar goreneko lanpostuetara heldu ahal izateko pentsatuta dago. Gainera, lanbide-bizitza osoan indartutako kotizazio-ordainketen bidez 59 edo 60 urterekin erretiro aurreratua hartzeko sistema kalkulu aktuarialekin oinarritzen da, 35 urte bete aurretik sartzen den funtzionarioaren batez besteko lan-bizitzan oinarrituta. Nolanahi ere, ebatzi gabeko prozedura judizialak daude, 24 eta 25. promozioari buruzkoak, eta horiek erabakiko dute erreforma honen zentzua.

Ekintza positiboko neurriak.

Nabarmentzekoak dira, berrikuntza dakarten aldetik, txanda libreko hautaketa-prozeduretarako emakumeen alde ezartzen diren ekintza positiboko neurriak, zenbait egoeratan emakumezko hautagaia gizonezkoaren gainetik hobestea ekarriko baitute, Europako Erkidegoetako jurisprudentziak lege-neurriei, proportzionaltasunari eta



arrazoizkotasunari buruz ezartzen dituen eskakizunen kontra jo gabe. Hala bada, lege-mailako arau batean ezartzen da neurri hori. Arrazoizkoa da, mugatu egiten baitu txanda libreko sarbidea, eta diskriminazio egitatezko eta historiko bat arintzeko ez ezik, polizia-zerbitzua eraginkortasunez emateko emakumeen masa kritiko baten eskakizunari erantzuteko ere bada. Proportzionatua ere bada, lehentasuna modu subsidiarioan eta murriztuan aplikatzen delako, hautatutako hautagaiaren eta bazter utzitako hautagaiaren arteko nolabaiteko gaitasun-baliokidetasuna ere bermatuz beti, lehentasuna aplikatzeko orduan. Eta, gainera, salbuespenezko neurria ere bada aldi baterako den aldetik, ez baita aplikatzen jarraituko, emakumeak dena delako kidego, eskala eta kategorian % 33 izatera iritsitakoan. Neurri horren xedea ez da sexuen arteko parekotasuna, baizik eta emakume-kopurua gutxienez masa kritiko jakin batera iristea (% 33).

Emakumeen aldeko ekintza positiborako neurriak, 47. bis artikulua berriaren bidez arautuak, nabarmentzea merezi dute, emakumeak polizia-kidegoetan eraginkortasunez eta ohiz kanpo txertatzeko ahalegina egiten baitute. Proiektuaren espedientean ageri dira proposamen horren aldeko azterketak eta txostenak, baita emakumeen gaur egungo ordezkapen eskasaren kausak ere. Txosten horiek desberdintasunezko egoera historikoa azaltzen dute, lehenik eskubideen alorrean, eta gero egitateen esparruan. Helburua da egoera hori arintzea, baina ez parekotasuna lortzeko, baizik eta gutxieneko masa kritikoa lortzeko: %35 hain zuzen. Helburu hori lortuko balitz, lehentasuna amaituko litzateke.

Neurri horren bidez, erabaki judizialen iritzia aintzat hartzeko ahalegina egiten da; izan ere, Ertzaintzan sartzeko txanda irekiko eta barne-sustapeneko deialdietan plazen %50 emakumeentzat gordetzea baliogabetu zuten, kuota itxiak, diskriminatzaileak, justifikaziorik gabeak eta lege formal batean oinarritu gabeak zirela ulertuta.

Aldaketaren bidez planteatutako ekintza positiborako neurriak, lege formal baten euskarria bilatzeaz gain, zentzuz justifikatu behar den neurria aurreikusten du, emakumeen sustapenerako planetan oinarritua. Neurri hori ohiz kanpokoa eta aldi baterakoa da, gutxieneko masa kritikoa lortu arte, ez parekotasuna lortu arte; txanda irekiko sarrera-prozesuetan soilik aplikatu daiteke, eta ez dira kuota itxiak finkatzen, baizik eta emakumeen lehentasun soila, gizonen aurretik, plazen gehieneko kopuru batean, emakumeen sustapenerako planak oinarri hartuta. Lehentasun hori aplikatuko da gaitasunak parekoak direnean, eta parekotasun hori egiaztatzeko, puntuazioen arteko aldeak ez du gainditu behar ehuneko jakin bat.

Baliatutako erresalbuak direla-eta, ulertzen dugu neurria bateragarria izan daitekeela Europar Batasuneko zuzenbidearekin, eta Konstituzioaren 14. eta 23.2 artikuluekin; izan ere, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaietan eskatutako legezketasunaren eta proportzionaltasunaren printzipioak betetzen ditu. Epai horien bidez baliogabetu ziren, hain zuzen, kupo itxiak edota emakumeentzako plazak gordetzea txertatutako hautaketa-deialdiak (EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren 55/2001 epaia, 2011ko urtarrilaren 26koa, eta beste batzuk, esate baterako 2010eko maiatzaren 12koa eta 2010eko urriaren 26koa).



Proposatutako erregulazioa aurreko legealdian Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zen proiektuan zegoen bera da, eta Aholku Batzorde Juridikoak aztertu zuen. Batzordeak eman zuen irizpenaren arabera, legegilea gaitasuna zuen Euskal Herriko Poliziaren Kidegoetara sartzekoan ekintza positiboko neurriak hartzeko. Halaber, neurrien proportzionaltasuna indartzeko oharrak ematen zituen.

Une horretan gobernu-kontseiluak onetsi zuen testuan, Aholku Batzorde Juridikoak bere irizpenean egin zituen ohar eta zehaztapenak jaso zituen eta horixe berreskuratu du orain aurreproiektu honek.

Hautaketari buruzko beste gai batzuk.

Hautaketa-organoen araubidearen oinarrian ezaugarri hauek bete beharko dira: inpartzialtasuna, profesionaltasuna eta espezialitatea, baita gizon eta emakumeen arteko oreka ere. Funtzionarioentzat orokorrean aurreikusitako ezaugarriak dira aipatutako horiek guztiak. Era berean, deialdietako oinarrien arteko lotura egin dadila xedatzen da, eta orobat zehazten da zein kasutan izango den zilegi deialdi bateko lanpostu hutsen kopurua aldatzea edo akatsak zuzentzea, eskabideak aurkezteko beste eperik hasi gabe.

Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademia hautaketa-organo iraunkor gisa eratzten da, eta, gainera, aukera ematen da udaltzaingoan sartzeko hautaketa-prozedurak batera egiteko, toki-administrazioiko erakundeek beren borondatez hala eskatzen badiote.

Ekintza positiboko neurriak ezartzen dira emakumeak polizia-kidegoetan sartzeko eta polizia emakumeen kopurua handitzeko, gaur egun kopuru hori urria da-eta. Hala, bada, polizia-kidegoetako emakumeentzako lanbide-sustapeneko planak arautzen dira, kidegoetan sartzean eta lanbide-karreran berdintasuna bermaturik izan dezaten, dagokiena baino daukaten ordezkartza urriago hori zuzentzeko, eta poliziaren eraginkortasuna handitzeko.

2.2.3.- Sustapena eta lanbide-karrera:

Barne-sustapena eta lanbide-karrerari dagokionez, nobedade garrantzitsuak aurreikusten dira.

Barne-sustapenari dagokionez, barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga bertan behera utzi da; izan ere, muga horrek murriztu egiten zuen ibilbide administratiborako eskubidea, baita funtzionarioek probak gainditu bai, baina plazarik lortzen ez zuten kasuetan ere.

Beste neurri batzuk ere ezartzen dira, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzearekin zerikusia dutenak, hala nola haurrak edo senitartekoak zaintzeko edo genero-bortizkeriarengatik eta zerbitzu bereziengatik eszedentzian direnek barne-sustapeneko prozeduretan aurkezteko duten aukera. Halaber, amatasun-eta aitatasun-baimenetan eta haurdunaldi-bajetan emandako denbora ere kontuan har

dadila xedatzen da, barne-sustapena dela-eta benetan emandako zerbitzuen denbora kalkulatzeko aldera.

Superintendente-kategoria kentzen da, eta, horrela, Ertzaintzaren erantzukizun goreneko postuak betetzea bizkortzen da, lanpostuak betetzeko prozedura arruntaren bidez.

Aurrez esandakoaz gain, barne-sustapenean inpaktu gehien izango duen neurria kategoriaz igotzeko urte-kopurua gutxitzea da.

Lanbide-karrera horizontala arautzen da, lanpostua aldatu beharrik gabe garapen profesionalaren mailan aurrera egiteko aukera gisa ulertuta.

Lanbide-karrerako sistemak berarekin batera dakar ezagutza-mekanismo bat ezartzea, kategoria bakoitzean aurreikusitako garapen profesionaleko maila desberdinetara urteetan zehar sartu ahal izateko, eta gaitasun profesionalak egiaztatzearen bitartez. Garapen profesionaleko mailaren arabera jasotzen da ala ez karrera profesionaleko osagarria, eta, hala badagokio, maila horrek lanpostu jakin batzuk betetzeko gaitzen du.

Orain arte adierazitakoaren ondorioz, ordainketa-egitura aldatzen da, karrera profesionaleko osagarria ordainsari osagarrien artean sartzeko.

2.2.4.- Lanpostuak betetzea:

Lanpostuak betetzeari buruz, Ertzaintzan espezialitateen araubidearen erregulazioa nabarmendu behar da, ezagutza zehatzak behar dituzten zereginetarako.

Espezialitate horietan sartzeko, espezializatzeko ikastaro bat egin beharko da, eta titulazio edo ezagutza jakin batzuk eskatu ahal izango dira. Espezializatzeko jarraitzeko konpromisoa dakar berarekin batera, bai eta espezialitatean jarraitzeko gaurkotze-probak egitea ere, hala behar izanez gero.

Halaber, lege honetan, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak eta segurtasun-arloan eskumena duen sailak deialdi bateratuak egiteko aukera jasotzen da; deialdiotan, espezializazio-ikastaro batean sartzeko eta hura gainditzea lotuko da borondatezko zerbitzu eginkizunak berehala ematearekin, hutsik dauden lanpostu espezializatuak.

2.2.5.- Administrazio-egoerak:

EHPLk ez zituen administrazio-egoerak arautzen, zerrendatu eta funtzionarioen legedi orokorrari lotzen zaio EHPLn bertan dauden espezialitateei kalterik egin gabe (bigarren jardueran eta funtzioak gabetzean, batez ere). Hala ere, enplegatu publikoen administrazio-egoeren erregulazioa aldatu egin da EPOE onartu zenetik, eta EHPLko zerrenda zaharkitua gelditu da. Horregatik, proiektuan, administrazio-egoerak banan-banan aipatu beharrean, funtzionarioen erregulazio orokorrari lotzen zaio zuzenean.

Oraindik ere, berezitasunak arautzearen alde egiten da, eta beraz funtzioen gabetze-egoera zati batean aldatzen da, baina aldaketarik garrantzitsuenak dira polizia-jardunari



buruzko egokitzapenak, adinaren ondorioz egiten direnak, edo funtzio polizialaren berezko gaitasunak gerora galdu izatearen ondorioz, eta betiere funtzionarioen osasuna babesteko eskubidearekin bat etorrira.

Aurreko araudian, bigarren jardueraren egoeraren profilek eragozten zuten administrazioek praktikan onartzea, pertsona-kopurua handia izanez gero. Lausoki ibiltzen zen batera eta bestera, bi aukera hauen artean: langile horiek aldatzea haiek betetzeko moduko postuetara... edota aurretiko erretiro moduko bat, inoiz zehaztu ez zen adinera iristean, finantza-arazo handiak eta pertsonala berritzeko zailtasunak sortuz.

Horregatik, proposatutako erregulazioak administrazio-egoera hau argiago zehazten du: kontua da ahalmen eta gaitasun murriztuak dituzten langileak, baina polizia-lanbideari dagozkion funtsezko eginkizunak betetzeko ezgaitasunik ez dutenak, eta, horrenbestez, ezgaitasunagatik erretiroa hartuko ez dutenak, haien egoerarako egoki diren postuetara aldatzea.

Hortaz, araudi berrian, administrazioaren eskura dagoen funtzionarioaren figura desagertzen da, eta ez du jada zentzurik adinagatik egoera horretara automatikoki pasatzea.

Horrek ez du eragozten funtzionario adindu bat, ahalmenak murriztuta dituelako poliziarri dagozkion eginkizun guztiak normaltasunez bete ezin dituenak, bigarren jarduerara pasatzea; edota zerbitzu aktiboaren egokitzapena aurreikustea adinagatik, hau da, zerbitzuan urte jakin batzuk eman dituzten langileei beste funtzio edo eginkizun batzuk ematea, esate baterako, bereziki neketsuak edo arriskutsuak diren eginkizun jakin batzuk egitetik salbuestea.

Adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa arautzen da. Honetan datza adina dela-eta egokitutako zerbitzu aktiboa: zerbitzu aktiboan jarraitzean, agentearen egoerarako egokiak diren eginkizunak eginez; gau-txandarik gabeko lanaldi-erregimena izatean; eta adina dela-eta zerbitzua emateko baldintzen bestelako aldaketak egitean; esaterako, urteko lanaldia gutxitzean.

Ertzaintzaren kasuan, langileek 56 urtetik aurrera eskatu dezakete murrizketa, eta borondatez erretiro aurreratua hartzeko konpromisoa dakar (atzerapena izan dezake bere oinarri arautzailearen % 100eko balioa duen pentsioa eskuratzeko baldintzak ez badira betetzen).

Beste polizia-zentro batzuetako lanpostuetara atxikiz, agenteak beste polizia-zentro batzuetara mugi daitezke. Horretarako, zentroa gehienez ere, agentea destinatua zegoen unitateko lurralde-mugapenaren inguruan egon beharko da, eta bete zuen aurreko lanpostuan izendatua izan zen hornikuntza-baldintza berberak izango ditu.

Atxiki ezin bada, destinorik gabe egongo da aldi batean, administrazioaren esanetara, destinoa esleitu edo lanpostua egokitu arte. Udaltzaingoaren kasuan, adina dela-eta egokitutako zerbitzua ezarri ahalko da, zerbitzu poliziala ematen jarraituko dela bermatuz gero; udalak ezarriko du adina, baina ezingo da izan hirurogei urtetik beherakoa.



Lan polizial guztiak normaltasunez betetzeko gaitasun psikofisiko nahikorik ez dutelako bigarren jardueran aritzen diren polizien administrazio-egoerari buruz ere arau berriak ezartzen dira; hala, bada, haien arabera, funtzionarioek beren benetako gaitasunetara egokitutako lanpostuak edo funtzioak bete beharko dituzte, aurreko araudietan ez bezala, hura premisa honetatik abiatzen baitzen: bigarren jardueran aritzen zirenek oinarritzko ordainsariak kobratzen zituzten, lanpostu bat betetzeko edo jarduera polizialak betetzeko deitzen zieten arte. Lege honetan, berriz, egoera administratibo horretara igarotzen diren funtzionarioek lan egiten jarraituko dute, hala aurreko lanpostuan —bigarren jardueran aritu ahal izanez gero—, nola bete dezaketen beste lanpostu batean; eta birkokapena berehala egin ezean, agentearen lanpostua bere premietara egokitzen da aldi baterako.

Behin-behineko eginkizunen etenaldiari dagokionez, bi zehaztapen egiten dira: bata, behin-behineko etenaldian emandako denbora etenaldi irmoan kontuan hartzeari buruzkoa; bestea, horrekin lotua, behin-behineko etenaldia irmo bilakatuz gero, behin-behineko etenaldian jasotako dirua itzuli beharrari buruzkoa.

2.2.6.- Gizarte-babesa:

Kapitulu berria sartzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoen babes sozialari buruzkoa, oinarritzkoa zein osagarria izan, eta bereziki kontuan hartuta administrazioek langileen baldintza psikofisikoak, laneko osasuna eta laneko arriskuen prebentzioa zaintzeko obligazioa dutela.

Lan-arriskuen prebentzioaren arloan, eztabaida sortu da Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea poliziari zein neurritan aplikatu dakiokeen erabakitzerakoan. Izan ere, Legearen 3.2 artikulua hau dio: "Lege hau ez da aplikatuko jarduera batzuetan, jarduera horien berezitasunek lege hau aplikatzea eragozten duten ondoko eginkizun publikoen esparruan: polizia, segurtasuna eta aduana-gordekina, babes zibileko zerbitzu operatiboak eta forentseen ikuskatzea, arrisku larriko egoeretan, hondamen-egoeretan eta zoritxar publikoko egoeretan".

Hala ere, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak baztertutako jardueren prebentzio-jarduketan "inspirazio-iturri" izango dela dio, jarduerak baztertu arren enpresak berak prebentzio-neurriak ezarri beharko baititu poliziek aurre egin behar izaten dieten arriskuak gutxitzeko, eta ekintzok Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea izan beharko dute oinarri.

Gaia Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiak aztertu zuen, eta ondorioz, Estatuko administrazioak bi Errege Dekretuetan arautu zuen Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen eremuetan dauden lan-arriskuen prebentzioa. Ertzaintzari dagokionez, lan-arriskuen prebentzioari buruzko araubidea lan-baldintzak arautzeko akordioetan sartu zen. Udaltzaingoari dagokionez, ez da egin araudiaren egokitzapen orokorrik. Horregatik, egun salaketak daude arlo horretan, lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudi europarra ez betetzeagatik.



Bestalde, proiektuak nahitaez eduki behar ditu lanean edo lanaren ondorioz sortutako gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologiak direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak.

Egun, beren jardunean edo zereginak betetzean edo Euskal Herriko polizia-kidegoetako funtzionarioa izateagatik istripuz edo indarkeriaz gertatutako heriotza kasuetako edo bere zereginak betetzeak eragindako ezgaitasun kasuetako eskubide osagarrien erregulazioa zerbitzu-egintzaren deklarazioa deitutakoarekin lotzen da. Deklarazioaren erregulazioak ohorezko sarien araubidea eta langileen gizarte-babesaren berezko araubidearekin nahasten du.

1992ko erregulazioaren asmoa zen 1982ko euskal poliziaren erregelamenduaren aurreko erregulazioak ekarri zituen arazoak desagerraraztea, 1982ko araudiak arau-kidego desberdinduentzako diseinatutako kontzeptuen arteko nahasketa eragiten zuen: lan-istripua ertzainei aplikatu dakiekeen gizarte-segurantzaren araubidean ezarritako kontingentzia gisa eta Estatuko klase pasiboen araubidearen balio bera duen kontingentzia zerbitzu-egintzako kontzeptuari lotuta. Nahasketa ekiditeko, EHPLk zerbitzu-egintzaren kontzeptua aparteko merituekin lotzen zuen, zerbitzuan zehar gertatutako heriotzaren kasuan izan ezik. 2004 eta 2012ko erregelamendu-garapenek, batetik, zerbitzu-egintzaren deklarazioan emateko prozedura eta dakartzan ondorio ekonomikoak jaso zituzten, eta bestetik, zerbitzu-egintzaren deklarazioari lotutako edo lotu gabeko kondekorazioen zerrenda jaso zuen.

Hala ere, zerbitzu-egintza deklaratzeko balizkoak ez dira beti bat etorri beharko agentearen merezimenduzko jarduera positiboekin. Erreformaren xedea kondekorazioaren araubideari bere garrantzia ematea da eta funtzionarioaren heriotza edo ezgaitasun iraunkorra gertatu den kasuetan funtzionarioaren eredugarritasun-azterketa bereiztea kontingentzia horren ondorio ekonomiko eta juridikoetatik, modu objektiboan har daitezen.

2.2.7.- Gizarte-aintzatespena:

Aurreneko aldiz jasotzen da kondekorazioak eta ohorezko sariak emateko erregimena, zerbitzu-egintzan hildako funtzionarioak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ondorio ekonomikorik gabe eta ohore gisa igarotzeko aukera jasoz.

2.2.8.- Diziiplina-araubidea:

Diziiplina-araubidean sartutako aldaketek kontuan hartzen dituzte arau-hauste berriak, EHPLtik kanpoko beste arau batzuetan jada aintzat hartzen zirenak: arau-hauste arin, larri eta oso larriengatik jar daitezkeen zigorrren doximetria aldatu; preskripzioaren eta iraungitzearen araubidea; eta zigorrak betetzeko modua arautu, malgutasuna bideratuz.

Diziiplina-araubiderako aurreikusitako aldaketak honako hauek dira:



Behin eta berriz egindako sexu-jazarpen eta lan-jazarpenaren arloan falta oso astun berriak eta polizia-bideokameren erabilera-araubideari buruzko arau-hausteak sartzen dira.

Ezarriko diren zehapenak arindu dira. Diziplinako faltetan zigorra murriztu da funtzioen etenaldiari dagokionez, uste baita zorrozatasuna handiagoak ez dakarrela beti arauaren disuasio- edo prebentzio-efektuen efikazia edo eraginkortasun handiagorik. Aldaketa horrek ez du inolako arazorik sortzen lege aldetik, eta diziplina-araubidea jartzen du gure inguru juridikoko araubide berrien parean.

Zehapena graduatzeko irizpideen artean, curriculum profesionala zirkunstantzia aringarritzat jotzen da, berriz egin izanaren kontzeptua larrigarria izatea mugatzen da, eta, delitua edo falta penala dela eta izandako falten kasuan, berariaz baloratzen da ezarritako zigorraren zenbatekoa edo entitatea epai irmoaren arabera, bai eta delituzko jokabidea eginkizun polizialekin duen harremana ere.

Espedientepean dauden pertsonen bermeak indartzen dira, deklarazioak ez egiteko dituzten eskubideei dagokionez, bai eta beren buruaren kontra ez egiteko, beren burua erruduntzat ez jotzeko eta errugabetasun-presuntzioa izateko, bai eta prozeduraren izapideen egoeraren berri izateko eskubideei dagokienez ere. Defentsa-eskubideari dagokionez, espedientatutako pertsonen jarduneko abokatu edo prestakuntza egokia duen konfiantzazko kidego polizialeko funtzionario baten aholkularitza eta laguntza izateko aukera bermatzen zaie, eta ezartzen da, baita ere, agintariek erraztasunak emango dizkietela izendatutako funtzionarioei espedientatutako pertsonaren agerraldi pertsonaletan egon daitezen.

Prozedura iraungitzeko araubidearen eta epea arautu da, eta horrek arindu egiten du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak diziplina-araubideko agindu bat baliogabetu izana, HALGAILen azken aldaketen ostean.

Orobat, falta eta zehapen oso larrien preskripzio-epea gutxitzen da 6 urtetik 3ra; aitzitik, legeak preskribatzeko epea zabaldu egiten da, hilabete 1etik 3 hilabetera.

Zehapenen bete beharra jasotzen da, bai eta zehapena eten beharreko edo baldintzapean kentzeko kasuak ere, horrela jokatzeko motiboak daudenean.

Zehatutako pertsonari al bait kalterik txikiena eginda beteko dira zehapenak; horrela, bada, aurreikusten da zehapena betetzeko zatiketaren alde egiteko aukera, bai eta, eginkizunak etenez gero, zehapena baldintzapean kentzeko aukera emango zaio — eskatzen duenetik 15 egun igaro baino lehen—, baldin eta zehatutako pertsonak zehapena betetzeko hautazko neurri gisa hartzen badu lanalditik kanpo lan egitea, soldatarik edo inolako konpentsaziorik gabe, jarritako zehapen-aldia bitartean.

Zigorrak gauzatzeari eta baldintzapean barkatzeari buruzko alderdi jakin batzuk arautzeak ez du arazorik planteatzen, ezta behin-behineko gabetzean jasotako zenbatekoak, behin betiko gabetze bihurtuz gero, itzuli behar izateak ere; eta behin betiko gabetzea betetzeko behin-behineko gabetzean egindako denbora kontuan hartzeak ere ez du arazorik sortzen.

2.2.9.- Ertzaintzaren egitura eta funtzionamendua:

Ertzaintzaren lanbide-egiturari dagokionez, nabarmentzekoa da superintendentearen kategoria desagertzea eta polizia judizialaren lana aldaketa normatiboetara eta Ertzaintzaren egungo egiturara egokitzea.

Superintendentearen kategoria kentzeko lanbide-egitura tontorrean nola geratzen den eratuta hartu da kontuan, hau da, komisariorde, komisario, intendente eta superintendentearen kategoriak unibertsitateko titulu akademiko bera duten pertsonentzat zabalik geratzen dira.

Superintendente-lanpostua bereizi arren, jatorri-taldeko prestakuntza akademikoa egiaztatzearekin nahikoa izango da, ez da beste prestakuntza akademikorik egiaztatu behar, izan ere, jatorri-taldeak barne-sustapenaren sistema eratu ohi du.

Bestalde, benetan zuzendaritza-izaera duten lanpostuak direla hartu behar da kontuan, eta izendapen askeak berez duen konfiantza eskatzen dute eta betetako lanpostuarekin loturarik gabeko kategoria finkatzeak lanpostu horiek beteko dituzten hautagaien nolabaiteko esklerosia ekarriko luke.

2.2.10.- Udaltzaingoak:

Udaltzaingoari dagokionez, eraberritze honek homologagarriak diren lanbide-egiturak sendotzen ditu, eta, aldi berean, udal bakoitzari uzten dio bere beharrian eta berezitasunei egokitutako antolakuntza-konponbideak aurkitzen.

Hala, bada, hainbat neurri ezartzen dira lehendik zeuden zenbait errealitateri erantzun juridikoa emateko; esaterako: udaltzaingoak udalerritik kanpo jardun ahal izatea, udal agintariak babesteko eginkizunak bete behar dituztenean; udaltzaingoko kideen artean destinoa trukatzeko aukera; mugikortasun-agentek ezartzea edo mekanismoak ezartzea udaltzaingoko bitarteko funtzionarioak presta daitezen.

Nabarmentzekoa da beste hau ere: udaltzaingoko kidegoetako lanbide-egitura jasotzen du legeak, Ertzaintzako bezalatsu. Berezi, udaltzaingoko kidegoetako buruei dagozkien kategoriak zehazten dira, biztanleriaren arabera edo kidegoa osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera. Hala, lege-proiektuak araututakoaren arabera, eskala berrietan sailkatzen dira udaltzaingoko funtzionarioak, eta udaltzaingoko buruei dagozkien lanpostuak egokitzen dira.

Alde batetik, kategoriak eta eskalak Ertzaintzakoekin bateratzen dira; horrek ez du esan nahi tokiko kidego guztietan eskala eta kategoria guztiak izan behar dituztenik.

Proiektuak adierazten du kidegoen buru izateko behar den kategoria, udalerrietako biztanleen edota kidegoko funtzionarioen kopuruaren arabera.



Horrenbestez bermatzen da kasu guztietan gutxieneko mailakatzeko hierarkikoa izatea, eta egungo egoera zuzentzen da; izan ere, hiriburuak alde batera utzita, gainerako udalerrietako profesionalen egituraren eta buruzagitzen gailurra da, gehienez ere, C-1 sailkapen-taldeko ofizial bat.

Bestalde, Jaurlearitzari gaitasuna ematen dio, udaltzaingo-kidegoetako kategorien arteko proportzionaltasun-irizpideak ezar ditzan, udalerri bakoitzeko biztanle-kopurua eta ezaugarriak kontuan hartuta.

Udalerriek hiru urteko epea daukate, buruzagitza-postuak Legearen arabera egokitzeko. Egokitze hori gauzatu ondoren, aldatutako buruzagitza-postuetan zeudenak birkalifikatutako lanpostuari dagokion kategorian sartuko dira, baldin eta azken bost urteetan postu horretan aritu badira, kategoriari dagokion titulua badute (edo EHPLren 59.2 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz deitutako gaitze-ikastaroak, edota egokitzapenaren aurretik deituko direnak) eta Euskal Herriko Polizia eta Larrialdi Ikastegiak emandako lanbide-akreditaziorako ikastaro teoriko praktikoa gainditzen badute. Ikastaro horretan kontuan hartuko dira lan-esperientzia, espezializazio- eta gaitze-ikastaroak, eta alde aurretik eskatutako ezaupideak.

Birsailkatutako lanpostuari dagokion kategorian sartzeko baldintza horiek betetzen ez badituzte, lanpostuan jarraituko dute, izendatu zituzteneko baldintzetan, eta betetako lanpostuari esleitutako ordainsariak jasoko dituzte.

Bestalde, xedapen gehigarri berrian, zerbitzu aktiboan ari diren udaltzaingo-kidegoetako kideen arteko lanpostu-trukea arautzen da.

Aguazilei aplikatuko zaien araubide juridikoa arautzen da: udaltzaingorik gabeko udalerrietan, aguazil plazak sor daitezke (5 arte); estatutu jakin bat, lege definitutako funtzioak eta agintaritzaren agente izatearen aitorpena izango dute, eta Polizia eta Larrialdi Ikastegiko prestakuntza beharko dute. Legean aurreikusten da egungo aguazilak edo jagoleak figura horretan integratzea, eta, udalerrian udaltzaingoa sortzea erabakiz gero, kidego horretan integratzea.

Mugikortasun-agentek Estatuko segurtasun indar eta kidegoei buruzko lege organikoan adierazitako moduan jasotzen dira, trafikoa zaintzeko kidegoak izan ditzakete; horrenbestez bideratzen da udaltzainak segurtasunaren alorreko eginkizunetan aritzea, batez ere.

Udaltzaingoaren bitarteko funtzionarioei dagokienez, aldiz, hala izendatuko dituzten pertsonak prestatzeko mekanismoak dauzka proiektuak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak prestatutako pertsonen osatutako enplegu-poltsa sortuz.

Udaltzaingoaren bitarteko funtzionarioaren figura beti egon da, eztabaida sortu arren. Egun, 300 bitarteko funtzionario baino gehiago daude udaltzaingoan, asko karrerako funtzionarioen ordezkioak dira, eta beste batzuk aldi baterako zereginak edo premiazko une jakinetan egin beharreko lanak burutzen dituzte. Orain dela urte gutxi, Auzitegi Gorenak bitarteko funtzionarioei buruzko epai irmoa eman zuen, eta hala egin zuen EAEANek ere. Hala ere, EAEko Auzitegi Nagusiak orain dela gutxi emandako epairen

batek aurrez emandako epaiak aldatzen ditu, uste baitu EHPL eta EFPLko xedapenen gainetik EPOEk eratutako Estatuko oinarrizko legearen irizpidea dagoela. Hortaz, EPOEren arabera, aginpidez baliatu beharra dakarten lanpostuak karrerako funtzionarioei gordeko zaizkie, eta beraz, bere iritziz, udaltzaingoan bitarteko funtzionarioen izendapena ezgaituko du. Tesi hori, bere irmotasunagatik, zalantzan jarri behar da, izan ere, EPOEk ez baitio alderdi honetan ekarpen berririk egiten TAOLk Udaltzaingoan bitarteko funtzionarioak izendatzeko aukerari buruz esaten zionari, Auzitegi Gorenak doktrina ezarri baino askoz ere lehenago. Gainontzean, EAEANren argudioarekin bat, aholkularitza juridiko, kontularitza-kudeaketa edo diruzaintza eta bestelako zereginetan bitartekotza guztiak debekatuko lituzke, toki-eremuan, zein autonomia-erkidegoetan edo Estatuan. Horrek, 360 udaltzaingok berehala lana utzi beharra ez ezik, milaka eta milaka bitarteko funtzionario ere lanik gabe geratuko lirateke, herri-administrazioak geldiaraztea eraginez lanpostu horietarako karrerako funtzionarioak izendatu arte.

2.2.11.- Legegintza-eskuordetzarako gaikuntza:

Legegintza-eskuordetza Gobernuaren Legeko 52.2 artikuluan agertzen da. Artikulu horretan, Konstituzioaren 82. artikuluan bezala, ezartzen da Eusko Legebiltzarrak gobernuan eskuordetu dezakeela lege-mailako arauak (legegintzako dekretuak deritzenak) emateko ahalmena, arlo batzuetan izan ezik. Baina arlo horiek ez dira aurreproiektu honetan agertzen.

Legegintza-eskuordetzako bi modalitate daude: (i) oinarri-legearen bidez gauzatu beharko da, eskuordetze horren helburua testu artikuludunak sortzea bada; (ii) lege arruntaren bidez gauzatu beharko da, ordea, helburua zenbait lege-testu bat egitea bada. Bat egiteko lanak eduki berritzailea ere ematen du, edozelan ere, bateratutako manuen interpretazio sistematikoari buruzko gogoeta sakona baitakar, batez ere eskuordetzak bat egin behar diren lege-testuetako hutsuneak arautu, argitu eta harmonizatzeko ahalmena barne hartzen badu.

Horretarako, batu behar diren lege-testuen arazketa teknikoa egin behar da manuak argitu, bateratu eta aurreko erregulazioan antzemandako desadostasunak eta antinomiak kenduz, Testu Bategin koherente eta sistematikoa lortze aldera» (166/2007 KAE, uztailaren 4koa, 8 OJ).

Ordezkaritzaren premisa testu bategina sortzeko batu beharrezko hainbat lege-testu zeudela izan zen. Horregatik, sarritan bat-egiteak ez duela zentzurik uste izan da, aurreko arauaren aldaketa hutsa denean, bertako manuak aldatutako arauan sartzen baitira.

Hala ere, esku artean dugun kasua, arau berberaren bosgarren aldaketa da. Aurreko aldaketetako batzuk oinarri-legeetan edo EHPL baino eduki gehiago duten legeetan jasotako aldaketak dira, esaterako Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatze Legea. 1992an onetsitako arauak ez du gaur indarrean dagoen legearen antzik, ezta aldaketa honetatik sortuko den legearen antzik ere. Beraz, legegintza-eskuordetzarako oinarriak ematen direla uste da.

Halaber, egokia dela dirudi legegintza-eskuordetze zabalena (arautu, argitu eta bateratzeko lanak barne hartzen dituen) aukeratzea, testuan lege-arauak sartzeko Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrari emandako baimenari lotutakoa aukeratu beharrean. Hala, beharrezkoak diren artikulua, kapituluak eta xedapenak bakarrik aipatuko dira berriz banan-banan eta zenbaki berriak jarri zaizkien bat egindako legeen barne bidaltze-oharrak egokituko dira.

Ohar hau zentzuzkoa da batez ere indarrean dagoen legearen euskarazko bertsiorako, beste batzuetan Aholku Batzorde Juridikoak esan bezala, euskararen lexiko arrunt, tekniko eta juridikoan gertatu den eguneratze-prozesuaren ondorioz sortu diren beharrak egiaztatzerakoan, batzuetan iragan sasoiaren emandako arauen terminologia homogeneizatzea komeni da, azken emaitzan egon daitezkeen inkoherentziak zuzentzeko, segurtasun juridikoaren printzipioan eragin kaltegarria eduki baitezakete.

Gainerakoan, gaitzeko klausulak eskakizun guztiak betetzen ditu: a) Eusko Jaurlaritzari ematen zaio espresuki; b) gai zehatzerako ematen zaio (legegintza-eskuordetzetik kanpo utzi gabe) eta erabiltzeko epea berariaz adierazten da, eta c) legegintza-eskuordetzearen xedea eta irismena zehatz-mehatz mugatzen da.

2.3.- LEGEGINTZA-TEKNIKA

Proiektuak errespetatzen ditu Gobernu Kontseiluak xedapen orokorrak egiteko emandako zuzentarauak; halaber, gaingiroki errespetatzen ditu 1994ko martxoaren 18an lehendakariak emandako jarraibideak, hizkuntza sexista arauetatik, administrazio-dokumentuetatik eta Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio-ekintzari buruzko informazio eta hedapenerako dokumentuetatik desagerrarazteko.

Zuzentzarau horiei jarraikiz, aldaketa egitea helburu duen arauaren izenburuan zehaztu behar da izaera hori. Halaber, ez da agertuko aldatutako lege edo dekretuen datarik eta zenbakirik, ezta aldatutako artikulua, atal edo kapitulurik ere. Berrikuntzaren bat duten xedapen guztiak artikulua bereizi batean adierazi behar dira, eta ezin dira lehendik zegoen artikulua baten atal izan.

Oro har, zerbait aldatzeko arauetan erregulazio-estiloa erabiliko da (aldatzeko xedapenak beste era batez idaztea), kasu hauetan izan ezik: hitz bat edo beste ordezkatzeko, esamolde berdinak behin eta berriz aldatzeko, zenbatekoak eta antzekoak aldatzeko; horrelakoetan, aldaketa-estiloa erabiliko baita, hau da, hitz batzuk ordezkatzeko dira baina ez da berriz beste era batez idatziko.

Esparru-testua eta erregulazio-testua egoki bereizi behar dira. Esparru-testua: aldatzen den zatia buruzko datuak zehaztuko ditu, argi eta garbi (aldatzen diren arauak, kapituluak, artikulua, paragrafoak eta hizkiak) eta aldaketa-mota jakinaraziko du (idatzaldi berria, gehitzea, indargabetzea). Erregulazio-testua: komatxo artean idatziko da, paragrafo bereizi batean, begi hutsez ikus dadin araudi berria zein den; gainera, baliabide tipografikoak erabiliko dira, esate baterako marjinetan koskak edota letra-mota desberdina.



Artikulu berriak gehitu behar direnean, lehengo artikuluen zenbakiei eutsiko zaie, beste xedapen batzuetan haiei buruz egin daitezkeen aipamenetan nahaspilarik ez sortzeko. Gehitzen diren artikuluei jarriko zaie aurreko artikuluen zenbakia, eta, zenbaki horren ondoren, hurrenkeraren arabera legokiekeen adberbio numeral latinoak (bis, ter, quater eta abar). Aldatzen den arauak dituen artikuluko-kopurua eta artikuluko berriak arau horretan izango duten lekua kontuan hartu gabe aplikatuko da arau hau. Artikulu bakarreko xedapenetan zerbait gehitu beharra dagoenean ere, berdin jokatuko da.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 8a.

Eugenio Artetxe Palomar

Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria

VII

INFORME DE FUNCIÓN PÚBLICA / FUNTZIO PUBLIKOAREN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **JUAN MARIA BARASORDA GOICOECHEA**
Fecha de la firma: **22/12/2015 10:15:57**Validación de la firma: **Correcta**Firmante: **MARIA CARMEN MIRALLES JORDA**
Fecha de la firma: **18/12/2015 10:55:58**Validación de la firma: **Correcta****INFORME 29/2015, DE DICIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO****I. COMPETENCIA**

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en relación con el artículo 6.1 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos y el artículo 16.a) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Administración Pública y Justicia.

El mismo se centra exclusivamente en aquellas cuestiones que de forma expresa o derivada afectan a la materia de función pública, quedando el resto de los asuntos no sometidos a la consideración de esta dirección.

II. OBJETIVO Y FINALIDAD

El objeto y finalidad del anteproyecto de ley que se informa es modificar la ley de Policía del País Vasco, para su adecuación a las necesidades actuales y futuras demandadas por la sociedad, profundizando en un modelo de policía más cercana al servicio de ciudadanía que se propone.

Las modificaciones se sustentan en el influjo de otras leyes estatales o autonómicas sobrevenidas; la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa vigente y los pronunciamientos judiciales que la interpretan; el contexto de los proyectos de modernización de la Ertzaintza y el resultado de los trabajos desarrollados durante los últimos años en grupos de trabajo derivados del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Municipios Vascos - Eudel.

Los objetivos que se pretenden son:

- Regular en una ley formal los requisitos de ingreso
- Reforzar las garantías de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de los órganos de selección y el equilibrio entre hombres y mujeres
- Establecer medidas de acción positiva para favorecer la integración de la mujer en los cuerpos policiales

- Suprimir el límite de las tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna
- Reforzar las medidas de protección de la salud del funcionario o funcionaria que se ha visto afectada física o psíquicamente por enfermedad, accidente o edad, como el caso de la segunda actividad.
- Actualizar el régimen disciplinario y reforzar los mecanismos de control.
 - Mecanismos de tratamiento de quejas a través de la Oficina para la mejora del sistema de seguridad pública
 - Creación de la Comisión de control de la Ertzaintza
- Posibilitar que las policías locales actúen fuera del término municipal respectivo en funciones de protección de las autoridades locales; así como otros aspectos relativos a la estructura profesional de tales cuerpos y
- Regulación e integración de las figuras de los vigilantes municipales o los agentes de movilidad.

III. LEGALIDAD

Para la emisión del presente informe se ha de tener en cuenta la normativa vigente y en consecuencia, la adecuación a la misma del proyecto presentado; en concreto:

- la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (LFPV)
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, en vigor
- Decreto 190/2004 de 13 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de las administraciones públicas vascas
- Ley 1/2004, de 25 de febrero de Ordenación de los Cuerpos y Escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos

IV. CONTENIDO

En el anteproyecto que se informa se plantean una variedad de objetivos específicos siendo los mismos:

Incorporar a la normativa el contenido del código europeo de ética de la Policía.

Reforzar el sistema de estímulos positivos del buen hacer policial, haciendo referencia a los complementos retributivos que se proponen incorporar a la estructura retributiva como son: el complemento de productividad, el complemento de carrera profesional, las gratificaciones extraordinarias y menciona, asimismo, la definición de un sistema de condecoraciones, distinciones y recompensas honoríficas.

Modificar el régimen disciplinario, mediante dos vías; por un lado, creando una comisión de control externo y, por el otro, asegurar mecanismos de tratamiento de quejas, posibilitando de este modo la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía.

Incorporar a la ley singularidades de los requisitos de ingreso, como son: eliminar la exigencia de edad máxima para el ingreso por el turno libre, exigir la titulación del subgrupo C1 para presentarse a los procedimientos de ingreso. Al mismo tiempo se opta por remitir a la legislación general de personal funcionario lo referente a los supuestos de jubilación.

Siguiendo con las variaciones en el área de la selección proponen: Modificar el artículo 48 de la LPPV para garantizar la imparcialidad, profesionalidad, especialidad y representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de los órganos de selección; designar a la Academia Vasca de Policía y Emergencias como órgano permanente de selección especializado en los procesos selectivos de la Ertzaintza y en aquellos que se encomiende por las administraciones locales y exceptuar de la obligación de abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, cuando la modificación de las bases haga referencia a las modificaciones en el número de vacantes convocadas y de rectificaciones de errores materiales o de hecho.

Como medidas de fomento de la presencia de la mujer en la ertzaintza, se procede a elaborar planes de promoción de la mujer, tanto en el acceso como en la carrera profesional; se decide que en los procedimientos selectivos de ingreso por turno libre, sería conveniente que se cubrieran por mujeres un porcentaje no superior al 40 por ciento ni inferior al 25 por ciento del número de plazas convocadas y ello hasta que se consiga una presencia del 33 por ciento de funcionarias mujeres. Con la finalidad de conseguir dicho propósito se propone dar preferencia a las candidatas mujeres, siempre que a diferencia de puntuación con relación al candidato masculino que se vea postergado sea inferior al 15 por ciento y que no concurra en el candidato masculino un motivo legal que justifique la no aplicación de la medida; Se decide en los procesos de promoción posibilitar que se pueda promocionar estando en situación de excedencia por cuidado de hijos o de excedencia por violencia de género, así como computar como servicios efectivos los derivados del disfrute de permisos por maternidad y paternidad y baja por embarazo.

Con relación a la estructura orgánica se unifican las escalas y categorías, se prevé la integración de los funcionarios de policía local en las nuevas escalas y se concreta la regulación de la provisión de puestos con requisito de especialidad. Concretamente hay que señalar que desaparece la categoría de superintendente; los más altos puestos de la cadena de mando pasan a ser provistos por el sistema de provisión de puestos ordinario; se regula el régimen de especialidades en la Ertzaintza para tareas con conocimientos específicos; se suprime la referencia al grado personal; se unifican las categorías y escalas de la ertzaintza y de las policías locales y se concreta la categoría que proceda para la jefatura en función de la población local o el número de funcionarios del cuerpo y los criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías de los cuerpos de policía atendiendo a la población y características de cada localidad y en qué poblaciones puede existir la categoría de intendente.

Se da nueva redacción a la regulación referente a la estructura organizativa de la función de policía judicial en la Ertzaintza. Se destaca como punto importante el que el Departamento de Seguridad podrá adscribir con carácter permanente y estable servicios, secciones o grupos de las unidades de investigación criminal y policía judicial a determinados Juzgados o Tribunales. El régimen de los funcionarios y funcionarias integrados en las unidades de investigación criminal y policía judicial será el previsto con carácter general para la Ertzaintza.- arts. 112 y 114.

Con relación a la promoción interna se facilita la misma eliminando una serie de limitaciones existentes; esto es: minorando el número de años efectivos en la categoría precedente para promocionar y eliminando el límite de tres convocatorias de promoción interna; al mismo tiempo el acceso a los puestos de más alto nivel de la Ertzaintza se regula por el procedimiento por promoción interna, Comisario e Intendente. Se regula la carrera profesional horizontal instaurando un mecanismo de reconocimiento para acceder a los diversos grados de desarrollo provisional y mediante la acreditación de competencias profesionales; el grado de desarrollo determina la percepción del complemento de carrera profesional y habilita para el desempeño de determinados puestos.

Es una antigua pretensión, ya recogida en la ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, de adecuar los planes formativos de la Academia a niveles del sistema educativo general de modo que permita solicitar las equivalencias con las titulaciones académicas correspondientes; aproximar el régimen de incompatibilidades al general y a las interpretaciones judiciales de la LOFCS-artículo 78.

Ha sido un objetivo importante velar por la protección social básica y complementaria y por la prevención de riesgos laborales. Para ello se contemplan mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal para el servicio motivado por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo. Asimismo se procede en la propuesta presentada a regular de un modo más amplio los derechos complementarios en los casos de muerte en accidente o violenta durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones, o lesiones permanentes por acciones violentas de terceros en el ejercicio de sus funciones o como acto de servicio.

Con relación a las situaciones administrativas, se regula el servicio activo modulado por la edad y se modifican los requisitos para el paso a la situación administrativa de segunda actividad. Además, se actualiza la regulación en relación con el tiempo y las retribuciones percibidas en los supuestos de suspensión provisional que deviene en suspensión firme.

Con relación al régimen disciplinario se aprecian modificaciones de gran interés como son: se introducen nuevas faltas muy graves en materia de acoso sexual y acoso laboral reiterado, e infracciones al régimen de utilización de videocámaras policiales; se modera el elenco de sanciones a imponer; se producen modificaciones en los criterios de graduación de la sanción valorando el historial profesional como circunstancia atenuante y se delimita el concepto de reincidencia como agravante; se refuerzan las garantías del expedientado; se regula el régimen y plazo para la caducidad del procedimiento y se da nueva redacción a la regulación de los plazos de prescripción de faltas y sanciones; se contempla la ejecutividad de las sanciones y se matizan los casos en que procede la suspensión de la ejecución de las sanciones y la remisión condicional.

Con relación a la policía local se regulan sus funciones de protección de autoridades locales fuera del término municipal; el nombramiento de funcionarios interinos entre candidatos formados por la Agencia Vasca de Policía y Emergencias; se contempla la creación de bolsas de trabajo con personal formado por dicha Academia; se contempla la figura de la permuta en la policía local y se regula la figura de los alguaciles para los municipios que no cuenten con cuerpo de policía local y la figura de los agentes de movilidad para regular la circulación en el casco urbano asegurándose, en ambos casos, su formación por la Agencia Vasca de Policía y Emergencias.

Por último, se derogan las referencias al Boletín de la Ertzaintza sustituyéndolas por el Boletín Oficial del País Vasco y se autoriza al gobierno para que en un plazo no superior a dieciséis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, refunda en un solo texto la Ley de Policía del País Vasco y sus sucesivas modificaciones.

1. Ekinbide – Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública

Se recoge en el capítulo relativo a los mecanismos de control de la actividad policial la existencia de una oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública – Ekinbide, que tramitará las quejas ciudadanas. La tramitación de las quejas se realizará por personal especializado no perteneciente al cuerpo policial.

El artículo 23 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, ya recogía esta figura que fue creada mediante Decreto 227/2000, de 14 de noviembre, por el que se crea la Oficina de iniciativas para la mejora del Servicio Policial – Ekinbide y se regula su organización y funcionamiento en el ámbito de actuación de la Ertzaintza. La Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi redimensiona su ámbito de actividad.

Las funciones vinculadas a la oficina de mejora son desempeñadas, según información remitida por el Departamento de Seguridad, por el personal ocupante de los puestos de la RPT de Laborales adscritos a la Dirección de Coordinación de Seguridad:

- 3217/1 Jefe Ekinbide – Oficina iniciativa mejora servicio
- 3145/15 Letrado
- 3244/11 Administrativo

2. Comisión de control de la ertzaintza – órgano colegiado

Se crea esta comisión de control externo como organismo híbrido de carácter permanente, con autonomía funcional respecto a la institución policial y compuesta por cinco personas de reconocido prestigio, la mitad de las mismas que pertenezcan o hayan pertenecido a escalas y categorías de la Ertzaintza en el grupo de clasificación A. Estas personas miembro serán nombradas por Decreto del Consejo de Gobierno.

En el curso de sus investigaciones la Comisión podrá estar apoyada por los servicios de asuntos internos de la Ertzaintza y por personal funcionario de carrera en comisión de servicios, quienes actuarán bajo supervisión.

Esta última opción es viable al posibilitar el apartado 5 del artículo 72 de la ley 4/1992, de Policía del País Vasco, que se confieran comisiones de servicio para la realización de tareas especiales no asignadas específicamente a un puesto de trabajo.

Esta Dirección de Función Pública considera adecuado que en el propio articulado se concretara como se elige y nombra a la persona que ostente la presidencia. En el propio anteproyecto se fijan una serie de condiciones para

garantizar la imparcialidad de las personas miembro de dicha Comisión y concreta, específicamente, que las mismas no recibirán retribución alguna por sus trabajos sin perjuicio de las indemnizaciones que por razón del servicio sean procedentes en caso de no ser empleados o empleadas de las administraciones públicas.

3. Ordenación de los puestos de trabajo. Especialidades

El artículo 75 del Estatuto Básico del Empleado Público determina que el personal funcionario de carrera se agrupa en cuerpo, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

Con relación a la estructura orgánica se unifican las escalas y categorías y se concreta la regulación de la provisión de puestos con requisito de especialidad. Además, expresamente desaparece la categoría de superintendente y los más altos puestos de la cadena de mando pasan a ser provistos por el sistema de provisión de puestos ordinario; Al mismo tiempo se suprime la referencia al grado personal.

a.- Modifica la titulación para el acceso

La nueva redacción propuesta del artículo 105 presenta una importante diferencia con relación a la escala básica. Hasta ahora, la escala básica con la categoría de agente se adscribe al grupo D, actual C 2, por lo que el título exigido para el acceso es el que corresponde a dicho subgrupo, aunque *tras superar el curso básico de acceso y el período de prácticas, cuando se les nombra personal funcionario se entiende clasificados en el grupo C de clasificación de los funcionarios de las administraciones públicas vascas. Si bien dicha clasificación tendrá efectos económicos y administrativos exclusivamente limitados al ámbito de la Ertzaintza y no supondrá equivalencia o reconocimiento alguno en el ámbito académico, docente o educativo.*

Con la nueva redacción las escalas de inspección y básica se clasifican ambas en el grupo C, subgrupo C1, con lo que la titulación exigida para el acceso es la que corresponda a dicho subgrupo C1.

b.- Especialidades

En el Anteproyecto de ley que se informa se adiciona un nuevo artículo 65 bis en el que se especifica que los puestos con requisito de especialidad podrán cubrirse de forma inmediata con quienes superen los cursos de especialidad, cuando las convocatorias de estos cursos se realicen conjuntamente entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y la Administración competente.

En consecuencia para la provisión de puestos con especialidad pueden participar en dichos procedimientos de provisión los que cumplan todos los requisitos y de especialidad requeridos.

c.- Se suprime el grado personal

En la redacción propuesta se propone modificar el artículo 43, en el que se desarrolla la carrera profesional. Ésta se incluye dentro del capítulo de las Relaciones de puestos de trabajo. Con la modificación propuesta desaparece la referencia al grado personal de todo el articulado de la ley (párrafo 2º del artículo 65, párrafo 3 artículo 71).

d.- Supresión de la categoría de superintendente

Se suprime la categoría de superintendente de la estructura jerárquica tanto para el personal de la Ertzaintza como para el cuerpo de policía local, desapareciendo la mención a dicha figura en los siguientes artículos: artículos 56, 59, 74, 105, 118 y Disposición Transitoria Cuarta.

1.- Con relación a la Ertzaintza, expresamente, en la disposición transitoria cuarta se concede un plazo de seis meses para modificar la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza para adaptar los puestos reservados a la extinta categoría a la categoría de intendentes. Hasta que se produzca dicha modificación los ocupantes de dichos puestos continuarán percibiendo las retribuciones que vinieran atribuidas a dicha categoría de Superintendente conforme a la normativa actualmente en vigor.

Ninguna persona pertenece a la categoría de Superintendente. Los puestos reservados a la categoría de superintendente están hechos siendo ocupados por personal funcionario de categoría inferior. Una vez producida dicha modificación las retribuciones serán las propias de la categoría de Intendente.

2.- Con relación a la policía local, expresamente, en la disposición transitoria quinta, procede a una integración automática del personal funcionario de los cuerpos de policía local en la categoría superior.

Con relación a la policía local no se regula la situación del personal ocupante como se establece para el personal Ertzaintza en la disposición transitoria cuarta. Del expediente no se deduce si existe personal con la categoría de intendente. Si lo hubiera, si resultaría coherente incluir un apartado que regulara las retribuciones del personal.

4. Selección: modificación número de vacantes que se convocan y órganos de selección

El artículo cinco añade un nuevo apartado quinto al artículo 47 de La Ley 4/1992, por el que cuando la modificación de las bases de un proceso selectivo suponga únicamente la modificación del número de las plazas convocadas no será preciso la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.

Dicha posibilidad se reflejaba ya en el artículo 402 del decreto 315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento de selección y formación de la Policía del País Vasco. El uso de esta facultad debe ejercerse con ponderación de forma que la ampliación del número de plazas no sea de tal magnitud que configure un procedimiento selectivo absolutamente distinto para los destinatarios en cuanto a posibilidades o expectativas. Se trata de evitar que por una lectura errónea de las necesidades de la administración la ampliación resulte tan desproporcionada que suponga conculcar los principios de publicidad y de concurrencia, tal y como se expresa en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución, así como en el artículo 44 y 47 de la ley 4/1992, de 17 de julio. Si tal fuera el caso, sí sería imprescindible la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes o la convocatoria posterior de otro procedimiento. Lo pertinente es que la ampliación de plazas convocadas se limite a un porcentaje reflexionado y ponderado. Se considera necesario regular en la propia Ley el porcentaje máximo en el que pueden verse

modificadas el número de plazas convocadas en las bases de un proceso selectivo sin que sea precisa la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.

En la nueva redacción que se propone para el artículo 48 con relación a los órganos de selección, hay que añadir, por homogeneidad con el proyecto de Ley de Empleo Público, como personal que no puede participar en los mismos: al personal que actúe en representación o por cuenta de los sindicatos, de asociaciones de funcionarios/as o de colegios profesionales.

Asimismo debe añadirse, con relación a los asesores expertos que participen en los procesos selectivos, que su actuación también se encuentra sometida a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

Tanto con relación al sistema de acceso, como al de promoción interna, se recogen modificaciones en dos sentidos; uno, en la línea de excluir las limitaciones a la promoción interna y el segundo, para fomentar el acceso de la mujer al cuerpo de policía, que ya han sido mencionadas al inicio del apartado IV y que aplican los principios de la ley para la igualdad de mujeres y hombres.

5. Promoción interna y Policía Judicial

Se modifica el párrafo 1º del artículo 59, que regula los requisitos a cumplir para concurrir al turno de promoción interna. El acceso al turno de promoción interna requiere siempre, que se cumpla el requisito de titulación y los demás requeridos para el acceso a la correspondiente categoría, así como que se participe y se superen procesos selectivos de concurrencia.

En aplicación de los principios de eficiencia y eficacia se establece la posibilidad de adscribir servicios, secciones o grupos de las unidades de investigación criminal y policía judicial a determinados juzgados o Tribunales, con carácter permanente y estable.

El régimen de los funcionarios y funcionarias integrados en las unidades de investigación criminal y policía judicial será el previsto con carácter general para la Ertzaintza en la ley de policía.

6. La carrera profesional

Se propone en este anteproyecto de ley la regulación de dicha materia. A tal fin, se incorpora un capítulo II BIS – relativo a la carrera profesional, en cuyo artículo 73 se regula la carrera profesional horizontal consistente en la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Mediante este sistema se instaura un mecanismo de reconocimiento para acceder a los diversos grados de desarrollo profesional mediante la acreditación de competencias profesionales; el grado de desarrollo determina la percepción del complemento de carrera profesional y habilita para el desempeño de determinados puestos.

La evaluación del desempeño se define como otro instrumento para la ordenación y planificación del empleo público y cuyo objetivo es posibilitar la evaluación y valoración de la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. Dicha evaluación es previa y necesaria para la carrera profesional,

podrá ser positiva o negativa y el resultado afectará de forma fundamental a la carrera profesional, la promoción interna, la formación, la provisión de puestos de trabajo, la continuidad en el puesto, ya se esté ocupado como titular o de forma provisional y a las retribuciones complementarias.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula que corresponde a las leyes de cada administración pública establecer la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias, atendiendo a varios factores, entre ellos la progresión alcanzada por el personal funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

Esta ley configura un complemento de carrera profesional. Sobre este punto es preciso señalar que, en materia retributiva, se regirá por lo dispuesto en la ley de 6/1989 de la Función Pública Vasca y expresamente, el artículo 74 de la ley de policía del País Vasco concreta:

"Artículo 74.

1. La estructura y régimen retributivo de los funcionarios de los Cuerpos que integran la Policía del País Vasco se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VII, Título III, de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, con las especificidades establecidas en los puntos siguientes aplicables al Cuerpo de la Ertzaintza"

Expresamente el artículo 77 de la Ley 6/1989, regula que el personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas *"solo podrá ser remunerado por los conceptos retributivos que se establecen en la presente ley."*

El complemento de desarrollo profesional no se encuentra creado ni regulado en la ley de función pública vasca si bien en el anteproyecto de ley de empleo público vasco regula una carrera profesional horizontal que se llevará a cabo a través de la progresión de grados de desarrollo profesional que requerirán, en todo caso, la evaluación favorable de los méritos de la persona interesada.

El artículo 20.5 del EBEP regula expresamente que: *"la aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo."*

Actualmente la carrera profesional horizontal no se encuentra desarrollada. Sin embargo, se encuentra en tramitación un anteproyecto de la ley de empleo público vasco en el que se atribuye al Gobierno vasco elaborar un reglamento sobre desarrollo profesional y evaluación del desempeño, que contendrá los criterios básicos de aplicación al respecto, en el conjunto de las Administraciones Públicas vascas, de acuerdo con los criterios que al respecto señale la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, creada en el anteproyecto de ley mencionado.

El personal docente, de Justicia, de Osakidetza-Servicio vasco de salud y de la Ertzaintza, desarrollará su carrera profesional conforme a su propia normativa específica, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los criterios recogidos al respecto en el anteproyecto de Ley de empleo público vasco y en su normativa de desarrollo.

La efectividad de la implantación y aplicación de las distintas modalidades de carrera profesional horizontal requerirá necesariamente de la correspondiente regulación por parte de cada una de las Administraciones Públicas vascas, estando dicha efectividad de la carrera profesional sometida, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias de las respectivas Administraciones. Deberá respetarse la legislación básica regulada en las leyes vigentes en materia de función pública así como su desarrollo reglamentario.

Por tanto, la legislación que debe aportar la homogeneidad al conjunto de las Administraciones Públicas Vascas ha de ser la Ley de Empleo Público Vasco y, el Anteproyecto de la misma, incluye una disposición transitoria octava que así mismo debe reflejarse en el anteproyecto que se informa:

“Disposición transitoria:

No se podrán reconocer retribuciones a cuenta o anticipadas del complemento de carrera profesional al personal de la Ertzaintza ni al personal del cuerpo de policía dependiente de la Administración Local”

Asimismo, es necesario añadir un párrafo más: “No se podrán reconocer derechos retributivos referidos a la carrera profesional con carácter retroactivo.”

7. Compatibilidades

Con relación al tema de la compatibilidad de actividades, se les aplican los mismos criterios que se han previsto para el personal al servicio de las Administraciones públicas vascas, especificando más limitaciones: la primera, hace referencia a que la actividad no puede deteriorar la imagen y el prestigio del cuerpo policial por ser contrarios a sus principios básicos de actuación y, la segunda, se declara la incompatibilidad de la condición de servicio activo con la de reservista de las Fuerzas Armadas.

8. Salud y Protección y condecoraciones y reconocimientos

Se modifica el capítulo V del título III que hacía referencia al acto de servicio y que ahora va a tratar sobre Salud y Protección. Establece un servicio sanitario que reglamentariamente concretará sus competencias y organización, pudiendo celebrar contratos o convenios de colaboración con profesionales médicos o entidades sanitarias públicas o privadas. Los contratos o convenios de colaboración sólo podrán firmarse por un órgano administrativo, por lo que el servicio sanitario no será competente para celebrar contratos o convenios de colaboración.

Con la redacción propuesta se recoge un servicio de inspección sobre las personas y la obligatoriedad del personal de la Policía del País Vasco de “someterse a vigilancia de la salud”.

El artículo 79.3 regula el derecho a la percepción, por una sola vez, de una cuantía concreta, a unos familiares establecidos, en los supuestos de fallecimiento con ocasión del servicio y una prestación económica periódica, en caso de jubilación forzosa si ésta es consecuencia de las condiciones reguladas en dicho párrafo.

Se incluye un nuevo capítulo V BIS, en el que se regulan las condecoraciones y reconocimientos pero limitándose a remitirlo a un desarrollo reglamentario. En los casos que reglamentariamente se determinen podrá apañarse efectos económicos a la concesión de la medalla del mérito policial.

La redacción propuesta, en su mayor parte, regula a una norma de rango superior los criterios recogidos en el Decreto 2012/2012, de 16 de octubre regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza. El Decreto mencionado se verá modificado en lo que se oponga a la norma propuesta.

9. Servicio activo modulado por edad y Segunda actividad

a) Servicio activo modulado por edad

En la redacción de la vigente ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco se puede acceder a la situación administrativa de segunda actividad por:

- Cumplimiento de una edad determinada cuya determinación, en cualquier caso, corresponde al Parlamento mediante Ley.
- Insuficiencia apreciable, y presumiblemente permanente, de las facultades físicas o psíquicas necesarias para el eficaz desempeño de las funciones propias de la categoría.

En el anteproyecto que se informa se regula la declaración en situación administrativa de segunda actividad sólo para el segundo supuesto y se propone, dentro de la situación administrativa de servicio activo, crear una tipología de la misma, el servicio activo modulado por razón de la edad, al que se accederá cuando se cumpla la edad y demás requisitos previstos en el propio anteproyecto.

La diferencia con la normativa vigente es:

- Se suprime el supuesto de pase a la situación administrativa de segunda actividad por cumplimiento de edad y se propone crear un subtipo de situación administrativa de servicio activo modulado por edad
- El pase a la situación administrativa de segunda actividad se declara de oficio. En la nueva propuesta el pase a servicio activo modulado por edad se declarará a instancia de parte.
- En la redacción de la vigente ley 4/1992, de policía se habilita al Departamento competente en materia de Seguridad a imitar el número máximo de funcionarios que podían pasar a la situación de segunda actividad en razón de la edad. Dicha posibilidad no se refleja en la propuesta presentada.
- En el anteproyecto que se informa, la solicitud se condiciona con el compromiso de petición voluntaria de jubilación anticipada al alcanzar la edad de 60 años o en su caso de cincuenta y nueve.
- En el anteproyecto se regula la posibilidad de que la persona transitoriamente pueda permanecer sin destino, supuesto que se refleja en la normativa vigente, pero se produce una modificación con relación a las retribuciones a percibir. En la ley vigente se perciben las correspondientes a la categoría y las de carácter personal que tuvieran reconocidas, incluidos trienios. En la nueva propuesta las retribuciones serían superiores ya que

percibiría las retribuciones del último puesto desempeñado, con excepción del componente singular del complemento específico.

En estos momentos la regulación de la modulación de desempeño del servicio activo por motivo de la edad se establece en el Decreto 194/2012, de 9 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013, regulando dicha "modulación" en los términos siguientes:

"Con la finalidad de hacer efectiva la protección del personal de la Ertzaintza por razones de edad o de menoscabo funcional se acuerdan las siguientes medidas:

- Reducir la jornada anual de trabajo de forma progresiva en función de la edad de la persona.
- Aplicar la exención del trabajo en horario nocturno. Si bien, aquellos que pudiendo acogerse a la exención de trabajar en ese turno, opte por continuar prestando servicios en el mismo, percibirá el incremento del importe del complemento de productividad por prestación de servicios en el turno de noche previsto en el artículo 76.2 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013."

En el anteproyecto que se informa las medidas que se proponen ya están reguladas en el Acuerdo de condiciones de trabajo, concretamente en el Decreto 194/2012. Las concretas medidas que se proponen para la aplicación de la modulación del desempeño del servicio activo por motivo de edad, son propias de materia de condiciones de trabajo y de negociación colectiva. La materia recoge una serie de especificidades para el servicio activo y no se modifica la situación administrativa de la persona afectada que sigue manteniendo la condición de servicio activo.

La regulación vigente se entiende perfectamente adecuada al principio de jerarquía normativa: por una parte, se regula la situación administrativa de servicio activo, aquella en la que el funcionario desempeña su puesto de trabajo; por otro, se "modula" la prestación de servicios a través del Acuerdo de Condiciones de Trabajo, Acuerdo que es aprobado por Decreto. No se ha aportado argumentación jurídica por el Departamento para elevar el rango normativo; es decir, para elevar a rango de Ley dicha regulación de las condiciones de trabajo.

La modulación de la situación administrativa se traduce en medidas de mejora de las condiciones laborales a la que puede acogerse la generalidad de la plantilla al cumplir 56 años. Se recoge como un derecho independiente de la disminución de las facultades físicas o psíquicas del empleado.

En todo caso hay que añadir, con relación a la regulación concreta planteada para esta situación, que si bien en el párrafo segundo se recoge que dicho reconocimiento solo procederá con la garantía de la continuidad de la prestación del servicio policial, esta propuesta resulta insuficiente. Y ello es así, ya que, por una parte, desaparece la previsión contenida en el artículo 86 de la ley 4/1992, de limitar el número de personas que anualmente pueden acceder a dicha condición atendiendo a las disponibilidades de personal existentes y a las necesidades orgánicas y funcionales del Cuerpo.

Y, por otro lado, el punto 3.d) prevé la posibilidad de que la persona podrá transitoriamente permanecer sin destino hasta tanto no se le asigne destino o se adapte el puesto de trabajo; es decir, podrá percibir las retribuciones

correspondientes al puesto de trabajo, con la excepción del componente singular del complemento específico, sin exigencia de una prestación de servicios efectiva, permaneciendo en servicio activo pero "a disposición de la Administración" (en la regulación vigente únicamente se prevé la previsión de "a disposición del Viceconsejero de Seguridad").

En la ley 4/1992, artículo 88.3, durante la permanencia en la situación de segunda actividad, el personal funcionario percibe las retribuciones básicas correspondientes a su categoría y aquéllas de carácter personal que tuviera reconocidas, incluidas las que correspondan en concepto de trienios, que continuarán perfeccionándose en dicha situación. Cuando ocupen un puesto de trabajo percibirá las retribuciones complementarias asignadas al mismo y, si por razones de servicio tuviera que prestar funciones policiales ordinarias, las propias del puesto al que éstas correspondan, en proporción al tiempo efectivo de prestación de las mismas.

En el anteproyecto que se informa el personal funcionario en situación administrativa de segunda actividad o en situación administrativa de servicio activo modulado por edad, si transitoriamente permaneciese sin destino, percibiría las retribuciones básicas de la categoría, aquellas de carácter personal que tuviera reconocidas y las retribuciones del último puesto desempeñado con excepción del componente singular del complemento específico.

En el anteproyecto de Ley de empleo Público Vasco, el personal en situación administrativa de expectativa de destino percibirá las retribuciones básicas, el complemento de carrera profesional o el grado personal consolidado, así como el cincuenta por ciento del complemento del puesto que le corresponda en el puesto de trabajo que desempeñaba antes de pasar a dicha situación, art. 151.

En el supuesto de excedencia forzosa, se prevé que las retribuciones a percibir en esta situación administrativa son: las retribuciones básicas y el cincuenta por ciento del grado profesional reconocido o, en su defecto, el cincuenta por ciento del grado personal consolidado, artículo 153.

Las retribuciones que se proponen abonar son superiores a las retribuciones atribuidas a la situación de excedencia forzosa en el régimen general de la función pública, situación ésta en la que tampoco se produce el desempeño efectivo de un puesto de trabajo.

La modificación que, con rango legal, se propone en relación con la modulación del desempeño de la función policial a solicitud del personal de la Ertzaintza, sin limitación de un número máximo de efectivos que pudieran acceder a dicha situación, con la previsión de poder acceder a una situación de expectativa de destino sin desempeño de la función policial, y sin previsión de los efectos que dicha regulación podría suponer de cara a completarla estructura de la prestación de servicios diaria en cada una de las Unidades, conforme a los procedimientos de gestión de recursos humanos vigente, entiende esta Dirección que dicha modificación adolece de un análisis o proyección de carácter económico relativo a las posibilidades de incremento de gasto en capítulo I derivadas de esta nueva regulación. Los principios de estabilidad presupuestaria vigentes en la actualidad exigen que cualquier modificación normativa, y más aún cuando la misma tiene rango de ley, venga acompañada de un análisis de los efectos económicos que puedan derivarse de su aplicación, especialmente cuando en los próximos años el incremento de la edad media del colectivo puede suponer una aplicación generalizada de dichas previsiones.

Otra de las modificaciones que incorpora el Anteproyecto es que mientras en la ley 4/1992, de policía del País Vasco, el personal funcionario declarado en situación de segunda actividad quedará a disposición del Departamento de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local, y deberá desarrollar funciones policiales ordinarias cuando razones del servicio lo requieran y mientras éstas persistan, en el anteproyecto que se informa se propone, para los puestos de servicio activo modulado por edad:

- Si excepcionalmente no puede adscribirse a un puesto o plaza podrá transitoriamente permanecer sin destino a disposición de la administración hasta tanto no se le asigne destino o se adapte el puesto de trabajo.

Con la nueva redacción la disponibilidad no se limita al desarrollo de funciones policiales ordinarias, ni su disponibilidad se concreta en el Departamento de Seguridad u órgano competente de la respectiva entidad local, sino que estará a disposición de la Administración, con lo que, en teoría, pudiera ejercer funciones distintas de las policiales y en Departamentos competentes en áreas diferentes a la de Seguridad. Se informa negativamente esta propuesta.

La propuesta presentada regula la provisión de puestos de trabajo de Administración General. La Ley de Función Pública Vasca vigente incorpora una garantía no prevista en el Anteproyecto que se informa, en el sentido de que únicamente podrán desempeñar puestos de trabajo de Administración General los empleados públicos adscritos a otros sectores de la Administración (personal docente, personal sanitario, personal de seguridad..) únicamente cuando así lo prevean las Relaciones de puestos de Trabajo de la Administración General. En consecuencia, no cabe que una normativa de carácter sectorial establezca, sin incorporar garantías adicionales, la posibilidad de que personal de la Ertzaintza y de policías locales puedan proveer puestos de trabajo de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma o del resto de las Administraciones públicas vascas reservados a personal no abiertos a desempeño de funcionarios policiales.

Por tanto, como conclusiones fundamentales se señala que la regulación de la modulación del servicio activo por razón de la edad no tiene las características para poder ser definida como una mera situación administrativa o como un "subtipo" de la situación administrativa de servicio activo, por lo que se informa negativamente la calificación como una nueva tipología en la clasificación del régimen de situaciones administrativas. La segunda conclusión es que la materia analizada es propia del área de condiciones de trabajo y de negociación colectiva y no es materia propia de regulación por norma con rango legal.

b) Situación administrativa de segunda actividad

En el artículo 86 del anteproyecto que se informa se regula la situación administrativa de segunda actividad por disminución apreciable de las facultades psíquicas o físicas, cuando la misma determine una insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las funciones propias de su categoría, sin impedirles la eficaz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial. Del texto se destaca:

- La inclusión de un apartado en el que se concreta lo que se entiende por tareas fundamentales de la profesión policial
- La solicitud de petición de servicio activo modulado por edad o del pase a la situación administrativa de segunda actividad conlleva el compromiso a la

petición de jubilación voluntaria anticipada al alcanzar la edad de sesenta años o, en su caso, de cincuenta y nueve.

- Otra diferencia es que en la normativa vigente, artículo 88 de la ley 4/1992 de policía, el personal funcionario declarado en situación de segunda actividad queda a disposición del Departamento de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local, y deberá desarrollar funciones policiales ordinarias cuando razones de servicio lo requieran y mientras éstas persistan. Asimismo podrán ocupar aquellos puestos de trabajo que resulten de susceptible desempeño por personal en situación de segunda actividad conforme a lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

Sin embargo, en el artículo 86.5 del anteproyecto que se informa, si el personal funcionario que pase a la situación administrativa de segunda actividad tiene que cesar en el puesto al que esté adscrito de no ser susceptible de desempeño por personal en situación de segunda actividad, será asignado en adscripción provisional a puestos de trabajo en la unidad en la que se encontraren prestando servicios susceptibles de tal desempeño. En el supuesto de que en la unidad no hubiera puesto vacante, la adscripción será llevada a cabo en el centro de trabajo en que, existiendo vacante, determine la Administración de entre los tres puestos propuestos por la persona interesada.

El personal del cuerpo de Policía tiene regulado en el Decreto 7/1998, de 27 de enero, modificado por Decreto 20/2012, de 16 de octubre, determinados aspectos relativos al pase a la situación administrativa de segunda actividad incluyendo en un Anexo el cuadro de incapacidades médicas para la regulación de la segunda actividad.

La segunda actividad no supone adaptación de un puesto de trabajo sino desempeño de puestos ya existentes con unas funciones propias y determinadas que son susceptibles de ser desempeñadas por personal en situación administrativa de segunda actividad. Sin embargo, si por diferentes circunstancias que se mencionan en el apartado 5 del artículo 86 no existiera puesto disponible, se adaptará funcionalmente el puesto que esta persona venía ocupando a sus nuevas capacidades, de conformidad con el dictamen del Tribunal Evaluador. Esta última previsión, sin embargo, necesita ser completada con la exigencia que el puesto a desempeñar haya sido calificado en la correspondiente relación de puestos de trabajo como puesto de susceptible desempeño por funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Para finalizar, señalar que el artículo 86 continúa estableciendo las retribuciones a percibir por el personal que se encuentra en dicha situación administrativa de segunda actividad.

10.- Permuta de destinos entre miembros de los cuerpos de policía local en servicio activo que sirvan en diferentes municipios

En materia de función pública el artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía de Euskadi reconoce una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de "Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su Administración Local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18º de la Constitución", precepto éste último que reserva al Estado, entre otras cuestiones, el

establecimiento de las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas.

El artículo 78 del Estatuto Básico del Empleado Público habilita a las leyes de función pública que desarrollen este Estatuto a establecer procedimientos de provisión en supuestos de movilidad de permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud, reingreso al servicio activo, cese o remoción de los puestos de trabajo y supresión de los mismos.

El supuesto de permuta necesita una regulación en las leyes de función pública que desarrollen este Estatuto. Existe un anteproyecto de ley de empleo público vasco en el que en el capítulo VI del título VIII, expresamente prevé supuesto de movilidad del personal empleado público entre ellos: movilidad por razón de violencia de género; movilidad por razón de violencia terrorista; movilidad por motivos de salud; movilidad por sanción disciplinaria de traslado forzoso y movilidad entre Administraciones Públicas Vascas.

El propio Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que se aplica al personal funcionario y en lo que procede al personal laboral al servicio, entre otras, de la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales (art. 2.1), dispone en concreto en su artículo 3.1 que: "el personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de la Comunidad Autónoma, con respeto a la autonomía local".

En el anteproyecto que se informa se propone añadir una disposición adicional, vigesimoprimera, en la que se habilita a las personas titulares de las Alcaldías a autorizar permutas. En dicha disposición se recogen los requisitos que deben cumplirse para autorizar las mismas. Siendo obligación de la Administración respetar y garantizar los principios de igualdad, el procedimiento que se aplique debe garantizar los principios de publicidad y concurrencia.

11. Alguaciles y Agentes de Movilidad

1.- Alguaciles

"Artículo 117:

1. En los ayuntamientos que no dispongan de cuerpo de Policía Local podrán crearse hasta un máximo de cinco plazas de alguaciles para el desempeño de las funciones comprendidas en los párrafos a), b), d), f) e i) del artículo 27.1 de esta Ley.

5. Las plazas de alguacil serán ocupadas por funcionarios o funcionarias de carrera pertenecientes al grupo de clasificación C-2o equivalente, resultándoles de aplicación el estatuto aplicable al funcionariado de la Administración local, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo."

"Disposición Transitoria Séptima.- Alguaciles:

1. Donde no exista cuerpo de policía local, los alguaciles, vigilantes o funcionarios con funciones semejantes, cualquiera que sea su denominación, pasarán a denominarse alguaciles.

2. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de esta ley esté desempeñando puestos configurados como de alguaciles según esta ley, podrá seguir desempeñándolos. Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, de alguacil, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como méritos los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición."

"Disposición Transitoria Octava – Integración de Alguaciles en los cuerpos de policía local

Los alguaciles que, al tiempo de crearse el cuerpo de policía Local, se encontrasen prestando servicios en el Ayuntamiento de que se trate, se integrarán en el Cuerpo de Policía Local mediante la superación de un concurso restringido con dispensa de los requisitos de edad y estatura y la superación del curso que se establezca por la Academia Vasca de Policía y Emergencias."

a.- Cuando no exista cuerpo de policía local en el Ayuntamiento

En un principio, estamos de hablando de dos procesos, el primero es la unificación de denominación de todos aquellos que realizan las funciones asignadas a los alguaciles pero que pueden tener varias denominaciones, así como atribuirse las mismas al personal funcionario de carrera.

La modificación en la denominación de plazas previamente existentes, precisamente a la de vigilante municipal, en realidad supone la conversión de esas plazas en plazas reservadas para funcionarios de carrera del grupo C2, para el desempeño de las funciones comprendidas en los párrafos a), b), d), f) e i) del artículo 27.1 de la Ley 4/1992:

- a) Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones
- b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación
- d) Policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en el ámbito de las competencias locales en dichas materias.
- f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil
- i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

Se cuestiona si las funciones asignadas son propias de los puestos clasificados para su desempeño como reservados a personal funcionario de carrera. La delimitación de cuáles sean estas funciones públicas en las Corporaciones Locales se reflejan en la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 5/2015,

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería.

La norma transcrita expresamente excluye al personal laboral del ejercicio de una serie de funciones. En la redacción propuesta debería aclararse este extremo adicionando en el articulado un párrafo o coetilla en el que se remitiera a la disposición citada.

La situación efectiva puede ser que exista personal laboral que está desempeñando dichas funciones. El personal laboral fijo podrá seguir desempeñando estos puestos y podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna como establece la disposición transitoria séptima.

Una de las competencias que corresponde a la Corporación Local es la aprobación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones y el establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos – art. 129.3 a) y b) del real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local – las cuales, subescalas, clases y categorías quedarán agrupadas, conforme a la legislación básica del estado, en los grupos que ésta determine de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.

b.- Cuando se cree cuerpo de policía local en el Ayuntamiento

La figura del alguacil se crea en los ayuntamientos que no dispongan de Policía Local. Si con posterioridad se crea el cuerpo de Policía Local en ese Ayuntamiento, se cuestiona qué sucede con el personal alguacil. La figura del alguacil debería desaparecer. La disposición transitoria octava habla de integración, pero la integración sólo sería aplicable al personal funcionario de carrera alguacil. En consecuencia, en función del artículo 75.1 del EBEP por el cual el personal funcionario se agrupa en cuerpos, escalas o especialidades en función de las competencias acreditadas a través de un proceso selectivo, el personal alguacil funcionario de carrera se integra en el cuerpo de policía, para el cual deberá cumplir los requisitos, incluido el de titulación y tras superar un curso restringido. Si no supera el concurso permanecerá como alguacil encategoría a extinguir.

El alguacil laboral fijo, una vez creado el cuerpo de policía local en ese ayuntamiento, continuará desempeñando sus funciones en puesto a extinguir.

El personal que voluntariamente no acceda o no supere tal proceso selectivo permanecerá en los puestos que ocupe sin menoscabo alguno de sus expectativas de promoción profesional.”

Dictamen nº 213/2011 de la COJUA:

“83. Ante el proceso de reconversión de las plazas a la nueva escala, el normador ofrece a este personal la posibilidad de variar el título jurídico que le une a la Administración, pasando de laboral a funcionario.

84. La Disposición transitoria segunda del EBEP se refiere al personal laboral fijo que desempeña funciones de personal funcionario o que pasa a desempeñarlos.

85. El proceso de novación del título jurídico de laboral a funcionario que debe llevarse a efecto, está configurado como un proceso selectivo restringido para el personal laboral fijo, vinculado a la promoción interna y que debe convocarse mediante el sistema de concurso-oposición, valorándose los servicios prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas que en su momento se superaron para adquirir tal condición, y requiere acreditar la titulación y los demás requisitos exigidos. Además debe calificarse de excepcional y extraordinario, según la STC 99/1987, de 11 de junio, no pudiendo repetirse el proceso sobre las mismas plazas a lo largo del tiempo y respetando siempre la estabilidad en el trabajo del personal que no concurra al proceso.

86. En definitiva, el precepto que analizamos cumple con los requisitos exigidos en el EBEP. Sin embargo, esta disposición transitoria segunda del EBEP vincula temporalmente la posibilidad de novación del título jurídico a aquellos que a la fecha de entrada en vigor del EBEP estén desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha.

87. No obstante, no ofreciendo duda legal alguna la posibilidad citada, la discrepancia que pudiera suscitar entre límite temporal con el anteproyecto, que toma como referencia su entrada en vigor, debe ser relativizada, ya que la clasificación de puestos que constituye el presupuesto de hecho de ambas normas proviene del EBEP.

88. En efecto, considerando que el artículo 9.2 del EBEP establece qué tipo de funciones deben ser desempeñadas, en todo caso, por funcionarios y que remite a las leyes de cada Administración los términos de su desarrollo, una interpretación coherente y conforme con el sistema diseñado nos llevaría a determinar que el cambio normativo que produce el EBEP es suficiente para justificar el cambio de criterio de la Administración, de modo que la fecha a tener en cuenta es la de la entrada en vigor de la ley que define esos puestos como de funcionarios."

Estas propuestas suponen cambio de categoría y portanto tendría repercusión económica.

Por un lado integra al personal alguacil en la policía local y por otra, el funcionario alguacil tiene categoría C2, no tiene titulación equivalente C1 y se le aplica el estatuto de funcionario de la administración local, y no puede portar armas.

Deberá aprender el uso de las armas por lo que la expresión "pasando previamente un curso de formación en la Academia de Policía", quiere decir que deberá completar los conocimientos de que carezca para poder ejercer las funciones de policía local y ser posible una integración efectiva en el cuerpo de policía local.

La disposición transitoria octava debe incluir en su redacción que tal integración sólo se aplicará al personal funcionario de carrera alguacil y no al personal laboral alguacil. Debe especificarse en qué condiciones queda el personal afectado.

Se debe añadir, además, que la integración no supondrá incremento del gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen

percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporte se absorberá en otras retribuciones complementarias.

2.- Agentes de Movilidad

"Artículo 121:

1. En los municipios de gran población podrá asignarse, por el Pleno de la Corporación, la parte del personal funcionario perteneciente a la misma para el exclusivo ejercicio de las funciones de ordenación, señalización y regulación del tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las normas de tráfico y seguridad vial, con la denominación de agentes de movilidad, de manera que ello no comporte un incremento en el número de efectivos ni en los costes de personal.

3. Para el acceso a tales plazas se requerirá la titulación correspondiente al grupo de clasificación C-2 o equivalente, y deberán superar previamente un curso teórico-práctico en la Academia Vasca de Policía y Emergencias o en centros formativos municipales delegantes por aquélla, rigiéndose en todo lo demás por la normativa común prevista para los funcionarios públicos locales."

Crea la categoría de agente de movilidad. Con efectivos ya existentes. Tendrá carácter voluntario.

La aplicación de lo previsto en la presente Ley no podrá suponer incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo los integrantes de la escala básica de los cuerpos de policía del País Vasco, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias.

Según sentencia del Tribunal Constitucional, de 1 de febrero de 2006, "el sistema general de exigencia de titulación académica para el acceso a la función pública parte de dos principios rectores al respecto: uno la consideración de los títulos como criterio taxonómico para clarificar los cuerpos, escalas, clases y categorías de funcionarios (art. 25 de la ley 30/1984) y otro la exigencia de promoción interna del personal se haga respetando esos títulos (art. 22.1) (STC 2388/1993).

"El desconocimiento de tales principios menoscaba la capacidad como requisito absoluto para el desempeño de cada puesto y niega el mérito como elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso o nombramiento."

12. Integración del personal funcionario de la policía local en la escala superior

Estructura actual

Escala superior, Superintendente e Intendente – A1
 Escala Ejecutiva – Comisario y Subcomisario – A2
 Inspección Oficial y Suboficial – C1
 Básica Agente Primero y Agente
 Escala básica para el acceso titulación equivalente C2-

Una vez nombrados serán clasificados en el cuerpo A, con la categoría de agente primero en la escala básica, con efectos económicos y administrativos limitados al ámbito de la Ertzaintza.

Estructura propuesta

Escala superior, Intendente – A1

Escala Ejecutiva – Comisario y Subcomisario – A2

Inspección Oficial y Suboficial – C1

Básica Agente Primero y Agente – C1

Para el acceso a la escala básica se deberá portar titulación equivalente a la C1

La disposición Transitoria Quinta regula la integración del personal funcionario local y establece: para aquel personal con la categoría de intendente, su integración automática en la Escala Superior y, para el personal con la categoría de Comisario y Subcomisario, su integración automática en la escala ejecutiva.

Expresamente, con relación al personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local que hubiera obtenido plaza de nivel A con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, y que en virtud de su disposición adicional tercera fueron integrados en categorías de nivel inferior a la de la plaza obtenida, quedará integrado en la escala superior.

Concretamente se dispone que tal integración no suponga incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que viene percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporta se absorberá en otras retribuciones complementarias.

En dicha disposición transitoria lo que se propone es una reclasificación en la que no hay modificación ni en la escala, ni en el cuerpo, ni para la categoría de intendente ni para las categorías de Comisario y Subcomisario.

13.- Puestos de jefatura que resulten modificados

El artículo 118 del anteproyecto que se informa ~~pro~~cede a estructurar los cuerpos de policía local concretando, las escalas y categorías de las que las administraciones locales deben proveerse dependiendo de dos condicionantes que deben cumplirse simultáneamente, el número de habitantes del municipio y el número de efectivos.

En el Decreto 58/2015, de 5 de mayo, por el que se establecen las normas marco aplicables a la organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de Euskadi, que seguirá en vigor en todo lo que no contradiga a la ley, en el artículo siete define las funciones que son propias de cada escala y categoría.

Todos los Reglamentos del Cuerpo de Policía Local deberán adaptarse a lo dispuesto en este Decreto en un plazo de tres años. Dicha circunstancia puede suponer que haya personal funcionario, que actualmente ejerce las funciones de jefatura, que se encuentre ocupando puestos de jefatura que resultan modificados.

No se determina en el articulado del anteproyecto ~~de~~ ley cuál es la situación cuando, una vez estructurada la plantilla con relación a los criterios de número de población y número de plantilla, estos parámetros, como por ejemplo el número de personas empadronadas en el municipio, varían con la entidad suficiente como para

que la estructura de escalas ya no sea acorde con la nueva redacción del artículo 118.

Una vez acreditada dicha evolución de los datos, hay que volver a realizar una reestructuración de los puestos, acorde a la nueva situación. Si bien, habida cuenta de la relevancia de la cuestión, la determinación de si se han producido dichas variaciones deben basarse en una información de entidad y de identidad suficiente como para que se garantice la consolidación del cambio de circunstancias, como puede ser el padrón.

Las actuaciones en cumplimiento de dicha obligación supondrán: en el supuesto de una disminución de la categoría de jefatura, la amortización de los puestos de trabajo de jefatura vacantes; es decir, que carezcan de titulares. En los casos en que estos puestos tuvieran titular, el personal funcionario continuará en el desempeño de los mismos y el puesto se clasificará con la condición de "a extinguir" de modo que, en el momento que quede vacante, se producirá la extinción automática.

En el supuesto de que la modificación, como consecuencia de la variación de los baremos aplicados para la clasificación de las escalas, produjeran una modificación al alza, el personal funcionario continuará en el desempeño de los mismos rigiéndose por las condiciones por las que fueron nombrados y percibiendo las retribuciones efectivamente asignadas al puesto de trabajo ocupado.

Dicha modificación del puesto que desempeña no significa que el personal funcionario percibirá una mayor cuantía que las retribuciones asignadas al puesto de trabajo ocupado y, en consecuencia, no cabe que consolide derechos sobre las retribuciones complementarias, de cualquier denominación, que pudieran habersele asignado hasta ahora con la finalidad de retribuir las funciones de jefatura que esté desempeñando.

En todo caso, esta modificación no supondrá un incremento de gasto público ni una modificación de las retribuciones totales anuales que perciba el personal funcionario.

Con la redacción propuesta para la Disposición Transitoria sexta, párrafo 2 del apartado 2, se entiende que es posible la integración en la categoría correspondiente al puesto recalificado, solamente con que se posea uno de los siguientes requisitos:

- o que se tenga destino definitivo en dicho puesto durante los últimos cinco años antes de la entrada en vigor de la Ley de Policía.
- o que se posea el título correspondiente a dicha categoría
- o que se hayan realizado los cursos de capacitación previstos en el artículo 59.2 de la Ley de Policía del País Vasco convocados o que se convoquen antes de la adaptación
- o se superase un curso teórico-práctico de acreditación profesional impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

En la redacción dada, es posible la integración cuando se produzca alguno de los siguientes requisitos:

- Tenga su destino definitivo en el mismo durante los últimos cinco años
 - o No se le exige que cumpla el requisito de titulación correspondiente a dicha categoría

- No se le exige que haya superado un curso de capacitación previsto en el artículo 59.2 de la Ley de Policía
- No se le exige que haya superado un curso teórico-práctico de acreditación profesional
- Tenga la titulación correspondiente a dicha categoría
 - No se le exige que tenga destino definitivo en el mismo durante los últimos cinco años
 - No se le exige que haya superado un curso de capacitación previsto en el artículo 59.2 de la Ley de Policía
 - No se le exige que haya superado un curso teórico-práctico de acreditación profesional
- Haya superado el curso de capacitación previsto en el artículo 59.2 de la Ley de Policía
 - No se le exige que tenga destino definitivo en el mismo durante los últimos cinco años
 - No se le exige que cumpla el requisito de titulación correspondiente a dicha categoría
 - No se le exige que haya superado un curso teórico-práctico de acreditación profesional
- Haya superado un curso teórico-práctico de acreditación profesional
 - No se le exige que tenga destino definitivo en el mismo durante los últimos cinco años
 - No se le exige que cumpla el requisito de titulación correspondiente a dicha categoría
 - No se le exige que haya superado un curso teórico-práctico de acreditación profesional.

Sobre este punto se procede a transcribir la sentencia del Tribunal Constitucional, STC de 13/2010:

"La pretendida dispensa de titulación implica un desconocimiento de los principios de mérito y capacidad previstos para el acceso a la función pública, que menoscaba la capacidad como requisito absoluto para el desempeño de cada puesto de trabajo concreto y niega el mérito como elemento relativo de comparación y preferencia para el acceso a nombramiento, STC 388/1993, de 23 de diciembre [RTC 1993,388], F2) en la medida que rompe el régimen general aplicable en todo el territorio nacional que, indudablemente, está en el fundamento de lo básico."

Por ello debemos considerar que la necesaria flexibilidad a la que hemos aludido, y que es preciso reconocer a la Comunidad Autónoma en orden a la adaptación de su organización para asumir las funciones y servicios asumidas en su momento mediante el correspondiente proceso de traspasos, no puede llegar hasta el punto de obviar la exigencia de un requisito previsto con carácter general por la normativa básica estatal. Es claro que no resulta posible acceder a la condición de funcionario de carrera si se carece de uno de los requisitos exigidos para ello por la normativa que, en el momento en que se produce dicho acceso, resulte de aplicación, como sucede en el presente caso con el requisito de la titulación, el cual viene impuesto tanto por la normativa básica estatal como por la propia normativa canaria en materia de función pública (artículos 23 y 24 de la ley 2/1987 [LCAN 1987, 943])."

El Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de septiembre de 2006, señala que la flexibilidad organizativa de la Comunidad Autónoma no puede obviar la exigencia de un requisito previsto con carácter general por la normativa básica estatal.

Se recoge a continuación el parecer de la COJUAE en su dictamen nº 213/2011:

"Párrafo 81. En este ámbito, hemos de reseñar que la posibilidad de que quien no tenga la titulación pueda proveer los puestos reservados a dicha escala con la superación de un curso de especialización que habilite para su desempeño supondría desconocer el sistema diseñado por EBEP y al que nos hemos referido anteriormente, así como que la creación de una escala está basada en que el tipo de funciones a desempeñar requiere una determinada cualificación profesional para cuyo ejercicio habilita la titulación exigida en el acceso."

Vista la Sentencia del Tribunal Constitucional y el informe de la COJUAE transcrito, se concluye que con relación a la integración del personal a los nuevos puestos de jefatura de los cuerpos de policía Local ésta debe adaptarse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al parecer emitido por la COJUAE en sus dictámenes, resultando por tanto necesario el cumplimiento del requisito de la titulación suficiente.

14. Creación de bolsas para el nombramiento de personal interino en los Cuerpos de la policía local

El fundamento del nombramiento de un funcionario interino son razones de urgencia y necesidad si bien, por imperativo legal, la selección del funcionario interino habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art. 10.2 EBEP).

Para ello esta Administración, mediante Resolución 14/2006, de 31 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2006, sobre selección del personal para la prestación de servicios de carácter temporal en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

En el mismo se recogen los principios de actuación entre los que se destacan la igualdad, de acuerdo con los requisitos generales de acceso al empleo público y los requisitos del puesto y el mérito y capacidad utilizados para integrar a las personas candidatas en las bolsas y que condicionan el orden obtenido en las mismas.

Los criterios de constitución de las bolsas de trabajo se plasman en el artículo 4 del acuerdo; las bolsas de trabajo se constituirán de acuerdo a los cuerpos, opciones o escalas y categorías laborales de la Administración General de la CAPV y que las ofertas de empleo público serán el instrumento preferente para la creación de bolsas de trabajo, si bien se podrá acordar la realización de convocatorias específicas de selección de personal para la cobertura de puestos con una especial cualificación profesional o, en supuestos de carácter excepcional, a criterio de la Dirección de Función Pública.

En el artículo 120 se establece que la Administración Local, cuando tenga necesidad de cubrir puestos de trabajo de forma urgente y temporal, podrá utilizar los mecanismos de cooperación intermunicipal o nombrar interinas o interinos según lo establecido en la legislación de función pública general, siempre que se garantice una formación básica de este personal para el desempeño de su labor.

En el anteproyecto propuesto a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el artículo 120 de la ley de policía, se le habilita para formar bolsas de trabajo para

el nombramiento de funcionarios o funcionarias interinos o interinas en los cuerpos de la policía local con aquellas personas que hayan superado un curso básico específico organizado por ella. Las condiciones de acceso al curso se determinarán por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

La competencia en formación de la Academia Vasca de policía y emergencias se atribuye en el artículo 8.1.h) del decreto 96/2010 de 30 de marzo de estructura de la Academia de Policía del País Vasco. Su denominación de Academia Vasca de policía y Emergencias deviene del decreto de estructura orgánica del departamento de seguridad:

"8.1.h) Dirigir, planificar, y supervisar los planes de estudios y los cursos de formación y perfeccionamiento de los miembros de los cuerpos de la policía del país Vasco, servicio de seguridad privada, servicios de emergencia, voluntarios y ciudadanos relacionados con la emergencia y la protección civil."

La siguiente cuestión delimita el procedimiento de selección del personal interino con la exigencia de una especial cualificación acreditada mediante la superación de un curso que sólo puede realizarse en la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

En este sentido la Sentencia nº 333/2011 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Bilbao – recurso contencioso-administrativo / Procedimiento abreviado 942/2009, en el que se recurre la convocatoria de una bolsa de trabajo de agente zuzuenear, así como las bases generales de la convocatoria efectuadas por el IVAP, desestima el recurso contencioso-administrativo ya que:

- La convocatoria y las bases generales redactadas por el IVAP se atienen a los criterios establecidos por la Dirección de Función Pública del Gobierno Vasco
- Se satisfacen los principios de igualdad, mérito y capacidad y se garantiza la continuidad del estándar mínimo de calidad prestacional con la mayor inmediatez posible

CUARTO.- "Entrando ya en el fondo del asunto, el artículo 3 de la Resolución 14/2006, de 31 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2006, sobre selección del personal para la prestación de servicios de carácter temporal en la Administración general de la comunidad autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos refiere que: La gestión de bolsas de trabajo corresponde a la dirección de función pública del departamento de Hacienda y Administración Pública". El Art. 4.3. párrafo primero que: "Asimismo, la Dirección de Función Pública podrá acordar la realización de convocatorias específicas de selección de personal para la cobertura de puestos con una especial cualificación profesional", y el Art. 23.3 que: "El Director del IVAP, de conformidad con los criterios establecidos por la Dirección de Función Pública, aprobará las bases de las convocatorias que regirán estos procesos electivos (convocatorias específicas), en las que se concretarán las pruebas y/o méritos evaluables así como su ponderación en el proceso selectivo."

Así las cosas, con fecha 10 de febrero de 2009 el Director de Función Pública redactó el "informe sobre la necesidad de creación de la bolsa de trabajo de agente Zuzenean" para el director del IVAP, cuyo preámbulo refiere expresamente que "debido a las necesidades surgida en esta Administración para la provisión de puestos de Agentes Zuzenean, se propone una convocatoria específica, a través de los medios de comunicación para crear una Bolsa de trabajo de agente Zuzenean y se informa losiguiente..."

Por todo lo expuesto, procede desestimar el primer motivo del recurso, toda vez que la convocatoria y las bases generales redactadas por el IVAP se atienen a los criterios establecidos por la Dirección de Función Pública del Gobierno Vasco.

QUINTO.- Con fecha 15 de febrero de 2009 se anunció en el diario El Correo la "Convocatoria de Cursos de Formación Preceptivos para Bolsa de Trabajo de Agentes Zuzenean-Servicio de Atención a la Ciudadanía del Gobierno Vasco", siendo que a través de esta convocatoria se ofertan 10 cursos dirigidos a 150 personas que deseen participar, tras la superación del curso, en ofertas de Bolsas de Trabajo o en Ofertas de Empleo Público del puesto de Agente Zuzenean" (Doc. 5 demanda).

Se trata por tanto de una convocatoria ofertada a toda la ciudadanía en general, sin otros requisitos específicos que los relativos a la titulación (bachiller técnico/a superior o equivalente) y el perfil lingüístico (PL2 o equivalente), cuyo carácter objetivo referenciado al puesto de trabajo ofertado obra fuera de discusión.

El Art 23.1 de la Resolución 14/2006, de 31 de mayo establece que: "Las convocatorias públicas para la ampliación de bolsas de trabajo consistirán en la celebración de una o más pruebas de capacidad o la calificación de méritos o ambas conforme a un baremo preestablecido. En todo caso, se valorará el conocimiento del euskera, para cuya acreditación los candidatos deberán aportar las certificaciones de los perfiles lingüísticos correspondientes o títulos a ellos homologados."

La norma no prohíbe la realización de cursos formativos previos a la convocatoria pública propiamente dicha. En este sentido, es lícito suponer que el desarrollo del proceso selectivo en el ámbito de la CAV, directamente, atendiendo a tan genéricos requisitos específicos, supondría una ingente cantidad de solicitudes (prima facie muy superior a las 150), con la consiguiente dificultad procedimental y retraso temporal; de manera que, una vez satisfechos los principios de igualdad, mérito y capacidad a través de la oferta formativa abierta a la totalidad del cuerpo social, resulta perfectamente legítimo acotar el ámbito subjetivo de participación posterior, atendiendo a criterios de eficiencia administrativa. En efecto, "ante la falta de personal disponible" (F.3Ext) y la consiguiente urgencia en suplir la misma dado el carácter vertebrador de la relación Gobierno Vasco – administrado atribuido al Servicio de Atención a la Ciudadanía (F 12 Ext), se trata de garantizar la continuidad del estándar mínimo de calidad prestacional con la mayor inmediatez posible.

En la convocatoria del proceso selectivo los requisitos exigidos para el acceso a los cursos eran objetivos y generales; esto es, titulación oficial y perfil 2 de euskera. Asimismo, tras una valoración de las necesidades presentes y futuras se optó por delimitar un número concreto de cursos. En la sentencia se valora que una oferta formativa abierta a la sociedad en su conjunto, previa a la convocatoria pública propiamente dicha, satisface los principios de igualdad, mérito y capacidad y, por tanto, resulta perfectamente legítimo acotar el ámbito subjetivo de participación posterior, atendiendo a criterios de eficiencia administrativa.

En la propuesta planteada por el Departamento de Seguridad, pudiera estudiarse la legitimidad y la oportunidad de una convocatoria específica, a través de los medios de comunicación, abierto al cuerpo social, delimitando unos requisitos objetivos y generales para el acceso a los cursos. Habría previamente que valorar y concretar: los criterios para delimitar el número de plazas del curso que se oferten; los criterios de selección, de entre las todas las solicitudes presentadas, de los que van a poder acceder al curso; la relación jurídica del alumnado; el análisis del coste real de estos cursos y el proyecto de gestión de los mismos.

Conclusiones:

1.- Se considera necesario regular en la propia ley el porcentaje máximo en el que pueden verse modificadas el número de plazas convocadas en las bases de un proceso selectivo sin que sea preciso la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.

2.- En la nueva redacción que se propone para el artículo 48 con relación a los órganos de selección, hay que añadir, por homogeneidad con el proyecto de Ley de Empleo Público, como personal que no puede participar en los mismos: al personal que actúe en representación o por cuenta de los sindicatos, de asociaciones de funcionarios/as o de colegios profesionales.

Asimismo debe añadirse, con relación a los asesores expertos que participen en los procesos selectivos, que su actuación también se encuentra sometida a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

3.- La efectividad de la implantación y aplicación de las distintas modalidades de carrera profesional horizontal requerirá necesariamente de la correspondiente regulación por parte de cada una de las Administraciones Públicas vascas, estando dicha efectividad de la carrera profesional sometida, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias de las respectivas Administraciones. Deberá respetarse la legislación básica regulada en las leyes vigentes en materia de función pública así como su desarrollo reglamentario. Actualmente la carrera profesional horizontal no se encuentra desarrollada. Sin embargo, se encuentra en tramitación un anteproyecto de la LEPV en el que se atribuye al Gobierno Vasco elaborar un reglamento sobre desarrollo profesional y evaluación del desempeño, que contendrá los criterios básicos de aplicación al respecto, en el conjunto de las Administraciones Públicas vascas, de acuerdo con los criterios que al respecto señale la Comisión de Coordinación de Empleo Público de Euskadi.

La legislación que debe aportar la homogeneidad al conjunto de las Administraciones Públicas Vascas ha de ser la Ley de Empleo Público Vasco y, el Anteproyecto de la misma, incluye una disposición transitoria octava que así mismo debe reflejarse en el anteproyecto que se informa:

“disposición transitoria:

No se podrán reconocer retribuciones a cuenta o anticipadas del complemento de carrera profesional al personal de la Ertzaintza ni al personal del cuerpo de policía dependiente de la Administración Local

Se considera adecuado añadir un párrafo más: “No se podrán reconocer derechos retributivos referidos a la carrera profesional con carácter retroactivo.”

4.- En el anteproyecto que se informa las escalas de inspección y básica se clasifican ambas en el grupo C, subgrupo C1. En consecuencia, la titulación exigida para el acceso es la que corresponda a dicho subgrupo C1.

5.- Con relación a la integración del personal a los nuevos puestos de jefatura de los cuerpos de policía Local, el procedimiento debe adaptarse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al parecer emitido por la COJUE en sus dictámenes.

6.- La disposición transitoria octava debe incluir en su redacción que tal integración sólo se aplicará al personal funcionario de carrera alguacil y no al personal laboral alguacil. Debe especificarse en qué condiciones queda el personal afectado

El personal alguacil funcionario de carrera se integra en el cuerpo de agente, para el cual deberá cumplir los requisitos, incluido el de titulación y tras superar un curso restringido.

Por un lado integra al personal alguacil en la policía local y por otra, el funcionario alguacil tiene categoría C2, no tiene titulación equivalente C1, se le aplica el estatuto de funcionario de la administración local, y no puede portar armas.

Deberá aprender el uso de las armas por lo que la expresión "pasando previamente un curso de formación en la Academia de Policía", quiere decir que deberá completar los conocimientos de que carezca para poder ejercer las funciones de policía local y ser posible una integración efectiva en el cuerpo de policía local.

Se debe añadir, además, que la integración no supondrá incremento de gasto público ni modificación del cómputo anual de las retribuciones totales que vienen percibiendo, por lo que el incremento en las retribuciones básicas que dicho cambio comporte se absorberá en otras retribuciones complementarias.

7- Se añade una disposición adicional vigesimoprimera regulando la figura de la permuta entre personal funcionario de los cuerpos de la policía local. Siendo obligación de la Administración respetar y garantizar los principios de igualdad, el procedimiento que se aplique debe garantizar los principios de publicidad y concurrencia.

8.- Se modifica el capítulo V del título III que hacía referencia al acto de servicio y que ahora va a tratar sobre Salud y Protección. Establece un servicio sanitario que reglamentariamente concretará sus competencias y organización, pudiendo celebrar contratos o convenios de colaboración con profesionales médicos o entidades sanitarias públicas o privadas. Los contratos o convenios de colaboración sólo podrán firmarse por un órgano administrativo y no un servicio.

9.- Las concretas medidas que se proponen para la aplicación de la modulación del desempeño del servicio activo por motivo de edad, ya están reguladas en el Acuerdo de condiciones de trabajo, concretamente en el Decreto 194/2012. Dichas medidas son propias de la materia de condiciones de trabajo y de negociación colectiva. La materia recoge una serie de especificidades para el servicio activo y no se modifica la situación administrativa de la persona afectada que sigue manteniendo la condición de servicio activo.

La regulación de la modulación del servicio activo por razón de edad no tiene las características para poder ser definida como una nueva situación administrativa o como un "subtipo" de la situación administrativa de servicio activo, **por lo que se informa negativamente la calificación como una nueva tipología en la clasificación del régimen de situaciones administrativas:**

- Es materia propia del área de condiciones de trabajo y de negociación colectiva y no es materia propia de regulación por norma con rango legal
- Se recoge como un derecho independiente de la disminución de las facultades físicas o psíquicas. Se reconoce a instancia de la persona interesada, con el único requisito del cumplimiento de edad.

- Se suprime la habilitación al Departamento de Seguridad de limitar el número máximo de funcionarios que podían pasar a la situación de segunda actividad en razón de la edad, para cada año natural y categoría, atendiendo a las disponibilidades de personal existentes y a las necesidades orgánicas y funcionales del Cuerpo.
- La persona funcionaria afectada puede transitoriamente permanecer sin destino hasta tanto no se le asigne destino o se adapte el puesto de trabajo es decir, sin exigencia de una prestación de servicios efectiva, permaneciendo en servicio activo pero "a disposición de la Administración" (en la regulación vigente únicamente se prevé la previsión de "a disposición del Viceconsejero de Seguridad").
- Según la ley de Función Pública Vasca únicamente podrán desempeñar puestos de trabajo de Administración General los empleados públicos adscritos a otros sectores de la Administración únicamente cuando así lo prevean las Relaciones de puestos de Trabajo de la Administración General. No cabe que se prevea que el personal de la Ertzaintza y de policías Locales puedan proveer puestos de trabajo de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma o del resto de las Administraciones Públicas vascas reservados a personal no abiertos al desempeño de funcionarios policiales
- En dicha situación podrá el Anteproyecto disponer que se percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo, con la excepción del componente singular del complemento específico, lo cual supone la percepción de unas retribuciones inferiores a las que se corresponden con su situación de servicio activo pero superiores a las retribuciones atribuidas a la situación de excedencia forzosa en el régimen general de la función pública, situación ésta en la que tampoco se produce el desempeño efectivo de un puesto de trabajo.
- Los principios de estabilidad presupuestaria vigentes en la actualidad exigen que cualquier modificación normativa venga acompañada de un análisis de los efectos económicos que puedan derivarse, no consta dicho análisis en el expediente.

10.- Con relación a la declaración en segunda actividad, en la normativa actual, artículo 88 de la ley 4/1992 de policía, el ejercicio de la segunda actividad queda a disposición del Departamento de Interior u órgano competente de la respectiva entidad local y sus funciones deben realizarse dentro del cuerpo a que se pertenezca ejerciendo funciones de inspección, prevención, formación u otras acordes con su categoría. Asimismo podrán ocupar aquellos puestos de trabajo que resulten de susceptible desempeño por personal en situación de segunda actividad conforme a lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

En el anteproyecto que se informa, en el artículo 8.5 del anteproyecto, será asignado en adscripción provisional a puestos de trabajo en la unidad en la que se encontraren prestando servicios susceptibles de tal desempeño. En el supuesto de que en la unidad no hubiera puesto vacante, la adscripción será llevada a cabo en el centro de trabajo en que, existiendo vacante, determine la Administración de entre los tres puestos propuestos por la persona interesada y, si ello no fuera posible, podrá pasar a prestar servicios complementarios adecuados a su categoría y titulación en otros puestos de trabajo de la Administración a la que pertenezcan. Esta última previsión, sin embargo, necesita ser completada con la exigencia que el puesto a desempeñar haya sido calificado en la correspondiente relación de puestos de trabajo como puesto de susceptible desempeño por funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La regulación de la situación administrativa de segunda actividad, incorpora previsiones que son informadas negativamente por:

- Prever la posibilidad de que el personal funcionario declarado en situación de segunda actividad pueda quedar "a disposición de la administración" en vez de a "disposición del Departamento de Seguridad."
- Prever que el personal de la Ertzaintza y de policías Locales puedan proveer puestos de trabajo de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma o del resto de las Administraciones Públicas vascas reservados a personal no abiertos al desempeño de funcionarios policiales sin incluir la cláusula de garantía que únicamente podrá realizarse dicha adscripción cuando haya sido calificado el correspondiente puesto de trabajo como puesto de susceptible desempeño por funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En Vitoria-Gasteiz, a de diciembre de 2015

Fdo.: Carmen Miralles Jordá

Asesora Jurídica

Vº Bº

Fdo.: Juan Maria Barasorda Goicoechea

EL DIRECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA



**29/2015 TXOSTENA, ABENDUKOA, FUNTZIO PUBLIKOAREN
ZUZENDARITZARENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIAREN
LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETAREN LEGE-AURREPROIEKTUARI
BURUZKOA**

I. ESKUMENA

Txosten hau egin da uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, Euskal Funtzio Publikoarenak, 6.1.a) artikuluan ezarritakoaren bidez, abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta sail horien egitza eta jardun-arloak finkatzen dituenak, 6.1 artikuluan xedatzen duenarekin lotuta eta apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, 16.a) artikuluan ezarzen duenarekin lotuta.

Funtzio publikoari berariaz edo ondorio gisa eragiten dioten alderdiak baino ez ditu aztertzen, eta, beraz, zuzendaritza honek ez du gainerako gaiak kontuan hartuko.

II. XEDEA ETA HELBURUA

Aztertzen ari garen lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legea aldatzea da, egungo premietara eta etorkizunean gizarteak eskatuko dituenetara egokitzeko, herritarren zerbitzuan herritarrengandik hurbilago jardungo duen polizia-eredu batean sakonduz.

Aldaketak egiteko, honako hauek hartu dira aintzat: gerora sortutako estatuko legeak edo lege autonomikoak; indarreko araudia eta araudi hori interpretatzen duten erabaki judizialak aplikatzen metatutako esperientzia; Ertzaintzaren modernizazio-proiektuen testuingurua; eta Eudel - Euskal Udalen Elkartearekin sinatutako lankidetzaren hitzarmenetik eratorritako lantaldeetan azken urte hauetan garatutako lanen emaitza.

Lortu nahi diren helburuak hauek dira:

- Sartzeko baldintzak lege formal batean erregulatzea
- Aukeraketa-organoen inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezializazio-bermeak nahiz emakumeen eta gizonen arteko oreka arazotzea.
- Ekintza positiboko neurriak hartzea, emakumeak polizia-kidegoetan sar daitezen.
- Barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga kentzea.
- Bigarren jardueraren kasuan bezala, eritasunagatik, istripuagatik edo adinagatik fisikoki edo psikikoki eragindako funtzionarioen osasuna babesteko neurriak indartzea.
- Diziplina-erregimena eguneratzea eta kontrol-mekanismoak indartzea.
 - Kexak tratatzeko mekanismoak, segurtasun publikoaren sistema hobetzeko Bulegoaren bitartez.
 - Ertzaintzaren Kontrol Batzordea sortzea.



- Udaltzainek beren udalerritik kanpo jarduteko aukera ematea, toki-agintariak babesteko; era berean, kidego horien egitura profesionalari buruzko beste alderdi batzuk, eta
- Udal-zaintzaileen edo mugikortasun-agenteen figurak erregulatu eta integratzea.

III. LEGEZKOTASUNA

Txosten hau emateko, indarrean dagoen araudia hartu behar da kontuan, aurkeztutako proiektua araudi horretara egokitzen den aztertzeko; zehazki:

- 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoarena.
- 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testubategina onesten duena.
- 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazio Prozedura Erkidearena.
- 4/1992 Legea, uztailaren 17koa, Euskal Autonomia Ekidegoko Poliziarena.
- 190/2004 Dekretua, urriaren 13koa, Euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzeko dena.
- 1/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Autonomia Ekidegoko Administrazio Orokorreko eta haren Erakunde Autonomiadunetako Kidegoak eta Eskalak antolatzekoa.

IV. EDUKIA

Aztertzen ari garen aurreproiektuan, askotariko helburu espezifikoak planteatu dira:

Poliziaren Europako etika-kodearen edukia araudiantxertatzea.

Poliziaren jardunbide egokiaren pizgarri positiboak indartzea, ordainsari-egituran txertatu nahi diren ordainsari-osagarriak aipatuz, hala nola produktibitate-osagarria, karrera profesionalaren osagarria eta arteko gehigarriak, eta aipatuz, halaber, kondekorazio, sari eta ohorezko sarien sistema zehaztu beharra.

Diziplina-erregimena aldatzea bi modutan; batetik, kanpo-kontrolako batzordea sortuz, eta, bestetik, kexak tratatzeko mekanismoak ziurtatuz, hartara poliziaren eta herritarren arteko ezinbesteko elkarreragina albidetzeko.

Legeari sartzeko betekizunen bereizgarriak txertatzea, hala nola: txanda libretik sartzeko gehieneko adinaren eskakizuna kentzea, eta C1 azpitaldearen titulazioa eskatzea sartzeko prozeduretan aurkezteko. Aldi berean, erretiro-kasuei dagokiena funtzionarioen legeria orokorrari lotzeko erabakia hartu da.

Hautaketa-alorrean, berriz, honako aldaketa hauek proposatu dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen 48. artikulua aldatzea, hautaketa-organoen osakeran inpartzialtasuna, profesionaltasuna, espezializazioa eta emakume eta gizonen ordezkariak orekatu bermatzeko; Poliza eta Larrialdietarako Euskal Akademia izendatzea Ertzaintzaren hautaketa-prozesuetarako hautaketa-organo iraunkor espezializatu gisa; eta eskaerak aurkezteko epe berri bat ireki beharra kentzea, baldin eta oinarrien aldaketek zerikusia badute deitutako lanpostu hutsen kopuruarekin eta akats materialen edo egiteko akatsen zuzenketekin.



Ertzaintzan emakumeek duten presentzia indartzeko murrizketa gisa, sartzeko unerako eta karrera profesionalerako, emakumeak sartzeko planak egin dira; ildo horretan, txanda libretik sartzeko hautaketa-prozeduraren komeniko litzateke deitutako plazen gehienez ehuneko 40 eta gutxienez ehuneko 25 emakumeek betetzea, eta hori funtzionarioen ehuneko 33 emakume izatea lortu arte. Helburu hori lortzeko, emakumezko hautagaien lehentasuna ematea proposatu da, baldin eta baztertutako gizonezko hautagaiarekiko puntu-aldea ehuneko 15etik beherakoa bada eta gizonezko hautagaiak legeko arrazoirik ez badu neurria ez aplikatzea justifikatzeko. Sustapen-prozesuetarako erabaki da sustatzeko aukera ematea seme-alabak zaintzeagatik eszedentzian daudenei edo genero-indarkeriagatik eszedentzian daudenei, baita amatasun eta aitasunagatik baimenak eta haurdunaldiagatik baja baliatzetik eratorritako zerbitzuak aintzat hartzea ere.

Egitura organikoari dagokionez, eskala eta kategoriak bateratu egin dira, udaltzain funtzionarioak eskala berrietan integratzea aurreikusi da, eta espezialitate-betekizuna duten lanpostuetarako horriduraren erregulazioa zehaztu da. Zehazki, aipatzekoa da superintendentearen figura desagertu dela; agintekatearen postu gorenak postuak hornitzeko sistema aruntaren bitartez hornituko dira; Ertzaintzan espezialitateen erregimena arautu da jakintza espezifikoa dituzten zereginetarako; gradu pertsonalari buruzko erreferentzia kendu da; Ertzaintzaren eta udaltzainen kategoria eta eskalak bateratu dira; eta buruzagitzari dagokion kategoria zehaztu da tokiko herritar kopuruaren edo kidegoko funtzionario kopuruaren arabera, herri bakoitzaren biztanleriari eta ezaugarriei jarraiki eta intendentearen kategoria zer herritan egon daitekeen aintzat hartuta.

Ertzaintzaren polizia judizialaren eginkizunaren antolaketa-egiturari buruzko erregulazioa berriz ere idatzi da. Segurtasun Sailak atxiki ahalko dizkie epaitegi edo tribunal jakin batzuei, behin betiko eta egonkortasunez, ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuak, atalak edo unitate-taldeak. Ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioen erregimena, oro har, lege honetan Ertzaintzarentzat aurreikusten den berbera izango da -112. eta 114. artikulua-.

Barne-sustapenari dagokionez, lehendik zeuden muga jakin batzuk kenduko dira barne-sustapena errazteko; hau da: mailaz igozeko, aurreko kategorian emandako urteen kopurua murriztuko da eta barne-sustapeneko hiru deialdien muga kenduko da; aldi berean, Ertzaintzaren maila goreneko postuetara (komisarioa eta intendentea) sartzeko aukera barneprozeduraren bitartez arautuko da. Karrera profesional horizontala arautu da, azterketa-mekanismo bat ezarri garapen profesionaleko graduatan sartzeko eta konpetentzia profesionalak egiaztatuz; garapen-graduaren arabera karrera profesionaleko osagarria jaso daiteke, baita postu jakin batzuetan jarduteko gaitasuna jaso ere.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legean jada jasota zegoen Akademiaren prestakuntza-planak hezkuntza-sistema orokorraren mailetara egokitze xedea, dagozkion titulazio akademikoekiko baliokidetasunak eskatu ahal izateko eta bateraezintasunen erregimena erregimen orokorrera eta Segurtasun Indar eta Kidegoen Lege Organikoaren 78.artikuluaren interpretazio judizialetara hurbiltzeko.

Oinarrizko gizarte-babesa eta gizarte-babes osagarria eta lan-arriskuen prebentzioa zaintzea helburu garrantzitsua izan da. Lanean edo lanaren ondorioz sortutako lanbide-gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologia direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak izatea hartu da kontuan. Gainera, aurkeztutako



proposamenaren arabera eskubide osagarriak modu zabalagoan arautuko dira zerbitzua ematean edo eginkizunak betetzean izandako istripuaren edo indarkeriaren ondoriozko heriotza-kasuetan, edota eginkizunak betetzean edo zerbitzuak ematean hirugarrenen indarkeriazko ekintzek eragindako lesio iraunkorren kasuetan.

Administrazio-egoerei dagokionez, adinaren arabera modulaturatutako zerbitzu aktiboa arautu da, eta bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzeko betekizunak aldatu dira. Gainera, erregulazioa argitu da behin betiko etetea dakarren behin-behineko etete-kasuetan jasotako ordainsariei eta denborari dagokionez.

Diziplina-erregimenari dagokionez, interes handiko hainbat aldaketa egin dira, hala nola: oso hutsegite larriak sartu dira sexu-jazarpena eta lan-jazarpena behin eta berriz gertatzen diren kasuetarako eta polizia-bideokamerak erabiltzeko erregimenaren arau-hausteetarako; ezarri beharreko zehapenen zerrenda neurritik kanpo da; zehapenaren mailaketa-irizpideak aldatu dira, lanbide-historiala aringarritzat jotzeko, eta berrerorpen-kontzeptua astungarritzat jotzeko; espedientearen eraginpeko pertsonaren bermeak indartu dira; prozedura iraungitzeko erregimena eta epea arautu da eta hutsegite eta zehapenaren deskripzio-epeen erregulazioa berridatzi da; zehapenak bete beharra aintzat hartu da; eta zehapenaren betearazpena etetea eta baldintzapeko barkamena zehazki kasutan ezarri behar diren zehaztu da.

Udaltzaingoari dagokionez, udal-barrutitik kanpo tiki-agintariak babesteko eginkizunak arautu dira; bitarteko funtzionarioak zendatu dira Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak prestatutako hauek egiten diren artean; Akademia horrek prestatutako langileekin lan-poltsak sortzea jaso da; udaltzaingoan trukearen figura hartu da aintzat, eta agutzaren figura arautu da udaltzaingorik ez daukaten udalerrietarako, eta mugikortasun-agenteen figura hirigunean zirkulazioa arautzeko, kasu batean eta bestean prestakuntza Polizia eta Larrialdietarako Euskal Agentziaren eskutik jaso dutela ziurtatuta.

Azkenik, Ertzaintzaren Aldizkariari buruzko aipamenak kendu dira, eta haien ordez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzkoak hartuko dira aintzat, gehienez hamasei hilabeteko epean lege hau indarrean hasten denez geroztik Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legea eta haren ondorengo aldaketa guztiak testu bakarrean bil ditzan.

1.- Ekinbide - Segurtasun publikoaren sistema hobetzeko herritar-ekimenen bulegoa.

Polizia-jardueraren kontrol-mekanismoei buruzko kapituluan jaso denez, Ekinbide segurtasun publikoaren sistema hobetzeko herritar-ekimenen bulegoa dago indarrean, herritarren kexak izapidetzeko. Polizia-kidegotik aparteko adituek beren gain hartuko dute kexak izapidetzeko ardura.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 23. artikuluan jada figura hori jasota zegoen, azaroaren 14ko 22/2000 Dekretuaren bidez sortu zena, Ekinbide Polizia Zerbitzua hobetzeko ekimenen bulegoa sortzeko eta Ertzaintzaren jardun-eremuan haren antolaketa eta funtzionamendua arautzeko. 15/2012 Legeak, ekainaren 28koak, Euskal segurtasun publikoaren sistema antolatzeak, haren jardun-eremua berregokitu du.



Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzari atxikitako langileen lanpostuen zerrendako postuetan diharduten lan-kontratupeko langileek betetzen dituzte hobekuntza-bulegoarekin zerikusia duten eginkizunak, Segurtasun Sailak emandako informazioaren arabera.

- 3217/1 Ekinbide Zerbitzua hobetzeko ekimena duenbulegoa
- 3145/15 Abokatua
- 3244/11 Administraria

2.- Ertzaintzaren Kontrol Batzordea - kide anitzeko organoa

Kanpo-kontrolleko batzorde hori sortu da erakunde hibrido iraunkorra izateko asmoarekin, polizia-erakundearekiko erabateko autonomia izango duena eta ospe handiko bost pertsonen osatua, erdia Ertzaintzaren eskala edo kategoriako kideak edo kideak izandakoak A sailkapen-taldean. Gobernu Kontseiluaren dekretu bidez izendatuko dira kideak.

Ikerketak egitean, Ertzaintzaren kanpo-gaietarako zerbitzuen laguntza izan dezake Batzordeak, baita zerbitzuak ematen ari diren karrerako funtzionarioen laguntza ere, azken horiek Batzordeak gainbegiratuak jardungo dutelarik.

Azken aukera hori bideragarria da, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren 4/1992 Legearen 72. artikulua ahalbidetzen duelako zerbitzu-batzordeak ematea lanpostuari berariaz esleitu ez zaizkion zeregin bereziak egiteko.

Funtzio Publikoaren Zuzendaritza honek egokitzen du artikuluetan zehaztea nola hautatu eta izendatu behar den batzordeburua. Aurreproiektuan baldintza batzuk ezarri dira Batzorde horren kide diren pertsonen inpartzialtasuna bermatzeko, eta berariaz zehaztu da pertsona horiekin dutela beren lanetatik inolako ordainsaririk jasoko, ezertan galarazi gabe administrazio publikoetako enplegatuak ez badira zerbitzua emateagatik bidezkoak diren kalte-ordainak jaso ahal izatea.

3.- Lanpostuak antolatzea. Espezialitateak

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 75. artikulua xedatzen du karrerako funtzionarioak kidego, eskala, espezialitate eta bestelako sistemen bidez sailkatzen direla, eta sailkapen-elementu horiek kompetentzia, gaitasun eta jakintza komunak biltzen dituztela, hautapen-prozesuen bidez egiaztatua.

Egitura organikoari dagokionez, eskala eta kategoriak bateratu egin dira, eta espezialitate-betekizuna duten lanpostuetarako horriduraren erregulazioa zehaztu da. Gainera, superintendentearen kategoria espresuk desagertu da, eta agintekatearen postu gorenak postuak hornitzeko sistema aruntaren bitartez hornitu dira. Gainera, gradu pertsonalari buruzko erreferentzia kendu da.

a.- Sartzeko titulazioa aldatu du.

105. artikulua berridazteko proposamenean alde handi bat nabari da oinarrizko eskalari dagokionez. Orain arte, agentearen kategoria duen oinarrizko eskala D taldeari atxiki zaio (C 2 gaur egun), eta, beraz, azpitale horri dagokion titulua eskatu da sartzeko, nahiz eta, sartzeko oinarrizko ikastaroa eta praktikaldia



gainditu ondoren, funtzionario izendatzean, euskal administrazio publikoetako funtzionarioen C taldean sailkatu *dituzten*. *Sailkatze horrek ondorio ekonomiko eta administratiboak izango ditu, soilik Ertzaintzaren esparruan, eta ez du izango inolako baliokiderik ezta errekonozimendurik ere aito akademikoan, irakaskuntzakoan edo heziketakoan*”.

Testua berridatzi ondoren, ikuskapeneko eta oinarriko eskalak C taldean sailkatu dira, C1 azpitaldean, eta, beraz, sartzekoeskatutako titulazioa C1 azpitalde horri dagokiona da.

b.- Espezialitateak

Aztertzen ari garen Lege Aurreproiektuan, 65 bis artikuluko berria erantsi da, eta hartan zehazten denez, espezialitate-betekizuna duten postuak berehala betetzeko aukera izango da espezialitate-ikastaroak gainditzan dituztenekin, baldin eta Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak eta eskumeneko Administrazioak batera esku hartzen badute ikastaro horien deialdiak egiten.

Horren ondorioz, espezialitatea duten postuak hornitzeko, eskatutako betekizun eta espezialitate guztiak betetzen dituztenek parte har dezakete hornidura-prozedura horietan.

c.- Gradu pertsonala kendu da.

43. artikuluan karrera profesionala garatzen da, eta 43. artikulua aldatzeko proposatu da. Lanpostuen zerrenden kapituluaren baruan sartu da. Proposatutako aldaketari jarraiki, gradu pertsonalari buruzko aipamena desagertu da Legearen artikuluko guztietan (65. artikuluko 2. paragrafoa, 71. artikuluko 3. paragrafoa).

d.- Superintendentearen kategoria kentzea.

Superintendentearen kategoria kendu da hierarkia-egituratik, nola Ertzaintzako langileentzat hala udaltzaingoarentzat, eta figura horri buruzko aipamen guztiak desagertu dira honako artikuluko hauetan: 56, 59, 74, 105, 118 eta Laugarren Xedapen Iragankorra.

1.-Ertzaintzari dagokionez, laugarren xedapen iragankorrean espresuki sei hilabeteko epea eman da Ertzaintzaren lanpostu-zerrenda aldatzeko, eta horrela desagertutako kategoriari erreserbatutako lanpostuak intendentearen kategoriara egokitzeko. Aldaketa hori gauzatu arte, lanpostu horietan dihardutenek superintendentearen kategoria horri esleitutako ordainsariak jasotzen jarraituko dute, une honetan indarrean dagoen araudiari jarraiki.

Inork ere ez du superintendentearen kategoria. Izanere, kategoria txikiagoko funtzionarioak betetzen ari dira superintendentearen kategoriari erreserbatutako postuak. Behin aldaketa horiek gauzatura, intendentearen kategoriari dagozkion ordainsariak emango dira.

2.- Udaltzaingoari dagokionez, bosgarren xedapen iragankorrean, esanbidez, udaltzaingoetako funtzionarioak automatikoki goragako kategorian integratu behar dira.

Udaltzaingoari dagokionez, okupatzaileen egoera ez da arautu laugarren xedapen iragankorrean Ertzaintzarentzat ezarri den bezala. Espedientetik ez da ondorioztatzen intendentearen kategoria duen langilerik ba ote dagoen. Baldin



balego, ez litzateke koherentea izango langileen odainsariak arautzeko atal bat biltzea.

4.- Hautaketa: deitutako lanpostu hutsen aldaketa eta hautaketa-organoak

Bosgarren artikulua bosgarren atal bat gehitzen du 4/1992 Legearen 47. artikuluari. Horri jarraiki, hautaketa-prozesu baten oinarriak aldatzeak deitutako plazak aldatzea soilik badakar, ez da beharrezkoa izango eskabideak aurkezteko epe berri bat irekitzea.

Aukera hori jasota zegoen, dagoeneko, uztailaren 19ko Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia aukeratzeko eta prestatzeko araudia onartzen duen 315/1994 Dekretuaren 40.2 artikuluan. Neurritasunez erabilibehar da ahalmen hori; hau da, gehitutako plazen kopuruak ez du eragingo hautaketaprozedura guztiz desberdin bat hartzaileentzat, aukerei eta espektatibei dagokionez. Honako hau saihestu behar da: administrazioak, beharrak gaizki neurtu dituela eta, handitzea neurriz kanpokoak izatea, eta horrek publizitate- eta lehiaprintzipioak urratzea ekartzea, Konstituzioko 23.2 eta 103.3 artikuluetan eta uztailaren 17ko 7/1992 Legearen 44. eta 47. artikuluetan adierazitakoa betez. Hori gertatzen bada, derrigorrean ireki beharko da eskabideak aurkezteko beste epe bat, edogeroagoko beste prozedura baterako deialdia. Deitutako plaza kopurua handitzeko ekimena ongi hausnartutako eta haztatutako ehuneko bati jarraiki egingo da. Hautaketa-prozesu baten oinarrietan deitutako plaza kopurua aldatzeko gehieneko ehuneko legean arautu beharko litzatekeela uste da, eskariak aurkezteko beste epe bat ireki beharrik gabe.

Hautaketa-organoei dagokienez, proposatu da 48 artikulua berridaztea honako hauek erantsiz haietan parte hartzeko aukerarik ez duten langile gisa, Enplegu Publikoaren Lege-proiektuarekin bat etorriz: funtzionario-elkarteen edo lanbide-elkargoen ordezkaritza edo sindikatuen kontura dirlarduten langileak.

Hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten aholkulari adituei dagokienez, erantsi beharra dago, gainera, haien jardunak ere objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioak bete behar dituela.

Sartzeko sistemari eta barne-sustapeneko sistemari dagokienez, bi modutako aldaketak jaso dira; batetik, barne-sustapenerako mugak kentzea, eta, bestetik, emakumeak polizia-kidegoan sar daitezen sustatzea. Aldaketa horiek lehenago aipatu dira IV. atalaren hasieran, eta emakume etagizonen berdintasunerako legearen printzipioak aplikatzen dituzte.

5.- Barne Sustapena eta Polizia Judiziala

Barne-sustapeneko txandan sartzeko bete beharrekoak arautzen dituen 59. artikuluko 1. paragrafoa aldatu da. Barne-sustapeneko txandan sartzeko behar-beharrezkoa da, betiere, dagokion kategorian sartzeko titulazioa eta gaintako betekizunak betetzea, baita konkurrentziako hautaketa-prozesuetan parte hartzea eta prozesu horiek gainditzea ere.

Eraginkortasun- eta efikazia-printzipioak aplikatuz, epaitegi edo tribunal jakin batzuei ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko unitateetako zerbitzu, atal edo taldeak etengabe eta egonkortasunez atxikitzeko aukera ezarri da.



Ikerketa kriminaleko eta polizia judizialeko zerbitzuei atxikitako funtzionarioen erregimena, oro har, lege honetan Ertzaintzarentzat aurreikusten den berbera izango da.

6. Karrera profesionala

Lege-aurreproiektu honetan gai hori arautzea proposatu da. Horretarako II BIS kapitulua erantsi da, karrera profesionalari buruzkoa, eta haren 73. artikuluan karrera profesional horizontala arautu da, garapenprofesionalean aurrera egiteko lanpostua aldatu beharrik gabe. Sistema horren bitartez, azterketa-mekanismo bat ezarri da garapen profesionaleko graduatan sartzeko konpetentzia profesionalak egiaztatuz; garapen-graduaren arabera karrera profesionaleko osagarria jaso daiteke, eta baita postu jakin batzuetan jardutekogaitasuna jaso ere.

Enplegu publikoa antolatzeke eta planeatzeko beste tresna bat da jardunaren ebaluazioa. Jardunaren ebaluazioaren helburua da lanbide-jokabidea eta eraginkortasuna edo emaitzen lorpen-maila ebaluatzeke nahiz balioesteko aukera ematea. Positiboa ala negatiboa izan daiteke ebaluazioa, eta haren emaitzak eragin nabaria izango du langilearen karrera profesionalean, barne-sustapenean, prestakuntzan, lanpostuak betetzeko prozesuetan, langileak titular moduan dagokion edo behin-behinean betetzen ari den postuan jarraitzean edo ez jarraitzean, eta dagozkion ordainsari osagarrietan.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Erege Dekretuaren arabera, administrazio publiko bakoitzaren legee dagokie ordainsari osagarrien zenbatekoa eta egitura ezartzea zenbait faktore aintzat hartuta, besteak beste, funtzionarioek administrazio-karrerako sistemaren barruan lortutako aurrerapen-maila.

Karrera profesionaleko osagarri bat konfiguratzeko lege horrek. Horri dagokionez, aipatzekoa da ordainsariak Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legean ezarritakoaren arabera arautuko direla, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren legearen 74. artikulua honela dio, hitzez hitz:

"74. artikulua.

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia osatzen duten kidegoetako funtzionarioen egitura eta ordainsarien erregimena euskal administrazio publikoetako funtzionarioentzat aurreikusitako arautan ezarritakoaren arabera izango da, hurrengo paragrafoetan ezartzen diren berezitasunekin, zeinak Ertzaintzaren kidegoari aplikatzekoak baitira."

Espresuki, 6/1989 Legearen 77. artikulua arautzen duenez, *"lege honetan jarritako lantsariengatik bakarrik jaso ditzakete lantsariak euskal Administrazio Publikoetako funtzionarioek."*

Garapen profesionaleko osagarria ez da sortu edo arautu euskal funtzio publikoaren legean, baina euskal enplegu publikoari buruzko lege-aurreproiektuak karrera profesional horizontala arautzen du, garapen profesionaleko graduatan aurrera eginez gauzatuko dena, gradu horiek, nolatan ere, interesdunaren merezimenduen aldeko ebaluazioa beharko dutelarik.

Erregelamenduaren 20.5. artikuluan honako hau ezartzen da: "lanbide-karrera horizontala, Estatutu honen 24. artikulua c) idatz-zatian jasotako ordainsari



osagarriak eta lehiaketa-prozedura bidez lortutako lanpostua uzteko erabakia aplikatzeko orduan, artikuluko honen 1. eta 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera, jarduna ebaluatzeko bidea emango duten sistema objektiboak onartu behar dira, aldez aurretik, kasuan-kasuan."

Une honetan karrera profesional horizontala garatugabe dago. Alabaina, euskal enplegu publikoari buruzko legearen aurreproiektua izapidetzen ari da, eta horren arabera, Eusko Jaurlaritzari eskumena ematen zaio garapen profesionalari eta jardunaren ebaluazioari buruzko erregelamendu bat egiteko; erregelamendu horretan euskal administrazio publiko guztietan horretarako aplikatu beharreko oinarritzko irizpideak bilduko dira, aipatutako lege-aurreproiektuan sortutako Euskadiko Enplegu Publikoa Koordinatzeko Batzordeak horri dagokionez ezarritako irizpideei jarraiki.

Justiziako, Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuko eta Ertzaintzako irakasleek beren araudi espezifikoari jarraituko diote karrera profesionala garatzeko, euskal enplegu publikoari buruzko lege-aurreproiektuan eta haren garapen-araudian horri dagokionez jasotako irizpideen ordezkari aplikazioa ezertan galarazi gabe.

Karrera profesional horizontalaren modalitate desberdinen ezarpena eta garapena eraginkorra izateko, beharrezkoa izango da ezinbestean, euskal administrazio publiko bakoitzak dagokion arau-garapena egitea; eta karrera profesionalaren efektibitatea, edonola ere, dagozkion administrazioen aurrekontu-ahalmenaren baitan egongo da. Funtzio publikoaren errektore indarreko legeetan erregulatutako oinarritzko legeria errespetatu behako da, baita haren erregelamenduzko garapena ere.

Hortaz, Euskal Enplegu Publikoari buruzko Legeak homogeneotasuna ezarri behar du Euskal Administrazio Publikoetan, eta haren Aurreproiektuan zortzigarren xedapen iragankor bat jaso da, aztertzen ari garen aurreproiektuan ere jaso behar dena:

"Xedapen iragankorra.

Ertzaintzako langileei eta Toki Administrazioaren mendeko udaltzainei ezin izango zaie karrera profesionaleko osagarriaren kotturako edo aurreratutako ordainsaririk onartu"

Gainera, honako paragrafo hau erantsi behar da: "Karrera profesionalari dagozkion ordainsari-eskubideak ezin izango dira atzeraeraginez onartu."

7.- Bateragarritasunak

Jardueren bateragarritasunari dagokionez, euskal administrazio publikoetako langileentzat aurreikusitako irizpide berberak aplikatzen zaizkie, muga gehiago zehaztuz: batetik, jarduerak ezin dio polizia-kidegoaren irudiari eta ospeari kalterik eragin, haren jardunaren oinarritzko printzipioen aurka doalako, eta, bestetik, zerbitzu aktiboan jardutea bateraezina da Indar Armatuak erreserbista izatearekin.

8.- Osasuna eta Babesa, eta kondekorazio eta sariak



III. tituluaren V. kapituluak aldatu da, eta, horrenarabera, Osasuna eta Babesa hartuko du hizpide, eta ez zerbitzu-jarduna. Osasun-zerbitzu bat ezarri du; zerbitzu horren gaitasunak eta antolamendua erregelamendu batez ezarriko dira, eta lankidetzakontratuak edo hitzarmenak ezarri ahalko dira mediku profesionalekin edo erakunde sanitario publiko edo pribatuarekin. Administrazio-organismo batek bakarrik sinatu ditzake lankidetzakontratuak edo hitzarmenak, eta, beraz, osasun-zerbitzuak ez du lankidetzakontratu edo hitzarmenak egiteko eskumenik izango.

Aurreproiektuan pertsonak ikuskatzeko zerbitzu bat proposatu da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langileek "osasuna nahitaez zaindu beharra".

79.3 artikuluan arautu da senide jakin batzuek zenbateko jakin bat ordaintzea bakarrean jasotzeko eskubidea dutela, zerbitzua ematean heriotza gertatzen denean, eta arautu du, halaber, aldiaren behingo prezio ekonomiko bat nahitaezko erretiroaren kasuan, baldin eta paragrafo horretan araututako baldintzen ondorio bada.

V BIS kapitulu berri bat erantsi da kondekorazioaren sariak arautzeko, baina erregelamenduzko garapen batera mugatu da, besterik gabe. Poliziamerezimenduaren domina ematearekin batera ondorio ekonomikoak sortzeko aukera ere izango da, erregelamenduak hori ebazten duen kasuetan.

Aurreproiektuaren proposamenaren zati handienak arautzen du, maila handiagoko arau batean, zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta Ertzaintzaren ohorezko kondekorazio eta sariak arautzen dituen uriaren 16ko 201/2012 Dekretuan bildutako irizpideak. Dekretu hori aldatu egingo da proposatutako arauaren aurka doan orotan.

9.- Adinaren arabera modulaturako zerbitzua eta Bigarren jardura

a) Adinaren arabera modulaturako zerbitzua

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 indarreko legearen arabera, honela sar daiteke bigarren jardurako administrazio-egoeran:

- Adin jakin bat badute; edonola ere, Legebiltzarrak zehaztu behar du adin hori lege baten bidez.
- Kategoriari dagozkion eginkizunak behar bezala betetzeko behar diren gaitasun fisikoaren edo psikikoaren gabezia nabarmena bada, dirudienez, iraunkorra, badute.

Aztertzen ari garen aurreproiektuan bigarren jardurako administrazio-egoeraren deklarazioa arautzen da bigarren kasurak bakarrik, eta proposatzen da, zerbitzu aktiboko administrazio-egoeraren barruan, haren tipologia bat sortzea, hain zuzen ere adinaren arabera modulaturako zerbitzu aktiboa; aurreproiektuan aurreikusitako adina eta gainerako betekizunak betetzean izango da zerbitzu horretan sartzeko aukera.

Indarrean den araudiarekiko aldea honako hau da:



- Bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzeko kasua kendu da, eta beste administrazio-egoera mota bat proposatu da: adinaren arabera modulaturako zerbitzu aktiboa.
- Bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzea ofizios deklaritzen da. Proposamen berriaren arabera, adinaren arabera modulaturako zerbitzura hala nahi duenak eskatutakoan igaroko da.
- Gaur egun indarrean den Poliziaren 4/1992 legearen arabera, Segurtasunaren alorrean eskumena duen sailak mugatuegin dezake adina dela-eta bigarren jarduerako egoerara igaro daitezkeen gehieneko funtzionarioen kopurua. Aurkeztutako proposamenean aukera hori ez da jaso.
- Aztertzen ari garen aurreproiektuan, eskaera baldintzatu da 60 urte edo, hala badagokio, 59 urte betetzean erretiro aurreratua borondatez eskatzeko konpromisoarekin.
- Aurreproiektuan arautu da pertsona bat aldi baterako destinorik gabe egoteko aukera, eta hori indarrean den araudian erejasota dago, jaso beharreko ordainsariak aldatzen badira ere. Indarreko legean jasotzen dira, batetik, kategoriari dagozkionak, eta, bestetik, onartuta dauzkan pertsonalak, hiru urtekoak barne. Proposamen berriaren arabera, ordainsariak handiagoak izango lirarteke, azken lanpostuaren ordainsariak jasoko lituzkeelako, osagarri espezifikoaren osagarri berezia izan ezik.

Une honetan, adina dela-eta zerbitzu aktiboaren jarduna modulatzeko erregulazioa urriaren 9ko 194/2012 Dekretuan dago ezarrita, eta dekretu horrek aldatzen du 2011., 2012. eta 2013. urteetarako Ertzaintzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa onartzeko Dekretua, "modulazio" hori honela jasota:

"Adinaren edo kalte funtzionalen arrazoiengatik Ertzaintzako langileak babestea bermatzeko, honako neurri hauek onartu dira:

- Urteko lanaldia arian-arian murriztea, pertsonaren adinaren arabera.
- Gaueko ordutegiko lan-exentzioa aplikatzea. Nolanahi ere, txanda horretan lan egiteko exentzioa baliatzeko aukera izaki txanda horretan zerbitzuak ematen jarraitzea hautatzen duten langileek produktibitate-osagarriaren zenbatekoaren igoera jasoko dute 2011., 2012. eta 2013. urteetako langileen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioaren 76.2 artikuluan aurreikusitako gaueko txandako zerbitzuak emateagatik."

Azttertzen ari garen aurreproiektuan proposatzen diren neurriak araututa daude jada lan-baldintzen Akordioan, zehazki 194/2012 Dekretuan. Adinarengatik zerbitzu aktiboan jarduteko modulazioa aplikatzeko proposatzen diren neurri zehatzak lan-baldintzen eta negozioak kolektiboaren alorretako neurriak dira. Zerbitzu aktiborako espezifiktasun jakin batzuk jasotzen dira alor horretan, eta eraginpeko administrazio-egoera ez da aldatu, zerbitzu aktiboa izateari eusten diolako.

Indarreko erregulazioa guztiz bat dator arau-hierakiaren printzipioarekin: batetik, zerbitzu aktiboaren administrazio-egoera, funtzionarioak bere lanpostuak jarduteari dagokiona, arautu egiten da, eta, bestetik, zerbitzu-ematea "modulatzen" da Lan Baldintzen Akordioaren bitartez akordio hori dekretu bidez onartuta. Sailak ez du argudio juridiko bat ere ekarri arau-maila igotzeko, hau da, lan-baldintzen erregulazio hori lege-mailara igotzeko.

Administrazio-egoeraren modulazioari jarraiki, lan-baldintzak hobetzeko hainbat neurri proposatu dira, eta langile guztiek neurri horiek balia ditzakete 56 urte



betetzean. Langilearen ahalmen fisiko edo psikikoen murrizketaz aparteko eskubide baten antzera jaso daiteke.

Nolanahi ere, beste zerbait erantsi behar da egoerahonetarako proposatutako erregulazio zehatzerako: bigarren paragrafoan jaso bada ere aitorten horrek polizia-zerbitzua ematen jarraitzeko bermea baino ez duela ekarriko, proposamen hori ez zaigu nahikoa iruditzen. Eta hori hala da, batetik, 4/1992 Legearen 86. artikuluan jasotako aurreikuspena desagertu delako. Horren arabera, langileak eskuragarri izateko aukeren arabera eta Kidegoaren premia funtzional eta organikoaren arabera eskubide hori urtean jaso dezaketen pertsonen kopurua mugatu beharra zegoen.

Eta, bestetik, 3 d) puntuak aurreikusten du pertsona aldi baterako destinorik gabe egon litekeela destinorik esleitu edo lanpostua egokitu arte; hau da, lanpostuari dagozkion ordainsariak jaso ahal izango ditu osagarri espezifikoen osagarri berezia izan ezik, eta ez zaio zerbitzuak benetan ematea eskatuko, hau da, zerbitzu aktiboan jarraituko du baina "Administrazioaren esku" (indarreko araudian bakar-bakarrik aurreikusi da "Segurtasun-sailburuordearen esku").

4/1992 Legearen 88.3 artikulua arabera, bigarren jardueran dauden bitartean, funtzionarioek beren kategoriari dagozkion oinarritzko ordainsariak jasotzen dituzte, baita onartu zaizkien ordainsari pertsonalak ere, hirurtekoen kontzeptuan dagozkionak barne, egoera horretan hobe egiten jarraituko dutenak. Ordainsari osagarriei dagokienez, betetzen duten lanpostuari dagozkionak jasoko dituzte, arauz ezarritakoak, eta, baldin zerbitzu-arazoiengatik ohizko polizia zereginak burutu beharko balituzte, zeregin horiek dagozkion lanpostuarenak jasoko lituzkete, egiteko horietan emandako denboraren heinean.

Aztertzen ari garen aurreproiektuan, bigarren jarduerako administrazio-egoeran edo adinaren arabera modulaturatutako zerbitzu aktiboko administrazio-egoeran dauden funtzionarioek, aldi baterako destinorik gabe badaude, kategoriaren oinarritzko ordainsariak jasoko dituzte, lehendik onartuta dauzkan ordainsari pertsonalak gehi jardun duen azken lanpostuari dagozkion ordainsariak, osagarri espezifikoen osagarri berezia izan ezik.

Euskal Enplegu Publikoari buruzko Lege-aurreproiektuan, destino-espektatibaren administrazio-egoeran dauden langileak oinarritzko ordainsariak jasoko dituzte, baita karrera profesionaleko osagarria edo maila pertsonal kontsolidatua ere, eta, horrez gain, egoera horretan igaro arte ziharduten lanpostuari dagozkion osagarriaren ehuneko berrogeita hamarra - 151. artikulua-.

Nahitaezko eszedentziaren kasuan aurreikusten da administrazio-egoera horrengatik honako ordainsari hauek jaso behar direla: oinarritzko ordainsariak eta onartutako maila profesionalaren berrogeita hamarra edo, halakorik ezean, maila pertsonal kontsolidatuaren berrogeita hamarra -153. artikulua-.

Proposamenaren arabera ordaindu nahi diren ordainsariak handiagoak dira funtzio publikoaren erregimen orokorrean nahitaezko eszedentzia-egoerari esleitu zaizkien ordainsariak baino, eta azken egoera horretan ere ez da lanpostu baten benetako jarduna gertatzen.

Ertzaintzako langileen eskaerari jarraiki, polizia-funtzioaren jardunaren modulazioari loturik lege-mailarekin proposatutako aldaketa proposatu da, egoera horretan sar zitezkeen agenteen kopuru-mugarik gabeko polizia-funtzioan jardun gabeko destino-espektatibaren egoera batean sartu ahal izateko aurreikuspenarekin, eta erregulazio horrek unitate bakoitzean egunero zerbitzuak



emateko egitura osatzeko ekar litzakeen ondorioak aurreikusi gabe, indarreko giza baliabideen kudeaketa-prozeduren arabera. Zuzendaritza honek uste du aldaketa horri azterketa edo proiektzio ekonomiko bat falta ziola, erregulazio berri horren ondorioz I. kapituluaren gastua igotzeko aukerei dagokienez. Gaur egun indarrean dauden aurrekontu-egonkortasuneko printzipioek eskatzen dute edozein arau-aldaketarekin batera, eta areago lege-mailakoa baldin bada, aldaketa horren aplikazioak ekar litzakeen ondorio ekonomikoei buruzko azterketa bat aurkeztea, bereziki kontuan hartzen badugu litekeena dela datuen urteetan kolektiboaren batez besteko adinaren igoeraren ondorioz aurreikuspen horiek oro har aplikatu behar izatea.

Aurreproiektuan jasotako beste aldaketa bat honakoa honetan datza: Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren 4/1992 Legearen arabera, bigarren jarduerako egoeran dauden funtzionarioak Herrizaingo Sailaren eta dagokion toki-erakundean eskumenekoa den organoaren esku geratuko dira, eta ohiko polizia-funtzioak garatu beharko dituzte zerbitzu-arrazoiak direla eta beharrezkoa denean eta arrazoi horiek indarrean egon bitartean; aztertzen ari garen aurreproiektuan, aldiz, honako hau proposatzen da adinaren arabera modulaturako zerbitzu aktiboko kasuetarako:

- Salbuespenez ezinezkoa baldin bada lanpostu edo plaza bati esleitzea, aldi baterako destinorik gabe egoteko aukera izango du administrazioaren esku, destinoa esleitu arte edo lanpostua egokitu arte.

Proposamen berriaren arabera, eskuragarritasuna ez da ohiko polizia-funtzioak garatzera mugatzen, eta eskuragarritasun hori ez da Segurtasun Sailean edo dagokion toki-erakundearen eskumeneko organoan zehaten; aitzitik, Administrazioaren eskura egongo da langilea, eta, berrela, teoriarik behintzat, polizialez bestelako funtzioak bete ahal izango ditu, eta segurtasunaz bestelako alorrean eskumenekoak diren sailetan. Proposamen hori ez zaigu bidezkoa irudituko.

Aurkeztutako proposamenak Administrazio Orokorren lanpostuen hornidura arautzen du. Aztertzen ari garen aurreproiektuan jasota ez dagoen berme bat erantsi du indarreko Euskal Funtzio Publikoaren Legeak. Izan ere, Administrazioaren beste sektore batzuek (irakasleak, osasun-langileak, segurtasun-langileak eta abar) soilik izango dute Administrazio Orokorreko lanpostuak betetzeko aukera, eta bakar-bakarrik baldin eta Administrazio Orokorreko lanpostuen zerrendek hori aurreikusten badute. Horen ondorioz, berme osagarriarik erantsi gabe, ezinezkoa da sektore-araudi batek ezartzea Ertzaintzako eta udaltzaingoetako langileek betetzea Administrazio Orokorrean, Autonomia Erkidegoko Administrazioetan edo gainerako euskal administrazio publikoetan langileentzat erreserbatutako lanpostuak, polizia-funtzionarioen jardunaz aparteak.

Hortaz, funtsezko ondorio gisa esan dezakegu adina inguratik zerbitzu aktiboaren modulazioa erregulatzea ezin daitekeela administrazio-egoera soiltzat hartu, ezta zerbitzu-aktiboko administrazio egoeratzat ere, eta, beraz, administrazio-egoeren erregimenaren sailkapenaren tipologia berritzaile izatea ez da bidezkoa gure iritziz. Ondorioztatu dugu, halaber, aztertutako gaia lan-badintzen eta negoziazio kolektiboaren alorreko gaia dela, eta ez lege-mailako arau baten bitartez arautu beharreko gaia.

b) Bigarren jarduerako administrazio-egoera

Aزتerten ari garen aurreproiektuaren 86. artikuluan, bigarren jardueran dauden administrazio-egoera arautzen da, beren zereginak egiteko beharrezko ahalmen fisiko eta psikikoen gutxitze agerikoa dutenen egoera; ageriko gutxitze



horrek, polizia-lanbidearen oinarritzko egitekoak eginkortasunez burutzea galarazi gabe, bere kategoriako berezko zereginak osorik gauzatzeko ahalmenaren urritze iraunkorra ekarri beharko du berekin. Testuan honako hauek nabarmendu dira:

- Polizia-lanbidearen funtsezko zereginak zer diren zehazteko atal bat txertatu izana.
- Adinaren arabera modulaturako zerbitzu aktiboa eskatzeko edo bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzeko eskatzeko behar-beharrezkoa da hirurogei urte, edo, bidezko bada, berrogeita hamar urte betetzean, borondatezko erretiro-eskaera aurreratua eskatzeko konpromisoa hartzea.
- Beste aldaketa bat honetan datza: indarreko araudia, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren 4/1992 Legearen arabera, bigarren jarduerako egoeran dauden funtzionarioak Herrizaino Sailaren eta dagokion toki-erakundean eskumenekoa den organoaren esku gertuko dira, eta ohiko polizia-funtzioak garatu beharko dituzte zerbitzu-arrazoiak direla-eta beharrezkoa denean eta arrazoi horiek indarrean egoa bitartean. Gainera, lanpostuen zerrendetan ezarritakoaren arabera bigarren jarduerako egoeran dauden langileek bete ditzaketen lanpostuak betetzeko aukera izango dute.

Alabaina, aztertzen ari garen aurreproiektuaren 865 artikuluen arabera, bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzen diren funtzionarioek uzten badute atxikita dauden lanpostua, ez bada bigarren jarduerako egoeran dagoen langileek egiteko modukoa, aldi bateko atxikipenez esleituko zaizkie haiek egiteko moduko zerbitzuak ematen dauden unitateko lanpostuak. Baldin eta unitatean ez balego lanpostuhutsik, Administrazioak ezartzen duen lantokira atxikiko da funtzionarioa, lanpostu hutsik badago, interesdunak proposaturako hiru lanposturen artetik

Polizia-kidegoko langileek bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzeari buruzko zenbait gai garatzen dituen urtarilaren 27ko 7/1998 Dekretuan dute arautua (urriaren 16ko 20/2012 Dekretuak aldatu du), eta eranskin batean, bigarren jardura arautzeko ezintasun medikoen koadroa biltzen da.

Bigarren jarduerak ez du esan nahi lanpostua egokitzea behar denik; izan ere, lehendik dauden beste postu batzuk betetzea adierazten du, betiere eginkizun propioak eta zehaztuak dituztela eta bigarren jardueraren administrazio-egoeran dauden langileek betetzeko modukoak izanik. Alabaina, 86. artikuluan 5. atalean aipatu diren zenbait gorabehera direla medio lanpostu librerik ez badago, pertsona hori betetzen ari zen postuaren eginkizunak haren ahalmen berrietara egokituko dira, Ebaluazio Epaitegiaren irizpenarekin bat etoriz. Nolanahi ere, azken aurreikuspen hori osatu behar da. Izan ere, ezinbestekoa da bete beharreko lanpostua dagokion lanpostuen zerrendan sailkatu izana Segurtasun Kidego eta Indarretako funtzionarioek betetzeko moduko lanpostu gisa.

Amaitzeko esango dugu 86. artikulua, oraindik ere, bigarren jarduerako administrazio-egoera horretan dauden langileek bete beharreko ordainsariak ezartzen jarraitzen duela.

10.- Hainbat udalerritan diharduten zerbitzu aktiboko udaltzainen artean destinoak trukatzeari



Funtzio publikoaren alorrean Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen eskusiboa du (EAEEn 10.4 artikulua) "Euskadiko eta haren Toki Administrazioen funtzionarioen estatutuan, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe", azken xedapen horrek Estatuarigorde baitio, besteak beste, Herri Administrazioetako funtzionarioen estatutu-erregimenaren oinarriak ezartzea.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 78. artikulua Estatutu hori garatzen duten funtzio publikoko legeei eskumenak ematen dizkie hornidura-prozedurak ezartzeko, lanpostu-trukeak eragindako mugikortasunagatik, osasun-arrazoiengatik mugikortasunagatik, zerbitzu aktibazio berriz sartzeko, lanpostuei uzteko eta lanpostuak kentzeko.

Truke-kasua arautu beharra dago Estatutu hori garatzen duten funtzio publikoaren legeetan. Euskal enplegu publikoaren lege-aurreproiektuaren VIII. tituluko VI. kapituluaren espresuki aurreikusi da enplegatu publikoen arteko mugikortasuna: genero-indarkeriagatik mugikortasuna; indarkeria terroristagatik mugikortasuna; osasun-arrazoiengatik mugikortasuna; nahitaezko lekualdatzerako diziplina-zehapenagatik mugikortasuna; eta Euskal Administrazio Publikoen arteko mugikortasuna.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen dien urriaren 30eko 5/2015 Errege Lege Dekretua funtzionarioei aplikatzen zaie, eta, bidezko bada, besteak beste autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen zerbitzuan diharduten lan-kontratadun langileei (2.1. artikulua): 3.1 artikuluan honela dio, hitzez hitz: "toki-erakundetako funtzionarioek estatuan aplikatzekoa den legeria bete behar dute, Estatutuhau adibidez, baita autonomia-erkidegoko legeria ere, toki-autonomia errespetatu".

Aztertzen ari garen aurreproiektuan hogeita batgaren xedapen gehigarria eranstea proposatu da, Alkatetzetako titularrei trukeak baimentzeko eskumena emateko. Trukeak baimentzeko bete beharrekoak bildu dira xedapen horretan. Administrazioak berdintasun-printzipioak errespetatu eta bermatu behar dituenez, aplikatuko den prozedurak publizitate- eta konkurrentzia-printzipioak bermatu beharko ditu.

11.- Aguazilak eta mugikortasun-agentek

1.- Aguazilak

"117. artikulua:

1. Udaltzaingorik ez duten udaletan, bost aguazil-paza sortu ahal izango dira, gehienez, lege honen 27.1 artikulua a), b), d), f) eta i) paragrafoetan ezarritako zereginak egiteko.

5. Aguazil-lanpostuak C-2 taldeko edo baliokideko karrerako funtzionarioek beteko dituzte, eta toki-administrazioen funtzionarioei aplikatu beharreko estatutua aplikatuko zaie, artikulua honetan ezarritakoaren kalterik gabe."

"Zazpigarren xedapen iragankorra.- Aguazilak.



1. Udaltzaingorik ez dagoen lekuetan, aguazilak, zantzaileak edo antzeko funtzioak dituzten funtzionarioak aguazilak deituko dira, edozein izendapen dutela ere.

2. Lege hau indarrean sartzean lege honen arabera aguazil gisa eraturako postuak betetzen dituzten lan-kontratadun langile finkoek postu horietan jarraitu ahal izango dute. Halaber, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez deitutako barne sustapeneko hautaketa-prozesuetan parte hartu ahalizango dute, aguazil izateko lehia askeko hautaketa-prozesuekin batera ala ez, ~~le~~tiere titulazioaren baldintza eta gainerakoak betetzen badituzte; ondorio horietarako, meritu gisa baloratuko dira lan-kontratadun langile finko gisa emandako zerbitzuak eta izaera hori eskuratzeko gainditutako hautaketa-probak."

"Zortzigarren xedapen iragankorra.- Aguazilak udaltzaingoan sartzea.

Udaltzaingoa sortzen denean udalean zerbitzuak ematen ari ziren aguazilak Udaltzaingoan sartuko dira, behin lehiaketa mugatua gaindituta, adinaren eta altueraren baldintzetatik salbuetsita, eta Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak ezartzen duen ikastaroa gaindituta".

a.- Udalean Udaltzaingorik ez dagoenean.

Hasiera batean, bi prozesu aztertzen ari gara. Lehenik eta behin, aguazilei esleitutako funtzioak betetzen badituzte ere zenbat izendapen eduki ditzaketen guztien izendapenak bateratzea, eta, jarraian, haiek karrerako funtzionarioei esleitzea.

Lehendik dauden postuen izena aldatzeak eta udal-zantzaile izena jartzeak, finean, postu horiek C-2 taldeko karrerako funtzionarioentzat gordetako postu bihurtzea dakar, 4/1992 Legearen 27.1 artikuluko a), b), d), f) eta i) paragrafoetan adierazitako eginkizunak betetzeko:

- a) Udaletako agintariak eta eraikin eta instalazioak zaintzea.
- b) Hirigunean trafikoa antolatu, seinaleztatu eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan ezarritakoari jarraiki.
- d) Polizia administratiboko zereginak, udaleko ordenantzei, bandoei eta gainerako xedapen eta egintzei dagokienez, bere eskumen-eremuaren baitan, eta ingurumenaren eta inguruaren babesaren arloan indarreko araudia betetzen dela begiratzea, udal-eskumenen baitan.
- f) Istripu, hondamen eta zorigaitz publikoetan laguntza ematea, legean ezarritakoaren arabera eta babes zibileko planekin bat etorritik.
- i) Gatazka pribatuak konpontzeko esku hartzea, baldin eta eskatzen bazaie.

Eztabaidagaia da haiei esleitutako eginkizunak karrerako funtzionarioentzat gordetako postuen berezkoak diren ala ez. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legeak bigarren xedapen gehigarrian mugatzen du tokiko udalbatzetan funtzio publiko horiek zein izango diren:



Funtzio publikoak dira, eta, beraz, era eskusiboan funtzionarioek bakarrik bete beharrekoak, agintea erabiltzea, fede publikoa ematea eta aginduzko lege-aholkularitza ematea dakartzatenak, finantza- eta ekonomia-kudeaketa eta aurrekontuen kudeaketa kontrolatzea eta barrutik ikuskatzea dakartenak eta kontabilitatekoak eta diruzaintzakoak.

Transkribatutako arauak lan-kontratudun langileak ginkizun jakin batzuk betetzetik kanpo uzten ditu, berariaz. Proposatutako testuan hori argitu beharko litzateke, artikuluen baitan paragrafo edo amaierako ohar bat gehituz, irakurleari aipatu xedapenaren berri emateko.

Litekeena da lan-kontratudun langileak funtzio horiek betetzen aritzea. Lan-kontratuko langile finkoek postu horietan jarraitzeko aukera izango dute, eta barne-sustapeneko hautaketa-prozesuetan parte hartzeko aukera izango dute, zazpigarren xedapen iragankorrak ezartzen duenez.

Udalbatzak duen eskumenetako bat da plantillak eta lanpostu-zerrendak onartzea eta aldatzea, eta funtzionarioen eskalak, azpieskalak eta mailak eta haien sailkapena ezartzea -781/1986 Errege Lege Dekretua, apirilaren 18koa, Toki Araubideko Xedapen Legalen Testu Bategina onartzeko-; azpieskalak, mailak eta kategoriak, Estatuko oinarritzko legediaren arabera, legedi horrek xedatzen dituen multzoetan sailkatuko dira, sartzeko exijitzen ditudazioaren arabera.

b.- Udalean Udaltzaingoa sortzen denean.

Aguazilaren figura Udaltzaingorik ez duten udaletan sortzen da. Ondoren udal horretan Udaltzaingoa sortzen bada, aguazilarekin zer egin erabaki behar da. Aguazila desagertu beharko litzateke. Zortzigarren xedapen iragankorrak integrazioa aipatzen du, baina integrazioa karrerako funtzionario aguazilei bakarrik aplika dakieke. Enplegatu Publikoaren Oinarritzko Estatutuaren 75.1 artikulua arabera, funtzionarioak kidego, eskala edo espezialitateetan sailkatzen dira hautaketa-prozesu baten bitartez egiaztatutako kompetentzien arabera, eta beraz, karrerako funtzionario aguazilak agente-kidegoan integratzen dira, betiere betekizunak betetzen badituzte, titulazioa eta ikastaro murriztua gainditzea barne. Ikastaroa gainditzeko badu, aguazil gisa jarraituko du desagertu beharreko kategorian.

Udal horretan udaltzaingoa sortzen denean lan-kontratuko aguazil finkoak bere funtzioak betetzen jarraituko du desagertu beharreko postuan.

Hautaketa-prozesura borondatez joaten ez diren langileak edo prozesua gainditzeko ez dutenak betetzen ari ziren lanpostuetan geratuko dira, lanbidean aurrera egiteko dauzkaten aukerei kalterik egin gabe."

Aholku Batzorde Juridikoaren 213/2011 irizpena:

«83. Lanpostuak eskala berrira moldatzeko prozesuaren aurrean, araugileak aukera ematen die langile horiei Administrazioarekin lotzen dituen titulu juridikoa aldatzeko, lan-kontratuduna izatetik funtzionarioa izatera.

84. EPOEko bigarren xedapen iragankorrak aipatzen ditu funtzionarioen eginkizunetan diharduten edo horiek gauzatzera igarotzen den lan-kontratudun langile finkoak.

85. Lan-kontratudun izatetik funtzionariora izatera igarotzeko egin beharreko titulu juridikoaren berritze-prozesua lan-kontratudun langile finkoetara



murritzutako hautaketa-prozesua da, barne-sustapenarekin lotua, eta lehiaketa-oposizio sistemaren bidez deitu behar dena. Halakotán merezimendutzat baloratuko dira lan-kontratudun langile finko gisabenetan egindako zerbitzuak eta bere garaian egoera horretara iristeko gainditutako hautaprobak, betiere beharrezko titulazioa baldin badaukate eta eskatzen zaizkien gainerako baldintza guztiak betetzen badituzte. Gainera, salbuespentzat eta ezohikotzat jo behar da, Auzitegi Konstituzionalaren ekainaren 11ko 99/1987 epaiaren arabera, ezin baita prozesua errepikatu lanpostu berberen gainean. Gainera, beti errespetatu behar da prozesuan parte hartzen ez duten langileen laneko mugakortasuna.

86. Laburbilduz, aztertzen ari garen xedapenak EPOE ezarritako baldintzak betetzen ditu. Hala eta guztiz ere, EPOEko bigarren xedapen iragankorrak denborazko muga ezartzen du titulu juridikoa berritzeko, EPOE indarrean jartzen den egunean funtzionario-eginkizunetan diharduten pertsonak edo egun hori baino lehenago deitutako hautaketa- edo sustapen-probei eker eginkizun horiek beteko dituzten lan-kontratuko langile finkoek soilik beritu ahalko baitituzte.

87. Hala eta guztiz, aipatutako aukerak legezko aintzarik sortzen ez badu ere, denborazko mugak -EPOE indarrean jartzeko eguna aintzat hartzen duenak- aurreproiektuarekin izan lezakeen desadostasuna erabizatu behar da, bi arauen izatezko kasua osatzen duen lanpostuen sailkapena EPOEtik eratoritzen baita.

88. Hain zuzen ere, EPOEko 9.2 artikulua ezartzendu zer eginkizun-mota bete behar dituzten beti funtzionarioek, eta Administrazio bakoitzeko legeetara jotzeko agintzen du horiek garatzeko baldintzei dagokionez. Horrela, interpretazio koherente bat eginez gero, diseinatutako sistemarekin bat datorrena, ondorioztatuko genuke EPOEk egiten duen arau-aldaketa nahikoa dela Administrazioaren irizpide-aldaketa justifikatzeko eta, horrela, aintzat hartu beharreko data lanpostu horiek funtzionarioen lanpostutzat jotzen dituen legea indarrean sartu zenekoa dela."

Proposamen horiek kategoria aldatzea dakarte berekin, eta beraz ondorio ekonomikoak izango dituzte.

Batetik, aguazilak udaltzaingoan integratzen ditu. eta, bestetik, funtzionario aguazilek C2 kategoria dute, eta ez C1 titulazio bikoitxerik; beraz, toki-administrazioaren funtzionario-estatutua aplikatzen zaie, eta ezin dezakete armarik eraman.

Armak erabiltzen ikasi beharko du, eta beraz, "lehenik eta behin prestakuntza-ikastaro bat egin beharko du Polizia Akademian" esan dugunean esan nahi dugu ez dakizkien guztiak ikasi beharko dituela udaltza baten eginkizunak bete ahal izateko eta udaltzaingoan benetan integratu ahal izateko.

Zortzigarren xedapen iragankorra idazterakoan adierazi behar da integrazio hori karrerako funtzionario aguazilei soilik aplikatuko zaiela, eta ez lan-kontratudun aguazilei. Eraginpeko langileak zer baldintzatan gertatzen diren zehaztu behar da.

Eskala horretan sartzeak ezingo du ekarri gastu publiko handitzerik, ezta jasotzen duten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarritzko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

2.- Mugikortasuneko agenteak

"121. artikulua:



1. Biztanle ugari duten udalerrietan, Udaltzarak bñe funtzionario batzuk izendatu ahalko ditu hirigunean trafikoa antolatzeko, seinalatzeko eta arautzeko funtzioak eskusiboki betetzeko, trafiko eta bide-egurtasuneko arauetan ezarritakoaren arabera: mugikortasun-agente deituko dira. Hori egiteak ez du ekarriko agente kopurua edo langile-kostuak handitzea.

3. Plaza horiek eskuratzeko, C-2 sailkapen-taldeari edo baliokideari dagokion titulazioa eduki beharko da, eta aldez aurretik ikastaro teoriko-praktiko bat gainditu beharko dute, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademian edo hark izendatutako beste ordezeko udal-ikastegietan, eta beste gainerako kontuetarako tokiko funtzionarioentzat aurreikusitako arau erkidearen arabera jardun beharko dute."

Mugikortasun-agentearen kategoria sortu du. Lehenik dauden agenteekin. Borondatezkoa izango da.

Lege honetan aurreikusitakoa aplikatzeak ez du ekarriko gastu publikoa gehitzea ezta Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen oinarritzko eskala osatzen dutenek jasotzen dituzten ordainsari osoen urteko kopurua aldatzea ere, beraz aipatu aldagetak dakarren oinarritzko ordainsari gehikuntza bestelako oinarritzko osagarrietan irentsiko da."

Konstituzio Auzitegiaren 2006ko otsailaren 1eko epäak dioenez, "funtzio publikoan sartzeko titulu akademikoa eskatzean datan sistema orokorra bi printzipio gidariren ondorio da; bata, tituluak irizpide taxonomiko gisa hartzea funtzionarioen kidegoak, eskalak, mailak eta kategoriak argitzeko (30/1984 Legearen 25. artikulua), eta bestea, langileen baze-sustapena titulu horiek errespetatuz egin dadin exijitzea (22.1 artikulua)(2388/1993 KAE).

"Printzipio horiek ez ezagutzeak kalte egiten dio gaitasunari, lanpostu jakin batean jarduteko eskakizun absolutu gisara, eta meezimendua ukatzen du izendapenera jotzeko alderaketa- eta lehentasun-osagai erlatibo gisa."

12. Udaltzaingoko funtzionarioak eskala gorenean sartzea.

Egungo egitura

Eskala gorena, Superintendentea eta intendentea - A.
Eskala exekutiboa - Komisarioa eta komisariordea -A2
Ikuskaritza. Ofiziala eta ofizialordea - C1
Oinarritzkoa. Lehenengo mailako agentea eta agentea
Titulazio baliokidean sartzeko oinarritzko eskala C2-

Behin izendatuta C1 kidegoan sailkatuko dira, leherengo mailako agentearen kategoriarekin oinarritzko eskalan, ondorio ekonomiko eta administratiboak Ertzaintzaren eremura mugatuko direlarik.

Proposatutako egitura

Eskala gorena, Intendentea - A1
Eskala exekutiboa - Komisarioa eta komisariordea -A2
Ikuskaritza. Ofiziala eta ofizialordea - C1
Oinarritzkoa. Lehenengo mailako agentea eta agentea.



Oinarritzko eskalan sartzeko, C! titulazioaren titulazio baliokidea aurkeztu beharko da.

Bosgarren Xedapen Iragankorrak toki-funtzionarioen integrazioa arautzen du, eta honako hau ezartzen du: intendentearen kategorian duten langileak eskala gorenean integratuko dira automatikoki, eta komisaio eta komisariordearen kategorian dutenak, berriz, eskala exekutiboan, hurrenez hurren.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legea indarrean sartu aurretik A mailako lanpostua zuten eta horren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortutako plaza baino maila baxuagoko kategorietan sartu ziren Udaltzaingoko kidegoetako funtzionarioak, eskala gorenean sartuko dira.

Eskala horretan sartzek ezingo du ekarri gastu publikoa handitzerik, ezta jasotzen duten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarritzko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

Xedapen iragankor horretan birsailkapen bat proposatzen da, eta horren arabera ez dago aldaketarik, ez eskalan, ez kidegoan, ez intendentearen kategoriantzat, ez komisarioaren eta komisariordearen kategoriantzat.

13.- Aldatzen diren buruzagitza-postuak

Aztertzen ari garen aurreproiektuaren 118. artikulari jarraiki, udaltzaingoak egituratu egiten dira, toki-administrazioek zer eskala eta kategorian bereizi behar dituzten zehaztuz, aldi berean bete behar diren bi baldintzen arabera, batetik udalerriko biztanle kopurua, eta bestetik langile kopurua.

Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoen antolaketan eta funtzionamenduari aplikatzekoak diren esparru-arauak ezartzen dituen maiatzaren 5eko 58/2015 Dekretuak indarrean jarraituko du legearekin kontrastanean ez dagoen orotan. eta Dekretu horren zazpigarren artikuluan eskala eta kategorian bakoitzari dagozkion eginkizunak zehazten dira.

Udaltzaingoaren Erregelamendu guztiak Dekretu horren xedapenetara egokitu beharko dira hiru urteko epean. Horrek berekin ekar dezake une honetan buruzagitza-eginkizunak betetzen ari diren funtzionarioak aldatu beharreko buruzagitza-postuak betetzen aritzea.

Behin plantilla egituratu denean biztanle kopuruaren eta plantilla kopuruaren irizpideari jarraiki, parametro horiek, hala nola udalerrian erroldatutako pertsona kopurua, nabarmen aldatzen dira, eskalen arabeko egitura 118. artikulua berridazteko proposamenarekin bat ez etortzeraino, eta lege-aurreproiektuaren artikuluetan egoera hori ez da zehaztu.

Datuen bilakaera hori egiaztatu ondoren, postuak beregituratu behar dira, egoera berriarekin bat etorriz. Alabaina, gaiaren garrantzia aintzat hartuta, aldaketa horiek gertatu direla ebatzeko garrantzizko informazio fidagarri bat hartu beharko da aintzat, gauzak benetan aldatu direla bermatzeko moduan, esaterako, errolda har daiteke kontuan.

Betebehar hori betetz egingo diren jardunek honako hau ekarriko dute berekin: buruzagitzaren kategorian murrizten bada, hutsik dauden buruzagitza-lanpostuak



amortizatu egingo dira, hau da, titularrik gabe geatuko dira. Lanpostu horiek titularra badute, funtzionarioek lanpostu horietan jardunez jarraituko dute, eta lanpostua "desagertzeko" daudenen artean sailkatukoda, hau da, hutsik geratzen den unean desagertuko da.

Eskalak sailkatzeko aplikatutako baremoak aldatzeaen ondorioz, aldaketak goranzko aldaketa bat badakar berekin, funtzionarioek beren postuan jarraituko dute, izendatu zituztenean zeuzkaten baldintzekin eta betetzen ari diren lanpostuari benetan esleitu zitzaizkion ordainsariak jasoz.

Betetzen ari den lanpostua aldatzeak ez du esan nah funtzionarioek diru gehiago jasoko dutela betetzen ari diren lanpostuari esleitutako ordainsariak baino, eta beraz, ezin izango dute inolako eskubiderik jasotzen betetzen ari diren buruzagitza-eginkizunak ordaintzeko orain artean esleituta eduki ditzaketen ordainsari osagarrien gainean, ordainsari horiek edonola deituere.

Nolanahi ere, aldaketa horrek ez du gastu publikoa handitzea ekarriko, ezta funtzionarioek urtean guztira jasoko dituzten ordainsariak aldatzea ere.

Seigarren Xedapen Iragankorraren 2. atalaren 2. paragrafoa berridazteko proposamenaren arabera, birsailkatutako lanpostuari dagokion kategorian integratzeko aukera dago, honako betekizun hauetakobat betez gero:

- edo postu horretan behin betiko destinoa izatea Poliziaren Legea indarrean hasi baino bost urte lehenagotik.
- edo kategorია horri dagokion tituluaren jabe izatea
- edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen 59.2 artikuluan aurreikusitako trebakuntza-ikastaroak egin izana datur direnean edo egokitzapenaren aurretik deitzen direnean.
- edo Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak mandako egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktikoa gainditzea.

Proposamena nola idatzi den ikusita, integrazioa bidera daiteke honako betekizun hauetako bat betetzen denean:

- Behin betiko destino berbera izatea azken bost urteetan.
 - o Ez zaio eskatzen kategorია horri dagokion titulazio-betekizuna betetzea.
 - o Ez zaio eskatzen Poliziaren Legearen 59.2 artikuluan aurreikusitako trebakuntza-ikastaroa gainditu izana.
 - o Ez zaio eskatzen egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktiko bat gainditu izana.
- Kategorია horri dagokion titulazioaren jabe izatea.
 - o Ez zaio eskatzen behin betiko destino berbera izatea azken bost urteetan.
 - o Ez zaio eskatzen Poliziaren Legearen 59.2 artikuluan aurreikusitako trebakuntza-ikastaroa gainditu izana.
 - o Ez zaio eskatzen egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktiko bat gainditu izana.
- Poliziaren Legearen 59.2 artikuluan aurreikusitako trebakuntza-ikastaroa gainditu izana.
 - o Ez zaio eskatzen behin betiko destino berbera izatea azken bost urteetan.
 - o Ez zaio eskatzen kategorία horri dagokion titulazio-betekizuna betetzea.



- Ez zaio eskatzen egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktiko bat gainditu izana.
- Egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktikobat gainditu izana.
 - Ez zaio eskatzen behin betiko destino berbera izateazken bost urteetan.
 - Ez zaio eskatzen kategoria horri dagokion titulazio-betekizuna betetzea.
 - Egiaztapen profesionaleko ikastaro teoriko-praktiko bat gainditu izana.

Horren haritik, Konstituzio Auzitegiaren 13/2010 epaia transkribatu da:

"Titulaziorik gabe sartzeko asmoak funtzio publikora sartzeko aurreikusitako merezimendu- eta gaitasun-printzipioak ez ezagutzea dakar; horrek kalte egiten dio gaitasunari, lanpostu jakin batean jarduteko eskakizun absolutu gisara, eta merezimendua ukatzen du izendapenera jotzeko alderaketa- eta lehentasun-osagai erlatibo gisara (388/1993 KAE, abenduaren 23koa [RT 1993,388], F2), estatu osoan aplikagarria den araubide orokorra, zalantzaik gabe oinarritzkoa dena, hausten baitu."

Hori dela eta, ulertu behar dugu aipatu dugun beharezko malgutasuna – autonomia-erkidegoari aitortu behar zaiona, une jakin batean zegokion eskualdatze-prozesuaren bidez bere gain hartutako funtzio eta zerbitzuak bere antolamendura moldatzeko– ez dela iritsi behar estatuko oinarritzko araudiak izaera orokorreaz aurreikusitako baldintza baten eskakizuna aintzat ez hartzera. Argi dago ezinezkoa dela karrerako funtzionario izatera iristea sarrera hori gertatzen den unean aplikagarria den araudiak eskatutako baldintzen bat betetzen ez bada, kasu honetan tituluaren baldintzarekin gertatzen den bezala; izan ere, estatuko oinarritzko araudiak ez ezik, funtzio publikoaren atoko araudi kanariarrak ere ezartzen du eskakizun hori (2/1987 Legearen 23. eta 24. artikulua [LCAN 1987, 943])".

Auzitegi Gorenak, 2006ko irailaren 29ko epaian, adierazten du autonomia-erkidego baten antolamendu-malgutasunak ezin duela alde batera utzi estatuko oinarritzko araudiak oro har aurreikusitako eskakizun bat betetzeko beharra.

Jarraian, EABJren 213/2011 irizpenean emandako iritzia emango dugu aditzera:

"81. paragrafoa. Atal honetan aipatu behar dugu aukera dagoela titulua izan gabe ere eskala horretarako gordetako lanpostuak hornitzeko, lanpostuotan jarduteko gaitzen duen espezializazio-ikastaro bat gaindituz gero. Aukera horrek, ordea, EPOEk diseinatutako sistema, aurrerago aipatu dena, ez ezagutzea esan nahiko luke, eta ez ezagutzea, halaber, eskala batsortzeko orduan, bete beharreko eginkizunetarako lanbide-prestakuntza jakin bat eskatzea hartzen dela oinarritzat, eta sarbidean eskatutako tituluak gaitzen duela lanpostu horretan jarduteko."

Konstituzio Auzitegiaren epaia eta transkribatuak EABJren txostena ikusirik ondorioztatzen da langileak udaltzaingoetako buruzagitza-postuetan sartzerakoan aintzat hartu beharko dela bai Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia, bai EABJk bere irizpenetan emandako iritzia, eta beraz, behar adinako titulazioaren betekizuna bete beharra dagoela.

14. Udaltzaingoetan bitarteko langileak izendatzeko poltsak sortzea



Bitarteko langileak izendatzeko funtsezko arrazoia urgentzia- eta premia-arrazoiak dira; nolanahi ere, legez xedatutakoaren arabera, bitarteko funtzionario bat hautatzeko prozedura azkarrak baliatu behar da, une oro berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipioei men eginez (EPOEko 10.2 artikulua).

Horretarako xedatu zuen Administrazio honek, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren maiatzaren 31ko 14/2006 Ebazpenaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruz 2006ko maiatzaren 30ean Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako Akordioa argitaratzea.

Akordio horretan jasotzen dira langileak hautatzean aintzat hartu beharreko printzipioak –printzipio horien artean berdintasunaren printzipioa nabarmentzen delarik–, enplegu publikora jotzeko eskakizun orokorren eta lanpostuaren eskakizunen arabera, eta hautagaiak poltsetan integartzeko baliatutako merezimenduaren eta gaitasunaren irizpideen arabera irizpide horiek baldintzatzen baitute poltsen barruan duten hurrenkera.

Lan-poltsak eratzeko irizpideak Akordioaren 4. artikuluan xedatzen dira, zehazki: EAEko Administrazio Orokorraren kidego, eskala eta lan-kategoriarekin bat etorritik eratuko dira lan-poltsak; eta enplegu-publikoko eskaintzak izango dira lehentasuneko tresna lan-poltsak sortzeko. Hala ere, lanbide-gaitasun berezia eskatzen duten lanpostuak betetzeko, edo salbuespeneko egoeretan, langileak hautatzeko deialdi bereziak egitea erabaki dezake Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak.

120. artikuluan ezarri da Toki Administrazioak, lanpostuak urgentziaz eta aldi baterako estali behar dituenean, udalen arteko lanidatza-mekanismoak erabiltzeko edo bitartekoak izendatzeko aukera izango duela, funtzio publiko orokorraren legerian ezarritakoaren arabera, betiere langile horiek beren zereginak betetzeko oinarritzeko prestakuntza badutela bermatzen bada.

Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiari proposatutako aurreproiektuan, poliziaren legearen 120. artikuluan, eskumenak ematen zaizkio lan-poltsak osatzeko, bitarteko funtzionarioak udaltzaingoan izendatzeko, hark antolatutako oinarritzko ikastaro bat gainditu dutenekin. Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak zehaztuko ditu ikastaroa egiteko baldintzak.

Martxoaren 30eko 96/2010 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Akademiaren egitura organikoari buruzkoak, 8.1.h) artikuluan ematen dio Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiaren prestakuntzarako eskumena. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren izendapena ere Segurtasun Sailaren egitura organikoari buruzko dekretutik eratorri da:

"8.1.h) Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoan, segurtasun pribatuko zerbitzuen, larrialdietako zerbitzuen eta larrialdietako eta babes zibileko boluntario eta herritarren ikasketa-planen eta heziketa eta trebakuntzarako ikastaroak zuzentzea, planifikatzea eta gainbegiratzea."

Jarraian, bitarteko langileak hautatzeko prozedurazehazten da: egiaztatutako kualifikazio berezi bat eskatuko da, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiari soilik egin daitekeen ikastaro bat gaindituz lor daitekeena.



Gai honi buruz aipatzekoa da Bilboko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiaren 333/2011 epaia – 942/2009 administrazioarekiko auzi-errekurtsua / Prozedura laburtua. Auzi hartan Zuzenean zerbitzuko agenteen lan-poltsarako deialdia errekurritu zen, baita HAEek egindako deialdiaren oinarri orokorrak ere, eta epaiak ez zuen onartu administrazioarekiko errekurtsua, arrazoi hauengatik:

- HAEek idatzitako deialdia eta oinarri orokorrak bat zetozen Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak ezarritako irizpideekin
- Berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak errespetatzen ziren, eta ahal bezain laster bermatzen zen prestazioen kalitatearen gutxieneko estandarraren jarraipena

LAUGARRENA.- "Gaiaren funtsean sartuta, hona hemen xedatzen duen Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzararekiko Harremanetarako zuzendariaren maiatzaren 31ko 14/2006 Ebazpenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruz 2006ko maiatzaren 30ean Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako Akordioa argitaratzea ezartzen duenak, 3. artikuluan: Lan poltsak kudeatzea Ogasun eta Herri Administrazio Saileko Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari dagokio". 4.3 artikuluko lehen paragrafoan, berriz: "Halaber, lanbide-gaitasun berezia eskatzen duten lanpostuak betetzeko, langileak hautatzeko deialdi bereziak egitea erabaki dezake Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak", eta 23.3 artikuluan: "HAEko zuzendariak, Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak ezarritako irizpideen arabera, deialdiaren oinarriak onartuko ditu, aukeraketa-prozesu hori arautuko dutenak (deialdi espezifikoak); oinarri horietan, aukeraketa-prozesuko probak eta/edo baloratuko diren merezimenduak zehaztuko dira, bai hautaketa-prozesuaren barruan horiek zer garrantzi izango duten ere".

Gauzak horrela, Funtzio Publikoko zuzendariak 2009ko otsailaren 10ean idatzi zuen "Zuzenean zerbitzuko agenteen lan-poltsa sortzeko beharrianari buruzko txostena" HAEko zuzendariarentzat. Txosten horren hitzurrean beraz aipatzen da "Administrazio honetan Zuzenean zerbitzuko agenteak hornitzeko sortu den beharrianaren ondorioz, deialdi berezi bat egitea proposatzen da, hedabideetan, Zuzenean zerbitzuko agenteen lan-poltsa sortzeko, eta jakinarazten da..."

Esandako hori guztia aintzat hartuta, ez da onartzen errekurtsuaren lehenengo arrazoiak, HAEek egindako deialdia eta oinarri orokorrak bat ditazoten Eusko Jaurlaritzaren Funtzio Publikoko Zuzendaritzak ezarritako irizpideekin.

BOSGARRENA.- 2009ko otsailaren 15ean iragarri zen El Correo egunkarian "Zuzenean-Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Arreta Zerbitzurako Agenteen Lan Poltsarako Nahitaezko Prestakuntza Ikastaroen Deialdia". Deialdi horren bidez 10 ikastaro eskaintzen ziren, 150 pertsonentzat, ikastaroa gainditu ondoren Zuzenean zerbitzuko agenteen lanposturako Lan Poltsetan edo Lan Eskaintza Publikoan parte hartu nahi bazuten" (demandako 5. dokumentua).

Horrenbestez, herritar guztiei orokorrean eskaintzeko deialdia da, tituluaz (goi-mailako batxilergo tekniko edo baliokidea) eta hizkuntza-eskakizunaz (2. HE edo baliokidea) gainera beste baldintzarik eskatzen ez duena eta, eskaintzeko lanpostuaren izaera objektiboa edozein eztabaidatik kanpo dago.

Maiatzaren 31ko 14/2006 Ebazpenaren 23.1 artikulua honela dio: "Lan-poltsak handitzeko deialdi publikoak bideratuko dira gaitasun-proba bat edo gehiago eginez, merezimenduak kalifikatuz, edo horiek biak eginez, aldez aurretik ezarritako baremo baten arabera. Euskara jakitea beti baloratuko da eta hura egiaztatzeko, hautagaiek dagozkien hizkuntza-eskakizunen ziurtagiriak eman beharko dituzte, edo bestela hizkuntza-eskakizun haiekin homologatutako tituluak".

Arau horrek ez du debekatzen deialdi publikoaren aurretik prestakuntza-ikastaroak egitea. Hori horrela, zilegi da suposatzea EAE osoan hautaketa-prozesua egiteko unean, eskakizun espezifikoak hain orokorrak izanik, oso eskabide-kopuru handia iritsiko litzatekeela (prima facie aipatutako 150 plazak baino askoz gehiago), eta horrek zailtasunak ekarriko



lituzkeela prozeduran, baita denborazko atzerapena ere; hori dela-eta, herritar guztientzat irekitako prestakuntza-eskaintzaren bitartez berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak bete ondoren, guztiz zilegi da ondorengo partaidetza-eremu subjektiboa mugatzea, administrazio-eraginkortasunezko irizpideei men eginez. Hain zuzen ere, "eskuragarri dauden langileen gabeziaren aurrean" (F.3 Ext) eta, horren ondorioz, gabezia hori betetzeko premia ikusita, Herritarrentzako Arreta Zerbitzua baita Eusko Jaurlaritzaren eta herritarren arteko harremanaren egituratzailea (F.12 Ext), prestazioaren gutxieneko kalitate-estandarraren jarraitasuna ahal bezain laser bermatzea da helburua.

Hautaketa-prozesuaren deialdian, ikastaroetan sartzeko betekizun objektibo eta orokorrak eskatzen ziren, hau da, titulazio ofiziala eta euskararen 2. eskakizuna. Halaber, oraingo eta etorkizuneko premiak balioetsi ondoren ikastaroak kopuru jakin batera mugatu ziren. Epai horretan garrantzia ematen zaio gizarte osora irekitako prestakuntza-eskaintza batek, dagokion deialdi publikoa egin baino lehen, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak betetzeari, eta, horrenbestez, guztiz zilegi da ondorengo partaidetza-eremu subjektiboa mugatzea, administrazio-eraginkortasunezko irizpideei men eginez.

Segurtasun Sailaren proposamenean azter daiteke zilegi eta egoki ote den deialdi espezifiko bat egitea, hedabideen bidez eta herritar guztientzat irekia, ikastaroak egiteko eskakizun objektibo eta orokor larriak jarrita. Horretarako, ordea, beste alderdi hauek aintzat hartu eta zehaztu beharko lirateke aurretiaz: eskainiko den ikastaroaren plaza kopurua mugatzeko irizpideak; hautaketa-irizpideak, aurkezten direnen artean ikastaroa egin ahalko duten pertsonak erabakitzeak; ikasleen harreman juridikoa; ikastaro horien kostu errealtaren analisia; eta ikastaroaren kudeaketa-proiektua.

Ondorioak:

1.-Hautaketa-prozesu baten oinarrietan deitutako plaza kopurua aldatzeko gehieneko ehunekoa Legean arautu beharko litzateke eta uste dugu, eskariak aurkezteko epe berri bat ireki beharrik gabe.

2.- Hautaketa-organismoek dagokien proposatu da 48 artikulua berridaztea honako hauek erantsiz haietan parte hartzeko aukerarik ez duten langile gisa, Enplegu Publikoaren Lege-proiektuarekin bat etorriz funtzionario-elkarteen edo lanbide-elkargoen ordezkartzean edo sindikatuen kurtura diharduten langileak.

Hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten aholkulari adituei dagokienez erantsi beharra dago, gainera, haien jardunak ere objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfidentzialtasun-printzipioak bete behar dituela.

3.- Karrera profesional horizontalaren modalitate desberdinen ezarpena eta garapena eraginkorra izateko, beharrezkoa izango da ezinbestean, euskal administrazio publiko bakoitzak dagokion arau-garapena egitea; eta karrera profesionalaren eraginkortasuna, edonola ere, dagokion administrazioen aurrekontu-ahalmenaren baitan egongo da. Funtzio publikoaren alorreko indarreko legeetan erregulatutako oinarritzko legeria errespetatu beharko da, baita haren erregelamenduzko garapena ere. Une honetan karrera profesional horizontala garatu gabe dago. Alabaina, euskal enplegu publikoari buruzko legearen aurreproiektua izapidetzen ari da, eta horren arabera Eusko Jaurlaritzari eskumena ematen zaio garapen profesionalari eta jardunaren baluazioari buruzko erregelamendu bat egiteko, erregelamendu horretan euskal administrazio publiko guztietan horretarako aplikatu beharreko oinarritzko irizpideak bilduko direlarik,



Euskadiko Enplegu Publikoa Koordinatzeko Batzordeak horri dagokionez ezarritako irizpideei jarraiki.

Euskal Enplegu Publikoari buruzko Legeak homogeneousuna ezarri behar du Euskal Administrazio Publikoetan, eta haren Aurreproiektuan zortzigarren xedapen iragankor bat jaso da, atertzen ari garen aurreproiektuan ere jaso behar dena:

"xedapen iragankorra:

Ertzaintzako langileei eta Toki Administrazioaren menderako udaltzainei ezin izango zaie karrera profesionaleko osagarriaren karrerako edo aurreratutako ordainsaririk onartu.

Gainera, honako paragrafo hau erantsi behar da: "Karrera profesionalari dagokion ordainsari-eskubideak ezin izango dira atzeraginez onartu."

4.- Ikuskapen-eskala eta oinarritzko eskala talde hietan sailkatzen dira: C taldea eta C1 azpitaldea. Horren ondorioz, sartzeko eskatutako titulazioa C1 azpitalde horri dagokiona da.

5.- Langileak Udaltzaingoetako buruzagitza-postu berrietan sartzeari dagokionez, prozedura egokitu beharra dago, batetik, Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziara, eta, bestetik, EABJk bere irizpenetan emandako iritzira.

6.- Zortzigarren xedapen iragankorra idazterakoan alderazi behar da integrazio hori karrerako funtzionario aguazilei soilik aplikatuko zaiela, eta ez lan-kontratudun aguazilei. Eraginpeko langileak zer baldintzatan gertatzen diren zehaztu behar da.

Karrerako aguazil funtzionarioak agente-kidegoan integratzen dira, eta horretarako betekizunak bete beharko dituzte, titulazioa eta ikastaro murritzua gainditzea barne.

Batetik, aguazilak udaltzaingoan integratzen ditu. eta, bestetik, funtzionario aguazilek C2 kategoria dute, eta ez C1 titulazio baidokiderik; beraz, toki-administrazioaren funtzionario-estatutua aplikatzen zaie, eta ezin dezakete armarik eraman.

Armak erabiltzen ikasi beharko du, eta beraz, "lehakik eta behin prestakuntza-ikastaro bat egin beharko du Polizia Akademian" esan dugunean esan nahi dugu ez dakizkien guztiak ikasi beharko dituela udaltzaia baten eginkizunak bete ahal izateko eta udaltzaingoan benetan integratu ahal izateko.

Erantsi beharra dago, gainera, eskala horretan sarzeak ezingo duela ekarri gastu publikoa handitzerik, ezta jasotzen duten urteko ordainsariak aldatzerik ere; beraz, aldaketa horrek dakarren oinarritzko ordainsarien hazkundera beste ordainsari osagarri batzuek xurgatuko dute.

7- Hogeita batgarren xedapen gehigarria erantsi da, udaltzaingoetako funtzionarioen arteko trukearen figura arautzeko. Administrazioak berdintasun-printzipioak errespetatu eta bermatu behar dituen aplikatuko den prozedurak publikitate- eta konkurrentzia-printzipioak bermatu beharko ditu.

III. tituluaren V. kapitulua aldatu da, eta, horrenarabera, Osasuna eta Babesa hartuko du hizpide, eta ez, orain arte bezala, zerbitzu-jarduna. Osasun-zerbitzu bat



ezarri du; zerbitzu horren gaitasunak eta antolamendua erregelamendu bidez ezarriko dira, eta lankidetzakontratuak edo -hitzarmenak ezarri ahaliko dira mediku profesionalekin edo erakunde sanitario publiko edo pribatuekin. Lankidetzakontratu eta -hitzarmenak administrazio-organo baten eskutik sinatu ahal izango dira bakarrik, eta ez zerbitzu baten eskutik.

9.- Adinarengatik zerbitzu aktiboan jarduteko modulazioa aplikatzeko proposatzen diren neurri zehatzak araututa daude 194/2012 Dekretuan jasotako lan-baldintzei buruzko Akordioan. Lan-baldintzen eta negoziazio kolektiboaren alorreko neurriak dira. Zerbitzu aktiborako espezifikotasun jakin batzuk jasotzen dira alor horretan, eta eraginpeko administrazio-egoera ez da aldatu, zerbitzu aktiboa izateari eusten diolako.

Adinarengatik zerbitzu aktiboaren modulazioa erregulatzea ezin daiteke administrazio-egoera soiltzat hartu, ezta zerbitzu-aktiboko administrazio egoeratzat ere, **eta beraz, administrazio-egoeren erregimenaren sailkapenaren tipologia berritatzat jotzea ez da bidezkoa gure iritziz:**

- Aztertutako gaia lan-baldintzen eta negoziazio kolektiboaren alorreko gaia da, eta ez lege-mailako arau baten bitartez aautu beharreko gaia.
- Langilearen ahalmen fisiko edo psikikoen murrizketak aparteko eskubide baten antzera jaso da. Interesdunak eskatuta onartzen da, adina betetzeko betekizun bakarrarekin.
- Segurtasuna Sailari eskumenak kendu zaizkio urte natural eta kategoria bakoitzeko arrazoiarengatik bigarren jarduerako egoerara igaro daitezkeen gehieneko funtzionario kopurua mugatzeko, unean-unean eskuragarri dauden langileen arabera eta Kidgoaren premia organiko eta funtzionalen arabera.
- Eraginpeko funtzionarioa aldi baterako destinorik gabe egon liteke destinoa esleitu edo lanpostua egokitu arte, eta ez zaio zerbitzuak benetan ematea eskatuko, hau da, zerbitzu aktiboan jarraituko du baina "Administrazioaren esku" (indarreko araudian bakar-bakarrik aurreikusi da "Segurtasun-sailburuordearen esku").
- Euskal Funtzio Publikoaren Legearen arabera, Administrazioaren beste sektore batzuek (irakasleak, osasun-langileak segurtasun-langileak eta abar) soilik izango dute Administrazio Orokorreko lanpostuak betetzeko aukera, eta bakar-bakarrik badin eta Administrazio Orokorreko lanpostuen zerrendek hori aurreikusten badute. Ezinezkoa da aurreikustea Ertzaintzako eta udaltzaingoetako langileak betetzea Administrazio Orokorrean, Autonomia Erkidegoko Administrazioan edo gainerako euskal administrazio publikoetan langileentzat erreserbatutako lanpostuak, polizia-funtzionarioen jardunaz apartekoak.
- Egoera horretan Aurreproiektuak ezar lezake lanpostari dagozkion ordainsariak jasoko direla, osagarri espezifikoaren osagarri berezia izan ezik, eta horrek esan nahi du zerbitzu aktiboko egoeran dagoelako dagozkionak baino ordainsari txikiagoak jasotzea, baina funtzio publikoaren erregimen orokorrean nahitaezko eszedentzia-egoerari esleitutako ordainsariak baino handiagoak, eta bide batez esango dugu azken egoera horretan ere ez dela lanpostu baten benetako jarduna gertatzen.
- Gaur egun indarrean dauden aurrekontu-egonkortasuneko printzipioen arabera, edozein arau-aldaketaarekin batera, aldaketa horretatik erator litezkeen ondorio ekonomikoei buruzko azterketa



aurkeztu behar da, baina espedientean ez da horrelako azterketarik bildu.

10.-Bigarren jarduerako deklarazioari dagokionez, gaur egungo araudiaren arabera, hau da, Poliziaren 471992 Legearen 88. artikuluaaren arabera, bigarren jardueraren jarduna Herrizaingo Sailaren esku edo toki-erakundaren eskumeneko organoaren esku dago, eta haren eginkizunak –ikuskapena, prebentzioa, prestakuntza edo haren kategoriarekin bat datozen bestelako eginkizunak– dagokion kidegoaren barruan bete behar dira. Gainera, lanpostuen zerrendetan ezarritakoaren arabera bigarren jarduerako egoeran dauden langileek bete ditzaketen lanpostuak betetzeko aukera izango dute.

Aztertzen ari garen aurreproiektuan, zehazkiago aurreproiektuaren 86.5 artikuluan, aldi baterako lanpostu batzuk esleituak zaizkio, jardun hori eskatzen duten zerbitzuetan lanean ari den unitatean. Unitate horretan lanpostu hutsik ez badago, beste lantoki batean hutsik geratu den lanpostua esleituak zaio, hain zuzen ere interesdunak proposatutako hiru postuen artean Administrazioak erabakitzen duen postuan, eta hori ezinezkoa bada, interesdunaren kategoriarekin eta titulazioarekin bat datozen zerbitzu osagarriak emateko aukera izango du, dagokion Administrazioaren beste lanpostu batzuetan. Nolanahi ere, azken aurreikuspen hori osatu behar da. Izan ere, ezinbestekoa da bete beharreko lanpostua dagokion lanpostuen zerrendan sailkatu izana Segurtasun Kidego eta Indarretako funtzionarioek betetzeko moduko lanpostu gisa.

Bigarren jarduerako administrazio-egoeraren erregulazioak jasotako zenbait aurreikuspen ez dira bidezkoak gure ustetan, honako arrazoi hauengatik:

- Bigarren jarduerako egoeran deklaraturako funtzionarioak "administrazioaren esku" gerta daitezkeela aurreikustea, "Segurtasun Sailaren esku" geratu beharrean.
- Ertzaintzako eta udaltzaingoetako langileek Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean edo gainerako euskal Administrazio Publikoetan langileentzat gordeta dauden eta polizia-funtzionarioen jardunaz aparteak diren lanpostuak bete ditzaketen aurreikustea berme-klausula bat erantsi gabe. Horren arabera, esleipen hori egiteko aukera izango da, soil-soilik, dagokion lanpostua, aldez aurretik Segurtasun Kidego eta Indarretako funtzionarioek betetzeko moduko postu gisa sailkatu bada.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abenduaren.....(a).

Izpta: Carmen Miralles Jorda

Aholkulari juridikoa



O. E.:

Izpta: Juan Maria Barasorda Goicoechea

FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARIA

VIII

**INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA
ADMINISTRACIÓN / HERRITARRAK HARTZEKO ETA
ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO
ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**

Firmante: **JAVIER BIKANDI IRAZABAL**
Fecha de la firma: **27/07/2015 14:36:18**

Validación de la firma:  **Correcta**

Firmante: **KOLDOBIKE MAXIMIÑE URIARTE RUIZ DE EGUINO**
Fecha de la firma: **27/07/2015 13:50:03**

Validación de la firma:  **Correcta**

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento:	IO-2015-033
Denominación:	Anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco

Elaborado:

Fdo.: Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino

Responsable de Proyectos

Fecha: 27-07-2015

Aprobado:

Fdo.: Javier Bikandi Irazabal

Director de Atención a la Ciudadanía e
Innovación y Mejora de la Administración

Fecha: 27-07-2015

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2014-033

Página: 2/8

Propuesta:

La Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad, mediante transmisión telemática con entrada de 17 de julio de 2015 en la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA en adelante), solicita Informe del Anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

Esta Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (en adelante DACIMA) tiene entre sus funciones *“el análisis y evaluación de las actuaciones departamentales en materia de estructuración interna, organización, y creación de entes institucionales y de los proyectos de disposiciones de carácter general que las establezcan; así como el asesoramiento y apoyo técnico a los departamentos y entes que la integran en materia de organización y procedimientos”* tal y como se determina en el artículo 18 c del **Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia**, en relación con lo previsto en el art. 6.1f del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre.

Además, en el marco del Plan de Innovación Pública 2014-2016 y en aplicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2015, le corresponde el impulso de la Transparencia y Buen Gobierno.

El Proyecto de Orden que nos ocupa, consta de

- una larga exposición de motivos que justifica en 8 apartados las motivaciones que han dado lugar a la modificación de la actual regulación
- un artículo único que recoge en 66 apartados todas las modificaciones propuestas a la ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco
- 8 Disposiciones Transitorias
- 2 Disposiciones Finales

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2014-033

Página: 3/8

Valoración:

Analizado el Anteproyecto de Ley en cuestión, procede señalar lo siguiente:

A) En cuanto a Aspectos Estructurales y Organizativos.

La mayoría de los aspectos organizativos que se modifican corresponden a cuestiones relacionadas con la ordenación de los puestos de trabajo, la gestión de las situaciones administrativas de sus ocupantes, la modificación de la estructura profesional con la desaparición de algunos puestos como el de “superintendente” o la regulación de otros como el de “alguacil” o “agente de movilidad” en el ámbito local, la incorporación de estímulos retributivos, la ordenación de procedimientos de formación o selección, la articulación de mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial, la adopción de medidas de acción positiva a favor de las mujeres, la regularización de mecanismos que agilizan la carrera profesional a través de la promoción interna o de la carrera profesional horizontal, el régimen de especialización de la Ertzaintza, el régimen de derechos del funcionariado, el régimen disciplinario... y otras cuestiones cuyo análisis corresponde a la Dirección de Función Pública, quien emitirá el informe preceptivo oportuno.

Mención especial merece, desde el punto de vista organizativo, por la flexibilidad y racionalidad que proporciona, la conformación de estructuras organizativas profesionales que permitirán que cada municipio encuentre soluciones organizativas apropiadas a sus necesidades y peculiaridades, de tal forma que los miembros de la policía local podrán actuar fuera de su término municipal o que los/as alcaldes/as, podrán autorizar la permuta de destinos de miembros de la policía local, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.

Así mismo, resulta claramente positiva la clarificación de funciones en procedimientos disciplinarios y expedientes de rehabilitación del Consejo de la Ertzaintza.

Por último, en este apartado hay que hacer referencia al órgano que se crea, y que se ha denominado “Comisión de control de la Ertzaintza”, como órgano dotado de

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2014-033

Página: 4/8

neutralidad e independencia para supervisar el funcionamiento en el tratamiento de las quejas referidas al servicio policial, sin que ello suponga eximir de su responsabilidad a las autoridades que corresponda. Este órgano viene a responder a la previsión 61 del Código europeo de Ética de la Policía - Recomendación del Consejo de Europa del 2001- que contempla que *“Los poderes públicos deben establecer procedimientos efectivos e imparciales de recurso contra la policía”* y a la 62 referida a *“la implantación de mecanismos que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comunicación y la comprensión entre la población y la policía”*. Precisamente esta Comisión de control externo junto con el OIMSP – EKINBIDE, que es el órgano del Departamento de Seguridad encargado de recibir, estudiar e impulsar las iniciativas de los ciudadanos y ciudadanas dirigidas a mejorar la calidad de los servicios que presta la Ertzaintza, contribuyen a promover la necesaria interacción entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo. Ello, tan vinculado a la rendición de cuentas, forma parte de la filosofía de Transparencia y Buen Gobierno que este Gobierno Vasco ha decidido impulsar y que está plasmado en el Eje 1 del Plan de Innovación Pública 2014-2016, y será objeto de mayor análisis en el apartado C) relativo a la Transparencia y el Buen Gobierno,.

B) En cuanto a Aspectos Procedimentales:

El texto propuesto recoge abundantes medidas dirigidas a la simplificación y mejora de procedimientos que valoramos muy positivamente.

Por ejemplo, la asignación a la Academia Vasca de Policía y Emergencias como órgano permanente de selección para el ingreso de nuevos efectivos, lo que permite, si así se lo encomiendan las entidades locales, la posibilidad de promover procedimientos de convocatoria de forma conjunta entre varias instituciones, lo que contribuye a racionalizar gastos y reduce la dedicación de tiempos y esfuerzos a las personas que se presentan a estas convocatorias de puestos, en definitiva, se generan menores cargas para la administración y para los/las administrados/as.

También merecen una valoración positiva los mecanismos que se crean de cooperación intermunicipal para la cobertura de necesidades de personal de forma

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2014-033

Página: 5/8

urgente y temporal, y con la Ertzaintza, cuando no se alcance a dar cobertura a la totalidad de los servicios de su competencia.

Así mismo la conformación de bolsas de trabajo por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias para el nombramiento de funcionarios interinos para su destino en entidades locales, lo que contribuye a racionalizar recursos públicos, homogeneiza los procesos de formación y selección, y garantiza niveles de calidad suficientes y homogéneos para toda la CAE.

En otro orden de cosas, en su epígrafe 46, se incorpora la siguiente modificación que no consideramos correcta

“Se adiciona un nuevo párrafo 2 ter al artículo 95 con la siguiente redacción:
“2 ter. El expedientado podrá conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento, dándosele vista del mismo y pudiendo obtener copia de las actuaciones practicadas, siempre que no les hubieran sido facilitadas con anterioridad. Todo ello sin perjuicio de que puedan serles remitidos a través de medios electrónicos.”

El Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas aprobado por el Congreso el pasado 21 de julio, y que se encuentra ya en el Senado –con todas las probabilidades de que se apruebe en los próximos meses– establece que el procedimiento administrativo habrá de ser íntegramente electrónico, de hecho se deroga la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, entendiéndose que la tramitación electrónica no debe ser ya una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe ser la forma general de actuación de las Administraciones, porque una administración sin papel sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes y además reforzar las garantías de los interesados. Un registro y un archivo electrónico ofrece mayores garantías de control e integridad documental, a la vez que facilita el cumplimiento de las debidas obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.

Esto significa que en las fases de iniciación, ordenación, instrucción y finalización de los procedimientos administrativos el uso de medios electrónicos ha de ser generalizado y obligatorio, y más aun internamente en la relación con sus trabajadores

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2014-033

Página: 6/8

y entre administraciones y órganos de la administración, y se entenderá precisamente que está cumplida la obligación de la administración de facilitar copias de los documentos al ponerlos a su disposición en el punto de acceso general electrónico o en la sede electrónica de la administración competente, sin necesidad de que les sean remitidos a través de medios electrónicos. Procede por tanto una corrección de esta modificación propuesta.

Por otro lado, pero en el mismo sentido, y en relación con el órgano que se crea - la "Comisión de control de la Ertzaintza"- hay que advertir que este mismo Proyecto de Ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas ya mencionado recoge que, *"salvo que no sea posible, las convocatorias han de ser remitidas a los miembros a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión"*, igualmente *"se remitirán las actas de cada sesión a través de medios electrónicos"*.

La Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración podrá asesorar e informar en lo que el Departamento de Seguridad precise para la regulación, la organización y la implementación de la Tramitación Electrónica en relación a este Proyecto de Ley, así como, en general, para la simplificación administrativa y la Reducción de Cargas Administrativas.

C) En cuanto a procedimientos vinculados con la Transparencia y el Buen Gobierno:

La extensa exposición de motivos de este anteproyecto de Ley pone de manifiesto su alineamiento con la Filosofía de Transparencia y Buen Gobierno que este Gobierno ha decidido impulsar, que quedó explicitado en el EJE 1 del Plan de Innovación Pública, y que va en consonancia con lo establecido en el Código Europeo de Ética de la Policía.

En particular se valora positivamente lo relativo a

- reforzar la interrelación con la ciudadanía y el compromiso con la dación o "rendición de cuentas", a través de la debida publicidad activa

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2014-033

Página: 7/8

- los mecanismos de evaluación y mejora del servicio policial, como la evaluación del desempeño de los miembros de la policía, o, más allá de las medidas coercitivas, la instauración de mecanismos preventivos que permitan analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral
- la interacción obligatoria entre la policía y la ciudadanía, asegurando mecanismos de tratamiento de quejas cuya independencia del servicio policial genere confianza en que van a recibir un tratamiento neutral y no corporativo reforzado con la creación de una comisión de control externo

En particular, en cuanto a Transparencia, se valora positivamente la previsión de

- *“dar publicidad a los informes resolutivos de las quejas por Ekinbide respetando la confidencialidad de los datos personales o de otros que pudieran estar sujetos legalmente a confidencialidad o reserva”.*
- *“dar publicidad y difusión a la existencia de la Comisión de Control, sus funciones y funcionamiento y del trabajo realizado. La Comisión de Control elaborará una memoria bienal de sus actividades que será remitida al Parlamento Vasco.”*

si bien, esta publicidad deberá estar dirigida no sólo al Parlamento Vasco sino a la ciudadanía en general, tal y como se recoge en la filosofía de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El espíritu de ambas leyes insta a que ha de fomentarse el que la información pública sea publicada, en formatos que permitan su reutilización, aplicando los límites de acceso que establece la norma, convenientemente justificados y siempre proporcionados a cada caso concreto cuando se produzca una concurrencia entre un interés público o privado. El Gobierno Vasco tiene entre sus prioridades la apertura de los datos públicos, y es por ello que en cualquier base de datos que se genere, como es el caso de este servicio de recepción y resolución de quejas y medidas preventivas, han de preverse los mecanismos que permitan la publicación de los datos en los formatos establecidos legalmente para su reutilización, garantizando en todo caso la debida protección de los datos de

INFORME DE ORGANIZACIÓN

Documento: IO-2014-033

Página: 8/8

carácter personal, mercantil o de propiedad intelectual, entre otros, y con mayor cuidado en este caso puesto que se trata de datos de carácter personal especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal o por si pudieran afectar a la seguridad pública o privada.

Precisamente el Código Europeo de ética de la Policía establece en su recomendación 19 que

19. Los servicios de policía deben estar dispuestos a proporcionar a los ciudadanos informaciones objetivas sobre sus actividades, sin desvelar por ello informaciones confidenciales. Deben elaborarse líneas directrices profesionales que rijan las relaciones con los medios de comunicación.

Por último mencionar que, aunque en general se ha cuidado especialmente el uso no sexista del lenguaje, todavía quedan algunos términos masculinos utilizados como genéricos y que debieran corregirse, como por ejemplo: “funcionarios”, “empleados públicos”, “ciudadanos”, “el agente de movilidad”, “el alguacil”...

Conclusiones:

De acuerdo con las funciones asignadas a través del artículo 18 c del **Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia** éstas son las observaciones que, desde el punto de vista del diseño organizativo, procedimientos generales y en particular aquellos vinculados con la transparencia y el buen gobierno, formulamos al anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

**ANTOLAKETA TXOSTENA**

Dokumentua:	IO-2015-033
Izena:	Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketaren Legearen aurreproiektua

Egilea:

Sinadura: Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino

Proiektuen arduraduna

Data: 2015-07-27

Onartua:

Sinadura: Javier Bikandi Irazabal

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa

Berritzeko eta Hobetzeko zuzendaria

Data: 2015-07-27

ANTOLAKETA TXOSTENA

Dokumentua: IO-2014-033

Orrialdea: 2/8

Proposamena:

Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzak transmisio telematikoko baten bitartez eskatu du txosten bat, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketaren Lege Aurreproiektuari buruzkoa. 2015eko uztailaren 17an sartu zen transmisio hori Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzan (aurrerantzean, HHABHZ).

Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza (aurrerantzean, HHABHZ) honen funtzioak, besteak beste, honako hauek dira: "*Erakunde instituzionalen barne-egituraketaren, antolaketaren eta sorreraren arloko sailaren jarduerak eta erakunde horiek ezartzen dituzten xedapen orokorrak aztertu eta ebaluatzea; eta, halaber, administrazioko sail eta erakundeei aholkularitza eta laguntza teknikoak ematea antolaketaren eta prozeduren arloan*", **Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren** 18 c artikulua zehazten duen bezala, abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 6.1f artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

Gainera, 2014-2016 Berrikuntza Publikoko Planaren esparruan eta 2015eko urtarrilaren 13ko Gobernu Kontseiluaren Akordioa aplikatzeko, gardentasunaren eta gobernu onaren sustapena dagokio.

Agindu-proiektu honek honako atal hauek ditu:

- Zioen azalpen luzea; 8 idatz-zatitan justifikatzen dira egungo arauketa aldatzeko motiboak.
- Artikulu bakarra; 66 idatz-zatitan jasotzen ditu Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeari proposatutako aldaketa guztiak.
- 8 xedapen iragankor
- 2 azken xedapen

ANTOLAKETA TXOSTENA

Dokumentua: IO-2014-033

Orrialdea: 3/8

Balioespena:

Aipatutako Lege-aurreproiektua azertu ondoren, honako hau adierazi behar da:

A) Egiturazko eta antolamenduzko alderdiei dagokienez:

Aldatu diren antolamenduzko alderdi gehienak honako hauekin daude lotuta: lanpostuak antolatzea; lanpostu horiek betetzen dituztenen administrazio-egoerak kudeatzea; egitura profesionala aldatzea, zenbait postu desagertzearen ondorioz – besteak beste, "superintendentea"rena– edo beste batzuen arauketaren ondorioz – besteak beste, "aguazila"rena edo "mugikortasun agentea"rena tokiko eremuan–; ordainsari bidezko suspergarriak sartzeko; prestakuntzako edo hautaketako prozedurak antolatzea; polizia-zerbitzua ebaluatzen eta hobetzeko mekanismoak antolatzea; emakumeen aldeko ekintza positiboetarako neurriak hartzea; barne-sustapenaren bidez edo lanbide-karrera horizontalaren bidez lanbide-karrera bizkortzen duten mekanismoak arautzea; Ertzaintzaren espezializazioaren araubidea; funtzionarioen eskubideen araubidea; diziiplina-araubidea... Halaber, Funtzio Publikoko Zuzendaritzari aztertzea dagozkion beste kontu batzuekin ere badaude lotuta –zuzendaritzak emango du derrigorrezko txosten egokia–.

Aipamen berezia behar du, antolakuntzaren ikuspuntutik, ematen duen malgutasunagatik eta arrazionaltasunagatik, udalerrri bakoitzak bere beharretara eta berezitasunetara egokitutako antolakuntza-irtenbideak aurkitu ahal izateko antolakuntzako egitura profesionalak eratzeak; horrela, udaltzainek udal-barrutitik kanpora jardun ahalko dute edo alkateek udaltzainen destinoen trukea baimendu ahalko dute, bete beharreko baldintzak betetzen badituzte.

Era berean, oso positiboa da funtzioak argitzea Ertzaintzaren Batzordearen diziiplina-prozeduretan eta errehabilitazio-espedienteetan.

Azkenik, atal honetan, sortzen den organoari, "Ertzaintzaren kontrol-batzordea"ri, egin behar zaio erreferentzia, polizia-zerbitzuari dagozkion kexen tratamenduan funtzionamendua ikuskatzeko neutraltasuna eta independentzia dituen organoa den aldetik; hala ere, dagozkien agintariek jarraitzen dute beren erantzukizuna izaten.

ANTOLAKETA TXOSTENA

Dokumentua: IO-2014-033

Orrialdea: 4/8

Organo honen bidez, Poliziaren Etikaren Europako Kodearen 61. aurreikuspenari erantzuten zaio –2001eko Europako Batzordearen gomendioa–: "*Botere publikoek poliziaren aurkako errekursoaren prozedura eraginkorrak eta inpartzialak ezarri behar dituzte*"; bai eta 62. aurreikuspenari ere: "*erantzukizunaren alde egiten duten eta herritarren eta poliziaren arteko komunikazioan eta ulermenean oinarritzen diren mekanismoak ezartzea*". Kanpo-kontrolako batzorde horrek, hain zuzen ere, OIMSP – EKinBIDEekin batera –Ertzaintzak ematen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzeko herritarren ekimenak jaso, aztertu eta sustatzen dituen Segurtasun Sailaren organoa–, poliziaren eta herritarren arteko elkarreragina sustatzen laguntzen du; horretarako, kexak tratatzeko mekanismoak ziurtatzen dituzte, kexak tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialarekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismo gabe tratatuko dituztelako konfiantza izan dezaten. Horrek, kontuak emateari lotuta dagoenak, Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen eta 2014-2016 Berrikuntza Publikoko Planaren 1. ardatzean islatzen den gardentasunaren eta gobernu onaren filosofiarekin bat egiten du, eta gardentasunaren eta gobernu onaren inguruko C) paragrafoan aztertuko da hobeto.

B) Prozedura-alderdiei dagokienez:

Proposatutako testuak oso positiboki balioesten ditugun prozedurak sinplifikatzeko eta hobetzeko neurri ugari jasotzen ditu.

Esaterako, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademia izendatzea langile berriak sartzeko hautaketaren etengabeko organo gisa. Horrek aukera ematen du, toki-erakundeek hala agintzen badute, deialdiko prozedurak zenbait erakundek batera sustatzeko; horrela, gastuak arrazionalizatzen dira eta postu horien deialdietara aurkezten diren pertsonen denboren dedikazioa eta ahalegina murriztu egiten da; azken batean, karga gutxiago eragiten zaie administrazioari eta administratuei.

Halaber, balioespen positiboa merezi dute udal arteko lankidetzaren bidez langileen beharrak premiaz eta aldi baterako betetzeko sortzen diren mekanismoek, bai eta Ertzaintzarekin sortzen direnek ere, zerbitzu guztiei erantzun ezin zaienean.

ANTOLAKETA TXOSTENA

Dokumentua: IO-2014-033

Orrialdea: 5/8

Era berean, aipagarria da Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak lan-poltsak eratzea, bitarteko funtzionarioak izendatzeko tokiko erakundeetarako; horrek laguntzen du baliabide publikoak arrazionalizatzen, prestakuntzako eta hautaketako prozesuak homogeneizatzen ditu eta behar besteko kalitate-maila homogeneoak bermatzen ditu EAE osorako.

46. epigrafean, honako aldaketa hau jasotzen da, baina ez dugu uste zuzena denik

"2 ter paragrafoa eranstean zaio 95. artikuluari, eta honela geratzen da:

"2 ter. Espedientea egin zaion pertsonak edozein unetan ezagutu ahalko du prozeduraren izapideen egoera, hura ikusteko aukera emango baitzaio, eta egindako jardunbideen kopia lortu ahalko du, betiere ez bazaizkio lehendik eman. Nolanahi ere, baliabide elektronikoen bidez ere bidali ahalko zaizkio."

Kongresuak uztailaren 21ean onetsitako Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Lege-proiektuak, dagoeneko Senatuan dagoenak – datozen hileetan onesteko aukera guztiak ditu–, honako hau ezartzen du: administrazio-prozedurak elektronikoa izan beharko du, erabat; horretara, ekainaren 22ko 11/2007 Legea, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa, indargabetzen da. Horrela ulertzen da izapide elektronikoak ez duela izan behar prozedurak kudeatzeko modu berezia, baizik eta administrazioek jarduteko izan behar duten ohiko bidea; izan ere, paperik gabeko administrazio batek hobeto erantzuten die eraginkortasunaren eta efizientziaren printzipioei, kostuak aurrezteari eta interesdunen bermeak sendotzeari. Erregistro eta artxibo elektroniko batek dokumentuen kontrolaren eta segurtasunaren berme hobeak eskaintzen ditu; gainera, gardentasunaren baldintzak errazago betetzen dira, interesdunei informazio zehatza eta eguneratua ematen baitzaie.

Horrek esan nahi du administrazio-prozedurak hasteko, antolatzeko, bideratzeko eta amaitzeko faseetan, baliabide elektronikoen erabilera bermatu egin behar dela eta ezinbestekoa izan behar duela, eta are gehiago barnean, langileekiko eta administrazioen eta administrazio-organoen arteko harremanetan. Administrazioak dokumentuen kopiak emateko duen beharra bete dela ulertuko da, eskura jartzen direnean sarbide orokor elektronikoan edo administrazio eskudunen egoitza elektronikoan, baliabide elektronikoen bidez bidaltzeko beharrik gabe. Beraz, proposatutako aldaketa hori zuzendu behar da.

ANTOLAKETA TXOSTENA

Dokumentua: IO-2014-033

Orrialdea: 6/8

Bestalde, baina zentzu berean, sortuko den organoarekin lotuta –"Ertzaintzaren kontrol-batzordea", esan beharra dago Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Lege-proiektu horrek honako hau jasotzen duela: *"ahal dela, deialdiak kideei baliabide elektronikoen bidez bidali behar zaizkie, eta, haietan, gai-zerrenda, bilerara zer baldintzatan egingo den, konexio-sistema eta, hala badagokio, bilerara bertaratzeko eta bertan parte hartzeko beharrezko baliabide teknikoak zer lekutan dauden eskuragarri zehaztu beharko da"*; era berean, *"bilerako bakoitzeko aktak igorriko dira, baliabide elektronikoen bidez"*.

Herritarrek Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak aholkularitza eta informazioa eman ahalko dio Segurtasun Sailari, horrek hala eskatzen dionean, lege-proiektu honi dagokionez izapide elektronikoa arautzeko, antolatzeko eta ezartzeko, bai eta, oro har, administrazio-simplifikaziorako eta administrazio-kargak gutxitzeko.

C) Gardentasunarekin eta gobernu onarekin lotutako prozedurak direla eta:

Lege-aurreproiektu honen zioen azalpen luzeak agerian uzten du Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen gardentasunaren eta gobernu onaren filosofiarekin bat egiten duela; Berrikuntza Publikoaren Planaren 1. ARDATZean zehaztu zen Jaurlaritzaren filosofia hori, Poliziaren Etikaren Europako Kodean ezarritakoarekin bat.

Zehazki, balioespen positiboa egiten da gai hauen inguruan:

- herritarren arteko harremana eta "kontu ematea"rekiko konpromisoa sendotzea, publizitate aktibo egokiaren bidez.
- polizia-zerbitzua ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak, besteak beste, ertzainen zeregina ebaluatzeko mekanismoak edo, neurri hertsatzaileez gainera, prestakuntzan edo prozeduretan edo lan-giroan hobekuntzak emateko ereduak eta arrisku-faktoreak aztertu ahal izateko prebentzio-mekanismoen ezarpena.
- poliziaren eta herritarren arteko derrigorrezko interakzioa, kexak tratatzeko mekanismoak zerbitzu polizialarekiko independenteak izango direla bermatuz, herritarrek neutraltasunez eta korporatibismorik gabe tratatuko dituztelako

ANTOLAKETA TXOSTENA

Dokumentua: IO-2014-033

Orrialdea: 7/8

konfiantza izan dezaten, kanpo-kontroleko batzorde baten sorrerarekin sendotuta.

Zehazki, gardentasuna dela eta, positiboki balioesten da honako aurreikuspen hau:

- *"Publizitatea emango zaie Ekinbidek kexei buruz egindako ebazpen-txostenei, datu pertsonalen edo legez konfidentzialtasuna edo erreserba gorde behar duten bestelako datuen konfidentzialtasuna errespetatuz".*
- *Kontrol Batzordeari buruzko publizitatea eta zabalkundea egingo da, haren izatearen, funtzioen, funtzionamenduaren eta lanaren berri emanez. Kontrol Batzordeak bere jarduerari buruzko txosten bat egingo du, bi urterik behin, eta Eusko Legebiltzarrari bidaliko zaio."*

baina publizitate horrek, Eusko Legebiltzarrari ez ezik, herritarrei ere egon beharko du zuzenduta, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legearen filosofian eta, baita ere, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legearen filosofian jasotzen den bezala. Bi lege horien espirituak informazio publikoa berrerabiltzeko aukera ematen duten formatuetan argitara dadin sustatzera bultzatzen du, arauak sarbiderako ezartzen dituen mugak aplikatuz, behar bezala justifikatuta, eta, betiere, kasu zehatz bakoitzera egokituta, interes publiko edo pribatu batekin batera doazenean. Eusko Jaurlaritzaren lehentasunetako bat da datu publikoak irekitzea; hori dela eta, sortzen den edozein datu-basetan, kexak hartzeko eta ebazteko eta prebentzio-neurriak hartzeko zerbitzu honen kasuan bezala, datuak berrerabiltzeko legez ezarritako formatuetan argitaratu ahal izateko mekanismoak aurreikusi behar dira, betiere, datu pertsonalak, merkataritzakoak edo jabetza intelektualekoak, besteak beste, babesten direla bermatuz. Arreta handiz ibili behar da kasu horretan, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak bereziki babesten dituen datu pertsonalak direlako, eta segurtasun publikoan edo pribatuan eraginik ez izateko.

Zehazki, Poliziaren Etikaren Europako Kodeak, 19. gomendioan, honako hau ezartzen du:

ANTOLAKETA TXOSTENA

Dokumentua: IO-2014-033

Orrialdea: 8/8

19. Polizia-zerbitzuek herritarrei beren jardueri buruzko informazio objektiboak eman behar dizkiete, betiere, isilpeko informazioen berri eman gabe. Gidalerro profesionalak ezarri behar dira, komunikabideekiko harremanak arautuko dituztenak.

Azkenik, aipatu behar da, gehienetan hizkuntzaren erabilera ez-sexista erabiltzea arretaz zaindu bada ere, oraindik ere erabiltzen direla gaztelaniaz gizonetzkoen termino batzuk generiko gisa, eta horiek zuzendu egin behar direla. Esate baterako: “funcionarios”, “empleados públicos”, “ciudadanos”, “el agente de movilidad”, “el alguacil”...

Ondorioak:

Apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuak, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, 18 c artikulua bidez esleitutako funtzioekin bat, horiek dira antolamenduaren eta prozeduraren diseinuaren aldetik, eta, zehazki, gardentasunari eta gobernu onari lotutakoen aldetik, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketaren Lege-aurreproiektuari egin dizkiogun oharra.



IX

INFORME DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO / GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



FIRMADO DIGITALMENTE POR:

Firmante: EUGENIO ARTECHE PALOMAR

Fecha de la firma: 12/07/2015 21:32:52

Validación de la firma:  Correcta

INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO

1.- Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:

Anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco

2.- Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve:

Departamento de Seguridad

3.- Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o propuesta:

a) Policía del País Vasco

- Organización policial: • Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. • Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco. • Decreto 57/2015, de 5 de mayo, de la composición y régimen de las comisiones de coordinación policial de ámbito local.

- Régimen estatutario: La regulación del régimen estatutario del funcionariado de la Policía del País Vasco, constituida por la Ertzaintza y los cuerpos de la policía local se contiene en la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco y su normativa de desarrollo, entre la que se puede citar el reglamento de selección y formación de la Policía del País Vasco (Decreto 315/1994, de 19 de julio y sus modificaciones); el reglamento de provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Decreto 388/1998, de 22 diciembre y sus sucesivas modificaciones); el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Cuerpos de Policía del País Vasco (Decreto 170/1994, de 3 de mayo); , etc.

- Coordinación de policías locales: • Decreto 203/2012, de 16 de octubre de 2012, por el que se regula el Registro de Policías Locales de Euskadi, así como los sistemas de acreditación profesional de los miembros de la Policía Local. (BOPV N° 217/2012) • Orden de 13 de noviembre de 2012 de acreditaciones de las Policías Locales de Euskadi. (BOPV N° 230/2012) • Orden de 24 de septiembre de 2012, de uniformidad y signos distintivos externos de las Policías Locales de Euskadi. (BOPV N° 193 /2012) • Decreto 27/2010, de 26 de enero, de condecoraciones y distinciones aplicable a los Cuerpos de Policía del País Vasco (BOPV N° 22/2010) • Orden de 20 de septiembre de 2012, sobre condecoraciones y distinciones aplicables a los Cuerpos de Policías del País Vasco. (BOPV N° 189/2012). • Decreto 58/2015, de 5 de mayo, por el que se establecen las normas marco aplicables a la organización y funcionamiento de los Cuerpos de la policía local.

b) Prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana: • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana • Ley Orgánica 9/83, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión y manifestación. • Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. • Decreto 168/1998, de 21 de julio, utilización de videocámaras por la Policía del País Vasco en lugares públicos.

c) Protección frente a la delincuencia. Policía judicial. • Código Penal y normativa complementaria. • Legislación procesal y penitenciaria.

4.- Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco (en adelante LPPV) ha sido objeto de diversas modificaciones relativas al régimen retributivo de los funcionarios de la Ertzaintza; al sistema de representación de los trabajadores de la misma o a los grupos de clasificación funcional.

La Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi, ha supuesto la cuarta modificación de la LPPV, extrayendo de tal regulación aspectos que resultaban comunes al conjunto de la seguridad pública, tales como la regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, u otros referentes al subsistema policial o de seguridad ciudadana que por su carácter organizativo o relacional convenía incluirlos en la citada Ley, como lo relativo a la potestad de coordinación de policías locales o los mecanismos de cooperación policial.

De este modo en la actualidad la LPPV tiene un contenido primordialmente relacionado con el régimen estatutario del personal de los Cuerpos de la Policía del País Vasco.

La presente Ley pretende abordar una quinta modificación de la LPPV que atiende a diversas razones:

- a) El influjo de otras leyes estatales o autonómicas sobrevenidas;
- b) La experiencia acumulada en la aplicación de la normativa vigente y los pronunciamientos judiciales que la interpretan;
- c) El contexto de los proyectos de modernización de la Ertzaintza;
- d) El resultado de los trabajos desarrollados durante los últimos años en grupos de trabajo derivados del convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Municipios Vascos - Eudel, etc.

En el calendario legislativo se plantea como objetivo principal de la modificación la adecuación de la normativa sobre la Policía del País Vasco a las necesidades actuales y futuras demandadas por la sociedad, profundizando en el modelo de policía comunitaria y cercana al servicio de la ciudadanía que se propone.

Para ello es preciso dotar a la Ertzaintza de procedimientos ágiles para la cobertura óptima de las necesidades del servicio policial en cada momento y lugar, que sean compatibles con la garantía de los derechos del funcionariado, e igualmente contemplar mecanismos adecuados para velar por la eficiencia y eficacia del servicio policial y para auditar imparcialmente las actuaciones de la Ertzaintza en los casos que legalmente se contemplan.

Y de igual modo contemplar la habilitación de la refundición en un solo texto normativo de la regulación de la Policía del País Vasco en cuanto a su organización, principios de actuación y el régimen jurídico de su personal.

Otros objetivos que se contemplaban eran los siguientes:

- Regular en una ley formal los requisitos de ingreso.
- Reforzar las garantías de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de los órganos de selección y el equilibrio entre hombres y mujeres.
- Establecer medidas de acción positiva para favorecer la integración de la mujer en los cuerpos policiales.
- Suprimir el límite de tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna.
- Reforzar las medidas de protección de la salud del funcionario o funcionaria que se ha visto afectada física o psíquicamente por enfermedad, accidente o edad, como el caso de la segunda actividad.
- Actualizar el régimen disciplinario,
- Posibilitar que las policías locales actúen fuera del término municipal respectivo en funciones de protección de las autoridades locales; así como otros aspectos relativos a la estructura profesional de tales cuerpos y otras figuras legales como los vigilantes municipales o los agentes de movilidad.

5.- Exponer los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres:

Reforzar las garantías de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de los órganos de selección y el equilibrio entre hombres y mujeres.

Establecer medidas de acción positiva para favorecer la integración de la mujer en los cuerpos policiales.

Se efectúa la redacción del texto teniendo en consideración el lenguaje de género en aras a un avance efectivo de la igualdad de mujeres y hombres.

EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

6.- ¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya a la disminución de las desigualdades en el sector?

A fecha de 30 de junio de 2015 de una plantilla activa de 7.709 personas en la Ertzaintza el 88,96% son hombres y el 11,04% son mujeres. El porcentaje de presencia de mujeres es disminuye a medida en que se asciende en la escala de mando, de forma que son hombres el 100% de los intendentes, el 94,03% de los comisarios y el 98,25% de los subcomisarios. Sólo 4 mujeres son comisarias y sólo una mujer es subcomisaria. En el caso de las policías locales de 3.269 personas. 2.875 son hombres y sólo 394 son mujeres.

En la memoria y estudios que acompañan al expediente se efectúa un diagnóstico de la situación de hombres y mujeres en los cuerpos policiales, del cual se deduce que si bien aparentemente existe una igualdad formal en cuanto a las condiciones de acceso y desempeño de la función policial, en la práctica existe un porcentaje desequilibrado de mujeres en labores policiales (un 12%) que revela la existencia de condicionantes fácticos sobre los que la norma pretende actuar de diversas formas y no sólo por razones igualitarias sino por las propias necesidades de la organización policial y la consolidación de un cambio cultural en la organización hacia la policía comunitaria o de proximidad.

Las medidas propuestas son las siguientes:

a) planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el ingreso y la carrera profesional: Se es consciente de que el lenguaje tiende a evitar este concepto por otros más focalizados en el concepto de igualdad, pero parece más descriptivo el objetivo aquí propuesto. Si no cabría hablar directamente de “planes para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el ingreso y la carrera profesional”. En dichos planes debe establecerse el porcentaje de mujeres en la plantilla policial al que se pretenda llegar en el periodo de planificación para corregir la infrarrepresentación de las mujeres, así como para incrementar la eficacia policial.

b) Incorporación de las reglas sobre paridad equilibrada en comisiones de selección, así como reglas generales de desempate previstas en la ley de igualdad.

c) Medidas de acción positiva a favor de las mujeres (Artículo 47 bis). Se contempla que los procedimientos selectivos de ingreso por turno libre se determine el número de plazas que deberían cubrirse con mujeres para cumplir con el objetivo previsto en el plan de promoción (nunca superior al 40% de las plazas convocadas y en ausencia de plan no inferior al 25%). Si el porcentaje preestablecido no se alcanzara, se dará preferencia a las candidatas mujeres sobre los candidatos masculinos hasta cumplir el objetivo perseguido siempre que:

- Exista una equivalencia de capacitación determinada por la superación de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición del sistema electivo y ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por aplicación de esta preferencia tenga un diferencial de puntuación en las fases de oposición y, en su caso, de concurso, dependiendo el sistema selectivo, inferior al quince por ciento frente a los candidatos masculinos que se vieran preteridos*
- No concurra en el candidato masculino un motivo legal que justifique la no aplicación de la medida como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo*

Esta medida de acción positiva es temporal en tanto no exista en el cuerpo, escala y categoría a que se refiera la convocatoria del proceso selectivo una presencia igual o inferior al 33% de funcionarias mujeres.

d) Remover obstáculos fácticos para la promoción interna de las mujeres en los cuerpos policiales posibilitando que concurran a la promoción interna quienes estén en las situaciones de excedencia por cuidado de hijos o familiares o la de excedencia por razón de la violencia de género. E igualmente computando a tales efectos como tiempo de servicios efectivos en la categoría de procedencia los periodos de disfrute de permisos de maternidad y paternidad y baja por embarazo.

7.– ¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la eliminación o, al menos, una disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos?

Si, en los términos expresados en el apartado anterior.

8.– ¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, una representación similar al de su presencia en el ámbito?

Si, en los términos expresados en el apartados anteriores.

9.– ¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto administrativo contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores de lo que se atribuye a las mujeres o a los hombres?

Si, en la medida en que se vea incrementada la presencia de mujeres en labores policiales ello favorecerá la superación de estereotipos sociales que son los que precisamente contribuyen a considerar que se trata de una labor netamente masculina y vinculada a la fuerza física, pese a la evidencia de que no sólo no es así, sino que la vinculación de la percepción social de la policía con la fuerza física como recurso principal para afrontar los problemas de convivencia no facilita la adaptación de la policía a las exigencias del siglo XXI.

10.– ¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

Si, en los términos expresados en el apartados anteriores.

MEDIDAS PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES Y PROMOVER LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

¿Se ha incluido en el texto del proyecto de norma o acto administrativo alguna medida ...		Indicar los artículos en que se incluyen las medidas y su descripción.
Si	... para promover la incorporación de la perspectiva de género?	
	mejorando el conocimiento de la situación diferencial de mujeres y hombres	
	incorporando la igualdad de mujeres y hombres como principio, objetivo o a título declarativo o expositivo	Art. 59.3 Art. 59.4 artículo 47 bis
	haciendo o promoviendo un uso no sexista del lenguaje	La redacción del texto de la norma se ha realizado teniendo en consideración el lenguaje de género en aras a un avance efectivo de la igualdad de mujeres y hombres.
	promoviendo la participación de personas con formación en cuestiones de género y/o entidades que trabajan	

	por la igualdad	
	incluyendo la igualdad como contenido o criterio (de admisión, valoración o ejecución) en procesos selectivos, subvenciones, convenios o actividades formativas, etc.	
	otras, especificar _____	
... para promover una participación equilibrada de mujeres y hombres? Si	en tribunales de selección	artículo 47 bis: representación equilibrada sexos.
	en jurados de premios	
	en órganos consultivos	
	en órganos directivos	
	otras, especificar _____	
... de acción positiva? Si	para las mujeres	artículo 47 bis: Preferencia de la candidata femenina como medida temporal en determinadas condiciones <i>Artículo 55 bis.d) estatura mínima que se determine reglamentariamente, que será distinta para los hombres y las mujeres</i>
	para la implicación de los hombres a favor de la igualdad	
	otras, especificar _____	
... aparentemente neutra pero con un previsible impacto de género positivo? Si	para víctimas de violencia	Art. 59.3. Posibilitar presentarse a promoción interna a quien esté en situación de excedencia por víctima de la violencia de género.
	para familias monoparentales	
	para quienes asumen el cuidado de personas dependientes	Art. 59.3
	otras, especificar _____	
... para disminuir las desigualdades de las mujeres que sufren múltiple	por edad	
	por clase social	
	por opción sexual	
	por discapacidad	

discriminación? No	por etnia y/o raza	
	por origen nacional	
	otras, especificar _____	
... prohibitiva o sancionadora? Si	por incurrir en discriminación por razón de sexo	I bis) y I ter) al párrafo 2º del artículo 92, (tipificación como sanción disciplinaria del acoso sexual y el acoso laboral por razón de sexo.
	por hacer un uso sexista del lenguaje y las imágenes	
	otras, especificar _____	

¿Se prevé más allá del contenido del proyecto de norma o acto administrativo la adopción de alguna medida...		Descripción
... dirigida a complementar o incrementar la eficacia de los objetivos y medidas para la igualdad? Si	acciones de refuerzo a la difusión	SI. Campañas para conocimiento de la reforma legal. Campañas dirigidas a promover la participación de mujeres en procesos selectivos
	actuaciones de seguimiento y evaluación	Si planes de promoción art. 47 bis
	adecuación de estadísticas y realización de estudios específicos	
	acciones de información, sensibilización y formación	
	adecuación o adopción de normas, planes o programas	
	elaboración de planes para la igualdad	
	creación de estructuras o servicios	
	otras, especificar _____	

En Vitoria-Gasteiz, 8 de julio de 2015.

Eugenio Artetxe Palomar

Director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales

GENEROAREN ARABERAKO ERAGINARI BURUZKO TXOSTENA

ADMINISTRAZIO-EGINTZAREN PROPOSAMENAREN EDO ARAU-PROIEKTUAREN DESKRIBAPEN OROKORRA

1.- Aipatu administrazio-egintzaren proposamenaren edo arau-proiektuaren izena:

Euskal Herriko Poliziaren Legea bosgarren aldiz aldatzeko Legearen aurreproiektua

2.- Aipatu zer Sailek eta zer Zuzendaritzak sustatzen duen:

Segurtasun Saila

3.- Aipatu, hala egokituz gero, proiektuarekin edo proposamenarekin zerikusia duten beste arau, plan eta abar batzuk:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia

-Polizia-antolaketa: • 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema antolatzekoa. • 4/1992 Legea, uztailaren 17koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa. • 57/2015 Dekretua, maiatzaren 5koa, tokiko polizia-koordinaziorako Batzordeen osaerari eta funtzionamendu-erregimenari buruzkoa.

-Estatutu-araubidea: Euskal Herriko Poliziaren funtzionarioen (Ertzaintzak eta Udaltzaingoak osatutakoa) estatutu-araubidearen erregulazioa Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legean eta lege hori garatzen duen araudian oinarritzen da. Garapen-araudiaren barnean honako hauek aipa daitezke: Euskal Herriko Polizia hautatzeko eta prestatzeko araudia (uztailaren 19ko 315/1994 Dekretua eta haren moldaketak); Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia (abenduarien 22ko 388/1998 Dekretua eta haren segidako moldaketak); Euskal Herriko Poliziaren Kidegoetako Diziiplina araubideari buruzko Erregelamendua (maiatzaren 3ko 170/1994); etab.

-Udaltzaingoen koordinazioa: • 203/2012 Dekretua, 2012ko urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoen Erregistroa eta Udaltzaingoko kideen akreditazio profesionalerako sistemak arautzeko dena. (EHAA, 217/2012 zk.) • Agindua, 2012ko azaroaren 13koa, Euskadiko Udaltzaingoaren akreditazioei buruzkoa. (EHAA, 230/2012 zk.) • Agindua, 2012ko irailaren 24koa, Euskadiko Udaltzaingoaren uniformeek eta kanpo-ikur bereizgarriei buruzkoa. (EHAA, 193/2012 zk.) • 27/2010 Dekretua, urtarrilaren 26koa, Euskal Autonomia erkidegoko Polizia Kidegoei aplikatu dakizkiekeen kondekorazioak eta sariak diseinatu, erabili eta erakusteari buruzkoa (EHAA, 22/2010 zk.) • Agindua, 2012ko irailaren 20koa, Euskal Autonomia erkidegoko udaltzaingoei aplikatu dakizkiekeen kondekorazioak eta sariak diseinatu, erabili eta erakusteari buruzkoa. (EHAA, 189/2012 zk.) • 58/2015 Dekretua, maiatzaren 5koa, Euskadiko udaltzaingoen antolamenduari eta funtzionamenduari aplikagarri zaizkion esparru-arauak ezartzen dituenak.

b) Herritarren segurtasuna prebenitu, mantendu eta berrezartzea. • 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren segurtasuna babesteari buruzkoa. • 9/83 Lege Organikoa, uztailaren 15ekoa, batzartzeko eta manifestatzeko eskubidea arautzen duena. • 4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzea arautzen duena. • 168/1998 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskal Herriko Poliziak leku publikoetan bideokamerak erabiltzeari buruzkoa.

c) Delinkuentziaren aurkako babesa. Polizia judiziala • Kode penala eta araudi osagarria. • Legedi prozesala eta espetxeetako araudia.

4.- Azaldu administrazio-egintzaren proposamenaren edo arau-proiektuaren helburu orokorrak:

Euskal Herriko Poliziaren uztailaren 17ko 4/1992 Legeak (aurrerantzean EHPL) aldaketa asko izan ditu Ertzaintzako funtzionarioen ordainsarien araubidean, Ertzaintzako langileen ordezkartzan edo funtzionarioen sailka pen-taldeetan.

Euskadiko segurtasun publikoaren sistema arautzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legeak bosgarren aldiz aldatu du EHPL, eta erregulatu gabe utzi ditu segurtasun publiko osoan eragina zuten alderdiak, esate baterako, Poliziaren eta Larrialdietako Zerbitzuen Euskal Ikastegiaren araubidea edota poliziaren azpi-sistemari edo herritarren segurtasunari buruzko beste zenbait alderdi; udaltzaingoak koordinatzeko eskumenari edo polizia-lankidetzarako mekanismoak, adibidez. Izan ere, antolaketa edo harreman aldetik komeni zen alderdi horiek Euskadiko segurtasun

publikoaren sistema arautzeko legean jasotzea.

Horrenbestez, Euskal Herriko Polizia-kidegoetako langileen estatutu-araubide zehatzarekin loturiko edukia jasotzen ditu funtsean Euskal Herriko Poliziari buruzko Legeak

Lege honek EHPL bosgarren aldiz aldatu nahi du. Aldatzeko arrazoiak hauek dira:

- a) Estatuko edo autonomia-erkidegoko beste lege batzuen eragina.
- b) Indarrean dagoen legedia eta interpretatzen duten erabaki judizialak aplikatzerakoan pilotutako esperientzia.
- c) Ertzaintza modernizatzeko proiektuen testuingurua.
- d) Azken urteotan Eudelekin (Euskadiko Udalen Elkartea) sinatutako lankidetzaren hitzarmeneko lantaldeetan burututako lanen emaitza, etab.

Egutegi legegilean, aldaketaren helburu nagusia da Euskadiko Poliziari buruzko arautegia gizartearen egungo eta etorkizuneko beharretara egokitzea, proposatzen den polizia-ereduan sakonduz: polizia komunitarioa eta herritarrei zerbitzua emateko hurbila.

Horretarako, prozedura azkarra eman behar zaizkio Ertzaintzari, une eta leku bakoitzean ondo baino hobeto bete ditzan polizia-zerbitzuaren beharrak, betiere haiek bateragarriak izanez gero funtzionarioen eskubideen bermearekin, eta, era berean, mekanismo egokiak aurreikusi behar dira polizia-zerbitzuaren efikazia eta eraginkortasuna zaintzeko, eta Ertzaintzaren jardura inpartzialki ikuskatzeko lege ez aurreikusitako kasuetan.

Halaber, Euskal Herriko Poliziaren erregulazioa (antolaketa, jarduteko printzipioak eta langileen araubide juridikoa) testu arauemate bakarrean berrantolatu behar da.

Beste helburu hauek ere lortu nahi ziren:

- Sartzeko baldintzak lege formal batean erregulatzea.
- Aukeraketa-organoen inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezializazio-bermeak nahiz emakumeen eta gizonen arteko oreka areagotzea.
- Eragin positiboko neurriak hartzea, emakumeak polizia-kidegoetan sar daitezela.
- Barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga kentzea.
- Bigarren jardueraren kasuan bezala, eritasunagatik, istripuagatik edo adinagatik fisikoki edo psikikoki eragindako funtzionarioen osasuna babesteko neurriak indartzea.
- Diziiplina-araubidea eguneratzea.
- Udaltzainek beren udalerritik kanpo jarduteko aukera ematea, toki-agintariak babesteko; era berean, kidego horien lanbide-egiturari buruzko beste alderdi batzuk eta legezkoak diren beste zeregin batzuetan dihardutenak, hala nola, besteak beste, udal-zaintzaileak eta mugikortasun-agentek.

5.– Azaldu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko xedeak:

Aukeraketa-organoen inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezializazio-bermeak nahiz emakumeen eta gizonen arteko oreka areagotzea.

Eragin positiboko neurriak hartzea, emakumeak polizia-kidegoetan sar daitezela.

Arau honen testua genero-hizkera kontuan hartuta idatzi dugu, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerantz benetako urratsak eman nahian.

GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN ALDEZ AURREKO EBALUAZIOA

6.- Aurreikusten al da emakumeek eta gizonak etorkizuneko arauaren edo administrazio-egintzaren ondoriozko onuretan edo emaitzetan izango duten presentzia lagungarria izango dela sektorean desberdintasunak gutxitzeko?

2015eko ekainaren 30ean, Ertzaintzak 7.709 langile aktibo zituen, eta horietatik % 88,96 gizonak ziren, eta % 11,04 emakumeak. Emakumeen ehunekoa gutxituz doa aginte-eskalan gora egin ahala. Hala, gizonak dira intendenteen % 100, komisarioen % 94,03 eta komisariordeen % 98,25. Emakumezko 4 komisario eta komisariorde bat bakarrik daude. Udaltzaingoa 3.269 langile dira, 2.875 gizon eta 394 emakume bakarrik.

Espedientean atxikitako memoria eta azterketetan, polizia-kidegoetan emakumeek eta gizonak duten egoerari buruzko diagnostikoa egiten da. Diagnostikoaren arabera, itxuraz, sartzeko eta polizia-funtzioak betetzeko berdintasun formala badago ere, errealitatean polizia-lanetan diharduten emakumeen ehunekoan (% 12) ez dago orekarik, eta horrek baldintzatzaile faktikoak daudela erakusten du. Arauak baldintzatzaile horietan eragin nahi du hainbat modutan, eta ez bakarrik berdintasun-kontuengatik, polizia-erakundeak berak dituen beharregatik eta erakundeak komunitate-poliziarekiko edo hurbileko poliziarekiko dagoen al daketa kulturala finkatzeko baizik.

Hona hemen proposatutako neurriak:

Polizia-kidegoetan emakumeen presentzia sustatzeko planak, kidegoetan sartzeko orduan eta lanbide-karreraren emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bermatzearren. Jakin badakigu hizkuntzak kontzeptu hau ekiditeko joera duela berdintasun-kontzeptuan ardaztuta dauden beste batzuen orde, baina hemen proposatzen du gun helburua deskribatzaileagoa dirudi. Bestela, zuzenean hau aipatu daiteke: "planak egingo dira, kidegoetan sartzeko orduan eta lanbide-karreraren emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bermatzearren". Aurreikusitako epean Ertzaintzako langileen artean lortu nahi den emakumeen ehunekoa ezarri behar da plan horietan, era horretara emakumeen ordezkartza txiki hori orekatzeko eta poliziaren eraginkortasuna areagotzeko.

b) Parekotasun orekatuari buruzko arauak eta berdintasun-legean aurreikusten diren berdinketa hausteko arauak barneratzea hautaketa-batzordeetan.

c) Emakumeen aldeko ekintza positiboko neurriak (47 bis artikulua). Txanda librean sartzeko hautaketa-prozeduran emakumeek bete beharreko lanpostu jakin batzuk zehaztea aurreikusten da, sustapen-planean ezarritako helburuak betetzeko (inoiz ez dituzte emakumeek beteko dituten lanpostuen % 40 baino gehiago eta planik ez badago gutxienez lanpostuen % 25 beteko dituzte) Aurrez ezarritako ehunekoa ez bada betetzen, emakumezko hautagaien emango zaie lehentasuna gizonen hautagaien aurretik, lortu nahi den helburua bete arte, betiere baldintza hauek betetzen badira:

- Hautaketa-sistemaren oposizio-faseko probak eta ariketak gainditzeagatik zehaztutako prestakuntza-baliokidetasuna baldin badago, eta lehentasun hori aplikatuz hautatutako emakumezko hautagaien eta atzetik geratu zirenen gizonen arteko puntuazioaren arteko aldea ez bada % 15 baino handiagoa, ez oposizio-aldian, ez eta, hala behar balitz, lehiaketa-aldian ere –betiere hautaketa-sistemaren arabera–.

- Gizonen hautagaiari ez badio eragiten neurri hori ez aplikatzeko legezkotasun ezein salbuespenek, hala nola enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetakoak izatea.

Ekintza positiboko neurri hau aldi baterako izango da, hautaketa-prozesuaren deialdian eskaintzen diren lanpostuei dagozkien kidego, eskala eta kategorietan emakumezko funtzionarioak % 33ra iritsi arte.

d) Polizia-kidegoetan emakumeen barne-sustapenerako oztopo faktikoak ezabatzea, barne-sustapenean parte hartzeko aukera emanez senideak edo seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo genero-indarkeriagatik eszedentzia hartu dutenei. Halaber, ondorio horietarako, benetako zerbitzutat joko dira amatasun- eta aitasun-baimenaldiak eta amatasun-baja direla eta hartutako egunak.

7.- Aurreikusten da arauak edo administrazio-egintzak desagerrarazi edo, gutxienez, murriztu egingo dituela baliabideak eskuratzeko dauden desberdintasunak?

Bai, aurreko zenbakian aurreikusitako baldintzetan.

8.- Erabakiak hartzeari dagokionez, etorkizuneko arauak edo administrazio-egintzak aurreikusten al du emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua izatea edo, behintzat, ordezkartza hori esparruan

duten presentziaren maila berekoa izatea?

Bai, aurreko zenbakian aurreikusitako baldintzetan.

9.- Aurreikusten da emango den arau edo administrazio-ekintzak proposatutako helburu eta neurriak baliagarri izango direla emakumei eta gizonen lotutako arau sozialak eta balioak gainditu edo aldatzeko?

Bai, polizia-lanetan emakumeen presentzia gora doan heinean, gizarte-estereotipoak gaindituko dira, estereotipoen ondorioz lan hori gizonentzako bakarrik dela eta in dar fisikoari lotuta dagoela uste baita. Baina begien bistakoa da hori ez dela horrela, eta gainera, bizikidetzaz arazo nagusiak konpontzeko poliziaren baliabidea garrantzitsuen a indar fisikoa dela hautematen bada gizartean, hots, polizia indar fisikoarekin lotzen bada, ez da lagungarria izango polizia XXI. mendeko eskakizunetara egokitzeko.

10.- Bermatzen al da diskriminazioa galarazteko eta berdintasuna sustatzeko arauak bete eta beste tresna juridikoak erabiliko direla? Eta aurreikusten al da haiek hobetzea?

Bai, aurreko zenbakian aurreikusitako baldintzetan.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA BULTZATZEKO ETA EZBERDINTASUNAK EZABATZEKO NEURRIAK		
Jaso al da neurriarik arau edo administrazio-egintzaren proiektuan...		<i>Adierazi zer artikulutan jasotzen diren neurriak eta egin haien deskribapena.</i>
Bai	... genero-ikuspegia txerta dadin erakusten dituzten aldeak ezagutza hobetzen da	
	emakumeen eta gizonen egoerak erakusten dituzten aldeak ezagutza hobetzen da	
	emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna jasotzen da printzipio moduan, helburu moduan edo adierazpen nahiz azalpen gisa.	59.3 artikulua 59.4 artikulua 47 bis artikulua
	hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiten edo sustatzen da	Arau honen testua genero-hizkera kontuan hartuta idatzi dugu, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerantz benetako urratsak eman nahian.
	genero-gaiei buruzko prestakuntza duten pertsonen eta/edo berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeen partaidetza sustatzen da.	
	eduki edo irizpide moduan jasotzen da	

	berdintasuna (onartzeko, baloratzeko edo betetzeko), hautatze-prozesuetan, laguntzak eta hitzarmenak egiteko prozesuetan, prestakuntza-jardueretan, etab.	
	beste batzuk; zehaztu: _____	
... emakumeen eta gizonen partaidetza orekatua sustatzeko? Bai	hautatze-epaimahaietan	47 bis artikulua: sexuen arteko ordezkaritza orekatua.
	sariak emateko epaimahaietan	
	kontsulta-organoetan.	
	zuzendaritza-organoetan.	
	beste batzuk; zehaztu: _____	
... ekintza positiboak lantzeko? Bai	emakumeentzat	47 bis artikulua: Emakumezko hautagaiak lehentasuna izango du. Aldi baterako neurria izango da eta baldintza batzuk bete beharko dira. 55 bis d) artikulua. Erregelamenduz ezartzen den gutxieneko garaiera izatea; emakumeentzat eta gizonezkoentzat ezberdina izango da.
	gizonak berdintasunaren alde inplikatzeko	
	beste batzuk; zehaztu: _____	
... itxuraz neutroa dena baina generoaren araberrako eragin onuragarria izan dezakeena? Bai	indarkeriaren biktimentzat.	59.3 artikulua Genero-indarkeriaren biktima izateagatik eszedentzian dagoen pertsonari barne-sustapenera aurkezteko aukera emango zaio.
	guraso bakarreko familientzat.	
	mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileentzat.	59.3 artikulua
	beste batzuentzat, zehaztu: _____	
... askotariko	adinaren arabera.	

diskriminazioa pairatzen duten emakumeen desberdintasun-egoerak berdintzeko? Ez	gizarte-mailaren arabera.	
	sexu-aukeraren arabera.	
	degaitasunaren arabera.	
	etnia eta/edo arrazaren arabera.	
	nazio-jatorriaren arabera	
	beste batzuk, zehaztu: _____	
... debekuak edo zehapenak ezartzekoa denik? Bai	sexuagatiko diskriminazioa egiteagatik	1 bis) eta 1 ter) eransten zaizkio 92. artikulua 2. paragrafoari (sexuagatiko sexu-jazarpenera eta laneko jazarpenera diziplina-zehapentzat hartuko da).
	hizkuntzaren eta irudien erabilera sexistaren egiteagatik	
	beste batzuk; zehaztu: _____	

Arau edo administrazio-egintzen edukiaz gain, aurreikusten al da bestelako neurriak...		Deskribapena
... berdintasunerako helburu eta neurrien eraginkortasuna osatu edo handitzeko? Bai	hedapena indartzeko ekintzak.	BAI. Lege-erreforma ezagutarazteko kanpainak. Hautaketa-prozesuetan emakumeen partaidetza sustatzeko kanpainak.
	jarraipena egiteko eta ebaluatze jarduerak.	Bai, sustapen-planak 47 bis art.
	estatistikak egitea eta azterlan espezifikoak egitea.	
	informazio-, sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzak	
	arauak, planak edo programak egokitzea edo prestatzea.	
	berdintasunerako planak egitea.	
	egiturak eta zerbitzuak sortzea.	
	beste batzuk; zehaztu: _____	

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 8a

Eugenio Artetxe Palomar

Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria

X

**INFORME DE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA
MUJER / EMAKUNDEAREN TXOSTENA**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**

INFORME RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO

Se emite el presente informe a solicitud del Departamento de Seguridad en el ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005 y en las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012, y realizar propuestas de mejora en tal sentido.

El Anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, sobre el que se solicita el informe, tiene por objeto reformar determinados artículos de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, con el objetivo principal de adecuar la normativa a las necesidades actuales y futuras demandadas por la sociedad, profundizando en el modelo de policía comunitaria y cercana al servicio de una ciudadanía a la que se debe rendir cuentas.

Se trata, por tanto, de una disposición de carácter general que debe ser evaluada sobre su impacto en función del género, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.1 d, de la Directriz Primera. Dado que la modificación resulta sustancial por lo que respecta a la situación de mujeres y hombres, el órgano promotor de la norma ha emitido el correspondiente Informe de impacto en función del género, en los términos previstos en el anexo I, y de acuerdo con lo previsto por los apartados 3 y 4 de la directriz primera.

En el **Informe de Impacto** remitido se hace una descripción general del proyecto del Anteproyecto. Entre los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres están los de establecer medidas de acción positiva para favorecer la integración de la mujer en los cuerpos policiales, el garantizar el principio de equilibrio entre hombres y mujeres de los órganos de selección y el redactar el texto conforme con lo regulado en el artículo 18.4 de la Ley 4/2005, de Igualdad de mujeres y hombres, sobre el uso no sexista del lenguaje.

Respecto a la **Evaluación Previa de Impacto en función del género**, se han aportado datos relativos a la presencia de mujeres y hombres del personal al servicio de la Ertzaintza en cada una de sus categorías. De acuerdo con estos datos, se concluye que las mujeres están subrepresentadas en labores policiales e inevitablemente es necesario actuar y tomar una serie de medidas. Asimismo, se señala que en la memoria y estudios que acompañan al expediente, pero que no han sido remitidos, se efectúa el diagnóstico sobre la situación de hombres y mujeres en los cuerpos policiales. En este sentido hubiera sido interesante aportar dichos estudios en los que se analizan tanto la situación referida a la escasa presencia de las mujeres en la Ertzaintza, como a sus posibles causas y condicionantes fácticos.

En el informe se realiza un breve análisis de la presencia de la mujer en el cuerpo y de los estereotipos sociales que equiparan la función policial a la coerción física y que hace que buena parte de la sociedad siga considerando el trabajo policial trabajo de hombres. Es por ello que se considera que a medida que se vea incrementada la presencia de las mujeres en labores policiales se favorecerá la superación de estas ideas preconcebidas. Tras este análisis, el informe prevé impacto positivo de los objetivos y medidas planteadas en el Anteproyecto para la superación o modificación de las normas sociales y valores.

Finalmente, se afirma que se han incluido en el texto del Anteproyecto medidas para promover la incorporación de la perspectiva de género, incluyendo la igualdad en los

procesos selectivos como criterio de acceso, provisión y promoción y relativas al uso no sexista del lenguaje en la redacción del texto de la norma.

Igualmente, se prevé la adopción de otras medidas más allá del contenido del proyecto de norma, dirigidas a incrementar la eficacia de los objetivos y medidas planteadas, promoviendo campañas de participación de las mujeres en el cuerpo de policía.

En cuanto al contenido del Anteproyecto, se valora de manera muy positiva que:

- En la Exposición de Motivos se haga mención expresa a la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
- Se dé cumplimiento a las medidas que, en relación a los procesos de acceso, provisión y promoción en el empleo público, se señalan en los apartados a y b del artículo 20.4 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de mujeres y hombres¹.
Asimismo, se articulan en el Anteproyecto otras medidas dirigidas a favorecer el acceso de las mujeres en la Ertzaitza mediante la aplicación de una serie de criterios de preferencia en los procedimientos de ingreso por turno libre en las categorías de agente y subcomisario o subcomisaria.
- Se incorporen en el artículo 59 las recomendaciones realizadas al Anteproyecto de Ley de cuarta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, sobre la posibilidad de concurrir por el turno de promoción interna al personal funcionario en situaciones de excedencia por cuidado de hijos o hijas o de familiares y de excedencia por razón de violencia de género, y la de computar como tiempo de servicios efectivos en la categoría de procedencia los periodos de disfrute de permisos de maternidad y paternidad y baja por embarazo. No

¹ **Artículo 20.**– Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.

4.– Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público deben incluir:

a) Una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la representación de éstas sea inferior al 40%, salvo que concurren en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo.

b) Una cláusula por la que se garantice en los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.

obstante, se echa de menos que en el párrafo 4º del artículo 59 no se tenga en cuenta como tiempo de servicios efectivos la excedencia por cuidado de hijos, hijas y familiares y por razón de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otro lado, se hacen las siguientes recomendaciones al contenido del Anteproyecto:

- Tal y como se propuso en el informe realizado al anteproyecto de Ley de cuarta modificación de la LPPV, y siempre que sea conforme a la legislación vigente en materia de seguridad social, computar los periodos de permanencia en situación de excedencia por cuidado y/o violencia de género como tiempo efectivamente trabajado a efectos de la reducción de la edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación, mediante la inclusión de una cláusula expresa en este sentido en el apartado veintiuno del Anteproyecto.
- Contemplar en la letra 1 bis) del párrafo 2º del artículo 92, como falta disciplinaria muy grave, además del acoso sexual y el acoso laboral, el acoso sexista o por razón de sexo en el trabajo, tal y como se exige en el artículo 43.2 de la Ley 4/2005.
- Consideramos que, a efectos de materializar el mandato del artículo 23 de la Ley 4/2005, en el nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte de la Comisión de control de la Ertzaitza, que se crea en el presente Anteproyecto deberá existir una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Asimismo, y para que en la actuación de dicha Comisión se tenga en cuenta de manera activa el objetivo de promover la igualdad de mujeres y hombres y combatir la violencia contra las mujeres, se recomienda tener presente la posibilidad de contar con asesoramiento experto en materia de género e igualdad y/ violencia contra las mujeres. Para ello se propone incluir a una persona con formación o experiencia contrastada en dichas materias.

Finalmente, se valora de manera positiva el esfuerzo realizado para hacer un uso no sexista del lenguaje pero, aun así, consideramos necesario hacer una revisión y adecuación de los términos enunciados exclusivamente en masculino en el texto del Anteproyecto tales como “funcionario/os”, “los empleados públicos”, “sancionado”, etc., de conformidad con el uso no sexista del lenguaje que señala el artículo 18.4 de la Ley 4/2005.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2015

Firmantes del documento electrónico

Nombre	Departamento	Cargo	Fecha de la firma	Estado
MIREN IZASKUN FERNANDEZ OTEGI	EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	RESPONSABLE DEL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	24/07/2015	Firmado
ANA JESUSA ALBERDI ZUBIA	EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	SECRETARIO/A GENERAL (NIVEL DIRECTOR)	24/07/2015	Firmado
ANA MARGARITA ACHURRA RODRIGUEZ	EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER		24/07/2015	Firmado

EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN LEGEA BOSGARREN ALDIZ ALDATZEKO LEGE-AURREPROIEKTUARI BURUZKO TXOSTENA

Segurtasun Sailak eskatuta egin dugu txosten hau, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21. artikulua Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari emandako eskumena baliatuz.

Txostenaren helburua da, batetik, 4/2005 Legearen 19. eta 20. artikuluetan eta Gobernu Kontseiluak 2007ko abuztuaren 21eko Erabakiaz onartutako jarraibideetan agindutakoa behar bezala betetzen dela egiaztatzea eta, bestetik, hobekuntzak proposatzea (Jarraibideak, genero-eragina aurretiaz ebaluatzeko, eta gizonen eta emakumeen desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko).

Euskal Herriko Poliziaren Legea bosgarren aldiz aldatzeko Lege-Aurreproiektuari buruz eskatu da txostena. Lege horren xedea Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko zenbait artikulua erreformatzea da, araudia gizartearen gaur egungo eta etorkizuneko beharrezanetara egokitzeko helburu nagusiarekin, herritarren zerbitzuan dagoen polizia komunitario eta hurbileko baten eremuan sakonduz, azken batean, herritarrei eman beharko baitie bere jokabidearen kontuak.

Beraz, xedapen orokor bat da, zer nolako genero-eragina duen ikusteko ebaluatu beharrekoa, lehenengo jarraibidearen 2.1. d paragrafoan ezarritakoarekin bat etorritik. Emakumeen eta gizonen egoerari dagokionez, aldaketa funtsezkoa den neurrian, araua sustatu duen organoak, generoaren arabera eragin-txostena egin du, I. eranskinean aurreikusitako baldintzetan, eta lehenengo jarraibidearen 3 eta 4 paragrafoetan ezarritakoarekin bat etorritik.

Bidalitako **Eragin txostenean** Aurreproiektuaren deskribapen orokorra egiten da. Emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzeko helburuen artean daude polizia-

kidegoetan emakumea integratzen laguntzeko eragin positiboko neurriak ezartzea, hautatze-organoetan gizonen eta emakumeen arteko orekaren printzipioa bermatzea, eta testua emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legearen 18.4 artikuluan hizkuntzaren erabilera ez sexistari buruz arautuaren arabera idaztea.

Generoaren araberako Eraginaren alde aurreko Ebaluazioari dagokionez, Ertzaintzaren zerbitzuan kategoria guztietan dauden pertsonen arteko emakume eta gizonen presentziari buruzko datuak eman dira. Datu horien arabera, ondorioztatu da emakumeek ez dutela behar hainbateko presentziarik poliziaren zereginetan, eta, ezinbestean, beharrezkoa dela jardutea eta hainbat neurri hartzea. Adierazi da, orobat, txostenarekin batera prestatu diren –baina bidali ez diren– memorian eta azterlanetan diagnostiko bat egiten dela polizia-kidegoetan dauden gizonen eta emakumeen egoerari buruz. Ildo horretan, interesgarria zatekeen azterlan horiek gehitzea, emakumeek Ertzaintzan duten presentzia urriko egoera ez ezik, horren balizko zergatiak eta baldintza faktikoak ere aztertzen dituzten neurrian.

Txostenean, emakumeak kidegoan duen presentziaren eta poliziaren eginkizuna hertsatze fisikoarekin parekatzen duten gizarte-estereotipoen analisi labur bat egiten da; hori dela eta, gizartearen parte handi baten iritziz polizia-lana gizonaizkoen lana da. Arrazoi horregatik uste da polizia-zereginetan emakumeen presentzia areagotzea lagungarri izango dela esandako aurreiritzi horiek gainditzeko.

Azterketa horren ondoren, txostenak aurreikusten du eragin positiboa egongo dela Aurreproiektuan arau eta balio sozialak gainditzeko edo aldatzeko planteatzen diren helburu eta neurrietan.

Amaitzeko, txostenak dio hainbat neurri sartu direla Aurreproiektuko testuan genero-ikuspegia gehitzea sustatzeko: hautatze-prozesuetan berdintasuna bultzatzea lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko irizpide gisa, eta arauaren testua idaztean hizkuntzaren erabilera ez sexista aldezte, besteak beste.

Era berean, beste neurri batzuk hartzea ere aurreikusten da, arau-proiektuaren edukitik harago, planteatutako helburu eta neurrien eraginkortasuna handitzera zuzenduak, kanpainak bultzatzea: adibidez, emakumeek polizia-kidegoetan parte har dezaten.

Aurreproiektuaren edukiari dagokionez, balorazio positiboa egin zaie honako hauei:

- Zioen Azalpenean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea berariaz aipatzeari.
- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20.4 artikuluko a eta b paragrafoetan adierazitako neurriak bete izanari, enplegu publikoko lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko prozesuei dagokienez¹.
Aurreproiektuan, halaber, beste neurri batzuk ere artikulatu dira, agente eta azpikomisario kategorietan txanda irekiz sartzeko prozeduretan lehentasun-irizpide batzuk aplikatzearen bitartez, Ertzaintzan emakumeak sar daitezen ahalbidetzeko.
- 59. artikuluan gehitu dira Euskal Herriko Poliziaren Legea laugarren aldiz aldatzeko Lege-Aurreproiektuan egindako gomendioak, honako hauei buruzkoak: seme-alaba edo senitartekoen zaintzagatik edo genero-indarkeriatatik eszedentzia egoeran dauden funtzionarioek txandagatik barne-sustapenean parte hartzeko aukera izatea, eta jatorrizko kategorian zerbitzu eraginkorreko denbora gisa zenbatzea amatasun- eta aitatasun-baimenak direla medio baliatutako denboraldiak eta haurdunaldiko bajaran emandakoak. Nolanahi ere, ez legoke gaizki 59. artikulua 4. paragrafoan zerbitzu eraginkorreko denbora gisa kontuan hartzea seme-alaba eta senitartekoen zaintzagatik eta

¹**20. artikulua.**– Ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko neurriak.

4.– Egoki ikusten diren beste neurri batzuk ere hartu ahal diren arren, enplegu publikoko lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko hautatze-prozesuak erregulatzen dituzten arauak honako hauek izan behar dituzte:

a) Klausula bat, Administrazio kidego, eskala, maila eta kategorietan emakumeei lehentasuna ematen diena, baldin eta gaitasun bera badago eta estamentu horietan emakumeak % 40 baino gutxiago badira, salbu eta beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten eta sexu arrazoiengatik baztertzailak ez diren ezaugarriak baldin baditu; adibidez, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea.

b) Beste klausula bat, hautaketa-epaimahaietan trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango dela bermatzeko.

genero-indarkeriagatik hartutako eszedentziak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legeko 89. artikuluan xedatuaren arabera.

Bestalde, gomendio hauek egiten zaizkio Aurreproiektuaren edukiari:

- Euskal Herriko Poliziaren Legea laugarren aldiz aldatzeko Lege-Aurreproiektuaren txostenean proposatu zen bezala (betiere, Gizarte Segurantzaren alorrean indarrean dagoen legediarekin bat baldin badator), zaintzagatiko eta/edo genero-indarkeriagatiko eszedentzia-aldiak benetan lan egindako alditzat zenbatuak izatea, erretiro-pentsioa jasotzeko eskatzen den ohiko adina murritzuta ahal izateko; horretarako, horri buruzko berariazko klausula bat sartu beharko da Aurreproiektuaren hogeita batgarren paragrafoan.
- 92. artikulua 2. paragrafoko 1 bis) idatz-zatian diziplinazko falta oso larritzat begiestea, sexu-jazarpenaz eta laneko jazarpenaz gainera, laneko jazarpen sexista edo sexuan oinarritutakoa, 4/2005 Legearen 43.2 artikuluan eskatzen denarekin bat.
- Uste dugu, 4/2005 Legearen 23. artikulua manua gauzatzeko, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua egon behar dela aurreproiektu honetan sortzen den Ertzaintzaren kontroleko Batzordea osatzerakoan edo berorretan parte hartzeko kideak hautatu eta izendatzerakoan. Halaber, aipatutako Batzordearen jardunean aktiboki aintzat har dadin emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu eta emakumeenganako indarkeriari aurre egitearen helburua, komeni da gogoan izatea aukera dagoela genero eta berdintasunaren alorreko eta/edo emakumeenganako indarkeriaren alorreko adituen aholkularitza jasotzeko. Horretarako, alor horietan prestakuntza edo esperientzia duen pertsona bat sartzea proposatzen dugu.

Azkenik, balorazio positiboa egiten zaio hizkuntzaren erabilera ez sexista egiteko ahaleginari; baina, hala izanik ere, beharrezkoa irizten diogu, gaztelaniazko testuan, genero maskulinoan soilik agertzen diren terminoak berrikusi eta egokitzeari, hala nola «funcionario/os», «los empleados públicos», «sancionado», etab., 4/2005 Legearen 18.4 artikuluan adierazitako hizkuntzaren erabilera ez sexistaren mesedetan.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 24a.

XI

**INFORME DE LA DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/HERRI ADMINISTRAZIOETAN
HIZKUNTZA NORMALITZATZEKO ZUZENDARITZAREN TXOSTENA.**

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



Eugenio Artetxe Palomar
Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Segurtasun Saila

Jaun hori,

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Legearen bosgarren aldaketa eragingo duen Lege Aurreproiektuaren berri jaso genuen Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan iragan uztailaren 13an, euskaraz eta gaztelaniaz, Tramitagune tresna informatikoaren bitartez, Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza horretatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz.

Eskaera horri erantzunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 22.1) artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut:

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila.

Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Legearen bosgarren aldaketa eragingo duen Lege Aurreproiektua aztertu ondoren, egungo hizkuntza araudia urratzen ez duela adierazten dut.

Bestalde, kontuan harturik Lege Aurreproiektuaren euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak daudela, bete da Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 14an hartutako Erabakian jasotakoa, lege, legegintzako dekretu, dekretu edo agindu izango diren xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituen.

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak xedatzen du autonomia erkidegoak eskumena duela segurtasun publikoaren gainean (17. artikulua). Halaber, autonomia erkidegoak bakarreko eskumena du toki araubideari eta autonomia erkidegoko zein toki administrazioi funtzionarioen estatutuari dagokionez, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan finkatutakoari kalterik egin gabe (10.4 artikulua).

Eskumen horien babesean onartu zen uztailaren 17ko 4/1992 Legea, Euskadiko Poliziari buruzkoa.

Lege horrek hainbat aldaketa jasan ditu, besteak beste Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legeak eragindakoak.

Orain izapidetzen ari den Lege Aurreproiektuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Legearen bosgarren aldaketa eragingo da. Bertan badaude zenbait hizkuntza aipamen:

-Zioen azalpeneko laugarren paragrafoan adierazten denez, eraberritze honen bidez sendotu nahi da zerbitzu polizialen txertaketa gure gizarte elebidunean.

-Zioen azalpeneko seigarren paragrafoan adierazten denez, gurea bezalako gizarte elebidun batean, eredu poliziala bi hizkuntza ofizialetan ematera zuzendu behar da, ahalbidetuz euskara zerbitzu-hizkuntza zein lan-hizkuntza izatea, bai eta euskal polizia herritarrek aukeratutako hizkuntza ofiziala egiteko gauza izatea ere.

-Artikulu bakarreko zazpigarren atalak sortuko duen 30 bis artikulua 2. paragrafoak dioenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoak beren baitan hartzen dituzten administrazioak ahaleginduko dira beren zerbitzura aritzen diren langileak behar bezala gaitzen gizarte elebidun batean zerbitzua emateko, eta, horretarako, behar diren neurriak hartuko dituzte eta kidego horietan euskara erabilia izan dadila sustatuko dute, baina nolanahi ere, herritarrak zein hizkuntza aukeratu, horrexetan artatuko dute.

Bestalde, aldatuko den Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legean badaude hizkuntza aipu batzuk:

-39.1 artikulua xedatzen du euskal herri administrazioek euren mendeko polizia funtzionarioen hizkuntza prestakuntza sustatuko dutela.

-41.2.d) artikulua arabera, lanpostu zerrendan lanean aritzeko beharrezko baldintzak jasoko dira, tartean hizkuntza eskakizuna, eta derrigortasun data dagokionean.

-45. artikulua jarraiki, polizia kidegoetan sartzeko deialdietan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen V. tituluan xedatutakoa beteko da, nahitaezko euskara maila nahiz euskarari eman beharreko balioari dagokionez. Halaber, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeke probei eta euren edukiei dagokienean, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak agindutakoa egingo da, eta proben epaimahaian beti egongo da erakunde horren ordezkari bat.

-47.3 artikuluan aurreikusten da hautaketa prozesuetako deialdien oinarrietan eskainitako lanpostuak jasoko direla, derrigorrezko hizkuntza eskakizunak zehaztuta.

-Zazpigarren xedapen gehigarriak jasotzen duenez, Ertzaintzako lanpostuen hizkuntza eskakizunak Jaurkitza Kontseiluak onartuko ditu.

-Bosgarren xedapen iragankorrak aurreikusten zuen Ertzaintzako lanpostu zerrenda onartu bitartean euskararen ezagutza meritu moduan baloratuko zela, hautaketa prozesuetan eta lanpostuak hornitzeko prozesuetan. Bere balioa, prozesu osoaren gainerako probetan lor zitekeen puntuazioaren ehuneko bost eta hamar bitartean egongo zen.

-Azken xedapenetako lehenengoak aurreikusten du Ertzaintzako hizkuntza normalizazioa Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen V. tituluak arautuko duela. Halaber, Eusko Jaurlaritzari esleitu zitzaion Ertzaintzako hizkuntza normalizazio prozesua arautzeko ardura.

Egokiak dira hizkuntza aipamen horiek, eta bat datoz indarrean dagoen hizkuntza araudiarekin.

Edozelan ere, Lege Aurreproiektuak euskararen erabileraren normalizazioari begira eragin hobeia izan dezan, proposamen hauek egiten ditugu:

b.1- Lege Aurreproiektuaren artikulua bakarreko zazpigarren atalak sortuko duen 30 bis artikulua berriaren lehenengo paragrafoko c) idatz zatia osatzeko proposatzen dugu, hizkuntza aipatuz.

Izan ere, Autonomia Estatutuak argi dio ezin dela inor baztertu hizkuntza dela eta (6.3 artikulua), eta Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak dio botere publikoek neurriak hartuko dituztela Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza dela eta inor baztertuta izan ez dadin (4. artikulua). Uste dugu egokia izango litzatekeela Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeak ere beren beregi jasotzea ezin dela inor baztertu hizkuntza dela eta.

Beraz, aztergai dugun Lege Aurreproiektuaren artikulua bakarreko zazpigarren atala moldatzeko proposatzen dugu, uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 30 bis.1.c) artikuluan hizkuntza ere aipatzeko.

b.2- Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak 6. artikuluan adierazten du euskara hizkuntza ofiziala dela gaztelaniarekin batera, eta herritarrek bi hizkuntzak ezagutu eta erabiltzeko eskubidea dutela. Orobat, botere publikoei dagokie bi hizkuntzen erabilera bermatzea, eta hizkuntza oinarri duten bazterketa egoerak ekiditea.

Autonomia Estatutuarekin bat, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak dio herritarrek euskara eta gaztelania erabil dezaketela, ahoz nahiz idatziz, herri administrazioekiko harremanetan, arreta hizkuntza berean jasotzeko eskubidea barne (5.2.a eta 6.1 artikulua), botere publikoek bi hizkuntza ofizialak erabiliko dituztela xedatzeaz gain (8. artikulua).

Ondorioz, herri administrazioa diren aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziek bermatu behar dute haiekiko harremanetan herritarrek duten hizkuntza ofiziala hautatzeko eskubidea. Hala ere, uste dugu hizkuntza betekizun hau ez dagoela behar bezain argi islatuta moldatuko den uztailaren 17ko 4/1992 Legean, ez eta sortuko den 30 bis.2 artikulua berrian ere.

Beraz, Lege Aurreproiektuaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legean xedapen berria txertatzeko proposatzen dugu, eduki honekin:

-Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziek, haiekiko harremanetan herritarrek euskara eta gaztelania, ahoz zein idatziz, erabiltzeko eta arreta hizkuntza berean jasotzeko duten eskubidea bermatuko dute.

Adeitasunez,

Gasteizen, 2015eko uztailaren 16an

Joseba Lozano Santos
Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria

Firmante del documento electrónico

Nombre	Departamento	Cargo	Fecha de la firma	Estado
JOSE RICARDO LOZANO SANTOS	EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA	DIRECTOR/A	17/07/2015	Firmado



Eugenio Artetxe Palomar
Director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales
Viceconsejería de Administración y Servicios
Departamento de Seguridad

Sr. director:

El pasado 13 de julio, esta Dirección de Normalización Lingüística en las Administraciones Públicas tuvo acceso, a través de la herramienta informática Tramitagune, al borrador, en euskera y castellano, del Anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, remitido por la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Departamento de Seguridad, junto al cual se nos solicitaba la emisión del informe preceptivo.

En respuesta a su solicitud, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general; y en el artículo 22.1) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, emito el siguiente informe:

a) Adecuación a la normativa vigente en materia lingüística

Examinado el Anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, declaro que no infringe la normativa vigente en materia lingüística.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Ley dispone de versiones en castellano y en euskera, damos por cumplido lo dispuesto en el Acuerdo adoptado por el Gobierno Vasco el 14 de mayo de 2013, mediante el que se aprobaron diversas medidas para redactar las disposiciones generales en las dos lenguas.

b) Impacto sobre la normalización del uso del euskera

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, corresponderá a las instituciones del País Vasco la protección de las personas y bienes, y el mantenimiento del orden público, dentro del territorio autónomo. Asimismo, la comunidad autónoma vasca tiene competencia exclusiva en materia de régimen local y estatuto de los funcionarios y las funcionarias del País Vasco y de su administración local, sin perjuicio de las competencias estatales (artículo 10.4).

En desarrollo de esas competencias, se aprobó la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

Esa Ley ha sido modificada por varias disposiciones normativas, entre otras, por la Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Mediante este Anteproyecto de Ley se va a proceder a la quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco. La norma objeto de tramitación contiene varias referencias en materia lingüística:

- En el párrafo cuarto de la exposición de motivos, se incide en que la reforma pretende afianzar la imbricación de los servicios policiales con una sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por hombres y mujeres iguales en derechos.
- En el párrafo sexto se indica que en una sociedad bilingüe como la nuestra, el modelo policial ha de encaminarse a la prestación del servicio en los dos idiomas oficiales, facilitando que el euskera pueda ser tanto lengua de servicio como lengua de trabajo, y que la policía vasca sea capaz de acercarse a los ciudadanos y a las ciudadanas en el idioma oficial que estos y estas elijan.
- En el apartado siete del artículo único del Anteproyecto de Ley, por el que se adiciona un artículo 30 bis, el párrafo segundo establece que las Administraciones de las que dependan los cuerpos de la Policía del País Vasco procurarán la adecuada capacitación del personal a su servicio para prestar servicio en una sociedad bilingüe, adoptando las medidas necesarias para ello y promoviendo el uso del euskera en dichos cuerpos, sin perjuicio de atender al ciudadano o ciudadana en la lengua que él o ella elija.

Asimismo, la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, objeto de modificación mediante este Anteproyecto, también contiene diversas referencias en materia lingüística:

- En este sentido, el artículo 39.1 dispone que las administraciones públicas vascas procurarán la adecuada capacitación lingüística de los funcionarios y las funcionarias de policía de ellas dependientes.
- En el artículo 41.2.d) se establecen los extremos que deberán indicar las relaciones de puestos de trabajo, entre los que habrán de figurar necesariamente el perfil lingüístico y, en su caso, la fecha de preceptividad.
- Por su parte, el artículo 45 establece que el contenido de las convocatorias para el ingreso en los cuerpos de policía del País Vasco se adecuará, en cuanto a los niveles de competencia lingüística en euskera exigibles y a la valoración que hubiera de otorgarse al conocimiento de dicha lengua, a las previsiones establecidas en el título V de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Asimismo, el contenido y forma de las pruebas destinadas a la acreditación de los perfiles lingüísticos se ajustará a las prescripciones establecidas por el Instituto Vasco de Administración Pública. En tales pruebas,

un representante o una representante de dicho Instituto formará parte del tribunal calificador.

-El artículo 47.3 prevé que las convocatorias determinarán las plazas que hubieran de proveerse, expresando los perfiles lingüísticos exigibles.

-Según se recoge en la disposición adicional séptima, la aprobación de los perfiles lingüísticos que se asignen a los puestos de trabajo de la Ertzaintza corresponderá al Consejo de Gobierno.

-La disposición transitoria quinta dispone que hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo de la Ertzaintza, el conocimiento del euskera será considerado como mérito en las convocatorias para el ingreso y en las de provisión de puestos de trabajo. El porcentaje de valoración no podrá ser, en ningún caso, inferior al cinco por ciento ni superior al diez por ciento de la puntuación máxima alcanzable en el resto del procedimiento selectivo y de provisión.

-La disposición final primera establece que la normalización lingüística en la Ertzaintza se regirá específicamente por lo dispuesto en el Título V de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. El Gobierno Vasco, dada la naturaleza y peculiaridades funcionales de la Ertzaintza, procederá a regular el proceso de normalización lingüística que se seguirá en dicho sector.

Esas referencias lingüísticas son correctas y se ajustan a la normativa vigente en materia lingüística.

No obstante, en aras a que el Anteproyecto de Ley tenga un mayor grado de influencia en la normalización sobre el uso del euskera, realizamos las siguientes propuestas:

b.1- Proponemos completar la redacción de la letra c) del nuevo artículo 30 bis contemplado en el apartado siete del artículo único del Anteproyecto de Ley, incluyendo una mención expresa a la lengua.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco contempla expresamente en su artículo 6.3 que nadie podrá ser discriminado o discriminada por razón de la lengua. En el mismo sentido, el artículo 4 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, dice que los poderes públicos velarán y adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea discriminado o discriminada por razón de la lengua en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por ello, en la misma línea que las disposiciones normativas referidas, estimamos procedente que en la Ley 4/1992, de 17 de julio, también se recoja una referencia expresa a que nadie puede ser discriminada o discriminado por razón de la lengua.

Por tanto, proponemos modificar la redacción del apartado séptimo del artículo único del Anteproyecto de Ley, al objeto de insertar una mención expresa a la lengua en el artículo 30 bis 1.c) de la Ley 4/1992, de 17 de julio.

b.2- El artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone que tanto el euskera como el castellano tienen carácter de lengua oficial en Euskadi, y que todos y todas sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Corresponderá a los poderes públicos garantizar el uso de ambas lenguas y evitar situaciones de discriminación por razón de la lengua.

Asimismo, La Ley de Normalización del Uso del Euskera dispone que la ciudadanía del País Vasco tiene derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración, y a ser atendida en la lengua oficial que elija (artículos 5.2 y 6.1), así como que los poderes públicos vienen obligados a utilizar los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma (artículo 8).

Por lo tanto, en la medida en que son parte integrante de la administración pública, las Policías de la Comunidad Autónoma de Euskadi vienen obligadas a garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a relacionarse con ellas en el idioma oficial que los ciudadanos y ciudadanas elijan. Sin embargo, estimamos que este derecho lingüístico no está reflejado lo suficientemente claro en la Ley 4/1992, de 17 de julio, ni en el nuevo artículo 30 bis.2. que pervé introducir este Anteproyecto de Ley.

Por tanto, proponemos insertar una nueva disposición en la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, con el siguiente contenido:

- Las Policías de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizarán el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a relacionarse con ellas, oralmente y/o por escrito, en la lengua oficial que estos y estas deseen, y a ser atendidos y atendidas en esa misma lengua.

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2015

Joseba Lozano Santos
Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas



XII

CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES / EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UDALTZAINGOAK KOORDINATZEKO BATZORDEKO ZIURTAGIRIA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



Guillermo José Muñoa Amas, Secretario de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del País Vasco, **CERTIFICO** :

Que en el acta de la sesión de 2 de diciembre de 2015 de la Comisión de Coordinación de Policías Locales del País Vasco, pendiente de aprobación, consta lo siguiente :

“Dado que no se formulan mas consideraciones al respecto, la Consejera de Seguridad considera informado por la Comisión de Coordinación de Policías Locales del País Vasco el texto del proyecto de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, documento titulado *SEGUNDO BORRADOR ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACION DE LA LEY DE POLICIA DEL PAIS VASCO 10-11-2015 TRAS ALEGACIONES.*, no planteando objeción alguna a dicha consideración ninguno de los presentes.

Por tanto, queda informado por la Comisión de Coordinación de Policías Locales del País Vasco el texto del proyecto de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, documento titulado *SEGUNDO BORRADOR ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACION DE LA LEY DE POLICIA DEL PAIS VASCO 10-11-2015 TRAS ALEGACIONES.*”

Lo que certifico con el Vº Bº del Sr. Presidente, a los efectos de su traslado a la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales, para su incorporación al expediente.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2015.

Vº Bº Dª. Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz.
Consejera de Seguridad. Presidente de la Comisión de Coordinación de Policías Locales del País Vasco.

Guillermo José Muñoa Amas
Secretario.



Guillermo José Muñoa Amas naizen honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordeko idazkaria naizen aldetik, hauxe **ZIURTATZEN** dut:

Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordeak 2015eko abenduaren 2an egindako bilkuraren aktak, oraindik onartzeko dagoenak, hauxe jasotzen duela:

“Horren inguruko ohar gehiago egin ez direnez, segurtasuneko sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordearen txostena egindatzat jo du, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen Bosgarren aldaketa egiteko proiektuaren testu honi buruzkoa: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETA EGITEKO AURREPROIEKTUAREN BIGARREN ZIRRIBORROA, 2015-11-10EKOA, ALEGAZIOEN OSTEKOA. Bertaratutako inork ez dio iritzi horri eragozpenik jarri.

Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordearen Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen Bosgarren aldaketa egiteko proiektuaren testuari buruzko txostena egindatzat jotzen da. Testuaren izenburua hau da: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETA EGITEKO AURREPROIEKTUAREN BIGARREN ZIRRIBORROA, 2015-11-10EKOA, ALEGAZIOEN OSTEKOA” .

Eta presidentearen oniritzia dudala, hori guztia egiaztatzen dut, Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzara helaraz dadin espedientean sartzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abenduaren 15a.

Guillermo José Muñoa Amas
Idazkaria

Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz andrearen oniritzia.
Segurtasuneko sailburua. Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordeko presidentea.

XIII

CERTIFICADO DE ACUERDO DEL CONSEJO DE LA ERTZAINZA / ERTZAINTZAREN KONTSEILUAREN ZIURTAGIRIA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



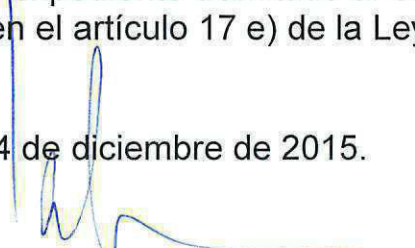
Javier Barco Hurtado, Secretario del Consejo de la Ertzaintza en la sesión del Consejo de la Ertzaintza celebrada el 14 de diciembre de 2015, **CERTIFICO** :

Que en el acta correspondiente a la sesión del Consejo de la Ertzaintza celebrada el día 14 de diciembre de 2015, pendiente de aprobación por los miembros del mismo, fue tratado dentro del orden del día el siguiente punto:

5-. Informar sobre el Segundo Borrador del Anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

Lo que certifico con el Vº Bº del Sr. Presidente, a los efectos de su incorporación al expediente tramitado al efecto, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 17 e) de la Ley de Policía del País Vasco.

En Erandio, a 14 de diciembre de 2015.


Javier Barco Hurtado
Secretario del Consejo de la Ertzaintza,


Vº Bº Jesús María Zubiaga Nieva.
Presidente del Consejo de la Ertzaintza
(En la sesión del Consejo de la Ertzaintza del día 14 de diciembre de 2015, en sustitución de la Consejera de Seguridad)



Nik, Javier Barco Hurtado naizen honek, Ertzaintzaren Kontseiluak 2015eko abenduaren 14an egindako saioan idazkari jardun nuenez, honako hau

ZIURTATZEN DUT:

Ertzaintzaren Kontseiluak 2015eko abenduaren 14an egindako saioari dagokion aktan, zeina kontseiluko kideek onartzearen zain baitago, gai hau landu zela gai-zerrendaren barruan:

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Bosgarren Aldaketaren Lege-aurreproiektuaren Bigarren Zirriborroaren berri ematea.

Hori horrela izan zela ziurtatzen dut, presidente jaunaren oniritziaraz, horretarako izapidetutako espedientean sartzeko, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen 17 e). artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Erandion, 2015eko abenduaren 14an.

Javier Barco Hurtado
Ertzaintzaren Kontseiluko idazkaria

Jesús María Zubiaga Nieva
Ertzaintzaren Kontseiluko presidente jaunak ontzat emana.
(Ertzaintzaren Kontseiluak 2015eko abenduaren 14an egindako saioan, Segurtasuneko sailburuaren ordeiz)

XIV

CERTIFICADO MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA ERTZAINZA / ERTZAINTZAREN NEGOZIAZIOMAHAIAREN ZIURTAGIRIA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**

**D. JAVIER BARCO HURTADO, SECRETARIO DE LA MESA DE
NEGOCIACION DE LA ERTZAINITZA, ART. 103 L.P.P.V.,****CERTIFICA**

Que el Segundo Borrador del Anteproyecto de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco ha sido tratado dentro de las sesiones de la Mesa de Negociación prevista en el artículo 103 de la Ley de Policía del País Vasco, celebradas los días 10 de noviembre y 10 de diciembre de 2015, dándose así por cumplido el trámite de negociación previo.

Y para que conste, a los efectos que más convengan, expido el presente certificado.

Erandio, a 21 de diciembre de 2015

Fdo.: JAVIER BARCO HURTADO

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HERRIZAINEN SAILA
Giza Baliabideen Zuzendaritza
Euzko Errepublikaren Barne Auzitegiak
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Recursos Humanos
Area de Relaciones Sindicales



JAVIER BARCO HURTADO JAUNAK, ERTZAINTZAREN NEGOZIAZIO-MAHAIAREN (EPL-AREN 103. ART.) IDAZKARIA NAIZEN HONEK,

ZIURTATZEN DUT:

Euskadiko Poliziari buruzko Legeak 103. artikuluan ezartzen duen 103. Negoziazio-Mahaiko bileretan, 2015eko azaroaren 10ean eta abenduaren 10ean, Euskadiko Poliziari buruzko Legea bosgarren aldiz aldatzeko aurreproiektuaren bigarren zirriborroari buruz hitz egin dela. Beraz, aurretiazko negoziazio-izapidea betetzat jo daiteke.

Eta hala ager dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau ematen dut.

Erandion, 2015eko abenduaren 21ean.

IZP. JAVIER HURTADO BARCO

XV

INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO / KONTROL LEGE-EKONOMIKOKO BULEGOAREN TXOSTENA.

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **FRANCISCO DE JAVIER LOSA ZIGANDA**
Fecha de la firma: **11/02/2016 16:17:37**Validación de la firma: **Correcta**Firmante: **MARIA FRANCISCA ARIZMENDIARRIETA IRAZOLA**
Fecha de la firma: **11/02/2016 16:11:23**Validación de la firma: **Correcta****INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICIA DEL PAIS VASCO.****-Tramitagune- DNCG_DEC_65484/2015_07**

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico.

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda creación y supresión de entes y órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como sus modificaciones y reestructuraciones.

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura y funciones del Departamento de Hacienda y Finanzas, se emite el siguiente

INFORME**I. OBJETO Y ANTECEDENTES**

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto epigrafiado en el encabezamiento que precede a la modificación, por quinta vez, de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.

El conjunto de actuaciones, servicios y prestaciones que dispensan las administraciones públicas vascas a través de los cuerpos de la policía del País Vasco, así como los vigilantes municipales y agentes de movilidad dependientes de

los municipios, se encuentran englobados en el sistema de seguridad pública de Euskadi, en los términos de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi (Corrección de errores, BOPV nº 201, 16/10/2012). Esta norma fue informada por esta Oficina con fecha 20 de abril de 2011.

Cabe recordar la reformulación que sufrió el texto final del anteproyecto de dicha Ley, inicialmente concebida para articular en un único cuerpo normativo una ley integral en materia de seguridad, denominado anteproyecto de Ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi, en el que se insertaba la modificación de la LPPV como objeto de una disposición final, modificación que finalmente se desgajó para dar contenido a un anteproyecto independiente, el de cuarta modificación de la Ley de Policía del País Vasco, que también fue informada por esta Oficina en la misma fecha 20 de abril de 2011, y posteriormente dictaminada por la COJUA (Dictamen nº 130/2011, de 1 de junio de 2011), no obstante lo cual este último anteproyecto decayó entrámete parlamentario, por lo que no llegó a entrar en vigor.

El Título III de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi regula el sistema policial o de seguridad ciudadana como parte integrante del sistema de seguridad pública, y en tal sentido configura el modelo policial de la Comunidad Autónoma y prevé los mecanismos de coordinación y cooperación de los servicios de la Policía del País Vasco, así como los de integración de las actividades complementarias a los mismos, con un modelo policial que propugna la existencia de un cuerpo policial autonómico, la Ertzaintza, dependiente del Gobierno Vasco, que asume la centralidad del modelo como policía general e integral, complementada por los cuerpos de Policía local dependientes de los municipios. Ambos tipos de cuerpos constituyen conjuntamente la Policía del País Vasco, sujeta a un régimen estatutario común y homogéneo, salvo algunas particularidades.

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, ha sido modificada en diversas ocasiones, y en especial con la mencionada Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi que desgajó de tal regulación los aspectos comunes al conjunto de la seguridad pública, tales como la regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, la coordinación de policías locales o los mecanismos de cooperación policial.

En esta modificación que ahora se tramita se aborda según la memoria del proyecto, un conjunto de reformas parciales que en conjunto tienden a reforzar los aspectos del modelo policial relacionados con la prestación de servicio a una ciudadanía a la que se debe rendir cuentas y la imbricación de los servicios

policiales con una sociedad abierta, plural, bilingüe y constituida por hombres y mujeres iguales en derechos.

El Anteproyecto de referencia se encuentra incluido en el Programa Legislativo del Gobierno para la X Legislatura (2012-2016) que fue aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 25 de junio de 2013, y en cuyo anexo II se contempla, con el número 25, la iniciativa legal que nos ocupa

25.- Ley de Policía del País Vasco.

a.- Denominación: LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO.

b.- Objeto de la regulación propuesta con indicación de los sectores sociales que, en su caso, resulten afectados:

b.1.) Objeto principal de la regulación:

Adequar la normativa sobre la policía del País Vasco a las necesidades actuales y futuras demandadas por la sociedad, profundizando en el modelo de policía comunitaria y cercana al servicio de la ciudadanía que se propone. Para ello es preciso dotar a la Ertzaintza de procedimientos ágiles para la cobertura óptima de las necesidades del servicio policial en cada momento y lugar, que sean compatibles con la garantía de los derechos del funcionariado, e igualmente contemplar mecanismos adecuados para velar por la eficiencia y eficacia del servicio policial y para auditar imparcialmente las actuaciones de la Ertzaintza en los casos que legalmente se contemplen.

El alcance de tales reformas y otras precisas para adecuarse al ordenamiento jurídico vigente y a la jurisprudencia más reciente, así como que la actual Ley de policía del País Vasco sea un texto repetidamente modificado, hace conveniente elaborar una nueva disposición texto legal que refunda en un solo texto normativo la regulación de la Policía del País Vasco en cuanto a su organización, principios de actuación y el régimen jurídico de su personal.

b.2.) Otros objetivos:

- Regular en una ley formal los requisitos de ingreso. Reforzar las garantías de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de los órganos de selección y el equilibrio entre hombres y mujeres. Establecer medidas de acción positiva para favorecer la integración de la mujer en los cuerpos policiales.
- Simplificar la estructura de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, eliminando la figura de la Dirección de Administración y Servicios.
- Suprimir el límite de tres convocatorias para participar en los procedimientos de promoción interna. Reconocer a quienes presten comisiones de servicios el percibo de las retribuciones correspondientes al puesto o funciones efectivamente desempeñados.
- Reforzar las medidas de protección de la salud del funcionario o funcionaria que se ha visto afectada física o psíquicamente por enfermedad, accidente o edad, como el caso de la segunda actividad.
- Actualizar el régimen disciplinario.
- Posibilitar que las policías locales actúen fuera del término municipal respectivo en funciones de protección de las autoridades locales, así como otros aspectos relativos a la estructura profesional de tales cuerpos y otras figuras legales como los vigilantes municipales o los agentes de movilidad.

b.3.) Sectores sociales implicados:

- Funcionarios de la Policía del País Vasco.
- Administraciones Públicas con cuerpos de la Policía del País Vasco.

c.- Estimación de la incidencia financiera:

Incidencia financiera limitada dado que las modificaciones a la ley no implican en principio costes verificables derivados de la propia aprobación de esta norma.

d.- Fecha aproximada de su presentación ante el Consejo de Gobierno y posterior remisión al Parlamento Vasco.

Primer semestre de 2015.

II. ANALISIS

a) Procedimiento

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se acomoda sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y resulta suficiente para que esta Oficina materialice su actuación de control económico normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En el procedimiento de elaboración del proyecto objeto de análisis se han cumplimentado, hasta la fecha, razonablemente los requisitos que para la Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, exige la Ley 8/2003, de 22 de diciembre. Entre la documentación figura una Memoria explicativa de la iniciativa, las respectivas Ordenes de iniciación y aprobación previa del proyecto, Informe Jurídico departamental, Memoria Económica, Informe de la DACIMA, Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, Informe de Emakunde, Informe 29/2015 de la Dirección de Función Pública, diversa documentación referida a los trámites de información pública, audiencia, participación y alegaciones, Memoria de tramitación (en la que se da cuenta de la manera en que se han tomado en consideración las alegaciones presentadas y modificaciones introducidas en consecuencia, y se aborda además, someramente, el impacto de la norma sobre la economía en general-en la competencia y pequeña y mediana empresa y desde el punto de vista de las cargas administrativas- así como desde el punto de vista social). No se ha encontrado Dictamen del Consejo Económico y Social en el expediente remitido a esta Oficina (que sí se incorporó en su momento al expediente del anteproyecto de la Ley 4/1002, de 17 de julio, que ahora se modifica). El texto del anteproyecto examinado se corresponde con la versión incorporada al expediente con fecha 20/01/2016.

Ha de indicarse que, si como consecuencia del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se introducen modificaciones en el anteproyecto, éstas deberán ser comunicadas a esta Oficina, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su redacción dada por la Disposición Final primera de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Debe recordarse también que el artículo 27.4 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, establece que *el informe de control económico-normativo incorporará, en sus propios términos, todos los informes que, en su caso y en virtud de disposiciones legales vigentes, deba evacuar cualquier órgano del Departamento de Economía y Hacienda con competencia en la materia de que se trate dando cuenta de su procedencia*. En base a lo anterior, en el presente informe se recoge, como Anexo al mismo, el Informe de la Dirección de Presupuestos a la Ley proyectada, de fecha 9 de febrero de 2016.

b) Contenido

El anteproyecto presentado consta de una parte expositiva, un único artículo (en el que se relacionan las modificaciones introducidas –un total de 66– en la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco), 9 disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

Las concretas medidas que se plantean se refieren al reforzamiento del modelo policial, a los ámbitos de selección e ingreso, medidas de acción positiva para favorecer la entrada de mujeres en los cuerpos policiales, promoción interna, carrera profesional y provisión, situaciones administrativas, derechos y deberes del funcionariado, régimen disciplinario, y cuerpos de policía local.

La proyectada ley prevé además (D.T. Cuarta) la modificación, en un plazo de seis meses, de la RPT de la Ertzaintza para adaptar los puestos reservados a la categoría de superintendente, que se extinguen, así como (D.F. Primera) la autorización al Gobierno para aprobar, en un plazo de 12 meses, un texto refundido de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, al objeto de consolidar en un único texto las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor.

Analizado el expediente procede examinar, por un lado, los aspectos económico organizativos de la iniciativa, y por otro los de índole hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el proyecto examinado, esto es, su posible incidencia en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV– (el régimen del patrimonio;

el procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y de contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma; el de la contratación; el de la Tesorería General del País Vasco; la regulación de sus propios tributos y demás ingresos de derecho público y privado; el régimen de endeudamiento; el régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y subvenciones; el de las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su Hacienda General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere de naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi).

c) Incidencia organizativa

De la lectura del texto proyectado se detecta posible incidencia organizativa, para esta Administración, en las siguientes modificaciones:

1. Los nuevos artículos 6 y 7 que se introducen en la LPPV prevén la implementación, por parte de las administraciones públicas a las que pertenezcan los cuerpos de policía, de procedimientos efectivos e imparciales de tratamiento de quejas e investigación de los casos relevantes de supuestas malas prácticas, que favorezcan la responsabilidad y que se basen en la comunicación y la comprensión entre la ciudadanía y la policía, con la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar quejas a través de Ekinbide.

Esta iniciativa no resulta novedosa respecto de los servicios de atención a la ciudadanía actualmente existentes en este ámbito. Mediante el *Decreto 181/2015, de 29 de septiembre, de la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública-Ekinbide*, se regula un servicio administrativo no policial adscrito al Departamento competente en materia de seguridad cuya misión es facilitar a los ciudadanos y ciudadanas la formulación de quejas, comentarios y sugerencias de mejora sobre el sistema de seguridad pública y los servicios que presta a la ciudadanía, con miras a mejorar la calidad de tales servicios y la confianza de la ciudadanía en los mismos. Por su parte, en la página web de la Ertzaintza se informa de que dicha Oficina es el servicio encargado de recibir, estudiar y responder a las quejas, comentarios y sugerencias de mejora sobre el sistema de seguridad pública de Euskadi y los servicios que presta a la ciudadanía, con el fin de mejorar la calidad y la confianza en dichos servicios.

La memoria económica del presente anteproyecto confirma, así, que no existe impacto presupuestario en relación al tratamiento de quejas, dado que el mismo se asigna a un servicio ya existente, que viene realizando tales funciones, si bien el procedimiento se estandariza y se lleva a una norma con rango de ley formal.

De ello habría de deducirse que no se está pensando en una ampliación de tales servicios, aunque procedería alguna concreción adicional sobre la posibilidad que ofrecerá el nuevo artículo 8 de arbitrar métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, desconociéndose si este último procedimiento se encuentra también implantado o si su puesta en marcha a futuro generará o no mayores necesidades de recursos a esta administración.

2. En el nuevo artículo 10 se crea la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco como órgano colegiado con autonomía funcional respecto de la institución policial y del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad (se recomienda en todo caso especificar el órgano de adscripción de la Comisión) con el fin de reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial, con funciones de estudio y recomendación en relación con las conductas e incidentes que afecten o contravengan la buena práctica policial, y que estará formada por 6 miembros (entre ellos un presidente) de reconocido prestigio en los ámbitos del artículo 11.1, 3 de los cuales se nombrarán entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a escalas y categorías de la Policía del País Vasco integradas en el grupo de clasificación A con una antigüedad mínima de quince años en el cuerpo.

Se precisa en el artículo 11.4 que *“Los miembros de la Comisión no recibirán retribución alguna por sus trabajos, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio procedentes en caso de no ser empleados de las administraciones públicas”*, mientras que el artículo 12.4 prevé que *“Las actuaciones de la Comisión se realizarán por sus propios miembros, pudiendo recabar, en su caso, para concretas investigaciones el apoyo de funcionarios o funcionarias en comisión de servicios. Dichas personas en tales casos no deberán recibir órdenes de los mandos del destino de origen.”* Igualmente la Comisión podrá encomendar la investigación a los servicios de asuntos internos de la Ertzaintza bajo la supervisión directa de la propia Comisión.”

Explica la memoria económica sobre este órgano de nueva creación que *podría dar lugar a gastos su puesta en funcionamiento; no obstante, debe considerarse que no se trata de un órgano que requiera de una estructura administrativa o de apoyo estable y propia, por lo que los gastos previsibles se referirán como mucho a las dietas que se deban abonar a los integrantes de tal comisión, tampoco sujetas a cronificación o periodicidad, ya que la comisión sólo se activa cuando se producen los presupuestos previstos en la norma, sea de oficio, sea a instancia de las administraciones. Por lo tanto no resulta a priori cuantificable el gasto, si bien en ningún caso resultará presupuestariamente significativo.*

En cualquier caso, a la hora de concluir el limitado alcance presupuestario de la medida, hubiera procedido una mayor concreción sobre el número y naturaleza de las intervenciones que puedan preverse por parte de la nueva comisión, como pueda ser en base al nº de quejas, incidentes o necesidades de investigación que ya se vengán produciendo en la actualidad, y cuantificar siquiera estimativamente las indemnizaciones que procedan (únicamente en el caso de terceros no empleados de las administraciones, tal y como se prevé en el artículo 11.4) así como de los recursos o apoyos previstos en el artículo 12.4 pues, aunque no directamente imputables a la nueva comisión, si podrían generar costes en derivados de las comisiones de servicio de las funcionarias o funcionarios implicadas, o de los servicios de asuntos internos de la Ertzaintza, en la medida en que supongan un incremento de tareas para éstos últimos que implique mayor gasto presupuestario (más personal o más recursos materiales), por lo que convendría completar la memoria en tal sentido, también con la valoración de este último aspecto.

3. Se modifican los términos de dos de las funciones del Consejo de la Ertzaintza, las recogidas en los apartados d) e i) del artículo 17 de la LPPV, a los que la memoria económica no hace mención, si bien no se detecta por esta Oficina incidencia organizativa ni afección económica en las mismas.

4. El nuevo artículo 40 que se agrega a la LPPV parece asignar dos nuevas funciones a la Academia Vasca de Policía y Emergencias (1. La Academia Vasca de Policía y Emergencias promoverá la convalidación académica, por la administración competente, de los estudios que se cursen en centros de ella dependientes. Para ello la Academia procurará adecuar a las exigencias de la Administración Educativa la naturaleza y duración de dichos estudios y las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos, y se promoverá la colaboración institucional de la Administración educativa, universidad, Poder Judicial y otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente interesen a los fines docentes.// 2 La Academia Vasca de Policía y Emergencias, en los cursos que imparta en su seno, podrá convalidar determinadas materias a quienes acrediten haberlas superado previamente, en la forma en que se determine reglamentariamente.) pero en realidad no aporta mayor novedad normativa a la regulación de dicho organismo ya procurada por la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, cuyo artículo 23.4 ha sido literalmente transcrito al proyectado artículo 40.1 de las LPPV, y en cuyo artículo 23.3c) ya se asigna a la Academia la función de “Expedir los títulos y diplomas acreditativos de la superación o asistencia a los cursos impartidos por la academia y decidir sobre la convalidación de los mismos”, a no ser que lo que se pretenda ahora sea precisaren mayor medida esta última facultad de convalidación concretando que la misma se referirá a “determinadas materias a quienes acrediten haberlas superado, en la forma que se determine reglamentariamente”, si bien no cabe pensar que dicho cometido pueda

abordarse sin sujeción a reglamentación previa, aunque no lo hubiera dicho expresamente aquella Ley.

Conviene no reiterar en la proyectada ley aquellos contenidos que ya se encuentran regulados en otra norma legal en vigor, si en nada se pretende modificar esta última, en cuyo caso lo recomendable sería hacerlo expresamente, en aras de la seguridad jurídica.

5. El artículo 79bis.6 prevé la constitución de órganos colegiados de participación con representación paritaria de la Administración y de los representantes del personal en materia de prevención de riesgos laborales. Es de suponer que tales órganos ya existen, tal y como se deduce de la memoria económica cuando señala, con carácter general, que *El nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco* [entendemos que se refiere al nuevo capítulo V.-Salud y Protección] *no supone cambio respecto a la situación fáctica preexistente, lo cual no resta valor a su incorporación a la ley.* No resultando novedosos, por tanto, en la presente norma, no cabe esperar mayores gastos que los de su funcionamiento actual.

No se detectan más estructuras organizativas novedosas relacionadas con la gestión de la materia regulada.

d) Incidencia Económica y Presupuestaria

Procede, en primer lugar, detenerse en aquellos aspectos de la norma proyectada de los que pueda derivarse algún contenido económico o incidencia presupuestaria directa o indirecta para la Administración de la CAE, y así:

1. El nuevo artículo 47.bis, referido a las medidas en materia de igualdad de mujeres y hombres, prevé en su párrafo 2 la elaboración de planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el ingreso y la carrera profesional, los cuales establecerán, para el periodo de planificación de que se trate, el porcentaje de mujeres en la plantilla policial al que se pretenda llegar para corregir la infrarrepresentación de las mujeres, así como para incrementar la eficacia policial, y podrán adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho en tanto éstas subsistan.

Paralelamente establece en los párrafos siguientes los criterios y porcentajes que habrán de aplicarse en los procesos de selección, y, en lo que se refiere al ingreso por turno libre en las categorías de agente y subcomisario, se incorpora un mínimo transitorio hasta que se elaboren los previstos planes: *“Como regla general, en tanto no se elaboren tales planes de promoción de las mujeres, el*

porcentaje mínimo no podrá ser inferior al 25% siempre que se convoquen más de 3 plazas”.

Advertir que una demora en la aprobación de los planes citados pospondría también las expectativas de las interesadas en cualquier proceso de selección, caso de una eventual mejora porcentual que tales instrumentos pudieran prever sobre el mínimo anteriormente señalado. Conviene pues, atender al citado mandato, una vez en vigor la norma que nos ocupa, si se quiere esulte eficaz en un tiempo razonablemente corto.

Por lo que se refiere a los posibles costes de elaboración de los planes, explica la memoria económica que la obligatoriedad de realizar planes de promoción como actividad planificadora que supone una carga administrativa periódica pero asimilable por las estructuras organizativas preexistentes en el Departamento de Seguridad o en cualquier de los ayuntamientos que cuentan con unidades de igualdad.

Se recomienda revisar la redacción del párrafo 6 de mismo artículo donde se señala que *“La preferencia a que se refiere el apartado anterior sólo será de aplicación en tanto no exista en el cuerpo, escala y categoría a que se refiera la convocatoria del proceso selectivo una presencia igual o inferior al 33% de funcionarias mujeres.”* donde probablemente quiso decirse *“o superior”*, si atendemos a la expresión *“en tanto no exista...”* que le precede.

2. El nuevo artículo 50.2 establece que *“Las entidades locales podrán encomendar a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, previa aceptación por ésta, la realización conjunta de las convocatorias de procedimiento de selección para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local; así como en su caso, para el ingreso como alguaciles y agentes de movilidad. Esta encomienda conllevará la ejecución por la Academia Vasca de Policía y Emergencias de los procedimientos de selección...”* (sobra un punto final), sobre cuya potencial carga económica señala la memoria que se tratará de un procedimiento consensuado entre las partes acordantes, y “no tiene un reflejo presupuestario negativo, más bien sirve para racionalizar eficientemente recursos, no sólo con ahorro real para los entes locales por economías de escala, sino igualmente para la Academia, dado que ello permitiría coordinar la fase de selección con la de formación obligada en la Academia, permitiendo planificar los cursos de un modo más eficaz al aunar en unas mismas fechas la suma de todos los alumnos anuales para el ingreso en las policías locales” de lo que parece deducirse que, según estima el Departamento proponente, dichos procesos conjuntos supondrán no un mayor gasto sino un ahorro global de costes para una y otra administración, ahorro que no se encuentra

tampoco valorado en la memoria económica ni imputado a partida presupuestaria específica.

3. Respecto de la adscripción provisional a un puesto de trabajo, la nueva redacción que se le da al artículo 71.3, no parece diferir demasiado de la actualmente recogida en su primer párrafo, con la salvedad de que la norma vigente hace referencia al "grado personal" y la que ahora se pretende habla de "categoría", y en lo que respecta a su segundo párrafo, que viene estableciendo un complemento transitorio por la diferencia entre las retribuciones del puesto de adscripción provisional y el puesto de procedencia amortizado, y que desaparece de la actual propuesta. Se desconoce, puesto que la memoria económica no lo menciona expresamente, la incidencia que pueda tener tal modificación en el actual régimen retributivo de los cuerpos policiales, ni si la supresión del párrafo referido a tal complemento supondrá en realidad un ahorro presupuestario en el capítulo de personal. Conviene aclararlo en la memoria y, caso de ser así, valorar económicamente dicho menor gasto para esta administración e identificarlo en las partidas de financiación correspondientes.

4. En lo que se refiere a la carrera profesional de personal funcionario de la Policía del País Vasco, el nuevo artículo 73.ter establece que el Departamento competente en materia de seguridad y los municipios podrán implantar sistemas de carrera profesional horizontal consistentes en la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, si bien la efectividad de la implantación y desarrollo de las distintas modalidades de carrera profesional horizontal requerirá necesariamente del correspondiente desarrollo normativo por parte de cada una de las Administraciones Públicas vascas, estando dicha efectividad de la carrera profesional sometida, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias de las respectivas Administraciones.

La memoria económica no realiza una valoración cuantitativa del extracoste que pudiera derivarse de la implantación de tales complementos, independientemente de que la presente norma no obliga a las administraciones ni determine sus presupuestos monetarios (a los que alude al citada memoria), pues si la ley lo contempla sería de esperar, ante las expectativas que pueda generar, que en un futuro más o menos cercano haya de abordarse el correspondiente desarrollo reglamentario que posibilite la eficaz puesta en marcha de tal medida. No hubiera estado de más alguna prospección a futuro, al menos en lo que respecta a esta administración, del impacto presupuestario previsible de esta medida y su encuadre en los escenarios presupuestarios venideros. Y así se recomienda completar la memoria económica en tal sentido.

Por otro lado, de la escala de clasificación recogida en el artículo 74 desaparece el puesto de superintendente, el de mayor categoría actualmente (nivel 8).

Las consecuencias funcionales de tal supresión habrá que buscarlas en la exposición de motivos de la ley proyectada, donde se hacen dos concretas referencias a la misma:

"Desaparece la categoría de superintendente, de modo que se agiliza el acceso y cobertura de los puestos de mando de mayor responsabilidad en la Ertzaintza por medio de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos"

.....

Desaparece la categoría de superintendente, de modo que las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría pasan a singularizarse en concretos puestos de trabajo, lo cual facilita el acceso a los mismos, siempre que se cumplan las condiciones del puesto por los sistemas ordinarios de provisión"

Por su parte, en la disposición transitoria cuarta se concede un plazo de seis meses para modificar la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza para adaptar los puestos reservados a la extinta categoría previendo además que hasta que se produzca dicha modificación los ocupantes de dichos puestos continuarán percibiendo las retribuciones que vinieran atribuidas a dicha categoría de Superintendente conforme a la normativa actualmente en vigor.

No obstante, esta transitoriedad carecería realmente de virtualidad en lo que respecta a las personas que ostentan tal categoría, puesto que no hay ninguna según explica la memoria económica del proyecto *La desaparición de la categoría de superintendente tiene un efecto limitado, debido a que no existe ningún funcionario que pertenezca a tal categoría. Las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría (ahora cubiertas en comisión de servicios a superior categoría) pasan a singularizarse en concretos puestos de trabajo de la escala superior. El efecto presupuestario es poco apreciable dado que se trata de pocos puestos (3) y que en realidad las retribuciones de tales puestos vinculadas a la categoría a suprimir se refieren exclusivamente al complemento de destino (categoría) que, dado que no hay ningún funcionario que ostente tal categoría ello no tiene efectos a salvo de algunas eventuales gratificaciones extraordinarias. El Informe de Función Pública, por su parte, precisa que: "Ninguna persona pertenece a la categoría de Superintendente. Los puestos reservados a la categoría de superintendente están de hecho siendo ocupados por personal funcionario de categoría inferior. Una vez producida dicha modificación las retribuciones serán las propias de la categoría de Intendente."*

Por otro lado, en lo que se refiere a la Ertzaintza las cuantías de los complementos de destino se fijarán anualmente en la ley de presupuestos, como se

viene haciendo en la actualidad (artículo 21 de la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016), si bien esta ley de presupuestos también habrá de concretar -nuevo artículo 74.1.a)bis)- la cuantía del complemento de carrera profesional, esto es, las retribuciones correspondientes a cada grado de desarrollo profesional según grupo de clasificación. Como ya se ha dicho, la efectividad de éste último complemento requerirá de su previa regulación, pero habrá de tenerse en cuenta, en el proceso de elaboración presupuestaria correspondiente, la necesidad de consignar créditos sobre la estimación de los gastos que supondrá en el ejercicio en que entre en vigor tal regulación, todo ello conforme a las instrucciones dictadas por la Dirección de Presupuestos.

5. En relación con lo dispuesto en los nuevos artículos 79 ter y 80, sobre mecanismos de protección social complementaria y régimen de condecoraciones y reconocimientos, la memoria económica del proyecto señala que *Las previsiones de los derechos complementarios en los casos de muerte o incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los Cuerpos de Policía del País Vasco no son novedosas ni en la Ertzaintza ni en las policías locales, ya que se encuentran en sus respectivas regulaciones reglamentarias relativas al régimen de condecoraciones por razón del servicio. La novedad estriba en desvincular tales prestaciones sociales de la evaluación del comportamiento meritorio del agente policial.// Algo semejante se puede decir del régimen de concesión de condecoraciones honoríficas; la concesión de medallas al mérito policial tanto en el caso de la Ertzaintza como de las policías locales no varía respecto a la regulación reglamentaria preexistente contenida en sendos reglamentos con matices diferenciados. La previsión en el proyecto del ascenso honorífico póstumo o a jubilados carece de efectos económicos.*

Respecto a la novedad a que hace referencia la memoria de desvincular las prestaciones sociales de la evaluación del comportamiento meritorio del agente policial, cabría alguna concreción adicional sobre el número de casos a los que pudiera afectar la nueva previsión, y de los que pudiera derivarse un mayor gasto, o si por el contrario, no se produce en la actualidad ningún caso de evaluación negativa que afecte a tal derecho, careciendo por tanto de efectos prácticos tal novedad. No está de más aclararlo en la memoria económica.

6. En relación con las modificaciones introducidas en la regulación de las situaciones administrativas del personal, en el Capítulo VI se recogen aspectos relativos a la suspensión provisional, el servicio activo modulado por la edad y sobre los requisitos para el paso a la situación administrativa de segunda actividad.

En primer lugar, se produce alguna duda sobre el ~~atance~~ del nuevo párrafo 5 del artículo 84 donde se especifica que *“Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario o funcionaria deberá ~~devolver~~ lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla”*, pues la memoria económica no se ocupa de ello, y de cuya primera lectura podría deducirse que supondrá un ahorro para la administración proveniente de las mencionadas devoluciones, con la consiguiente carga económica para el suspendido, y que debería tener su reflejo económico en la mencionada memoria, salvo que no se trate de una verdadera novedad de este anteproyecto, lo cual no se aclara expresamente en la citada memoria, por lo que habría de completarse también en tal sentido.

El mencionado párrafo 5 precisa también que *“Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción firme, la Administración deberá restituirle la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.”* lo que, salvo error de apreciación, ya se encontraría previsto en el preexistente párrafo 4 del mismo artículo.

En lo que se refiere a la nueva regulación, tanto ~~el~~ *servicio activo modulado por la edad* como de la situación de *segunda actividad*, el Informe de Función Pública realiza en su apartado 9 un pormenorizado análisis de ambas cuestiones que ha sido objeto también de particular consideración en la memoria de tramitación del proyecto (pag.44 a 47) . Nos fijaremos aquí en aquellos aspectos de los que pueda deducirse alguna incidencia económico-presupuestaria, y así:

En el artículo 85 se incorpora, como nueva categoría independiente, la de servicio activo el *“servicio activo modulado por la edad”*, cuyos requisitos habrán de regularse por cada administración previa negociación con la representación del personal, en los términos y condiciones de los párrafos 3 y 4 del mismo artículo. Esta nueva situación, que se podrá declarar a solicitud del interesado, conlleva la paralela supresión del subtipo “segunda actividad por razón de la edad” de la vigente regulación, que se declara de oficio.

La memoria económica no realiza previsión cuantitativa en tal sentido, al considerar *en este momento prácticamente imposible efectuar un cálculo real de dichas repercusiones en los próximos años, debido principalmente a que la modalidad de servicio modulado por razón de la edad resultan derechos y no deberes para el personal funcionario, de modo que su ejercicio implica una decisión individual y voluntaria, que impide una estimación aproximada del número de personas que pudieran optar por ejercer tales derechos.*

No obstante, alguna previsión cabría hacer en basea, por ejemplo, la concreción del régimen que se esté barajando en desarrollo de la ley, el nº de efectivos susceptible de engrosar dicho colectivo, el nº de efectivos que en la actualidad se encuentran en situación de segunda actividad por razón de la edad, la demanda estimada y las retribuciones previstas, a fin de incorporar en la memoria económica alguna valoración de cara a deducir razonablemente la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista presupuestario. De hecho tanto la memoria de tramitación del proyecto, en su contestación al informe de Función Pública, como la memoria económica, prevén que *"en los próximos años en la Ertzaintza se producirá un incremento importante de las jubilaciones y otras bajas vegetativas y que se incrementará, como hemos visto, el número de personas que pase o pueda pasar al servicio activo modulado"* tras realizar una previa extrapolación de datos a futuro, donde resulta relevante el incremento previsto para 2016 -30,5%- en el nº de personas que potencialmente podrían solicitar el SAM.

Similar consideración ha de hacerse respecto del régimen retributivo previsto en el nuevo artículo 87, para el caso en que el personal en SAM o en segunda actividad permanezca transitoriamente sin puesto de trabajo, sobre el que el Informe de Función apunta que *"En el anteproyecto se regula la posibilidad de que una persona transitoriamente pueda permanecer sin destino, supuesto que se refleja en la normativa vigente, pero se produce una modificación con relación a las retribuciones a percibir. En la ley vigente se perciben las correspondientes a la categoría y las de carácter personal que tuviera reconocidas, incluidos trienios. En la nueva propuesta las retribuciones serían superiores ya que percibiría las retribuciones del último puesto desempeñado, con excepción del componente singular del complemento específico."*

En cuanto a la nueva regulación de la segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales, procede remitirse al Informe de la Dirección de Presupuestos a la propuesta se expresa que el mismo resulta acorde con la situación actualmente existente en la Ertzaintza (Acuerdo Regulador de las condiciones laborales) y no plantea por lo tanto impacto presupuestario no previsto.

En lo que se refiere a la clasificación por escala recogidas en los nuevos artículos 105 y 118, y en particular a lo estipulado en sus respectivos párrafos 2.c), explica la memoria económica que *"La regulación de los requisitos de ingreso implica la exigencia de inicio para presentarse en las pruebas de estar en posesión de la titulación correspondiente al grupo de clasificación al que se pretende ingresar, lo que en el caso de la escala básica sea el grupo C1. Esto difiere de la situación actual en la que a los aspirantes se les exige estar en posesión de titulación del grupo C2 y cuando son nombrados funcionarios de carrera se les*

reclasifica con efectos retributivos administrativos limitados en el grupo C1.// Ciertamente la modificación no afecta a quienes ya sean funcionarios de carrera antes de la entrada en vigor de esta nueva ley (yaque están reclasificados a tales efectos y además pueden solicitar la convalidación de efectos académicos de la preparación recibida para el ingreso), pero puede tener repercusión económica respecto de los aspirantes de las futuras promociones de ingreso a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.// En la actualidad los funcionarios en prácticas perciben las básicas correspondientes al subgrupo Q, dado que no se les reclasifica en el C1 sino después del nombramiento como funcionarios de carrera. La reforma supondría que la retribución de los funcionarios en prácticas sería más elevada en cuanto a las retribuciones básicas correspondientes al grupo de clasificación. El impacto económico no es cuantificable de antemano puesto que para cada Administración dependerá del número de plazas convocadas en cada momento y el número de funcionarios en prácticas.”

Lo que no acaba de concretar son las estimaciones de coste que se hayan realizado extrapolando los datos de los que ya disponga (al menos en lo que respecta a esta Administración), así como la previsión de su cobertura financiera y su afección a la partida presupuestaria correspondiente. Procede también completar la memoria económica en este aspecto, teniendo en cuenta que, sobre esta cuestión, la Dirección de Presupuestos ha realizado en su Informe (que se adjunta como Anexo) una valoración de lo que podría suponer el sobrecoste anual por dicho concepto (reclasificación del grupo C2 a C1), basada en los períodos de formación y de prácticas, lo que arroja una cifra estimativa de 916.000,-€ de incremento de coste anual para el Departamento de Seguridad.

En relación con el resto de previsiones de la nueva norma relativas al Régimen estatutario del personal de los cuerpos de policía afectados, hemos de remitirnos a las consideraciones ya realizadas en el Informe de Función Pública.

e) Por último, procede alguna reseña específica de lo estipulado en el nuevo artículo 113, en el primero de los cuales se dispone que “La formación específica de los funcionarios y funcionarias adscritos a las unidades y servicios de investigación criminal y policía judicial se realizará a través de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, incluyendo en su caso períodos de prácticas, en los que podrán participar miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal” mientras que, en el segundo se dispone que “Se fomentará por el Departamento competente en seguridad la participación de la Ertzaintza en las comisiones y foros regionales, estatales e internacionales relevantes relativos a la coordinación de actividades de investigación criminal y policía judicial.”, mandatos de formación y fomento de los que se desconoce si presuponen una novedad entre los cometidos que ya

corresponden a ambas instancias (Academia y Departamento), ni si se prevé algún sobrecoste adicional en ambos conceptos tras la entrada en vigor de la Ley.

Por lo que se refiere a la formación de los alguaciles, en la memoria económica se explica que *"En referencia a los alguaciles municipales el anteproyecto plantea una regulación mínima de su estatuto jurídico, hasta ahora inexistente, diferenciado del de las policías locales. Ello supone una unificación de su denominación, funciones, exigencias y formación. El principal coste al respecto, el formativo, pasa a ser responsabilidad de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. No supone un coste significativo en cualquier caso ya que el número de alguaciles a fecha 30 de junio de 2015 en todo Euskadi era de 64 personas, no siendo previsible que en los próximos ejercicios haya una demanda de formación de nuevos alguaciles que resulte inasumible ni organizativamente ni presupuestariamente."*, lo que no impide tampoco su valoración económica en terminos cuantitativos, ni la identificación de sus fuentes de financiación.

Señalar, por último, que del contenido del proyecto no se aprecia incidencia, para esta Administración, en la vertiente de los ingresos, ni otra vinculación directa con las materias propias de la Hacienda General del País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre, salvo las ya apuntadas respecto de los gastos presupuestarios que deba asumir esta Administración.

Se recomienda, en todo caso, completar la memoria económica con una valoración cuantitativa de aquellos aspectos anteriormente referidos que puedan tener significación económica en los presupuestos de gastos de esta Administración, determinando los costes a asumir (siquiera estimativamente) o los ya asumidos, en su caso, así como las correspondientes partidas de financiación presupuestaria, a fin de que el órgano competente para la aprobación de la nueva norma cuente con todos los antecedentes pertinentes, en particular el relativo a su incidencia en los estados presupuestarios de las administraciones implicadas.

Habrà de tenerse en cuenta, finalmente, la observación recogida en el Informe de la Dirección de Presupuestos, donde convenientemente previene que *"los diferentes incrementos de coste de personal derivados de la modificación de la Ley de Policía del País Vasco que se propone, deberán ser asumidos anualmente con las dotaciones económicas asignadas para el Capítulo 1, al Departamento de Seguridad, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las cuales se ajustarán anualmente a las directrices económicas que apruebe el Gobierno"*.

Administración Local

En lo que se refiere a la afección e impacto económico de las modificaciones propuestas las policías locales, el Departamento promotor de la iniciativa analiza tales cuestiones en los apartados h) e i) de su memoria económica, del que concluye que *"...la novedad del impacto de la propuesta legal se limitaría a la creación de la categoría de intendente en las capitales, la de comisario en los municipios de Barakaldo, Getxo e Irún y la de subcomisario en los municipios de Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio o Galdakao, además de Irún. // En conclusión, es previsible que en los casos previstos la ley determine la necesidad de crear nuevos puestos de jefatura con categorías superiores a las actualmente existentes, e igualmente a crear todas las categorías intermedias, lo cual puede dar lugar a incrementos de plantilla y elevación de costes// No obstante, como se puede apreciar el impacto financiero es limitado y no susceptible de afectar a objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de ningún municipio."* mientras que respecto a los agentes de movilidad precisa que *"En cualquier caso, y a efectos del análisis del impacto presupuestario, decir que el impacto de tal creación, al menos en cuanto a créditos de personal, debe ser neutro, a tenor de lo que expresa la LOPFCS y que recoge este anteproyecto."*

Impacto social y sobre la economía en general

Finalmente, la memoria económica se pronuncia sobre las consecuencias de la nueva norma en el sector empresarial y para la ciudadanía (no aprecia impacto alguno) mientras que la memoria de tramitación analiza su incidencia sobre la economía en general en su apartado VI.b), donde no aprecia efectos significativos sobre la competencia, ni sobre la pequeña o mediana empresa, ni tampoco espera *"un impacto directo desde el punto de vista de las cargas administrativas atendiendo a una definición estricta de las mismas, si bien en la medida que implica una simplificación y mejora de procedimientos por ejemplo en cuanto a la Academia Vasca de Policía y Emergencias como órgano permanente de selección o a ciertos mecanismos que de cooperación intermunicipal o a la flexibilidad y racionalidad en la conformación de estructuras organizativas profesionales de las policías locales cabe genéricamente suponer un efecto positivo respecto a las cargas administrativas"*.

Señalado todo lo anterior, adjunto se da traslado al presente informe al Departamento de Seguridad, con las consideraciones efectuadas, a los efectos de proseguir con la tramitación del expediente.

ANEXO

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO.

1.-INTRODUCCION.

El Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas, define entre las funciones asignadas a la Dirección de Presupuestos, la de emisión de los informes que correspondan en relación con las propuestas normativas, planes, convenios y acuerdos de contenido económico relevante, a fin de evaluar el impacto presupuestario y proponer las medidas de ajuste correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.4 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Departamento de Seguridad ha presentado el Anteproyecto de Ley de Quinta Modificación de la Ley de Policía del País Vasco, junto con la Memoria Económica elaborada por la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales con fecha 20 de enero de 2016. La Dirección de Presupuestos analiza dicha documentación, así como el Informe de diciembre de 2015 de la Dirección de Función Pública (Informe 29/2015, de diciembre, relativo al anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco), con el fin de informar sobre el posible impacto que las actuaciones previstas en la futura Ley pudieran tener en los presupuestos de la Administración de la CAE.

2.-ASPECTOS ECONÓMICOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

Del texto del anteproyecto de ley y de la descripción de los Informes de Función Pública y de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales, se desprende la siguiente evaluación de posibles consecuencias económico-presupuestarias que pudiera derivarse de la aplicación del contenido propuesto, en el ámbito de la Administración Pública de la CAE.

Se debe resaltar que cualquier modificación en la normativa debe complementarse con una Memoria Económica en la que conste el análisis de la cuantificación económica que puede conllevar dicho cambio normativo. En la presente Memoria Económica no se cuantifican las

repercusiones económicas de las modificaciones a la ley que se proponen, indicándose en algún caso la imposibilidad de su realización. En un caso –propuesta de modificación de la categoría del agente en prácticas- esta Dirección de Presupuestos ha desarrollado una estimación orientativa del coste de tal modificación.

Las modificaciones en el área de **selección e ingreso** implicarán que si en la actualidad los funcionarios en prácticas perciben las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo C2, dado que no se les reclasifica en el C1 sino después del nombramiento como funcionarios de carrera, con la reforma la retribución de los funcionarios en prácticas sería más elevada ya que pasarían a formar parte directamente del subgrupo C1.

Este cambio en la reclasificación afectará al coste de personal, tanto durante el periodo de formación de los ertzainas en la Academia Vasca de Policía y Emergencias (AVPE), como posteriormente en sus primeros 12/15 meses en la Ertzaintza, en situación de agentes en prácticas.

En la AVPE, suponiendo que cada año se forma una promoción de 250 ertzainas, el incremento de coste podría suponer un total anual de 432.000 € (1.707 €/ año por ertzaina en prácticas, durante 9 meses, más coste patronal).

En la Ertzaintza la reclasificación de los agentes en prácticas de C2 a C1, suponiendo que cada año se incorpora una promoción de 250 ertzainas, el incremento de coste podría suponer un total anual de 484.000 € (1.434 €/ año por ertzaina en prácticas, más coste patronal).

Por tanto, según estimaciones de la Dirección de Presupuestos, el total de incremento del coste anual para el Departamento de Seguridad debido a la reclasificación de grupo (de C2 a C1), de los agentes en prácticas sería de 916.000 €.

En materia de **promoción interna, carrera profesional y provisión de puestos**, las medidas destinadas a favorecer la carrera administrativa por medio de la promoción interna no tienen impacto presupuestario, como tampoco lo tienen aquellas relativas a la provisión de puestos, o la creación y dotación de puestos de especialidad, ya que los mismos ya existen.

Tiene un impacto potencial la regulación de la carrera profesional horizontal y la consiguiente aparición de un “*complemento de carrera profesional*” vinculado a la misma. No obstante cabe indicar que la regulación que se presenta en el anteproyecto de ley solo es habilitante de la implantación de tales sistemas en la Ertzaintza, pero no establece condiciones de aplicación y presupuestos, de modo que no es factible la evaluación hipotética del impacto presupuestario que pudiera tener.

Además, el complemento de desarrollo profesional no se encuentra creado ni regulado en la Ley de Función Pública Vasca, si bien en el Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco se regula una carrera profesional horizontal que se llevaría a cabo a través de la progresión de grados de desarrollo profesional. Deberá ser el Gobierno Vasco quien regule el desarrollo profesional y la evaluación del desempeño, con criterios básicos de aplicación para el conjunto de las Administraciones Públicas Vascas, de acuerdo con los criterios que al respecto señale la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Euskadi, creada en el anteproyecto de ley de empleo público mencionado.

El complemento de carrera profesional por tanto no es posible de evaluar, ya que su implantación sólo podría efectuarse una vez regulada su aplicación al conjunto de las

Administraciones Públicas Vascas y no existen parámetros que permitan realizar ninguna previsión.

En cuanto a la desaparición de la categoría de superintendente, la misma tiene un efecto limitado, debido a que no existe ningún funcionario que pertenezca a tal categoría. Las funciones correspondientes a las plazas integradas en tal escala y categoría (ahora cubiertas en comisión de servicios) pasan a puestos de trabajo de la escala superior. El efecto presupuestario es poco apreciable dado que se trata de pocos puestos (3) y que las retribuciones de tales puestos vinculadas a la categoría a suprimir se refieren exclusivamente al complemento de destino.

En lo que atañe a las **situaciones administrativas** la principal novedad se refiere a las modulaciones del desempeño de tareas policiales derivadas de la edad, o la insuficiencia sobrevenida de las capacidades precisas para el desempeño ordinario del conjunto de tareas propias de la función policial, en consonancia con el derecho a la protección de la salud del funcionariado. Así, se regula “*el servicio activo modulado por la edad*” (SAM), consistente en la continuación del servicio activo realizando tareas apropiadas a agentes de mayor edad.

El reconocimiento del SAM no supone, como regla, la remoción del puesto de trabajo, sino la adaptación de su desempeño, consistente fundamentalmente en la posibilidad de no trabajar en horario nocturno y, a partir de los 59 años, no realizar patrullas en el exterior de las instalaciones policiales.

La Memoria Económica del Departamento de Seguridad indica que no es posible efectuar un cálculo real de las repercusiones en los próximos años de la implantación de la SAM, aunque sí se realizan previsiones sobre el número de personas que potencialmente podrían solicitar el SAM. La normativa vigente exige que cualquier modificación normativa, y más aún cuando la misma tiene rango de ley, venga acompañada de un análisis de los efectos económicos que puedan derivarse de su aplicación, lo que es especialmente importante en este caso, dado que en los próximos años el incremento de la edad media del colectivo puede suponer una aplicación importante de la situación de servicio activo modulado por la edad, con el consiguiente incremento de costes operativos en la Ertzaintza.

Lo que sí indica la Memoria Económica del Departamento de Seguridad es que parte de las medidas de regulación de las modulaciones del servicio activo por razón de la edad ya se aplican en la Ertzaintza a partir del Acuerdo Regulador de las condiciones laborales de 2012, siendo el impacto económico de las mismas asumido con las dotaciones presupuestarias asignadas al personal de la Ertzaintza. (Debe considerarse que en la Ertzaintza no cabe suplir las ausencias con el nombramiento de personal funcionario interino).

En cuanto a la nueva regulación de la situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia psicofísica para el desempeño ordinario del conjunto de las tareas policiales, es igualmente acorde con la situación actualmente existente en la Ertzaintza (Acuerdo Regulador de las condiciones laborales) y no plantea por lo tanto impacto presupuestario no previsto.

En el **régimen de derechos individuales del funcionariado**, el nuevo capítulo dedicado a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco no supone cambio respecto a la situación preexistente.

La Ertzaintza dispone de mecanismos de protección social complementarios para los casos de incapacidad temporal motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional, producido en el servicio o como consecuencia del mismo.

Las previsiones de los derechos complementarios en los casos de muerte o incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio, o en el ejercicio de sus funciones, o como consecuencia de la pertenencia del funcionario o funcionaria a los Cuerpos de Policía del País Vasco, no son novedosas en la Ertzaintza, ya que se encuentran en sus respectivas regulaciones reglamentarias.

En cuanto al régimen de concesión de condecoraciones honoríficas; la concesión de medallas al mérito policial en la Ertzaintza no varía respecto a la regulación reglamentaria preexistente. La previsión en el proyecto del ascenso honorífico póstumo o a jubilados carece de efectos económicos.

3.-AFECTACIÓN A LA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.

A lo largo del articulado del anteproyecto de ley se realizan diferentes referencias a las tareas formativas de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en aspectos tales como selección y formación de funcionarios de los cuerpos policiales, cursos de especialización, bolsas de trabajo con personas que hayan superado cursos básicos para abastecer la demanda de las corporaciones locales; formación de agentes de movilidad o de alguaciles.

La relación de actividades encomendadas a la AVPE no es novedosa a tenor de las funciones que ya le encomendaba la ley de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi, y el volumen de trabajo que pudiera implicar no será significativo, atendiendo a las previsiones que en un ejercicio prospectivo pudiéramos realizar.

Cabe mencionar lo ya indicado en relación con el previsible incremento del coste referente a las retribuciones de los futuros ertzainas, durante su tiempo de permanencia en la Academia (9 meses), por la reclasificación del grupo de pertenencia (de C2 a C1), el cual se estima por la Dirección de Presupuestos en 432.000 € anuales.

4.-CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS.

En consecuencia con lo indicado en los apartados anteriores, en cuanto a la repercusión presupuestaria que la entrada en vigor del Anteproyecto de Ley de Quinta Modificación de la Ley de Policía del País Vasco, pudiera generar en los Presupuestos de Gobierno Vasco, en el 2016 y ejercicios futuros, analizada la documentación remitida por los Departamentos de Seguridad y de Administración Pública y Justicia, la Dirección de Presupuestos considera que se derivarán incrementos de costes económicos básicamente por los siguientes conceptos:

1.-Es previsible un incremento de coste referente al cambio de grupo de adscripción de los **ertzainas en prácticas**, que se ha estimado por la Dirección de Presupuestos en 916.000 € anuales.

2.-También se derivarán nuevas necesidades retributivas para compensar el efecto de la regulación de las **modulaciones del servicio activo por razón de la edad**, cuya cuantía no se evalúa por el Departamento de Seguridad, siendo éste un déficit de la Memoria Económica presentada. Únicamente se indica que parte de esas medidas ya se aplican actualmente en la Ertzaintza y su impacto económico está siendo asumido con las dotaciones presupuestarias asignadas al personal de la Ertzaintza.

3.-Podría ser relevante en el futuro la implantación del **complemento de carrera profesional en la Ertzaintza**, una vez regulada la carrera profesional horizontal en el conjunto de la

Administración Pública Vasca. Sin embargo esta situación no es posible de evaluar económicamente pues no existen referencias en las que basarse.

En cualquier caso, los diferentes incrementos de coste de personal derivados de la modificación de la Ley de Policía del País Vasco que se propone, deberán ser asumidos anualmente con las dotaciones económicas asignadas para el Capítulo 1, al Departamento de Seguridad, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadil, las cuales se ajustarán anualmente a las directrices económicas que apruebe el Gobierno.

Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2016

Fdo.: Hernando Lacalle Edeso
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

**KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIARI BURUZKO LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETAREN INGURUKO
LEGEAREN AURREPROIEKTUAREKIN LOTUTA BIDALI DUEN EKONOMIA-
ARAUEN KONTROLAREN TXOSTENA.****-Tramitagune- DNCG_DEC_65484/2015_07**

Ekainaren 30eko 14/1994 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzkoak, ekonomia-arauen kontrola arautzen du III. tituluaren IV. kapituluaren IV. artikuluan. Nahitaezkoa da ekonomia-arauen kontrola egitea; horretarako, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak dagokion txostena egin behar du.

Kontrol horretan sartzen da, ekonomiari eta antolamenduari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko organo ororen eraketa zein ezabaketa fiskalizatzea, bai eta organo horien aldaketak eta berregituraketak ere.

Txosten hau egiteko, xedapen hauek hartu ditugu kontuan: aipatutako araua; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen dituen urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren III. kapituluaren 3. atala; eta Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 192/2013 Dekretuaren 4. artikulua.

TXOSTENA**I. XEDEAK ETA AURREKARIAK**

Txosten honen xedea goiburuan aipatutako proiektuaren ekonomia-arauen kontrola da, bosgarren aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko Polisiari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen aldaketa helburu dena.

EAEko administrazio publikoek Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kidegoen, udal-ikuskatzaileen eta udalerrien mende mugikortasun-agenteen bidez ematen dituzten zerbitzu, prestazio eta jarduketak Euskadiko segurtasun publikoko sisteman sartzen dira, *Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistemaren Antolamenduari buruzko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen baldintzetan (hutsen zuzenketa: 2012/10/16ko EHAA, 201. zk.)*. Arau horren berri eman zuen Bulego honek 2011ko apirilaren 20an.

Gogorarazi behar da Lege horren aurreproiektuaren amaierako testua berriro formulatu zela; hasieran araudi bakarrean segurtasunari buruzko lege integrala antolatzeko sortu zen, Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistema Antolatzeko Legearen aurreproiektua; bertan, Euskal Autonomia Erkidegoko Polisiari buruzko Legearen aldaketa sartu zen, azken xedapen gisa. Aldaketa hori azkenean bereizi egin zen eta aurreproiektu independente baten eduki izan zen, Euskal Autonomia

Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen laugarren aldaketarena. Horren berri ere Bulego honek eman zuen, 2011ko apirilaren 20an, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak eman zuen irizpena (2011ko ekainaren 1eko 130/2011 irizpena); hala ere, aurreproiektu hori indargabetu egin zen parlamentuaren izapidean eta, beraz, ez zen indarrean jarri.

Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistema Antolatzeak ekainaren 28ko 15/2012 Legearen III. tituluak sistema poliziala edo herriarren segurtasuneko sistema segurtasun publikoko sistemaren zati gisa jasotzen du, eta, hori horrela, autonomia-erkidegoko polizia-eredua antolatzen du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren zerbitzuen koordinazio- eta lankidetzak mekanismoak aurreikusten ditu, bai eta horietan jarduera osagariak sartzeko mekanismoak ere, Ertzaintza polizia-kidego autonomikoa, Eusko Jaurlaritzaren mendeko dena, egotea sustatzen duen polizia-ereduarekin, zeinak ereduaren nagusitasuna hartzen duen bere gain polizia orokor eta integral gisa, udalerrien mendeko udaltzaingoei osatuta. Bi kidego-mota horiek osatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia; baterako estatutu-araubide homoginoa dute, alderdibatuetan izan ezik.

Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legea zenbait aldiz aldatu da, eta bereziki Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeak ekainaren 28ko 15/2012 Legearen bidez, lege hartatik segurtasun publiko osoaren alde erkideak bereizi baitzituen, hala nola Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren erregulazioa, udaltzaingoen arteko koordinazioa edo polizia-lankidetzako mekanismoak.

Orain izapidetzen den aldaketa honetan, proiektuaren memoriaren arabera, honako hauei heltzen zaie: kontu eman behar zaien herriarrei zerbitzuak ematearekin lotutako polizia-ereduaren alderdiak indartzen dituzten erreforma partzial batzuei eta polizia-zerbitzuen teilkatzeari gizarte irekiarekin, anitzarekin, elebidunarekin eta eskubide-berdintasuna duten gizonek eta emakumeek osatzen duten gizartearekin.

Aipatutako aurreproiektua X. Legegintzaldirako Jaurlaritzaren Legegintza Programan (2012-2016) sartzeko 2013ko ekainaren 25eko Gobernu Kontseiluak onetsi zuen, eta II. eranskinean, 25 zenbakiarekin, honako lege-ekimen hau aurreikusten da:

25.- Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legea.

a.- Izena: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIARI BURUZKO LEGEA

b.- Proposatzen den erregulazioaren helburua, eta gizarteko zein arlori eragingo dion, halakorik gertatzen bada:

b.1.) Erregulazioaren helburu nagusia:

Euskadiko Poliziari buruzko arautegia gizartearen egungo eta etorkizuneko beharretara egokitzea, proposatzen den polizia-ereduan sakonduz: polizia komunitarioa eta herritarrei zerbitzua emateko hurbila. Horretarako, prozedura azkarrek eman behar zaizkio Ertzaintzari, une eta leku bakoitzean ondo baino hobeto bete ditzan polizia-zerbitzuaren beharrak, betiere haiek bateragarriak izanez gero funtzionarioen eskubideen bermearekin, eta, era berean, mekanismo egokiak aurreikusi behar dira polizia-zerbitzuaren efikazia eta eraginkortasuna zaintzeko, eta Ertzaintzaren jarduera inpartzialki ikuskatzeko legez aurreikusitako kasuetan.

Erreforma horiek eta indarrean dagoen ordenamendu juridikora eta jurisprudentzia berrienera egokitzeko beste beharrezko batzuk egiteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko egungo Legea hainbat aldiz aldatu den testua izateak dakarte arauzko testu bakarrean Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko arauketa jasoko duen lege-testu xedapen berria egitea komenigarria izatea, antolamenduari, jarduketa-printzipioei eta langileen araubide juridikoari dagokienez.

b.2.) Beste helburu batzuk:

- Sartzeko baldintzak lege formal batean erregulatzea. Aukeraketa-organoen inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezializazio-bermeak nahiz emakumeen eta gizonen arteko oreka areagotzea. Eragin positiboko neurriak hartzea, emakumeak polizia-kidegoetan sar daitezen.
- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren egitura erraztea eta, horretarako, Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritzaren figura ezabatzea.
- Barne-sustapeneko prozeduretan parte hartzeko hiru deialdiko muga kentzea. Zerbitzu-eginkizunak betetzen dituztenei eraginkortasunez bete dituzten postu edo zereginiei dagozkien ordainsariak aitortzea.
- Bigarren jardueraren kasuan bezala, eritasunagatik, istripuagatik edo adinagatik fisikoki edo psikikoki eragindako funtzionarioen osasuna babesteko neurriak indartzea.
- Diziplina-araubidea eguneratzea.
- Udaltzainek beren udalerritik kanpo jarduteko aukera ematea, toki-agintariak babesteko; era berean, kidego horien lanbide-egiturari buruzko beste alderdi batzuk eta legezkoak diren beste zeregin batzuetan dihardutenak, hala nola, besteak beste, udal-zaintzaileak eta mugikortasun-agentekak.

b.3.) Eragindako gizarte-sektoreak:

- Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-funtzionarioak.
- Administrazio publikoak Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoekin.

c.- Finantzetan ustez izango duen eragina:

Finantza-eragin mugatua; izan ere, legearen aldaketek ez dakartzate, hasiera batean, arau honen onespeneraren beraren ondorioz egiazta daitezkeen kostuak.

d.- Legebiltzarrerara bidaltzeko, Jaurlaritzaren Kontseiluan gutxi gorabehera noiz aurkeztea aurreikusten den.

2015eko lehen sei hilekoan.

II. ANALISIA

a) Prozedura

Bidalitako agiriak aztertu ondoren, uste dugu bat datorrela urriaren 31ko 464/1995 Dekretuaren 42. artikuluko aurreikuspenekin (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen ditu), eta agiri horiek informazio nahikoa biltzen dutela

bulego honek ekonomia-kontrola egin dezan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 25., 26. eta 27. artikuluen arabera.

Gaur egun arte, aztertzen ari garen aurreproiektuaregiteko prozeduran arrazoiz bete dira Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak eskatutako betekizunak. Dokumentazioan honako hauek daude: ekimena azaltzen duen memoria; proiektua hasteko eta aurretiaz onesteko aginduak; sailaren txosten juridikoa; memoria ekonomikoa; HHABHZren txostena; Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren txostena; Emakunderen txostena; Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren 29/2015 Txostena; informazio publikoko, entzunaldiko, parte-hartzeko eta alegazioetako izapideei buruzko dokumentazioa; izapide-memoria (bertan, aurreztutako alegazioak eta ondorioz jasotako aldaketak nola hartu diren kontuan zehazten da, eta, gainera, arauak ekonomian oro har -lehian eta enpresa txikiak eta ertainean eta administrazio-kargen ikuspuntutik- eta ikuspuntu sozialetik nola eragin duen aztertzen da). Bulego honetara bidalitako espedientean ez da Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren irizpena aurkitu (bere sasoian sartuz orain aldatzen den uztailaren 17ko 4/1002 Legearen aurreproiektuaren espedientearekin). Aztertutako aurreproiektuaren testua bat dator 2016/01/20an espedientean sartutako bertsiorekin.

Adierazi behar da, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenaren ondorioz, aurreproiektuan aldaketak egiten badira, horien berri Bulego honi eman beharko zaiola, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia eta Kontabilitate Kontrolaren ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen azken xedapenetako lehenengoak emandako idazketan).

Gogorarazi behar da, halaber, ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.4 artikulua honako hau ezartzen duela: *"Ekonomia-arauen kontrolak dagokion gaien aginpidea duen Ekonomia eta Ogasun Saileko edozein organok, hala egokitzen bada eta indarrean dauden xedapenen ondorioz, izapidetutako behar dituen txosten guztiak bereganatuko ditu, hitzez hitz, eta jatorria aipatu beharko da".* Aurrekoa oinarri hartuta, txosten honetan, eranskin gisa, proiektutako Legeari Aurrekontuen Zuzendaritzak 2016ko otsailaren 9an eginiko txostera jasotzen da.

b) Edukia

Aurreztutako aurreproiektuak azalpen-zatia du, artikulua bakarra (bertan, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legean

sartutako aldaketak aipatzen dira –66, guztira–), 9xedapen iragankor eta bi azken xedapen.

Planteatzen diren neurri zehatzak honako gai hauei buruzkoak dira: polizia-ereduaren indartzea, hautaketa- eta sarrera-eremuak polizia-kidegoetan emakumeak sartzeko ekintza positiboko neurriak, bane-sustapena, lanbide-karrera eta zuzkidura, administrazio-egoerak, funtzionarioen eskubideak eta betebeharrak, diziplina-araubidea eta udaltzaingoa.

Proiektatutako legeak, gainera (laugarren xedapen iragankorra), sei hilabeteko epean, Ertzaintzaren lanpostuen zerrendaren aldaketa aurreikusten du, superintendente-kategoriarako erreserbatutako postuak egokitzeko. Halaber, Jaurlaritzari 12 hilabeteko epean Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen Testu Bategina onetako baimena aurreikusten du (azken xedapenetako lehenengoa), testu bakarrean bidezko indarrean sartu zenetik izan dituen aldaketak.

Espedientea aztertuta, batetik, ekimenaren ekonomia eta antolamendu-alderdiak aztertu behar dira, eta, bestetik, aztergai dugun proiektuak ogasunaren eta ekonomia- eta finantza-araubidearen alorrean izan ditzakeen ondorioei erreparatu behar diegu, hau da, Euskadiko Ogasun Nagusiari dagozkion gaietan izan dezakeen eraginari. Gai horiek zehaztuta daude Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauetari buruzko Legearen testu bateginean, azaroaren 17ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zenean; zehazki, haren 1.2 artikuluan (*ondarearen erregimena, aurrekontuak egiteko eta kudeatzeko prozedura, Autonomia Erkidegoko ekonomia-jarduerak bete behar duen kontrol- eta kontabilitate-sistema, kontrataziorako erregimena, Euskadiko Diruzaintza Nagusiaren erregimena, tributuak eta bestelako diru-sarrera publiko eta pribatuak arautzea, zorpetzeko erregimena, bermeak emateko erregimena, laguntzak eta diru-laguntzak emateko erregimen orokorra, Autonomia Erkidegoak bere Ogasun Nagusiari dagozkion gaietan dituen eskumenen erregimena, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eskubideekin eta betebeharrekin zerikusia duen beste edozein erregimen*).

C) Antolamendu-eragina

Proiektatutako testua irakurrita ikusten da antolamendu-eragina egon daitekeela, Administrazio honentzat, honako aldaketa hauek:

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legean sartzen diren 6. eta 7. artikuluko berrietan, polizia-kidegoei dagozkien administrazio publikoek ustezko praktika desegokiak kasu esanguratsuen kexak eta inkerketak tratatzeko prozedura eraginkorrak eta inpartzialak ezartzea aurreikustenda, erantzukizunari bide ematen

diotenak eta herritarren eta poliziaren arteko komunikazioan eta ulermenean oinarritzen direnak, eta herritarrek kexak Ekinbideren bidez aurkezteko aukerarekin.

Ekimen hori ez da berria, eremu honetan gaur egun herritarrei arreta emateko dauden zerbitzuei dagokienez. *Ekinbide-Segurtasun publikoaren sistema hobetzeko herritar-ekimenen bulegoaren irailaren 29ko 181/2015 Dekretuaren* bidez, polizia bestelako administrazio-zerbitzua arautzen da; zerbitzu hori segurtasunaren arloan eskumena duen sailari atxikitzen zaio, eta helburu du herritarrei erraztasunak ematea segurtasun publikoko sistemei eta herritarrei ematen zaizkien zerbitzuei buruzko kexa, iruzkin eta iradokizunak egiteko; izan ere, zerbitzu horien kalitatea eta herritarrek horietan duten konfiantza hobetu nahi da. Bestalde, Ertzaintzaren web-orrialdean jakinarazten da Bulego hori arduratzen dela Euskadiko segurtasun publikoaren sistema eta herritarrei emandako zerbitzuak hobetzeko kexak, iruzkinak eta iradokizunak jaso, aztertu eta erantzuteaz, aipatutako zerbitzuetan kalitatea eta konfiantza hobetzeko.

Aurreproiektu honen memoria ekonomikoak egiaztatzen du, horrela, ez dagoela aurrekontu-eraginik kexen tratamenduari dagokionez, hori dagoeneko existitzen den eta zeregin horiek egiten dituen zerbitzu bati esleitzen zaiolako, baina prozedura estandarizatu egiten da eta lege-lerrun formala duen arau batera eramaten da.

Hori guztia kontuan hartuta, ondorioztatu beharko litzateke helburua ez dela zerbitzu horiek zabaltzea, baina bidezkoa izango litzateke zehaztapen gehigarrien bat egitea 8. artikuluko berriak gatazkak ebazteko metodo alternatiboak erabakitzeko eskainiko duen aukeraren inguruan, besteak beste, litartekaritza; azken prozedura horri dagokionez, ez dakigu hori ere ezarrita dagoen edo etorkizunean abian jartzeak administrazio honi baliabideen premia handiagoak ekarriko dizkion.

2. 10. artikuluko berriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jardunbide Egokien Batzordea eratzen da, polizia-erakundeari eta Eusko Jaurlaritzan segurtasunaren arloan eskumena duen sailari dagokionez, autonomia funtzionala duen kide anitzeko organo gisa (dena den, komeni da Batzordearen atxikipen-organoa zehaztea), herritarrek polizia-jarduerari buruzko kontrolen neutraltasunean eta objektibotasunean duten legezatasuna eta konfiantza sendotzeko. Batzorde horrek, halaber, poliziaren jardunbide egokian eragiten duten jokaera eta ezbeharren inguruan aztertzeko eta gomendioak emateko zereginak izango ditu. 11.1 artikuluko eremuetan prestigiodunak diren 6 kidek osatuko dute (horietako bat batzordeburu izango da); 3 kide A sailkapen-taldean dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren eskala eta kategorietakoak diren edo izan diren eta kidegoan gutxienez hamabost urte eman dituzten pertsonen artean izendatuko dira.

11.4 artikuluan ezarrita dagoenez, "Batzordeko kideek ez dutela inolako ordainsaririk jasoko beren lanen truke. Nolanahi ere, zerbitzu-arrazoiengatiko kalte-ordainak kobratu ahal izango dituzte, hala badagoké, administrazio publikoetako enplegatuak izan ezean". Eta 12.4 artikulua aurreikusten du "Batzordearen jarduketak kideek berek egingo dituztela, eta, hala badagokio, ikerketa jakin batzuetarako zerbitzuak emateko funtzionarioen laguntza eskatu ahalko dutela". Kasu horietan, ez dituzte jaso beharko jatorri-destinoko agintariek emandako agindurik.// Era berean, "Batzordeak eskatu ahalko die ikerketa egiteko Ertzaintzaren barne-kontuetarako zerbitzuei, eta batzordeak berak gainbegiratuko du ikerketa hori zuzenean".

Memoria ekonomikoak sortu berri den organoari buruz honako hau dio: "funtzionamenduan jartzeak gastuak sor ditzake; halaeta guztiz ere, kontuan izan behar da ez dela administrazio- edo laguntza-egitura egonkorra eta propioa behar duen organo bat, eta horregatik gastu aurreikusgarriak gehienez ere batzorde horretako kideei ordaindu beharreko dietak izango dira, eta horiek ez daude kronifikazio edo aldizkakotasunari lotuta, arauan aurreikusitako gertakariren bat gertatzen denean bakarrik aktibatzen baita batzordea, hala ofizioz nola administratzaileen eskariz. Beraz, gastua ezin da aurretik kuantifikatu, eta edonola ere ez da esanguratsua izango aurrekontu arduragokionez".

Nolanahi ere, neurriaren aurrekontu mugatua ondorioztatzean, zehatzago adierazi behar zen batzorde berriaren aldetik aurreikus daitezkeen esku-hartze kopuruaren eta izaeraren gainean, besteak beste, gar egun dauden kexa-kopuruan, gorabeheretan edo ikerketa-beharretan oinarrituta. Bestalde, behintzat bidezkoak diren kalte-ordainen estimazioa egin behar zen (administrazioen enplegatu ez diren hirugarrenen kasuan baino ez, 11.4 artikuluan aurreikusten den bezala), bai eta 12.4 artikuluan aurreikusten diren baliabide edo laguntza ere. Izan ere, batzorde berriari zuzenean egotzi ezin baxaizkio ere, kostuak eragin ditzakete tartean diren funtzionarioen zerbitzu-eginkizunen ondoriozkoetan edo Ertzaintzaren barruko gaien zerbitzuen ondoriozkoetan, baldin eta, horren ondorioz, azken horiek zeregin gehiago badituzte eta horrek aurrekontu-gastu handiagoa eragiten badu (langile gehiago edo baliabide material gehiago). Beraz, komeni da memoria alde horri dagokionez osatzea, eta azken alderdi horren balorazioa egitea.

3. Ertzaintzako Batzordearen zereginetako biren baldintzak aldatzen dira (Euskal Autonomia Erkidegoko Ertzaintzari buruzko Legearen 17. artikuluko d) eta i) letretan jasotzen direnak), eta memoria ekonomikoak ez ditu horiek aipatzen; baina Bulego honek ez du aldaketan antolamendu-eragirik eta ekonomia-eraginik antzeman.

4. Euskal Autonomia Erkidegoko Ertzaintzari buruzko Legeari eransten zaion 40. artikulua berriak badirudi beste bi zeregin esleitzen dizkiola Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiari (1. *Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak sustatuko du administrazio eskudunak baliozko ditzala beren mendeko zentroetan jasotzen diren ikasketak. Horretarako, Akademia ahaleginduko da hezkuntzako administrazioaren eskakizunetara egokitzen ikasketa horien izaera eta iraupena eta ikasketa bakoitza egiteko eskatzen diren titulazioak; gainera, hezkuntzako administrazioaren, Unibertsitatearen, Btere Judizialaren eta ikaskuntzarako bereziki lagungarri izan daitezkeen beste erakunde, zentro edo ikastetxeren lankidetzaren lortzea ere sustatuko du.*) 2. *Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak, bertan egiteko eskaintzen dituen ikastaroetan, ikasgai jakin batzuk baliozkotu ahal izango dizkie horiek lehenago gainditu izana egiaztatzen dutenei, erregelamenduz zehazten den eran.*”) Baina benetan ez dio arau aldetik ezer berririk gehitzen organismo horren arauketari; arauketa Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistema Antolatzeako ekainaren 28ko 15/2012 Legeak gokitzen du, eta haren 23.4 artikulua hitzez hitz transkribatu da Euskal Autonomia Erkidegoko Ertzaintzari buruzko Legearen proiektatutako 40.1 artikuluan, eta 23.3.c) artikuluan esleitzen zaio, dagoeneko, Akademiari honako zeregin hau: “*Akademiak ematen dituen ikastaroak gainditu direla edo ikastaroetara bertaatu dela egiaztatzen duten titulu eta diplomak ematea eta horien baliozkotzearen inguruan erabakitzea*”. Baina ez dakiguna da orain xehetasun gehiagoz zehaztu nahi den baliozkotzeko eskumen hori, zehaztuz “*gai batzuei dagokiela, gainditu dituztela egiaztatzen dutenen kasuan, erregelamenduz zehazten den moduan*”; dena den, ezin da pentsatu zeregin hori aurretiko erregelamendua kontuan izangabe bete daitekeenik, lege hark berariaz ez badio ere.

Komeni da proiektatutako legean ez errepikatzea inarrean dagoen beste lege-arau batean araututa dauden edukiak, baldin eta aldetarik egin nahi ez bada, eta, aldetarik egin nahi izanez gero, komeni da berariaz hala egitea, segurtasun juridikorako.

5. 79bis.6 artikulua partaidetza-organo kolegiatuak eratzea aurreikusten du, zeinetan Administrazioak eta langileek ordezkari-kopuru berdina izango baitute lan-arriskuen prebentziorako. Ulertzen da organo horiek dagoeneko, badaudela, memoria ekonomikoan oro har hau esaten denean: “*Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako langileen oinarrizko gizarte-babesari eta osagarriari buruzko kapitulu berriak* [ulertu duguna kontuan hartuta ez dio V. Kapituluari, Osasuna eta Babesa izenekoari, erreferentziarik egiten] ez dakar aldetarik aurretik dagoen benetako egoerari dagokionez, beraz ez dio balioa kentzen Legean sartzeari. Berriak ez direnez, beraz, arau honetan, ez dira espero egongo funtzionamenduaren ondoriozko gastuak baino handiagoak.

Ez da ikusten araututako gaiaren kudeaketarekin lotutako antolamendu-egitura berri gehiago.

d) Ekonomia- eta aurrekontu-eragina

Lehenengo eta behin, proiektatutako arauan EAEko Administrazioari zuzeneko edo zeharkako ekonomia- edo aurrekontu-eragina ekar diezaioketen alderdiak aztertu behar dira. Beraz:

1. 47.bis artikuluko berriak, emakume eta gizonen berdintasunerako neurriak buruzkoak, 2. zenbakian aurreikusten du polizia-kidegoetan emakumeak sustatzeko planak egitea, kidegoan sartzean eta lanbide-karrean emakume eta gizonentzat aukera-berdintasuna bermatzeko. Plan horiek ezarriko dute, dagokien plangintza-aldirako, emakumeen ordezkariak txikiak zuzentzeko eta polizia-eraginkortasuna areagotzeko lortu nahi den polizia-plantillan emakumeen ehunekoa zein izango den, eta berariazko neurriak hartu ahalko dituzte emakumeen alde, izatezko desberdintasunen egoera nabarmenak zuzentzeko, horiek iraun bitartean.

Paraleluki, hurrengo zenbakietan hautaketa-prozesuan aplikatu beharko diren irizpide eta ehunekoak ezartzen ditu, eta, agente eta komisariordearen kategorietan txanda askearen bidez sartzeari dagokionez, gutxienerako jasotzen da, harik eta aurretik aipatutako planak egin arte: *"Oro har, emakumeen aldeko sustapen-plan horiek ezartzen ez diren artean, gutxienerako portzentajea ezingo da izan % 25 baino txikiagoa, betiere 3 plaza baino gehiago deitzen badira"*

Kontuan hartu behar da aipatutako planen onspenean atzerapena egoteak hautaketa-prozesuaren gainean interesa dutenen aukerak ere atzeratuko lituzkeela, aurretik aipatutako gutxienerakoaren gainean tresna berriak aurreikus dezaketen portzentajearen behin-behineko hobekuntzaren kasuan. Beraz, komeni da aipatutako agindua aintzat hartzea, aztergai dugun araua indarrean sartzean, baldin eta arrazoizko epe laburrean eraginkorra izan dadinnahi bada.

Planak egiteak ekar ditzakeen kostuak direla eta, memoria ekonomikoak azaltzen du sustapen-planak egitea nahitaezkoa dela plangintza-jarduera gisa, eta horrek aldizkako administrazio-karga dakarrela, baina Segurtasun Sailean edo berdintasun-unitateak dituzten udaletan lehendik zauden antolaketa-egiturek asimilatze modukoa dela.

Gomendatzekoa da artikuluko horretako 6. paragrafoa aldatzea, honela baitio: *"Aurretik aipatutako emakumeen aldeko lehentasun hori behin-behinean aplikatuko da deialdiaren xedea den kidegoan, eskalan eta kategorian; hain zuzen, kidego, eskala eta kategorian horretan emakume funtzionarioen ehunekoa %33koa edo txikiagoa den bitartean". Hor segurua asko "edo handiagoa" esatea zen asmoa, esaldiaren zer-nolakoa kontuan harturik.*

2. 50.2 artikulua zera ezartzen du: "Toki-erakundeek eskatu ahalko diote Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari, hark aurretik onartzen badu, Udaltzaingoa sartzeko hautaketa-prozeduren deialdia elkarrekin gauzatzeko, bai eta, hala badagokio, aguzilen edo mugikortasun-agoteen kidegoetan sartzeko ere. Eskaera hori eginez gero, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak berak egingo ditu hautaketa-prozedura horiek." (soberan dago amaierako puntu bat). Eta horrek izan dezakeen karga ekonomikoa dela eta, memoriak dio aldeak adostutako prozedura izango dela, eta "ez duela aurrekontu-eragin negatiboa; baliabideak eraginkortasunez arrazionalizatzeko balio du, ez bakarrik eskala-ekonomien ondoriozko aurrezpen errealekin toki-erakundeentzat, baita Akademiarentzat ere; izan ere, horrela, hautaketa-fasea Akademiako nahiezko prestakuntza-fasearekin koordinatu ahalko litzateke eta, gainera, ikastaroak eraginkorrako planifikatuko lirateke, egun beretan bateratuko bailirateke urteko ikasle guztiak udaltzaingoa sartzeko". Badirudi esan nahi duela, sail proposatzailerak balioesten duenaren arabera, baterako prozesu horiek ez dutela gastu handiagorik ekarriko, baizik eta kostuen aurrezpen globala administrazio batentzat eta bestearentzat. Aurrezpen hori ere ez dago baloratuta memoria ekonomikoan, ez eta aurrekontu-partida berezian egotzita ere.

3. Lanpostu bati behin-behinean atxikitzeari dagokionez, 71.3 artikulua idazketa berria ez dirudi gaur egun lehen zenbakianematen denetik asko aldentzen denik; dagoen desberdintasuna da indarrean dagoen arauak "gradu pertsonala"ri buruz diharduela, eta aztergai dugunak "kategoria"zhitza egiten duela. Eta bigarren zenbakia dela eta -osagarri iragankorra ezartzen du behin-behineko atxikipenpostuaren ordainsarien eta amortizatutako jatorrizko postuaren arteko desberdintasunaren ondorioz-, proposamen honetatik desagertzen da. Ez dakigu zer eragin izan dezakeen aldaketa horrek polizia-kidegoen egungo ordainsarien arauketan, izan ere, memoria ekonomikoak ez du berariaz aipatzen; ez dakigu, bestalde, osagarri horri buruzko zenbakia ezabatu izanak aurrekontu-aurrezpena ekarriko duen langileen kapituluaren. Komeni da memoria argitzea eta, hala izanez gero, administrazio honi ekarriko dion gastu txikiago hori ekonomikoki balioestea eta dagozkion finantzaketa-partidetan identifikatzea.

4. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako langile funtzionarioen lanbide-karrera dela eta, 73.ter artikulua berriak ezartzen du segurtasunaren arloan eskumena duen sailak eta udalerriek lanbide-karrerahorizontaleko sistemak ezarri ahalko dituztela, lanbiderako garapen-mailan aurrea egiteko, lanpostuz aldatu behar izan gabe, baina lanbide-karrera horizontaleko modalitateen ezarpenaren eta garapenaren eraginkortasunerako euskal administrazio publiko bakoitzak araudiaren garapena egin beharko du, eta lanbide-karreraren eraginkortasuna, nolahi ere, administrazioen aurrekontu-baliabidean pean dago.

Memoria ekonomikoak ez du balorazio kuantitatiborik egiten osagarri horiek ezartzearen ondorioz egon daitezkeen gehiegizko kostuen inguruan, nahiz eta arau honek ez dituen administrazioak derrigortzen eta ez dituen zehazten haien diru-aurrekontuak (aipatutako memoriak adierazitakoak), baina, legeak aurreikusten badu, ekar ditzakeen aukerak kontuan hartuta, esp~~er~~ da etorkizunean –lehenago edo geroago– neurri hori eraginkortasunez abian jari ahal izateko araudi-garapenari heldu behar izatea. Ondo legoke neurri honek aurrekontuan izan dezakeen eraginaren aurreikuspena egin izana, behintzat administrazio honi dagokionez, eta etorkizuneko aurrekontu-egoeretan lokatu izana. Eta horrela gomendatzen da osatzea memoria ekonomikoa.

Bestalde, 74. artikuluko sailkapen-eskalatik, superintendentearen postua ezabatu da, gaur egun kategoria gorena duena (8. maila).

Hura ezabatzearen ondorio funtzionalak proiektatu~~ko~~ legearen zioen azalpenean bilatu behar dira. Bertan, bi aipamen z~~er~~atzen egiten dira:

“Superintendente-kategoria kentzen da, eta, horrela, Ertzaintzaren erantzukizun goreneko postuak eskuratzea eta betetzea bizkortzen da, lanpostuak betetzeko prozedura arrunten bidez.”

.....

Superintendente-kategoria desagertzen da; hala, eskala eta kategoria horretan sartutako plazen eginkizunak lanpostu jakin batzue~~an~~ bereizten dira, eta hark lanpostu horietara sartzen laguntzen du, betiere lanpostuaren baldintzak lanpostuak betetzeko ohiko sistemen bidez betetzen badira.

Bestalde, laugarren xedapen iragankorrean sei hilab~~ete~~teko epea ematen da Ertzaintzako lanpostuen zerrenda aldatzeko eta desag~~er~~tu den kategoriarako erreserbatutako postuak egokitzeko; gainera, aurre~~er~~kusten da aldaketa hori gauzatu arte postu horiek betetzen dituztenek jarraituko dutela superintendentearen kategoria horri esleitutako ordainsariak jasotzen, gaur egun indarrean dagoen araudiarekin bat etorritz.

Hala ere, iragankortasun horrek ez luke birtualtasunik izango kategoria hori duten pertsonen dagokienez; izan ere, proiektuaren memoria ekonomikoak azaltzen duenez, ez dago bat bera ere: *Superintendente-kategoria kentzeak eragin mugatua du, ez baitago kategoria hori duen funtzionario b~~ak~~ar bat ere. Eskala eta kategoria horien barnean hartutako plazei (orain goragoko k~~at~~egoriako zerbitzu-eginkizunean estalita daude) dagozkien funtzioak goragoko eskalako lanpostu zehatzetan ezartzen dira. Aurrekontu-eragina ez da asko nabatiz~~en~~en lanpostu gutxi direlako (3) eta lanpostu horien ordainsariak, ezabatuko den k~~at~~egoriari lotuta daudenak, destino-osagarriari (kategoria) buruzkoak baitira ~~or~~ilik, eta kategoria hori duen funtzionario bakar bat ez dagoenez, horrek ez du in~~ol~~ako eraginik, eman daitezkeen*

aparteko haborokinak salbu. Funtzio Publikoaren Txostenak, bestalde, zera zehazten du: "Inork ere ez du superintendentearen kategoria. Izan ere, kategoria txikiagoko funtzionarioak betetzen ari dira superintendentearen kategoriari erreserbatutako postuak. Behin aldaketa horiek gauzuta, intendentearen kategoriari dagozkion ordainsariak emango dira."

Bestalde, Ertzaintzari dagokionez, destino-osagarriren zenbatekoak urtero ezarriko dira aurrekontuen legean, gaur egun egiten den bezala (2016ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onesten dituen abenduaren 23ko 9/2015 Legearen 21. artikulua), baina aurrekontuen lege honek ere zehaztu beharko du -74.1.a)bis) artikulua berria- lanbide-karrerako osagarriaren zenbatekoa, alegia, lanbide-garapenaren gradu bakoitzari dagozkion ordainsariak, sailkapen-taldearen arabera. Esan den bezala, azken osagarri hori eraginkorra izateko, aurretik arautu egin beharko da, baina kontuan izan beharko da, dagokion aurrekontua egiteko prozesuan, arauketa hori indarrean sartzen den ekitaldian ekarriko dituen gastuen zenbatespenaren gainean kredituak gordailutzeko beharra; hori guztia, Aurrekontuen Zuzendaritzak emandako jaraibideekin bat etorriz.

5. 79. ter eta 80. artikulua berrietan gizarte-babesosagarriaren mekanismoa eta kondekorazioa eta aitortzea araubideari buruz xedatutakoa dela eta, proiektuaren memoria ekonomikoak zera adierazten du: "Zerbitzu poliziala edo beren funtzioak betetzen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionario izatearen ondorioz gertatzen diren heriotza- edo ezintasun-kasuetan dauden eskubide osagarriaren aurreikuspenak ez dira berriak ez Ertzaintzan ezta udaltzaingoetan ere, kidego horien zerbitzuarengatik kondekorazio-erregimenari buruzko erregelamenduzko erregulazioetan dagoeneko agertzen direlako." Prestazio sozial horiek agente polizialaren merituzko jokabidearen ebaluazioari ez lotzean datza berritasuna.// Antzekoa esan daiteke ohorezko kondekorazioak emateko erregimenari buruz; polizia-lanarengatik domina ematea Ertzaintzaren nahiz udaltzaingoaren kasuan ez da aldatzen, bakoitzaren erregelamenduan ñabardura bereizgarriekin bilduta dagoen aurretiazko erregelamendu-erregulazioarekin alderatuta. Proiektuan zerbitzu-ekintzan hildakoak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ohore gisa igarotzeko aurreikuspenak ez du ondorio ekonomikorik.

Memoriak gizarte-prestazioak polizia-agenteen jokabidearen ebaluaziotik bereiztea dela eta aipatzen duen berritasunari dagokionez, zehaztu beharko litzateke aurreikuspen berri horrek zenbat kasutan izan lezakeen eragina eta zeinek ekarriko lukeen gastu handiagoa, edo, bestela, eskubide horri eragiten dion ebaluazio negatiboko kasurik ez dagoen, kontuan hartuta berritasun horrek, beraz, ez lukeela izango ondorio praktikorik. Ondo legokememoria ekonomikoan argitzea.

6. Langileen administrazio-egoeren arauketan jasotako aldaketak direla eta, VI. kapituluaren behin-behineko eteteari, adinaren arabera modulaturatutako zerbitzu aktiboari eta bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzeari buruzko alderdiak jasotzen dira.

Lehenengo eta behin, zalantzaren bat sortzen da 84. artikuluko 5 zenbaki berriari dagokionez; bertan zehazten da "behin-behineko etetea *behin betiko bilakatzen denean, funtzionarioak ordura arte jasotako itzuli beharko duela*". Izan ere, memoria ekonomikoak ez dio ezer horren inguruan, eta lehenengoz irakurtzean ondorioztatu daiteke aurrezpena izango dela administrazioarentzat, aipaturako itzulpenen ondoriozkoa, dagokion karga ekonomikoarekin etetea egiteko, eta uste da aipaturako memorian agertu beharko litzatekeela, ez bada ez dela aurreproiektu honen benetako berritasuna. Memorian ez denez berariaz aipatzen, hura ere alde horretatik osatu beharko litzateke.

Aipaturako 5 zenbakiak, halaber, zera zehazten du: "*Behin-behineko etetea zehapen irmo bilakatzen ez bada, Administrazioak benetan jasotako hartzekoen eta eskubide guztiak izanez gero jasoko litzatekeen arteko aldea bueltatu beharko dio*". Hori, aurkakorik antzeman ezean, artikuluko bereko 4 zenbakian jasotzen da.

Arauaketa berria dela eta, bai adinaren arabera modulaturatutako zerbitzu aktiboarena, bai bigarren jardueraren egoeraren Funtzio Publikoko Txostenak, 9. zenbakian bi kontuen gaineko analisi xehatua egin du, eta proiektuaren tramitazioaren memorian ere kontuan hartu da (44. orialdetik 47.era). Hemen ekonomia- eta aurrekontu-eragina ondorioztatu daitezkeen alderdiez jardungo dugu, eta:

85. artikuluan, kategoria independente berri gisa, zerbitzu aktiboarena jasotzen da, "adinaren arabera modulaturatutako zerbitzu aktiboarena"; eskakizunak administrazio bakoitzak arautu beharko ditu, aurretik langileen ordezkarietarekin negoziatuta, artikuluko bereko 3 eta 4 zenbakien baldintzen arabera. Egoera berri horrek, interesdunak eskatuta aitortu ahalko denak, indarreko arauetatik "adinagatik bigarren jarduera" azpimota ezabatzeadakar, ofizioz aitortzen dena.

Memoria ekonomikoak ez du horren inguruko aurreikupen kuantitatiborik egiten, izan ere kontuan hartzen du *une honetan ia ezinezkoa dela hurrengo urteetan eragingo diren ondorioen benetako kalkulua egitea*. Horren arrazoi nagusia da, adina dela-eta egokitutako zerbitzuaren modalitatea funtzionarioen eskubidea dela, eta ez obligazioa. Horrenbestez, aukera horiez baliatzea banakako eta borondatezko erabakiaren ondorio izango da, eta ezin da jakin, gutxi gorabehera, zenbatek erabakiko duten eskubide horiek gauzatzea.

Hala ere, aurreikuspenen bat egin liteke, esaterako honako hauek oinarri hartuta: legea garatzeko kontuan hartzen ari den araubidearen zehaztapena, kolektibo hori gehitu dezakeen langile-kopurua, adunagatik bigarren jardueran ari den langile-kopurua, eskari zenbatetsia eta aurreikusitako ordainsariak. Hori guztia, memoria ekonomikoan balorazioaren bat sartzeko, arrazoi ondoriotzatzeko proposamenaren bideragarritasuna, aurrekontuaren alderditik. Bai proiektuaren tramitazio-memoriak Funtzio Publikoko txostenaren erantzunean, bai memoria ekonomikoak aurreikusten dute "datozen urteotan Ertzaintzan gorakada nabarmena egongo dela erretiroetan eta beste baja begetatibobatzuk, eta areagotu egingo dela, ikusi dugun bezala, zerbitzu aktibo modulaturaren igaroko den edo igaro daitekeen langile-kopurua", etorkizunerako datuakurretik estrapolatu ondoren; bertan esanguratsua da 2016rako aurreikusitako gorakada -% 30,5- ZAM eska dezakeen pertsona-kopuruan.

Antzeko gogoeta egin behar da 87. artikuluan aurreikusten den ordainsari-araubidearen gainean, ZAMeko langileak edo bigarrenjardueran dauden langileak aldi baterako lanposturik gabe dauden kasuetarako; horren gainean funtzioko txostenak dio *"Aurreproiektuan arautzen dela pertsona aldi baterako destinorik gabe egoteko aukera; kasu hori indarrean dagoen ararian islatzen da, baina aldaketa bat egiten da, jasotzeko ordainsariei dagokienez. Indarreko legean jasotzen dira, batetik, kategoriari dagozkionak, eta, bestetik, onartuta dauzkan pertsonalak, hiru urtekoak barne. Proposamen berriaren arabera, ordainsariak handiagoak izango lirateke, azken lanpostuaren ordainsariak jasoko lituzkeelako, osagarri espezifikoaren osagarri berezia izan ezik."*

Polizia-zereginak oro har betetzeko ohiko eginkizuneko gutxiegitasun psikofisikoa edukitzeagatik bigarren jardueraren arauketa berria dela eta, bidezkoa da Aurrekontuen Zuzendaritzaren txostenera jotzea; adierazten da bat datorrela gaur egun Ertzaintzan dagoen egoerarekin (lan-baldintzen hitzarmen arautzailea) eta ez du, beraz, aurreikusten ez den aurrekontu-eraginik planteatzen.

105. eta 118. artikuluko berrietan jasotako eskalen arabeko sailkapena dela eta, eta, zehazki, 2.c) zenbakietan xedatutakoa dela eta, memoria ekonomikoak zera dio: *"Sartzeko eskakizunen arauketak dakar probetara auzteko sartu nahi den sailkapen-taldeari dagokion titulazioa izateko beharra, eta hori, oinarritzko eskalaren kasuan, C1 taldea izango da. Hori ez datu bat egungo egoerarekin, izangaiei C2 taldeko titulazioa edukitzea eskatzen baitzaie, eta karrerako funtzionario izendatzen dituztenean administratiboki C1 taldean mugatutako ordainsari-eraginekin bertsailkatzen baitituzte.// Egia esan, aldaketak ez du eraginik izango lege berri hau indarrean jarri baino lehen karrerako funtzionario direnengan (ondorio horietarako bertsailkatuta daudelako eta gainera kidegoan sartzeko jasotako prestakuntzaren eragin akademikoaren konbalidazioa eska dezaketelako), baina*

eragin ekonomikoa izan dezake lege berria indarrean jartzen denetik aurrera sartzen diren promozioetako izangaiei dagokienez.// Gaur egun praktiketako funtzionarioek C2 azpitaldeari dagozkion oinarrizkoak jasotzen dituzte, karrerako funtzionario izendatu ondoren arte C1ean ez zaielako birsailkatzen. Erreformak ekarriko luke praktiketako funtzionarioen ordainsaia handiagoa izango litzatekeela sailkapen-taldeari dagozkion oinarrizko ordainsariekin alderatuta. Eragin ekonomikoa ezin da aldeztu aurretik kuantifikatu, izan ere, Administrazio bakoitzarentzat une bakoitzean deitutako plaza kopuruaren eta praktiketako funtzionario kopuruaren arabera izango baita”.

Ez ditu guztiz zehazten eskura dauden datuen estraprolazioaren ondorioz egin diren kostuen estimazioak (behintzat administrazioari dagokionez), eta ez du egiten finantza-estalduraren eta dagokion aurrekontu-partidan izango duen eraginaren aurreikuspena. Halaber, memoria ekonomikoa alderdi horretan osatu behar da, kontuan hartuta, gai horri dagokionez, Aurrekontuen Zuzendaritzak bere txostenean (eranskin gisa erantsi da) kontzeptu horren gainkosteak ekar dezakeenaren balorazioa egin duela (C2 taldea C1era birsailkatzea), prestakuntza- eta praktika-aldietan oinarrituta; Segurtasun Sailerako urteko kostuan 916.000 euroko gorakada balioesten da.

Eraginpean dauden polizia-kidegoetako langileen estatutu-araubideari buruzko arau berriaren gainerako aurrerapenak direla eta, Gintzio Publikoko txostenean dagoeneko egindako gogoetetara jo behar dugu.

e) Azkenik, 113. artikuluko berria xedatutakoaren aipamen bereziren bat egin behar dugu. Lehenengoan haxe xedatzen da: *“Ikerketa kriminalaren eta polizia judizialaren unitate eta zerbitzuei atxikitako funtzionarioen prestakuntza berezia Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren bidez egingo da, eta, hala badagokio, praktikaldiak jasoko ditu, non Epailtzako eta Zerga Ministerioi kideek ere parte hartu ahalko duten”*. Bigarrenetan, ordea: *“Segurtasunean eskumena duen sailak Ertzaintzaren parte-hartzea sustatuko du ikerketa kimikaleko eta polizia judizialeko jardueren koordinazioari buruzko eskualde, estatu eta nazioarte mailako batzorde eta foro esanguratsuetan”*. Eta ez dakigu prestakuntza- eta sustapen-agindu horiek berriak ote diren bi instantzia horiei dagoeneko dagozkien zereginetan (Akademia eta saila), eta ez da aurreikusten gainkostu gehigaririk bi kontzeptu horietan, Legea sartu ondoren.

Aguazilen prestakuntza dela eta, memoria ekonomikoa zera azaltzen da: *“Udal-aguazilen inguruan, aurreproiektuak beren estatutu juridikoaren gutxienezko arauak planteatzen du, ordura arte ez zegoena, udaltzainenaz bestelakoa. Horrek haien izena, funtzioak, eskakizunak eta prestakuntza bateratzea dakar. Horri lotutako kostu nagusia, prestakuntzarena, Polizia eta Larrialdietako Euskal*

Akademiaren erantzukizuna izango da aurrerantzean. Edonola ere kostu hori ez da esanguratsua, 2015eko ekainaren 30ean Euskadi osoan 64 aguazil besterik ez zeudelako, eta ez da aurreikusten datozen ekitaldiaren antolaketaren eta aurrekontuaren ikuspuntutik onartezina izango den aguazil berrien prestakuntza-eskaria egingo denik". Horrek ez du eragozten, bestalde, haren balorazio ekonomikoa, termino kuantitatiboetan, ez eta finantzaketa-iturrien identifikazioa ere.

Azkenik adierazten du proiektuaren edukitik ez dela antzematen eraginik, administrazio honentzat, diru-sarreraren alderdiari dagokionez, ez eta azaroaren 17ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko ogasun orokorraren printzipio arautzaileen Legearen Testu Bateginaren 1.2 artikuluan identifikatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren beraren gaiekiko bestelako lotura zuzenik ere, administrazio honek bere gain hartu behar dituen aurrekontu-gastuei dagokienez aipatutakoak salbu.

Nolanahi ere, komeni da memoria ekonomikoa aurretikaipatu ditugun eta administrazio honen gastu-aurrekontuetan eragin ekonomikoa izan dezaketen alderdien balorazio kuantitatiboekin osatzea eta, horretarako, erantzungo diren kostuak (behintzat balioespen bidez) edo dagoeneko erantzun direnak zehaztea, bai eta aurrekontu-finantzaketaren partidei dagozkien kostuak ere, arau berria onesteko eskumena duen organoak beharrezkoak diren aurrekari guztiak izateko, batez ere tartean diren administrazioen aurrekontuegoeretan duen eraginari dagokionez.

Azkenik, kontuan hartu beharko da Aurrekontuen Zuzendaritzaren txostenean egiten den gogoeta. Bertan egoki aurreikusten du honakoa: "*proposatzen den Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen aldaketaren ondoriozko langileen kostuen gorakadari Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan Segurtasun Sailari 1. Kapitulurako esleitutako zuzkidura ekonomikoekin erantzun beharko zaio urtero; horiek urtero egokituko dira Jaurlaritzak onesten dituen jarraibide ekonomikoetara*".

Toki Administrazioa

Proposatutako aldaketen eragin ekonomikoa dela eta, ekimena sustatzen duen sailak gai horiek memoria ekonomikoaren h) eta i) atzetan aztertzen ditu, eta zera ondorioztatzen du: "*...lege-proposamenaren eraginaren nobedadea izangolitzateke intendentearen kategoria sortzea hiriburuetan, komisarioarena Barakaldo, Getxo eta Irun udalerrietan, eta komisariordearena Santurtzi, Errenteria, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz, Leioa, Erandio eta Galdakao udalerrietan, bai eta Irunen ere. // Ondorioz, aurreikustekoa da legeak aurreikusitako lasuetan gaur*

egungo kategorietatik gorakoak dituzten buruzagitzako postu berriak sortzeko beharra zehaztea eta, era berean, tarteko kategoria guztiak sortzea; horrek plantillan gorakadak eta kostuek ere gora egitea eko dezake// Hala ere, antzeman daitekeenez, finantza-eragina mugatua da eta ez die eragiten udalerrietako aurrekontu-egonkortasuneko eta finantza-iraunkortasuneko helburuei". Mugikortasun-agenteei dagokienez, zera zehazten du: "Nolanahi ere, aurrekontu-eraginaren analisia egiteko, esan behar da sorrera horren eragina, behintzat langileen kredituei dagokienez, neutroa izan behar dela, SIKLO-k adierazi eta aurreproiektu honek jasotzen duenaren arabera".

Eragina gizartean eta ekonomia orokorrean

Azkenik, memoria ekonomikoak arau berriak enpresa-sektorean eta herritarrentzat dakartzan ondorioez hitz egiten du(ez du eraginik antzematen), eta tramitazio-memoriak ekonomia orokorraren gaineko eragina aztertzen du VI.b) puntuan; bertan ez da eragin esanguratsurik antzematen eskumenaren gainean, ez eta enpresa tiki eta ertainaren gainean ere, eta ezda espero "zuzeneko eragina, administrazio-kargen ikuspuntutik, horien definizio zehatza kontuan hartuta, baina, prozeduren sinplifikazioa eta hobekuntza dakarren neurrian, esaterako Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari dagokionez, hautaketarako etengabeko organo gisa, edo udalerrirarte mekanismo batzuei dagokienez edo udaltzaingoen antolamendu-egitura profesionalen eraketarako malgutasunari eta arrazionaltasunari dagokienez, oro har pentsa daiteke eragin positiboa izango duela administrazio-kargei dagokienez".

Aurrekoa kontuan hartuta, Segurtasun Sailari tostea erantsi zaio, egindako oharrekin, espedientea izapidetzen jarraitzeko.

ERANSKINA

AURREKONTUEN ZUZENDARITZAREN TXOSTENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN ALDAKETAREN LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZKOA

1.- SARRERA.

Apirilaren 9ko 192/2013 Dekretuak, Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, Aurrekontuen Zuzendaritzari esleitutako zereginen artean, honako hau ezartzen du: ekonomia-eduki esanguratsua duten araudi-proposamenen, planen, hitzarmenen eta akordioen inguruan dagozkion txostenak bidaltzea, aurrekontu-eragina ebaluatzeko eta dagozkion egokitzapen-neurriak proposatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia- eta kontabilitate-kontrolari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorritz.

Segurtasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko Legearen Bosgarren Aldaketari buruzko Lege Aurreproiektua aurkeztu du, Ekonomi Kudeaketaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzak 2016ko urtarrilaren 20an egindako memoria ekonomikoarekin batera. Aurrekontuen Zuzendaritzak dokumentazio hori aztertu du, bai eta Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren 2015eko abenduak txostena ere (abenduak 29/2015 Txostena, Euskal Autonomia Erkidegoko Legearen Bosgarren Aldaketari buruzko Lege Aurreproiektuari buruzkoa), etorkizuneko Legean aurreikusitako jarduketek EAEko Administrazioaren aurrekontuetan izan dezaketen eraginari buruzko informazioa emateko.

2.- LEGE-AURREPROIEKTUAREN ALDERDI EKONOMIKOAK.

Lege-aurreproiektuaren testutik eta Funtzio Publikoko eta Ekonomi Kudeaketaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzaren txostenen deskribapenetik honako ebaluazio hau ondorioztatzen da, proposatutako edukia EAEko Administrazio Publikoaren eremuan aplikatuzetik ondoriozta daitekeen ekonomia- eta aurrekontu-ondorioen inguruan.

Azpiarratu behar da araudian egiten den edozein aldaketa memoria ekonomiko batekin osatu behar dela eta, bertan, araudiaren aldaketa horrek ekar dezakeen kuantifikazio ekonomikoaren analisia jaso behar dela. Memoria ekonomiko honetan ez dira kuantifikatzen aldaketen eragin ekonomikoak legean, eta kasuren batean hura egitea ezinezkoa dela adierazten da. Kasu batean –praktiketako agentearen kategoria aldatzeko proposamena–, Aurrekontuen Zuzendaritza honek aldaketa horren kostuaren estimazio orientagarria egin du.

Hautaketa eta sarrera arloko aldaketek –kontuan hartuta gaur egun praktiketako funtzionarioek C2 azpitaldeari dagozkion oinarritzko ordainsariak jasotzen dituztela, ez dituztelako C1ean birsailkatzen karrerako funtzionarioaren izendapenaren osterara arte– ekarriko dute erreformarekin praktiketako funtzionarioen ordainsaria altuagoa izatea, izan ere, zuzenean sartuko lirarteke C1 azpitaldean.

Birsailkapeneko aldaketa horrek langileen kostuan izango du eragina, bai ertzainen Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako (PLEA) prestakuntza-aldian zehar, bai ondoren, Ertzaintzan praktiketako agente gisa dauden lehen 12/15 hileetan.

PLEAn, kontuan hartuta urtero 250 ertzainaren sustapena sortzen dela, kostuaren gorakadak urtean guztira 432.000 € ekar ditzake (1.707 €/ urtean, praktiketako ertzain bakoitzeko, 9 hilabetez, gehi kostu patronala).

Ertzaintzan, praktiketako agenteen C2tik C1erako birsailkapenak, kontuan hartuta urtero 250 ertzainen sustapena egiten dela, kostuan ekar dezakeen gorakada urtean guztira 484.000 € izan daitezke (1434 €/ urtean, praktiketako ertzain bakoitzeko, gehi kostu patronala)

Beraz, Aurrekontuen Zuzendaritzaren estimazioen arabera, Segurtasun Sailari praktiketako agenteak C2tik C1era birsailkatzeak urtero kostuan ekar diezaiokeen gorakada, guztira, 916.000 € izango lirateke.

Barne-sustapenaren, lanbide-karreraren eta postuen zuzkiduraren inguruan, barne-sustapenaren bitartez administrazio-karrera bultzatzera bideratutako neurriek ez dute aurrekontu-eraginik, ezta lanpostuak hornitzeari edota espezialitate-lanpostuak sortu edo zuzkitzeari buruzkoek ere, horiek lehendik existitzen direlako.

Karrera profesional horizontalaren erregulazioak eta hari lotutako *karrera profesionaleko osagarri* bat agertzeak eragina izan dezake. Hala ere, adierazi behar da lege-aurreproiektuan aurkeztu den arauketa bakarrik dela Ertzaintzan horrelako sistemak ezartzeko gaitasuna ematen duena, baina ez du aplikazio-baldintzarik eta aurrekonturik ezartzen. Beraz, aurrekontuan izan lezakeen eraginaren ustezko ebaluazio hipotetikoa ezin da egin.

Garapen profesionaleko osagarria ez da sortu edo arautu euskal funtzio publikoaren legean, baina euskal enplegu publikoari buruzko lege-aurreproiektuak karrera profesional horizontala arautzen du, garapen profesionaleko graduatan aurrera eginez gauzatuko dena. Eusko Jaurlaritzak arautu beharko du garapen profesionala eta zereginaren ebaluazioa, euskal administrazio publikoetarako oinarritzko aplikazio-irizpideekin, horren inguruan Euskadiko Enplegu Publikoko Koordinazio Batzordeak ematen dituen irizpideekin bat etorritik –batzordea aipatutako enplegu publikoari buruzko lege-aurreproiektuan eratu zen–.

Karrera profesionaleko osagarria, beraz, ezin da ebaluatu; izan ere, hura ezartzeko araututa egon beharko du haren aplikazioak euskal administrazio publikoetan, eta ez dago aurreikuspenik egiteko aukera ematen duen parametrorik.

Superintendente-kategoria kentzeak eragin mugatua du, ez baitago kategoria hori duen funtzionario bakar bat ere. Eskala eta kategoria horien barnean hartutako plazei (orain goragoko kategoriako zerbitzu-eginkizunean estalita daude) dagozkien funtzioak goragoko eskalako lanpostu zehatzetan ezartzen dira. Aurrekontu-eragina ez da ia antzematen; izan ere, postu gutxi dira (3), eta postu horietako ordainsariak, ezabatuko den kategoriari lotuta daudenak, destino-osagarriari baino ez dagozkio.

Egoera administratiboei dagokienez, berrikuntzarik garrantzitsuenak dira polizia-jardunari buruzko egokitzapenak, adinaren ondorioz egiten direnak, edo funtzio polizialaren berezko gaitasunak gerora galdu izatearen ondorioz, eta betiere funtzionarioen osasuna babesteko eskubidearekin bat etorrita. Horrela, *“adinaren araberako zerbitzu aktibo modulatu” (ZAM)* arautzen da; zerbitzu aktiboarekin jarraitzean datza, adin gehiagoko agenteentzako zeregin egokiak eginez.

ZAM aitortuta ere, horrek ez du esan nahi, arau gisa, lanpostutik mugiaraziko denik, baizik eta egin beharreko jarduna egokitu egingo dela; batez ere, gaueko txandan lanik ez egiteko aukera ematen da, eta, 59 urtetik aurrera polizia-instalazioetatik kanpo patruilarik ez egiteko aukera.

Segurtasun Sailaren Memoria Ekonomikoak adierazten du ezin dela eragin benetako kalkulua egin ZAMen hurrengo urteetako eragin inguruan, baina aurreikuspenak egiten dira ustez ZAM eska dezakeen pertsona-kopuruaren gainean. Indarrean dagoen araudiak exijitzen du araudiaren edozein aldaketarekin batera, eta are gehiago hark lege-maila badu, aplikazioak ekar ditzakeen eragin ekonomikoen analisia aurkezteko; hori kasu honetan oso garrantzitsua da, izan ere, datozen urteotan, kolektiboaren batez besteko adinaren gorakadak ekar dezake adinaren araberako zerbitzu aktibo modulatuaren egoeraren aplikazio handia, eta horrek Ertzaintzan kostu operatiboak areagotuko lituzke.

Segurtasun Sailaren Memoria Ekonomikoak adierazten duena da adinaren araberako zerbitzu aktibo modulatuak arautzeko neurri batzuk aplikatzen direla dagoeneko Ertzaintzan, 2012ko lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmena sartu zenetik, eta horien eragin ekonomikoa Ertzaintzako langileei esleitutako aurrekontu-zuzkidurek hartzen dute beren gain. Kontuan izan behar da Ertzaintzan absentziak ezin direla ordeztu bitarteko langile funtzionarioen izendapenarekin.

Polizia-zereginak arrunt betetzeko gutxiegitasun psikofisikoagatiko bigarren jardueraren administrazio-egoeraren arauketa berria dela eta, gaur egun Ertzaintzan dagoen egoerarekin bat dator (lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmena) eta ez du planteatzen, beraz, aurreikusi gabeko aurrekontu-eraginik.

Funtzionarioen banako eskubideen araubidean, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako langileen oinarrizko babes sozialari eta osagarriari buruzko kapitulu berriak ez dakar aldaketarik aurretik dagoen egoerari dagokionez.

Lanean edo lanaren ondorioz sortutako gaixotasunak edo laneko istripuak sortutako lesioak edo patologia direla-eta izaten diren aldi baterako ezintasunen kasuetarako, babes sozial osagarriko mekanismoak ditu Ertzaintzak.

Zerbitzu poliziala edo beren funtzioak betetzen edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetako funtzionario izatearen ondorioz gertatzen diren heriotza- edo ezintasun-kasuetan dauden eskubide osagarrien aurreikuspenak ez dira berriak Ertzaintzan, kidego horien zerbitzuarengatiko kondekorazio-erregimenari buruzko erregelamenduzko erregulazioetan dagoeneko agertzen direlako.

Ohorezko kondekorazioak emateko araubidea dela eta, polizia-merituari dominak ematea ez da aldatzen aurretik dagoen araubidezko arauketaren aldean. Proiektuan zerbitzu-ekintzan hildakoak edo erretiroa hartu dutenak goiko kategoriara ohore gisa igarotzeko aurreikuspenak ez du ondorio ekonomikorik.

3.- POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ERAGINPEAN.

Aurreproiektuko artikuluetan ikus daiteke Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren prestakuntza-zereginetara jotzen dela hainbat alderditan, adibidez: polizia-kidegoetako funtzionarioen hautaketa eta prestakuntza; espezializazio-ikastaroak; toki-korporazioen eskaera hornitzeko oinarrizko ikastaroak gainditu dituzten pertsonekin egindako lan-poltsak; mugikortasun-agenteen edo aguazilen prestakuntza.

PLEAri esleitutako jarduerak ez dira berriak, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeke Legeak jadanik esleitzen zizkion zereginak kontuan izanik, eta ekar dezakeen lan-bolumena, aurrera begira egin ditzakegun aurreikuspenak kontuan izanik, ez da esanguratsua izango.

Akademian egon bitartean (9 hilabete) taldearen birsailkapenaren (C2tik C1era) ondorioz etorkizuneko ertzainen ordainsariei buruzko kostuaren gorakadaren inguruan adierazitakoa aipatu behar dugu; Aurrekontuen Zuzendaritzak urteko 432.000 euroan zenbatetsi du.

4.- AURREKONTUEN ZUZENDARITZAREN GOGOETAK.

Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen Bosgarren Aldaketari buruzko Lege Aurreproiektua indarrean sartzeak 2016an Eusko Jaurlaritzako Aurrekontuetan eta etorkizunekoetan ekar dezakeen aurrekontu-eragina dela eta, Segurtasun eta Administrazio Publikoko eta Justiziako sailek emandako dokumentazioa aztertuta, Aurrekontuen Zuzendaritzak uste du kostu ekonomikoen gorakadak izango direla, funtsean, kontzeptu hauengatik:

1.- **Praktiketan dauden ertzainen** atxikipen-taldearen aldaketari dagokion kostuaren gorakada aurreikus daiteke, eta Aurrekontuen Zuzendaritzak urtean 916.000 €-an kalkulatu du.

2.- Halaber, ordainsari-behar berriak ondorioztatuko dira, **adinaren araberako zerbitzu aktiboaren modulazioen** arauketaren eragina konpentsatzeko; zenbatekoa ez du ebaluatzen Segurtasun Sailak, hura aurkeztutako memoria ekonomikoaren defizita izanik. Bakarrik adierazten da neurri horietako batzuk dagoeneko aplikatzen direla gaur egun Ertzaintzan, eta eragin ekonomikoari Ertzaintzako langileei esleitutako aurrekontu-zuzkidurekin ari zaio erantzuten.

3.- Etorkizunean esanguratsua izan daiteke **Ertzaintzan lanbide-karreraren osagarria** ezartzea, euskal administrazio publikoan lanbide-karrera horizontala araututa. Hala ere, egoera hori ezin da ekonomikoki ebaluatu, ez baitago oinarri hartzeko aipamenik.

Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen inguruan proposatzen den aldaketak dakartzan langile aldetiko kostuen gorakadei urtero erantzun behar zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan Segurtasun Sailari 1. kapitulurako esleitutako zuzkidura ekonomikoen bidez; horiek urtero egokituko dira Jaurlaritzak onesten dituen jarraibide ekonomikoetara.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko otsailaren 9a

Sin.: Hernando Lacalle Edeso jauna
AURREKONTUETAKO ZUZENDARIA

XVI

DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI / EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAREN IRIZPENA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**



SRA. CONSEJERA DE SEGURIDAD

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadij en la sesión del día 19 de abril de 2016, con la asistencia de los miembros que al margen se expresan, ha examinado su **consulta**, registrada con el nº 35/2016, relativa al **anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco**. (Ref.: DNCG_LEY_65484/2015_07).

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, el vocal Sr. Zorrozuza Aierbe.

PRESIDENTE:

D. Sabino Torre Díez.

VICEPRESIDENTE:

D. Xabier Unanue Ortega.

VOCALES:

D^a M^a Teresa Astigarraga Goenaga.

D. Luis M^a Eskubi Juaristi.

D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo.

D. Gorka Erlantz Zorrozuza Aierbe.

D. Imanol Zubizarreta Arteché.

D. Ion Gurutz Echave Aranzabal.

D. Iñaki Calonge Crespo.

SECRETARIO:

D. Jesús M^a Alonso Quilchano.

DICTAMEN N° 62/2016

ÍNDICE

ANTECEDENTES	2
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO.....	5
ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO	17
TÍTULO COMPETENCIAL Y MARCO NORMATIVO	21
EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO	24
I Mecanismos de control de la actividad policial	25
II La discriminación positiva en el acceso	26
A) Los empates de puntuación:	26



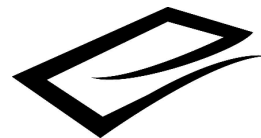
B)	Los antecedentes del precepto:.....	27
C)	La doctrina del Tribunal Constitucional	29
D)	Su aplicación al caso:	32
E)	La doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:	34
F)	El precepto del anteproyecto:.....	37
III	Las medidas en materia de selección	40
IV	La carrera profesional	42
V	Salud y protección	43
VI	Condecoraciones y reconocimientos	43
VII	Segunda actividad.....	44
VIII	Régimen disciplinario.....	46
IX	Los policías locales	50
OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA		51
CONCLUSIÓN		53

ANTECEDENTES

1. Por Orden de 10 de febrero de 2016, de la Consejera de Seguridad, con entrada en la Comisión el mismo día, se somete a dictamen de este órgano el anteproyecto de ley de referencia.
2. Integran el expediente remitido, además del texto del propio anteproyecto:
 - a) Orden de 10-6-2015 de la Consejera de Seguridad, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco.
 - b) Informe jurídico de la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del departamento solicitante, de 8-7-2015.
 - c) Informe de impacto en función de género, de la misma fecha.
 - d) Primera versión del anteproyecto de ley, de 9-7-2015.



- e) Orden de 12 de julio de 2015 de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba con carácter previo el proyecto de Ley.
- f) Memoria explicativa del proyecto, de 12-7-2015.
- g) Publicación en el BOPV de 17-7-2015, de la Resolución del día 13 del mismo mes del Director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales, por el que se acuerda someter a información pública el anteproyecto.
- h) Alegaciones del sindicato ESAN, de 14-7-2015.
- i) Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas de 16-7-2015.
- j) Informe de Emakunde de 24-7-2015.
- k) Informe de organización de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (DACIMA) de 27-7-2015.
- l) Alegaciones de la Asociación de Alguaciles de Euskadi/Euskadiko Alguazilen Elkartea (AAE) de 28-7-2015.
- m) Alegaciones de la Asociación de Municipios Vascos (UDE) de 29-7-2015.
- n) Alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia de 30-7-2015.
- o) Alegaciones del sindicato UGT-EUSKADI, de la misma fecha.
- p) Alegaciones del sindicato ERNE-Ertzainen Nazional Elkartasuna de 4-8-2015.
- q) Alegaciones de EJEPE-EUBE, Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi-Euskadiko Udaltzainburuen Elkartea, de 5-8-2015.
- r) Escrito de Lehendakaritza, en la que se informa de que no tienen alegaciones que realizar, de 10-9-2015.
- s) Escrito del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de 18-9-2015, en el que informan de que no tienen alegaciones que formular.
- t) Escrito del Departamento de Salud de 22-9-2015, en el que informan de que no tienen alegaciones que realizar.



- u) Escrito del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de 29-9-2015, en el que se informa de que no tienen alegaciones que realizar.
- v) Informe del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de 21-10-2015.
- w) Segunda versión del proyecto de 10-11-2015.
- x) Alegaciones del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de 19-11-2015.
- y) Alegaciones del sindicato ELA-Ertzaintza de 10-12-2015.
- z) Nuevas alegaciones del sindicato ERNE-Ertzainen Nazional Elkartasuna, de la misma fecha.
- aa) Alegaciones del sindicato ELA-Udaltzaingoa de 14-12-2015.
- bb) Certificado del Consejo de la Ertzaintza de 14-12-2015.
- cc) Certificación de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de 15-12-2015.
- dd) Informe de la Dirección de Función Pública de 18-12-2015.
- ee) Certificado de la Mesa de Negociación de la Ertzaintza de 21-12-2015.
- ff) Tercera versión del proyecto, de 19-01-2016.
- gg) Memoria económica, 20-01-2016.
- hh) Memoria sobre el procedimiento de redacción del proyecto, de 20-01-2016.
- ii) Informe de control económico-normativo, de la Oficina de Control Económico, de 19-02-2016.
- jj) Informe de la Dirección de Presupuestos, de igual fecha.

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

3. El presente dictamen se emite con el carácter preceptivo que el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, señala para los anteproyectos de ley, cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, siempre que no se encuentren incursos en las excepciones que se contempla, lo que no es el caso.



DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO

4. El texto remitido consta de una exposición de motivos, un artículo único dividido en sesenta y seis apartados, nueve disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
5. La exposición de motivos explica las razones que han aconsejado llevar a cabo la modificación de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco (en adelante LPPV), que constituye la quinta, y recoge en nueve secciones las ideas directrices que han guiado su redacción, las cuales atañen al reforzamiento del modelo policial; a la selección e ingreso de los aspirantes; a la promoción interna, carrera profesional y provisión de puestos de trabajo; a las modulaciones del desempeño de la actividad derivadas de la edad o la insuficiencia sobrevenida de las capacidades para el desempeño de las tareas policiales; la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la policía del País Vasco; modificaciones del régimen disciplinario; modificaciones de la estructura profesional de las policías; y se regulan, finalmente, la figura del alguacil para los municipios que no cuenten con cuerpo de policía local, y los agentes de movilidad para regular la circulación en el casco urbano de gran población.
6. En el apartado uno, el capítulo II del título I se denomina ahora “mecanismos de control de la actividad policial”, y abarca los artículos 6 a 14 de la ley.
7. El artículo 6 prevé la implementación de procedimientos efectivos e imparciales de tratamiento de quejas e investigación de los casos relevantes de supuestas malas prácticas.
8. El artículo 7 establece que la ciudadanía podrá presentar quejas sobre el funcionamiento de los servicios policiales en Ekinbide.
9. El artículo 8 prevé que puedan arbitrarse métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación.
10. El artículo 9 establece que Ekinbide realizará seguimiento de las quejas presentadas individualmente y del conjunto de algunas para analizar la existencia de elementos recurrentes e investigar sus causas.
11. El artículo 10 crea la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco, para reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial, y regular sus funciones, siendo la principal la del estudio de las conductas policiales sobre las que se hayan recibido quejas.



12. El artículo 11 regula la composición de dicha comisión, que se configura como órgano colegiado con autonomía funcional, integrado por quien ostente la presidencia y cinco personas de reconocido prestigio en áreas de la seguridad pública, el derecho, la sociología, la psicología y la ética, nombradas por decreto del Consejo de Gobierno.
13. La mitad de los miembros se nombrará entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a escalas y categorías de la policía del País Vasco, siendo los nombramientos para el desempeño del puesto durante cinco años.
14. El artículo 12 regula los órganos a quienes corresponde ordenar la intervención de la comisión (el titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad y las autoridades municipales), las personas que llevan a cabo las investigaciones (los miembros del órgano, pudiendo recabar el apoyo de funcionarios en comisión de servicios o personal de asuntos internos de la Ertzaintza), debiendo las administraciones implicadas facilitar las investigaciones.
15. El artículo 13 dispone que, finalizado el estudio, la comisión emitirá informe en el que describirá las actuaciones realizadas, la evaluación de la actuación policial y formulará una recomendación para, en su caso, mejorar las carencias observadas.
16. El artículo 14 establece que se dará publicidad a la existencia de la comisión y sus funciones, debiendo esta elaborar una memoria bienal de sus actividades que será remitida al Parlamento Vasco.
17. El apartado dos modifica la redacción de la letra d) del artículo 17, para atribuir al Consejo de la Ertzaintza la función de informar las propuestas de resolución en los expedientes de rehabilitación y en expedientes disciplinarios, cuando se proponga la separación del servicio o cuando se trate de sanciones a representantes sindicales.
18. El apartado tres modifica la redacción de la letra i) del mismo artículo, para atribuir al mismo consejo la función de ser informado periódicamente de la concesión de medallas y de los reconocimientos de ascensos honoríficos al personal de la Ertzaintza.
19. El apartado cuatro adiciona un nuevo párrafo 4º al artículo 27, que regula las funciones que ejerce la policía local, para posibilitar que cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de la corporación puedan actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad.
20. El apartado cinco añade un nuevo párrafo 2º al artículo 28, relativo al código deontológico, para regular que las autoridades y personal de la policía del País Vasco



deben actuar en el marco de la Recomendación del Consejo de Europa relativa al Código europeo de ética de la policía y oponerse a cualquier vulneración del mismo.

21. El apartado seis suprime el párrafo 3º del artículo 30, relativo al trato que la policía del País Vasco ha de observar en sus relaciones con los ciudadanos.
22. El apartado siete adiciona un artículo 30 bis para regular más extensamente el trato que la policía del País Vasco ha de observar en sus relaciones con la ciudadanía.
23. El apartado ocho modifica la redacción del artículo 40, para disponer que la Academia Vasca de Policía y Emergencias promoverá—antes decía “procurará”— la convalidación académica de los estudios que se cursen en centros dependientes de ella, para lo que procurará adecuar a las exigencias de la Administración educativa la naturaleza y duración de dichos estudios.
24. El apartado nueve modifica la redacción del artículo 43, para eliminar el concepto de grado personal e incorporar las especialidades precisas para desarrollar tareas que requieran un determinado nivel de conocimientos específicos en las relaciones de puestos de trabajo de la policía del País Vasco.
25. El apartado diez modifica la letra c) del artículo 47, que regula el contenido de las bases de la convocatoria de los procesos selectivos de la policía del País Vasco, para cambiar la referencia a “programas” por “temario”.
26. El apartado once añade un nuevo párrafo 5º al artículo 47, para disponer que cuando se trate modificaciones del número de vacantes convocadas o de rectificación de errores materiales o de hecho, no será preceptiva la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
27. El apartado doce añade un nuevo artículo 47 bis, para garantizar la aplicación de las previsiones de la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, en los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en los cuerpos policiales, promoviendo la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el servicio público de seguridad.
28. Se elaborarán para ello planes de promoción de las mujeres en los que se establecerá el porcentaje de personas de este género en la plantilla que se ha de alcanzar, previendo la adopción de medidas específicas en favor de su promoción hasta alcanzar los porcentajes establecidos.



29. El apartado trece modifica la redacción del artículo 48 para desarrollar los principios de autonomía funcional, imparcialidad, especialidad y representación equilibrada de hombres y mujeres que deben de cumplir los tribunales de selección de personal de la policía del País Vasco.
30. El apartado catorce da nueva redacción, aunque de similar contenido, al artículo 50. El mismo dispone que el Gobierno Vasco determinará las reglas básicas para el ingreso en las escalas y categorías de los cuerpos de policía dependientes de la Administración local, ajustándose a criterios análogos a los establecidos para la de la Ertzaintza. Prevé también que las entidades locales puedan encomendar a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la realización conjunta de las convocatorias de procedimientos de selección.
31. El apartado quince adiciona un nuevo artículo 55 ~~bi~~ a la sección 3ª del capítulo V del título III, “Ingreso en los cuerpos de policía del País Vasco”, para regular determinadas singularidades en los requisitos para ser admitido a las pruebas selectivas de ingreso por turno libre como funcionarios o funcionarias a los cuerpos de policía del País Vasco, en relación con la legislación general relativa al empleo público.
32. El apartado dieciséis modifica la redacción del párrafo 4º del artículo 56, para eliminar la categoría de Superintendente, que desaparece, en la regulación de la forma de ingreso en las categorías de comisario e intendente
33. El apartado diecisiete modifica la redacción del párrafo 1º del artículo 59, relativo a los requisitos que deben cumplir los aspirantes para concurrir por el turno de promoción interna en las diferentes categorías, para añadir la condición de hallarse en situación de servicio activo la de servicios especiales y reducir el tiempo de servicios efectivos en puesto anterior.
34. El apartado dieciocho modifica el párrafo 3º del artículo 59, para extender la posibilidad de concurrir a las pruebas de ingreso por el turno de promoción interna al personal funcionario en las situaciones de excedencia por cuidado de hijos o hijas o de familiares y excedencia por razón de violencia de género.
35. El apartado diecinueve modifica el párrafo 4º de mismo artículo, para incluir en el cómputo de tiempo de servicios efectivos para la promoción interna el correspondiente al período de prácticas, siempre que el proceso selectivo hubiera sido superado.
36. El apartado veinte modifica el párrafo 1º del artículo 61, que se remitía a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la función pública vasca (LFPV), para



establecer las causas generales de pérdida de la condición de funcionario, para sustituirlo por la referencia a la legislación general aplicable a los empleados de las administraciones públicas vascas.

37. El apartado veintiuno modifica el artículo 62, para establecer que la jubilación del personal funcionario de la policía del País Vasco se produce en los términos previstos en la legislación reguladora del empleo público vasco, con las singularidades que pudiera contemplar la normativa de la seguridad social para la Ertzaintza y las policías locales.
38. El apartado veintidós modifica la redacción de párrafo 2º del artículo 65, para añadir entre los méritos que han de ser objeto de valoración en las convocatorias de provisión de puestos, el nivel de conocimiento de euskera, cuando no constituya requisito.
39. El apartado veintitrés adiciona un nuevo artículo 65 bis, para regular que la cobertura de los puestos de trabajo con requisito de especialidad se llevará a cabo mediante los procedimientos de provisión de puestos previstos entre el personal que disponga de la correspondiente especialidad, estando obligados quienes superen los cursos de especialidad a presentarse al primer procedimiento de provisión y solicitar con carácter preferente las vacantes que requieran la especialidad.
40. El apartado veinticuatro modifica el artículo 66 para suprimir la preferencia para proveer puestos de trabajo de susceptible desempeño por personal en segunda actividad del personal declarado en situación de segunda actividad que estén en situación de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo.
41. El apartado veinticinco modifica la letra d) del párrafo primero del artículo 67, que regula los extremos que han de recoger las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, sea por concurso o libre designación, para especificar los que corresponden en los procedimientos por concurso de méritos.
42. El apartado veintiséis suprime el párrafo 5º del artículo 70, que regula supuestos determinados de remoción de funcionarios que ocupen puestos de susceptible desempeño por personal en situación de segunda actividad.
43. El apartado veintisiete modifica el párrafo 3º del artículo 71, en su primer apartado, para eliminar el concepto de grado personal en la regulación de las retribuciones que percibirá el personal funcionario mientras permanezca en el desempeño provisional de un puesto de trabajo.



44. El apartado veintiocho añade un nuevo capítulo II ~~lis~~ al título III, titulado “Promoción y carrera profesional,” con los artículos 73 bis y 73 ter.
45. El artículo 73 bis regula el concepto de carrera profesional.
46. El artículo 73 ter regula la posibilidad de implantación de la carrera profesional horizontal por las administraciones correspondientes. Esta consistirá en la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. La implantación requerirá necesariamente del correspondiente desarrollo normativo por cada Administración.
47. El apartado veintinueve modifica el párrafo 1º del artículo 74 para modificar la referencia al capítulo VII del título III de la LFPV, por una remisión a la normativa que regula la estructura y régimen retributivo del personal funcionario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).
48. El apartado treinta modifica la letra a) del párrafo 1º del artículo 74 para eliminar el nivel de complemento de destino 8 correspondiente a la categoría de superintendente.
49. El apartado treinta y uno adiciona una nueva letra a) bis al párrafo 1º del artículo 74, para regular el complemento de carrera profesional en la Ertzaintza.
50. El apartado treinta y dos modifica la redacción del párrafo 2º del artículo 78 para añadir que la condición de servicio activo en la Ertzaintza es incompatible con la de reservista en las fuerzas armadas u otros compromisos personales de desempeño de funciones públicas adquiridos al margen del cuerpo policial para situaciones de crisis o emergencia.
51. El apartado treinta y tres modifica el contenido del capítulo V del título III, que ahora regula el acto de servicio, para regular la salud y la protección del personal de la policía del País Vasco.
52. El artículo 79 establece la obligación por parte de las administraciones públicas de velar por las condiciones psicosfísicas del personal policial, debiendo establecer planes de prevención de riesgos laborales.
53. Se añade el artículo 79 bis, que regula la designación y funciones de los delegados de prevención, que deberán llevarse a cabo atendiendo a los principios y criterios recogidos en la Ley estatal 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.



54. Se añade el artículo 79 ter, que regula la obligación de las administraciones públicas de arbitrar mecanismos de protección social complementaria para casos de incapacidad temporal por enfermedad profesional o accidente profesional, fallecimiento y jubilación forzosa por incapacidad del personal público.
55. El apartado treinta y cuatro añade un nuevo capítulo V bis al título III, con la denominación “Condecoraciones y reconocimientos”, modificando el artículo 80 que ahora regulará el régimen de concesión de medallas y ascensos honoríficos.
56. El apartado treinta y cinco modifica el artículo 8, para remitirse, en relación con las situaciones administrativas del personal policial, a lo dispuesto en la normativa general sobre empleo público del País Vasco, y añadir para el citado personal la situación de segunda actividad.
57. El apartado treinta y seis adiciona un nuevo párrafo 5º al artículo 84, para disponer que cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva el funcionario o funcionaria deberá devolver el dinero percibido durante el tiempo de suspensión provisional.
58. El apartado treinta y siete adiciona un nuevo párrafo 6º al artículo 84, que dispone que el tiempo de permanencia en suspensión provisional será tenido en cuenta para el cumplimiento de la suspensión firme.
59. El apartado treinta y ocho modifica la redacción del artículo 85, para regular la modalidad de servicio activo modulado por la edad, como categoría ajena a la segunda actividad. Se quiere establecer una modulación del servicio activo con algunas modificaciones de las condiciones de la prestación.
60. El apartado treinta y nueve modifica el artículo 86 para regular con mayor extensión la situación de segunda actividad.
61. El apartado cuarenta modifica el artículo 87, para disponer que el personal funcionario en servicio activo modulado por la edad o en segunda actividad que permanezca sin destino percibirá las retribuciones básicas de la categoría y aquellas de carácter personal que tuviera reconocidos, así como las retribuciones del último puesto desempeñado, con excepción del componente singular del complemento específico.
62. El apartado cuarenta y uno suprime el artículo 88, que ahora regula aspectos de la situación de segunda actividad.
63. El apartado cuarenta y dos modifica las letras b), d), k) y l) del párrafo 2º del artículo 92, que regula los supuestos de faltas disciplinarias muy graves, siendo la novedad más



relevante la de que añade a los casos de violación del secreto profesional y la falta de colaboración la exigencia de que supongan un grave perjuicio a la labor policial.

64. El apartado cuarenta y tres adiciona dos nuevas letras al párrafo 2 del artículo 92, para integrar en la relación de faltas muy graves los supuestos de acoso sexual, acoso sexista y el acoso laboral, el primero, y las infracciones tipificadas como faltas muy graves en la legislación sobre utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, el segundo.
65. El apartado cuarenta y cuatro modifica el artículo 93 para reducir las sanciones que llevan aparejadas la comisión de faltas.
66. El apartado cuarenta y seis modifica el artículo 94 para añadir a los elementos que se ha de tener en cuenta para determinar la mayor o menor gravedad de las faltas y graduar la sanción, el historial profesional, como circunstancia atenuante. Se elimina la reiteración en las circunstancias agravantes y se prevé que en supuestos de faltas y delitos penales se ha de valorar la cuantía y entidad de la pena impuesta.
67. El apartado cuarenta y seis adiciona un nuevo párrafo 2 bis al artículo 95 para establecer que asisten al expedientado los derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, contar con asesoramiento de un abogado en ejercicio o de un representante sindical o un funcionario o funcionaria del cuerpo policial de su confianza.
68. El apartado cuarenta y siete adiciona un nuevo párrafo 2 ter al artículo 95, para disponer que el expedientado podrá conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento.
69. El apartado cuarenta y ocho modifica el párrafo 5º del artículo 95, para regular el plazo de caducidad del procedimiento sancionador y las causas de interrupción del citado plazo.
70. El apartado cuarenta y nueve modifica el párrafo 2º del artículo 97, para reducir el plazo de prescripción de las faltas muy graves y prolongar el de las faltas leves.
71. El apartado cincuenta modifica el párrafo 3º del artículo 97 para reducir el plazo de prescripción de las sanciones muy graves y aumentar el plazo de las leves.
72. El apartado cincuenta y uno adiciona un nuevo artículo 97 bis para establecer que las sanciones administrativas serán ejecutivas cuando no quepa contra ellas ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo suspenderse cautelarmente la



ejecución si se manifiesta la intención de interponer recurso jurisdiccional, finalizando la suspensión si no se interpone el recurso o si en la interposición del mismo no se solicita la suspensión cautelar de la sanción.

73. El apartado cincuenta y dos adiciona un nuevo artículo 97 ter, para regular la forma de cumplimiento de las sanciones, los supuestos de situaciones administrativas que impidan su cumplimiento, los supuestos de concurrencia de varias sanciones de suspensión de funciones, y la posibilidad de suspender la ejecución de las sanciones.
74. El apartado cincuenta y tres modifica el párrafo 3º del artículo 99, del capítulo relativo a representación y participación en la determinación de las condiciones de trabajo, para eliminar a los funcionarios interinos la condición de electores y elegibles.
75. El apartado cincuenta y cuatro modifica el artículo 105, que regula las escalas y categorías de la estructura profesional de la Ertzaintza, para eliminar de la escala superior la categoría de superintendente y establecer los grupos y subgrupos profesionales en los que se integran las distintas escalas.
76. El apartado cincuenta y cinco da nueva redacción a la sección III del capítulo II del título IV, intitulado “Policía judicial”, comprensivo de los artículos 112, 113, 114 y 115, con un contenido muy similar, para eliminar referencias a concretas disposiciones de la Ley Orgánica del poder judicial (LOPJ), eliminar referencias a uno solo de los géneros y modificar la denominación de unidades de policía judicial por la de unidades de investigación criminal y policía judicial.
77. El apartado cincuenta y seis modifica el artículo 17 relativo a los alguaciles, para establecer sus funciones, que ostentan la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, que los alguaciles no podrán portar armas de fuego y que los puestos correspondientes a este personal serán ocupados por funcionarios o funcionarias de carrera pertenecientes al grupo de clasificación C-2 o equivalente, siéndoles de aplicación el estatuto del funcionario de Administración local, requiriendo su selección criterios semejantes a los previstos para los cuerpos de policía local.
78. El apartado cincuenta y siete modifica el artículo 118 para sustituir las actuales escalas de los cuerpos de policía local por los mismos de la Ertzaintza (superior, ejecutiva, inspección y básica), con las mismas categorías y dentro de estas, los mismos grupos y subgrupos profesionales. Se regula con detalle los requisitos de población y número de personal de los cuerpos de policía local, para la creación de escalas y categorías en los citados cuerpos.



79. El apartado cincuenta y ocho da contenido al artículo 119, antes derogado, para establecer que la jefatura de los cuerpos de policía local corresponderá a la categoría que se encuentre jerárquicamente más arriba.
80. El apartado cincuenta y nueve da contenido al artículo 120, antes derogado, para establecer que para cubrir puestos de trabajo en las policías locales con caracteres de urgencia y temporalidad se podrá actuar según mecanismos de cooperación intermunicipal legalmente previstos para nombrar interinos, pudiendo solicitar que la Ertzaintza cubra determinadas funciones policiales de forma temporal, previéndose que la Academia de Policía y Emergencias pueda formar bolsas de trabajo para el nombramiento de funcionarios y funcionarias interinas en los cuerpos de policía local.
81. El apartado sesenta da contenido al derogado capítulo III del título V con la denominación de “Agentes de movilidad”, el cual contiene únicamente el artículo 121. En él se establece que en municipios de gran población podrá asignarse a parte del personal funcionario para realizar funciones de ordenación, señalización y regulación del tráfico en el casco urbano, personal que tendrá la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones. No podrán portar armas de fuego, siendo su uniformidad diferente a la de los cuerpos de policía local. Para el acceso a las plazas de agentes de movilidad se requerirá la titulación correspondiente al grupo de clasificación C-2 o equivalente.
82. El apartado sesenta y uno adiciona una nueva disposición adicional vigesimosegunda que establece que los funcionarios y funcionarias de la policía del País Vasco que hayan perdido dicha condición por jubilación mantendrán la condición de miembros jubilados del cuerpo, con la categoría que ostentaran en el momento de la jubilación, y podrán vestir el uniforme en actos institucionales y sociales según se regule reglamentariamente.
83. El apartado sesenta y dos adiciona una nueva disposición adicional vigesimotercera que establece que los funcionarios y funcionarias de la policía del País Vasco que se encuentren en situación distinta del servicio activo y quienes se hayan jubilado, que deban acudir a juicio como testigos o peritos por razón de hechos o investigaciones relacionadas con el tiempo en que estuvieron en el servicio activo, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes.
84. El apartado sesenta y tres añade una nueva disposición adicional vigesimocuarta la cual establece que la Academia Vasca de Policía y Emergencias podrá organizar actividades formativas específicas de investigación criminal y policía judicial para policías locales.



85. El apartado sesenta y cuatro suprime las disposiciones adicionales tercera, octava, duodécima en sus apartados primero y tercero, y decimosexta, así como las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima, undécima, y duodécima.
86. El apartado sesenta y cinco dispone que las referencias al “Boletín de la Ertzaintza” contenidas en los artículos 42.2 y 67.1 se sustituirán por la expresión “Boletín Oficial del País Vasco”.
87. El apartado sesenta y seis dispone que todas las referencias de la ley a la “Academia de Policía del País Vasco” se sustituirán por la expresión “Academia Vasca de Policía y Emergencias”, y las referencias al “Departamento de Interior” se sustituirán por “Departamento del Gobierno Vasco competente en seguridad”.
88. La disposición transitoria primera establece que los procesos selectivos y de provisión de puestos actualmente en curso continuarán rigiéndose por la normativa de acuerdo a la cual fueron convocados.
89. La disposición transitoria segunda establece que, en tanto no se desarrollen reglamentariamente los artículos 79 bis y 80, relativos a las prestaciones en caso de fallecimiento y jubilación forzosa con ocasión del servicio y del nuevo régimen de reconocimiento de honoríficos, resultarán de aplicación las previsiones del Decreto 202/2012 de 16 de octubre, regulador del acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza, y del Decreto 27/2010 de 16 de enero, sobre el régimen de condecoraciones y distinciones aplicable a los cuerpos de policía local.
90. La disposición transitoria tercera establece que los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la ley seguirán regulados por las disposiciones anteriores, salvo que las de esta sean más favorables para el expedientado.
91. La disposición transitoria cuarta establece que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se modificará la relación de puestos de trabajo de la Ertzaintza para adaptar los puestos de la misma reservados a la extinta categoría de superintendente a lo dispuesto en la ley.
92. La disposición transitoria quinta establece que el personal de los cuerpos de policía del País Vasco que haya obtenido u obtenga el nombramiento de la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza y de los cuerpos de policía local en procedimientos de ingreso establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se integra a todos



los efectos en las nuevas categorías y grupos de clasificación previstos en esta ley, mediante la acreditación de la equivalencia establecida en la Orden EDU/3497/2011 de 13 de diciembre, por la que se establece la equivalencia de agente de la escala básica de la Ertzaintza y de los cuerpos de policía local de la CAPV al título de técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo.

93. La disposición transitoria sexta regula que en los cuerpos de policía local el personal funcionario con la categoría de intendente queda integrado en la escala superior, y los de categoría de comisario y subcomisario en la escala ejecutiva.
94. Establece también que el personal funcionario de los cuerpos de policía local que hubieren obtenido plaza de nivel A con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de policía del País Vasco y que, en virtud de la disposición adicional tercera, fueron integrados en categorías de nivel inferior a la plaza obtenida, quedará integrado en la escala superior en base al criterio de prelación jerárquica de cada categoría afectada, si estuvieran en posesión de la titulación académica correspondiente a dicha escala, sin que tal integración pueda suponer incremento del gasto público.
95. La disposición transitoria séptima regula que el personal funcionario de los cuerpos de policía local que ocupen puestos de jefatura del cuerpo que deban adaptarse a lo previsto en la ley quedará integrado en la categoría correspondiente al puesto recalificado cuando lleve en el puesto como destino definitivo cinco años, posea el título correspondiente a dicha categoría o los cursos de capacitación previstos en el artículo 59.2 de la ley y supere un curso teórico-práctico de acreditación profesional impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Tal integración no podrá suponer incremento del gasto público.
96. La disposición transitoria octava establece que el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la ley esté desempeñando funciones que la ley configura como de alguaciles podrán seguir desempeñándolos, y podrán participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, siempre que se posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.
97. La disposición transitoria novena establece que los alguaciles que estuvieran prestando servicios al tiempo de crearse el cuerpo de policía local se integrarán en dicho cuerpo mediante la superación de un concurso restringido, con dispensa de los



requisitos de edad y estatura, y la superación del curso que se establezca por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

98. La disposición final primera habilita al Gobierno Vasco para elaborar un texto refundido con las modificaciones incorporadas a la Ley 4/1992, de 17 de julio, de policía del País Vasco, renumerando los artículos, capítulos y disposiciones que fueran necesarias, adecuando las remisiones internas a las leyes, armonizando el lenguaje a las exigencias de lenguaje no sexista, debiendo también regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos. Ello deberá llevarse a cabo en el plazo de doce meses.
99. La disposición final segunda establece que la ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO

100. La Comisión (por todos, dictámenes 39/1999 y 84/2003) viene señalando que, al abordar el examen del procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley en el seno del ejecutivo, tiene en cuenta que “El legislador no ejecuta la Constitución, sino que crea derecho en libertad dentro del marco que ésta ofrece, en tanto que en el ejercicio de la potestad reglamentaria se opera de acuerdo con la Constitución y las Leyes (art. 97 CE)” (entre otras, STC 209/1987, de 22 de diciembre), por lo que, salvo los casos en que la Constitución, el Estatuto de Autonomía (EAPV) o, en ocasiones, las leyes orgánicas prevean algún trámite específico —supuestos ciertamente excepcionales en nuestro ordenamiento—, aquel examen es esencialmente un instrumento para estudiar la racionalidad de la regulación proyectada, esto es, su utilidad (con el concreto contenido propuesto) para alcanzar los objetivos que persigue su dictado.
101. Esta sustancial diferencia con las iniciativas reglamentarias, en lo que ahora importa, introduce en el examen de los procedimientos de elaboración de los anteproyectos de ley por un órgano consultivo como la Comisión una bligada flexibilidad, pues la finalidad de su dictamen se concreta esencialmente en contribuir al acierto de la regulación proyectada, esto es, su racionalidad —entendida como utilidad para alcanzar los objetivos propuestos y la corrección de la regulación en términos de adecuación a la realidad que se pretende regular y, por tanto, modificar, positivamente—. Ahora bien, la diferente intervención consultiva descrita no ha de impedir que, con un ánimo de estricta colaboración con el órgano consultante, se hagan algunas observaciones sobre la elaboración de anteproyecto y de la memoria que lo acompaña en aras a su mejora. Pero, insistimos, tratándose de un anteproyecto de ley, no debe olvidarse que el resultado que arroje la valoración del procedimiento



de elaboración no se adentra en el terreno de la validación jurídica del texto, y en ese sentido no permite fundar objeciones a la constitucionalidad del producto normativo final.

102. Es en sede parlamentaria donde se desenvuelve con plenitud el procedimiento legislativo y, salvo supuestos específicos en los que la CE el EAPV o, en algunos casos, las leyes orgánicas, imponen condiciones a su adopción, la única exigencia que han de cumplir es que se acompañen de los antecedentes necesarios para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre ellos, cuando menos, la memoria general, anejo de financiación e informe de control económico en aquellos proyectos que comporten un gravamen al presupuesto, de nuestro dictamen y de los informes que con arreglo a la legislación sean preceptivos (artículo 57 de la Ley de Gobierno y artículo 132.2 del Reglamento de la Cámara).
103. A estos efectos, contamos con un importante instrumento de referencia como es la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante LPEDG), la cual, sin ignorar las mencionadas circunstancias, pretende orientar la actividad del Gobierno a fin de que procure seguir en la redacción de los proyectos de ley la misma metodología que emplea para elaborar las disposiciones generales. De ese modo, señala su exposición de motivos, se contribuye muy positivamente a facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone.
104. Por ello, abordaremos el examen del expediente, a fin de contrastar si el procedimiento seguido para obtener el texto que se somete a dictamen es conforme a la LPEDG.
105. Se ha dictado la orden de iniciación prevista en el artículo 5, se ha redactado el proyecto de disposición cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 6, y se ha dictado la orden de aprobación prevista en el artículo 7.1, todos ellos de la LPEDG.
106. Ha informado la asesoría jurídica del departamento proponente, analizando el fundamento objetivo de la norma, su adecuación a derecho y la observancia de las directrices de técnica normativa, cumpliéndose con ello lo previsto en el artículo 7.3 LPEDG.
107. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 LPEDG, se ha sometido el proyecto a información pública y se ha dado audiencia a los sindicatos más representativos y



asociaciones profesionales involucradas en el ámbito de la policía del País Vasco (aunque no consta en el expediente, en la memoria se dice que se les ha dado audiencia, lo que parece cierto dado que presentan alegaciones).

108. Se ha dado participación a las siguientes administraciones públicas y asociaciones de municipios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 LPEDG:

- A todos los departamentos del Gobierno Vasco.
- Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
- EUDEL.

109. Se han recibido alegaciones o comunicaciones de los siguientes departamentos, instituciones y agentes sociales:

- Departamentos del Gobierno Vasco: Lehendakaritza; Salud; Medio Ambiente y Política Territorial; Empleo y Políticas Sociales; y Educación, Política Lingüística y Cultura.
- Diputación Foral de Bizkaia.
- EUDEL.
- Sindicatos: ESAN, UGT, ERNE, CCOO y ELA.
- Asociaciones profesionales: Asociación de Alguaciles de Euskadi/Euskadiko Alguazilen Elkarte (AAE), y Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi/Euskadiko Udaltzainburuen Elkarte (AJEPL)

110. En relación con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LPEDG, debe señalarse que se ha elaborado la memoria sobre la tramitación del proyecto, en la que se recogen los antecedentes, trámites llevados a cabo, su resultado y las modificaciones realizadas en el texto del proyecto para adecuarlo a las observaciones y sugerencias admitidas, así como las razones tenidas en cuenta para la no aceptación de otras contenidas en los informes recibidos.

111. En relación con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 10 LPEDG, se ha realizado la memoria relativa a la incidencia económica de la iniciativa, en la que se afirma que la entrada en vigor de la disposición no implica gastos o ingresos presupuestarios directos ni indirectos no contemplados de uno u otro modo en los vigentes



presupuestos generales de la CAPV para el ejercicio 2016, cabiendo extender tal apreciación a las entidades locales afectadas por la norma.

112. La memoria señala también que el proyecto carece de impacto en el sector empresarial o la ciudadanía.
113. Se han recabado los siguientes informes preceptivos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 LPEDG:
 - Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas (art. 2 del Decreto 233/2012, de 6 de noviembre).
 - Se ha realizado la evaluación previa de impacto en función del género previsto en el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres, y ha sido remitido el proyecto a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley, habiendo informado la citada institución.
 - Dirección de Función Pública [art. 6.1.a) LFPV].
 - Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración [artículo 18. c) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, de estructura orgánica del Departamento de Administración Pública y Justicia].
 - Consejo de la Ertzaintza [artículo 17.e) Ley 4/1992 de 17 de julio, de policía del País Vasco].
 - Ha informado la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del País Vasco [artículo 39.4.a) Ley 15/2012, de 28 de junio de ordenación del Sistema de seguridad pública de Euskadi].
 - Informe de organización de la Dirección de Atención a la Ciudadanía y Mejora de la Administración (DACIMA) [artículo 18.c) Decreto 188/2013 de 9 de abril, de estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia].
 - Oficina de Control Económico, para informe de control económico-normativo (título III, capítulo IV de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la hacienda pública vasca).



114. Se ha procedido a la negociación de los aspectos de la ley que afectan a las condiciones de trabajo de la Ertzaintza (artículo 103 LPPV), certificando el secretario de la Mesa de Negociación de la Ertzaintza que el segundo borrador del anteproyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco, ha sido tratado dentro de las sesiones de la mesa de negociación prevista en el artículo 103 de la Ley de policía del País Vasco, celebradas los días 10 de noviembre y 10 de diciembre de 2015, dándose así por cumplido el trámite de negociación previo.

TÍTULO COMPETENCIAL Y MARCO NORMATIVO

115. La Comisión tuvo ocasión de examinar en fase de anteproyecto la Ley 6/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de policía del País Vasco, la Ley 2/2008, de 28 de mayo, de tercera modificación de la Ley de policía del País Vasco, emitiendo los dictámenes 67/2006, 120/2007 y 132/2007, y tuvo también ocasión de examinar el anteproyecto que se denominó de cuarta modificación de la Ley de policía del País Vasco, emitiendo el Dictamen 130/2011, proyecto que no prosperó en el Parlamento debido a su disolución, y que recogía buena parte del contenido del presente proyecto.
116. Por ello, reiteraremos las consideraciones vertidas en tales dictámenes, y diremos que es indudable la competencia autonómica para ordenar la materia objeto del anteproyecto, en virtud de la competencia que el artículo 17 EAPV le atribuye en cuanto al “régimen de la policía autónoma” en actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución (CE).
117. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 EAPV, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/1992 de 17 de julio, de policía del País Vasco (LPPV), que regula el régimen estatutario de los policías del País Vasco, “lo más próximo posible al general de la función pública vasca, sin perjuicio de las necesarias particularidades” (exposición de motivos), declarando su disposición final primera que “los funcionarios de la Ertzaintza y de la Policía local se regirán supletoriamente, en lo que respecta a su régimen estatutario, por la legislación general de la Función Pública Vasca”.
118. Hay que recordar que la exigencia de un estatuto específico y diferenciado con respecto al régimen funcional común viene impuesto por las características singulares de su función, pues el artículo 104.1 CE señala que su misión es la de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, debiendo ser, por mandato del artículo 104.2 CE, una ley orgánica la que determine sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.



119. Mandato que ha cumplido la Ley Orgánica 2/1986, de 3 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad (en adelante, LOFCS), que, en lo que nos interesa, completa el bloque de la constitucionalidad, debiendo repararse en que su disposición final primera excluye su aplicación a la Policía Autónoma del País Vasco salvo las reglas generales y básicas sobre actuación y estatuto que recoge en los artículos 5, 6, 7 y 8, que son respetados por el proyecto que se informa.
120. No es inoportuno añadir que el Auto 375/2004, de 5 de octubre, del Tribunal Constitucional vino a rechazar que pudiera servir de canon de la constitucionalidad del régimen estatutario de la policía de la Generalidad lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE, sin que la normativa básica estatal del régimen estatutario de los funcionarios públicos pueda actuar como parámetro de la validez de la normativa autonómica. Con mayor razón, hay que negar que lo sea para la policía del País Vasco.
121. De forma coherente, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público (EBEP), excluye de su ámbito a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y señala que sus disposiciones sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica (artículo 4).
122. Todo ello significa que la ley autonómica puede establecer las características del estatuto singular que rige en la Ertzaintza, siendo suficiente con seguir las reglas principales u orientativas del artículo 6 LOFCA. Esa libertad de opción no significa obviamente que, en su caso, no existan límites, como los que se derivan de los derechos fundamentales reconocidos por la CE, en particular el de igualdad ante la ley del artículo 14, del que es especificación, en el acceso a la función pública, el derecho reconocido por el artículo 23.2 CE, o la reserva de ley del artículo 103.3 CE que también obliga al legislador autonómico para regular el estatuto de los funcionarios públicos.
123. Esa conclusión no puede hacerse extensiva, sin más, a los funcionarios de la policía local, como hemos dicho en ocasiones precedentes (dictámenes 40/2002, 4/2004 y 130/2011) Dada la importancia que tiene la policía local como elemento del régimen local, no puede excluirse como título para realizar el reparto competencial lo dispuesto en el artículo 149.1.18 CE en relación al artículo 10.4 EAPV.
124. Se funden, en ese caso, dos perspectivas: la relativa a la seguridad pública, en la que convergen las facultades de coordinación de las policías locales, y la relativa al régimen local y, dentro de ella, la correspondiente al régimen de los funcionarios de la Administración local.



125. A partir del reconocimiento por el artículo 25 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), y 17 de la Ley 2/2016 de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi, de competencias en materia de policía ordenación y gestión de la policía local, ordenación del tráfico seguridad vial, estacionamiento de vehículos y colaboración en la seguridad ciudadana, el artículo 51 LOFCS establece distintas formas para ejecutarlas, desde la posibilidad de crear cuerpos de policía propios hasta la de reclutar personal auxiliar de custodia y vigilancia.
126. El artículo 53.3 LOFCS contempla la posibilidad de crear cuerpos de funcionarios que, en municipios de gran población, se dedicarán en exclusiva a labores de regulación de tráfico, subordinados a los funcionarios de los cuerpos de policía local. En cuanto a su régimen estatutario, los funcionarios de los cuerpos que se dediquen a labores de regulación de tráfico no se integrarán en las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque tengan la condición de agentes de la autoridad, estando sometidos a las normas de régimen general de la función pública.
127. A los cuerpos de policía local, por su parte, les serán de aplicación los artículos 5, 6, 7 y 8, de manera afín a todas las demás fuerzas y cuerpos de seguridad (artículo 52 LOFCA), y se reconoce (artículo 39 LOFCA) a las comunidades autónomas una amplia competencia de contenido normativo para: a) establecer las normas-marco a las que habrán de ajustarse los reglamentos de policías locales, de conformidad con lo dispuesto en la LBRL; b) establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos cuerpos de policías locales, en materia de medios técnicos, para aumentar la eficacia y colaboración de estos, de uniformes y de retribuciones; c) fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las policías locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a graduado escolar, y; d) coordinar la formación profesional de las policías locales, mediante la creación de escuelas de formación de mandos y de formación básica
128. Obviamente, esa amplia competencia viene limitada por el reconocimiento de una autonomía municipal para la ordenación complementaria de este tipo de policía (reglamentos municipales de policías locales), así como de las competencias ejecutivas que las corporaciones locales ostentan para la gestión de su personal en los términos de la LBRL.
129. Esa yuxtaposición competencial en materia de seguridad y régimen local está presente en el EBEP, que prevé en su artículo 3.2 que los cuerpos de policía local se rigen también por ese estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto lo establecido para ellos en la LOFCS.



130. Hay que decir, por último, que algunas de las previsiones del EBEP —capítulos II (Derecho a la carrera y a la promoción interna. La evaluación del desempeño), III (derechos retributivos), salvo el artículo 25.2 (trienios de interinos) del título III, y el capítulo III (provisión de puestos de trabajo y movilidad) del título IV— solo tendrán efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de ese estatuto.
131. Hasta la fecha, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la ley anunciada por el EBEP, aunque informada por esta Comisión, no ha sido promulgada, pero ello no impide la reforma de la LPPV, que es la norma que desarrolla las bases que sobre policía local se contienen en la LOFCS y LBRL, si bien, cuando incida en tales aspectos, como en aquellos en los que el EBEP ya es directamente aplicable, tendrá que tomar en consideración sus previsiones, lo que no impide que pueda separarse cuando resulte prevalente la competencia que se ostenta en materia de coordinación de policía local al servicio de la seguridad y sea necesaria para establecer un régimen común en los aspectos cuya homogeneización enuncia la LOFCS.
132. También hay que decir, como última consideración general, que al incidir la reforma sobre la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública- Ekinbide, el Consejo de la Ertzaintza y la Academia Vasca de Policía y Emergencias y crear la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco, también está implicadas las potestades organizativas que a la Comunidad Autónoma reconoce el título competencial contenido en el artículo 10.2 EAPV. Como indicó la STC 50/1999 (FJ 3), la competencia relativa a la libre organización de la propia Administración autonómica es algo inherente a la autonomía, que en tanto que competencia exclusiva tiene como único contenido “la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran las respectivas Administraciones autonómicas o dependen de ellas”.

EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

133. El presente anteproyecto recoge buena parte de las modificaciones que aspiraba llevar a cabo en la LPPV el frustrado proyecto de ley que se denominó de cuarta modificación, el cual, como se ha dicho, no llegó a aprobarse en el Parlamento, y añade un buen número de otras más, habiendo atendido en su redacción las objeciones y sugerencias señaladas en nuestro Dictamen 130/2011.
134. Estamos, como ya dijimos en relación con el anterior proyecto, ante una reforma de calado de la LPPV que afecta a aspectos nucleares del estatuto de los funcionarios policiales del País Vasco, por lo que, al igual que hicimos en nuestro Dictamen 130/2011,



estructuraremos el informe atendiendo a las materias que quedan modificadas por la nueva regulación.

135. Como corresponde al análisis que ha de efectuar la Comisión, además de consideraciones estrictas sobre su acomodación al bloque de constitucionalidad, expondremos aquellas otras atinentes al contenido del anteproyecto que estimamos pueden colaborar en la producción de una norma jurídicamente más depurada.

I MECANISMOS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD POLICIAL

136. Como se ha recogido en el apartado de descripción del proyecto, el apartado uno da contenido a los artículos 6 a 14 que, antes de ser derogados por la Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del Sistema de seguridad pública de Euskadi, regulaban la Academia de Policía del País Vasco y el Centro de Elaboración de Datos para el Servicio Policial.
137. El actual proyecto incluye los artículos anteriores dentro del capítulo II del título I, con la denominación “Mecanismos de control de la actividad policial”, con el objeto de reforzar el modelo policial mediante la implementación de procedimientos efectivos e imparciales de tratamiento de quejas e investigación de casos relevantes de supuestas malas prácticas.
138. El proyecto regula en los artículos 6, 7, 8 y 9 la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora de la seguridad pública —Ekinbide—, destinada a recoger quejas por el funcionamiento de los servicios policiales, que ya venía regulada en el capítulo V del título I de la LPPV—artículo 23—, habiendo sido derogado por la Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del Sistema de seguridad pública del País Vasco, y creada nuevamente por el Decreto 181/2015, de 29 de septiembre.
139. El proyecto, además de incorporar a la ley la citada oficina, crea y regula la Comisión de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14, como órgano colegiado compuesto por personas de reconocido prestigio en diferentes materias relacionadas con la actividad policial, para el estudio de conductas policiales, a fin de recomendar buenas prácticas e identificar patrones de conducta o prácticas recurrentes no acordes con el código deontológico policial.
140. Tales adiciones se enmarcan en las competencias sobre seguridad y auto organización estudiadas en el apartado correspondiente y no presentan problema jurídico alguno.

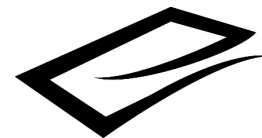


II LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN EL ACCESO

141. Del conjunto de medidas que incorpora el presente proyecto en materia de selección, ocupa un lugar destacado el artículo 47 bis LPPL, cuya adición dispone el apartado doce del artículo único, por ser el que presenta la mayor problemática jurídica.
142. Dicho precepto contiene diferentes mensajes, y se puede decir que los tres primeros apartados no suscitan cuestiones que exijan análisis. El primero recuerda la aplicación de las previsiones contenidas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, (en adelante, LIMH) en los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción, promoviendo la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el servicio público de seguridad. El segundo dispone la posible elaboración de planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el ingreso y la carrera profesional. Estos planes han de fijar para un periodo de planificación el porcentaje de mujeres en la plantilla policial al que se pretenda llegar para corregir la infrarrepresentación de las mujeres e incrementar la eficacia policial, y podrán adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho en tanto estas subsistan, que habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido. El tercero remite a los criterios establecidos en la LIMH para dirimir los empates en la puntuación en el orden de clasificación entre hombres y mujeres.
143. Frente a tales previsiones que tienen un contenido fundamentalmente programático y principal, pues establecen finalidades —promover una presencia equilibrada de hombres y mujeres y garantizar la igualdad de oportunidades— o remisiones a normativa vigente, los apartados 4, 5 y 6 contemplan por el contrario reglas vinculantes directamente aplicables, lo que demanda la realización de un estudio aquilatado porque se proyectan sobre el acceso a un empleo público.

A) Los empates de puntuación:

144. Pese a su enjundia, es obvio que no tiene la misma importancia la regla dispuesta para solventar los empates de puntuación, cuando la misma, además, no es novedosa. Como, según se ha dicho, regula el apartado 3 del artículo 47 bis, serán de aplicación “los criterios previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres”.
145. En el Dictamen 234/2008, entendimos que la medida dispuesta por el artículo 20.4.a) LIMH tenía una vocación transversal que obligaba a la adecuación de las normas que regulan los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción, también en el



ámbito de la policía del País Vasco, a fin de que “en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la representación de estas sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo”.

146. No hace falta, en ese sentido, volver a incidir en la base jurídica que esgrimió la Comisión, en el Dictamen 64/2004, párrafos 110 y ss para la viabilidad jurídica de la medida, encontrándola justificada en las previsiones del Tratado de Ámsterdam, con las modificaciones introducidas en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, las directivas europeas relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y a la promoción profesionales, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída en su interpretación —Sentencias de 17 de octubre de 1995, caso Kalanke, y 11 de noviembre de 1997, caso Marshall—.
147. Asimismo, puede recordarse que entre los artículos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso— artículos 20.4.b), 5, 6 y 7 y disposición final segunda, apartado 2— por considerar que incurrieran en vulneración del derecho de igualdad en el acceso a las funciones públicas conforme a los principios de mérito y capacidad, reconocidos en los artículos 14, 23.2 y 103.3 CE, no figuraba el que ahora se examina—artículo 20.4.a) LIMH—. Falta, por tanto, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia 13/2009, de 19 de enero, porque existía una coincidencia en que no rebasa las exigencias constitucionales.

B) Los antecedentes del precepto:

148. Debemos, en suma, centrarnos, en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 47 bis, pero, antes de desentrañar sus exactos términos, estima la Comisión necesario tomar en consideración resoluciones judiciales e iniciativas legales que lo han precedido.
149. Cabe aventurar que el anteproyecto de ley es el epílogo de las actuaciones emprendidas por el Departamento de Seguridad para corregir la infrarrepresentación de las mujeres en la plantilla de la Ertzaintza, articuladas en las convocatorias de promoción interna para el ascenso a la categoría de suboficial y para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza, anuladas por las Sentencias 335/2010, de 12 de mayo, y 55/2011, de 26 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en las que se establecía



una preferencia automática e incondicional de las mujeres sobre el 50% de las vacantes convocadas.

150. En fundamento de su fallo el tribunal esgrime que la exigencia de regulación por ley de la reserva de plazas a mujeres deriva, de un lado, de la reserva de ley en materia de estatuto de los funcionarios públicos establecida en el artículo 103.3 CE y de otro, en la doctrina del Tribunal Constitucional, que exige una expresa habilitación legal para toda limitación de derechos fundamentales, y concretamente en relación con una convocatoria de pruebas específicas.
151. También parece oportuno señalar que hasta la fecha no existe norma con rango de ley, ni estatal ni autonómica, que haya adoptado una medida de discriminación positiva como la analizada, que se aplica sobre el resultado del proceso selectivo para facilitar el acceso preferente de la mujer a la función pública.
152. En el actual panorama normativo, en el nivel autonómico tenemos el ya comentado artículo 20.4.a) LIMH que se limitó a otorgar prioridad a la mujer en supuestos de igualdad de capacitación, a fin de descartar la utilización de otros criterios para resolver el empate, habitualmente favorables al hombre.
153. La posterior Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), ha incorporado la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 1976, y su modificación por Directiva 2002/73, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 —disposición final cuarta—. Su artículo 5 establece el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo, sin que constituya discriminación en el acceso al empleo público, incluida la formación necesaria, “una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se llevan a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado”. Por su parte, el artículo 11 ampara la adopción por los poderes públicos de acciones positivas a favor de la mujer, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, medidas que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones que “habrán de ser razonables y proporcionadas en relación al objetivo perseguido”.
154. La LOIEMH también dedica su título V al principio de igualdad en el empleo público e incorpora medidas específicas e, incluso, acciones positivas en las actividades de formación (artículo 60) que no alcanzan, sin embargo, al acceso. En el caso de las

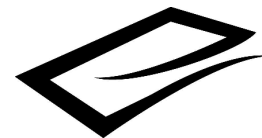


fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la LOIEMH reitera que las normas reguladoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas (artículo 67), y dispone que las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica (artículo 68).

155. Las treinta disposiciones adicionales de la LOIEMH que modifican leyes vigentes para adaptarlas a las exigencias y previsiones derivadas de la ley, incluyen varias leyes que cabe englobar en el marco de la función pública, si que nada dispongan sobre posibles adjudicaciones de plazas en base a un criterio de discriminación positiva, ni tan siquiera sobre la regla para solventar los empujes de puntuación dispuesta por la LIMH. Solamente, el nuevo artículo 17.4 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, añadido por la disposición adicional undécima, dos, LOIEMH, prevé que la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto, podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate.
156. Esta descripción de las previsiones legales en nada cuestiona la capacidad del legislador autonómico para incorporar al ordenamiento autonómico la medida que materializa el proyecto, pero su carácter pionero sí que explica el mayor rigor en la interpretación de los requisitos constitucionales establecidos para la adopción de medidas de discriminación positiva en el ámbito del acceso a las funciones públicas.

C) La doctrina del Tribunal Constitucional

157. La doctrina del Tribunal Constitucional acerca del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE, ampliamente desarrollada en múltiples pronunciamientos, puede sintetizarse en las siguientes ideas:
 - a) No confiere derecho alguno a desempeñar funciones determinadas, ni siquiera el derecho a proponerse como candidato a las mismas, sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas,



con la consiguiente imposibilidad de establecer requisitos para acceder a las mismas que tengan carácter discriminatorio, y otorga un derecho de carácter puramente reaccional para impugnar ante la justicia ordinaria, en último extremo, ante este Tribunal Constitucional toda norma o aplicación concreta de una norma que quiebre la igualdad (SSTC 50/1986, de 23 de abril, F. 4; 148/1986, de 25 de noviembre, F. 9; 193/1987, de 9 de diciembre, F. 5; 200/1991, de 13 de mayo, F. 2; 293/1993, de 18 de octubre, F. 4; 353/1993, de 29 de noviembre, F. 6, por todas).

- b) Entraña una garantía material en el sentido de que las condiciones y requisitos exigidos sean referibles a los principios de mérito y capacidad, pues, aunque la exigencia de que el acceso a la función pública se haga conforme a los mencionados principios figura en el art. 103.3 CE y no en el art. 23.2 CE, la necesaria relación recíproca entre ambos preceptos constitucionales, que una interpretación sistemática no puede desconocer, obliga a considerar lesivos del principio de igualdad todos aquellos que, sin esa referencia, establezcan una diferencia entre españoles (SSTC 50/1986, de 23 de abril, F. 4; 73/1998, de 31 de marzo, F. 3; 138/2000, de 29 de mayo, F. 5).
- c) El derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y empleos públicos no priva al legislador de un amplio margen de libertad en la regulación de las pruebas de selección y en la determinación de los méritos y capacidades que se tomarán en consideración, pero establece límites positivos y negativos a dicha libertad que resultan infranqueables. En positivo, se obliga al legislador a implantar requisitos de acceso que, establecidos en términos de igualdad, respondan única y exclusivamente a los principios de mérito y capacidad (SSTC 27/1991, de 14 de febrero, F. 4; 293/1993, de 18 de octubre, F. 4; y 185/1994, de 20 de junio, F. 3, entre otras); como consecuencia de ello, desde una perspectiva negativa, se proscribire que dicha regulación de las condiciones de acceso se haga en términos concretos e individualizados, que equivalgan a una verdadera y propia acepción de personas (SSTC 269/1994, de 3 de octubre, F. 5; 11/1996, de 29 de enero, F. 4; y 37/2004, de 11 de marzo, F. 4), evitando cuidadosamente cualquier sombra de arbitrariedad, que existe «cuando falta la razón o el sentido de la regulación» (STC 11/1996, de 29 de enero, F. 4).

158. Conforme a lo señalado, el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas admite que el legislador pueda tomar en consideración el sexo de los aspirantes, si se debe a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se llevan a cabo, como dice el artículo 5 LOIEMH. También permite la adopción de medidas de discriminación positiva si estas sirven para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres y son



razonables y proporcionadas en relación al objetivo perseguido, como proclama el artículo 11 LOIEMH.

159. Por tanto, siempre que resulte cauce válido para el logro de la igualdad sustancial prevista por el artículo 9.2 CE no cabe descartar *ad limine* las configuraciones legislativas orientadas a la realización del principio de igualdad reconocido por el artículo 14 CE también en ese ámbito.

160. En palabras de la STC 26/2011, de 14 de marzo:

“la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, en la vida social y jurídica, de la población femenina, singularmente en el ámbito del empleo y de las condiciones laborales, situación que se traduce en dificultades específicas de la mujer para el acceso al trabajo y su promoción dentro del mismo (por todas, SSTC 128/1987, de 16 de julio, F. 5; 19/1989, de 31 de enero, F. 4; 317/1994, de 28 de noviembre, F. 2; 17/2003, de 30 de enero, F. 3; 214/2006, de 3 de julio, F. 2; y 324/2006, de 20 de noviembre, F. 4).

De ahí que hayamos afirmado que la interdicción de la discriminación por razón de sexo implica no sólo la proscripción de aquellos tratamientos peyorativos que se fundan ya en la pura y simple constatación del sexo de la persona, ya en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres (SSTC 173/1994, de 7 de junio, F. 2; 136/1996, de 23 de julio, F. 5; 20/2001, de 29 de enero, F. 4; y 41/2002, de 25 de febrero, F. 3, entre otras muchas), sino también la adopción de medidas que tratan de asegurar la igualdad efectiva de trato y oportunidades de la mujer y del hombre, por lo que las medidas legales que tratan de compensar las desventajas reales que para el acceso al trabajo o la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre no podrían considerarse opuestas al principio de igualdad, sino, al contrario, dirigidas a eliminar situaciones de discriminación existentes, para hacer realidad la efectividad en el disfrute de los derechos exigida por el art. 9.2 CE (SSTC 128/1987, FF. 7 y ss.; 19/1989, F. 4; 28/1992, de 9 de marzo, F. 3; 229/1992, de 14 de diciembre, F. 2; 3/1993, de 14 de enero, F. 3; y 109/1993, de 25 de marzo, F. 5, por todas)”.

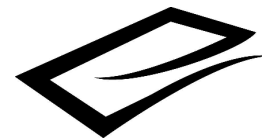


161. Ahora bien, en la medida en que se incide sobre un derecho fundamental como lo es el artículo 23.2 CE y a la vista de la conexión reiterada entre el citado derecho y los principios de mérito y capacidad, la carga sobre la justificación del tratamiento diferenciador se hace especialmente rigurosa cuando se maneja una condición personal, como lo es la del sexo que, en apariencia, no guarda relación directa con tales principios [otro tanto cabe decir de la discapacidad (STC 269/1994) o la edad (STC 75/1983 y 38/2007)].

D) Su aplicación al caso:

162. En cuanto a la justificación, las finalidades de la medida se encuentran debidamente expuestas en el estudio de evaluación de impacto de género y son una combinación de razones conectadas con la propia actividad policial para la que resulta beneficiosa un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en los cuerpos policiales, y con la situación de infrarrepresentación de la mujer en los cuerpos de policía del País Vasco, que tiene tanto un origen histórico, como se deriva de una falta de motivación social derivada de estereotipos falsos sobre la función policial, que la vinculan a rasgos hipotéticamente viriles como el empleo de la fuerza física, sin que se descarten otros factores ambientales.
163. Entre las razones conectadas con la mejora de la función policial, una mayor presencia de la mujer: “a) facilita el cambio de paradigma de la cultura policial interna (es decir, la comprensión de la policía como prestación pública al servicio de la ciudadanía y no como mera fuerza pública); b) permite que ciertos cometidos relacionados con la atención a mujeres puedan realizarse por funcionarias (atención a víctimas de maltrato doméstico o víctimas de violaciones, cacheo de detenidas, etc.) con el fin de evitar situaciones embarazosas para aquellas; c) permite la realización de tareas policiales en las cuales la condición femenina resulte indispensable (por ejemplo en caso de investigaciones policiales en las que el rol femenino sea decisivo para el éxito de la misma).
164. Por otra parte, la infrarrepresentación muestra cifras especialmente elocuentes, según se recoge en la memoria:

“A fecha de 30 de junio de 2015 de una plantilla activa de 7.709 personas en la Ertzaintza el 88,96 % son hombres y el 11,04 %. El porcentaje de presencia de mujeres disminuye a medida que se asciende en la escala de mando, de forma que son hombres el cien por cien de los intendentes, el 94,03 % de los comisarios y el 98,25 % de los subcomisarios. Solo 4 mujeres son comisarias y solo una mujer es



subcomisaria. En el caso de las policías locales de 3.269 personas, 2.875 son hombres y solo 394 son mujeres.”.

165. En la memoria y estudios que acompañan al expediente se efectúa un diagnóstico de la situación de hombres y mujeres en los cuerpos policiales, del cual se deduce que, si bien aparentemente existe una igualdad formal en cuanto a las condiciones de acceso y desempeño de la función policial, en la práctica existe un porcentaje desequilibrado de mujeres en labores policiales (un 12%) que revela la existencia de condicionantes fácticos sobre los que la norma pretende actuar de diversas formas y no solo por razones igualitarias sino por las propias necesidades de la organización policial y la consolidación de un cambio cultural en la organización de la policía comunitaria o de proximidad.
166. La cuestión se traslada a la elección de las medidas para la consecución del objetivo perseguido pues este no legitima cualquier medida de acción positiva. En nuestro ordenamiento, ha de ser susceptible de lograr el fin legítimo previsto —juicio de idoneidad—, ha de ser necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia —juicio de necesidad— y, finalmente, ha de ser ponderada y equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores.
167. La preferencia de la mujer en el acceso facilita, sin duda, su ingreso en los cuerpos de policía del País Vasco, revelándose como una medida eficaz, y, por tanto, idónea para alcanzar el objetivo de un mayor equilibrio de hombres y mujeres.
168. En cuanto a la necesidad, la experiencia empírica demuestra que la aplicación práctica de los procedimientos de ingreso y promoción (requisitos, pruebas, periodos formativos y de prácticas) no parece que sean determinantes de la desigualdad de hecho constatada, ni que desmotiven a las candidatas, ni que obstaculicen su superación. Por el contrario, la normativa establece medidas de acción positiva a favor de las mujeres (requisitos físicos singulares, pruebas específicas, preferencia de la mujer ante igual capacitación, valoración como servicios prestados de determinadas excedencias y permisos,...), que no parecen ser suficientes para fomentar una mayor presencia femenina en los cuerpos policiales del País Vasco.
169. Se ha actuado sobre los requisitos, adecuándolos a sus características físicas, también se ha garantizado que determinadas circunstancias no jueguen en contra de la mujer en la valoración de los méritos e, incluso, se ha medido la incidencia de la regla para la



resolución de los empates, medidas todas ellas que se han revelado inoperantes en orden a alcanzar los objetivos del anteproyecto.

170. Es, en definitiva, el último parámetro para enjuiciarla —si impone un sacrificio razonable al derecho fundamental de igualdad en el acceso a funciones públicas o, por el contrario, este resulta excesivo— el que suscita la cuestión más delicada.
171. Para su examen no contamos con doctrina del Tribunal Constitucional. Sin embargo, podemos acudir a través de la vía del artículo 10.2 CE a la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se ha pronunciado en el ámbito de la Directiva 76/207/CEE.
172. Llegados a este punto del dictamen resulta oportuno advertir sobre las dificultades que encierra extraer de sus sentencias una doctrina —expuesta habitualmente de forma ardua y en la que la regla general se acompaña de distintas salvedades— que trascienda el caso concreto y permita llegar a conclusiones inequívocas sobre una medida todavía inexplorada como la que se analiza, pues no hay que olvidar que el principio de igualdad —sustento y base del derecho de igualdad en el acceso— es fundamentalmente relacional —exige un término de comparación adecuado— y dinámico —acorde con un Estado social y democrático de derecho—.

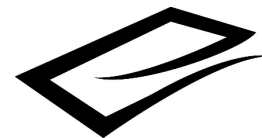
E) La doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

173. La jurisprudencia posterior a las Sentencias Kalanke (TSJCE 1995, 172) y Marshall (TSJCE 1997, 236) —citadas en el Dictamen 64/2004— se ha enriquecido con nuevas sentencias sobre la igualdad de trato, cuando ya había entrado en vigor el Tratado de Ámsterdam y el artículo 141 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en particular los casos Badeck (TJCE 2000, 256), Abrahamsson (TJCE 2000, 166), Lommers (TJCE 2002, 106) y Serge Briheche (TSCE 2004/279).
174. Según la Sentencia Kalanke, la directiva autoriza medidas nacionales en el ámbito del acceso al empleo, incluida la promoción, que, favoreciendo especialmente a las mujeres, están destinadas a mejorar su capacidad de competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de igualdad con los hombres. Ahora bien, una normativa nacional que garantiza la preferencia absoluta e incondicional de las mujeres en un nombramiento o promoción va más allá de una medida de fomento de la igualdad de trato y sobrepasa los límites de la excepción establecida en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva. Además, un sistema de dicha naturaleza, en la medida en que pretende establecer una igualdad de representación de la mujer en relación con el hombre en todos los grados y niveles de un servicio, sustituye la promoción de la igualdad de oportunidades contemplada en el apartado 4 del artículo



2 por su resultado que sólo podría alcanzarse a través de la aplicación de dicha igualdad de oportunidades.

175. La Sentencia Marshall introdujo una cierta modulación y aceptó que el apartado 4 del artículo 2 de la directiva admite una norma nacional conforme a la cual, en caso de promoción, las mujeres que presenten igual capacitación que los candidatos de sexo masculino (desde el punto de vista de la aptitud, competencia y prestaciones profesionales) tienen derecho, sin perjuicio de la cláusula de apertura (si concurren motivos que inclinan la balanza a favor del candidato masculino), a un trato preferente en los sectores en los que están infrarrepresentadas. Tal norma puede servir de contrapeso a los efectos perjudiciales para las mujeres derivados de determinadas actitudes y comportamientos (tendencia a promover en el caso de empate a los candidatos masculinos debido, particularmente, a determinados prejuicios e ideas estereotipadas sobre el papel y las capacidades de la mujer en la vida activa, y al temor, por ejemplo, a que las mujeres interrumpan más frecuentemente su carrera) y a reducir, de esa forma, las desigualdades de hecho que pudieran existir en la realidad de la vida social.
176. La Sentencia Badeck asume igualmente que en los sectores de la función pública en que las mujeres están infrarrepresentadas, en caso de igualdad de cualificación entre candidatos de distinto sexo, se otorgue preferencia a las candidatas femeninas siempre que sea necesario para la consecución de los objetivos del plan de promoción de la mujer, salvo que se oponga a ello un motivo de rango jurídico superior (cláusula de apertura), a condición de que dicha normativa garantice que las candidaturas son objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos (en la que es legítimo tener en cuenta determinados criterios positivos y negativos que, aunque estén formulados en términos neutros en cuanto al sexo, favorecen en general a las mujeres).
177. La Sentencia Abrahamsson ofrece también parámetros relevantes, ya que, según el Tribunal, se opone a la directiva (i) una normativa nacional según la cual un candidato a un empleo en la función pública perteneciente al sexo infrarrepresentado, con capacitación suficiente para dicho empleo, debe ser seleccionado con preferencia a un candidato del sexo opuesto que, en caso contrario, habría sido designado, cuando esta medida fuere necesaria para seleccionar al candidato del sexo infrarrepresentado y cuando la diferencia entre los respectivos méritos de los candidatos no sea tan considerable como para vulnerar la exigencia de objetividad en la provisión de los puestos, (ii) incluso en el supuesto de que únicamente se aplique, bien a los procedimientos destinados a la provisión de un número previamente limitado de puestos, o bien a los puestos que se crean en el marco de un programa específico de

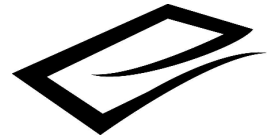


una escuela superior concreta que permite la aplicación de medidas de discriminación positiva, (iii) o dependa del nivel del puesto que se deba proveer.

178. Por el contrario, la directiva no veda una práctica jurisprudencial nacional, según la cual, a un candidato perteneciente al sexo infrarrepresentado puede concedérsele la preferencia frente a un competidor del sexo opuesto siempre que los candidatos posean méritos equivalentes o sensiblemente equivalentes y cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos.
179. La Sentencia Lommers, en la que se enjuicia el caso tal vez más alejado —una reserva de plazas de guardería a las trabajadoras de una Administración—, parece marcar los límites que no cabe traspasar. La medida “se inserta en el marco de un concepto restringido de igualdad de oportunidades, en la medida en que lo que se reserva a las mujeres no son puestos de trabajo, sino el disfrute de ciertas condiciones de trabajo destinadas a facilitar la continuación y el progreso en su carrera profesional, pertenece, en principio, a la categoría de aquellas que tienden a eliminar las causas de que las mujeres tengan menos oportunidades de acceder a un empleo y de desarrollar una carrera profesional y que tienen la finalidad de mejorar la capacidad de la mujer para competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de igualdad con los hombres”.
180. Por último, la Sentencia Serge Briheche, resulta interesante por su vocación recopilatoria:

“23. Una acción encaminada a promover prioritariamente a las candidatas en los sectores de la función pública debe considerarse compatible con el Derecho comunitario cuando no conceda de modo automático una preferencia incondicional a las candidatas que tengan una cualificación igual a la de sus competidores masculinos y cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos (véase, en este sentido, la Sentencia de 28 de marzo 2000 [TJCE 2000, 56], Badeck y otros, C-158/97, Rec. pg. I-1875, apartado 23).

24. Estos requisitos se basan en el hecho de que, al determinar el alcance de cualquier excepción a un derecho fundamental, como el de igualdad de trato entre hombres y mujeres consagrado por la Directiva, es necesario respetar el principio de proporcionalidad que exige que las excepciones no sobrepasen los límites de lo adecuado y necesario para conseguir el objetivo propuesto y exige conciliar, en la



medida de lo posible, el principio de igualdad de trato con las exigencias del objetivo perseguido de este modo (Sentencia Lommers [TJCE 2002, 106] , antes citada, apartado 39).

25. El artículo 2, apartado 4, de la Directiva autoriza, por tanto, medidas nacionales en el ámbito del acceso al empleo que, favoreciendo especialmente a las mujeres, están destinadas a mejorar su capacidad de competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de igualdad con los hombres. El objetivo de dicha disposición es lograr una igualdad sustancial, no meramente formal al reducir las desigualdades de hecho que pueden surgir en la vida social y, de este modo, evitar o compensar, conforme al artículo 141 CE (RUL 1999, 1205 ter y LCEur 1997, 3695), apartado 4, las desventajas en la carrera profesional de las personas afectadas (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1995 [TJCE 1995, 172], Kalanke, C-450/93, Rec. pg. I-3051, apartado 19, y de 6 de julio de 2000 [TJCE 2000, 166], Abrahamsson y Anderson, C-407/98, Rec. pg. I-5539, apartado 48)”.

F) El precepto del anteproyecto:

181. Una vez delimitados los aspectos que es preciso tomar en consideración para examinar los apartados 4, 5 y 6 del artículo 47 bis resulta conveniente reproducir su tenor literal:

“4. En los procedimientos selectivos de ingreso porturno libre en las categorías de agente y subcomisario se determinará el número de plazas que deberían cubrirse con mujeres para cumplir con el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en el servicio público de seguridad conforme a lo previsto en el plan de promoción.

Dicho número de plazas será proporcional a los objetivos perseguidos, no pudiendo ser superior al 40% de las plazas convocadas, ni inferior al porcentaje que se establezca razonablemente atendiendo a los planes de promoción de las mujeres y a los datos estadísticos históricos sobre el porcentaje de mujeres que concurren y superan los procesos selectivos.



Como regla general, en tanto no se elaboren tales planes de promoción de las mujeres, el porcentaje mínimo no podrá ser inferior al 25% siempre que se convoquen más de 3 plazas.

5. En los procedimientos selectivos a que se refiere el apartado anterior la adjudicación de las vacantes convocadas se realizará siguiendo una única lista final de los aspirantes atendiendo al orden de puntuación obtenida y a los criterios de desempate legalmente existentes.

Cuando el objetivo del porcentaje a que se refiere el apartado anterior no se alcanzase atendiendo a lo dispuesto en el párrafo precedente, se dará preferencia a las candidatas mujeres sobre los candidatos hombres hasta cumplir el objetivo perseguido siempre que:

- a) Exista una equivalencia de capacitación determinada por la superación de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición del sistema electivo,
- b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por aplicación de esta tenga un diferencial de puntuación en las fases de oposición y, en su caso, de concurso, dependiendo del sistema selectivo, inferior [sic] al quince por ciento frente a los candidatos hombres que se vieran preteridos.
- c) No concurren en el otro candidato motivos legalmente previstos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo.

6. La preferencia a que se refiere el apartado anterior sólo será de aplicación en tanto no exista en el cuerpo, escala y categoría a que se refiera la convocatoria del proceso selectivo una presencia igual o inferior al 3% (sic) de funcionarias mujeres. "

182. Del precepto derivan las siguientes características del modelo que incorpora el anteproyecto:

- a) Resulta de aplicación en la Ertzaintza y en los cuerpos de policía local.
- b) Se otorga una preferencia a la mujer frente al hombre pero condicionada a que (i) no concurren en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón



de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo; (ii) exista equivalencia de capacitación, entendida como la superación de las pruebas y ejercicios de la oposición o concurso; (ii) obtenga una puntuación en la que el diferencial frente al candidato masculino no sea “inferior” (habrá que entender “superior”) al quince por ciento en la puntuación de la fase de oposición o concurso, según el sistema selectivo.

- c) El número de plazas con la preferencia es flexible, debiendo ser proporcional a los objetivos perseguidos en el plan de promoción y justificarse la razonabilidad de la medida atendiendo a los datos estadísticos históricos sobre el porcentaje de mujeres que concurren y superan los procesos selectivos, no pudiendo ser superior al 40% de las plazas convocadas.
 - d) La preferencia es temporal, mientras en el cuerpo, escala y categoría a que se refiera la convocatoria del proceso selectivo las mujeres tengan una presencia igual o inferior al 33% (hay que entender que es lo que quiere decir el párrafo 6 del artículo 47 bis).
183. La utilización de un instrumento de rango legal otorga un margen de actuación muy amplio ya que, como hemos dicho en numerosas ocasiones, el legislador no es mero ejecutor de las previsiones de la CE y el EAPV, sino que goza de la llamada libertad de configuración que le permite crear derecho en libertad dentro de un amplio margen de opciones políticas, pero esa libertad no está carente de límites (en este caso, constitucionales y del derecho comunitario).
184. Asimismo, como hemos señalado, el sexo puede ser utilizado como criterio de diferenciación jurídica, pero el juicio de legitimidad constitucional impone un canon más estricto, un mayor rigor en las exigencias materiales de proporcionalidad, si incide sobre derechos o libertades de terceros que, además, son de carácter fundamental.
185. Por último, cuando se actúa sobre derechos fundamentales, la redacción de la norma debe buscar la seguridad jurídica y la certeza del derecho, sin que su ambigüedad pueda dar lugar a distintas interpretaciones y, *a fortiori*, inicuas aplicaciones de su enunciado.
186. Como es fácil comprender (y corrobora la lectura de la doctrina constitucional y comunitaria), el juicio sobre medidas legales que establecen medidas de discriminación positiva por razón del sexo es complejo y debe estar presidido por la cautela y la medida que impone el análisis de proporcionalidad.



187. En el análisis del precepto, el elemento clave sobre el que gira la medida lo constituye, sin duda, la preferencia cuando exista una diferencia menor al 15% en la puntuación.
188. Pese a la aparente rigidez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), en sus sentencias no existe una proscripción absoluta a la posibilidad de otorgar preferencia al candidato infrarrepresentado frente a un competidor del sexo opuesto; lo relevante son los condicionantes que debe reunir la medida para que sea acorde con el principio de proporcionalidad. En concreto, la Sentencia Abrahamsson exige que los candidatos posean méritos equivalentes o sensiblemente equivalentes. Esa acotación, en la que el Tribunal emplea una conjunción disyuntiva —la preferencia no se condiciona en exclusiva a la equivalencia—, daría amparo a una preferencia que opera cuando se produzca una diferencia exigua—para colmar el concepto sensiblemente equivalentes—.
189. En ese contexto, el 15% podría responder, parafraseando al Consejo de Estado, a la moderación objetiva y razonable del principio meritocrático que acepta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que exige, en todo caso, la idoneidad o capacidad para el puesto a ejercer pero relativizando de algún modo el mérito, al integrar en él, por así decirlo, la pertenencia al grupo perjudicado, superando, así, un planteamiento puramente individualista de la tutela antidiscriminatoria y recuperando la dimensión colectiva de la discriminación (Dictamen de 22 de junio de 2006).

III LAS MEDIDAS EN MATERIA DE SELECCIÓN

190. Las modificaciones en materia de acceso no se circunscriben ni se agotan con lo dispuesto en el artículo 47 bis. Los tribunales y órganos de selección son objeto de la reforma del artículo 48 LPPV.
191. Como ha declarado el Tribunal Constitucional, forma parte del derecho fundamental del artículo 23.2 CE que asiste a quienes toman parte en los procesos selectivos como aspirantes a la función pública o a la promoción funcional “que quienes integren los tribunales de selección reúnan las condiciones de mérito y capacidad exigidas por el artículo 103.3 CE (STC 13/2009, 215/1991 y 174/1996)”.
192. El proyecto actualiza esa exigencia constitucional y lo hace, además, trayendo a la LPPV el texto del artículo 60 del EBEP, con algún añadido, ya que no podrán formar parte de tales órganos —además del personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual— dos nuevos grupos: el personal laboral temporal y las personas que se hayan dedicado en los últimos años a preparar aspirantes para el ingreso al empleo público.



193. Nada se puede objetar sobre tal ampliación. Con respecto al primero —personal laboral temporal— se aprecia una identidad de razón con la exclusión del funcionario interino, mientras que respecto al segundo—personas que se hayan dedicado en los últimos años a preparar aspirantes para el ingreso al empleo público— pueden cernirse sospechas de parcialidad que hacen justificada la exclusión.
194. Restaría, para agotar el análisis de las previsiones que podemos encuadrar en el epígrafe selección, hacer una consideración somera sobre las disposiciones transitorias octava y novena.
195. La disposición transitoria octava contempla la situación en la que sea personal laboral fijo el que esté desempeñando puestos de alguacil y que con motivo de la aprobación de la ley queden reservados a funcionarios públicos
196. A ese tipo de situaciones excepcionales se refiere la disposición transitoria segunda EBEP y la respuesta del anteproyecto consiste en aplicar su regulación genérica al caso de los alguaciles, a lo que nada cabe oponer al tratarse de una medida que el propio legislador básico ha considerado idónea para resolver esa situación.
197. La discrepancia que pudiera suscitar que el Estatuto Básico circunscriba la aplicación de los procesos de promoción interna al personal laboral que se encuentre prestando funciones a la fecha de entrada en vigor del EBEP, y el anteproyecto tome como referencia su entrada en vigor para delimitar a los destinatarios, debe ser relativizada, ya que la clasificación de puestos que constituye el presupuesto de hecho de ambas normas proviene del EBEP.
198. En cuanto a la disposición transitoria novena, es cierto que vuelve a establecer un procedimiento restringido de ingreso, pero también lo es que atiende a un supuesto singular ya que la creación del cuerpo de policía local implica que las funciones que hasta entonces venían desempeñando los alguaciles pasan a constituir cometidos de los integrantes de dicho cuerpo. Es la necesidad de resolver la situación de ese personal, para adecuarla a una decisión organizativa del municipio, la que justifica la medida.
199. Como en otros supuestos, para enjuiciar la solución del anteproyecto debemos partir de dos ideas fundamentales.
200. De un lado, el funcionario que ingresa al servicio de una Administración pública se coloca en una situación jurídica definida legal y reglamentariamente y, por ello, modificable por uno y otro instrumento normativo, en que, en consecuencia, pueda exigir que la situación estatutaria quede congelada en los términos en que se hallaba regulada al tiempo de su ingreso (SSTC 99/1987, 129/1987 y 70/1988). Al amparo del



principio de igualdad y por comparación con situaciones pasadas, no puede pretenderse paralizar las reformas orgánicas y fundonarias que decidan las administraciones públicas (ATC 160/1989).

201. Como lógico corolario, el legislador o el Gobierno disfruta también de un amplio margen de actuación a la hora de consolidar, modificar o completar sus estructuras y de configurar o concretar organizativamente el estatus del personal a su servicio (STC 57/1990 [RTC 1990\57]). La discriminación entre estas estructuras, que son creación del derecho y pueden quedar definidas por la presencia de muy diversos factores, de existir, únicamente derivará de la aplicación por la Administración de criterios de diferenciación que no resulten objetivos ni generales (SSTC 7/1984, 68/1989, 77/1990 y 48/1992)” (STC 293/1993, F. 3º).
202. Entre los criterios objetivos que el legislador puede valorar cabe incluir el fin perseguido con esa medida organizativa, las características de los puestos a cubrir, las necesidades presentes y futuras de prestación de los cometidos asignados a los empleados públicos o las previsiones presupuestarias (STC 9/1995 y ATC 541/1985).
203. Pues bien, como ya hemos dicho, los alguaciles son funcionarios de una clase específica —de la subescala de servicios especiales— que va a desaparecer, ya que sólo es posible crear plazas de esa naturaleza cuando el municipio no disponga de cuerpo de policía local.
204. Es esa circunstancia la que el legislador puede tomar en consideración, y la decisión de integrarlos en el cuerpo de policía puede calificarse de legítima pues, si no se dispusiera dicha medida, habría que gestionar dos colectivos con distinto régimen que desarrollan sustancialmente las mismas funciones. Es importante destacar que estamos ante funcionarios que ya han demostrado el mérito y la capacidad en el ingreso y que se encuentran prestando las funciones que a los policías locales reserva la ley.

IV LA CARRERA PROFESIONAL

205. El proyecto añade un capítulo II bis, denominado “carrera profesional”, con los nuevos artículo 73 bis y artículo 73 ter.
206. El artículo 73 bis define el concepto de carrera profesional y el artículo 73 ter regula la carrera profesional horizontal.



207. Esta modalidad de carrera profesional está recogida en el artículo 17 del EBEP previendo que las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera.
208. El proyecto de Ley de empleo público vasco regula la carrera profesional horizontal en los capítulos II y III del título VII, artículos 89, 90 y 91, regulación que es compatible con las previsiones del presente proyecto.

V SALUD Y PROTECCIÓN

209. El capítulo V del título III, que en la LPPV vigente regula el acto de servicio, pasa a regular la salud y la protección, abarcando los artículos 79, 79 bis y 79 ter.
210. Los dos primeros artículos extienden al ámbito de la policía del País Vasco los principios y criterios sobre prevención de riesgos laborales de la Ley estatal 31/1995, de 8 de noviembre, ley que, en principio, no resulta de aplicación en aquellas actividades del personal de policía cuyas particularidades lo impidan, previendo, no obstante, que inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad del personal de policía.
211. El artículo 79 ter dispone que, además del régimen de protección social que corresponde al personal funcionario según la institución en la que se integra, se arbitrarán mecanismos de protección social complementaria para determinados supuestos de incapacidad, muerte y jubilación por incapacidad.
212. Tal previsión es incardinable en el derecho a las prestaciones sociales que se reconozcan a los funcionarios, que el artículo 69.2g) de la LFPV establece para los funcionarios en general y el artículo 75.f) y k) de la LPPV para los cuerpos policiales, adecuando la protección social a las especiales circunstancias de peligrosidad en las que se desenvuelve su actividad.
213. La disposición adicional decimosexta de la LPPV prevé también el establecimiento de sistemas de aseguramiento complementario.

VI CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS

214. El proyecto añade un capítulo V bis en el título III, con el artículo 80, para incorporar la previsión de que reglamentariamente se determinará el régimen de concesión de medallas al mérito policial, felicitaciones y ascensos honoríficos a la categoría inmediatamente superior.



215. Ahora esta materia viene regulada mediante el Decreto 202/2012, de 16 de octubre, únicamente para la Ertzaintza.

VII SEGUNDA ACTIVIDAD

216. Otra de las reformas legislativas que acomete el proyecto afecta a la modalidad del servicio activo modulado por la edad y la situación administrativa de segunda actividad.
217. En su redacción actual, la LPPV prevé como causas determinantes del pase a la situación administrativa de segunda actividad tanto el cumplimiento de la edad que para cada categoría se determine por ley del Parlamento Vasco, como la insuficiencia apreciable y presumiblemente permanente de las facultades psíquicas o físicas necesarias para el eficaz desempeño de las tareas policiales, habiendo quedado inédita la primera al no haberse dictado la ley que debía hacerla efectiva.
218. El proyecto modifica la situación de segunda actividad, eliminando del concepto la modalidad de servicio activo modulado por la edad, en la que no existe disminución relevante de las facultades para ejercer las tareas policiales, por lo que se continúa en el servicio activo con alguna modificación de las áreas.
219. Así, queda como situación de segunda actividad únicamente la de aquellos funcionarios que, no pertenecientes a la escala de facultativos y técnicos de la Ertzaintza, sufran una disminución apreciable de las facultades psíquicas o físicas, que suponga una insuficiente capacidad de carácter permanente para el pleno desempeño de las funciones propias de su categoría, sin impedirles la eficaz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial.
220. El artículo 85.2 del proyecto dispone que cada Administración establecerá, previa negociación con la representación del personal, los requisitos y condiciones pertinentes para el reconocimiento del servicio activo modulado por la edad, estableciendo los extremos que deben ser objeto de la reglamentación.
221. La solicitud de servicio activo modulado por razón de edad conlleva el compromiso de petición de jubilación voluntaria anticipada cuando se alcance la edad requerida para aquella, de conformidad con el régimen de la seguridad social, en su caso aplicable.
222. En el caso de insuficiencia apreciable de las facultades psíquicas o físicas, al que queda reducida la situación de segunda actividad, el proyecto clarifica un aspecto que se



había revelado conflictivo: la posible compatibilidad de la situación y el reconocimiento de una incapacidad permanente total.

223. No es aventurado afirmar que un policía que haya sido declarado por el Instituto Nacional de Seguridad Social afecto a una incapacidad permanente total para la profesión habitual no puede realizar de forma eficaz las fundamentales tareas de la profesión policial, por lo que es procedente declarar su jubilación forzosa.
224. Sin embargo, los términos de la LPPV no permiten alcanzar dicha conclusión con nitidez, y constan a la Comisión Jurídica dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 31 de mayo de 2000 —recaída en el RCA nº 442/97— y de 26 de noviembre de 2007 (JUR 93060/2008), que la niegan. Recogemos a continuación el literal de la primera que parcialmente reproduce la segunda:

“En la tesis de la Administración, la situación de incapacidad permanente total para la profesión de policía, impide, por definición, la eficaz realización de las fundamentales tareas de la profesión policial, definidas en la Ley de Policía del País Vasco y en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta proposición, que sirvió de soporte a la resolución denegatoria, no constituye una verdad apodíctica, y viene desmentida por Ley de Policía del País Vasco que contempla expresamente la posibilidad de desempeñar segunda actividad a los declarados en situación de incapacidad permanente total. Así en el art. 66 de la Ley 4/92 se dispone que cuando se trate de proveer puestos de trabajo de susceptible desempeño por personal en segunda actividad, gozarán de preferencia en su adjudicación los funcionarios declarados en dicha situación administrativa, y, dentro de ellos, quienes se encuentren en situación de incapacidad permanente total que derive de accidente de trabajo. Por su parte, la Disposición Adicional Decimosexta, prevé que a través de la negociación colectiva, que se producirá para la Ertzaintza y las Policías Locales del País Vasco en el ámbito convencional respectivo, se determinarán los sistemas de aseguramiento complementarios que procedan para los casos de pase a segunda actividad por razones de edad e incapacidad permanente total, previa su evaluación mediante los correspondientes estudios actuariales.”

(..)



...la declaración de incapacidad permanente total declarada por la Entidad Gestora de la Seguridad Social no produce efectos automáticos de jubilación forzosa, ni excluye, por sí misma, la posibilidad de pasar a situación de segunda actividad, que en algunos casos se erige, por el contrario, como criterio preferencial para ocupar puestos susceptibles de ser desempeñados por funcionarios en situación de segunda actividad (art.66) y, por ello, la resolución combatida no se ajusta a derecho”.

225. Para desactivar esa posible interpretación, el proyecto modifica el artículo 66 LPPV que regula la preferencia para proveer puestos de segunda actividad, eliminando la referencia a las situaciones de incapacidad permanente total. Asimismo, suprime, mediante el apartado sesenta y cuatro, la disposición adicional decimosexta.
226. Por otra parte, el nuevo artículo 86.7 dispone, en su segundo apartado, que en aquellos supuestos en que el funcionario haya sido declarado en situación de incapacidad permanente por los órganos competentes de la Seguridad Social, sin que proceda su jubilación forzosa, las retribuciones complementarias que le correspondan se minorarán en la misma cuantía que importe la prestación de pago periódico que tenga reconocida en tal concepto.
227. Por otra parte, el nuevo artículo 86.1 establece, en el segundo párrafo, el alcance de las limitaciones funcionales que permiten el paso a la segunda actividad, previsión que no contiene el texto vigente:

“A los efectos previstos en la presente ley se consideran tareas fundamentales de la profesión policial las relativas al mantenimiento y restauración del orden y la seguridad ciudadana, la prevención de hechos delictivos, su investigación y la persecución de los culpables; tareas cuyo eficaz desempeño exige una elemental capacidad tanto para el uso y el manejo de armas de fuego y demás defensas reglamentarias, como para la conducción de vehículos en condiciones normales, así como una elemental capacidad motriz/motora.”

VIII RÉGIMEN DISCIPLINARIO

228. Otro bloque importante de preceptos afectan al régimen disciplinario de los funcionarios de los cuerpos de policía del País Vasco e introducen importantes novedades en materia de tipificación, procedimiento y ejecución.



229. En este caso, se ha de señalar que las limitaciones pueden provenir de una doble vertiente.
230. De un lado, al ser aplicable a los policías locales se han de respetar las bases del régimen estatutario establecidas por el Estado en base al artículo 149.1.18 CE, que incluyen el régimen disciplinario en cuanto constituye uno de los aspectos esenciales de la regulación de su régimen jurídico (STC 235/1991, de 12 de diciembre).
231. La policía local, precisamente por la naturaleza de sus funciones y su estructura y organización jerarquizada y disciplinada (artículo 6.9 LOFCS), no se encuentra sujeta al régimen disciplinario del EBEP sino que, a tenor de la disposición final sexta de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, se le aplicará dicha ley de acuerdo con lo previsto en la LOFCS.
232. El artículo 52 de la LOFCS llamaba a la aplicabilidad de la sección 4ª del capítulo IV del título II de la LOFCS “con la adecuación que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos”.
233. Dicha sección ha sido derogada por la citada Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, así como su artículo 27 que versaba sobre los tipos de faltas, prescripción y elenco de faltas muy graves, y el artículo 28 que regulaba las sanciones disciplinarias.
234. Pese a la defectuosa remisión de la disposición final sexta de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, puede interpretarse que la voluntad del legislador es la de aplicar a la policía local sus contenidos en tales materias.
235. De otro lado, también pueden provenir de la competencia del Estado del artículo 149.1.1 CE para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. En el ámbito del derecho disciplinario, el Tribunal Constitucional ha afirmado, en la STC 37/2002, de 14 de febrero, cuya doctrina viene al caso de manera muy apropiada, lo siguiente:

“El derecho administrativo sancionador creado por las Comunidades Autónomas puede implicar, sin duda, una afectación al ámbito de los derechos fundamentales, pues la previsión de ilícitos administrativos supone siempre una delimitación negativa del ámbito de libre ejercicio del derecho. Tal afectación no implica (Sentencia de 16 de noviembre de 1981 [RTC 1981, 37], F. 2) que toda regulación en



este extremo sea de exclusiva competencia del Estado. Sin duda que la norma sancionadora autonómica habrá de atenerse a lo dispuesto en el art. 149.1.1 CE, de modo que no podrá introducir tipos ni prever sanciones que difieran, sin fundamento razonable, de los ya recogidos en la normativa válida para todo el territorio. Y también es cierto que el procedimiento sancionador habrá de atenerse al "administrativo común", cuya configuración es de exclusiva competencia estatal (art. 149.1.18ª CE). Pero, dentro de estos límites y condiciones, las normas autonómicas podrán desarrollar los principios básicos del ordenamiento sancionador estatal, llegando a modular tipos y sanciones—en el marco ya señalado—, porque esta posibilidad es inseparable de las exigencias de prudencia o de oportunidad, que pueden variar en los distintos ámbitos territoriales».

Con mayor razón, en este caso, que se desenvuelve en el ámbito disciplinario y afecta sólo, por tanto, a los sometidos a una especial sujeción, ha de admitirse que las Comunidades Autónomas puedan establecer, con fundamento razonable tipos que difieran de los regulados en las normas básicas, siempre que no las contradigan.”

236. En síntesis, cabe afirmar que:

- a) El respeto a lo básico no significa reverencia literal y permite cierto grado de modulación, de la misma forma, la igualdad en las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales no conduce a una monolítica uniformidad jurídica.
- b) Constituyen normas básicas aplicables a los cuerpos de policía local las previsiones de la Ley Orgánica 4/2010, que abordan los aspectos de los derogados 27 y 28 LOFCS y cumplen el objetivo de lograr una mínima y fundamental homogeneidad.

237. Con ese bagaje, estamos en condiciones de abordar la reforma parcial del régimen disciplinario de los cuerpos de Policía del País Vasco.

238. Hay que partir, como dice el Tribunal Constitucional en la STC 37/2002, de que el carácter básico que podría merecer el elenco de faltas muy graves tipificadas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/2010, “no excluye la tipificación como faltas muy graves de otras conductas por las Comunidades Autónomas mediante su actividad legiferante en desarrollo de la



normativa básica estatal siempre que sean compatibles, no contradigan, reduzcan o cercenen dicha normativa básica.”

239. Con la adición de los apartados I bis y I ter al párrafo 2º del artículo 92 se añaden cuatro faltas muy graves ya previstas en el listado de la Ley Orgánica 4/2010 (el acoso sexual, el acoso sexista, el acoso laboral y la infracción de la normativa sobre utilización de videocámaras).
240. En cuanto a las sanciones, la modificación del artículo 93 LPPV realizada por el anteproyecto mantiene divergencias con la ley estatal en el caso de las faltas muy graves y graves. A juicio de esta Comisión, tales divergencias no rebasan el margen de disponibilidad que tiene el legislador autonómico (en el caso de faltas muy graves, pueden ser castigadas en la ley orgánica con suspensión de funciones desde los tres meses y un día hasta los seis años, mientras que el anteproyecto acota su punibilidad entre un año y un día a cuatro años, y, en el caso de las faltas graves, la sanción de suspensión en la norma estatal va desde los cinco días a los tres meses, mientras que el anteproyecto establece de los cinco días a un año).
241. En relación con la prescripción de la falta y de las sanciones, la única discrepancia con la Ley Orgánica 4/2010 es la de las faltas leves, que en el proyecto prescriben a los tres meses y en la ley estatal al mes, lo que resulta irrelevante a efectos del juicio de igualdad; baste decir que la STC 37/2002 descarta taxativamente la inconstitucionalidad cuando “el plazo sólo es distinto en materia de faltas leves”
242. En cuanto al procedimiento disciplinario, el proyecto adiciona los párrafos 2 bis y 2 ter y modifica el apartado 5 del artículo 95
243. Los apartados añadidos explicitan los derechos que asisten a los expedientados de no declarar contra sí mismo, contar con la asistencia de abogado, de representante sindical o funcionario del cuerpo policial de su confianza, así como a conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento.
244. La modificación del apartado 5 del artículo 95 viene a incorporar un plazo de caducidad del procedimiento sancionador de seis meses, igual al regulado en el artículo 43.4 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
245. Por último, el nuevo artículo 97 bis recoge la mayor parte de la regulación sobre la ejecución de las sanciones contenida en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica 4/2010, con pequeñas adaptaciones, la más importante de las cuales se da en relación con la ejecutividad de las sanciones, que la Ley Orgánica 4/2010 establece que serán



inmediatamente ejecutivas y su cumplimiento no se suspenderá por la interposición de ningún tipo de recurso administrativo o judicial, mientras que en el proyecto se prevé, como en el artículo 138.3 LRJPAC, que las sanciones disciplinarias serán ejecutivas cuando no quepa contra ellas ningún recurso ordinario en vía administrativa.

IX LOS POLICÍAS LOCALES

246. Como hemos señalado anteriormente, el artículo 51 LOFCS contempla diversas formas para que los municipios puedan ejecutar sus competencias en materia de seguridad: pueden crear cuerpos de policía propios, recurrir a personal auxiliar de custodia y vigilancia (alguaciles en la terminología del proyecto) y, por último, implantar cuerpos de funcionarios que, en municipios de gran población, se dedicarán en exclusiva a labores de regulación de tráfico, subordinados a los funcionarios de los cuerpos de policía local.
247. La LPPV se modifica para dar entrada a ese amplio abanico de posibilidades, en particular, para regular ese último supuesto introducido por el legislador estatal con posterioridad a su aprobación.
248. Entiende la Comisión que, tanto las facultades genéricas que ostenta la Comunidad Autónoma para ordenar el régimen del personal de las administraciones locales como las específicas en materia de seguridad para coordinar la actuación de las policías locales en su ámbito territorial, permiten que el anteproyecto contenga la regulación de los artículos 117 (alguaciles), 118 (escalas y categorías de los cuerpos de policía local), 120 (mecanismos de cooperación, nombramiento de interinos y confección de bolsas de trabajo) y 121 (agente de movilidad municipal).
249. La presencia de funcionarios interinos en la policía local ha sido fuente de controversia en el pasado, pero en la opinión de la Comisión los perfiles actuales de la figura se adecuan a la naturaleza de las necesidades que los municipios han de satisfacer y resulta difícilmente sustituible por otra.
250. La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1999 (RJ 2326), dictada en recurso de casación en interés de ley, estableció la siguiente doctrina legal: “ante situaciones de urgente necesidad y previo cumplimiento de las previsiones legales, y con el carácter temporal implícito en su propio concepto, pueden convocarse, para ser cubiertas en régimen de interinidad, plazas de policía local”.
251. Para llegar a tal conclusión tuvo en cuenta que la reserva de exclusividad de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad, que se realiza en el art. 92.2 LBRL, lo



es, en general, para el personal sujeto al estatuto funcional, y que el funcionario interino está sujeto a ese Estatuto o régimen general funcional, mientras que no cabe que los puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones que impliquen ejercicio de autoridad, como es el caso de los de la policía local, puedan ser desempeñados por personal contratado laboral, ni por personal eventual que desempeñe puestos de confianza o asesoramiento especial, que son las únicas clases de funcionarios a que alude el art. 89 LBRL, que sirve de inmediato fundamento al art. 92.2 de la misma ley.

252. Actualmente, derogado el artículo 92 de la LBRL por el EBEP, es el artículo 92.3 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, el que dispone que corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad.
253. Por su parte, a lo largo del tiempo se ha asistido a una evolución legislativa claramente favorecedora de la figura del funcionario interino. Al inicio era restrictiva en cuanto a los supuestos que permitían su nombramiento, pues este se anudaba a la existencia de razones de urgencia o necesidad y únicamente podía ocupar transitoriamente plazas vacantes de plantilla en tanto no fueran provistas por funcionarios de carrera o sustituirlos en el desempeño de sus puestos de trabajo en los casos de ausencia temporal (artículo 91 LFPV). Posteriormente se amplió su perímetro en el caso de las administraciones forales y locales de la Comunidad Autónoma, ya que la disposición adicional decimoséptima de la LFPV (introducida por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre) permitía nombrar funcionarios interinos para la ejecución de programas temporales. Posibilidad que se hizo extensiva a la policía local (entre otras, Sentencia de 13 de mayo de 2005 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco).
254. Pero cuando sus contornos se han hecho más flexibles ha sido con el EBEP, que entre las circunstancias que permiten recurrir a funcionarios interinos ha recogido en el artículo 10 EBEP los tres supuestos anteriores (vacantes, sustitución transitoria de los titulares y programas de carácter temporal) y ha añadido uno más: el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

255. En el capítulo II del título I, “mecanismos de control de la actividad policial”, se regula en los artículos 6, 7, 8 y 9 los procedimientos de tratamiento de quejas e investigación de los



casos relevantes de malas prácticas policiales, quees también objeto de regulación en el artículo 16 de la Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del Sistema de seguridad pública de Euskadi, por lo que sería conveniente laderogación de este último artículo, a fin de lograr una mayor claridad normativa.

256. El párrafo 4 del artículo 11 dispone que “los miembros de la Comisión (de Buenas Prácticas de la Policía del País Vasco) no recibirían retribución alguna por sus trabajos, sin perjuicio de las indemnizaciones por razón del servicio procedentes, en caso de no ser empleados de las administraciones públicas”.
257. El párrafo, además de estar escrito en un tiempo verbal incorrecto —“recibirían”— cuando debe decir “recibirán”, resulta confuso, dado que parece indicar que los empleados de administraciones públicas miembros de la comisión no recibirán indemnizaciones por razón del servicio, lo que no parece justo ni lógico, pues el funcionario habrá de ser resarcido de los gastos que le ocasione la participación en el órgano. Por ello, tal vez eliminando la última parte del texto, la que expresa “en caso de no ser empleados de las administraciones públicas”, adquiriera el precepto su verdadero significado.
258. El artículo 47 bis.5.b), relativo a medidas de discriminación positiva en pruebas de ingreso, regula que “ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por aplicación de esta preferencia tenga un diferencial de puntuación en las fases de oposición y, en su caso, de concurso dependiendo del sistema selectivo, inferior al quince por ciento frente a los candidatos hombres que se vieran preteridos”.
259. Parece que lo que corresponde es decir que el diferencial no sea “superior” al quince por ciento, o que el diferencial sea inferior al quince por ciento, o que no supere el quince por ciento.
260. En el mismo sentido, en el párrafo 6—“la preferencia a la que se refiere el apartado anterior solo será de aplicación en tanto no exista en el cuerpo, escala y categoría a que se refiere la convocatoria del proceso selectivo una presencia igual o inferior al 33% de funcionarias mujeres”— habrá de decir “igual o superior al 33% de funcionarias mujeres”.
261. El artículo 85.3 establece que “la solicitud de petición de servicio activo modulada por razón de la edad conlleva el compromiso a la petición de jubilación voluntaria anticipada cuando se alcance la edad requerida para aquella de conformidad con el régimen de la seguridad social en su caso aplicable”.
262. El concepto de “compromiso” parece que indica la asunción de una obligación unilateral sin claras consecuencias para el caso de que no llegue a cumplirse, por lo que, a fin de



establecer una obligación para el solicitante, será mejor disponer que la autorización del servicio activo modulado por razón de la edad estará “condicionada” a la petición de la jubilación voluntaria anticipada cuando se alcance la edad requerida para aquella, de conformidad con el régimen de la seguridad social en su caso aplicable.

- 263. Deberá uniformizarse la escritura en mayúsculas o minúsculas en términos como delegados de prevención, cuerpos de policía del País Vasco, escala superior y policía local, delegados de prevención, etc.
- 264. Deben eliminarse algunas expresiones discriminatorias en materia de género, como presidente, escala de facultativos y técnicos, agente primero, categoría de comisario y subcomisario, etc.

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el anteproyecto de ley de referencia.

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 20 de abril de 2016 para su conocimiento y consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de septiembre).

Vº Bº:

Jesús María Alonso Quilchano,
Secretario

Sabino Torre Díez,
Presidente



SEGURTASUNEKO SAILBURU ANDREA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak 2016ko apirilaren 19an eginiko osoko bilkuran, alboan adierazten diren kideak bertan zeudela, 35/2016 zenbakiarekin erregistratutako **kontsulta** aztertu du, **Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketa egiteko lege-aurreproiektuaren** inguruan. (Erref: DNCG_LEY_65484/2015_07).

Gaiaren inguruan hausnartu, eta aho batez eman du irizpen hau. Batzordearen iritzia Zorrozu Aierbe kideak adierazi du.

BATZORDEKO BURUA:

Sabino Torre Díez jauna.

BATZORDEKO BURUORDEA:

Xabier Unanue Ortega jauna.

KIDEAK:

Maria Teresa Astigarraga Goenaga andrea.
Luis M^a Eskubi Juaristi jauna.
Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.
Gorka Erlantz Zorrozu Aierbe jauna.
Imanol Zubizarreta Arteché jauna.
Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.
Iñaki Calonge Crespo jauna.

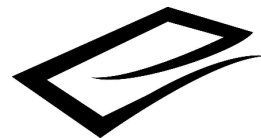
IDAZKARIA:

Jesús M^a Alonso Quilchano jauna.

62/2016 IRIZPENA

AURREKARIAK

1. Segurtasuneko sailburuak 2016ko otsailaren 10ean emandako Aginduaren bidez, egun horretan bertan helarazi zitzaion batzorde honi aipatutako legearen aurreproiektua.
2. Bidalitako espedientearen barruan, aurreproiektuaren beraren testuaz gain, honako hauek ere ageri dira:
 - a) Segurtasuneko sailburuaren 2015/06/10eko Agindua. Horren bidez erabaki zen hasiera ematea Euskal Herriko Poliziaren Legearen bosgarren aldaketa egiteko lege-aurreproiektua prestatzeko prozedurari.
 - b) Txosten juridikoa, Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritzarena, 2015-07-08koa.



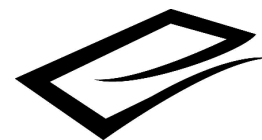
- c) Txostena, genero-eraginari buruzkoa, data berekoa.
- d) Lege-aurreproiektuaren lehen bertsioa, 2015-07-09koa.
- e) Agindua, 2015eko uztailaren 12koa, lege-aurreproiektua aldeztu aurretik onartzen duena.
- f) Proiektuaren azalpen-memoria, 2015-07-12koa.
- g) 2015-07-17ko EHAAr argitaratzea hilabete horretako 13an Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaritza emandako ebazpena. Horren bidez erabaki da aurreproiektua jendaurrean jartzea.
- h) Alegazioak, ESAN sindikatuarenak, 2015-07-14koa.
- i) Txostena, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza, 2015-07-16koa.
- j) Emakunderen txostena, 2015-07-24koa.
- k) Herriarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren antolamendu-txostena (DACIMA), 2015-07-27koa.
- l) Alegazioak, Asociación de Alguaciles de Euskadi/Euskadiko Alguazilen Elkartearnak (AAE), 2015-07-28koa.
- m) Alegazioak, EUEDEL-Euskal Udalerrien Elkartearnak, 2015-07-29koa.
- n) Alegazioak, Bizkaiko Foru Aldundiarenak, 2015-07-30koa.
- o) Alegazioak, UGT-EUSKADIREnak, data berekoa.
- p) Alegazioak, ERNE-Ertzainen Nazional Elkartasunarenak, 2015-08-04koa.
- q) Alegazioak, Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi- Euskadiko Udaltzainburuen Elkartearnak (EJEPL-EUBE), 2015-08-05koa.
- r) Lehendakariaren idazkia, alegaziorik egingo ez dutela jakinarazten duena, 2015-09-10koa.
- s) Idazkia, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailarena, 2015-09-18koa, alegaziorik egingo ez dutela jakinarazten duena.



- t) Idazkia, Osasun Sailarena, 2015-09-22koa, alegaziorik egingo ez dutela jakinarazten duena.
- u) Idazkia, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailarena, 2015-09-29koa, alegaziorik egingo ez dutela jakinarazten duena.
- v) Txostena, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarena, 2015-10-21ekoa.
- w) Proiektuaren bigarren bertsioa, 2015-11-10ekoa.
- x) Alegazioak, Comisiones Obreras (CCOO) sindikatuarenak, 2015-11-19koak.
- y) Alegazioak, ELA-Ertzaintza sindikatuarenak, 2015-10-12koak.
- z) Alegazio berriak, ERNE-Ertzainen Nazional Elkartasunarenak, egun berekoak.
- aa) Alegazioak, ELA-Udaltzaingoa sindikatuarenak, 2015-12-14koak.
- bb) Ertzaintzaren Kontseiluaren ziurtagiria, 2015-12-14koa.
- cc) Ziurtagiria, Euskadiko Udaltzainak Koordinatzeko Batzordearena, 2015-12-15ekoa.
- dd) Txostena, Funtzio Publikoko Zuzendaritzarena, 2015-12-18koa.
- ee) Ertzaintzaren Negoziazio Mahaiko ziurtagiria, 2015-12-21ekoa.
- ff) Proiektuaren hirugarren bertsioa, 2016-01-19koa.
- gg) Memoria ekonomikoa, 2016-01-20koa.
- hh) Memoria, proiektua idazteko prozedurari buruzkoa, 2016-01-20koa.
- ii) Ekonomiaren eta arauen kontrolari buruzko txostena, Ekonomia Kontrolerako Bulegoarena, 2016-02-19koa.
- jj) Txostena, Aurrekontu Zuzendaritzarena, egun berekoa

BATZORDEAREN PARTE-HARTZEA

3. Irizpen hau Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak azaroaren 24an egindako 9/2004 Legearen 3.1 a) artikuluan xedatutakoaren arabera ematen da. Batzordearen irizpena, hain zuzen, derrigorrezkoa da lege-aurreproiektuetan, aurreproiektuen gaia eta xedea edozein izanik, betiere, legeak aipatzen dituen sabuespenen artean ez badaude. Ez da hala gertatzen aztergai dugun aurreproiektuarekin.



AURREPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

4. Bidalitako testuak honako hauek jasotzen ditu: zioen azalpena, artikulua bakarrik hirurogeita sei paragrafotan bananduta, bederatzi xedapen iragankor eta amaierako bi xedapen.
5. Zioen azalpenetan, Euskal Herriko Poliziaren uztairaren 17ko 4/1992 Legearen (aurrerantzean, EHPL) aldaketa egitea gomendatzeko arrazoiak azaltzen dira. Bosgarren aldaketa da, eta bederatzi ataletan jasotzen ditu idazketa bideratu duten ildo nagusiak. Ildo horien artean, honako hauek jasotzen dira: polizia-eredua sendotzea; izangaien hautaketa eta sarbidea; barne sustapena, lanbide-karrera eta lanpostuen homidura; polizia-jarduna egokitzea, adnaren ondorioz, edo funtzio polizialaren berezko gaitasunak gerora galdu izanaren ondorioz; Euskal Herriko polizia-kidegoetako langileen babes soziala eta babes osagarria; diziiplina-araubideko aldaketak; polizien egitura profesionalaren aldaketak. Azkenik, aguazilaren figura arautzen da udaltzaingorik ez duten udalerrietarako, eta, mugikortasun-agentearena, berriz, zirkulazioa arautzeko populazio handia duten hiriguneetan.
6. Lehenengo paragrafoan, I. tituluaren II. kapituluak orain “Polizia-jarduna kontrolatzeko mekanismoak” izena du, eta legearen 6-14 artikulua hartzen ditu barne.
7. 6. artikulua ustezko jardunbide desegokien kasu esanguratsuekin loturiko kexak eta ikerketak eraginkortasunez eta era inpartzialean jaratzeko prozedurak ezartzea aurreikusten du.
8. 7. artikulua ezartzen du polizia-zerbitzuen funtzionamenduari buruzko kexak aurkeztu ahal izango dituztela herritarrek Ekinbidean.
9. 8. artikuluan aurreikusten da gatazkak konpontzeko aukerako metodoak ezar daitezkeela; besteak beste, bitartekaritza.
10. 9. artikulua xedatzen du Ekinbidek banaka eta taldeka aurkeztutako kexen jarraipena egingo duela, errekurtsioa jartzeko moduko elementuik ote dagoen aztertzeke eta arrazoiak ikertzeke.
11. 10. artikulua bidez, Euskal Herriko Poliziaren Jardunbide Egokien Batzorde sortu da. Helburua da herritarrek polizia-jardunaren neutraltasun eta objektibotasunean legitimitatea eta konfiantza sendotzea. Kexak eragin dituzten polizia-jardunbideak aztertzea da helburu nagusia.
12. 11. artikulua batzorde horren osaera arautzen du. Autonomia funtzionala duen kide anitzeko organo gisa egituratzen da. Presidentetzan daudenek, eta segurtasun



publiko, zuzenbide, soziologia, psikologia eta etika arloetan ospe handia duten bost pertsonak osatzen dute, Gobernu Kontseiluaren dekratuaren bidez izendatuta.

13. Kideen erdiak Euskal Herriko polizia-eskaletan eta -kategorietan dauden edo egon diren pertsonen artean izendatuko dira. Lanpostuak betetzeko izendapenak bost urterako izango dira.
14. 12. artikulua batzordearen esku-hartzea (segurtasunean eta udal-agintaritzetan eskumena duen Eusko Jurlaritzako saileko titularren) antolatzen duten organoak arautzen ditu, baita ikerketak zer pertsonak gauzatzen dituzten ere (organoko kideak; zerbitzu-eginkizunetan dauden funtzionarioen laguntza edo Ertzaintzako barne kontuetako langileen laguntza izan dezakete). Esku hartzen duten administrazioek ikerketa horiek erraztuko dituzte.
15. 13. artikulua xedatzen du, azterlana amaitu ostean, batzordeak txostena igorriko duela. Txosten horretan, honako hauek deskribatuko ditu: egin diren jarduketak eta polizia-jardunaren ebaluazioa; horrez gain, gomendatutako bat egingo du, hala badagokio, ikusitako hutsuneak hobetzeko.
16. 14. artikulua ezartzen du batzordearen eta bere eginkizunen berri emango dela. Hala, bi urtetik behin memoria bat egin beharko du jardueren berri emateko, eta, ondoren, Eusko Legebiltzarrera bidaltzeko.
17. Bigarren paragrafoak 17. artikuluko d) letraren testua aldatzen du. Hala, Ertzaintzaren Kontseiluari ebazpen-proposamenen berri emateko furtzioa esleitzen zaio birgaitze-espedienteetan eta diziplina-espedienteetan, betiere zerbitzutik kanporatzea proposatzen denean edo sindikatuetakako ordezkariak zigorrak jartzen zaizkienean.
18. Hirugarren paragrafoak artikuluko bereko i) letraren testua aldatzen du. Hala, Ertzaintzako langileek jasotako dominaren eta ohorezko maila-igoeren berri aldian-aldian emateko eginkizuna ematen zaio kontseiluari.
19. 4. paragrafoan, 4. zenbakia gaineratzen da 27. artikuluan. Horren bidez, udaltzaingoak gauzatzen dituen eginkizunak arautzen dira, korporazioko agintariak babesteko eginkizunak gauzatzen dituztenean, dagokien udal-barutitik kanpo jardun ahal izateko, betiere Eusko Jurlaritzako segurtasun-esparruko sail eskudunaren baimenarekin.
20. Bosgarren paragrafoan, 2. zenbakia gaineratzen da 28. artikuluan. Kode deontologikoari buruzkoa da; horren bidez arautzen da Euskal Herriko poliziako agintariak eta langileak Poliziaren Etikaren Kode Europarrari buruzko Kontseiluaren



Gomendioaren esparruan jardun behar dutela, eta kodearen edozein urraketaren aurka egin behar dutela.

21. Seigarren paragrafoan, 30. artikuluko 3. zenbakia kendu da. Euskal Herriko poliziak herritarrekin dituen harremanetan zaindu behar duentratuari buruzkoa da.
22. Zazpigarren paragrafoan, 30. artikulua gaineratu da Horren bidez, zehaztasun gehiagorekin arautzen da Euskal Herriko poliziak herritarrekin dituen harremanetan izan beharreko tratua.
23. Zortzigarren paragrafoak 40. artikulua aldatzen du. Hala, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak bultzatu egingo du —lehen “ahaleginduko da” esaten zuen— bere baitan dauden zentroetan eginiko ikasketak baliokidetzea. Horretarako, hezkuntza-administrazioaren eskakizunetara egokitzen ahaleginduko dira kasuan kasuko ikasketak motak eta horien iraupena.
24. Bederatzigarren paragrafoak 43. artikulua aldatzen du. Hala, gradu pertsonalaren kontzeptua kendu, eta beharrezkoak diren espezialitateak gaineratuko dira Euskal Herriko polizia-lanpostuen zerrendan berriazko ezagutza-maila jakin bat eskatzen duten eginkizunetarako.
25. Hamargarren paragrafoak 47. artikuluko c) letra aldatzen du. Horren bidez, Euskal Herriko poliziaren hautaketa-prozesuko deialdien oinarrien edukia arautzen da. Hala, “programak” erreferentzia aldatu, eta horren ordez “gaitegia” jarriko da.
26. Hamaikagarren paragrafoan, 5. zenbakia gaineratu da 47. artikuluan. Horren bidez xedatzen da deitutako plaza hutsen kopurua aldatu edo hutsegite materialak nahiz izatezko hutsegiteak zuzendu nahi direnean, ez dela beharrezkoa izango eskaerak aurkezteko beste epe bat irekitzea.
27. Hamabigarren paragrafoak 47 bis artikulua gaineratzen du, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako aurreikuspenak kidego horietako lanpostuak eskuratu, bete eta sustatzeko hautaketa-prozesuetan aplikatuko direla bermatzeko, segurtasuneko zerbitzu publikoan gizonen eta emakumeen presentzia orekatua sustatzeko.
28. Horretarako, emakumeen sustapen-planak egingo dira, genero horretako pertsonen ehuneko jakin bat plantillan sartuko dela bermatzeko. Beraz, aurreikusiko da emakumeak sustatzearen aldeko berriazko neurriak hartzea, harik eta ezarritako ehunekoetara iritsi arte.



29. Hamahirugarren paragrafoak 48. artikulua testua aldatzen du. Horren bidez, Euskal Herriko poliziako langileak hautatzeko epaimahaiek bete beharreko autonomia funtzionalaren, inpartzialtasunaren, zehaztasunaren eta gizon eta emakumeen ordezkaritza orekatuaren printzipioak garatzen dira
30. Hamalauugarren paragrafoko testua berridatzi egin da nahiz eta edukian 50. artikulua antzekoa izan. Bertan xedatzen da Eusko Jaurlaritzak toki-administrazioaren mendeko polizia-kidegoetako eskala eta kategorietan sartzeko oinarritzko arauak ezarriko dituela, eta arau horiek Ertzaintzako eskala eta kategorietarako ezarritako antzeko irizpideei egokitu zaizkiela. Toki-erakundeek, halaber, aldi berean hautaketa-prozesuen deialdiak egiteko zeregina Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiaren esku uzteko aukera aurreikusten du.
31. Hamabosgarren paragrafoak 55 bis artikulua gaineratzen du III. tituluko V. kapituluko 3. atalean: “Euskal Herriko polizia-kidegoetan sartzeko”, Euskal Autonomia Erkidegoetako polizia-kidegoetan funtzionario gisa txanda libreko hautaketa-probetan onartua izateko baldintzen berezitasunak arautzeko, enplegu publikoari buruzko legeria orokorrekin lotuta.
32. Hamaseigarren paragrafoak 56. artikuluko 4. zenbakiko testua aldatzen du. Hala, superintendente-kategoria kentzen du, eta, beraz, araudian desagertu egiten da komisario- eta intendente-kategorietarako sarbideaizateko araudia.
33. Hamazazpigarren paragrafoan, 59. artikuluko 1. zenbakiko testua aldatu da. Izangaiek hainbat kategoriatan barne-sustapeneko txandan parte hartu ahal izateko bete behar dituzten baldintzei buruzkoa da. Hala, zerbitzu berezietan zerbitzu aktiboan egoteko eta aurreko lanpostuko zerbitzu eraginkorreko denbora murrizteko baldintza gaineratu da.
34. Hamazortzigarren paragrafoak 59. artikuluko 3. zenbakia aldatzen du, eta barne-sustapeneko txandaren bidez sartzeko probetan parte hartzeko aukera ematen zaie seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzian edo genero-indarkeriaren ondorioz eszedentzian dauden funtzionarioei.
35. Hemeretzigarren paragrafoak artikuluko 4. zenbakia aldatzen du. Barne-sustapeneko zerbitzu eraginkorren denbora zenbatzean, praktika-aldiari dagokion denbora gaineratzen da, betiere hautaketa-prozesuagainditu badute.
36. Hogeigarren paragrafoak 61. artikuluko 1. zenbakia aldatzen du. Euskal Funtzio Publikoaren (EFP) uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 35. artikuluan xedatutakoa beteko da, funtzionario izaera galtzeko arrazoi nagusiak ezarzeko. Horren ordez, euskal administrazio publikoko langileei ezar dakiekeen legeria orokorra aipatzen da.



37. Hogeigarren paragrafoak 62. artikulua aldatzen du; Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziako funtzionarioen erretiroa euskal enplegu publikoa arautzen duten legeetan aurreikusitako eran egiten da, gizarte-segurantzaren arauak Ertzaintzarako edo udaltzaingoetarako aurreikus ditzaketen berezitasunarekin.
38. Hogeita bigarren paragrafoak 65. artikuluko 2. zenbakiko testua aldatzen du. Lanpostuak hornitzeko deialdietan aintzat hartu beharreko merezimenduen artean, euskararen ezagutza-maila gaineratzen du, betiere deialdian baldintza gisa ezartzen ez denean.
39. Hogeita hirugarren atalak 65 bis artikulua gaineratzen du. Lanpostu bereziak betetzeko, kasuan kasuko espezialitatea duten langileen artean aurreikusitako lanpostuak hornitzeko prozedurak gauzatuko dira. Hala, espezialitate-ikastaroak gainditzeko dituztenek derrigor aurkeztu beharko dute lanpostuak hornitzeko lehen prozedurara, eta lehentasunez eskatuko dituzte espezialitatea behar duten lanpostu hutsak.
40. Hogeita laugarren paragrafoak 66. artikulua aldatzen du. Horren bidez, kendu egiten da bigarren jardueran diharduten langileek gauzatu ditzaketen lanpostuak hornitzeko lehentasuna, hain zuzen, lan-istripuen ondorioz erabateko ezintasun iraunkorraren egoeran daudela eta bigarren jardueran dihardutela aitortzen duten langileen kasuan.
41. Hogeita bosgarren paragrafoak 67. artikulua lehengo paragrafoko d) letra aldatzen du. Horren bidez, lanpostuak hornitzeko deialdietan jasoko beharreko alderdiak arautzen dira, izan lehiaketaren bidez, izan izendapen askearen bidez. Merezimenduen lehiaketaren prozeduretan zer alderdi dagozkion zehaztuko da.
42. Hogeita seigarren paragrafoak 70. artikuluko 5. zenbakia kentzen du. Funtzionarioak mugiarazteko ezarritako kasuak arautzen dira, zehazki, bigarren jardueraren egoeran dauden langileek bete ditzaketen lanpostuetan diharduten funtzionarioenak.
43. Hogeita zazpigarren paragrafoak 71. artikulua 3. zenbakia aldatzen du (lehenengo paragrafoan). Langile-mailaren kontzeptua kentzen du funtzionarioek lanpostuak gauzatzen dituzten bitartean jasoko dituzten ordainsarien inguruko araudian.
44. Hogeita zortzigarren paragrafoak III. tituluko II. bis kapituluak gaineratzen du 73 bis eta 73 ter artikuluen bidez. "Lanbide-sustapena eta -karrera".
45. 73 bis artikulua lanbide-karreraren kontzeptua arautzen du.
46. 73 ter artikulua kasuan kasuko administrazioek lanbide-karrera ezartzeko aukera arautzen du. Lanpostua aldatu beharrik gabe garapen profesionalaren mailan aurrera



egiteko aukera ematean datza. Aukera hori ezartzeko, nahitaez garatu beharko da administrazio bakoitzerako araudia.

47. Hogeita bederatzigarren paragrafoak 74. artikuluko 1. zenbakia aldatzen du. EFPLren III. tituluko VII. kapituluaren aipamena aldatzen da, eta, horren ordez, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) funtzionarioen ordainsaiegitura eta -araubidea arautzeko araudia ematen da.
48. Hogeita hamargarren paragrafoak 74. artikuluko 1. zenbakia aldatzen du. Superintendente-kategoriari dagokion lanpostu-mailako 8. osagarriaren maila kentzen du.
49. Hogeita hamaikagarren paragrafoak 74. artikuluko 1. zenbakiko a) bis letra gaineratzen du, eta Ertzaintzako karrera profesionaleko osagarria arautzen du.
50. Hogeita hamabigarren paragrafoak 78. artikuluko 2. zenbakia aldatzen du. Horren arabera, Ertzaintzan zerbitzu aktiboan aritzea batezina da indar armatuen erreserbista izatearekin edo krisi edo larrialdi-egoeretan kidego polizialek at funtzio publikoak garatzeko beste konpromiso pertsonal batzuekin.
51. Hogeita hamahirugarren paragrafoak III. tituluko V. kapituluaren edukia aldatzen du. Orain zerbitzu-jarduera arautzen du, Euskal Autonomia Erkidegoko poliziako langileen osasuna eta babesa arautzeko.
52. 79. artikulua administrazio publikoek poliziako langileen egoera psikofisikoak zaintzeko duten betebeharra xedatzen du. Lan-arriskuei aurre egiteko planak ezarri behar dira.
53. 79 bis artikulua gaineratu da. Prebentzio-arloko ordezkarien izendapena eta eginkizunak arautzen ditu. Eginkizun horiek Lan ariskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 estatuko legean jasotako printzipio eta irizpideekin bat etorritik gauzatuko dira.
54. 79 ter artikulua gaineratu da. Horren bidez, administrazio publikoek gizarte-babeserako mekanismoak xedatzeko administrazio publikoen betebeharra arautzen du poliziako langileek aldi baterako ezintasuna duten kasuetan; zehazki, gaixotasun profesionalen ondorioz, istripu profesionalen ondorioz, edo heriotzen ondorioz nahiz nahitaezko erretiroren ondorioz.
55. Hogeita hamalaugarren paragrafoak V. kapituluaren edukia gaineratzen du III. tituluaren "Kondekorazioak eta esker onak" izena du. Horretarako, 80. artikulua aldatu da, eta orain dominak eta ohorezko maila-igoerak onartzeko araubidea arautuko du.



56. Hogeita hamabosgarren paragrafoak 81. artikulua aldatzen du, eta poliziako langileen administrazio-egoerekin bat etorritik, Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoari buruzko araudi orokorrean xedatutakoa ezartzen da bigarren jardueraren egoeran dauden langileentzat.
57. Hogeita hamaseigarren paragrafoak 84. artikuluko 5. zenbakia gaineratzen du. Hala, funtzionarioen aldi baterako eteteak behin betiko etete kategoriara aldatzen direnean, funtzionarioek aldi baterako etete-egoeran izan diren bitartean jasotako dirua itzuli beharko dute.
58. Hogeita hamazazpigarren paragrafoan, 84. artikuluko 6. zenbakia gaineratu da. Horren arabera, aldi baterako etete-egoeran emandako denbora kontuan hartuko da etete irmoa betetzeko.
59. Hogeita hamazortzigarren paragrafoak 85. artikulua aldatzen du. Adinaren arabera egokitutako zerbitzu aktiboaren modalitatea bigarren jarduera ez den jarduera gisa arautzen du. Zerbitzu aktiboaren egokitzapena ezarri nahi dute, prestazioaren baldintzetan zenbait aldaketa eginez.
60. Hogeita hemeretzigarren paragrafoak 86. artikulua aldatzen du, eta era zehatzagoan arautzen du bigarren jardueraren egoera.
61. Berrogeigarren paragrafoak 87. artikulua aldatzen du. Horren bidez xedatzen da adinaren arabera egokitutako zerbitzu aktiboan dauden edota destinorik gabe bigarren jardueran diharduten funtzionarioek kategoriari dagozkion oinarritzko ordainsariak eta aitortutako ordainsari pertsonalak jasoko dituztela, baita betetako azken lanpostuko ordainsariak ere, lanpostu-mailako osagarriaren elementu berezia salbu.
62. Berrogeita batgarren paragrafoak 88. artikulua kentzen du. Orain, bigarren jardueraren egoeran dauden alderdiak arautzen ditu.
63. Berrogeita bigarren paragrafoak 92. artikuluko 2. zenbakiko b), d), k) eta l) letrak aldatzen ditu. Artikulu horrek diziplina-hutsegite oso astunen kasuak arautzen ditu. Berrikuntza nabarmenena da sekretu profesionala hausten den kasuetan eta kolaborazio-faltaren kasuetan gaineratu dela halakotzat hartuko direla polizia-lanari kalte larriak eragiten zaizkionean.
64. Berrogeita hirugarren paragrafoak bi letra sartzen ditu 92. artikuluko 2. zenbakian. Hala, hutsegite oso astunen zerrendan, kasu hauek sartu ditu: sexu-jazarpenak, jazarpen sexista eta lan-jazarpena, lehenik, eta, xurgutasun-indarrek eta -kidegoek leku



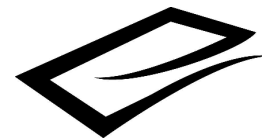
publikoetan bideokamerak erabiltzeari buruzko legeian hutsegite oso astuntzat jotzen direnak, bigarrenik.

65. Berrogeita laugarren paragrafoak 93. artikulua aldatzen du, hutsegiteak egitearekin zerikusia duten zigorrak murrizteko.
66. Berrogeita seigarren paragrafoak 94. artikulua aldatzen du. Hutsegiteak larritasuna handia edo txikia den zehazteko eta zehapenak mailakatzeko kontuan hartu beharreko elementuak gaineratzen ditu, baita historia profesionala ere, inguruabar aringarri gisa. Inguruabar astungarrien errepikapera kendu egin da, eta zigor-hutsegite eta -delituen kasuetan, ezarritako zigorraren zenbatekoa eta garrantzia hartu behar da kontuan.
67. Berrogeita seigarren paragrafoan, 2 bis zenbakia gaineratu zaio 95. artikuluari. Horren bidez, espedientea jaso dutenek zer eskubide dituzten zehazten da: deklaraziorik ez egiteko eskubidea, bere burua erruduntzat ez jotzeko eskubidea eta errugabetasun-presuntziorako eskubidea, lanean diharduen abokatubaten, edo sindikatuko ordezkari baten nahiz bere konfiantzazko polizia-kidegoko funtzionarioen aholkularitza izatea.
68. Berrogeita zazpigarren paragrafoak 2 ter zenbakia gaineratzen du 95. artikuluan. Espedientea duenak edozein unetan jakin ahal izango du zein den prozeduraren izapidetze-egoera.
69. Berrogeita zortzigarren paragrafoak 95. artikuluko 5. zenbakia aldatzen du. Zigor-prozeduraren eta aipatu epea eteteko arrazoien iraungitze-data arautzen du.
70. Berrogeita bederatzigarren paragrafoak 97. artikuluko 2. zenbakia aldatzen du. Hala, hutsegi oso astunen preskripzio-epea murriztu, etahutsegite arinena luzatzen du.
71. Berrogeita hamargarren paragrafoak 97. artikuluko 3. zenbakia aldatzen du. Horren bidez, hutsegite oso astunen preskripzio-epea murriztu, eta hutsegite arinena handitzen du.
72. Berrogeita hamaikagarren paragrafoak 97 bis artikulua berria gaineratzen du. Administrazio-zehapenak betearaztekoak izango direla zehazten du, betiere horien aurka administrazio-bidean ohiko errekurtsorik aurkeztu ezin bada. Kautelazko neurri gisa, exekuzioa bertan behera geratu ahal izango da errekurtsio juridikzionala jartzeko asmoa agertzen bada. Errekurtsorik jartzen ez bada, edo berau jartzean, zehapena kautelaz eteteko eskaerarik egiten ez bada, etete hori bertan behera geratuko da.
73. Berrogeita hamabigarren paragrafoak 97 ter artikulua berria ezartzen du, honako hauek arautzeko: zehapenak nola bete, horiek betetzea eragozten duten administrazio-



egoeren kasuak, eginkizunak eteteko aldi berean hainbat zehapen egotea, eta zehapenen exekuzioa eteteko aukera.

74. Berrogeita hamahirugarren paragrafoak 99. artikuluko 3. zenbakia aldatzen du, hain zuzen, lan-baldintzak zehaztean ordezkaritza izateari eta parte hartzeari buruzko kapituluan. Hala, bitarteko funtzionarioei, hautetako eta hautagarri izateko aukera kentzen zaie.
75. Berrogeita hamalauugarren paragrafoak 105. artikulua aldatzen du. Ertzaintzaren egitura profesionalaren eskalak eta kategoriak arautzen ditu. Hala, superintendente kategoriaren goi-eskala kentzen da, eta eskala horiek zer talde eta azpitaldetan banatzen diren zehazten du.
76. Berrogeita hamabosgarren paragrafoak berriz ere idazten du IV. tituluko III. ataleko testua, "Polizia judiziala" izenburuarekin. 112., 113. 114. eta 115. artikuluek hartzen ditu barne, eta eduki oso antzekoa dute. Hala, Botere judizialeko lege organikoaren (BJLO) xedapen jakin batzuen inguruko aipamenak kentzen ditu, genero bakar baten aipamenak kentzen ditu, eta polizia judizialaren unitateen izena ikerketa kriminalaren eta polizia judizialaren unitateengatik aldatzen du.
77. Berrogeita hamaseigarren paragrafoak aguazilei buruzko 117. artikulua aldatzen du. Horren bidez, aguazilen eginkizunak zehazten dira, agintaritzaren agente gisa eginkizunak gauzatzen dituztenean. Aguazilek ezingodute su-armarik eraman aldean, eta langile horiei dagozkien lanpostuak karrerako funtzionarioek beteko dituzte, zehazki, C-2 sailkapen-taldean edo baliokidean daudenek. Toki-administrazioko funtzionarioen estatutua aplikatuko zaie, eta horiek hautatzean, udaltzaingoko kidegoentzat aurreikusitako antzeko irizpideak ezarriko dira.
78. Berrogeita hamazazpigarren paragrafoak 118. artikulua aldatzen du. Hala, udaltzaingoko kidegoetako egungo eskalak Ertzaintzaren eskalekin (goi-mailakoa, exekutiboa, ikuskaritzakoa eta oinarritzakoa) ordezkaturiko dira, kategorია berdina izanik. Horien barruan, talde eta azpitalde profesional berdina egongo dira. Xehetasunez arautzen dira populazio-baldintzak eta udaltzaingo-kidegoetako langile-kopuruaren baldintzak, kidego horietan eskalak eta kategoriak sortze aldera.
79. Berrogeita hamazortzigarren paragrafoak 119. artikuluari (lehen indargabetua) edukia ematen dio. Udaltzaingo-kidegoetako burutza hierarkia-mailan gorago dagoen kategoriari egokituko zaiola ezarriko da.
80. Berrogeita hemeretzigarren paragrafoak 120. artikuluan (lehen indargabetua) edukia ezartzen du. Horren bidez ezartzen da udaltzaingoetan lanpostuak premiaz eta behin-behinean betetzeko, udalen arteko lankidetzaren mekanismoen arabera (bitarteko

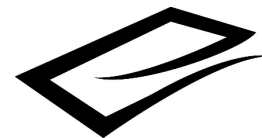


langileak izendatzeko legez aurreikusitako mekanismoen arabera) jokatu ahal izango dela. Era berean, Ertzaintzak aldi baterako funtzio polizial jakin batzuk betetzeko eskatu ahal izango du. Beraz, urrekusi da Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak hainbat lan-poltsa sortzea udaltzaingoetan bitarteko funtzionarioak izendatzeko.

81. Hirurogeigarren paragrafoak edukia ematen dio V. tituluko III. kapituluari (indargabetua), “Mugikortasun-agentek” izenarekin. 121. artikulua besterik ez du jasotzen. Bertan ezartzen da populazio handiko udalerrietan, funtzionario batzuei esleitu ahal izango zaizkiela erdigunean trafikoa antolatzeke, seinaleztatzeke eta arautzeke eginkizunak. Langile horiek eginkizun horietan dihardutenean, agintaritzako agentetzat joko dira. Ezingo dute su-armarik eraman aldean, eta uniformeak ez da udaltzaingoko kidegoen berdina izango. Udalaren mugikortasun-agenteen plazetara sartzeko, C-2 sailkapen-taldeari edo talde baliokide bati dagokion titulazioa eskatuko da.
82. Hirurogeita batgarren paragrafoak hogeita bigarren xedapen gehigarria gaineratzen du. Horren bidez ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko poliziako funtzionarioek erretiroa hartzean izaera hori galtzen dutenean, kidegoko langile erretiratuaren izaerari eutsiko diotela, erretiratu ziren unean zuten kategoria izanik. Erakunde- eta gizarte-ekitaldietan, uniformeak jantzi ahal izango dute, arauz ezartzen den moduan.
83. Hirurogeita bigarren paragrafoak hogeita hirugarren xedapen gehigarria gaineratzen du. Bertan ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren funtzionarioen artean zerbitzu aktiboan ez daudenek eta erretiroa hartu dutenek epaiketara lekuko edo peritu gisa joan behar badute (zerbitzu aktiboan egon ziren garaiarekin loturiko gertaerengatik edo ikerketengatik), dagozkien kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango dutela.
84. Hirurogeita hirugarren paragrafoak hogeita laugarren xedapen gehigarria gaineratzen du. Horren arabera ezartzen da Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak ikerketa kriminalaren eta polizia judizialaren berariazko prestakuntza-ekintzak antolatu ahal izango dituela udaltzaingoetarako.
85. Hirurogeita laugarren paragrafoak hauek guztiak kertzen ditu: hirugarren xedapen gehigarria, zortzigarrena, hamabigarrena (lehen eta hirugarren paragrafoak), eta hamaseigarrena, baita xedapen lehen, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, zazpigarren, zortzigarren, bederatzigarren, hamargarren, hamaikagarren eta hamabigarren xedapen iragankorrak ere.
86. Hirurogeita bosgarren paragrafoak honako hau xedatzen du: Ertzaintzaren Aldizkariari eginiko aipamenak” 42.2 eta 67.1 artikuluetan jasotakoak, aldatu egirgo dira, eta horien ordeaz adierazpen hau jarriko da: “Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria”.



87. Hirurogeita seigarren paragrafoak xedatzen du legean aipatzen den “Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Akademia” esaldia aldatu, eta horren ordez “Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademia” jarriko dela. Era berean, “Herrizaingo Saila” esapiderearen ordez, “Eusko Jaurlaritzako segurtasuneko sail eskuduna” erabiliko da.
88. Lehen xedapen iragankorrek ezartzen du gaur egun indarrean dauden lanpostuen hautaketa- eta hornidura-prozesuak araudiaren arabera indarrean egoten jarraituko dutela, deialdia egitea eragin zuen arrazoiarekin bat etorritz.
89. Bigarren xedapen iragankorrean honako hau xedatzen da: harik eta 79 bis eta 80 artikuluetan ezarritakoa erregelamendu bidez garatu arte (zerbitzua ematerakoan gertatzen den heriotza eta nahitaezko erretiroa direla-eta ematen diren prestazioei eta ohorezko aitortpenen erregimen berriari buruzkoak dira), urriaren 16ko 202/2012 Dekretuan eta urtarrilaren 16ko 27/2010 Dekretuan ezarritakoa aplikatuko da (lehen Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzeko da, eta bigarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzainen kidegoei aplikatu dakiekeen kondekorazio-eta sari-erregimenari buruzkoa).
90. Hirugarren xedapen iragankorrean ezartzen da izapidetzen ari diren diziplina-espedienteak, legea indarrean sartzen denean, aurreko xedapenen arabera egongo direla indarrean, oraingo xedapenak espedienteak bideratzeko egokiagoak direnean salbu.
91. Laugarren xedapen iragankorrek xedatzen du legea indarrean sartzen denetik sei hilabeteko epean, Ertzaintzaren lanpostuen zerrenda aldatuko dela, superintendente-kategoriarako erreserbatutako lanpostuak lege honetan ezarritakoaren arabera egokitzeko.
92. Bosgarren xedapen gehigarrian xedatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako langileek Ertzaintzaren eta udaltzaingoen oinarritzko eskalako agentearen kategoria lortu badu legea indarrean sartu baino lehen sarbidea izateko prozeduretan, lege honetan aurreikusitako sailkapen-kategoria eta -talde berrietan sartuko direla ondorio guztietarako, abenduaren 13ko EDU/3497/2011 Aginduaren bidez. Agindu horretan, hain zuzen, Ertzaintzako eta EAEko udaltzaingo-kidegoetako oinarritzko eskalako agenteak hezkuntza-sistemako lanbide-heziletako dagokion teknikari tituluarekin baliokidetu dela zehazten da.
93. Seigarren xedapen iragankorrean arautzen da udaltzaingo-kidegoetan, intendente-kategoria duten funtzionarioak goi-eskalan sartuta geratu direla. Komisario- eta komisariorde-kategoriakoak, berriz, eskala exekutiboan.

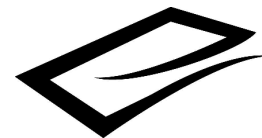


94. Era berean ezartzen du lege hau indarrean egon baino lehen A mailako plaza lortu duten udaltzaingo-kidegoetako funtzionarioek, eta hirugarren xedapen gehigarriaren arabera, lortutako plazarik beheragoko kategorian sartuta egon baziren, goi-escalan sartuta geratuko direla tartean dagoen kategoria bakoitzeko hierarkiaren arabera lehentasun-irizpidean oinarrituta, betiere eskala horri dagokion titulu akademikoa badute. Eskala horretan sartzeak ez du ekarriko gastu publikoa areagotzea.
95. Zazpigarren xedapen iragankorrak arautzen du legera egokitu behar duten udaltzaingo-kidegoetako burutza-postuetako funtzionarioak birkalifikatutako lanpostuari dagokion kategorian sartuko direla, betiere lanpostuan bost urte daramatenean behin betiko destino gisa. Horretarako kategoria horri dagokion titulua izango dute, edo, bestela, legearen 59.2 artikuluan aurreikusitako trebakuntza-ikastaroak eginda izango dituzte, Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak emandako lanbide-akreditaziorako ikastaro teoriko-praktikoa gaindituta. Kategoria horietan sartzeak ez du ekarriko gastu publikoa areagotzea.
96. Zortzigarren xedapen iragankorrak ezartzen du lege hau indarrean sartzean legeak aguaziltzat egituratzen dituen eginkizunak gauzatzeko ari diren lan-kontratudun langile finkoek eginkizun horietan jarraitu ahal izango dutela, eta lehiaketa-oposizioaren bidez deitutako barne-sustapenerako hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izango dutela. Era berean, lehia askeko hautaketa-prozesuetan ere parte hartu dezakete banaka edo taldean. Horretarako, baina, prozesu horietan parte hartzeko behar den titulazioa izan behar dute, eta eskatzen zaizkien gainerako betekizunak ere bete behar dituzte. Hala, merezimendutzat joko dira lan-kontratu finkoko langile gisa eman dituzten zerbitzuak eta lan-kontratu finkoko langile bihurtzeko gainditu dituzten hautaketa-probak.
97. Bederatzigarren xedapen iragankorrean ezartzen da udaltzaingoa sortzen den unean udalean zerbitzuak ematen ari ziren aguazilak Udalizaingoan sartuko direla, behin lehiaketa mugatua gaindituta, adinaren eta altueraren baldintzetatik salbuetsita, eta Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademiak ezartzen duen ikastaroa gaindituta.
98. Azken xedapenetatik lehenengoak Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoko uztailaren 17ko 4/1992 legean sartutako aldaketak barne hartzen dituen testu bategina egiteko. Horretarako, beharrezkoak diren artikulua, kapituluak eta xedapenak hartuko ditu kontuan, barne-oharrak legeetara egokituta. Hala, hizkera ez sexista erabiltzeko eskakizunak bete behar ditu, eta, era berean, bateratu beharreko legezko testuak arautu, argitu eta bateratu beharko ditu. Hori guztia hamabi hilabeteko epean egin beharko da.
99. Azken xedapenetatik bigarrenak zehazten du lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarri kodela indarrean.



AURREPROIEKTUA EGITEA ETA IZAPIDETZEA

100. Batzordeak adierazi izan duenez (denen erakusgarri, 39/1999 eta 84/2003 irizpenak), lege-aurreproiektuak Eusko Jaurlaritzaren barruan egiteko prozeduraren azterketari ekinez gero, zera hartu behar da kontuan: “legegileak ez du Konstituzioa exekutatzen, baizik eta zuzenbidea askatasunean sortzen, Konstituzioak ematen dion esparruan; erregelamenduak egiteko ahala, aldiz, Konstituzioaren eta legeen arabera betetzen du (EKren 97. artikulua)” (besteak beste, 209/1987 KAE, abenduaren 22koa), beraz, Espainiako Konstituzioak (EK), Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuek (EAE) edo, batzuetan, lege organikoek berariazko izapidetik aurreikusten dutenean salbu —eta benetako salbuespenak dira horiek gure ordenamenduan—, analisi hori, funtsean, tresna bat da, proiekturiko erregulazioaren arrazoizkotasuna aztertzeko; hau da, duen edukiarekin, noraino balio duen lortu nahi diren helburuak erdiesteko.
101. Arau-ekimenekin duen funtsezko desberdintasun horrek, axola zaigun gaian, derrigorrezko malgutasuna sartzen du organo aholkulari batek —batzorde honek, kasu honetan— lege-aurreproiektuak egiteko prozeduraren azterketan; izan ere, irizpenaren helburua da arauak egokiak diren ala ez zehazten laguntzea; alegia, arrazoizkoak diren ala ez. Arrazoizkoa izateak esannahi du erabilgarria dela helburuak lortzeko, eta erregulazioaren zuzentasunari begira ere lagungarria dela, hau da, arautu nahi den eta, beraz, positiboki aldatu nahi den errealitateari egokitzeko. Kontsultaren alorreko esku-hartzearen diferentzia horrek, ordea, ez dio batzordeari eragotzi behar hainbat ohar egitea, kontsulta egin duen organoarekin batera elkarlanean jarduteko asmotan betiere, aurreproiektua eta memoria prestatzeko prozedurari buruz, hura hobetzeko asmotan. Baina, berriz diogu, lege-aurreproiektua izaki, ez da ahaztu behar organo aholku-emaeak aurreproiektua egiteko prozeduraz emandako balorazioaren ondorioa ez dela testuaren balioztapen juridikoaren esparruan sartzen, eta ez duela objektiboak oinarritzeko biderik ematen azkenean sortuko den arau-produktuaren konstituzionaltasuna zalantzan jartzeko.
102. Legegintza-prozedura hau legebiltzarrean hedatzen da bere zabalean, eta EK-k, EAEek, edo, batzuetan, lege organikoek baldintzak ezartzen dituzten kasu berezietan izan ezik, lege-proiektuek bete beharreko baldintza bakarra da beharrezko aurrekariekin batera bidaltzea Legebiltzarrera, bere iritzia eman eta erabakia hartu ahal izan dezan, gutxienez ere, memoria orokorra, finantzaketari buruzko eranskina eta kontrol ekonomikoko txostena —aurrekontuari karga edo zama dakarkioten proiektuetan—, gure irizpena, eta legeriaren arabera nahitaezko diren beste txostenak (Jaurlaritzaren Legearen 57. artikulua, eta Eusko Legebiltzarreko Araudiaren 132.2 artikulua).
103. Ondorio horietarako, beraz, badugu erreferentzia-tresna garrantzizko bat, hots, abenduaren 22ko 8/2003 Legea, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzkoa



(aurrerantzean, XOEPL), zeinak, inguruabar horiek daztu gabe, Jaurlaritzaren jarduera bideratu nahi izan baitu, Jaurlaritza, lege-proiektuak idazterakoan, xedapen orokorrak egiteko metodologia berbera erabiltzen saia dadin. Hala, zioen azalpenean esaten duenez, oso ekarpen ona egiten da legegintza-ahalmena duenaren lana errazteko, proiektu hobeto oinarrituak eta antolatutak, teknikajuridiko txukunago eta xede dituen helburuak lortzeko egokiagoa dutenak aurkezten zaizkiolako, eztabaidatu eta erabaki dezan.

104. Hori dela eta, txostenaren azterketari helduko diogu irizpen pean jarritako testua lortzeko jarraitutako prozedura XOPPLn ezarritakoaote den egiaztatzeko.
105. XOPPLko 5. artikuluan aurreikusitako hastapen-agindua eman da, xedapen-proiektua idatzi da, 6. artikuluan ezarritakoa betez, eta 7.1artikuluan aurreikusten den onespen-agindua ere eman da.
106. Proposamena egin duen saileko aholkularitza juridikoak jakinarazi du, arauaren xedearen oinarria aztertuta, zuzenbidera egokitzea eta araudiaren zuzentarau teknikoak aurreikustea. Hala, XOPPLko 7.3 artikuluan aurreikusita beteko da.
107. XOPPLko 8. artikuluan xedatutakoa betetzeko, proiektua jendaurrean ikusgai jarri da, eta ordezkaritza gehien duten sindikatuei nahiz Euzal Autonomia Erkidegoko polizia-esparruan esku hartzen duten elkarte profesionalei entzun egin zaie (espedientean jasota ez badago ere, memorian zehazten da entzun egin zaiela, eta hala dirudi, hainbat alegazio aurkeztu dituzte eta).
108. Jarraian adierazitako administrazio publikoei eta udalen elkarteei parte hartzen utzi zaie, XOPPLko 9. artikuluan xedatutakoa betetzeko.
 - Eusko Jaurlaritzako sail guztiei.
 - Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiak.
 - EUEDEL.
109. Jarraian adierazitako sail, erakunde eta gizarte-eragile hauen alegazioak edo jakinarazpenak jaso ditugu.
 - Eusko Jaurlaritzako sailak: Lehendakaritza; Osasuna Ingurumena eta Lurralde Politika; Enplegua eta Gizarte Politikak; Hezkuntza Hizkuntza Politika eta Kultura.
 - Bizkaiko Foru Aldundia.



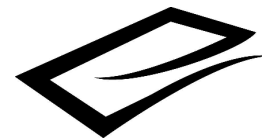
- EUDEL.
 - Sindikatuak: ESAN, UGT, ERNE, CCOO eta ELA.
 - Profesionalen elkarteak: Asociación de Alguaciles de Euskadi/Euskadiko Alguazilen Elkartea (AAE), eta Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi/Euskadiko Udaltzainburuen Elkartea (AJEPL)
110. XOPPLko 10.2 artikuluan xedatutakoarekin lotuta, aderazi behar da proiektua izapidetzeari buruzko memoria egin dela. Honako hauek jasotzen ditu: aurrekariak, gauzatutako izapideak, horien emaitza eta proiektuaren testuan eginiko aldaketak. Helburua da onartutako zehaztapen eta iradokizunetara egokitzea, eta jasotako txostenetan ezarritako beste batzuk ez onartzeko kontuan hartu diren arrazoiak.
111. XOPPLko 10. artikuluko 3. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorritz, ekimenaren eragin ekonomikoari buruzko memoria egin da. Memoria horretan baieztatzen da xedapena indarrean sartzeak ez dakarrela indarrean dauden EAEko aurrekontu orokorretan era batean edo bestean aurreikusita ez dauden gasturik edo aurrekontuko diru-sarrerarik (ez zuzenik, ez zeharkakorik). Iritzi hori arauaren eraginpean dauden toki-erakundeetara ere zabaltu daiteke.
112. Memoriak, era berean, proiektuak enpresa-sektorean edo herritarren sektorean eraginik ez duela adierazten du.
113. Jarraian adierazitako nahitaezko txostenak bildu dira, XOPPLko 11. artikuluan xedatutakoarekin bat etorritz.
- Herri Administrazioen Hizkuntza Normalizazioaren Zuzendaritza (azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuaren 2. art.).
 - Emakume eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 legearen 19. artikuluan aurreikusten den generoaren arabera eragina alde aurretik ebaluatu da, eta lege horren 21. artikulua xedatzen duen Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen txostena lortu zen. Erakunde horrek egin du txostena.
 - Funtzio Publikoaren Zuzendaritza [EFPLren 6.1.a) art.].
 - Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza [Administrazio Publiko eta Justizia Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 18. c) artikulua].



- Ertzaintzaren Kontseilua [Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legeko 17. e) artikulua].
 - Euskal Herriko Udaltzaingoen Koordinazio Batzordeak txostena egin du [Euskadiko segurtasun publikoaren sistema antolatze ko ekainaren 28ko 15/2012 Legeko 39.4.a) artikulua].
 - Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren (DACIMA) txostena [Administrazio Publiko eta Justizia Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartze duen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 18. c) artikulua].
 - Kontrol Ekonomikorako Bulegoa, ekonomia- eta araudikontrolaren txostena egiteko (Euskal Autonomi Elkarteko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legeko IV. kapitulu ko III. titulua).
114. Ertzaintzaren lan-baldintzei eragiten dieten alderden inguruan negoziatu dugu (EHPLko 103. artikulua). Ertzaintzako Negoziazio Mahaiko idazkariak ziurtatu du Euskal Herriko Poliziaren legea bosgarrenez aldatzen duen lege-aurreproiektuaren bigarren zirriborroa aztertu egin dutela Euskal Herriko Poliziaren legearen 103. artikuluan aurreikusitako negoziazio-mahaiko bileren baitan. Biera horiek 2015eko azaroaren 10ean eta abenduaren 10ean egin dira, eta, hala, aiez aurretik negoziatzeko izapidea betetzat jo da.

ESKUMEN TITULUA ETA ARAU ESPARRUA

115. Batzordeak aurreproiektu fasean honako hauek aztertzeko aukera izan zuen: abenduaren 1eko 6/2006 legea, Euskal Herriko Poliziaren maiatzaren 28ko 2/2008 legea bigarrenez duena; eta maiatzaren 28ko 2/2008 legea, Euskal Herriko Poliziaren legea hirugarrenez aldatzen duena. Era berean, 67/2006, 20/2007 eta 132/2007 irizpenak igorri dira, eta Euskal Herriko Poliziaren Legearen laugarren aldaketa deituriko aurreproiektua ere aztertu zen. 130/2011 Irizpena eman zen, baina proiektuak ez zuen aurrera egin, desegin egin baitzen. Proiektu honenedukiaren zati handi bat jasotzen zuen.
116. Hori dela eta, irizpen horietan jasotako gogoetak aipatuko ditugu berriro, eta esan dezakegu zalantzarik gabe EAEk eskumena duela aurreproiektuaren esparrua antolatze ko, AEEEren 17. artikuluan zehaztutako eskumenen arabera, “autonomia-erkidegoko poliziaren araubide”ari dagokionez, Konstituzioaren (EK) lehen xedapen gehigarrian aurreikusitako foru-araubidea eguneratubehar baitu.



117. EHAren 17. artikuluan xedatutakoa garatzeko onetsizuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren uztailaren 17ko 4/992 legea (EAEPL) , Euskal Autonomia Erkidegoetako polizien estatutu-araubidea arautzen duena, "Autonomia Erkidegoko funtzionarioen araubide orokorretik ahalk eta hurbilen, beharrezkoak diren berezitasunak kaltetu gabe" (Zioen Adierazpena), eta azken xedapenetako lehenengoan honela dio: "Ertzaintzako eta Udaltzaingoko funtzionarioak, bere estatutu araubideari dagokionean, Euskal Funtzio Publikoaren legedi orokorrean ezarritakoaren arabera araupetuko dira osagarri moduan".
118. Gogoan izan behar da berriazko estatutua –funtzionarioen araubide orokorretik bereizia– eratzeko premia datorrela polizien eginkizunaren ezaugarri berezien ondorioz; izan ere, EKren 104.1 artikulua adierazten du haien xedea dela "eskubide eta askatasunen egikaritza askea babestea eta herritarren segurtasuna bermatzea". Bestalde, Konstituzioaren 104.2 artikulua agintzen du Lege Organiko batek zehaztu behar dituela Segurtasun Indar eta Kidegoen eginkizunak, jarduteko oinarritzko printzipioak eta estatutuak.
119. Agindu hori bete du martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoak, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoak (aurrerantzean SIKLO); hizpide dugun alorrean konstituzionaltasunaren blokea osatzen du. Gainera, kontuan hartu behar da azken xedapenetako lehenengoan baztertzen duela Euskal Autonomia Erkidegoaren Poliziari aplikatzeko aukera, 5., 6., 7. eta 8. artikuluetan adierazitako jarduketari eta estatutuari buruzko arau orokorrak eta oinarritzkoak izan ezik.
120. Egokia da gaineratzea Auzitegi Konstituzionalaren 1979ko 5eko 375/2004 Autoak baztertu egiten duela KEren 149.1.18 artikuluan xedatutakoa Generalitat-eko poliziaren estatutu-araubidearen konstituzionaltasun-kanon gisa balio izateko aukera. Hala ere, funtzionario publikoen estatutu-erregimenaren estatuko oinarritzko araudiak ez du izango autonomiako araudiaren balioa. Are gehiago, Euskal Autonomia Erkidegoko poliziarako izatea ukatu behar da.
121. Adierazitakoarekin bat etorritik, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarritzko Estatutuarenak, bere eragin-eremutik kanpo uzten ditu Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideak, eta adierazten du Lege horretan xedatutakoak aplikatuko zaizkiela soilik haien berriazko legediak hala xedatuz gero (4. artikulua).
122. Horrek guztiak esan nahi du autonomiako legeak Ertzaintzan indarrean dagoen estatutu bereziaren ezaugarriak ezar ditzakeela. Horrenbestez, nahikoa da SIKLOren 6. artikulua arau nagusiekin eta bideragarriekin jarraitzea. Aukera-askatasun horrek, jakina, ez du esan nahi mugarik ez dagoenik; esatebaterako, Konstituzioak aitortutako funtsezko eskubideetatik ondorioztatzen direnak, bereziki 14. artikuluko legearen aurreko berdintasuna, Konstituzioaren 23.2 artikulua aitortutako eskubidea zehazten



duena, edo Konstituzioaren 103.3 artikulua betetzen duena, funtzionario publikoen estatutua arautzeko autonomiako legelaria ere derrigortzen duena.

123. Ondorio hori ezin da orokortu, besterik gabe, udaltzaingoko funtzionarioetara, hainbatetan esan dugun bezala (40/2002, 4/2004 eta 130/2011 irizpenak). Udaltzaingoak toki-araubidearen elementu gisa duen garrantzia airtzat hartuta, eskumenak banatzean, ezin da izenburu gisa baztertu Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan xedatutakoa, Euskal Herriko Poliziaren Legearen 104 artikuluari dagokionez.
124. Kasu honetan, bi ikuspuntu hartu behar dira kontuan segurtasun publikoari dagokiona (udaltzaingoak koordinatzeko eskumenak hartzen ditu barne) eta toki-araubideari dagokiona, eta, horren barruan, toki-administrazioko funtzionarioen araubideari dagokiona.
125. Toki-araubideko oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Estatuko Legearen 25. artikulua, eta Euskadiko toki-erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17. artikulua polizia-arloko eskumenak, udaltzaingoaren antolamendua eta kudeaketa, trafiko-antolamendua, bide-segurtasuna, ibilgailuen aparkamendua eta herritarren parte-hartzea aitortu ondoren, SIKLOren 51. artikuluan horiek gauzatzeko moduak zehazten dira; adibidez, berezko poliziaren kidegoak sortzeko aukera, edota zaintzarako laguntzaileak biltzeko aukera.
126. SIKLOren 53.3 artikulua funtzionarioen kidegoak sortzeko aukera aurreikusten du populazio handia duten udalerrietan. Era berean, bereziaz trafikoa arautzeko eginkizunetan arituko dira, udaltzaingoaren kidegoetako funtzionarioen mende. Estatutu-araubideari dagokienez, trafikoa arautzeko eginkizunez arduratzen diren kidegoetako funtzionarioak ez dira segurtasun-indar eta -kidegoetan sartuko. Agintaritzako agente izaera izan arren, funtzio publikoko araubide orokorreko arauen mende egongo dira.
127. Udaltzaingoko kideei, bestalde, 5., 6., 7. eta 8. artikulua aplikatuko zaizkie gainerako segurtasun-indar eta -kidegoekin batera (SIKLOko 52 artikulua). Hala, autonomia-erkidegoei (SIKLOko 39. artikulua) eskumen handia ematen zaie araudiaren edukian: a) udaltzaingoen araudiekin bat datozen araudi-esparruak, TAOLen xedatutakoaren arabera; b) kasuak kasu, udaltzaingoaren kidegoak homogeneizatzea ezartzea edo ahalbidetzea, baliabide teknikoaren arloan, horien eraginkortasuna, lankidetzak, uniformeak eta ordainsariak zehazteko; c) udaltzaingak hautatzeko, trebatzeko, sustatzeko eta mugitzeko irizpideak ezartzea, kategoria bakoitzerako eska daitezkeen mailak zehaztuz, eta, inola ere maila eskolako graduatua baino baxuagoa izanik; d) udaltzaingoen lanbide-heziketa koordinatzea (horretarako, agintariak trebatzeko eskolak eta oinarritzako prestakuntzarako eskolak sortuko dira).



128. Bistan denez, eskumen zabal hori udalaren autonomiaren arabera egongo da mugatuta polizia mota horretarako antolamendu osagarri gisa (udaltzaingoen erregelamenduak), baita tokiko korporazioek langileak kudeatzeko dituzten tokiko eskumen exekutiboenak ere, TAOLen baldintzetan.
129. Segurtasun eta toki-araubideen eskumen-elkartze hori EBEPen ere ematen da; izan ere, 3.2 artikuluan aurreikusten du udaltzaingoko kidegoak ere estatutu horren arabera eta autonomia-erkidegoetako legeriaren arabera egongo direla indarrean, SIKLOetan horietarako ezarritakoan izan ezik.
130. Azkenik, esan beharra dago EBEPen zenbait berrikuspenek —II. kapitulua (Karrerarako eta barne-sustapenerako eskubidea. Eginkizuna ebaluatzeko), III (Ordainsari-eskubideak), III. tituluko 25.2 artikulua (bitarteko langileen hirurtekoak) izan ezik, eta IV. tituluko III. kapitulua (lanpostuak eta mugikortasuna hornitzea)— funtzio publikoaren legeak indarrean sartzen direnetik aurrera soilik izango dutela eragina (estatutu hori garatzean ezarriko dira legeak).
131. Orain arte, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, iragarri dugun EBEP legeak Batzorde honek jakinarazi arren, ez da aldarrikatua izan, baina horrek ez du eragozten EHPL (SIKLOn eta TAOLn udaltzaingotari buruz jasotzen diren oinarriak arautzen dituen araua da) berritzea. Hala ere, alderdi horiek zehazten direnean, edota EBEP zuzenean aplikatzekoa denean, aurreikuspenak kontuan hartu behar dira. Horrek ez du eragotziko segurtasunaren zerbitzuan udaltzaingoa koordinatzeko arloan duen eskumena lehentasunezkoa denean bereizi ahal izateko beharrezkoa bada araubide bateratua ezartzeko, SIKLOan zehazten diren homogeneotasun-alderdiei dagokienez.
132. Halaber, azken gogoeta gisa, esan beharra dago, Ekintze-segurtasun publikoaren sistema, Ertzaintzaren Kontseilua eta Polizia eta larrialdietarako Euskal Akademia hobetzeko herritarren ekimenen bulegoari buruzko erreforma egitea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jardunbide Egokien Batzordea sortzea aipatzen denean, antolamendu-ahalmenak kontuan hartu behar direla. Autonomia Erkidegoari EAEEn 10.2 artikuluan ematen zaio eskumen-titulua Konstituzio Auzitegiak 50/1999 epaian (3. OJ) adierazi zuenez, autonomiak berezko du erkidegoko administrazioak bere burua modu askean antolatze eskumena, eta eskumen eskusibo den aldetik, eduki bakartzat du “dagozkien erkidego-administrazioak osatzen dituzten, edo horien mendeko diren, organo, administrazio-unitate edo erakundeak sortu, aldarazi eta deuseztatze ahala”.

AURREPROIEKTUKO EDUKIAREN AZTERKETA

133. Aurreproiektu honek EHPLn *laugarren aldaketa* deituriko lege proiektuaren bidez (ezerezean geratu zen, ez baitzen Legebiltzarrean onartu) gauzatu nahi ziren



aldaketetako asko jasotzen ditu; Beste hainbat ere gaineratu ditu, eta idazketan 130/2011 Irizpenean adierazitako eragozpenak eta iadokizunak aintzat hartu dira.

134. Aurreko proiektuarekin lotuta esan genuen bezala, EHPLn garrantzi handia izango duen erreforma dugu hizpide. Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-funtzionarioen estatutuko alderdi nagusietan izango du eragina. Beraz, 130/2011 Irizpenean egin genuen bezalaxe, txostena egituratzean, araudi berria aldatuko diren alderdiei erreparatuko diegu.
135. Batzordeak egin beharreko analisiari dagokion bezaa, konstituzionaltasun-blokearen egokitzapenei buruz eginiko gogoeta zorrotzez gain, aurreproiektuaren edukari dagozkionak ere azalduko ditugu, esparru juridikoan arau garbiagoa egiten lagunduko duelakoan.

I POLIZIAREN JARDUNA KONTROLATZEKO MEKANISMOAK

136. Proiektua deskribatzen duen paragrafoan jasotzen den bezala, lehen paragrafoak 6-14 artikuluen edukia zehazten du. Artikulu horiek, 15/2012 Legeak, ekainaren 28koak, Euskadiko Segurtasun Sistema Antolatzeakoak, indargabetu aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia eta Polizia Zerbitzurako Datuak sortzeko zentroa arautzen zituzten.
137. Egungo proiektuak I. tituluaren II. kapituluaren baitan sartzen ditu aurreko artikulua, “Polizia-jardura kontrolatzeko mekanismoak” izenburuarekin. Polizia-eredua sendotzea da helburua; horretarako, ustezko jardunbide desegokieng inguruko kexak eta ikerketa eraginkortasunez eta era inpartzialean jorratzeko prozedurak ezarriko dira.
138. Proiektuaren 6, 7, 8 eta 9 artikuluek segurtasun publikoa hobetzeko herritarren ekimenen bulegoa —Ekinbide— arautzen dute, polizia-zerbitzuen funtzionamenduari buruzko kexak jasotzeko. EHPLren I. tituluko V. kapituluaren araututa zetorren lehendik —23. artikuluan—, eta Euskadiko Segurtasun Sistema Antolatzeako ekainaren 28ko 15/2012 Legeak indargabetu, eta berriz ere sortu du irailaren 29ko 181/2015 Dekretuak.
139. Proiektuak, legean bulego hori sartzeaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jardunbide Egokiaren Batzordea sortu eta arautzen du 10., 11., 12., 13. eta 14. artikuluetan; hau da, polizia-jarduerarekin loturiko hainbat arloan ospe handia duten pertsonen osatutako kide anitzeko organo gisa. Poliziaren jardunbideak aztertzea da helburua, jardunbide egokiak zein diren gomendatzeko, eta poliziaren kode deontologikoarekin bat ez datozen, eta behin eta berriz errepikatzen diren jokabide-ereduak identifikatzeko.
140. Gehigarri horiek segurtasunari eta norbere antolaketa buruzko gaitasunen baitan sartzen dira, dagokien paragrafoan, eta arlo juridikoan ez dakarte inolako arazorik.

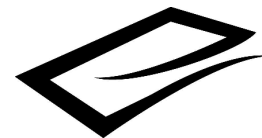


II SARBIDEA IZATEKO DISKRIMINAZIO POSITIBOA

141. Proiektu honek hautaketa-arloan sartzan dituen neurrien artean, EHPLren 47 bis artikulua leku berezia du. Artikulu bakarrek hamabigarren artikulua jasotzen du, arazo juridiko handiena horrek agertzen du eta.
142. Manu horrek hainbat mezu jasotzen ditu, eta esan dute lehen hiru paragrafoetan ez dagoela aztertu beharreko auzirik. Lehenengoak gogorarazten du Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 legea (aurrerantzean, EGBL) ezarritako aurreikuspenak lanpostuen sarbiderako, hornidurarako eta sustapenerako hautaketa-prozesuetan aplikatuko direla, segurtasun-zerbitzu publikoan emakume eta gizonen presentzia orekatua sustatuz. Bigarrenetan, emakumeak polizia-kidegoetan sustatzeko planak lantzeko aukera xedatzen da, emakumeek eta gizonak polizian sartzeko eta ibilbide profesionalean gora egiteko aukera berberak izan ditzaten bermatze aldera. Plan horien bidez, dagokien plangintza-aldirako ezarritako da plantillan emakumeen zer portzentaje lortu nahi duten emakumearen ordezkartza urria zuzentzeko nahiz polizia-eraginkortasuna handitzeko. Era berean, emakumeen aldeko berariazko neurriak hartu ahal izango dituzte, egitatezko desberdintasun nabariak zuzentzeko, oraindik ere baldin badaude. Neurri horiek zentzuzkoak eta proportzionalak izango dira lortu nahi den helburua aintzat hartuta. Hirugarrenean, EGBLn ezarritako irizpideak aipatzen dira, gizonen eta emakumeen sailkapen-hurrenkeran izandako puntuaketa-berdintasunak ebazteko.
143. Funtsean eduki programatikoa eta nagusia duten aurreikuspen horiekin alderatuta, indarrean dagoen araudiko helburuak —gizonen eta emakumeen artean presentzia orekatua sustatzea, eta aukera-berdintasuna sustatzea— edo aipamenak egiten baitituzte, 4., 5. eta 6. zenbakietan zuzenean aplikatzekoak diren arau lotesleak aurreikusten dituzte. Horretarako, beharrezkoa da azterlan balioztatua egitea, enplegu publiko baterako sarbidea izateko aurreikusten baitira.

A) Puntuazio-marken berdinketak:

144. Funtsean gorabehera, begi-bistakoa da puntuazio-berdinketak konpontzeko ezarritako arauak ez duela garrantzi berbera, eta, gainera, ez da arau berbera. Esan den bezala, 47 bis artikuluko 3. paragrafoak arautzen duen bezala, aplikatzekoak izango dira “gizonen eta emakumeen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea aurreikusitako irizpideak”.
145. 234/2008 irizpenean, EGBLren 20.4) artikulua xedatutako neurria zeharkakotzat jo genuen, lanpostuen sarbidea, hornidura eta sustapenean hautaketa-prozesuak arautzen dituzten arauetara egokitzera behartzen zuelako, baita Euskal Autonomia



Erkidegoko Poliziaren esparruan ere. Helburua hau da: “gaitasun-mailan berdinketa dagoenean, lehentasuna ematea emakumeei; zehazki, Administrazioako kidego, eskala, maila eta kategorietan % 40tik beherako ordezkaritza dutenean, betiere beste hautagaiek neurria ezartzea beharrezkoa ikusten ez duten kasuetan izan ezik (sexe-bazterkeria ez dakarten arrazoiengatik); esaterako, enplegurako sarbide eta sustapenerako zailtasun berezia duten beste kolektibo batzuetakoak izatea”.

146. Ildo horretan, ez da beharrezkoa Batzordeak 64/2004 Irizpenean 110. eta hurrengo paragrafoetan zehaztutako oinarri juridikoa berriz aipatzea neurriaren bideragarritasun juridikoa ezartzeko; izan ere, Amsterdameko ituneko aurreikuspenetan justifikatuta dago. Europako Erkidegoa eratzekeo Ituneari sartutako aldaketak gaineratu zaizkio, baita gizon eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeko Europako zuzentarauak (enplegurako sarbideari, prestakuntzari eta sustapenari dagokionez) eta Justizia Auzitegiak horiek interpretatzeko emandako jurisprudentzia ere —1995eko urriaren 17ko (Kalanke kasua), eta 1997ko azaroaren 11ko epaia (Marschallkasua)—.
147. Era berean, gogoraraztekoa da Legebiltzarreko Alderdi Popularrak Kongresuan jarritako konstituzionaltasun faltaren inguruan auzetutako errekurtsoan aipatzen diren artikuluen artean, —20.4.b), 5, 6 eta 7 artikulua eta azken xedapenetatik bigarrenaren 2. paragrafoa— (funtzio publikoetan sarbidea izateko berdintasunaren eskubide-uraketatzat jotzen baitzen, EKren 14, 232 eta 103.3 artikuluetan aitortutako merezimendu eta gaitasun printzipioekin bat etorri), ez zela ageri orain aztergai dugun hau —GEBLren 20.4.a)—. Horrenbestez, Auzitegi Konstituzionalak urtarilaren 13/2009 epaiaren inguruko erabakia ematea falta da; izan ere, bat zetozen konstituzioko eskakizunak gainditzen ez dituela esaten.

B) Aginduaren aurrekariak:

148. Ondorioz, 47 bis artikuluko 4., 5. eta 6. zenbakietan oinarritu behar dugu, baina baldintza zehatzak aztertzen hasi baino lehen, Batzordeak beharrezkotzat jo du kontuan hartzea aurretiaz egon diren ebazpen judizialak eta lege-ekimenak.
149. Esan daiteke lege-aurreproiektua Segurtasun Sailak Ertzaintzako plantillan emakumeen ordezkaritza urria zuzentzeko gauzatutakoekintzen multzoa dela. Ekintza horiek ofizialorde-kategoriara igotzeko eta Ertzaintzako oinarritzko eskalako agente-kategoriara sartzeko barne-sustapenerako deialdietan egituratuta daude. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salak emandako epaien bidez baliogabetu ziren; zehazki, maiatzaren 12ko 335/2010 eta urtarilaren 26ko 55/2011 epaien bidez. Horietan, deitutako lanpostu hutsen % 50 baino



gehiago lehentasunez emakumeentzat izateko ezartzen zen, zuzenean, eta baldintzarik gabe.

150. Auzitegiak emandako epaiaren funts horretan zehazten da emakumeen plazak gordetzeko legezko arauketaren eskakizunak, alde batetik, EKren 103.3 artikuluan ezarritako funtzionario publikoen estatutu-arloko legea ezartzen duela, eta, bestetik, Konstituzio Auzitegiaren dotrina. Azken horretan, berariaz legezko gaikuntza eskatzen da oinarritzko eskubideetan edozein mugaketa egiteko eta, zehazki, berariazko probak izango dituzten deialdiei dagokienez.
151. Era berean, zehaztu egin behar da orain arte ez dela aztergai dugun araua bezalakorik egon; hots, bazterkeria positiboaren neurria ezarri duen lege-mailako araurik, ez estatukoa, ez autonomiakoa. Araua hautaketa-prozesuaren emaitzaren gainean aplikatzen da, emakumeen lehentasunezko sarbidearierrazteko.
152. Araudiaren egungo egoeran, autonomia-mailan dagoeneko aipatu dugu EGBLren 20.4 artikulua gaikuntza berbera zuten kasuetan emakumeen lehentasuna ematera mugatu zela, berdinketa konpontzeko beste irizpide batzuk baztertzeko asmoz, oro har, gizonen aldekoak izaten baitziren.
153. Emakume eta gizonen berdintasun eraginkorrerako maitxoaren 22ko 3/2007 Legeak (EGBEL) 1976ko otsailaren 9ko 76/207 Zuzentaraua gaineratu du, baita Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2002ko irailaren 23ko 2002/73 Zuzentarauak sartutako aldaketa ere —azken xedapenetatik laugarrena—. 5. artikulua gizon eta emakumeek lanpostuetara sartzean tratu- eta aukeraberdintasunaren printzipioa ezartzen du, profesionalen prestakuntzan eta sustapenean, eta lan-baldintzetan, baina horrek ez du bazterkeriarik ekarriko enplegu publikorako sarbidean, beharrezkoa den prestakuntza barne, ““ sexuarekin zerikusia duen ezaugarriren bat oinari hartuta tratu desberdintasuna egiten bada, ez da bereizkeriatzat hartuko kasu honetan: lanbideko jardura jakinen izaera dela-eta edo horiek egin beharreko testuingurua dela-eta, ezaugarri hori lanbidearen baldintza funtsezko eta erabakigarria bada, baldin eta helburua bidezkoa bada eta baldintza proportzionala bada, betiere”. Bestalde, 11. artikulua emakumeen aldeko ekintzen ahalmen publikoak hartzea aurreikusten du, berdintasunaren eskubide konstituzionala eraginkor egiteko, eta gizonekiko izatezko ezberdintasun egoerak zuzentzeko. Neurri horiek egoera horiek gertatzen diren unean aplikatuko dira “zentzuzkoak eta proportzionalak izango dira lortu nahi den helburuakiko”.
154. GEBELk, halaber, V. tituluan jorratzen du enplegu publikoan ezartzeko berdintasunaren printzipioa. Gainera, berariazko hainbat neurri sartzen ditu, baita prestakuntza-arloko ekintza positiboak ere (60. artikulua). Hala ere, ez dute sarbidea lortzen. Estatuko indar eta kidegoen kasuan, GEBELkaipatzen du Estatuko segurtasun indarrak eta kidegoak arautzen dituzten arauak emakume eta gizonen berdintasun



eraginkorra sustatuko dutela. Hala, lanbide-arloko edozein diskriminazio-egoera baztertuko dute, bereziki administrazioko sarbide, prestakuntza, igoera eta destinoetan nahiz administrazio-egoeretan (67. artikulua). Era berean, administrazio publikoen zerbitzura lan egiten duten arauak (berdintasun-arloan, genero-indarkeriaren prebentzioan eta bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzeko arloan), Estatuko segurtasun-indarrak eta -kidegoak aplikatuko direla ezartzen da. Hala badagokio, esleituta dituzten eginkizunen berezitasunetara egokituko da, berariazko araudiak ezarritako baldintzetan (68. artikulua).

155. GEBELren hogeita hamar xedapen gehigarriek indarrean dauden legeak aldatzen dituzte, legetik eratorritako eskakizun eta aurreikuspenetara egokitzeko. Horien baitan, funtzio publikoaren esparruan sartu behar diren zenbait lege sartzen dira. Horietan, ez da ezer xedatzen diskriminazio positiboaren irizpidearen arabera balizko esleipenak egiteari buruz, ezta GEBELk ezarritako puntuazio-berdinketak konpontzeko ere. Langileen estatutuko legearen testu bateginaren 17.4 artikulua berriak (martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitakoak, GEBELren hamaikagarren xedapen gehigarriko bigarrenak gaineratua) aurreikusten du negoziaketa kolektiboak ekintza positiboan neurriak ezarri ahal izango dituela emakumeek lanbide guztietarako sarbidea izan dezaten. Ondore horretarako, negoziaketa kolektiboak erreserbak eta lehentasunak ezarri ahal izango ditu kontratazio-baldintzetan; era horretan, gaitasun-baldintza berberetan, kontratuak egiteko orduan lehentasuna izango dute kasuan kasuko lanbide-talde edo -kategorian zein sexutako pertsonak egon gutxien eta pertsona horiek.
156. Legezko aurreikuspenen deskribapen horrek ez du inoiz ere zalantzan jartzen autonomiako legelariak autonomia-antolamenduan proiektua gauzatzen duen neurria sartzeko, baina aitzindaria den heinean, zorrotasun handiagoa du funtzio publikoen sarbide-esparruan diskriminazio positiborako neurriak hartzeko ezarritako baldintza konstituzionalak interpretatzean.

C) Auzitegi Konstituzionalaren doktrina

157. KEren 23.2 artikuluan aitortutako funtsezko eskubideari buruzko Auzitegi Konstituzionalaren doktrina luze garatuta dago hainbat aipamenetan. Ideia hauetan laburbil daiteke:
- a) Ez du inolako eskubiderik ematen funtzio jakin batzuk egiteko, ezta funtzio horietarako izangai proposatzeko eskubiderik ere; izan ere, herritarrei berdintasuneko egoera juridikoa bermatzen die funtzio publikoen sarbidean. Ondorioz, ezinezkoa da horietara sarbidea izateko baldintzak ezartzeko ezintasuna (diskriminazioa tartean dagoenean), eta erreakzio hutserako eskubidea ematen die



ohiko justiziaren aurka egiteko, eta, azken alderdi gisa, Auzitegi Konstituzional honen aurrean, apirilaren 23ko 50/1986 KAE, 4. oinarria; azaroaren 25eko 148/1986 KAE, 9. oinarria; abenduaren 9ko 193/1987 KAE, 5. oinarria; maiatzaren 31ko 200/1991 KAE, 2. oinarria; urriaren 18ko 293/1993 KAE, 4. oinarria; azaroaren 29ko 353/1993 KAE, 6. oinarria).

b) Berme materiala ematen du, eskatutako baldintza eta betekizun guztiak merezimendu- eta gaitasun-printzipioei erreferentzia egin diezaieten. Hala ere, funtzio publikora sartzeko eskakizuna printzipio horien arabera egiteko eskakizuna KEko 103.3 artikuluan ageri da, eta ez KEren 23.2 artikuluan. Beraz, bi agindu konstituzionalen artean elkarrekiko harremana egon behar du, interpretazio sistematiko batean hala jakinarazi behar delako. Hala, erreferentzia hori egin gabe, espainiarren artean ezberdintasuna ezartzen duten horiek guztiak (apirilaren 23ko 50/1986 KAE, 4. epaia; martxoaren 31ko 73/1998 KAE, 3. epaia eta maiatzaren 29ko 138/2000 KAE, 5. epaia) berdintasun-printzipioa urratzen dutela ulertuko da.

c) Berdintasun-egoeran funtzio eta enplegu publikoetara sartzeko eskubideak ez du eragotziko legelariak askatasun handiz jokatzeko kortuan hartu beharreko hautaketa-probak arautzean eta merezimenduak nahiz gaitasunak zehaztean, baina askatasun horri muga positiboak eta negatiboak ezatzen dizkio, eta ezingo dira hautsi. Muga positiboak dagokienez, legelariak nahitaez ezarri beharko ditu sarbidea izateko nahitaezko baldintzak. Berdintasunari buruzkoak izango dira, eta berariaz eta soilik merezimendu eta gaitasunarekin loturikoak izango dira (KAren otsailaren 14ko 27/1991 4. oinarria; urriaren 18ko 4. epaia; eta ekainaren 20ko 185/1994 3. oinarria, besteak beste). Horren ondorioz, ikuspuntu negatibo batetik, debekatu egin da sarbideen baldintza horien araudia baldintza zehatz eta banakoetan egitea, eta pertsonen benetako onarpenaren baliokide diren baldintzetan egitea (urriaren 3ko 269/1994 KAE, 5. oinarria; urtarrilaren 29ko 11/1996 KAE, 4. oinarria; eta martxoaren 11ko 37/2004 KAE, 4. oinarria). Hala, kontu handiz saihestuko da arbitrartatea egon daitekeen kasuetan, hain zuzen, «arrazoirik ez dagoenean, edo araudia bera falta denean oinarria» (urtarrilaren 29ko 11/1996 KAE, 4. oinarria).

158. Adierazitakoaren arabera, berdintasun-baldintzetan funtzio publikoetarako sarbidea izateko eskubideak onartzen du legelariak kontuan hartu ahal izatea izangaien sexua, betiere jardura profesional jakinen izaerarekin edo gauzatzen diren testuinguruarekin lotura badute, GEBELren 5. artikulua dioen bezala. Era berean, diskriminaziozko neurri positiboak hartzeko aukera ematen du gizon eta emakumeen izatezko ageriko ezberdintasun-egoerak zuzentzeko balio badute, eta lortu nahi den helburuarekiko zentzuzkoak eta proportzionalak badira, GEBELren 11 artikulua ezartzen duen bezala.



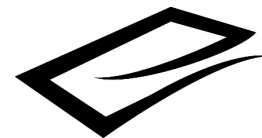
159. Horrenbestez, KEren 9.2 artikuluan aurreikusten den oinarrizko berdintasuna lortzeko baliozko bidea denean, ezin dira *ad limine* baztertu esparru horretako KEren 14. artikulua aitortutako berdintasun-printzipioa gauzatzera bideratutako legezko egiturak.

160. Konstituzio Auzitegiaren 26/2011 Epaiak honela dio:

"sexu-arrazoiengatik diskriminazioa debekatzen da (KEren 14. art.), historikoki emakumeak bizitza sozial eta juridikoan izan duen gutxiagotasun-egoerarekin amaitzeko asmoz, bereziki enpleguari eta lan-baldintzei dagokienez. Azken batean, emakumeek berriazko zailtasunak dituzte lanera sartzeko eta lanpostuen barne-sustapenerako (uztailaren 16ko 128/1987 KAE, 5. oinarria; urtarrilaren 31ko 19/1989 KAE, 4. oinarria; azaroaren 28ko 317/1994 KAE, 2. oinarria; urtarrilaren 30eko 17/2003 KAE, 3. oinarria; uztailaren 3ko 214/2006 KAE, 2. oinarria; eta azaroaren 20ko 324/2006 KAE, 4. oinarria).

Hori dela eta, baieztatu egin dugu sexu-arrazoiengatik eginiko diskriminazioak ez dakarrela soilik gutxiespen-tratamendua debekatzea —pertsonek sexuaren arrazoi huts eta soilen oinarrituta daude; hau da, sexuaren lotura zuzena eta argia duten arrazoiak edo inguruabarrak tartean daudenean, adibidez, haurdunaldietan, begi-bistako arrazoiengatik, elementu edo eragile ezberdina denez, emakumei soilik eragiten baitie (ekainaren 7ko 173/1994 KAE, 2. oinarria; uztailaren 23ko 136/1996 KAE, 5. oinarria; urtarrilaren 29ko 20/2001 KAE, 4. oinarria; eta otsailaren 25eko 41/2002 KAE, 3. oinarria, besteak beste)—, emakume eta gizonen tratua eta aukera-berdintasun eraginkorra ezartzeko neurriak hartzea ere bai. Horrenbestez, emakumeek, gizonen ez bezala, laneko sarbiderako edo enplegua mantentzeko dituzten benetako desabantailak konpentsatzea xededuten legezko neurriak ezin dira berdintasun-printzipioaren kontraketatzat jo, oso bestelaketatzat baizik; izan ere, gaur egungo diskriminazio-egoerak desagerraraztea dute helburu, KEren 9.2 artikuluan eskatzen diren eskubideak eraginkor egiteko (19/1989 KAEko 7. oinarria eta ondorengoak, 4 oinarria; martxoaren 9ko 28/1992 KAE, 3. oinarria; abenduaren 14ko 229/1992 KAE, 2. oinarria; urtarrilaren 14ko 3/1993 KAE, 3. oinarria; eta martxoaren 25eko 109/1993 KAE, 5. oinarria, guztia)”.

161. Hori bai, oinarrizko eskubide bati buruz hitz egiten ari direnez (KEren 23.2 artikulua), eta ikusita behin eta berriz lotura dagoela aipatu eskubidearen eta tratamendu ezberdinen artean, trataera ezberdinen justifikatzeko karga zorrotasun bereziaz



zaintzen da baldintza pertsonal bat tartean dagoen; hots, sexuarena. Nahiz eta, itxura batean, lotura zuzenik ez izan printzipio horiekin [gauza bera esan daiteke minusbaliotasunaren kasuan (269/1994 KAE) edo adinaren kasuan (75/1983 eta 38/2007 KAE)].

D) Kasuaren aplikazioa:

162. Justifikazioari dagokionez, neurriaren helburuak behar bezala azalduta daude genero-inpaktuaren ebaluazio-azterketan, eta polizia-jarduerarekin berarekin loturiko arrazoen konbinazioa dira. Horretarako, onuragarria izango da polizia-kidegoetako gizon eta emakumeen artean oreka handiagoa izateko, kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetan emakumeak duen ordezkartza urria. Egoera horrek jatorri historikoa du, polizia-eginkizunen inguruan estereotipo faltsuak egon izan baitira, eta, ondorioz, ustez gizonezkoen ezaugarriak dituztela dituzten ustea zabaldu da (indar fisikoa erabiltzearena, esaterako), baina ez dira baztertzen ingurumeneko beste eragile batzuk.
163. Polizia-eginkizuna hobetzearekin loturiko arrazoen artean, emakumeen presentzia handiagoa dago: "a) poliziaren gaineko kulturaren barne-paradigma ddatzen laguntzen du (hau da, polizia herritarren zerbitzura dagoen prestaziopubliko gisa ulertzea, eta ez indar publiko huts gisa); b) emakumeen arretarekin loturiko eginkizun jakin batzuk emakume funtzionarioek egitea ahalbidetzen du (etxeko tratu txarren biktimei edo bortxaketen biktimei arreta ematea, emakume atxilotuak miatzea, eta abar), emakumeek egoera deserosorik jasan ez dezaten; c) polizia-eginkizunak egitea ahalbidetzen du, betiere emakumeizatea ezinbestekoa denean (adibidez, polizia-ikerketen kasuan, emakumeen rola erabakigarria denean arrakasta izateko).
164. Bestalde, emakumeen ordezkartza urriak kopuru bereziki adierazgarriak erakusten ditu:
- “2015eko ekainaren 30ean, 7.709 pertsonako plantila aktiboa zegoen Ertzaintzan, eta, horietatik, % 88,96 gizonezkoak ziren, eta gainera % 11,04, emakumeak. Emakumeen presentzia murriztu egiten da agente-mailak gora egiten duen heinean. Hala, gizonezkoak dira intendente guztiak, komisarioen % 94,03 eta komisariordeen % 98,25. 4 emakume komisario besterik ez zeuden, eta emakume komisariorde bakarra. Udaltzainen kasuan, 3.269 pertsona zeuden: horietatik, 2.875 gizonezkoak dira, eta emakumeak, 394 besterik ez.”.
165. Espediente honekin batera erantsi diren memorian eta azterlanetan, polizia-kidegoetan emakumeek eta gizonek duten egoerari buruzko diagnostikoa egiten da. Horietatik ondorioztatzen da sartzeko eta polizia-eginkizuna gauzatzeko baldintzei



dagokienez itxura batean berdintasuna badago ere, praktikan desoreka dagoela emakumeek eta gizonek gauzatzen dituen polizia-eginkizunen artean (% 12). Beraz, agerian uzten du baldintzatzaile faktikoak daudela, eta horien gainean arauak jarduteko hainbat modu ezarri nahi dituela, hala berdintasunarekin loturiko arrazoiengatik, nola polizia-antolaketaren beharriengatik eta erkidegoko edo hurbileko polizia-antolamenduan kultura-aldaketa sendotzeko.

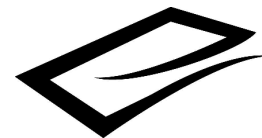
166. Lortu nahi den helburura iristeko neurrien aukeraketara eramaten da kontua, horrek ez baitu legitimatzen ekintza positiboen edozein neurri hartzea. Gure antolamenduan, aurreikusi den helburu legitimoa erdietsi behar da — egokitasun-judizioa —, beharrezkoa izan behar du; hots, ez da helburu horibera lortzeko neurri arinago baina eraginkortasun bereko bestelako neurririk egongo — beharrezkotasun-judizioa — eta, azkenik, haztatua eta orekatua izan behar du, intees orokorrerako, beste ondasun edo balioen gainean eragozpen baino onura (abantaila) gehiago atera daitezkeelako neurri horretatik.
167. Sarbidean emakumeari lehentasuna emateak, zalantzarik gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetan sartzeari, neurri eraginkorra izanik, eta, beraz, ezin hobea gizon eta emakumeen artean oreka handiagoa lortzeko
168. Beharrianari dagokionez, esperientzia enpirikoak erakusten du sarrera- eta sustapen-prozeduren aplikazio praktikoa (baldintzak, frogak, prestakuntza- eta praktika-aldiak) ez direla, itxura batean, erabakigarriak egiaztatutako izatezko desberdintasun horretan, ez eta emakume hautagaiek atzera egiteko eta prozedura horiek ez gairatzeko arrazoi eta eragozpen ere. Aitzitik, aaudiak emakumeen aldeko hainbat neurri jasotzen ditu (baldintza fisiko bereziak, frogaz zehatzak beraientzat, gaitasun bera erakusten duten kasuetan emakumea lehenesteko neurriak, eszedentzia eta baimen jakinetan igarotako denbora zerbitzuan egindako denboratzat balioestea...), baina, itxuraz, aldeko neurri horiek ez dira nahikoa Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetan emakume gehiago izateko.
169. Betekizunen inguruan hainbat jarduketa egin dira. Hala, haien ezaugarri fisikoetara egokitu dituzte, eta, era berean, bermatu egin da baldintza jakin batzuek ez izatea eragin kaltegarriarik emakumeen kontra berdinketak konpontzean. Neurri horiek guztiek ez eraginkortzat jo dira, aurreproiektuaren helburu guztiak lortu ahal izateko.
170. Azken batean, epaitzeko azken parametroak — zentzuko ahalegina badakar berdintasunaren oinarritzko eskubidean, funtzio publikoetan sartzeko, edo, bestela, gehiegizkoa bada — dakar inguruabar delikatuena.



171. Horiek aztertzeke, ez dugu Auzitegi Konstituzionalaren dotrinarik. Hala ere, EKren 10. 2. artikulua bidez jo dezakegu Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegikora, 76/207/EK Zuzentarauaren esparruan zehaztu duenez.
172. Puntu honetara iritsita, egokia da bere epailetatik dotrina bat ateratzeak dakartzan zailtasunen inguruan ohartaraztea—oro har, oso labur azaltzen da, eta arau orokor gisa, hainbat salbuespen gaineratzen dira— eta kasu zehatzean garrantzitsua bada eta zalantzarik gabe ondorioak ateratzea ahalbidetzen badu aztertu gabeko neurri baten inguruan (hizpide dugunaren kasuan bezala), ezin daahaztu berdintasun-printzipioak —sarbidearen berdintasun-funtsa eta -oinarria— funtsean harremanen arabera da —eta alderatzeko baldintza egokia— eta dinamikoa —eskatzen du, estatu sozial eta zuzenbidezko gizarte demokratikoarekin bat etorritz—.

E) Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiko dotrina:

173. Kalanke (EKJAN 1905, 172) eta Marshall (EKJAN 1997, 236) epaien ondorengo jurisprudentzia —64/2004 Irizpenean aipatu dira— tratu-berdintasunari buruzko beste epai batzuekin aberastu dira, Amsterdameko Ituna eta Europar Batasunaren tratatua indarrean sartu zirenean, bereziki kasu hauei dagokienez: Badeck (EKJAN 2000, 256), Abrahamsson (EKJAN 2000, 166), Lommers (EKJAN 2002, 106) eta Serge Briheche (EKJAN 2004/279).
174. Kalankeren epaiaren arabera, zuzentarauak estatuko hainbat neurri baimentzen ditu enplegu-sarbidearen esparruan, sustapena barne. Bereziki emakumeen alde egiten du, eta lan-merkatuan lehiatzeko gaitasuna hobetzea etagizonen aukera-berdintasunez ibilbide profesionala garatzea dute helburu. Hori bai, izendapena edo sustapena egitean, emakumeen lehentasunaren alde erabat eta baldintzarik gabe egitea tratu-berdintasuna bultzatzeko neurria baino harago doa, eta Zuzentarauaren 2. artikuluko 4. zenbakian ezarritako salbuespenaren mugak gaindtzen ditu. Gainera, mota horretako sistema batek, emakumearen ordezkartza gizonarenarekin alderatuta, zerbitzu baten maila guztietan berdindu nahi badu, 2. artikuluko 4. zenbakian jasotako aukera-berdintasunaren sustapena haren emaitzagatik ordeztu du, aukera-berdintasun hori aplikatzearen bidez besterik ezingo litzateke lortu.
175. Marshall epaiak nolabaiteko modulazioa ekarri zuen, eta zuzentarauaren 2. artikulua 4. atalean onartzen zen, sustapenen kasuan, gizonezko izangaien gaitasun berdina duten emakumeek (gaitasun, konpetentzia eta prestazio profesionalei dagokienez), eskubidea izango dutela, irekiera-klausula alde batera utzi gabe (balantzak gizon izangaien alde egiteko arrazoiak baldin badaude), lehentasunezko tratua jasotzeko ordezkartza gutxien duten sektoreetan. Arau horrek ondorio kaltegarriak izan ditzake emakumeentzat, hain zuzen, jokabide eta jarrera jakin



batzuen ondorioz (berdinketen kasuan, gizonezko izangaiek bultzatzeko joera, bereziki, emakumeek bizitza aktiboan dituen eginkizunen eta gaitasunen inguruko ideiak estereotipoetan oinarrituta dagoelako, eta, beldurraren ondorioz; adibidez, emakumeek maizago etetea haien karrera). Hala, muriztu egiten dituzte gizarteko bizitzan egon daitezkeen izatezko ezberdintasunak.

176. Badeck Epaiak, era berean, bere gain hartzen du emakumeek ordezkaritza urria duten eginkizun publikoko sektoreetan, sexu ezberdinetako izangaien artean kualifikazioan berdintasuna dagoen kasuetan, lehentasuna ematea emakume izangaiei, betiere beharrezkoa bada emakumea sustatzeko planaren helburuak lortzeko, horrekin goragoko maila juridikoari kontra egiten ez badio behintzat (irekitzeko klausula), baldintza batekin: araudi horrek bermatu egin behardu izangaia objektiboki aztertu direla, eta kontuan hartu dela izangai guztien egoera pertsonala (legezkoa izango da kontuan hartzea irizpide positibo eta negatibo jakin batzuk, sexuari dagokionez era neutroan jasota egon arren, oro har, emakumeen aldeegiten badute).
177. Abrahamsson epaiak, halaber, parametro esanguratsuak jasotzen ditu; izan ere, Auzitegiaren arabera, estatuko araudi bat ez dator bat zuzentarauarekin (i). Araudi horren arabera, eginkizun publikoko enplegu bateansartzeko izangaia ordezkaritza urria duen sexukoa bada, eta enplegu horretarako gatasun nahikoa badu, lehentasunez aukeratu beharko dira kontrako sexuko izangaia; hau da, bestela izendatuko zirenak. Neurri hori beharrezkoa izan zen ordezkaritza urria zuen sexuko izangaia hautatzeko, eta izangaiek hurrenez hurrendituzten merezimenduen arteko ezberdintasuna ez denean lanpostu-horniduran (ii) objektibotasunaren eskakizuna urratzeko bezain garrantzitsua, baita aurretiaz mugatutako lanpostu-kopuru jakin batera bideratutako prozedurei soilik aplikatzen bazaie ere, edota goi-mailako eskola bateko berariazko programa baten esparruan sortzen diren lanpostuei, betiere diskriminazio positiboko neurriak aplikatzen badira (iii) edo hornitu beharreko lanpostu-mailaren arabera bada.
178. Bestela, zuzendaritzak ez du debekatzen estatu-mailako jurisprudentzia ezartzea. Horren arabera, ordezkaritza urria duen sexuko izangai bati lehentasuna eman ahal zaio kontrako sexukoa den lehiatzailearen aurrean, betiere izangaiek merezimendu baliokideak edo ia baliokideak badituzte, eta izangaia objektiboki aztertu badira, uneoro izangai guztien egoera pertsonalak kontuan hartuta.
179. Lommers epaian sartzen da beharbada gero eta urrunago dagoen kasuak — haurtzaindegi-plazak gordetzea administrazioko langilei—badirudi gainditu behar ez diren mugak ezartzen dituela. Neurria “aukera-berdintasunaren kontzeptu mugatuaren esparruan sartzen da, emakumeei ez baitaie aukera ematen haien lanpostua gordetzeko: haien ibilbide profesionalean jarraitzeko eta aurrerapausoak egiteko lan-baldintza jakin batzuk ezartzen



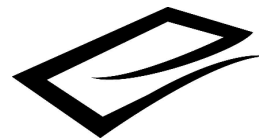
zaizkie. Horiek, hasiera batean, enplegurako sarbidea izateko eta ibilbide profesionala garatzeko, edota lan-merkatuan lehiatzeko gaitasuna hobetzeko eta gizonen aukerak berdinekin ibilbide profesionala garatu ahal izateko kategorian sartu behi dituzte.”.

180. Azkenik, Serge Briheche epaia interesgarria da bilduma gisa:

“23. Ekintzaren helburua funtzio publikoko sektorean lehentasunez emakume izangaiak bultzatzea izango da, erkidegoko dekretuarekin bat etorritik, betiere zuzenean eta baldintzarik gabe lehentasuntzat jotzea badira lehiatzaile gizonen kualifikazio berbera edo handiagoa duten emakume izangaiak, eta hautagaitzetan objektiboki aztertzen bada kontuan hartu direla izangai guztien egoera pertsonalak (ildo horretan, ikusi 2000ko martxoaren 28ko epaia [TJCE 2000, 56] , Badeck eta beste batzuk C-158/97, Rec. I-1875 or., 23. paragrafoa).

24. Baldintza horien oinarrian dago oinarritzko eskubide baten edozein salbuespenen irismena zehaztea; besteak beste, Zuzentarauak hitzartutako gizon eta emakumeen tratu-berdintasuna, beharrezkoa baita proportzionatasunaren printzipioa errespetatzeko. Horrek eskatzen du salbuespen horiek ez gainditzea proposatutako helburua lortzeko egokia eta beharrezkoa dena. Era berean, beharrezkoa da, ahal den neurrian, tratu-berdintasunerako printzipioa modu horretan lortutako helburuaren eskakizunekin uztartzea (Lommers epaia [EKJAN 2002, 106] , lehen aipaturikoa, 39. zenbakia).

25. Baimendutako zuzentarauaren 4. paragrafoko 2. atikuluak, beraz, enplegurako sarbide-esparruan zehaztutako estatuko neurriak baimentzen ditu, eta, bereziki emakumeen alde egonik, lan-merkatuan lehiatzeko gaitasuna hobetzea dute helburu, baita gizonekiko berdintasunean, karrera profesionaletan garatzea ere. Xedapen horren helburua da oinarritzko berdintasuna lortzea, eta ez soilik berdintasun formala gizarte-bizitzan sor daitezkeen ezberdintasunak murriztean, eta, hala, KEren 141. artikuluekin bat etorritik (RCL 1999, 1205 ter eta 1997ko 3695 KEren legea), 4. paragrafoan, kaltetutako pertsonen karrera profesionalean egon daitezkeen desabantailak saihestea edo konpentsatzea (ikusi, ildo horretan, 1995eko urriaren 17ko epaiak [EKJAN 1995, 172], Kalanke, C-450/93, Rec. I-3051 or., 19 paragrafoa eta 2000ko uztailaren 6koa [TJCE 2000, 166], Abrahamsson eta Anderson, C-407/98, Rec. I-5539 or., 48 letra)”).



F) Aurreproiektuaren agindua:

181. 47 bis artikulua 4, 5 eta 6 letrak aztertze kontuan hartu beharreko alderdiak mugatu ondoren, komeni da hitzez hitz idaztea:

“4. Poliziako agentearen eta komisario-ondokoaren kategorietan txanda irekiaren arabera sartzeko hautaketa-prozeduretan, emakumeek zenbat plaza bete behar dituzten zehaztu behar da, segurtasunaren zerbitzu publikoan emakumeen eta gizonen presentzia orekatzeko xedea iriste aldera sustapen-planean aurreikusitakoari jarraituz.

Plaza-kopuru hori, beraz, iritsi nahi den helburuaren arabera proportzioan eskainiko da, eta ezingo da izan deialdian eskainitako % 40 baino gehiago; halaber, ezingo da izan emakumeak sustatzeko planei eta hautaketa-prozeduretan parte hartzen duten eta prozedura gainditzeko emakumeen estatistika-datu historikoei jarraituz arrazoiz ezarritako portzentajea baino txikiagoa.

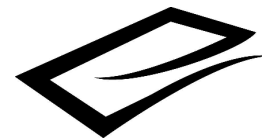
Oro har, emakumeak sustatzeko planak egiten ez diren bitartean, gutxieneko portzentajeak ezin du izan % 25 baino txikiagoa, betiere, hiru plaza baino gehiago badaude deialdian.

5. Aurreko paragrafoan aipatzen diren hautaketa-prozeduretan, deialdian eskaintako lanpostu hutsak esleitzeko orduan, izargaien behin betiko zerrenda bakarrari jarraituko zaio, hain zuzen ere zerrenda horretan ageri den puntuazio-hurrenkerari eta berdintzeak ebazteko lege ezarritako irizpideei jarraituko zaie.

Aurreko paragrafoan xedezat aipatzen den portzentajea ez bada iristen goragoko paragrafoan xedatutakoari jarraituz, emakumezko hautagaiak lehenetsiko dira xedera iritsi artean, betiere:

a) Hautaketa-sistemako oposizio-aldiko probak eta azterketak gainditu izanak gaitasunean baliokidetasuna badakar.

b) Lehentasun hori aplikatuz hautatutako emakumezko hautagaien eta atzera geratu ziren gizonen arteko puntuazioaren arteko aldeak bada % 15 baino handiagoa, ez oposizio-aldian, ez eta, hala behar balitz, hautaketa-aldian ere –beti ere hautaketa-sistemaren arabera–.



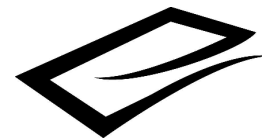
c) Beste hautagaiari ez badio eragiten neurri hori ez aplikatzeko legezko ezein salbuespenek, nahiz eta sexua dela-eta diskriminaziorik eragiten ez dutenen artekoak izan, hala nola enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetakoak izatea.

6. Aurreko idatzi-zatian aipatzen den lehentasun hori aplikatzeko, beharrezkoa izango da hautaketa-prozesuaren deialdian eskaintzen diren lanpostuei dagozkien kidego, eskala eta kategorietan emakumezko funtzionarioak ez iristea % 33ra. "

182. Agindutik, ezaugarri hauek ondorioztatzen dira aurreproiektuak sartzen dituen ereduak:

- a) aplikatzekoa da Ertzaintzan eta udaltzaingoko kideetan aplikatzea.
- b) Lehentasuna ematen zaie gizonen aurrean, baina baldintza batzuekin: (i) beste izangaiak ez izatea neurria ez aplikatzea justifikatzen duen arrazoirik (sexu-diskriminaziorik tartean ez badago); adibidez, enplegura sartzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetakoak izatea; (ii) baldintzatasuna egotea gaitasunetan, hau da, oposizio- edo lehiaketako probak eta ariketak gainditzean; (iii) lortutako puntuazioa, gizonetako izangaiaren aldean, ez izatea oposizio- edo lehiaketa-fasearen puntuazioaren ehuneko hamabost baino "txikiagoa" ("handiagotzat" jo beharko da), hautaketa-sistemaren arabera.
- c) Lehentasuna ezarrita duten plaza-kopurua malgua da. Hala, sustapen-planean lortu nahi diren helburuen proportzio berekoa izan behar du, eta neurriaren arrazionaltasuna datu estatistiko historikoen arabera justifikatu beharko da hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten eta gainditzen dituzten emakumeen ehunekoaren gainean. Ezingo dute deitutako plazen %40ko kopurua gainditu.
- d) Lehentasuna aldi baterako izango da, betiere hautaketa-prozesuko deialdian zehaztutako kidegoan, eskalan eta kategorian % 33ko edo gutxiagoko presentzia duten emakumeak badaude (47 bis artikuluko 6. paragrafoan zer esanahi duten ulertu behar da).

183. Lege-mailako tresna bat erabiltzeak jarduteko tarte oso zabala ematen dio; izan ere, hainbatetan esan dugun bezala, legegaria ez da KERO eta EAEren aurreikuspenen betearazle hutsa, egituratzeko askatasuna izango baitu. Hala, eskubidea izango du aukera politiko zabalaren baitan zuzenbidea sortzeko, baina askatasun horrek zenbait muga izango ditu (kasu honetan, konstituziokoak eta erkidegoko zuzenbidekoak).



184. Era berean, adierazi dugun bezala, sexua bereizketajuridikoaren beste irizpide baten moduan erabil daiteke, baina legitimitate konstituzionalaren judizioak kanon zorrotzagoa ezartzen du; hots, irmotasun handiagoaproportzionaltasunaren inguruko eskakizun materialetan, baldin eta hirugarrenen eskubide edo askatasunetan eragiten badu. Funtsezkoak dira, gainera.
185. Azkenik, funtsezko eskubideen gainean jokatzeko denon, arauaren idazketaren helburua segurtasun juridikoa eta eskubidearen ziurtasuna bilatu beharko ditu. Hala, horien anbiguotasunak ezingo ditu ekarri interpretazio bat baino gehiago, eta *a fortiori*, enuntziatuaren aplikazio bidegaberik.
186. Ulertzeko erraza den moduan (eta konstituzioko eta erkidegoko dotrinaren irakurketak hala frogatzen du), sexuaren arabera diskriminazio positiboa dakarten neurriak ezartzen dituzten legezko neurrien judizio korapilatsua da, eta proportzionaltasunaren analisiak ezartzen duen kautelaz eta neurritz jokatu behar da.
187. Aginduaren analisisan, neurriaren elementu nagusia, zalantzarik gabe, lehentasunak ezartzen du, puntuazioan % 15 baino gutxiagoko ezberdintasuna dagoenean.
188. Europako Erkidegoko Justizia Auzitegiaren itxurazkoirmotasuna gorabehera, epaietan ez da inolako debekurik agertzen beste sexuko lehiakidearen aurrean ordezkaritza urria duen izangaiari lehentasuna emateko; garrantzitsua da zer baldintza bete behar dituen neurriak proportzionaltasun-printzipioarekin bat etortzeko. Zehazki, Abrahamsson epaiak eskatzen du izangaiek merezimendu baliokideak edo ia baliokideak izatea. Ohar horrek, auzitegiak aukerako uztartzea erabiliz —lehentasuna ez dago baldintza berariaz baliokidetasunarekin—, babesa emango lioke ezberdintasun urria sortzean indarrean dagoen lehentasunari —ia baliokideak izatearen kontzeptua betetzeko—.
189. Testuinguru horretan, % 15, Estatuko Kontseiluak esandakoa parafraseatuz, Europako Erkidegoen Justizia Auzitegiak onartzen duen printzipio meritokratikoaren moderazio objektiboaren eta zentzuzkoaren ondorio izan daiteke. Izan ere, Auzitegiak, oro har, beteko den lanposturako egokitasuna edo gaitasuna eskatzen du, baina merezimendua erlatibizatzen du, nolabait esatearren kaltetutako taldekoak sartzen direnean. Hala, diskriminazioaren aurkako babesaren plangintza indibidual hutsa gaitzen du, eta diskriminazioaren neurri kolektiboa berreskuratzen du (2006ko ekainaren 22ko Irizpena).



III HAUTAKETA-ARLOKO NEURRIAK

190. Sarbide-arloko aldaketak ez dira ez zedarritzen, ez agortzen 47 bis artikuluan xedatzen denarekin bat etorritik. Hautaketa-auzitegiak eta -organoak ez dira EHPLren 48. artikuluan berritu behar.
191. Auzitegi Konstituzionalak aitortu duenez, KEren 232 artikulua funtsezko eskubidearen baitan dago. Hala, hautaketa-prozesuetan funtzio publikoko edo funtzionarioen sustapenerako izangai gisa parte hartzen dutenak babesten ditu “hautaketa-auzitegiak osatzen dituzten pertsonak KEren 103.3 artikuluan eskatzen diren merezimendu- eta gaitasun-baldintzak betetzen dituztenak (AKE 13/2009, 215/1991 eta 174/1996)”.
192. Proiektuak konstituzioaren eskakizun hori eguneratzen du. Gainera, EHPL berriz hona ekarritik, EBEPen 60. artikulua testuak, gehigarrien bat gorabehera, ezingo baitute organo horietan parte hartu, —hautaketa edo izendapen politikoko langileez gain, bitarteko funtzionarioek eta behin-behineko langileak— bi talde berri osatuko dituzte: aldi baterako lan kontratadun langileak eta azken urteak enplegu publikoan sartzeko izangaiak prestatzen eman dituztenak.
193. Zabalkunde horri buruz ezin da ezer esan. Lehenengorik dagokionez —aldi baterako lan kontratadun langileak—, bitarteko funtzionarioen artean bazterkeria arrazoiaren identitatea antzematen da. Bigarrenari dagokionez, berriz, —azken urteak enplegu publikoan sartzeko izangaiak prestatzeaz arduratu diren pertsonen kasuan—, bazterkeria justifikatzen duten partzialtasun-susmoak egon daitezke.
194. Hautaketaren epigrafean sartu nahi ditugun aurreikuspenen analisia agortzeko, zortzigarren eta bederatzigarren xedapen iragankorreik buruzko gogoeta soila egingo litzateke.
195. Zortzigarren xedapen iragankorrean aurreikusten da lan kontratadun langile finkoak aguazil lanpostuak gauzatzen ari badira eta legea martzean funtzionario publikoentzat gordeko dira.
196. Mota horietako salbuespen-egoera hori EBEPen bigarren xedapen iragankorrean adierazten dira, eta aguazilen kasuan arauketa orokorra aplikatzea xede duen aurreproiektuaren erantzunaren aurka ezin da egin, oinarritzko legelariak egokitzen jo baitu egoera hori konpontzeko.
197. Oinarritzko estatutuak lan kontratadun bitarteko langileak sustatzeko prozesuen aplikazioa jasotzen du, betiere EBEP indarrean sartzeko den unean funtzioak ematen ari bada, eta, aurreproiektuak erreferentzia gisa hartzea indarrean sartzeko denean,



hartzaileak mugatzeko. Hala, erlatibizatu egingo da izatezko aurrekontuak jasotzen duen lanpostuen sailkapena EBEPetik dator eta.

198. Bederatzigarren xedapen iragankorrari dagokionez, berriz, egia da berriz ere sarbiderako prozedura mugatua ezartzen duela, baina egia da, era berean, kasu berezi bati erantzuten diola; izan ere, udaltzaingoko kidegoa sortzeak esan nahi du aguazilek ordura arte betetzen zituzten eginkizunak kidego horretako kideen eginkizuntzat joko direla. Langile horien egoera konpondu behar da, udalerriaren antolamenduari buruzko erabakira egokitzeko; hau da, neurria justifikatzen duen erabakira.
199. Beste kasu batzuetan bezala, aurreproiektuaren konponbidea auziperatu baino lehen, funtsezko bi ideia hartu behar ditugu oinarri.
200. Alde batetik, administrazio publiko baten zerbitzuan sartzen diren funtzionarioak legez eta erregelamenduz definitutako egoera juridikoan jartzen da, eta, horrexegatik, araudiaren tresna batekin eta bestearekin alda daiteke, baina horrek, ondorioz, ezingo du ekarri estatutuen egoera izoztuta geratzeko sartzeara araututa zegoen baldintzetan (99/1987, 129/1987 eta 70/1988 KAE). Berdintasun-printzipioaren babespean, eta iraganeko egoerekin alderatuta, ezin dira gerarazi administrazio publikoek erabakitzen dituzten erreforma organikoak eta funtzionarioenak (160/1989 KAA).
201. Zentzuzko ondorio gisa, legelariak edo gobernuak erabakitzeko tarte zabala du bere egiturak sendotu, aldatu edo osatzean, baita antolamenduari dagokionez bere zerbitzuan dagoen langileen estatusa egituratzeko eta zehazteko ere (KAE 57/1990 [RTC 1990\57]). Egitura horien arteko diskriminazioak zuzenbidearekin bat datoza, eta askotariko moduetan gera daitezke zehaztuta. Halakorik egotekotan, administrazioak helburu orokorrak ez diren emaitzak ezberdintzeko irizpideak aplikatzetik eratorritakoak izango dira (7/1984, 68/1989, 77/1990 eta 48/1992 KAE)” (KAE 293/1993, 3. oinarria).
202. Legelariak baliozta ditzakeen irizpide objektiboen artean, antolamendu-neurri horrekin lortu nahi den helburua balioztatu behar da, baita betekoa diren lanpostuen ezaugarriak, langile publikoei esleitutako eginkizunen egungo eta etorkizuneko prestazioak edo aurrekontu-aurreikuspenak ere (9/1995 KAE eta KAA 541/1985).
203. Esan dugun moduan, aguazilak klase jakin bateko funtzionarioak dira —zerbitzu berezien azpi-eskalakoak—, eta desagertu egingo da, mota horietako plazak udalerriak udaltzaingoko kidegorik ez duenean besterik ezin baita sortu.
204. Legelariak inguruabar hori kontuan hartu ahal izango du, eta, legitimotzat jo ahal izango da poliziaren kidegoetan sartzeko erabakia hori dezake. Bestela, neurri hori ezarri ezean, funtsean eginkizun berdinak gauzatzendituzten eta araubide ezberdina



duten bi kolektiboak kudeatu beharko lirateke. Nabarmenezkoa da mota horietako funtzionarioek merezimenduak eta sartzeko gaitasunafrogatuta dituztela, eta legeak udaltzainei gordetzen dizkien eginkizunak gauzatzenari direla.

IV IBILBIDE PROFESIONALA

- 205. Proiektuak II bis kapitulua gaineratzen du “ibilbide profesionala” izenburuarekin, 73 bis eta 73 ter artikulua berriekin.
- 206. 73 bis artikulua ibilbide profesionalaren kontzeptua definitzen du, eta 73 ter artikulua ibilbide profesional horizontala arautzen du.
- 207. Ibilbide profesionalaren modalitate hori EBEPen 17.artikuluari jasota dago. Artikulu horretan adierazten da estatutua garatzeko ematen diren funtzio publikoko legeek karrerako funtzionarioen karrera horizontala arautuahal izango dutela.
- 208. Euskal enplegu publikoaren lege-proiektuak karrera profesional horizontala arautzen du 89., 90. eta 91. artikuluetako VII. tituluko II. eta III. kapituluari. Arauketa hori bateragarria da proiektu honen aurreikuspenekin.

V OSASUNA ETA BABESA

- 209. III. tituluko V. kapituluak —zerbitzu-eginkizunak arautzen dituen indarreko EAEPL— osasuna eta babesa arautzen ditu. 79., 79 bis eta 79 ter artikulua hartzen ditu barne.
- 210. Lehenengo bi artikuluek Euskal Autonomia Erkidegokopoliziaren esparrura zabaltzen dituzte azaroaren 8ko lan-arriskuei aurre hartzeko printzipio eta irizpideei buruzko 31/1995 estatuko legera. Lege hori, hasiera batean, ez da aplikatuko poliziako langileen jardueretan, betiere haien berezitasunengatik aplikatu ezin direnean. Hala ere, aurreikusi egingo da polizia-langileen segurtasuneko babesa arautzeko agintzen den berariazko araudia ezarriko duela.
- 211. 79 ter artikulua xedatzen du, langile funtzionarioei dagokien babes sozialaren araubidez gain, osatzen duten erakundeen arabera babes sozialerako zenbait mekanismo osagarri ezarriko direla ezintasuna dagoen kasuetan (ezintasuna, heriotza eta erretiroa tarteko).
- 212. Aurreikuspen hori ezin da sartu funtzionarioei aitortzen zaizkien prestazio sozialen eskubidean. EHPLren 69.2 g) artikulua funtzionarioentzat ezartzen du oro har, eta EHPLren 75 f) eta k) artikulua polizia-kidegoetarako. Hala, gizarte babesa euren jarduerak dakartzan arrisku-egoera berezietara egokituko da.



213. EHPLren hamaseigarren xedapen gehigarriak, halaber, aurreikusten du segurtasun-sistema osagarriak ezartzea.

VI KONDEKORAZIOAK ETA ESKER ONAK

214. Proiektuan III. tituluan V. kapituluarekin, 80.artkulua gaineratzen du. Hala, erregelamenduz aurreikuspena sartzeko, polizia-merezimenduaren dominak, esker onak, eta ohorezko kargu-igoerak (gorago dagoen hurengo kategoriara) emateko araubidea ezarriko da.
215. Arlo hau orain urriaren 16ko 202/2012 Dekretuaren bidez araututa dago Ertzaintzarentzat.

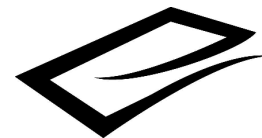
VII BIGARREN JARDUERA

216. Proiektuak jorratzen duen beste legegintzako erreforma batek adinaren eta bigarren jardueraren administrazio-egoeraren arabera egokitutako zerbitzu aktiboari eragiten dio.
217. Egungo idazketan, EHPLk bigarren jardueraren administrazio-egoerara igarotzeko arrazoi erabakigarri gisa ezartzen ditu honako hauek: Eusko Legebiltzarrak kasuan kasuko kategorietarako ezartzen duen adina gainditzea, eta lan polizial guztiak normaltasunez betetzeko gaitasun psikiko edo fisikonahikorik ez izatea (seguruenik, modu iraunkorrean). Lehenengoa argitaratu gabe geratu da eraginkor bihurtu behar zuen legea ez delako ezarri.
218. Proiektuak bigarren jardueraren egoera aldatzen du. Hala, kendu egiten du adinaren arabera egokitutako modalitatearen kontzeptua. Horretan, ez zegoen eginkizun polizialak gauzatzeko eskumenen murrizketa esanguratsurik; horrenbestez, zerbitzu aktiboan jarraitzen dute, eginkizunetan aldaketa bati edo beste eginda.
219. Hala, bigarren jardueraren egoera gisa geratu da soilik Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskalan ez daudenak, eta eskumen psikiko edo fisikoetan murrizketa nabaria dutenak; zehazki, bere kategoriaren berezko eginkizunak erabat gauzatzeko ezintasun iraunkorra dutenak, baina polizia-lanbidetako funtsezko eginkizunak behar bezala egiteko eragozpenik ez dutenak.
220. Proiektuaren 85.2 artikulua xedatzen du administrazio bakoitzak ezarriko duela, aurretiaz langileen ordezkariekin hala negoziatuta, adinaren arabera modulaturatutako zerbitzu aktiboa onartzeko dagozkion betekizunak eta baldintzak. Horretarako, arautu beharreko alderdiak ezarriko dira.



221. Adinaren arabera egokitutako zerbitzu aktiboaren eskaerak dakar borondatezko erretiro aurreratua eskatzea horretarako adina betetzen denean, gizarte-segurantzaren araubidearekin bat etorritik, aplikatzekoa denean.
222. Eskumen fisiko edo fisikoetan ageriko nahikotasunikez dagoen kasuetan, eta bigarren jardueraren egoerara mugatuta geratzen diren kasuetan, proiektuak alderdi bat argituko luke (gatazkatsutzat jotzen zen): erabateko ezintasun iraunkorraren egoera eta aitortza bateragarri egiteko aukera.
223. Ez da harritzekoa baieztatzea Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak aitortu duen polizia bat ohiko lanbiderako erabateko ezintasun iraunkorraren egoeran badago, ezin duela behar bezala gauzatu poliziaren lanbideari dagozkion eginkizunak. Horrenbestez, bidezkoa da nahitaezko erretiroa aitortzea.
224. Hala ere, EHPLren baldintzei jarraikiz, ezinezkoa da ondorio horretara argitasunez iristea. Batzorde Juridikoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salako bi epai ditu, 2000ko maiatzaren 31koa —442/97 zenbakiko RCAn jasotakoa— eta 2007ko azaroaren 26koa (JUR 93060/2008), ukatu egiten dute eta. Jarraian, hitzez hitz idatziko dugu bigarrena neurri batean jasotzen duen lehenengoa:

“Administrazioaren tesian, polizia-lanbiderako erabateko ezintasun iraunkorraren egoerak, definizioz, eragotzi egiten du polizia-lanbidearen oinarritzko eginkizunak behar bezala egitea. Funtzio horiek Euskal Herriko Poliziaren Legean eta Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzko lege organikoan definituta daude. Proposamen horrek euskarri gisa balio izan zuen ezezkoa emateko ebazpenean, eta dakar egia apodiktikoa. Euskal Herriko Poliziaren Legeak gezutatu egiten du berariaz aurreikusten duela erabateko ezintasun iraunkorreko egoeran aitortuta dauden bigarren jarduera egiteko aukera. Hala, 4/92 Legearen 66. artikuluan xedatzen da helburua denean bigarren jardueran diharduten langileek gauzatu dezaketen lana duten lanpostuak hornitzea, administrazio-egoera hori aitortuta duten funtzionarioek izango dutela lehentasuna funtzionarioak esleitzean, eta, horien baitan, lan-istripuaren ondorioz erabateko ezintasun iraunkorraren egoeran daudenek. Bestalde, hamaseigarren xedapen gehigarriak aurreikusten du Euskal Herriko Ertzaintzan eta Udaltzainguan egingo den negoziaketa kolektiboaren bidez, hurrenez hurren, nork bere esparruan, dagozkion segurtasun-sistema osagarriak ezarriko direla adina edo ezintasuna tarteko, bigarren jardueran dauden kasuetarako. Horretarako, aurretiaz ebaluatu egingo da beharrezkoak diren jokabideen azterlanak eginez.”



(...)

...erabateko ezintasun iraunkorraren aitortzea Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileak egingo du, eta, berez, ez du bazter uzten bigarren jarduerara igarotzeko aukera. Bestalde, kasu batzuetan, lehenetsunezko irizpide gisa ezartzen da bigarren jardueran dauden funtzionarioek bete ditzaketen lanpostuak betetzeko (66. art.). Hori dela eta, horri aurre egiteko ebazpena ez dator bat zuzenbidearekin”.

225. Ustezko interpretazio hori desaktibatzen, proiektuak EHPLren 66. artikulua aldatzen du. Artikulu horrek bigarren jarduerako postuak homitzeko lehentasuna arautzen du, eta erabateko ezintasun iraunkorraren egoeren aipamena kentzen du. Era berean, hirurogeita laugarren paragrafoaren bidez kentzen da hamaseigarren xedapena.
226. Beste alde batetik, 86.7 artikulua bigarren paragrafoan xedatzen da udalbatzak adostu ahal izango duela bigarren jardueran mantentzea, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera, Gizarte Segurantzaren organoek ezintasun iraunkorreko egoeran aitortutako langileak, nahitaezko erretiroahartzera behartu gabe, dagozkien ordainsari osagarriak kontzeptu harengatik aitortuta duten prestazioaren zenbatekoan murriztuta.
227. Beste alde batetik, 86.1 artikulua berriak, bigarren paragrafoan, bigarren jarduerara igarotzea ahalbidetzen dituen muga funtzionalen izena ezartzen du. Aurreikuspen horrek ez du testurik indarrean:

"Lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, lanbide polizialaren funtsezko eginkizuntzat jotzen dira, zehazki, ordena eta heritarren segurtasuna eusteko eta lehengoratzekoari buruzkoak, delituzko gertakariak prebenitzekoak eta haiek ikertzekoak, eta errudunen jazarpena egitekoak. Lan horiek eraginkortasunez egiteko, oinarritzko gaitasuna behar da, bai su-armak eta gainerako erregelamendu-defentsak erabili eta maneiatzeko, baita egoera nomaletan ibilgailuak gidatzeko ere; oinarritzko mugimendu-gaitasuna ere eduki behar da."

VIII DIZIPLINA-ARAUBIDEA

228. Aginduen beste multzo handi batek Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kidegoetako funtzionarioen diziplina-araubideari eragiten diete, eta nobedade esanguratsuak sartzen dituzte tipifikazio-, prozedura- eta exekuzio-arloan.
229. Kasu honetan, nabarmendu behar da mugak bi alderdiatik etor daitezkeela.



230. Alde batetik, udaltzaingoei aplika dakiekeenez, KEren 149.1 18 artikuluen arabera estatuak ezarritako estatutu-araubidearen oinarriak errespetatu beharko dira. Oinarri horiek diziplina-araubidea sartzen dute araubide juridikoaren arauketaren oinarritzko alderdietako bat osatzen duten heinean (abenduaren 12ko 235/1991 KAE).
231. Udaltzaingoak, hain justu, bere eginkizunen eta hierarkian eta diziplinan antolatutako egituraren nahiz antolamenduaren arabera duen izaeragatik (SIKLOren 6.9 artikulua), ez dago EBEPen diziplina-araubideari lotuta; izan ere, Polizia Nazionalaren Kidegoaren diziplina-araubidearen maiatzaren 20ko 4/2010 Lege Organikoaren azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoaren arabera, lege hori aplikatuko zaio SIKLOn aurreikusitakoarekin bat etorritz.
232. SIKLOren 52. artikulua SIKLOren IV. kapituluaren 4. atalaren aplikagarritasuna deitzen zion “kasuan kasuko administrazioaren mendetasunak eskatzen duen egokitzapenarekin, horren harira Autonomia Erkidegoek agindutako xedapenak eta kidego bakoitzerako berariazko erregelamenduak egokituta, eta kasuan kasuko udalekemandako gainerako arauak”.
233. Atal hori indargabetu egin da maiatzaren 20ko 4/2010 Lege Organikoaren bidez, baita 27. artikulua ere. Artikulu horrek hutsegite motei buruz, preskripzioari buruz, eta hutsegite oso astunen multzoari buruz hitz egiten du, eta 28. artikulua diziplina-zehapenak arautzen zituen.
234. Maiatzaren 20ko 4/2010 Lege Organikoaren azken xedapenetatik seigarrenean interpreta daiteke legelariaren asmoa dela udaltzaingoari aplikatzea arlo horietan euren edukiak aplikatzea.
235. Beste alde batetik, lege hau Estatuak, Konstituzioaren 149.1.1. artikulutik ere etor daiteke. Konstituzioko eskubideak baliatzean eta betebeharrak betetzean espainiar guztiak berdinak direla bermatzeko oinarritzko baldintzak arautzen zituen. Diziplina-arloko zuzenbide-esparruan, Konstituzio Auzitegiak baieztatu du otsailaren 14ko 37/2002 KAE, honako hau baieztatzen du (dotrina hori oso modu egokian dator kontura):

“Autonomia-erkidegoek sortutako zehapeneko administrazio-zuzenbideak, zalantzarik gabe, funtsezko eskubideen esparruan eragiten du; izan ere, legez kanpoko administratiboek muga negatiboa dakarte bet zuzenbidea gauzatzeko esparru librean. Eragin horrek ez dakar (1981eko azaroaren 16ko epaia [1981, 37 KAE], 2. oinarria) alderdi horretako arauketa osoa berariaz estatuaren eskumenekoa izatea. «Zalantzarik gabe, autonomia-erkidegoko zehapen-arauak Espainiako Konstituzioaren 149.1.1 artikuluan xedatutakoa betebeharko du; beraz, ezin izango du motarik txertatu, ezta lurralde osorako balio duen araudian lehendik



bildutakoekin bat ez datozen zehapenak aurreikusi ~~re~~, arrazoitutako oinarriak izan gabe. Eta egia da, halaber, zehapen-prozedurak bat etorri beharko duela “administrazio-prozedura erkidearekin”, “azken horren eraketa Estatuaren eskumen eksklusiboa izanik (Espainiako Konstituzioaren 149.18 art.). Baina muga eta baldintza horiek betez, arau autonomikoek Estatuko zehapen-artolamenduaren oinarritzko printzipioak garatu ahal izango dituzte eta motak ~~da~~ zehapenak modulatu ere egin ditzakete —lehen aipatutako esparruan betiere—, aukera hori zehazkiaren edo egokitasunaren eskakizunei atxikita dagoelako eta lurralde-eremuetan alda daitezke.»

Arrazoi handiagorekin, kasu honetan, diziplina-esparruan gauzatzen da, eta, beraz, mendetasun berezi baten baitan daudenei onartu behar zaie autonomia-erkidegoek, arrazoizko funtsarekin, oinarritzko arauetan araututa ez dauden motak ezartzeko aukera ematea, betiere horiekin besteekin kontraesanean ez badaude.

236. Laburbilduz, honako hau baieztatu daiteke:

- a) Oinarritzko alderdiei errespetua izateak ez du esan nahi hitzez hitz men egin behar zaionik, nolabaiteko egokitzapen-maila egin ahal izango baitaio espainiar guztien berdintasuna bermatuko duten oinarritzko baldintzen berdintasunari. Eta konstituzioko betebeharrak ez dakarte uniformetasun-juridikorik.
- b) Udaltzaingoei aplikatu dakiekeen oinarritzko arauak dira 4/2010 Lege Organikoaren aurreikuspenak. SIKLOko 27. eta 28. artikuluko indargabetuetan jasotako alderdiak jorratzen dira, eta funtsezko gutxiengoaren homogeneotasuna lortzeko helburua betetzen dute.

237. Hori aintzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia kidegoetako diziplina-araubidearen erreforma partziala jorratzeko mduan gaude.

238. Konstituzioko Auzitegiak 37/2002 KAEn esaten duen bezala, kontuan hartu behar da 4/2010 Lege Organikoaren 7. artikuluan tipifikatutako hutsegite oso astunak oinarritzkoak direla “ez dute alde batera uzten autonomia-erkidegoek haien jardun legegilea estatuko oinarritzko araudia garatzean, betiere batezgarriak badira, eta oinarritzko araudi hori murriztu, kontraesanean jarri, edo murrizten ez badute.”

239. 92. artikuluko 2. paragrafoko I bis eta ter paragrafoak gaineratzearekin, dagoeneko 4/2010 Lege Organikoaren zerrendan aurreikusitako lau hutsegite oso astun gaineratu dira (sexu-jazarpena, jazarpen sexista, lan-jazarpena eta bideokamerak erabiltzeari buruzko araudia haustea).



240. Zehapenei dagokienez, aurreproiektuak eginiko EHPLen 93. artikulua aldaketak hainbat desakordio ditu estatuko legearekin hutsegite oso astun eta astunen kasuan. Batzorde honen iritziz, desakordio horiek ez dute ginditzen autonomiako legelariak duen erabilgarritasuna tartea (hutsegite oso astun kasuan, lege organikoan zigortu daitezke; funtzioak bertan behera gera daitezke, hiru hilabete eta egun batetik lau urtera bitartean, eta, hutsegite astunen kasuan, estatuko araua bertan behera geratzeko zehapena bost egunetatik hiru hilabetera arte doa. Aurreproiektuak urtean bost egun ezartzen ditu).
241. Hutsegite eta zehapenei dagokienez, 4/2010 lege organikoarekin dagoen ezadostasun bakarra hutsegite arinena da. Proiektuan hiru hilabeteren buruan preskribatzen dira, eta, estatuko legean, berriz, hilabetean. Beraz, ez da esanguratsua berdintasuna epaitzeko orduan; nahikoa da esatea 37/2002 KAEk argi eta garbi baztertzen duela konstituzionaltasun falta, "epea hutsegite arinen esparruan soilik denean ezberdina"
242. Diziiplina-prozedurari dagokionez, proiektuak 2 bis eta 2 ter paragrafoak gaineratzen ditu, eta 95. artikuluko 5. paragrafoa gaineratzen du.
243. Gaineratutako paragrafoek espedientea jasotzen duten horren kontra ez aitortzeko dituzten eskubideak zehazten dituzte; hau da, abokatuaren laguntza izateko, sindikatuko ordezkariarena edo polizia-kidegoaren konfiantzazko funtzionarioarena, baita edozein unetan prozeduraren izapide-egoera eza gutzeko ere.
244. 95. artikulua 5. paragrafoaren aldaketak sei hilabeteko epea ezartzen du zehapen-prozeduraren iraunkortasun-epean; hots, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legeko 43.4 artikuluan arautu bezala.
245. Azkenik, 97 bis artikulua berriak 4/2010 Lege Organikoaren 47., 48. eta 49. artikuluetan jasotako zigorrek gauzatzeari buruzko arauketaren zati handiena jasotzen du. Egokitzapen txiki batzuk egin zaizkio. Garrantzitsua zigorrek gauzatzeko ahalmenarekin loturikoa da, 4/2010 Lege Organikoak xedatzen baitu berehala betetzekoak izango direla, eta betetzeko betebehara ez dela bertan behera geratzeko inolako administrazio-errekurtsorik edo errekurso judizialik jartzeagatik. Proiektuan, berriz, HAAJAPELren 138.3 artikuluan aurreikusten den bezala, diziiplina-zigorrek betearazleak izango direla horien kontra administrazio-bidean ohiko errekurtsorik jarri ezin denean.

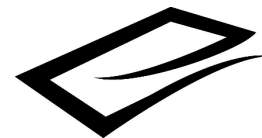
IX UDALTZAINGOAK

246. Aurretiaz adierazi dugun bezala, SIKLOren 51. artikulua hainbat modu aurreikusten ditu udalerriek nork bere segurtasun-arloko eskumenak gauzatzeko: berezko polizia-



kidegoak sor ditzakete, zaintzarako langile laguntzaileak izenda ditzakete (aguazilak, proiektuaren terminologia erabiliz), eta, azkenik, populazio handia duten udalerrietan, berariaz trafikoa arautzeko eginkizunetan arituko dira, udaltzaingoko kidegoetako funtzionarioen mende.

247. EHPL aldatu egin da aukera sorta zabal horri bide emateko, eta, bereziki, estatuko legegileak onetsi ondoren sartutako azken kasu horiarautzeko.
248. Batzordeak uste du, bai autonomia-erkidegoak tokiko administrazioetako pertsonen araubidea antolatzeko dituen eskumen orokorrek, bai udaltzaingoei lurralde-esparruan jarduketa koordinatzeko segurtasun-arloandituzten berariazko eskumenei, aurreproiektuan artikulatu hauen arauak jasotzen uzten dutela: 117.a (aguazilak), 118.a (udaltzaingoko kidegoetako eskalak eta kategoriak), 120.a (lankidetzaren mekanismoak, bitartekoen izendapena eta lan-poltsak egitea) eta 121.a (udal-mugikortasun agenteak).
249. Udaltzaingoa bitarteko funtzionarioak egoteak ez da baina handia ekarri izan du iraganean, baina Batzordearen ustez, figura horren egungo profilak bat datoz udalerriek bete beharreko beharrezkinen, eta nekez ordeztu daitezkeen batekin.
250. Auzitegi Nagusiaren 1999ko otsailaren 12ko Epaiak (2326 RJ), legearen interesean kasazio-errekurtsoan emandakoak, legeko doktrina hau ezarri zuen: “premiazko beharrezkinen egoeretan, eta aurretiaz legeko aurreikuspenak beteta, kontzeptuan bertan aldi baterakoa izanik, deialdiak egin daitezkeen bitartekotza erregimenean eta udaltzaingoko plazen bidez betetzeko”.
251. Ondorio horretara iristeko, kontuan hartu zuen agintaritzak gauzatzeak dakartzan eginkizunen eskusotasuna gordeta, TAOLen 92.2 artikuluan egiten dena, oro har, estatuko funtzionarioentzat eta bitarteko funtzionarioentzat, estatu horren edo funtzionarioen araubide orokorraren mende egingo direla. Era berean, ez da agintaritzaren eginkizunak esleituta izango dituzten lanposturik egongo; adibidez, udaltzaingoa kasuan; hots, lan kontratadun langileek betetzen dituztenak, edota konfiantzazko lanpostuetan aldi baterako dauden langileak. Horiek dira TAOLen 89. artikuluan aipatzen diren funtzionario mota bakarrak, eta lege berberaren 92.2 artikulua berehalako oinarri gisa balio du.
252. Gaur egun, EBEPe TAOLen 92. artikulua indargabetu du. Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legeko 92.3 artikulua xedatzen du berariaz toki-administrazioaren zerbitzura dauden karrerako funtzionarioei dagokiela agintaritzaren eginkizunen gauzatzea.
253. Bestalde, denboran zehar, legea bilakatu egin da, argi eta garbi bitarteko funtzionarioen figuraren alde. Hasieran, murriztaile zen izendapena onartzen zuten

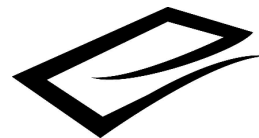


kasuei dagokienez; izan ere, premiazko edo beharrezko arrazoiekin zeuden lotuta, eta plantillako plaza hutsak aldi baterako soilik bete zitezkeen, karrerako funtzionarioek hornitzen ez bazituzten, edo, bestela aldi baterako absentzia kasuetan lanpostuak ordeztu zitezkeen (EHPLren 91. artikulua). Ondoren, Autonomia Erkidegoko foru-administrazioen eta tokiko administrazioen kasuan, perimetroa zabaldu zen, EHPLren hamazazpigarren xedapen gehigarriak (azaroaren 7ko 16/1997 legeak sartutakoa) bitarteko funtzionarioak izendatzeko aukera ematen zuelako aldi baterako programak gauzatzeko. Aukera hori udaltzaingora zabaldu zen (besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salak 2015eko maiatzaren 13an emandako epaiaren bidez).

254. Baina EBEPein egin dira malguagoak xehetasunak. Bitarteko funtzionarioek dituzten inguruabarren artean, EBEPen 10. artikulua aurreko hiru kasuak jasotzen ditu (lanpostu hutsak, titularrak aldi baterako ordeztzea eta aldi baterako programak), eta beste bat ere gaineratu du: gehienez ere sei hilabete epean gehiegizko eginkizunak edo eginkizun-pilaketa egotea, hamabi hilabete epearen barruan.

LEGE GINTZAKO TEKNIKA-ARLOKO OHARRAK

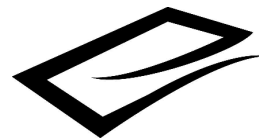
255. I. tituluko II. kapituluaren “polizia-jarduera kontrolatzeko mekanismoak”, 6. 7., 8. eta 9. artikuluetan arautzen dira poliziaren jardunbide desegokiak kasu esanguratsuei buruzko kexak eta ikerketak jorratzeko prozedurak. Prozedura hori ere Euskadiko segurtasun publikoaren sistema antolatzeko ekainaren 28ko Legearen 16. artikuluan arautu da. Horrenbestez, komeni da azken artikulua hori indargabetzea, araudia argiagoa izan dadin.
256. 11. artikulua 4. paragrafoak honako hau xedatzen du: “Batzordeko kideek (Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Jardunbide Egokiak) ez dute inolako ordainsaririk jasoko egindako lanengatik. Nolanahi ere, kalte-ordainak jaso ahalizango dituzte dagozkien zerbitzuengatik, betiere administrazio publikoetako langileak ez badira”.
257. Paragrafoak, aditz-denbora okerrean idatzita egoteaz gain, —“jasoko lukete”— honako hau esan behar du “jasoko dute”. Beraz, nahasgarria da; izan ere, badirudi adierazten duela batzordeko kide diren administrazio publikoetako langileek ez dutela kalte-ordainik jasoko zerbitzuagatik. Ez dirudi ez bidezkoa ez zentzuzkoa denik, funtzionarioari organoan parte hartzeak eragindakogastuak ordainetan eman beharko zaizkiolako. Hori dela eta, beharbada testuaren azken zatia kenduta; hots, hau adierazten duena: “administrazio publikoetako langileak ez badira”, aginduak bere benetako esanahia hartuko du.



258. 47 bis 5.b) artikulua, sarbide-probetan diskriminazio positiboaren neurri buruzkoak, honako hau arautzen du: "lehentasun hori aplikatuz hautatutako emakumezko hautagaien eta atzera geratu ziren gizonezkoen arteko puntuazioaren arteko aldea **ez bada** % 15 baino **handiagoa**, ez oposizio-aldian, ez eta, hala behar balitz, lehiaketa-aldian ere (betiere hautaketa-sistemaren arabera).".
259. Badirudi egokia dela ezberdintasuna ez izatea ehuneko hamabost baino "handiagoa", edo, bestela, ehuneko hamabost ez gainditzea.
260. Ildo berean, 6. paragrafoan —"aurreko idatzi-zatian aipatzen den lehentasun hori aplikatzeko, beharrezkoa izango da hautaketa-prozesuaren deialdian eskaintzen diren lanpostuei dagozkien kidego, eskala eta kategorietan emakumezko funtzionarioak ez iristea % 33ra"— hau esan beharko da: "emakume funtzionarioen % 33koa edo **handiagoa**".
261. 85.3 artikulua honako hau ezartzen du: "adinaren arabera egokitutako zerbitzu aktiboa eskatzeak dakar borondatezko erretiro aurreratua eskatzeko konpromisoa, betiere horretarako eskatzen den adina lortzen denean, aplikatzeko den gizarte-segurantzako araubidearekin bat etorritik, hala badagokio,".
262. "Konpromiso" kontzeptuak badirudi bere baitan hau dakarrela: alde bakarreko betebeharra bere gain hartzea, eta, betetzen ez bada, ondorio argiak ekartzea. Beraz, eskatzaileari betebeharra ezartzeko asmoz, hobe litzateke xedatzea adinaren arabera egokitutako zerbitzu aktiboa "baldintzatuta" egongo dela borondatezko erretiro aurreratua eskatzearekin, betiere horretarako adinera iristen direnean, kasuan kasu aplikatzeko den gizarte-segurantzaren araubidearekin bat etorritik.
263. Idazkera letra larriz edo xehez bateratu beharko da, besteak beste, hitz hauetan: prebentzio-arloko ordezkariak, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoak, goimailako eskala eta udaltzaingoa...
264. Genero-arloan, baztertzailleak diren zenbait esapide kendu beharko dira; adibidez, presidente, fakultatiboen eta teknikarien eskala, lehen mailako agentea, komisario- eta komisariorde-kategoria, eta abar.

ONDORIOA

Batzordearen irizpena da, txosten honen mamian egindako oharpenak kontuan hartu ostean, lege-aurreproiektua Jaurlaritzaren Kontseilura bidal daitekeela, onetsia izan dadin.



Eta hala ziurtatzen dugu dugu, Gasteizen, 2016ko apirilaren 20an, jakin eta kontuan har dadin. Era berean, azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 30.2 artikulua xedatzen duen betebeharra gogorarazi nahi dugu: azkenean onartzen den xedapen edo ebazpena Batzordeari jakinarazi behar zaio, Euskadiko AholkuBatzorde Juridikoaren antolamendu eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen irailaren 12ko 167/2006 Dekretuaren 34. artikulua xedatzen duen moduan eta epean.

O.E.:

Jesús María Alonso Quilchano
Idazkaria

Sabino Torre Díez,
Batzordeko burua

XVII

ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO /
PROZEDURA HASTEKO AGINDUA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA ARRONIZ**Fecha de la firma: **18/06/2015 13:54:47**Validación de la firma:  **Correcta****ORDEN DE LA CONSEJERA DE SEGURIDAD POR LA QUE SE ACUERDA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO.**

En el calendario legislativo del Gobierno Vasco para la presente legislatura existe la previsión de elaboración de un proyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco (en adelante LPPV) ha sido objeto de diversas modificaciones relativas al régimen retributivo de los funcionarios de la Ertzaintza, al sistema de representación de los trabajadores de la misma o a los grupos de clasificación funcional. La Ley 15/2012 de 28 de junio, de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi, ha supuesto la cuarta modificación de la LPPV, extrayendo de tal regulación aspectos que resultaban comunes al conjunto de la seguridad pública, tales como la regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, u otros referentes al subsistema policial o de seguridad ciudadana que por su carácter organizativo o relacional convenía incluirlos en la citada Ley, como lo relativo a la potestad de coordinación de policías locales o los mecanismos de cooperación policial. De este modo en la actualidad la LPPV tiene un contenido primordialmente relacionado con el régimen de los Cuerpos de la Policía del País Vasco.

El anteproyecto de ley a examen tiene como objetivo modificar parcialmente la LPPV para incorporar una serie de modificaciones puntuales atendiendo al influjo de otras leyes estatales o autonómicas sobrevenidas; a la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa vigente y los pronunciamientos judiciales que la interpretan; al contexto de los proyectos de modernización de la Ertzaintza; o al resultado de los trabajos desarrollados durante los últimos años en grupos de trabajo derivados del convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Municipios Vascos - Eudel.

El procedimiento de elaboración y tramitación de la presente Ley deberá ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley 8/2003, 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General (LPEDG), así como en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 28 de diciembre de 2010, por la que se acuerdan las instrucciones de Tramitación de Disposiciones de Carácter General.

En este sentido, la LPEDG establece en su artículo 4.1 que el citado procedimiento se iniciará por Orden del titular del Departamento competente por razón de la materia

sobre la que versa la disposición normativa proyectada, texto que se erige en fundamento básico y eje central del procedimiento de elaboración de la norma.

En atención a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 LPEDG, que especifica el contenido necesario que habrá de observar la Orden de iniciación,

RESUELVO

PRIMERO.- Objeto y competencia para ordenar la iniciación del procedimiento.

1.- El objeto de la presente Orden es acordar el inicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

2.- En cuanto a la competencia para ordenar el inicio del procedimiento, la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, establece en su artículo 4.1 que este procedimiento de elaboración se iniciará por Orden de la Consejera o Consejero titular del Departamento competente por razón de la materia sobre la que versen.

SEGUNDO.- Viabilidad jurídica y material de la norma.

El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco (EAPV), atribuye a la Comunidad Autónoma Euskadi competencia exclusiva en materia de policía y seguridad pública.

El Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de los mismos, atribuye al Departamento de Seguridad entre otros las siguientes funciones y áreas de actuación: Juego, apuestas y espectáculos, y Policía de la Comunidad Autónoma.

De conformidad con el artículo 4.1 del Decreto 194/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, se atribuye a la Consejera de este Departamento el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 26 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, así como cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento en virtud del Decreto antes citado.

TERCERO.- Objeto y finalidad del Anteproyecto de Ley.

El Anteproyecto de Ley modifica diversos preceptos de la LPPV vigente aunando diversos objetivos bajo la idea común de dotar a la Policía del País Vasco de mejores instrumentos para afrontar sus quehaceres conforme a lo que demanda una sociedad como la vasca, abierta, plural y bilingüe.

Para ello uno de los objetivos de la ley es arbitrar mecanismos que incidan en la concepción primigenia de la Policía como servicio que se presta a una ciudadanía ante la que se debe responder, asentando los principios de dicha relación en las premisas del Código Deontológico en el sentido apuntado por el Código Europeo de Ética de la Policía, y en la implementación de mecanismos de tratamiento de quejas y de evaluación y mejora del servicio policial, como la creación de una comisión de control externo.

Otra de las líneas de reforma se centra en el refuerzo del sistema de estímulos positivos del buen hacer policial, regulando la carrera profesional de los funcionarios, complementos de carrera profesional vinculados a la evaluación del desempeño o el sistema de condecoraciones y distinciones. Al tiempo que se modifica el régimen disciplinario para establecer mecanismos internos eficaces, proporcionales, adecuados y justos, que vayan más allá de la investigación de casos particulares de indisciplina para analizar patrones y factores de riesgo con el fin de proporcionar orientación para mejoras en la formación o los procedimientos o el clima laboral.

En materia de selección e ingreso se configura la Academia Vasca de Policía y Emergencias como órgano permanente de selección, reforzando las garantías de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de los tribunales de selección. Se incorporan a la ley los requisitos de acceso, y se posibilitan medidas de acción positiva para favorecer la entrada de mujeres en los cuerpos policiales y corregir así su escasa presencia actual. Así, se regulan los planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales para garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y carrera profesional; corregir su infrarrepresentación e incrementar la eficacia policial, de un modo compatible con los parámetros exigibles en la jurisprudencia comunitaria europea.

El anteproyecto de ley reformará aquellos aspectos de la carrera profesional que contribuyan a mejorar las expectativas de desarrollo profesional de los funcionarios.

En cuanto a la movilidad vertical mediante la provisión de puestos se elevará a la ley el régimen de las especialidades en la Ertzaintza para tareas con conocimientos específicos y se facilitará el acceso a todos los puestos de la escala superior a través de los procedimientos ordinarios de provisión de puestos.

En cuanto a la promoción interna, se suprimirá el límite de tres convocatorias para participar en tales procedimientos e igualmente se facilitará la promoción interna de quienes estén excedencia por cuidado de hijos o familiares, excedencia por violencia de género y servicios especiales.

Igualmente se regulará la carrera profesional horizontal entendida como la progresión en el grado de desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y se modificará la estructura retributiva para incorporar entre las retribuciones complementarias el complemento de carrera profesional.

En el régimen de derechos individuales del funcionariado debe prestarse especial atención a la protección social básica y complementaria del personal de los cuerpos de la Policía del País Vasco, atendiendo especialmente a la obligación de las administraciones de velar por las condiciones psicofísicas del personal y la vigilancia de

la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Para ello la reforma debe contemplar la creación de mecanismos de protección social complementaria para los casos de incapacidad temporal para el servicio motivada por lesiones o patologías derivadas de enfermedad o accidente profesional producido en el servicio o como consecuencia del mismo, y particularmente en cuanto a los derechos complementarios en los casos de muerte o jubilación forzosa por incapacidad con ocasión del servicio policial durante la realización del servicio o en el ejercicio de sus funciones, de un modo desvinculado de la evaluación del comportamiento meritorio del agente actuante.

La reforma de la ley debe acoger las modulaciones del desempeño derivadas de la edad o la insuficiencia sobrevenida de las capacidades precisas para el desempeño ordinario del conjunto de tareas propias de la función policial que contempla en la actualidad el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en la Ertzaintza.

En lo que se refiere a los cuerpos de policía local debe contemplarse una estructura profesional equiparable a la de la Ertzaintza, fijando las categorías correspondientes a la jefatura de tales cuerpos policiales atendiendo a la población o el número de personas integrantes del cuerpo. E igualmente deben regularse las figuras del alguacil y la del agente de movilidad.

CUARTO.- Repercusión en el ordenamiento jurídico.

La aprobación de la norma proyectada conllevará la modificación de la LPPV, así como todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

QUINTO.- Incidencia presupuestaria.

Se realizará la correspondiente memoria económica que se incorporará al expediente, en la que se expresará el coste, con la cuantificación de los gastos y su repercusión en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, todo ello en virtud de lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de carácter General.

SEXTO.- Trámites e informes procedentes.

1.- La redacción del texto del Anteproyecto de Ley se realizará atendiendo al contenido de esta Orden, teniendo en cuenta las opciones que mejor se acomoden a los objetivos perseguidos y, en su caso, al resultado de las consultas e informes que se soliciten para garantizar el acierto y legalidad de la regulación prevista.

2.- De conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, la presente Orden de iniciación se hará pública en el espacio colaborativo de conocimiento compartido: <http://elkarlan.jakina/webguneak/legesarea>.

A priori, se estima que pueden ser procedentes, preceptivos y/o convenientes los siguientes trámites y solicitudes de informes:

A.- Estudios preparatorios.

B.- Orden de inicio.

C.- Elaboración del texto del proyecto.

D.- Tramitación intradepartamental:

- ›Informe de la asesoría jurídica departamental.
- ›Memoria económica
- ›Evaluación de impacto de género.
- ›Informe sobre disminución de cargas administrativas.
- ›Memoria de procedimiento.
- ›Orden de aprobación.

E.- Negociación, informes y audiencias preceptivos:

- ›Participación y consulta a todos los Departamentos del Gobierno Vasco
- ›Participación y consulta a las Diputaciones Forales de Alava Gipuzkoa y Bizkaia y Eudel.
- ›Mesa de negociación de la Ertzaintza.
- ›Informe del Consejo de la Ertzaintza.
- ›Informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
- ›Informe de la Dirección de normalización lingüística de las Administraciones Públicas.
- ›Informe DACIMA
- ›Informe de la Dirección de Función Pública.
- ›Informe de Emakunde (art. 2 ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.)
- ›Audiencia pública.
- ›Audiencia a otros posibles interesados. Sindicatos.

F.- Informes y audiencias preceptivos:

- ›Informe de la Oficina de Control Económico
- ›Informe de la Comisión Jurídica Asesora

Con anterioridad a las solicitudes de informe a la Oficina de Control Económico y a la Comisión Jurídica Asesora se elaborará la memoria económica y una memoria sucinta de procedimiento que se incorporarán al expediente.

Séptimo.- Sistema de redacción

El sistema que se utilizará para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 10/1982 del Euskera de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera será la traducción por el Servicio Oficial de Traductores (IZO).

LA CONSEJERA DE SEGURIDAD
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ

AGINDUA, SEGURTASUN SAILBURUARENA, EUSKAL HERRIKO POLIZIARI BURUZKO LEGEA BOSGARREN ALDIZ ALDATZEKO LEGE-AURREPROIEKTUAREN PROZEDURARI HASIERA EMATEA ERABAKITZEN DUENA

Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako aurreikusita duen lege-egutegiaren barruan Euskal Herriko Poliziari buruzko legea bosgarren aldiz aldatzeko Lege-aurreproiektua izapidetzea dago.

Euskal Herriko Poliziari buruzko Legeak (4/1992 Legea, uztailaren 17koa) hainbat aldaketa izan du urte hauetan guztietan, dela Ertzaintzako funtzionarioen ordainsarien araubideari eragiten diotenak dela Ertzaintzako langileen ordezkartza-sistemari edo funtzionarioen sailkapen-taldeei eragiten diotenak. Hala, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeako Legeak -15/2012 Legea, ekainaren 28koa- Euskal Herriko Poliziari Buruzko Legea laugarren goz aldatzea ekarri zuen. Lege hori indarrean sartzeaz batera, ordura arte Euskal Herriko Poliziari buruzko Legean arautzen ziren eta segurtasun publikoari eragiten zioten zenbait alderdi polizia-legetik atera eta Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeako Legean araututa egotera pasa ziren, besteak beste honako hauek: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren araubideari dagozkion zenbait alderdi, poliziaren azpi-sistemari dagozkion beste zenbait alderdi edota herritarren segurtasunari dagozkion beste hainbat. Izan ere, alderdi horiek guztiek antolamendu-izaera zuten eta egoki iritzi zitzaion aurrerantzean segurtasun publikoaren sistema antolatzeako legean arautzea. Beste horrenbeste gertatu zen udaltzaingoak koordinatzeko ahalgoarekin edo polizien arteko lankidetzaren mekanismoekin. Hori dela eta, gaur egun, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legeak Euskal Herriko polizia-kidegoen araubidearekin lotutako gaiak arautzen ditu, batik bat.

Aztergai dugun lege-aurreproiektuak zati batean aldatu nahi du Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea azken urteotan Estatuan zein gainerako autonomia-erkidegoetan onetsitako legeetan jasotako berrikuntzak gure legean ere jasota gera daitezen, edota indarrean diren arauen aplikazioan metatutako eskarmentua nahiz arau horiek interpretatzean epaitegiek finkatutako jurisprudentzia gure legera ere ekartzeko. Horrez gain, legea Ertzaintzaren modernizazio-prozesuetara ere egokitu beharra zegoela iritzi zaio, baita azken urteotan Euskal Udalerrien Ekartearekin (EUDEL) sinatutako lankidetzaren hitzarmenaren baitan eratutako lantaldeen jardunaren emaitzetara ere.

Lege hau izapidetzeko Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legean (8/2003 Legea, abenduaren 22koa) ezarritako irizpideak jarraituko dira, baita 2010eko abenduaren 28ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiz adostutakoak ere, Xedapen Orokorrak egiteko jarraibideak onartzen dituenak.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen 4.1 artikulua zehazten duenez, xedapen orokorrak egiteko prozedura xedapen horien gaiaren gainean eskumena duen saileko sailburuaren aginduz hasiko da, eta testu hori izango da araua izapidetzeko prozeduraren oinarri eta ardatz.

Beraz, hasierako aginduaren gutxieneko eduki hori zehazten duen Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legeko 5.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorritik, honako hau

EBAZTEN DUT

LEHENA.- Xedea, eta prozedurari hasiera emateko eskumena.

1.- Agindu honen xedea da Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea bosgarren aldiz aldatzeko Lege-aurreproiektua izapidetzeko prozedurari hasiera ematea.

2.- Prozedurari hasiera emateko eskumenari dagokionez, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen 4.1 artikulua zehazten du xedapen orokorrak egiteko prozedura xedapen horien gaiaren gainean eskumena duen saileko sailburuaren aginduz hasiko dela.

BIGARRENA.- Arauaren bideragarritasun juridikoa eta materiala.

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 17. artikulua (3/1979 Legea, abenduaren 18koa) Euskal Herriko erakundeei atxikitzen die autonomia-lurraldean gizakien eta ondasunen babeserako eta herri-bakea zaintzeko Autonomia Erkidegoko poliziaren araubidea.

Bestalde, abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak, Lehendakariarenak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioako sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, Segurtasun Sailari atxikitzen dizkio, besteak beste, honako egiteko eta jardun-arlo hauek: jokoa, posturak eta ikuskizunak, eta Autonomia Erkidegoko Polizia.

Segurtasun Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko Dekretuaren (194/2013 Dekretua, apirilaren 9koa) 4.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, Segurtasuneko sailburuari dagokio Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. artikuluan xedatutako eskumenak eta ahalmenak betetzea, baita Sailaren berezko egitekoen eta jardun-arloen eremuan indarreko legeriak esleitzen dizkionak ere, abenduaren 15eko 20/2012 Dekretua aintzat harturik.

HIRUGARRENA.- Lege-aurreproiektuaren xedea eta helburua.

Lege-aurreproiektuak indarreko Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen zenbait artikulua aldatzen du Euskal Herriko Polizia tresna hobeez hornitzeko eta poliziak haren egitekoak modu hobean burutu ahal izateko, hain zuzen ere egiteko horiek euskal gizartearen moduko gizarte ireki, anitz eta elebidun batek galdatzen dion moduan burutu ahal izateko.

Horretarako, legearen xedeen artean, Polizia sortu zeneko hasierako ideia hartan sakontzea dago, alegia herritarrei zerbitzu ematean eta herritarren aurrean erantzuteko betebeharrean, baita printzipio horiek Deontologia Kodean jasotzea ere Poliziaren Etika Kode Europarrak ezarritako baldintzetan. Era berean, kexak artatzeko eta

polizia-zerbitzua ebaluatzeko eta hobetzeko mekanismoak ezarri nahi dira, adibidez kanpo kontrolerako batzorde bat eratzea.

Eraberritze-ildo horretan, beste aldaketa bat da jardun polizial onen sistema sendotzeko pizgarriak ematea. Horretarako, funtzionarioen lanbide-karrera arautuko da, lanbide-karrerari dagozkion osagarriak egindako lanari lotuko zaizkio, eta kondekorazio eta sarien sistema arautuko da. Aldi berean, diziplina-araubidean aldaketak sartuko dira eta barne mekanismo eragingarriak, proportzionalak, egokiak eta bidezkoak ezarriko dira, diziplinarik gabeko jokabide zehatzen azterketa hutsa egitetik arrisku-eredu orokorrak aztertzea pasatzeraino. Horrekin, hobekuntzak sartu nahi dira bai prestakuntzaren arloan bai prozeduretan nahiz laneko giroan.

Hautaketa arloan, zehaztu egiten da Polizia eta Larrialdien Euskal Akademia izango dela Poliziara sartzeko hautaketa-organo eskuduna eta iraunkorra, eta sendotu egiten dira hautaketa-epaimahaien inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-bermeak. Legean jasotzen dira baita Poliziara sartzeko betekizunak, eta emakumeen aldeko ekintza positiboak aurreikusten dira polizia-kidegoetara emakume gehiago sar dadin, emakumeek egun duten presentzia urria zuzenduz joateko. Horretarako, emakumeen presentzia sustatzeko planak bultzatuko dira polizia-kidegoetan, hain zuzen ere polizia-kidegoetara sartzeko eta barruan daudela lanbide-karrera garatzeko aukera-berdintasuna dutela bermatzeko. Azken batean, bilatzen dena da emakumeek polizia-kidegoetan duten ordezkaritza urriarekin amaitzen joatea eta Poliziaren eragingarritasuna areagotzea, beti ere Europako Batasuneko jurisprudentziak finkatutako irizpideekin bateragarria den modu batean.

Lege-aurreproiektuak funtzionarioek lanbide-karrera garatzeari begira izan litzaketen igurikimenak hobetzea ahalbidetzen duten alderdiak aldatuko ditu ere bai.

Lanpostuak betetzeko mugikortasun bertikalari dagokionez, ezagutza zehatzak egiaztatzea galdatzen duten eginbeharren kasuan, Ertzaintzako espezialitate-araubidea legez jasota egongo da, eta goiko eskalako lanpostu guztietara aurkeztu ahal izatea ahalbidetuko da lanpostuak betetzeko prozedura arrunten bidez.

Barne sustapenari dagokionez, berriz, ezabatu egiten da prozedura horietan parte hartu ahal izateko hiru deialdiko muga, eta, era berean, barne-sustapenerako eskubidea ahalbidetuko zaie seme-alabak eta senideak zaintzeagatik, genero-indarkeria pairatzeagatik edo zerbitzu bereziengatik eszedentzian daudenei.

Halaber, lanbide-karrera horizontala arautuko da. Gradu profesionalean gora egiteko ez da lanpostuz aldatu beharrik egongo, eta ordainsarien egituraketa ere aldatuko da ordainsari osagarrien artean lanbide-karreragatiko osagarria jasotzeko.

Funtzionarioen eskubide indibidualei gagozkiela, arreta berezia jarri behar zaio Euskal Herriko Polizia Kidegoen babes sozialari, dela oinarritzakoari zein osagarriari. Hori dela eta, arreta berezia jartzen da langileen baldintza psikofisikoak zaintzeko administrazioaren arduran, baita lan-osasuna eta laneko arriskuak prebenitzeko arduran ere. Horretarako, legearen aldaketak babes sozial osagarriko mekanismoak aurreikusten ditu zerbitzuan hartutako gaixotasun edo zerbitzuan izandako istripu profesionalengatik lesioek edo patologiek zerbitzua aldi baterako emateko ezintasuna dakarten kasuetarako, batik bat polizia-zerbitzuan edo polizia-eginkizunetan gertatutako

heriotza-kasuetarako edo polizia-zerbitzuan nahiz polizia-eginkizunetan gertatutako ezintasun-kasuetatik eratorritako nahitaezko erretiro-kasuetarako, agente jardulearen merezimenduak ebaluatzeari erreparatu beharrik gabe.

Legearen aldaketak ere kontuan hartu behar ditu adinean gora egiteak edota gaitasun zehatzen ustekabeko galerak polizia-eginkizunen jardun arrunta burutzeko ekar dizaketen murrizketak, hain zuzen ere gaur egun Ertzaintzako lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmenean jasota daudenak.

Udaltzaingoei dagokienez, Ertzaintzaren lanbide-egituraketaren baliokidea den lanbide-egituraketa bat aurreikusi beharra dago. Horretarako, udaltzaingoetako buruzagitzei dagozkien kategoriak zehaztu behar dira, kidegoa eratzen duten kide-kopurua edo udalerriaren herritar-kopurua aintzat hartuta. Era berean, aguazilen eta mugikortsan-ajenteen figurak ere arautu behar dira.

LAUGARRENA.- Ordenamendu juridikoan izango duen eragina.

Aurreproiektuko araua onesteak Euskal Herriko Poliziari Buruzko Legea aldatzea ekarriko du, baita lege horren aurka doazen lerrun bereko edo beheragoko lerruneko arau guztiak ere.

BOSGARRENA.- Aurrekontuan izango duen eragina.

Oroitzak ekonomikoa egingo da, espedientean jasoko dena. Oroitzak horretan aurreproiektuaren kostua zehaztuko da, dagokion gastua zehaztuz eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Aurrekontuetan izango duen eragina adieraziz, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen (8/2003 Legea, abenduaren 22koa) 10.3 artikuluan aurreikusitakoa betez.

SEIGARRENA.- Manuzko izapideak eta txostenak.

1.- Lege-aurreproiektuaren testuaren edukia Agindu honetan zehaztutakoarekin bat etorriko da, eta, horretarako, erdietsi nahi diren xedeetara hobeto egokitzen diren aukerak baliatuko ditu. Hala badagokio, entzunaldian eta eskatutako txostenetan jasotako iradokizunak kontuan hartuko dira aurreikusitako arauaren zuzentasuna eta legezkotasuna bermatzeko.

2.- Xedapen Orokorrak egiteko jarraibideak onartzen dituen 2010eko abenduaren 28ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiarekin bat etorritik, Agindu hau <http://elkarlan.jakina/webguneak/legesarea>, ezagutza partekatuko lankidetzagunean argitaratuko da.

Hasiera batean, egoki edo beharrezkotzat jotzen da honako izapide hauek gauzatzea eta txosten hauek eskatzea:

A.- Hasierako azterlanak.

B.- Hasiera-agindua.

C.- Lege-proiektuaren testua prestatzea.

D.- Sailaren izapideak:

- ›Saileko aholkularitza juridikoaren txostena
- ›Oroitza ekonomikoa
- ›Genero-eraginaren ebaluazioa
- ›Administrazio-zamak murrizteari buruzko txostena
- ›Prozedura-oroitza
- ›Onespen-agindua

E.- Negoziazioa, txostenak eta entzunaldiak:

- ›Eusko Jaurlaritzako Sail guztiei kontsultatzea eta entzunaldia ematea
- ›Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiei nahiz EUDELI kontsultatzea eta entzunaldia ematea
- ›Ertzaintzaren negoziazio-mahaia
- ›Ertzaintzaren Kontseiluaren txostena
- ›Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordearen txostena
- ›Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren txostena
- ›DACIMaren txostena
- ›Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren txostena
- ›EMAKUNDEren txostena (otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2. artikulua, Emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa)
- ›Jendaurrean jartzea
- ›Bestelako interesdunei entzunaldia ematea. Sindikatuak

F.- Manuzko txostenak eta entzunaldiak:

- ›Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena
- ›Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren txostena

Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari txostena eskatu aurretik oroitza ekonomikoa eta prozedurari buruzko oroitza laburra egingo dira, espedientean jasoko direnak.

ZAZPIGARRENA.- Idazketa-sistema

Euskararen erabilera arautzeko oinarritzko Legearen (10/1982, azaroaren 24koa) 8.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko erabiliko den sistema itzulpena izango da, Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak (IZO) egindako itzulpena.

SEGURTASUN SAILBURUA
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ

XVIII

ORDEN DE APROBACIÓN PREVIA DEL PROYECTO / PROIEKTUA AURRETIK ONARTZEKO AGINDUA

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
POLIZIAREN LEGEAREN BOSGARREN
ALDAKETARENA LEGE-PROIEKTUA**

**PROYECTO DE LEY DE QUINTA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA
DEL PAÍS VASCO**

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**Firmante: **ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA ARRONIZ**Fecha de la firma: **13/07/2015 9:14:37**Validación de la firma:  **Correcta****ORDEN DE LA CONSEJERA DE SEGURIDAD POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACIÓN PREVIA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE QUINTA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE POLICÍA DEL PAÍS VASCO**

Por Orden de la Consejera de Seguridad, se acordó el inicio de un procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

Una vez elaborado el texto y sometido a informe de los servicios jurídicos departamentales, procede, de conformidad con el art. 7 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, su aprobación previa por esta Consejera de Seguridad, antes de evacuar los trámites de audiencia y consulta que procedan.

Por todo ello,

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar con carácter previo el texto del Anteproyecto de ley de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco.

SEGUNDO.- Ordenar que prosigan los trámites preceptivos y oportunos del procedimiento de elaboración de la norma, para que una vez finalizado éste se someta a la aprobación del órgano competente.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ
CONSEJERA DE SEGURIDAD

**AGINDUA, SEGURTASUN SAILBURUARENA, EUSKAL HERRIKO
POLIZIARI BURUZKO LEGEA BOSGARREN ALDIZ ALDATZEKO
LEGE-AURREPROIEKTUAREN HASIERAKO ONESPENA ERABAKITZEN
DUENA**

Segurtasuneko sailburuak emandako Aginduaren bidez, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea bosgarren aldiz aldatzeko prozedurari hasiera ematea erabaki zen.

Testua prestatuta Sailetakoz zerbitzu juridikoei igorri zaie, txostena eman dezaten. Bada, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren Legearen (8/2003 Legea, abenduaren 22koa) 7. artikuluan ezarritakoa betez, dagozkion entzunaldiak burutu baino lehen, Segurtasun sailburuak testuari hasierako onespena ematea dagokio.

Hori dela eta, honako hau

ERABAKITZEN DUT

LEHENA.- Hasierako onespena ematea Euskal Herriko Poliziari buruzko Legea bosgarren aldiz aldatzeko lege-aurreproiektuaren testuari.

BIGARRENA.- Araua izapidetzeko prozedurarekin aurrera jarraitzea, eta, prozedura bukatutakoan, organo eskudunaren onspenera igortzea.

**ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ
SEGURTASUNeko SAILBURUA**